

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 



TESIS DOCTORAL

Hacia una política pública de reconciliación social

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Edwin Murillo Amaris

Director

Manuel Villoria Mendieta

Madrid, 2016



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
ORTEGA Y GASSET

Programa de Doctorado

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Título de la Tesis Doctoral

HACIA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE RECONCILIACIÓN SOCIAL

Doctorando(a)

EDWIN MURILLO AMARÍS

Director de la Tesis

DR. MANUEL VILLORIA MENDIETA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Madrid, 2015

Programa de Doctorado

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tesis Doctoral

HACIA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE RECONCILIACIÓN SOCIAL

Doctorando(a)

EDWIN MURILLO AMARÍS

Director de la Tesis

DR. MANUEL VILLORIA MENDIETA

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

CONTENIDO

RESUMEN	15
ABSTRACT	20
0. INTRODUCCIÓN	24
0.1. Hacia un modelo ideal a través del método	27
0.2. Lo espacio-temporal	33
0.3. Generalidades hacia el marco teórico	34
0.4. Organización del presente texto	38
1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE UNA REALIDAD DE CONFLICTO Y VIOLENCIA	40
1.1. Origen del planteamiento	41
1.2. Acercamiento desde el institucionalismo	44
1.2.1. La acción colectiva: base de lo institucional	45
1.2.2. Aproximaciones a un bien colectivo	51
1.2.3. Las creencias como base fundante de la reconciliación social	54
1.2.4. Los acuerdos como explicitación de las creencias	58
1.2.5. Lo histórico y lo normativo en un marco de reconciliación social	63
1.2.6. El institucionalismo histórico	64
1.2.6.1. Sentido del cambio en el institucionalismo histórico	69
1.2.6.2. Aportes para una política pública de reconciliación social	71
1.2.7. El institucionalismo normativo	72
1.2.7.1. ¿Desde y hacia dónde lo institucional normativo?	74
1.2.7.2. Aportes para una política pública de reconciliación social	75
1.3. Hacia un modelo ideal de política pública de reconciliación social	79

2. RECONCILIACIÓN SOCIAL DESDE LA ÉTICA PÚBLICA	84
2.1. ¿Por qué una ética para la reconciliación social?	85
2.2. ¿Qué entendemos por reconciliación social?	89
2.2.1. ¿Resolución de conflictos o reconciliación social?	90
2.2.2. ¿Transición democrática o reconciliación social?	93
2.2.3. Optamos por la reconciliación social	96
2.2.4. La reconciliación social desde la perspectiva de redes	100
2.2.5. La reconciliación social según el contexto	103
2.2.5.1. Contexto sudafricano	105
2.2.5.2. Contexto centroamericano	107
2.2.5.3. Contexto colombiano	110
2.2.6. La reconciliación social desde un ethos	113
2.3. Principios para un proceso de reconciliación social	117
2.3.1. Instrumentos de la reconciliación social	124
2.3.2. Las creencias en un proceso de reconciliación social	128
2.3.3. Creencias desde lo público	131
2.3.4. Fundamentación de la ética pública	135
2.3.5. Principios de ética pública para la reconciliación social	140
2.4. Hacia el diseño de un “modelo ideal” de creencias en perspectiva de reconciliación social	142
3. GESTIÓN DE LA RECONCILIACIÓN SOCIAL:	
SUDÁFRICA, EL SALVADOR Y NICARAGUA	149
3.1. Sudáfrica	154
3.1.1. Procesualidad - Tiempos	154
3.1.1.1. Proceso desde lo histórico	155
3.1.1.2. Hechos puntuales hacia el cambio	160
3.1.2. Presupuestos para los instrumentos estructurales en Sudáfrica	165
3.1.2.1. Inicio a través del diálogo	165
3.1.2.2. De los diálogos a los acuerdos	167
3.1.2.3. Acuerdos para la efectividad del proceso	171
3.2. Centroamérica (El Salvador y Nicaragua)	174
3.2.1. Procesualidad - Tiempos	176
3.2.1.1. Desde lo histórico	177
3.2.1.2. Realidades causantes del conflicto	177
3.2.2. Presupuestos para los instrumentos estructurales en Centroamérica	183

3.3.	Instrumentos estructurales en Sudáfrica	184
3.3.1.	Ley de Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación	186
3.3.2.	La Comisión de Verdad y Reconciliación.....	188
3.3.3.	El Comité de Violación de Derechos Humanos.....	190
3.3.4.	El Comité de Reparación y Rehabilitación.....	190
3.4.	Instrumentos estructurales en El Salvador y Nicaragua	191
3.4.1.	De las iniciativas a los acuerdos	195
3.4.2.	Acuerdos de Esquipulas I y II.....	196
3.4.3.	Las firmas de la paz.....	198
3.4.4.	¿La reconciliación a través de comisiones?.....	200
3.4.4.1.	El Salvador.....	200
3.4.4.2.	Nicaragua	204
3.5.	Marco institucional: la justicia.....	207
3.5.1.	Sudáfrica	210
3.5.1.1.	Amnistía e impunidad.....	212
3.5.1.2.	Violaciones a los derechos humanos y crímenes comunes.....	215
3.5.1.3.	Crímenes por origen racista y crímenes por motivos políticos.....	216
3.5.2.	El Salvador y Nicaragua	217
3.6.	Marco institucional: creación y promoción de la institucionalidad	223
3.7.	Marco institucional: hacia la definición y aplicación de una política pública	227
4.	COLOMBIA: ¿HACIA UNA POLÍTICA PÚBLICA	
	DE RECONCILIACIÓN SOCIAL?.....	237
4.1.	La procesualidad de un largo conflicto:	
	temporalidad hacia la reconciliación social	241
4.1.1.	Tiempos marcados por dinámicas violentas y procesos hacia la paz	244
4.1.2.	Temporalidad marcada por los dobles mensajes	
	(Gobierno de Andrés Pastrana. 1998 – 2002)	249
4.1.2.1.	Dinámica con las FARC.....	250
4.1.2.2.	Dinámica con el ELN.....	252
4.1.2.3.	Dinámica con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) – Paramilitares	256
4.1.2.4.	Consecuencias de los “dobles mensajes”.....	258
4.1.3.	Tiempo de crisis del proceso.....	260
4.1.4.	Temporalidad en perspectiva de Seguridad Democrática:	
	Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006)	263
4.1.4.1.	Una alternativa: la Ley de Justicia y Paz	266

4.1.4.2. Proceso desde la Ley de Justicia y Paz	268
4.1.4.2.1. Perspectiva de la norma hacia los excombatientes	272
4.1.4.2.2. Perspectiva de la norma hacia las víctimas.....	274
4.2. Presupuestos para los instrumentos estructurales en Colombia.....	277
4.2.1. Instrumentos estructurales en Colombia.....	279
4.2.1.1. Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz.....	280
4.2.1.2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial para la Justicia y Paz	280
4.2.1.3. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).....	280
4.2.1.4. Comisiones Regionales para la Restitución de Tierras	283
4.2.1.5. Fondo para la Reparación de las Víctimas.....	283
4.2.1.6. Otros roles de estructura institucional.....	284
4.2.1.7. Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR).....	284
4.2.2. Hacia un marco de lo institucional en Colombia	286
4.2.2.1. El derecho a la verdad desde la ley 975 de 2005	288
4.2.2.2. El derecho a reparación desde la Ley 975 de 2005.....	290
4.2.2.3. El derecho a la justicia desde la Ley 975 de 2005	294
4.3. Aproximaciones a los efectos de un proceso (2005 – 2010)	296
4.3.1. Caracterización de los grupos objeto de estudio.....	303
4.3.1.1. Caracterización de los participantes de los grupos de discusión víctimas –GDV–	306
4.3.1.2. Caracterización de grupos de discusión participantes en el Programa ACR.....	310
4.3.2. ¿Efectivo el proceso de Justicia y Paz a 2010?.....	313
4.3.2.1. Perspectiva de la efectividad del proceso desde los funcionarios de instituciones encargadas	319
4.3.2.1.1. Perspectiva estructural del proceso.....	320
4.3.2.1.2. Perspectiva de lo humano desde los participantes	322
4.3.2.1.3. Perspectiva de lo institucional	322
4.3.2.1.4. Perspectiva estructural del proceso.....	325
4.3.2.1.5. Perspectiva de lo humano desde los participantes	326
4.3.2.1.6. Perspectiva de lo institucional	326
4.3.2.2. Perspectiva de la efectividad del Proceso desde los GD.....	329
4.3.2.2.1. Perspectiva de lo estructural desde los participantes	332
4.3.2.2.2. Perspectiva de lo humano desde los participantes	333
4.3.2.2.3. Perspectiva de lo institucional desde los participantes.....	333
4.3.2.2.4. Perspectiva desde lo estructural	334

4.3.2.2.5. Perspectiva de lo humano desde los participantes	337
4.3.2.2.6. Perspectiva de lo institucional.....	338
4.3.2.3. Desde las perspectivas hacia la necesidad de una política pública	340
5. CONSIDERACIONES FINALES HACIA EL MODELO IDEAL.....	344
BIBLIOGRAFÍA.....	365
ANEXOS	388

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Sentido social	46
Ilustración 2. Acciones sociales	48
Ilustración 3. Dimensión social.....	54
Ilustración 4. Reconstrucción social	82
Ilustración 5. Transición democrática	91
Ilustración 6. Procesualidad - Tiempos	127
Ilustración 7. Reconciliación social	185
Ilustración 8. Proceso de paz.....	194
Ilustración 9. Detalle del área de la zona de despeje	250
Ilustración 10. Sur del departamento de Bolívar, con respecto al departamento y al país. Municipios que comprende esta región	253
Ilustración 11. Del Magdalena Medio colombiano completo.....	254
Ilustración 12. Presión de las autodefensas hacia el sur de Bolívar y Barrancabermeja	255
Ilustración 13. Mapa regional Montes de María.....	257
Ilustración 14. Mapa de Colombia.....	260
Ilustración 15. Ley de Justicia y Paz.....	299
Ilustración 16. Reconciliation Network	350
Ilustración 1 (Anexo). Debates	393

LISTA DE ABREVIATURAS

SIGLA	DESCRIPCIÓN
ACNUR	La Agencia de la ONU para los Refugiados
ACR	Alta Consejería para la Reintegración
ANC	Congreso Nacional Africano
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
AZAPO	Organización del Pueblo Azaniano
BACRIM	Bandas Criminales
CEJ	Corporación Excelencia en la Justicia
CGSB	Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CINEP	Centro de Investigación y Educación Popular
CNA	Congreso Nacional Africano
CNR	Comisión Nacional de Reconciliación
CNRR	Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
COCE	Comando Central
CODESA	La Convención para la Democracia de Sudáfrica
CVR	Comisión de Verdad y Reconciliación
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DBO	deseos (D), creencias (B) y oportunidades (O)
DDR	Desarme, Desmovilización y Reintegración
DPS	Departamento Administrativo para la Prosperidad
EC	Entrevistas Cualitativas
EDSN	Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EPL	Ejército Popular de Liberación
ESPERE	Escuela de perdón y reconciliación
FALANGE	Fuerzas Armadas de Liberación Anticomunista
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FDR	Frente Democrático Revolucionario
FFAA	Fuerzas Armadas
FMLN	Insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
FSLN	Grupo revolucionario Frente Sandinista de Liberación Nacional
GD	Grupos de Discusión
GMH	Grupo de Memoria Histórica
ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
IDEA	Institute for Democracy and Electoral Assistance

SIGLA	DESCRIPCIÓN
IEPRI	Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia
JGRN	Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional
M-19	Grupo guerrillero identificado con esta denominación
ODECOFI	Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional
OEA	Organización de Estados Americanos
PAC	Pan-africano
PLI	Partido Nacional Inkatha
PN	Partido Nacional
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UDF	Frente de Unidad Democrática
UGB	La Unión Guerrera Blanca
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

ÍNDICE GENERAL DE ANEXOS

1.	Información Anexos.	388
1.1.	Presentación General	388
1.2.	Preparación del acceso a los Grupos de Discusión en esta investigación.....	390
1.3.	Modelos de preguntas en los GD.	391
2.	Esquemas de debate en GD.....	392
3.	Modelos de Preguntas para entrevistas cualitativas (EC)	393
3.1.	Aspectos generales de las EC.....	393
3.1.1.	Lista de funcionarios entrevistados que laboraban a 2010 con la ACR o con la CNRR	
	a. Funcionarios de la CNRR entrevistados.....	394
	b. Funcionarios de la ACR entrevistados	395
3.1.2.	Funcionarios de algunas entidades públicas que trabajaban en proyectos o programas relacionados con el proceso de paz desde la perspectiva de la ley 975/2005	396
3.1.3.	Integrantes de programas del proceso, como víctimas o desmovilizados, que por motivos de seguridad no aceptaron asistir a los GD o estaban privados de la libertad (en el caso de los desmovilizados) o se encontraban en situación de amenaza.....	396
3.1.4.	Docentes e investigadores de diversas disciplinas de las ciencias sociales que de una u otra manera han trabajado temáticas relacionadas con la paz, reconciliación social, ética pública, entre otros.....	397
3.2.	Modelo de preguntas	398
3.2.1	Preguntas ejes sobre las cuales se motivaron y prepararon las entrevistas	398
3.2.2.	Algunas preguntas que se suscitaron durante las entrevistas de acuerdo a las respuestas que iban ofreciendo los entrevistados.....	398

4.	Listas de Codificación	400
4.1.	Lista. Codificación grupos de discusión / Víctimas Barrancabermeja (Santander) ...	400
4.2.	Lista. Codificación grupos de discusión / Víctima Granada (Meta)	400
4.3.	Lista. Codificación grupos de discusión / Víctimas Montería (Córdoba)	401
4.4.	Lista. Codificación grupos de discusión / Víctimas Riohacha (Guajira)	401
4.5.	Lista. Codificación grupos de discusión / Víctimas San Pablo (Sur de Bolívar)	402
4.6.	Lista. Codificación grupos de discusión / Víctimas Tierralta (Córdoba)	402
4.7.	Lista. Codificación entrevistas / Víctimas Villavicencio (Meta).....	403
4.8.	Lista. Grupos de Discusión / Víctimas Bucaramanga (Santander)	403
4.9.	Lista. Grupos de Discusión / Víctimas Granada (Meta)	404
4.10.	Lista. Grupos de Discusión / Víctimas Montería (Córdoba).....	404
4.11.	Lista. Codificación Grupos de Discusión / Desmovilizados- Reintegrados Barrancabermeja (Santander).....	405
4.12.	Lista. Codificación Grupos de Discusión / Desmovilizados- Reintegrados Bogotá (Cundinamarca)	405
4.13.	Lista. Codificación Grupos de Discusión / Desmovilizados- Reintegrados Bogotá (Cundinamarca)	406
4.14.	Lista. Codificación Grupos de Discusión / Desmovilizados- Reintegrados Santiago de Cali (Valle del Cauca).....	406
4.15.	Lista. Codificación Grupos de Discusión / Desmovilizados- Reintegrados Montería (Córdoba).....	407
4.16.	Lista. Codificación Grupos de Discusión / Desmovilizados- Reintegrados San Pablo (Bolívar)	408
4.17.	Lista. Codificación Grupos de Discusión / Desmovilizados- Reintegrados Valencia (Córdoba).....	408
4.18.	Lista. Codificación entrevistas / CNRR Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación	409
4.19.	Lista. Codificación entrevistas / Funcionarios de la ACR (Agencia Colombiana para la Reintegración) encontraban en situación de amenaza.	410

ÍNDICE DE ENTREVISTAS Y GRUPOS DE DISCUSIÓN

Tabla 1. Víctimas Barrancabermeja (Santander)	411
Tabla 2. Víctimas Montería (Córdoba)	432
Tabla 3. Víctimas Riohacha (Córdoba)	439
Tabla 4. Víctimas San Pablo (Sur de Bolívar)	440
Tabla 5. Víctimas Tierralta (Córdoba)	448
Tabla 6. Víctimas Bucaramanga (Santander)	454
Tabla 7. Reinsertados Barrancabermeja (Santander)	460
Tabla 8. Reinsertados Bogotá N° 1	465
Tabla 9. Reinsertados Bogotá N° 2	472
Tabla 10. Reinsertados Santiago de Cali (Valle del Cauca)	480
Tabla 11. Reinsertados Montería	485
Tabla 12. Reinsertados San Pablo (Bolívar)	490
Tabla 13. Reinsertados Valencia (Córdoba)	494
Tabla 14. Reinsertados Medellín (Antioquia)	499
Tabla 15. Entrevista Hufley Quintero	501
Tabla 16. Entrevista José Luis Peralta Pacheco	512
Tabla 17. Entrevista Mujer Líder de Asociación de Adultos Mayores Víctimas del Conflicto CNRR	522
Tabla 18. Entrevista Desmovilizados (Postulados) En La Cárcel De Valledupar	531
Tabla 19. Víctimas Villavicencio	534
Tabla 20. Entrevista Claudio Epienayú Líder Wayuu (Shiruria)	538
Tabla 21. Entrevista Jorge Vásquez	540
Tabla 22. Entrevista Sandra Milena Sánchez	545
Tabla 23. Entrevista Luis Gonzalo Agudelo	549

Tabla 24. Entrevista María Díaz	553
Tabla 25. Entrevista Antonio Calvo	557
Tabla 26. Entrevista Eduardo Pizarro León Gómez.....	560
Tabla 27. Entrevista José Hernández	564
Tabla 28. Entrevista Monseñor Nel Beltrán.....	567
Tabla 29. Entrevista Alejandro Suárez.....	572
Tabla 30. Entrevista Lina Rondón	577
Tabla 31. Entrevista Ana Teresa Bernal	585
Tabla 32. Entrevista Néstor Ruiz	594
Tabla 33. Entrevista Eliana Jiménez	598
Tabla 34. Entrevista José Diomer Correa.....	601
Tabla 35. Entrevista Natalia Salazar	603
Tabla 36. Entrevista Jorge Toloza	606
Tabla 37. Entrevista Gerente ACR Cali.	608
Tabla 38. Entrevista William Meneses (ACR).....	610
Tabla 39. Entrevista Rocío Gutiérrez.....	611
Tabla 40. Entrevista Clara Inés Cortez Mesa.....	614
Tabla 41. Entrevista Dra. Luz Dary Cáceres Fiscalía General de La Nación	623
Tabla 42. Entrevista Dr. Luis Isnardo Barrera - Fiscalía General de La Nación	624
Tabla 43. Entrevista a un colombiano que está dentro del proceso de Reintegración Social, a partir de las ofertas que da la ley 975 o la llamada ley de justicia y paz.....	627
Tabla 44. Entrevista Juan Carlos Siurana	632
Tabla 45. Entrevista Xabier Etxeberria	636
Tabla 46. Entrevista Francisco Galán	641
Tabla 47. Entrevista dos agentes de pastoral.....	650
Tabla 48. Entrevistas Padre Javier Giraldo	654
Tabla 49. Entrevistas Victoria Camps	664

RESUMEN

HACIA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE RECONCILIACIÓN SOCIAL

Palabras Claves: Conflicto y Violencia, Institucionalismo Histórico, Institucionalismo Normativo, Acción Colectiva, Ética Pública, Reconciliación Social, Reconciliation Network, Reconfiguración de lo Público, Política Pública de Reconciliación Social.

Los largos períodos de conflicto y violencia que han vivido innumerables sociedades a lo largo y ancho del mundo, junto a sus consecuentes procesos conducentes a la paz en marcos de poca efectividad en materia de reconstrucción social, sobre todo en reformas estructurales que busquen la resolución de las raíces que originaron los enfrentamientos, presentan los contextos desde donde se plantea esta investigación. Más allá de marcos de actuación de estos grupos humanos, basados en diálogos conducentes a negociaciones, con miras a acuerdos hacia la paz, procesos de garantías para que los excombatientes dejen las armas y busquen el regreso a la vida civil, y hondos efectos de insatisfacción general expresados en reacciones contra la impunidad, la poca eficacia de las instituciones públicas y el retorno de oleadas de violencia, el vislumbrar el diseño e implementación de una política pública de reconciliación social se configura en uno de los mecanismos idóneos que puede garantizar la efectividad y lo justo en este tipo de procesos de pos-acuerdos y pos-conflictivos.

Reconocemos que la democracia es el sistema de gobierno en el que se instauran mecanismos alternativos de resolución de conflictos dentro del marco de los derechos y deberes sociales. Pero, las distintas experiencias de conflicto y violencia que el ejercicio del poder político contiene en la historia humana nos han demostrado que con procesos de negociación y firmas

de tratados de paz no cesa esta tendencia humana en la que cada Estado busca defender su perspectiva política en su contexto determinado, más allá de esos acuerdos.

Sudáfrica, Centroamérica y Colombia son tres regiones del mundo en los que la realidad de conflicto y violencia ha dejado un sinnúmero de asesinatos, sobretodo crímenes de lesa humanidad, a pesar de las experiencias de las I y II guerras mundiales y las lecciones de búsqueda y mantenimiento de la paz que dejaron. Más allá de las acciones por la paz de la Organización de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, la situación de destrucción de vidas humanas y de sistemas políticos se dio en estas tres zonas que hemos traído a colación.

Cada una tiene características particulares. Sudáfrica vivió un largo período de dominio colonizador por parte de Inglaterra, acompañado de políticas gubernamentales de exclusión social y una grave ausencia de la democracia. Centroamérica – para nuestro interés El Salvador y Nicaragua– surgió como un espacio colonial en el que se asentó una clase social minoritaria que controló el sistema económico y político de estos países, aprovechándose de una minoría campesina e indígena, provocando un descontento social que detonó como un “arma de fuerte poder” con la revolución cubana dentro del contexto de la llamada Guerra Fría. En estas dos regiones se desataron cruentos y violentos enfrentamientos entre fuerzas estatales y población, en medio de gobiernos alejados de los principios democráticos. A su vez, fueron escenarios de procesos de post-conflicto con un cierto nivel de efectividad desde las dinámicas de reconciliación social que propusieron.

Por su parte, Colombia se halla inmersa en un conflicto hace más de sesenta años. Enfrentamientos entre grupos al margen de la ley (guerrillas, paramilitares y narcotraficantes) y las fuerzas militares y de policía, en medio de un “sistema democrático” con elecciones libre, partidos políticos, promulgación de derechos humanos básicos – aunque en muchos casos no sean en realidad - e infructuosas propuestas gubernamentales. Este país pretende ingresar a procesos alternativos de resolución del conflicto con poco resultados efectivos. Desde el año de 2005 se ha promovido la dinámica de la llamada ley de Justicia y Paz a través de la cual el gobierno ofrece “ciertas garantías” a los miembros de grupos al margen de la ley, especialmente paramilitares, siempre y cuando ingresen al proceso de reinserción civil y testifiquen la verdad de sus hechos. Entre los años 2005 y 2010 se llevó a cabo el proceso de diseño e implementación del llamado proceso de Justicia y Paz que le dio a este país una nueva oportunidad, pero no estuvieron ausentes las falencias.

Tres experiencias de conflicto y violencia. Tres búsquedas de salida política a la situación por medio del mecanismo de la reconciliación social. ¿Han sido efectivas? ¿Qué ha pasado?

¿Por qué no se han dado los resultados más exitosos? Se han desplegado medios, recursos humanos, económicos, internacionales y todo lo que se ha pensado podría ayudar a este tipo de reconstrucciones sociales. Las revisiones a los procesos continúan, las publicaciones al respecto no cesan, las explicaciones se ofrecen.

En este sentido, este proyecto de investigación busca respuestas ante las inquietudes que surgen por la no efectividad de estas dinámicas de pos-acuerdos y pos-conflicto. Para esta labor, creemos que el elemento de la Ética Pública puede ser un factor clave en este tipo de procesos. No son sólo mecanismos alternativos de resolución de conflictos los que pueden dar garantía de ser exitoso y efectivo un proceso de reconciliación social. No es sólo una voluntad política la que puede hacer viable este tipo de propuestas. Estamos convencidos que la consideración previa y la formulación de principios y valores de eticidad pública puede darnos más garantías de resultados positivos para una sociedad política.

Pero, no sólo es la definición de los principios y valores éticos los que nos pueden favorecer estas dinámicas, sino que el acercarnos a un modelo ideal que ofrezca herramientas para el diseño de una Política Pública de Reconciliación Social en la que esté comprometido todo el entramado político de cada país, en experiencia de post-conflicto, es un soporte fundamental para la reconstrucción social. A esto se añade el valor agregado que la gestión pública nos ofrece a través del diseño de herramientas de seguimiento y evaluación de este tipo de iniciativas; es decir, no nos planteamos el diseño de la política de reconciliación social, sino que pretendemos proponer una herramienta que denominamos como Reconciliation Framework a través de la cual se estructuró este tipo de salidas alternativas al conflicto y la violencia en clave de eticidad pública.

En este orden, la pregunta de investigación que nos planteamos y que nos condujo a lo largo del trabajo es ¿cómo hacer más justos y efectivos los procesos de reconciliación social en situaciones de conflicto y violencia? Y, desde allí, planteamos las siguientes hipótesis: 1) Un proceso de reconciliación social es justo cuando contiene el elemento deliberativo como espacio de imparcialidad en el que los intereses de todos los miembros son tenidos en cuenta. Y es efectivo cuando los mecanismos institucionales que buscan la convivencia y la coexistencia después del conflicto se fundamentan en bases de institucionalidad guiada por la buena gobernanza y, en última instancia por la ética pública. 2) Todo proceso de reconciliación social debe contener instrumentos (como la verdad, reparación, restitución, memoria histórica, contexto hacia el perdón, entre otros), procesos (tiempos y fases) y estructuras que deben respetarse para que el conjunto del proceso, guiado por la justicia y la ética, funcione.

En este orden, los objetivos que se plantearon al inicio de la investigación y que se lograron alcanzar fueron:

- A. Determinar la relación fundamental existente entre la Ética Pública y la Reconciliación en sociedades políticas que han experimentado el conflicto en algún momento de su historia y que han vivido procesos de pos-acuerdos y pos-conflicto.
- B. Proponer los principios básicos de Ética Pública y las variables esenciales que facilitan el éxito de procesos de Reconciliación Social en sociedades que han vivido el conflicto en algún momento de su historia.
- C. Determinar la institucionalidad de una Política Pública de Reconciliación Social en la concreción de “reglas de juego” que permitan la efectividad en la gestión de la misma.
- D. Evaluar las experiencias de búsquedas alternativas al conflicto y la violencia en Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia, para construir desde los aciertos y desaciertos el fundamento y principios básicos que deben considerarse previamente al diseño de una Política Pública en esta temática.
- E. Diseñar un modelo ideal de hacia una Política de Reconciliación Social basado en los lineamientos del Reconciliation framework.

Para justificar este asumir la salida alternativa al conflicto y la violencia en perspectiva de un hacia una política pública de reconciliación social, la presente investigación se desarrolla a través del marco metodológico del estudio de caso, apoyado en los instrumentos de obtención de información de los Grupos de Discusión y las entrevistas cualitativas semiestructuradas, y un enfoque de Process Tracing (seguimiento de procesos). Desde la información recogida en las experiencias de Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia, guardando sus respectivas proporciones espacio-temporales, se puede corroborar cómo los aciertos y desaciertos de los procesos implementados en cada uno de estos países brindan insumos para apostar por la dinámica relacional entre la ética pública y la misma reconciliación social como exigencias para que lo justo y lo efectivo de este tipo de iniciativas de reconfiguración de lo público centre su eje articulador en las creencias, principios desde los cuales la acción colectiva permea toda acción de gestación de lo público a través del modelo ideal que se propone.

El modelo ideal se configura a través de las variables de la procesualidad – el tiempo, instrumentos para la efectividad del proceso (verdad, reparación, restitución, memoria histórica, contexto hacia el perdón) e instrumentos de sentido o éticos (Marco institucional: justicia tran-

sicional – Derechos y deberes -; Creación y Promoción de la institucionalidad; y, definición y aplicación de una política pública). En este sentido, la presente investigación accede al paso previo al diseño de la política pública, al pensar y permitir ser pensados contextos de reconstrucción de lo público con contenidos esenciales que permeen la actitud individual y la dispongan hacia la acción colectiva, donde primen los comportamientos de cooperación.

De esta forma, la recurrencia a los institucionalismos histórico y normativo facilitaran el acceso al análisis que se pretende a través de instrumentos como la comprensión de los procesos y acontecimientos, en perspectiva del cambio y de dependencia del sendero mismo de hechos que suman hacia la reconfiguración de lo público. A lo anterior se suma el aporte de lo normativo desde los elementos de creencias e ideas, configuradoras de nuevos insumos desde los cuales se podrá romper el path dependence y crear la configuración de una base social ordenada desde acciones razonables.

Finalmente, esta investigación propone el instrumento del reconciliation network como un modelo en el que el cruce de variables y su dinámica inter-relacional posibilite el diseño de una política pública que rompa el tradicional esquema de acuerdos de cese de hostilidades y preeminencia de normas que van más hacia lo procedimental y la concreción de programas de reintegración, que a los efectos de reestructuración social de fondo. Esta herramienta centra su atención en el elemento de lo dialógico/deliberativo, como “elemento bisagra”, junto a los insumos de lo institucional, la justicia, la procesualidad y el contexto hacia el perdón. Lo anterior dentro de un marco de creación de acciones colectivas, sustentadas en la propuesta de la ética de la hospitalidad de Innerarity, promotoras de la cooperación, la reintegración individual y comunitaria, la inclusión, la reparación, la restitución, entre otros. Por último, como garantía de sostenibilidad, esta apuesta debe contener la verdad y la memoria pública como baluartes sobre los cuales se rompe la dependencia del rumbo y se garantiza la no repetición de lo hechos a través de políticas de seguridad y bienestar común. El elemento cohesionador de la permanencia en el tiempo es la estructuración de un marco de integridad desde donde pueda ser monitoreado el proceso integralmente.

ABSTRACT

PUBLIC POLICY TOWARDS SOCIAL RECONCILIATION

Keywords: Conflict and Violence, Historical Institutionalism, Normative Institutionalism, Collective Action, Public Ethics, Social Reconciliation Reconciliation Network, Reconfiguring the Public and Public Policy Social Reconciliation.

Long periods of conflict and violence that have lived many societies throughout the world, with consequent processes conducive to peace in frames ineffectiveness in social reconstruction, particularly in structural reforms that seek resolution the roots that caused the clashes, presented the contexts from which this research is aimed. Beyond frameworks of action of these human groups, based on dialogue leading to negotiations with a view to peace agreements, processes guarantees that ex-combatants lay down their arms and seek a return to civilian life, and deep dissatisfaction effects usually expressed in reactions against impunity, the inefficiency of public institutions and the return of waves of violence, glimpse the design and implementation of a public policy of social reconciliation is set in one of the best mechanisms that can ensure the effectiveness and just what this type of post-processes and post-conflict arrangements.

We recognize that democracy is the system of government in which alternative dispute resolution mechanisms within the framework of social rights and duties are established. But the different experiences of conflict and violence that the exercise of political power contained in human history have shown us that negotiation and signing of treaties of peace does not stop this human tendency in which each state seeks to defend its policy perspective particular context, beyond those agreements.

South Africa, Central America and Colombia are three regions of the world where the reality of conflict and violence has left countless murders, especially crimes against humanity, despite the experiences of World Wars I and II and the lessons of search and peacekeeping they left. Beyond the actions for peace of the United Nations and other international organizations, the situation of destruction of human life and political systems occurred in these three areas we've brought up.

Each has unique characteristics. South Africa experienced a long period of domination by colonizing England, accompanied by government policies of social exclusion and a serious lack

of democracy. Central America - for our interest El Salvador and Nicaragua emerged as a colonial space in which a minority class that controlled the economic and political system in these countries, taking advantage of a peasant and indigenous minority settled, causing social unrest that exploded as a “weapon of hard power” with the Cuban revolution within the context of the Cold War. In these two regions bloody and violent clashes between government forces and population erupted amid governments away from democratic principles. In turn, were scenes of post-conflict processes with a certain level of effectiveness from the dynamics of social reconciliation proposed.

Meanwhile, Colombia is immersed in a conflict over sixty years ago. Clashes between groups outside the law (guerrillas, paramilitaries and drug traffickers) and military and police forces, amid a “democratic system” with free elections, political parties, enactment of basic human rights - although in many cases they are not actually - and unsuccessful government proposals. This country intends to enter alternative dispute resolution processes with little effective results. Since 2005 has been promoted dynamics called Justice and Peace law through which the government provides “certain guarantees” to members of groups outside the law, particularly paramilitaries, provided they enter the process civilian reintegration and witness the truth of their deeds. Between 2005 and 2010 took place the process of designing and implementing the so-called Justice and Peace process that gave this country a new opportunity, but not absent shortcomings.

Three experiences of conflict and violence. Three search policy to the situation through the mechanism of social reconciliation output. Have they been effective? What’s happened? Why have not given the most successful results? Are deployed means, human, economic, international resources and everything has been thought could help this type of social reconstruction. Revisions to the process continues, publications about unrelieved, explanations are offered.

In this sense, this research project seeks answers to the concerns arising from the ineffectiveness of these dynamics of post-agreements and post-conflict. For this work, we believe that the element of the Public Ethics can be a key factor in these processes. Not only are alternative dispute resolution mechanisms that can give guarantee of being successful and effective process of social reconciliation. It is not just a political will that can make possible such proposals. We are convinced that prior consideration and formulation of principles and values of public ethics can give us more guarantees positive results for a political society.

But it is not only the definition of ethical principles and values that we can support these dynamics, but the draw us to an ideal model that offers tools for the design of a Public Policy

Social Reconciliation in which is committed whole network policy of each country, in post-conflict experience is a fundamental social reconstruction support. This added value that public management offers us through the design of tools for monitoring and evaluation of these initiatives is added; we are not working towards the design of social reconciliation policy, but we intend to propose a tool known as Reconciliation Framework through which these alternative solutions to the conflict and violence in key public morality is structured.

In this context, the research question we ask ourselves and we drove along the work is: How to make more fair and effective social reconciliation processes in conflict and violence? And from there, we propose the following hypotheses: 1) A process of social reconciliation is just as deliberative element contains a space for fairness in the interests of all members are taken into account. It is effective when the institutional mechanisms that seek coexistence and coexistence after the conflict are based on institutional bases guided by good governance and ultimately by the public ethics. 2) Any process of social reconciliation must contain instruments (such as truth, reparation, restitution, historical memory, context towards forgiveness, etc.), processes (times and phases) and structures to be respected for the whole process, guided for justice and ethics work.

In this context, the objectives that were raised at the beginning of the research and is able to achieve were:

- A. To determine the fundamental relationship between the Public Ethics and Reconciliation in political societies that have experienced conflict at some point in their history and have lived post-processes and post-conflict arrangements.
- B. Propose the basic principles of public ethics and essential variables that facilitate the success of Social Reconciliation processes in societies that have experienced conflict at some point in its history.
- C. Determine the institutionalization of a Public Policy Social Reconciliation in the realization of “rules” that enable the effective management of it.
- D. To evaluate the experiences of alternative searches to conflict and violence in South Africa, El Salvador, Nicaragua and Colombia, to build from the successes and failures the foundation and basic principles to be considered prior to designing a public policy in this area.
- E. Designing an ideal towards Reconciliation Social Policy based on the guidelines of Reconciliation framework model.

To justify this take alternative solution to the conflict and violence in perspective of a public policy towards social reconciliation, this research develops through the methodological frame-

work of the case study, supported by the tools of information retrieval Groups Discussion and semi-structured qualitative interviews and a focus of Process Tracing. From the information gathered on the experiences of South Africa, El Salvador, Nicaragua and Colombia, keeping their spatiotemporal proportions, we can confirm how the strengths and weaknesses of the processes implemented in each of these countries provide inputs to bet on the dynamics relational between public ethics and social reconciliation same as demands for just and effective initiatives such reconfiguration of the public focus its linchpin in beliefs, principles from which collective action permeates every action gestation public through the ideal model proposed.

The ideal model is configured through processuality variables - time, tools for process effectiveness (truth, reparation, restitution, historical memory, context toward forgiveness) and instruments or ethical sense (Institutional framework: Transitional Justice - Rights and duties -; Creation and Promotion of institutions; and, definition and implementation of public policy). In this sense, this research access to the previous step to the design of public policy, to think and be thought contexts allow reconstruction of the public with essential content that permeate the individual attitude and have towards collective action, where prevail behaviors cooperation.

Thus, the recurrence of the historical and normative institutionalism facilitate access to analysis to be through instruments such as understanding the processes and events in perspective of change and path dependence same facts that add to the reconfiguration of the public. To this the contribution of the normative adds elements from beliefs and ideas, configuring new inputs from which you can break the path dependence and create the configuration of an orderly social base from reasonable actions.

Finally, this research proposes an instrument of reconciliation network as a model in which the crossing of variables and their inter-relational dynamics enables the design of public policies that break the traditional mold of ceasefire agreements and preeminence of rules intended more towards the realization of procedural and reintegration programs, which for the purposes of social restructuring fund. This tool focuses on the element of the dialogic / deliberative as “hinge element” with input from the institutional, justice, processuality and context to forgiveness. This within a framework of creation of collective actions, supported the proposal of the ethics of hospitality Innerarity, promoting cooperation, individual and community reintegration, inclusion, reparation, restitution, among others. Finally, to guarantee sustainability, this bet must contain truth and public memory as bulwarks on which path dependency is broken and no repetition of the facts is guaranteed through security policies and common welfare. The cohesive element of permanence in time is the structuring of an integrity framework where the process can be monitored comprehensively.

0. INTRODUCCIÓN

*Tú entendías que tu manera de interpretar los hechos era la correcta;
en cambio, yo entendía que la correcta era la mía.*

Sófocles, Antígona

*Porque ésa es la grandeza y la miseria de la decisión moral:
que nadie puede asumirla a priori por mí, que soy yo quien ha de decidir personalmente,
es decir, de una manera responsable de la que puedo dar razón.*

Adela Cortina, Ética aplicada y democracia radical

A lo largo del siglo XX y lo transcurrido de este siglo XXI la humanidad ha sido testigo de un sinnúmero de conflictos en todo el mundo. Desde conflagraciones entre Estados hasta confrontaciones al interior de algunos países, la violencia y la guerra han hecho apariciones sin discriminación alguna. A su vez, la misma situación de inseguridad que estos hechos nos depa-
ran ha estimulado la búsqueda de alternativas para que el conflicto no degenera en violencia y, mucho menos, en guerra. La fallida Sociedad de la Naciones después de la I Guerra Mundial, los infructuosos intentos de la Organización de las Naciones Unidas en el período de la segunda postguerra para que la destrucción no vuelva a desestabilizar la convivencia humana y la diversidad de salidas a la guerra en países como Sudáfrica, Ruanda, Irlanda, Yugoslavia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia, entre otros, son manifestación de ese brote de alternatividad más allá de la guerra y la destrucción.

Sudáfrica legó a la historia conflictiva de los seres humanos un ejercicio de reconstrucción, reestructuración, reconciliación y convivencia. Partiendo de la desestabilidad social por el abuso indiscriminado de la raza blanca sobre la negra, vivieron un proceso que sentó las bases de la reconciliación social como un espacio y un tiempo a través del cual es posible la salida

alternativa al conflicto. Por otro lado, en Centroamérica, específicamente en El Salvador y Nicaragua, las profundas diferenciaciones sociales, junto a la manipulación del poder político por gobiernos dictatoriales, originaron una “grieta” que condujo a largos conflictos violentos con un alto número de pérdida en vidas humanas. Así mismo, en Suramérica, Colombia, ha vivido una situación de violencia desde hace más de 60 años, la cual ha estado caracterizada en su última etapa por rasgos como una insurgencia guerrillera de tendencia “marxista” que afirman luchar por el acceso del pueblo al poder político y la reivindicación de los derechos de los sectores populares, mezclando esta búsqueda con el narcotráfico, lo que incluye involucrar sectores sociales en cualquiera de estas tendencias; a ello se añade la proliferación de cultivos ilícitos, junto al comercio de los estos, la delincuencia fruto del mismo negocio y la fragmentación de la vida social en general.

Estos tres casos que hemos traído a colación nos motivan a plantearnos nuestra pregunta de investigación en los términos de ¿cómo hacer más justos y efectivos los procesos de reconciliación social en situaciones de conflicto¹ y violencia?² El cúmulo de experiencias conflictivas en diferentes épocas y circunstancias, junto a los fallidos intentos de reconstrucción social muestran las insuficiencias de la gestión política de estos procesos en sociedades que han vivido largos períodos de conflicto y que, inclusive hoy, mantienen esquemas de violencia. De ahí la importancia politológica de este tipo de asuntos.

Tres motivaciones nos conducen a la elección de Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia como casos de estudio, teniendo en cuenta sus diversas perspectivas, pero reconociendo los hondos procesos de fragmentación social fundados en dinámicas de conflicto y violencia por largos períodos de tiempo que han vivido cada uno de estos cuatro países. Esta es la primera circunstancia que nos motiva a elegirlos como casos de estudio para la presente investigación. Nuestra segunda motivación en la elección de estos casos radica en que la propuesta de reconciliación social como método alternativo tuvo aciertos y desaciertos destacables en cada uno de estos países. Por ejemplo, Sudáfrica es conocida a nivel mundial como “modelo ejemplar de reconciliación social”, aunque no podemos desconocer que no ha sido el caso más exitoso del

-
1. Reconociendo que el conflicto es constitutivo de lo humano, la presente investigación asume la condición conflictiva en perspectiva de los enfrentamientos que se producen en sociedades donde la injusticia impera, la inequidad fragmenta lo colectivo y la segregación coloca a los diversos grupos en continuo choque de intereses, necesidades y valores.
 2. Para efectos de la presente investigación, la pregunta se plantea en términos generales. Sin embargo, por ser conscientes de las diferencias contextuales y procedimentales que cada realidad de conflicto y violencia presenta nos demanda esta aclaración metodológicas. Por ejemplo, los casos que hemos escogido: Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia, exhiben diferencias sustanciales que no podemos desconocer. Los tres primeros plantearon los procesos de postconflicto después de acuerdos puntuales entre las partes enfrentadas y con cese de hostilidades; Colombia, por el contrario, aún mantiene un proceso conflictivo y violento.

mundo, pues las fallas en la implementación del proceso dan muestra de ello. No podemos desconocer que la conflictividad constitutiva de lo humano conlleva serios y profundos obstáculos para lograr la estabilidad absoluta, sobre todo en sociedades con hondos problemas sociales de injusticia social, inequidad y segregación. Sin embargo, el liderazgo de hombres como Mandela y el expresidente De Klerk, junto al apoyo del arzobispo Desmond Tutu, y la implementación de mecanismos de cohesión como el *Nation Building*, el uso del deporte del rugby como actividad que unificó las dos razas enfrentadas, entre otros elementos que tendremos en cuenta al abordar el caso, permitieron sentar las bases de lo que se podría considerar un camino hacia la reconciliación social.

Por su parte, El Salvador y Nicaragua son casos en los que se hizo palpable la mezcla dinámica entre la búsqueda alternativa a la violencia, la presencia de la cooperación internacional para lograr acercamientos entre las partes enfrentadas y el inicio de procesos conducentes a la reconciliación social que estuvieron, no obstante, centrados en la firma de acuerdos de cese de hostilidades sin acceder a una verdadera reconstrucción. Ambos escenarios, pese al éxito conseguido, dejaron una sensación de impunidad y tergiversación en la búsqueda de la verdad.

Colombia, por su lado, es un caso atípico en esta materia de búsquedas hacia la reconciliación social. Un largo conflicto, mezclado con aspectos de insurgencia guerrillera de línea marxista o izquierda radical, junto al advenimiento de grupos de extrema derecha promovidos y apoyados por la clase social alta (grandes terratenientes, empresarios, hombres y mujeres de negocios del sector agrario y agropecuario, entre otros), miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, además de grandes líderes políticos en las regiones, y el negocio ilícito de drogas alucinógenas presentan un panorama bastante complejo de lo que es un proceso sectorizado de búsqueda de la paz. Es decir, el caso colombiano ha puesto su énfasis en acuerdos de cese de hostilidades, creación de mecanismos de reinserción de excombatientes a la vida civil y a la participación política, sin tocar las bases estructurales que demanda un verdadero proceso de reconciliación social.

Después de infructuosos procesos de diálogos hacia la paz con grupos al margen de la ley (por ejemplo, grupo guerrillero M-19, grupo Quintín Lame, Grupo Ejército Popular de Liberación –EPL–, entre otros), liderados por los respectivos gobiernos, no es sino hasta el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006) que se sientan las bases iniciales de un proceso de diálogo, negociación y desmovilización de grupos de extrema derecha —llamados Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, o paramilitares, bajo el marco de la llamada Ley de Justicia y Paz (ley 975 de 2005)—. Esta iniciativa ofreció garantías a los excombatientes que se acogieran a los principios rectores de la citada ley, aun ofreciendo oportunidades a los miembros de gru-

pos guerrilleros que desearan ingresar a la iniciativa, y se crearon dos organizaciones desde el gobierno para atender la dinámica del proceso: la Alta Consejería para la Reintegración (ACR) y la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) para que apoyaran el proceso con desmovilizados y víctimas, respectivamente.

En este marco, la presente investigación centra su atención en los cinco años del Proceso de Justicia y Paz colombiano, por cuanto es el que permite abrir una dinámica distinta a lo que se venía trabajando en Colombia en materia de alternatividad al conflicto y la violencia. Igualmente, estos primeros años del proceso, dinamizado desde la Ley 975 de 2005, ofrecen insumos de aciertos y desaciertos frente a una perspectiva de reconciliación social que nos ayudan mucho para pensarnos *hacia una política pública de reconciliación social*.

Nuestra tercera motivación para la elección de estos cuatro casos de estudio es que la misma diferencia contextual, circunstancial, temporal y en términos de resultados brindan una oportunidad y posibilidad para que, desde la construcción de lo público, accedamos al señalamiento de los elementos fundamentales que toda política pública que propenda por la reconstrucción social debe incorporar, aun cuando no puedan presuponerse problemas y soluciones comunes, como comúnmente se hace en las otras áreas de gestión de lo público. Esta misma diversidad en los cuatro países nos permitirá construir ese marco de referencia sobre el cual se debe pensar una política en esta materia.

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación que nos hemos propuesto y aclarando las motivaciones que nos condujeron en la elección de los casos de estudio, proponemos nuestra hipótesis: 1) *Un proceso de reconciliación social es justo cuando contiene el elemento deliberativo como espacio de imparcialidad en el que los intereses de todos los miembros son tenidos en cuenta. Y es efectivo cuando los mecanismos institucionales que buscan la convivencia y la coexistencia después del conflicto se fundamentan en bases de institucionalidad guiada por la buena gobernanza y, en última instancia, por la ética pública.* 2) *Todo proceso de reconciliación social debe contener instrumentos (como verdad, reparación, restitución, memoria histórica, contexto hacia el perdón, entre otros), procesos (tiempos y fases) y estructuras que deben respetarse para que el conjunto del proceso, guiado por la justicia y la ética, funcione.*

0.1. Hacia un *modelo ideal* a través del método

La sensación de “fracaso” en los diversos intentos de construir marcos de referencia en la búsqueda de alternativas frente al conflicto y la violencia, con los consiguientes efectos de

“réplica”, es el hecho concreto que nos conduce a confrontar el tema de la efectividad de las dinámicas de reconciliación social.³ Desde esta perspectiva, buscamos proponer un *modelo ideal*⁴ de reconstrucción social en sociedades que han vivido la fragmentación general debido a acciones conflictivas y violentas, asumiendo los aciertos y desaciertos de los casos de Sudáfrica, Centroamérica (El Salvador y Nicaragua) y Colombia.

El *modelo ideal* que buscamos debe dar lugar a la creación de una *política pública de reconciliación social* que abra las posibilidades de lo justo y lo efectivo en este tipo de iniciativas alternas a la conflictividad. Como lo expresamos en nuestra hipótesis, la deliberación, la institucionalidad efectiva y la ética pública son los ejes fundamentales sobre los cuales pretendemos hallar el elemento faltante en este tipo de dinámicas.

Por ende, buscamos acceder a cada caso para extraer las particularidades asumidas en los cuatro procesos y construir una red de principios básicos que nos brinden la posibilidad de definir los elementos fundantes de una política pública de reconciliación social, con miras a crear dinámicas de cooperación hacia la reconstrucción social, después de largos períodos de conflicto y violencia.

Históricamente podemos sintetizar los esfuerzos que la humanidad ha hecho para buscar alternativas de salida a las situaciones de conflicto en tres dinámicas: 1) La resolución de conflictos como conjunto de mecanismos estratégicos conducentes al cese de hostilidades y a la concreción de acuerdos y/o pactos pacíficos; dentro de este conjunto de mecanismos se cuentan los diálogos de paz, la negociación, la mediación, el arbitraje, la amigable composición, entre otros. 2) La transición democrática como espectro de medidas gubernamentales, con apoyo de

3. Podemos señalar como indicadores del llamado “fracaso” de las posibles salidas alternativas al conflicto y la violencia en El Salvador y Colombia, la réplica de los actos violentos por grupos de segunda y tercera generación de quienes protagonizaron inicialmente los brotes conflictivos. Tal es el caso de las llamadas ‘maras’ en el contexto salvadoreño. Estos grupos de “jóvenes” son los hijos o nietos de los centroamericanos que huyeron de la guerra en los años setenta y ochenta hacia Estados Unidos. En la ciudad de Los Ángeles formaron estos grupos delincuenciales que retornaron al final de los noventa e inicios de la década del año 2000 a su país y sembraron nuevamente el contexto de violencia. En el caso colombiano, después de la desmovilización de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el año 2005 —motivada por la propuesta del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y amparados bajo la Ley 975 del mismo año (denominada Ley de Justicia y Paz)— un considerable número de combatientes de estos grupos no se acogieron a la propuesta del gobierno y continuaron delinquirando bajo la denominación de las BACRIM (Bandas Criminales) o, incluso, se constituyeron con el retorno de excombatientes que se desmovilizaron, pero con el correr del tiempo no confiaron en el proceso propuesto por el gobierno o, simplemente, sintieron que “la guerra” era su vida. Una mejor fundamentación sobre esta temática (especialmente sobre el caso salvadoreño) se puede hallar en el documental “La vida loca” del fotógrafo y cineasta hispano-francés Christian Poveda (2008). Para el caso colombiano se puede acceder al documental online “Cómo va la paz” (Informe realizado por International Crisis Group sobre las BACRIM en 2012).

4. Para los efectos de esta investigación, al hacer referencia a *modelo ideal* no proponemos una visión platónica ni utópica de la propuesta, sino que hacemos referencia a lo que debería contener una alternativa al conflicto y la violencia a través de una política pública.

la comunidad internacional o sin ella, que brindan el espacio político para el paso de gobiernos dictatoriales o autoritarios a democráticos, como han sido, por ejemplo, los procesos en España, Chile, Liberia. En este nivel los instrumentos más utilizados en el ámbito interno son los diálogos y acuerdos partidistas con asunción de elecciones democráticas y, en algunos casos, con procesos constituyentes; a nivel internacional, sin embargo, se ha optado por iniciativas como el *peacekeeping* y el *peacemaking* con un fuerte protagonismo de Naciones Unidas. 3) Los procesos de reconciliación social como el espacio ético-político que algunos grupos humanos abren en su historia de conflicto y violencia para reconstruir la estructura social e institucional que posibilite la convivencia pacífica y el retorno a la democracia.

El camino de investigación y análisis hacia el *modelo ideal* avanzará de la siguiente forma: En primer lugar, con la construcción teórica que nos permita establecer hipótesis consolidadas de cómo “debería” ser el proceso, segundo, a través de una verificación empírica de la hipótesis mediante el método de *estudio de caso*, y, finalmente, con un refinamiento de nuestra hipótesis sobre la base de la validación empírica y las lecciones extraídas. El estudio de caso se utiliza como herramienta que permite explorar y analizar abiertamente la búsqueda de salidas alternativas al conflicto y la violencia en cuatro países que han vivido largos períodos de conflicto y violencia. Esta salida alternativa, según la historia misma de cada país, es la reconciliación social como un horizonte desde el cual se busca el restablecimiento de relaciones sociales y la consolidación de sociedades de convivencia.

Un caso es un objeto de estudio con unas fronteras más o menos claras que se analiza en una teoría o una parte de ella, bien sea por su valor intrínseco. Para su análisis se pueden utilizar materiales diferentes, desde entrevistas semiestructuradas hasta análisis de contenido de documentos varios, pasando por encuestas u observación participante (Coller, 2005, p. 29).

Coller (2005) señala que el método del estudio de caso tiene unas tipologías⁵ que merece la pena tener en cuenta al momento de escoger esta manera de investigar. Desde dicho conjunto de tipos en el modelo, las tipologías de estudio de casos que asumiremos son: 1) según lo que se estudia, la de *objeto de estudio* con fronteras más o menos claras desde la historia conflictiva de cada uno de los cuatro países escogidos y la centralidad en los procesos de salida a la violencia

5. Para este autor el método de estudio de casos tiene las siguientes tipologías: según lo que se estudia (objeto y proceso), según el alcance del caso (específico y genérico [ejemplar e instrumental]), según la naturaleza del caso (ejemplar, polar [extremo], típico, único [contextual, irreplicable, pionero, excepcional, desviado – negativo–, teóricamente decisivo]), según el tipo de acontecimiento (histórico [diacrónico], contemporáneo [sincrónico], híbrido), según el uso del caso (exploratorio [descriptivo], analítico (con hipótesis, sin hipótesis); según el número de casos (único, múltiple [paralelos, disimilares]) (Coller, 2005, p. 32).

que emprendieron o aún emprenden estos casos escogidos, 2) según el alcance del caso, la de *caso genérico instrumental* porque a través de estos cuatro casos buscamos ilustrar un conjunto de proposiciones que nos conduzcan a las bases de una política pública de reconciliación social, 3) según el tipo de acontecimiento, optamos por el *tipo mixto*, por cuanto recurrimos a acontecimientos pasados para explicar una urgente necesidad presente en materia de reconstrucción social a través de la gestión de lo público, después de la violencia y 4) siguiendo el interés de la investigación, también tendremos en cuenta la tipología del número de casos, específicamente en lo referente al *caso múltiple*, pero centrándonos en la compilación de información desde las similitudes y diferencias de cada país escogido para que podamos concluir con el diseño de una *reconciliation network* que nos amplíe las bases de la política pública.

Enmarcados dentro del método del *estudio de casos*, vale la pena aclarar que la manera de indagar por información en cada caso no será igual. Las dificultades de acceso a un trabajo de campo por motivos personales, económicos y de distancia geográfica nos impiden acceder a Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua para un trabajo en campo. El carácter cualitativo de nuestra investigación nos conduce a hacer uso de la *generalización analítica o inducción analítica* —como método que, en el abordaje de nuestro problema de debate real, posibilita la búsqueda alternativa al conflicto y la violencia a través de la reconciliación social como política pública— en torno a la reconstrucción social. Esto lo trabajaremos abordando cada caso y, desde allí, argumentaremos nuestra propuesta, ayudados por revisión de fuentes, tanto primarias como secundarias, teóricas como documentales, cuyo acceso se garantizará por diversidad de medios (entrevistas, material bibliográfico, información en línea). Con estos recursos se tendrá la posibilidad de recabar la información necesaria y elementos comunes en los casos de Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua. Como lo ha expresado Coller “los documentos forman parte de la estrategia de triangulación que se suele seguir en los estudios de caso para darle coherencia, fiabilidad y solidez a los datos” (2005, p. 80).

En el caso de Colombia, además del acceso a la información documental y al trabajo de campo, en la medida en que las posibilidades de seguridad personal lo han favorecido, nos pudimos apoyar en la *dinámica del grupo de discusión* como herramienta de análisis cualitativo. Este instrumento de investigación:

Se define por representar una situación discursiva grupal controlada por un investigador-moderador para los objetivos de una investigación. El control que ejerce el moderador tiene el propósito de articular lo que pasa dentro del grupo con lo que pasa fuera, es decir, en la investigación y la realidad social objeto de estudio. Su objetivo, por tanto, es doble por el interés que supone articular dos tareas concretas:

- a) Crear una situación grupal artificial donde los integrantes se manifiesten y hablen libremente, y de la manera más natural y espontánea.
- b) Mantener al grupo en una situación de trabajo e interés particular que se deriva del tema investigado y de los objetivos de la investigación (Gutiérrez, 2008, p. 43).

Pudimos abordar la complejidad de de acceso a víctimas, victimarios (desmovilizados, en términos de la Ley de Justicia y Paz en Colombia) y funcionarios del gobierno y/o entidades encargadas del proceso a través de esta dinámica investigativa. Entre el año 2005 y 2010 se desataron en Colombia diversidad de situaciones que favorecieron u obstaculizaron la llamada Ley de Justicia y Paz, incluyendo persecuciones sistemáticas tanto a excombatientes de alguno de los grupos, como a víctimas, de manera que el acceso a la información no fue fácil. Así mismo, el hecho de ser un proceso “novedoso dentro de las circunstancias colombianas”, especialmente con la manera de gobernar de Álvaro Uribe Vélez⁶ y el hecho de lograr la desmovilización de los grupos de paramilitares antes que la guerrilla, que no era lo usual, convocó a infinidad de organizaciones nacionales e internacionales, así como a investigadores de todas las áreas académicas, dando por resultado una enorme cantidad de solicitudes de “investigación social”, generando cierta desazón entre todos los miembros de los grupos involucrados, tanto víctimas como excombatientes. La expresión popular más utilizada fue que “nos tomaron como conejillos de indias”, para expresar una sensación de insatisfacción y descontento al recibir cantidad de personas que les preguntaban sobre todos los aspectos relacionados con su situación y a quienes, en últimas, “no les beneficiaba en nada”.

En este contexto, la presente investigación se vio abocada a enfrentar obstáculos y prevenciones por parte de organizaciones gubernamentales encargadas del tema y de los grupos objeto de estudio (víctimas y desmovilizados). Sin embargo, la herramienta del grupo de discusión logró ayudarnos en la obtención de información en terreno que contrastamos con la obtenida en documentos en cada caso, incluyendo a Colombia.

Con el ánimo de complementar la búsqueda de información, evitando que los obstáculos señalados en el caso de Colombia nos redujeran la comprobación de nuestras hipótesis, trabajamos la herramienta de las *entrevistas cualitativas* (Vallés, 2009) con algunos funcionarios de las entidades responsables del proceso y con algunos miembros de grupos de desmovilizados que se encontraban en cárceles colombianas, así como con víctimas en zonas en las que no fue posible aplicar grupo de discusión por cuestiones de seguridad. Nos apoyamos en las *entrevistas*

6. Es importante resaltar que su plan de gobierno se llamó “Seguridad Democrática” y consistió en poner el ámbito de la seguridad y defensa por encima de cualquier otro aspecto nacional. A tal punto que el mayor rubro del presupuesto nacional se fue a este campo de acción.

cualitativas semiestructuradas con el propósito de ahondar en elementos respecto al proceso a través de preguntas abiertas, concretas y específicas. Pero este instrumento también lo utilizamos con otro tipo de actores como docentes o especialistas en áreas académicas que nos podían ayudar en las conclusiones.

Con estos instrumentos metodológicos, tras la construcción del *modelo ideal* que nos hemos propuesto, fundaremos nuestro marco general del método en el llamado *process tracing*.⁷ Esta manera de abordar los fenómenos sociales forma parte de los conocidos instrumentos del denominado “método de proceso de rastreo” que se originó para “incorporar históricas narrativas dentro de teorías muy abstractas en las ciencias sociales” (Falleti, 2006, p. 9). Alexander George y Andrew Bennet (2005) señalaron que este método identifica los mecanismos causales que conectan causas y efectos. Según Falleti, estos dos representantes de esta metodología de investigación en ciencias sociales definieron los “mecanismos causales” como algo “en última instancia, no observable física o socialmente, ni siquiera como procesos psicológicos, a través del cual los agentes con capacidades causales operan, pero solo en específicos contextos o condiciones, para la transferencia de energía, información, o para la exportación a otras entidades” (Falleti, 2006, p. 10).

En este sentido, abordar los casos de Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia posibilita el rastreo de causas y efectos de fondo; todo ello en el marco de la construcción de un *modelo ideal* que nos conduzca a una política pública de reconciliación social, como un mecanismo eficaz y justo para lo alternativo a la violencia, en sociedades que han vivido largos períodos de conflicto; un rastreo que nos brinde la posibilidad de considerar causales no observables en este tipo de iniciativas de diálogos, negociaciones y firmas de acuerdos de paz, un rastreo que no considera lo físico, lo social o los procesos psicológicos como componentes a tener en cuenta. Y todo ello para evitar la repetición de actos de violencias o la mutación de lo conflictivo y lo violento en nuevas acciones que recrudezcan la fragmentación social, tal como se ha podido corroborar en los casos de El Salvador (las maras), Sudáfrica (retorno de la violencia entre negros y blancos) y Colombia (procesos de paz anteriores que no han subsanado los ataques entre grupos al margen de la ley y población, junto al rearme de excombatientes o mezcla entre diferentes miembros de grupos violentos, por ejemplo, las BACRIM –Bandas Criminales–, como fruto de los exparamilitares).

7. *Process tracing* (seguimiento de procesos) Es un herramienta de análisis cualitativo. Es definida como un herramienta de estudio sistemático de diagnóstico de pruebas seleccionadas y analizadas a la luz de la investigación de preguntas e hipótesis seleccionadas por el investigador. Puede contribuir a describir conjuntamente fenómenos políticos y sociales y evaluar las reclamaciones causales (Collier, 2011, p. 823).

En términos de David Collier (2011) es “una herramienta de análisis para la descripción analítica y deducciones causales de piezas de diagnóstico de evidencias que frecuentemente comprenden secuencias temporales de fenómenos o eventos” (Collier, 2011, p. 824). De esta manera, continúa Collier, como herramienta de causalidad, el eje sobre el cual se articula el análisis está en el trazado de acontecimientos y situaciones sobre el tiempo. Para ello, se deben describir los acontecimientos y las situaciones en determinado instante del tiempo. Así las cosas, el componente descriptivo del proceso de seguimiento comienza con la fijación de hechos en una serie de momentos específicos. Lo anterior, para caracterizar un proceso que debe ser capaz de definir los pasos claves en la procesualidad misma, lo que permite un buen análisis de cambio y proceso (p. 824). Siguiendo esta dinámica metodológica, el acceso teórico al institucionalismo histórico y al normativo nos permitirá avanzar en nuestra apuesta.

Cada caso escogido (Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia) contiene una serie de dinámicas históricas que determinaron el conflicto y la violencia en sus contextos y circunstancias. Cada acontecimiento y situación en el tiempo permitió que tanto la violencia como los procesos conducentes a lo alternativo con miras a acuerdos e ingreso a circunstancias hacia la reconciliación social abrieran el análisis del proceso de cada caso particular pero, a su vez, en su conjunto mostrara dinámicas de análisis descriptivo de este tipo de situaciones. No son solo firmas de acuerdos de cese de hostilidades y apertura para el retorno de excombatientes a la vida social, sumado a medidas de reparación y/o restitución para las víctimas, sino que son causas que parten desde las fallas estructurales que originaron la situación, pasando por las motivaciones personales, y que ponen a la misma sociedad en una perspectiva de un proceso, constituido por procesos eventuales. De allí la mirada *hacia una política pública de reconciliación social*.

0.2. Lo espacio-temporal

Las mismas razones que justifican por qué se seleccionaron los casos de estudio especifican el marco espacial de esta investigación en las realidades de Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia como referentes desde los cuales es posible asumir las similitudes y diferencias de procesos de salida alternativa a la violencia. Reiteramos, para evitar confusiones, que somos conscientes de las particularidades que informan cada uno de los países e, incluso, de la diversidad de los elementos que caracterizan sus conflictos. Sudáfrica afrontó procesos de segregación y enfrentamientos raciales, mientras que en El Salvador y Nicaragua confluyeron elementos de gobiernos dictatoriales, procesos de transición hacia la democracia, en una mezcla de factores socio-económicos de desigualdad, y, por último, Colombia es un “rompecabezas” de factores

sociales, económicos, políticos, enmarcados dentro de la ilegalidad, con un trasfondo de discursos de reivindicación social desde la izquierda y el uso de las armas.

Desde esta perspectiva, lo espacial da paso a lo temporal en la medida en que en Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua los procesos de enfrentamiento y choque cesaron a través de acuerdos e inicios de lo que podríamos llamar acercamientos a la “reconciliación social”. Por ello, el análisis se centrará en la manera como se dieron esos procesos y las características esenciales de lo que se entendió y asumió como reconciliación social. Para el caso colombiano, como lo señalamos con anterioridad, trabajaremos el período 2005 – 2010, por ser el marco dentro del cual se dio inicio al proceso de búsqueda de la paz en el marco jurídico de la llamada Ley de Justicia y Paz, y el ascenso nuevamente del discurso de la búsqueda de la reconciliación, bajo el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006). A partir de estos elementos iniciales del proceso colombiano podemos fusionar los insumos que nos ofrecen los otros tres países con miras a la búsqueda de fundamentos para lo justo y efectivo de este tipo de procesos.

0.3. Generalidades hacia el marco teórico

Los procesos de reconciliación social han sido asumidos por algunas sociedades como mecanismo de apertura a procesos de reconstrucción de la unidad política —no como homogeneización, sino de lo político como coexistencia de diferencias e, incluso, de antagonismos— después de fuertes experiencias conflictivas y violentas. Estas dinámicas han sido estudiadas a nivel teórico desde las mismas circunstancias contextuales en las que se han ubicado los diversos procesos a lo largo y ancho del planeta. Por lo general son ubicados dentro de perspectivas en estrecha relación con los mecanismos de resolución de conflictos, especialmente centrados en la problemática de la paz.

La perspectiva que deseamos asumir busca dar un giro conceptual a esta manera de abordar el problema y la urgente necesidad que se plantea en este tipo de grupos humanos. Buscamos tocar el fondo de la problemática en cuanto a los desaciertos que han conducido a la falta de efectividad de este tipo de iniciativas. Nuestra pregunta de investigación marca la pauta conceptual desde la que deseamos partir y nuestras hipótesis nos permiten plantear una manera distinta de abordar este tipo de análisis.

La manera como nos proponemos trabajar el planteamiento de este problema está en la recurrencia al institucionalismo como marco teórico desde el que proponemos desarrollar una apuesta hacia la efectividad y justicia de estos procesos conducentes a la reconstrucción de

sociedades fragmentadas por el conflicto y la violencia. Para ello, asumimos el concepto de institucionalidad como el conjunto de reglas de juego, prácticas sociales, rutinas, entre otros elementos, que se establecen como redes dinámicas que influyen en la vida social y generan pautas, en estrecha relación con las creencias e ideas que configuran el comportamiento colectivo de los individuos.

La misma realidad conflictiva de la condición humana, expresada en la exacerbación de lo conflictivo hasta hacer palpable la violencia, marca una pauta de dificultad para el abordaje de estas problemáticas y hacen que la complejidad en las búsquedas de salida a estos sucesos aumente. La sensación de ineficacia, ineficiencia y desaciertos en este tipo de procesos pone en entredicho los elementos constitutivos que deberían impulsar y gestionar las iniciativas en esta materia. Por ello, recurrimos a lo institucional como “pieza clave” para concretar procesos más justos y eficaces en materia de reconciliación social, y facilitador de instrumentos de apoyo, tales como verdad, reparación, restitución, memoria histórica, etc.

Las mismas circunstancias que dan paso a los largos conflictos y a las violencias explícitas originan fuertes vacíos en las instituciones que posibilitan la gestión de lo público. En este sentido, la presente investigación considera que el cambio gradual de la misma institucionalidad es viable desde el diseño de marcos de actuación social fundados en la racionalidad del actuar humano. Pero, ¿para qué actuar racionalmente en una perspectiva de reconstrucción social? En este punto nos puede ayudar Amartya Sen, para quien la racionalidad tiene unos usos que, en nuestra visión, son los que nos permitirán ahondar en la acción razonable de un ser humano. Para Sen, el primer uso que tiene la racionalidad es lo normativo, haciendo posible que pensemos y actuemos sabia y juiciosamente más que estúpida o impulsivamente. A lo anterior se suma el segundo uso de la racionalidad: “elección racional”. Sen señala que este segundo uso de la racionalidad tiene una dimensión “predictiva indirecta”, donde se puede percibir que el comportamiento de lo humano puede predecirse asumen unas ciertas condiciones antropológicas de seres humanos que buscan maximizar preferencias (Sen, 2004, p. 42).

Es decir, deberíamos preguntarnos qué puede demandar la racionalidad desde la perspectiva de la elección, qué puede hacer “racionalmente” una persona, en los roles económicos, políticos y legales que le toca vivir, cuando se enfrenta a elecciones. En nuestro caso, la búsqueda de la explicación (y previsión) del comportamiento podría estar en la búsqueda de lo que motiva el acceso a lo alternativo al conflicto y la violencia a través de procesos de diálogos y negociación conducentes a la paz, después de que los años han marcado la destrucción de la vida humana y la fragmentación social. Por ejemplo, a un excombatiente qué lo motiva a dejar las

armas: ¿indulto o amnistía?, ¿garantías de retorno a la vida civil apoyadas en “capital semilla” para trabajo?, ¿acceso a la vivienda de interés social? Después de tantos años de estilo de vida violenta, ¿es real su “cambio actitudinal frente a lo social”, entre otras muchas dimensiones que no se pueden desconocer en este tipo de procesos. También, por el lado de las víctimas, se podrían considerar muchos otros aspectos: ¿qué motiva a la víctima fundada en el dolor, la tristeza, la rabia?, ¿la indemnización?, ¿la reparación? ¿Qué tipo de reparación prioriza?, ¿la restitución? ¿Cómo asume al excombatiente que la victimizó y se desmoviliza?, ¿acoge la reintegración del excombatiente? Finalmente, otro ejemplo que nos puede ayudar a abordar más esta dimensión desde Amartya Sen son los aspectos de la sociedad en general: ¿tantos años de fragmentación son fácilmente asimilables? ¿Cómo reaccionan todos los sectores sociales ante la desmovilización y reintegración de excombatientes? ¿Cómo gestionar la polarización en que se mantiene la sociedad frente a un proceso hacia la paz y lo que ello implica? ¿Quién asume los “costos” de un tipo de proceso como estos? En últimas, ¿qué se elige, desde dónde, por qué y para qué?, en una sociedad que busca lo alternativo al conflicto y la violencia.

Además, desde Sen hay un tercer uso que no puede desconocerse: es el llamado uso extensivo de la racionalidad (razonabilidad), para intentar comprender qué hacen los otros y por qué, y también qué conocen los otros, qué podemos aprender nosotros de lo que los otros conocen (Sen, 2004, p. 43). En términos de reconstrucción social, a través de una política pública de reconciliación social, sería la asunción de trabajar en la apertura de los pensamientos y actos conducentes a la consolidación de lo público, más allá de las perspectivas que se tengan en materia de ideología o cualquier otra diferencia que haya estado dentro del marco de las causas del conflicto. Es la búsqueda de coexistencia y convivencia en medio de diferencias y antagonismos, pero poniendo lo público como esfera primordial. Son preguntas compartidas sobre: ¿Por qué el victimario actuó o actúa de una manera? ¿Por qué la víctima asume un rol de silencio temeroso, mezclado con dolor y rabia, para luego reclamar por sus derechos? ¿Por qué la víctima centra su atención en una reparación expresada en dinero, más allá de una reparación de su vida en todos los elementos? ¿Qué conoce la sociedad civil de los actos de los victimarios o del reclamo de las víctimas? ¿Qué lectura hace de la situación un gobierno o una fuerza militar? ¿Es un problema político, o de defensa y seguridad? Son solo algunos cuestionamientos que nos pueden surgir cuando nos acercamos al tercer uso de la racionalidad, con una perspectiva de actuar razonablemente, intentando ponernos en la piel de los otros.

El cuarto uso de la racionalidad, según Sen, aparece en los esfuerzos de cooperación, competición o combate. No solo la usamos para comprender la perspectiva de los otros, sino que debemos contemplar también qué esperamos de los otros, para actuar en consecuencia. Una

persona puede actuar en estas dinámicas motivada por su propio interés más que por la simpatía, el sentido de compromiso o la gratitud y si creo que va actuar de esta forma, yo actuaré en consecuencia. “La actual historia de la cooperación y el conflicto en el mundo tiene muchas enseñanzas que ofrecer que nos llevan más allá de la comprensión de fórmulas y reacciones” (Sen, 2004, p. 45).

Finalmente, el quinto uso de la racionalidad se manifiesta ya en su uso en el *policy-making*, se trata de comprender y evaluar cómo pueden ser tomadas las decisiones públicas racionalmente. Igualmente, las figuras de la racionalidad se expresan en diversas opciones en la teoría de la elección pública, análisis costo–beneficio, evaluación institucional, evaluación de política pública y otras prácticas de la razón” (2004, p. 45). Este ámbito nos ofrece instrumentos con los que nuestra propuesta se podría afincar para consolidarse como una opción efectiva de reconstrucción social después de largos períodos de conflicto y violencia.

Por otra parte, una vez explicado ese complejo concepto de racionalidad, que estará presente en el texto, dos modelos de institucionalismo permitirán que la presente investigación logre los resultados esperados: 1) institucionalismo histórico y 2) institucionalismo normativo. La dimensión histórica nos permitirá la comprensión de los procesos con su componente de inercia, para desde allí, contemplar el diseño idóneo de las instituciones en perspectiva de reconstrucción social. A su vez, nos brindará elementos que nos permitan analizar la gradualidad de los cambios en este tipo de dinámica y su injerencia en la consolidación de lo público desde categorías de persistencia en el tiempo, ahondando en la no repetición de los hechos, pero sí en su dependencia del sendero. Pero la visión normativa permite vislumbrar esperanza frente a la dependencia. Ella nos conducirá a la creencia de que la salida a un momento crítico por medio de la guerra civil, cuando ha tenido defectos de diseño, no tiene por qué implicar un trayecto sin salida que solo a través de la réplica de la violencia daría lugar a nuevas instituciones. Es la realidad del cambio en las creencias la que nos aporta la esperanza. La historia influye, pero no determina.

El institucionalismo normativo complementa nuestra búsqueda al permitirnos construir las bases hacia la eficacia de este tipo de procesos a partir de las creencias e ideas, hasta su cohesión en valores, que dinamizan los cambios graduales para superar las dinámicas del *path dependence*. De allí la racionalidad que se nos demanda para que las ideas se constituyan en columna que sostiene la efectividad de la política pública. De esta manera, los nuevos mecanismos institucionales de reparación y paz podrán ser aceptados y permitir la cooperación social, superando así los dilemas de la acción colectiva, a través de liderazgos suficientes que generen incentivos.

En este orden de ideas, buscamos acercarnos a los fundamentos conceptuales de la realidad de conflicto y violencia dentro de un marco de institucionalismo histórico y normativo, por cuanto la experiencia que han vivido países como Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia conlleva una alta carga de configuración institucional, puesto que se ha fragmentado la realidad misma que pide ser reconstruida. A su vez, como lo expresamos en nuestra primera hipótesis de trabajo, los mecanismos de institucionalidad guiada por la buena gobernanza y, en último término, por la ética pública, son los que brindan las posibilidades de lo justo y efectivo de una dinámica de reconciliación social.

Las instituciones representan herencias de un fin o un propósito valorado, con sus correspondientes reglas y obligaciones morales. Constituyen una base socialmente ordenada para la vida humana. Esta fundamentación en un terreno normativo implica la vida de los individuos y los colectivos en una realidad social vivida. Vivir una cultura que da la espalda a las instituciones equivale a intentar vivir en un cuerpo físico sin esqueleto o a tener la esperanza de poder usar un idioma, pero no su gramática. Una cultura íntegramente dedicada a desconfiar de sus instituciones es un contrasentido (Hecló, 2010, p. 70).

0.4. Organización del presente texto

Para presentar el desarrollo y conclusiones de la investigación que hemos esbozado en estas páginas introductorias hemos organizado el texto en cuatro partes delimitadas y definidas por los elementos de 1) marco teórico y definición de los conceptos fundamentales para abordar la temática (capítulos 1 y 2). Para desarrollar estos dos capítulos nos apoyaremos en los enfoques de los institucionalismos histórico y normativo, por cuanto la realidad de conflicto y violencia rompe la dinámica de lo común, lo colectivo, y desata procesos de individualismos y sectorizaciones que luchan por la defensa acérrima de sus intereses, más allá de la configuración de espacios de convivencia y coexistencia. Luego, en el segundo capítulo trabajaremos los conceptos de reconciliación social y ética pública como “columnas fundantes” de un “puente teórico” que nos brinde la posibilidad de afirmar que sí es posible configurar una política pública de reconciliación social en perspectiva de reconstrucción social, yendo más allá de las obsesivas búsquedas de la paz y contentándonos con firmas de acuerdos de cese de hostilidades, mientras se dejan “en el tintero” reformas estructurales que, mientras no se trabajen públicamente a fondo, terminan siendo las causas de la repetición de hechos violentos. 2) En el capítulo 3 haremos la presentación de los casos de Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua dentro de un esquema que hemos definido con categorías de análisis cualitativo⁸ y 3) en el capítulo 4 desarrollaremos la

8. Para el interés de esta investigación nos parece adecuado delimitar unas mínimas categorías de abordaje de los casos, evitando la dispersión en otro tipo de elementos que nos ampliarían excesivamente el abordaje del

presentación del caso de Colombia, acompañado de la documentación básica que nos permita desarrollar las mismas categorías de análisis que asumimos con los tres primeros casos, junto al análisis de resultados del trabajo de campo realizado con los instrumentos de *grupos de discusión* y *entrevistas cualitativas semiestructuradas* para apoyar la presentación de este país y su realidad hacia la reconciliación social.

Finalmente, presentaremos la propuesta del *reconciliation network* que consideramos puede favorecer la dinámica de justicia y efectividad de procesos de reconciliación social a través de una política pública que debe ser diseñada e implementada dentro de un marco de institucionalidad que facilite la persistencia y la no repetición de los hechos, con efectos de reformas estructurales sólidas.

tema. Consideramos importantes estas categorías para tal fin: 1) procesualidad – tiempos, 2) instrumentos para la efectividad del proceso: verdad, reparación, restitución, memoria histórica, contexto hacia el perdón, 3) instrumentos de sentido o éticos, 4) marco institucional: justicia transicional (derechos y deberes); creación y promoción de la institucionalidad y 5) definición y aplicación de una política pública.

1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE UNA REALIDAD DE CONFLICTO Y VIOLENCIA

Más allá de las consecuencias personales o grupales, incluso colectivas en términos generales, que largos períodos de conflicto y violencia han dejado y dejan a las sociedades que se han visto sumidas en estas situaciones, la fragmentación social se constituye en la “raíz fundamental” de los quiebres que obstaculizan la convivencia y coexistencia pacíficas. Desde esta perspectiva, nuestro punto de partida a nivel teórico es ahondar en lo que se debe constituir como marco desde el cual debemos pensarnos en dinámica continua de reconstrucción social: la acción colectiva en un marco de redes formales e informales de relaciones concretadas en instituciones que permitan la continuidad de procesos de restablecimiento de relaciones interpersonales e intergrupales, cohesionados por valores que todos acatamos, con intenciones hacia la cooperación.

El espacio público de la era democrática ya no se piensa como aquel en el cual el orden jurídico, dominado por la ley, se despliega bajo la Constitución. La lógica de la discusión, es decir, el diálogo, la comunicación, la negociación, etc., establece una red de mediaciones entre poder y sociedad. Esta nueva lógica conlleva actitudes políticas insospechadas en el modelo democrático clásico. Por ejemplo, un principio de proporcionalidad protege a las minorías, incluso cuando llamadas son “oposición” (Goyard-Fabre en: Motta, 1995, p. 29).

Este capítulo se desarrolla en cuatro apartes principales, con sus correspondientes subtemas. En un primer momento abordaremos el origen del planteamiento temático en referencia a la ubicación de la política pública de reconciliación social como salida alternativa al conflicto y la violencia, en un contexto plural y complejo que “agrava” la convivencia ante la persistencia de los problemas que frenan los procesos de reconstrucción de lo común. En un segundo momento trabajaremos la dinámica de la acción colectiva, haciendo énfasis en la consolidación del

bien colectivo desde las creencias e ideas que posibilitan los acuerdos conducentes a la cooperación y, de esta manera, dejar abierta la ventana de la reflexión sobre la misma cuestión a la luz de los enfoques institucionalistas histórico y normativo, según se tratará en un tercer momento de este capítulo. Por último, como cuarto momento, esbozaremos las “pinceladas” de lo que proponemos como *modelo ideal* de política pública de reconciliación social.

1.1. Origen del planteamiento

A diferencia de nuestros antecesores, los miembros de la actual generación sentimos en lo más profundo de nuestro corazón que una *pax oecumenica* es ahora la más urgente de las necesidades. Vivimos en el cotidiano espanto de una catástrofe que tememos pueda sorprendernos si dejamos todavía por mucho tiempo sin solucionar aquella necesidad. No es exagerado decir que la sombra de ese temor que se atraviesa en nuestro futuro no está hipnotizando, sumiéndonos en una parálisis espiritual que comienza a afectarnos incluso en las actividades más triviales de nuestra vida diaria. Y si podemos armarnos de valor para enfrentarnos a ese espanto, no obtendremos la recompensa de sentirnos capaces de desecharlo desdeñosamente como si sólo se tratase del pánico de un maniático. El aguijón de ese temor yace en el hecho innegable de que nuestro miedo tiene una raíz racional (Toynbee, 1952, p. 13).

En la década de los cincuenta, Arnold Toynbee clamaba por una *pax oecumenica*. La humanidad ya había experimentado dos guerras mundiales con un elevado número de víctimas y desastrosos efectos sociales, económicos y políticos. La tónica de este autor es poner esa paz incluyente como urgente necesidad ante el advenimiento de una catástrofe que pueda sobrevenir porque hay una sensación de parálisis interna en los seres humanos que afecta el comportamiento mismo ante el temor que se ha suscitado por la llamada “racionalidad” que condujo a las mismas guerras. El catalogarnos como “seres racionales” gestores de guerras como la I y II mundiales nos lanza a un “temor” en la misma capacidad de racionalidad. Afirmar que la razón es la columna sobre la cual se sentó la modernidad es expresar que vivimos en “el imperio del orden normativo” (Gil, 2001, p. 59). Si el vivir fundados en la norma nos condujo a acabarnos de la manera como lo hicimos, hemos hecho y seguimos haciendo, ¿tendremos más motivos para temernos a nosotros mismos? Es decir, el miedo que nos acompaña, desde la perspectiva de Toynbee, es un miedo a nosotros mismos por cuanto somos seres racionales que actuamos irracionalmente.

La historia de la humanidad ha legado innumerables aportes en todas las esferas de la vida. En medio de la contradicción avanzamos hacia una satisfacción personal y social que nos haga ser lo más humanos posible. Una de estas contradicciones que más ha determinado la realidad política de los seres humanos es la consolidación del Estado democrático a través del conflicto.

Pareciera que la única forma que hemos hallado los hombres y las mujeres de este mundo para instaurar un sistema de organización de la *polis*, donde todos podamos convivir tras la búsqueda de nuestros intereses, satisfacción de nuestras necesidades y promoción de nuestros valores, es el paso por la conflictividad. Es como si se hicieran realidad las afirmaciones de Kant en sus *Ideas para historia universal en clave cosmopolita* (1784) al expresar que el orden pacífico y civilizado se logra a través de la conflictividad.

Si la política es la lucha por el poder para la gestión de los conflictos sociales desde un espacio institucional que permita la imposición incluso coactiva de las decisiones, entonces las múltiples guerras de religión, nacionalistas o ideológicas muestran los diversos fracasos de la política como gestor de los conflictos sociales y la búsqueda del bien común. Organizarnos socialmente implicó, y sigue implicando, un recibir la realidad plural de la existencia humana en todo entorno común donde nos hallemos. No en vano la categoría pluralismo ha formado parte esencial en los estudios sobre la política desde que Dahl escribió *Who Governs?* (2005).

Este elemento de lo diverso en medio de una “posible unidad” tiene injerencia en lo que debe ser esa comunidad política que nos podría vacunar contra los nefastos efectos del “miedo racional” que citamos desde Toynbee. Es importante tener en cuenta que, siguiendo a Daniel Innerarity, en las sociedades pluralistas existen diferencias significativas en las actitudes y creencias fundamentales de sus miembros, diferencias que alcanzan incluso a la idea que tienen de lo que debe ser un acuerdo político justo (Innerarity, 2002, p. 70).

Esta pluralidad marca la esencia de lo humano en parámetros sociales, pero no para la destrucción, sino para la construcción de lo común. Sin embargo, lo plural ha sido asumido a lo largo de la historia de la humanidad como oportunidad para justificar la destrucción de los espacios comunes, con la excusa del reclamo de intereses individuales o grupales que no se abren a la experiencia de aprehender la realidad de los otros. Por ello, la historia ha sido un conglomerado de búsquedas alternativas a infinidad de problemáticas que se han planteado en distintitos contextos utilizando lo plural como impulsor de lo conflictivo.

Al respecto, José Antonio Marina (2010, p. 72–76) afirma que hay nueve problemas, cuya resolución es imprescindible para la convivencia y a los que podemos llamar morales. Para este autor pueden existir más, pero considera estos:

- a. El valor de la vida y la regulación del homicidio.
- b. Los bienes, su producción, posesión y distribución.
- c. El ejercicio del poder.
- d. La relación de individuo con la comunidad y de la comunidad con el individuo.

- e. Los métodos para solucionar conflictos dentro y fuera de la tribu.
- f. El sexo, la familia y la procreación.
- g. El cuidado de los débiles, enfermos y huérfanos.
- h. El trato con los extranjeros.
- i. La relación con el más allá, los espíritus, los muertos y los dioses.

En la misma línea, Leonel Narváez (2010, p. 22–23) sintetiza algunos problemas estructurales que, desde la perspectiva de Jeffrey Sachs (2008), están provocando la transformación negativa en la sociedad mundial. Específicamente, comentan estos autores, en América Latina los problemas de violencia y la ausencia de seguridad pública son causas circunstanciales y estructurales de esta dinámica en esa región. Puntualiza Narváez los problemas centrales en:

- a. La inusual brecha entre el enriquecimiento de unos pocos y el lento progreso en la redistribución de los ingresos y las oportunidades. El mayor dilema que manifiesta el género humano es la posición ante la escogencia entre las soluciones basadas en la corresponsabilidad y la generosidad en una mano y, en la otra, el empleo de actitudes represivas en respuesta a los conflictos generados por las disparidades económicas.
- b. Hacia el año 2050, Estados Unidos ya no será el único centro de gravedad económico del mundo. China, India, Japón, Turquía así como Brasil y México tendrán la mayor población del mundo.⁹ Históricamente, la experiencia ha demostrado que las grandes hegemonías económicas y los cambios en los centros de poder resultan en conflictos y violencia. Surge así lo que será el dilema entre cooperación e imperio.
- c. La religión puede ser un factor de complicación en un futuro, puesto que China, Rusia, Turquía e India, como futuros centros de poder, tienen una profunda cultura religiosa, lo que mantiene el dilema entre fundamentalismo y ecumenismo.
- d. El imparable proceso de urbanización a nivel mundial y los enormes desafíos para mantener esta realidad con la urbanización del hambre, de los desastres, el desempleo y el medio ambiente de vida insegura.
- e. Finalmente, la crisis del medio ambiente. Se estima que durante los próximos 30 años probablemente se deteriore o desaparezcan los recursos naturales, incluyendo el agua para beber, lo que generará fuertes conflictos para el mundo.
- f. A los anteriores problemas, Narváez señala que se podrían añadir, la escasez de alimentos, migraciones masivas y la disminución de los recursos.¹⁰

9. Desde nuestra perspectiva, también podríamos incluir a Polonia dentro de este grupo de países con tendencias a sostener los grandes grupos poblacionales.

10. No podemos desconocer que la escasez de recursos energéticos son un fuerte factor problemático a nivel mundial.

A su vez, Daniel Innerarity afirma que el adjetivo más empleado para caracterizar nuestras sociedades es el que deriva del término “complejidad” (2006, p. 128). Pero, reconociendo la dificultad conceptual que la ciencia política tiene para hablar de “complejidad”, Innerarity nos invita al reconocimiento radical de que toda operación social depende de un contexto y de una observación. No podemos desconocer que la representación de “realidades” es siempre una representación vinculada a un contexto.

Para Dietrich Dörner (2009) la complejidad está marcada por una gran cantidad de variables que están interrelacionadas, en una dinámica de influencia mutua con altos niveles de intensidad. Añade Dörner que, en esa misma interrelación, los sistemas que están en juego de complejidad son intransparentes, por lo menos parcialmente: “no se puede ver todo lo que se quiere ver” (p. 49). Por último, estos mismos sistemas evolucionan por sí mismos, manifestando una dinámica interna que los hace desplazarse. En síntesis, la complejidad contiene en sí misma relaciones de actores y/o sistemas que se tocan en niveles intransparentes y dinámicos.

Una manera de expresar teóricamente esta complejidad que citamos es la existencia real del conflicto en la humanidad. Nuestra realidad antropológica y sociológica de ser seres en camino de interrelaciones humanas nos devela el trasfondo del ser humano: somos seres en dinámica existencial motivados por la diferencia que nos manifiesta el otro o los otros y abocados al conflicto como medio a través del cual fluye nuestra misma existencia.

En otras palabras, nos hacemos humanos en el encuentro con las demás personas y en la capacidad de ser actores conflictivos, somos “seres culturales y sociales”, fundados en la búsqueda del reconocimiento de lo plural y lo diverso, en un contexto histórico. Esta complejidad que se suscita desde la diversidad nos permite asumir el institucionalismo histórico como un enfoque desde donde busquemos sentar las bases de la reconstrucción social a través de la reconciliación.

1.2. Acercamiento desde el institucionalismo

Usualmente, el conflicto y la violencia son asumidos por teóricos que centran su atención en los elementos característicos de los dos fenómenos dentro de marcos de referencia generales y, en algunos casos, teniendo en cuenta los aspectos contextuales de cada manifestación. De allí mismo se han derivado estudios analíticos que han dado como fruto las propuestas de salidas alternativas a la conflictividad y a los medios violentos como instrumentos para resolver diferencias. Entre estos elementos, la reconciliación social aparece como un horizonte de sentido, más allá de los insumos ofrecidos por los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Pero, ¿la reconciliación social solo contiene instrumentalización de lo alternativo al conflicto

y violencia? Indudablemente, no. Por ello, recurrimos a los mecanismos institucionales que nos brindan la posibilidad de incentivar el respeto de las reglas de juego que nos permitan la cooperación social y, de esta forma, la eficacia se constituya en “bisagra” de procesos reales de gestión de lo público.

Desde esta perspectiva, el institucionalismo se nos presenta como espacio de reflexión y fundamentación clave en nuestra investigación, por cuanto las reglas de juego, las prácticas sociales, las rutinas, entre otras dinámicas, influyen en la consolidación de grupos humanos, y generan pautas de comportamiento e influyen en el futuro. “Para los institucionalistas, actuar dentro de una estructura institucional implica asumir compromisos con valores diferentes de los personales, y tiene además un marcado elemento normativo” (Peters, 2003, p. 34). Un proceso de reconciliación conlleva creencias e ideas que se configuran en un cruce de reglas y prácticas que se van consolidando históricamente.

1.2.1. La acción colectiva: base de lo institucional

Los hombres sólo cobran verdaderamente conciencia de sí mismos (conciencia individual de sí mismos como individuos) en el momento en que toman conciencia de su situación frente a otros, es decir, de su situación social; en suma, que sólo cobran conciencia de sí mismos al cobrar conciencia de los otros, que no hay conciencia individual que no sea social (Augé, 1987, p. 69).

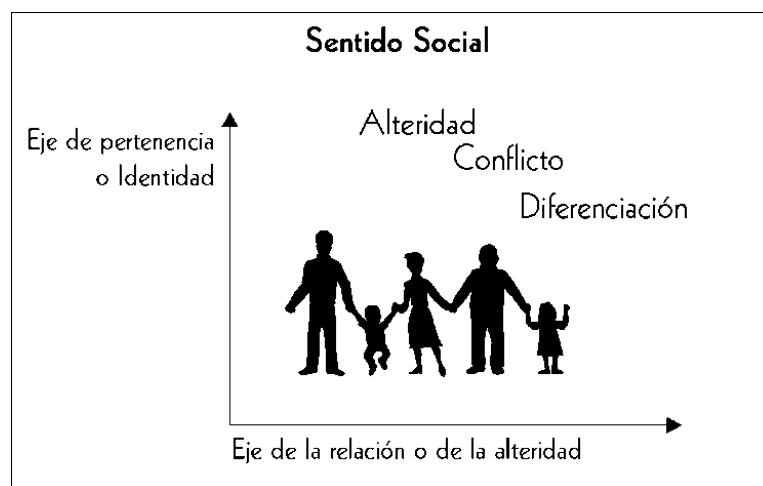
La historia de la humanidad ha estado enmarcada por diversidad de situaciones conflictivas en las que han entrado en juego intereses, necesidades y valores de distintos grupos sociales. La conflictividad constitutiva en cada ser humano se amplía cuando ingresamos al ámbito de lo social en el que nos encontramos con los otros, esos otros diferentes, que nos manifiestan lo diverso y que, en ocasiones, suscita la reacción de defensa. Pero, más allá de esta esencia constitutiva del ser humano, también hallamos la tendencia a la reconstrucción de lo que ha sido roto, dividido, fragmentado. En otras palabras, es la búsqueda de los seres humanos por la reconciliación social. Es la construcción del sentido social, donde conflicto y reconciliación nos manifiestan “dos caras de la misma moneda”. Por ello, consideramos que vale la pena destacar los tipos de relaciones que Marc Augé le otorga al sentido social:

El sentido social se define, de hecho, mediante dos tipos de relaciones. Todo individuo se relaciona con diversas colectividades y con relaciones simbólicas e instituidas con un cierto número de otros individuos, tanto si pertenecen o no a las mismas colectividades que él. Dentro de una misma raza, de un grupo de edad, de una misma nación [...] hay [...] alteridad, diferenciación, conflicto], relación sentido... El sentido social se ordena, pues, alrededor de dos ejes: en el primero (que

se podrían llamar eje de la pertenencia o de la identidad) se miden los sucesivos tipos de pertenencia que definen las distintas identidades de clase de un individuo. El sentido social va de lo más individual a lo más colectivo y de lo menos a lo más englobante. El segundo (que se podría llamar eje de la relación o de la alteridad) pone en juego las categorías más abstractas y más relativas del sí mismo y del otro, que pueden ser individuales o colectivas (Augé, 1996, p. 35–36).

En este último eje, de la relación o de la alteridad, se hace evidente la diferenciación y el conflicto como medios dinamizadores de un movimiento humano: *El horizonte de comprensión de sentido de la ética pública como parámetro desde el cual es posible la construcción de lo común, lo público mismo, a través de una política de reconciliación social.* Me atrevo a proponer gráficamente esta definición espacial y temporal desde los aportes de Marc Augé de la siguiente manera:

Ilustración 1. Sentido social



Fuente: Elaboración propia

La reconciliación social se ha instaurado a nivel mundial como un mecanismo “óptimo” para buscar salidas alternativas a las situaciones de conflicto y violencia que viven los conglomerados socio-políticos. Pero no podemos desconocer que la misma complejidad de los grupos devela obstáculos de contexto y observación para tratar de definir universalmente qué se entiende por este tipo de procesos post-conflictivos.

La teoría sociológica analítica nos brinda elementos de profundización en nuestra investigación. Esta corriente de la sociología se aproxima al fenómeno de lo social para desarrollar explicaciones del mismo basadas en la acción acerca de diversos hechos sociales. Para realizar esta labor, el enfoque analítico tiene su núcleo de trabajo en “la idea de que las explicaciones aceptables deben detallar los mecanismos a través de los cuales los fenómenos a explicar fueron producidos. Esto significa que deben explicitarse claramente los mecanismos relevantes y, entonces, intentar derivar los fenómenos sociales que los grupos de actores, actuando sobre

la base de esos mecanismos, es probable que produzcan”, afirma Peter Hedström¹¹ (Noguera, 2010, p. 211).¹²

Pero, ¿en una dinámica de reconciliación cómo se podría asumir el aporte de la teoría sociológica analítica? Hedström nos puede ayudar a contemplar la respuesta. Para este sociólogo alemán, “un fenómeno observado se explica haciendo referencia a los mecanismos sociales a través de los cuales ese tipo de fenómenos son producidos regularmente” (2010, p. 212). De tal manera, la fragmentación social que vive un grupo humano a través del conflicto y la violencia tiene una serie de mecanismos sociales que nos permiten contemplar el surgimiento y resurgimiento de los fenómenos de conflictividad en toda colectividad. Con Marc Augé hicimos una aproximación a esta manera de abordar lo colectivo o social.

A su vez, la fragmentación por conflicto y violencia conlleva la misma realidad de la reconstrucción social. Esta posibilidad de reconstruir lo roto también es un fenómeno social que se produce regularmente en contextos de convivencia humana, pero que tiene unos mecanismos que pueden favorecer eficaz y eficientemente la dinámica, tal es el caso de la reconciliación social. Estos procesos no tendrían explicación con la serie de mecanismos de donde se podrían sustentar, entre estos el de la política pública con miras a la reconstrucción. Es decir, la sociología analítica nos permite visualizar el fenómeno de lo social como un “efecto cascada” donde la interrelación personal conlleva integración de mecanismos.

Hedström concretiza más su propuesta señalando que los fenómenos sociales “hacen referencia a una constelación básica de *entidades y de actividades* organizadas espacio-temporalmente de tal forma que producen con regularidad el tipo de fenómeno que se está tratando de explicar (Resaltado del texto)” (p. 212). Las *entidades* básicas de un mecanismo tienden a ser siempre los actores, y las *actividades* básicas tienden a ser las acciones de esos actores, afirma Hedström (p. 213). De esta forma la sociedad se moviliza con las acciones de los actores sociales. Para ver esto en concreto, propone el autor alemán la teoría de la DBO, es decir, según los deseos (D),¹³ las creencias (B) y las oportunidades (O) la acción y la interacción humana configuran el fenómeno de lo social. En últimas, lo que propone es que centremos nuestra atención en el significado que cada actor social pone en su actuar.

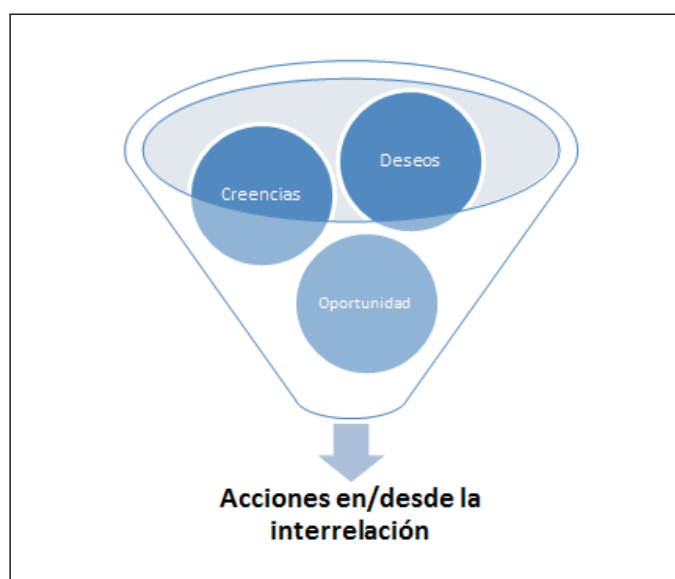
11. El artículo original es Explainig Social Change: An Analytical Aproch. Papers, Revista de Sociología, No, 80, 2006, p. 73–95. Traducido por Jordi Tena Sánchez. Revisión de José A. Noguera.

12. Citamos la teoría de Peter Hedström desde la obra en la que José Antonio Noguera es editor (2010).

13. Hedström define el deseo como una volición o voluntad de que algo suceda (o no suceda). Una creencia la define como una proposición sobre el mundo que se considera cierta. Y las oportunidades son el “menú” de alternativas de acción que existe independientemente de las creencias sobre las mismas (2006, p. 213).

Añade Hedström que las creencias y los deseos son “estados mentales de los que puede decirse que producen una acción”, conteniendo una fuerza motivacional que nos permite comprender y explicar la acción (p. 214). Pero, los deseos, las creencias y las oportunidades se forman en la interacción con otros, es la alteridad que citamos con Marc Augé. En la interacción se puede percibir influencia o no en el actuar de una persona por encuentro con otros. De esta manera, un fenómeno social —desde esta perspectiva— es el resultado de acciones sociales, derivadas de acciones individuales, en constante interacción de deseos, creencias y oportunidades. Podríamos graficar de la siguiente manera estos elementos:

Ilustración 2. Acciones sociales



Fuente: Elaboración propia

Como una especie de recipiente óptimo para mezclar cosas (interrelación) los deseos, las creencias y las oportunidades contienen un efecto de acciones en y desde esa misma interrelación que las origina y que les permite darle sentido a la acción de cada sujeto activo en lo social. El conflicto surge en esa misma dinámica, por cuanto “el enfrentamiento/lucha” en las diferentes perspectivas de los deseos, creencias y oportunidades puede conllevar el choque conflictivo o, incluso, llegar a la exacerbación que es la violencia. A su vez, los procesos de reconciliación social requieren de un análisis de cada elemento de estos y, por supuesto, de la identificación de coincidencias en la interrelación para ubicar la salida alternativa.

Nuestra propuesta busca establecer un “puente” entre la ética pública y la reconciliación social en la línea de esta dinámica sociológica analítica, por cuando *las creencias* son el nivel en el que ubicaremos nuestra propuesta de eticidad pública, desde donde es factible la reconstrucción social efectiva en procesos de post-conflicto a través de una política pública claramente defini-

da. Desde esta perspectiva, la misma política de reconciliación deberá contener los elementos de los deseos, las creencias y las oportunidades que toda sociedad que ha vivido el conflicto y la violencia considera pertinente para acoger la dinámica de reconstruirse.

En este orden de ideas, la acción social que contiene el trabajo de reconciliación pública, tal como lo apropiamos, demanda un ejercicio de identificación de la *esencia fundante* de lo que es un fenómeno social. En este punto nos puede ayudar la perspectiva de John R. Searle (2006) respecto a lo que él llama “los principios básicos de la ontología social” (Noguera, 2010). Es decir, no nos podemos quedar simplemente en la descripción de lo común desde comportamientos generalizados de los seres humanos en un contexto del “nosotros”, sino que es necesario acceder a cómo se configura ese “sentido social” que demanda una política pública de reconciliación social.

Searle nos facilita el acceso a este punto de nuestra reflexión permitiéndonos conocer la distinción entre dos tipos de características de la realidad: *independientes del observador* y *relativas al observador* (Noguera, 2010, p. 64). Las primeras tienen que ver con esas realidades en la que los seres humanos no tenemos injerencia, por ejemplo, los fenómenos de la naturaleza o los físicos. En nuestro caso, la problemática del conflicto y la violencia, junto a la apertura a la reconstrucción social no caben en este tipo de realidades por cuanto los fundamentos antropológicos y sociológicos que estamos describiendo nos conducen a contemplar esta clase de hechos como realidades relativas a nosotros mismos, esto es, son *relativas a nuestra condición de observadores*. Esta problemática es relativa a nuestra capacidad para convivir en y desde la diferencia, junto a la apertura que podamos tener para abrir espacios individuales y comunes para reconstruir entre todos los componentes públicos que hayamos destruido.

A su vez, la propuesta de Searle continúa aportando a nuestra reflexión desde lo que este autor llama *estructura lógica de la sociedad* “porque las actitudes humanas son constitutivas de la realidad social en cuestión, y estas actitudes tienen contenidos proposicionales con relaciones lógicas” (Noguera, 2010, p. 67). La propuesta teórica de Searle radica en que la variedad y multiplicidad son manifestaciones de lo social y no se oponen a la existencia de factores mínimos de coincidencia del fenómeno social que, en sus términos, *son imposición de funciones de estatus mediante intencionalidad colectiva*.

John Searle desarrolla su tesis a través de tres conceptos que consideramos importante sintetizar en el desarrollo de esta complejidad social que hemos traído a colación:

- La intencionalidad colectiva
- La asignación de función
- Las reglas y procedimientos constitutivos (Searle, p. 67)

La intencionalidad colectiva a la que hace mención Searle está centrada en “la capacidad de participar en comportamientos cooperativos y de compartir actitudes con los miembros de su misma especie”. Es una característica a través de la cual los humanos *dirigimos nuestros estados mentales a* o se refieren *a* objetos y cosas en la realidad. Por ejemplo, el conflicto sudafricano se caracterizó por la preeminencia que la raza blanca quiso mantener sobre la raza negra referido a una lectura mezclada con elementos de teología protestante, factores económicos y políticos. Por ende, las acciones agresivas y represivas de los blancos sobre los negros hacían referencia al mantenimiento de un status de “superioridad” de una raza sobre otra. Pero la misma realidad suscitó un estado mental de reacción y reclamo de los negros hacia los blancos mediante mecanismos de resistencia y procesos de diálogo entre los líderes negros, entre ellos Nelson Mandela y los líderes blancos.

De la misma manera, la capacidad de cooperación en este tipo de alternativas condujo a la fijación de “signos de cohesión social” como el planteamiento del *nation building* como una figura espacio-temporal que aglutinó el sueño de una raza oprimida hacia la vida común con los derechos y deberes esenciales que le eran constitutivos y que habían sido negados durante muchos años, incluso abriendo el horizonte para que los blancos fueran considerados también dentro de esa perspectiva de nación.

Esta intención común a la que hace mención Searle debe ser “compartida por distintas personas y solo en la medida en que pueden compartir intenciones para hacer cosas puede haber creencias y deseos compartidos” (p. 68). Volvemos al eje que nos planteamos desde Hedström, donde los deseos, las creencias y las oportunidades configuran la base y razón de ser de una política de reconciliación social desde la intención colectiva que debe suscitarse a través de mecanismos políticos. Esas creencias, puestas de relieve tanto en Hedström como en Searle, son para nosotros los principios de ética pública que buscamos establecer en conexión con la reconciliación misma.

La acción colectiva se constituye, por ende, en la manera como los seres humanos abrimos espacios de construcción de lo público, lo común, con miras a la creación y consolidación de tiempos y dinámicas de consenso, donde lo colectivo permita la individualidad que, en últimas, es la que posibilita lo público. Es en este punto donde nos proponemos centrar la atención en esta propuesta de estudio. La reconciliación social se ubica como esa acción colectiva que,

basada en la búsqueda de consenso —a través del diálogo/la deliberación—, será capaz de permear las estructuras sociales que han sido vulneradas por largos períodos de conflicto y violencia. Para ello, lo justo y lo efectivo están enmarcados por una política pública que sienta las bases en lo ético de ese actuar común. Las creencias, desde Hedström, son las claves sobre las que se debe sentar este tipo de procesos, como lo buscamos probar a lo largo de estas líneas; sin negar la importancia de las oportunidades a aprovechar y los intereses o los deseos desde los que incentivar o desincentivar las conductas adecuadas.

1.2.2. Aproximaciones a un bien colectivo

En el año de 1965 el economista y sociólogo norteamericano Mancur Olson ya había entrado al ámbito de la acción colectiva, en perspectiva económica, para poner “sobre el tapete” la confrontación que se presenta entre la organización como espacio que propende por defender los intereses de los miembros que la configuran y los intereses individuales de cada uno de esos miembros, intereses que son perseguidos a través de lo que este pensador llamó “acción individual no organizada”. Este tipo de actuar, centrado en los intereses de cada individuo en perspectiva de intereses no comunes, termina configurándose como obstáculo para los intereses comunes.

Para Olson (1978) el grupo es todo conjunto de personas que persiguen un interés común (p. 18). Por ende, retomando a Hedström, la confluencia de deseos y creencias constituye el marco de referencia en el que concurren esos intereses comunes tras los cuales se implementa una acción común. En esta fusión, las oportunidades, aun cuando no dependen del sujeto que se abre a la dinámica colectiva, entran en una dinámica relacional, por cuanto favorecen la efectividad de la acción en la medida en que sea aprovechada. Olson no desconoce que, aunque cada persona pertenezca a un grupo determinado, sus intereses individuales no desaparecen, por el contrario, pueden surtir más efecto, dependiendo la perspectiva de esa persona específica. La racionalidad y la ruptura del egocentrismo en cada miembro son condiciones *sine qua non* que Olson propone para que el interés individual no impida la obtención del colectivo.

Precisamente la racionalidad es lo que hace que cada individuo vaya a la suya y no se consiga el interés común. Olson establece que para superar estos dilemas de acción colectiva lo ideal es que existan grupos pequeños; en todo caso es posible la acción colectiva, siempre que haya en grupos grandes incentivos selectivos y/o actores con intereses muy elevados en la acción, de forma tal que sean capaces de sacrificios extra por el bien común. En materia de reconciliación

social es importante que miremos qué incentivos selectivos hay en los diversos grupos humanos involucrados y cómo los liderazgos en este tipo de procesos demandan en quienes asumen este rol sacrificios de sus intereses individuales en beneficio del colectivo.

La propuesta de Olson nos ayuda a fundamentar los mecanismos centrales de lo que pretendemos construir en nuestra dimensión de lo justo y efectivo de todo proceso de reconciliación social. Es la racionalidad supraindividual en cada persona, en ruptura de la perspectiva egoísta, y en apropiación del interés común (evitando la maximización de sus intereses particulares) la que una política de reconciliación debe suscitar desde su mismo diseño.

La acción colectiva, en vez de seguir siendo un acertijo, como lo es para los economistas, debe ser convertida en el enfoque fundamental para entender la vida política. Además, la relación entre las colectividades políticas y su entorno socioeconómico debe ser una relación recíproca, en la que la política tenga la opción de moldear la sociedad, y la sociedad de moldear la política (Peters, 2003, p. 35).

Por lo anterior, Olson pone el Estado Nacional (categoría política para su época) como la organización social que no se motiva por intereses económicos, sino por el bienestar general. De esta manera, el Estado promueve los llamados “bienes públicos”, entendidos como “los beneficios comunes o colectivos proporcionados por los gobiernos. Cualquier persona del grupo lo consume y no puede ser negado a ningún miembro del grupo” (1978, p. 24). Siguiendo nuestro interés, la teoría de Olson nos ofrece las herramientas conceptuales para vislumbrar cómo la política pública de reconciliación social debe fundar sus bases en la ética pública, por cuanto la reconstrucción del grupo humano conlleva la construcción de “bienes públicos” que van más allá de mecanismos alternativos de resolución de conflictos o de “acuerdos beneficiosos” para los grupos al margen de la ley o provocadores de la violencia, pues la seguridad pública, el bienestar general de la población, las garantías de necesidades básicas insatisfechas, entre otros, no son de interés de unos pocos, sino de los miembros en general.

El logro de cualquier meta común o la satisfacción de cualquier interés común significa que se ha proporcionado un bien público o colectivo a ese grupo. El hecho mismo de que una meta o finalidad sea común en un grupo significa que ninguno de sus miembros queda excluido del beneficio o la satisfacción derivados de su logro (Olson, 1978, p. 25).

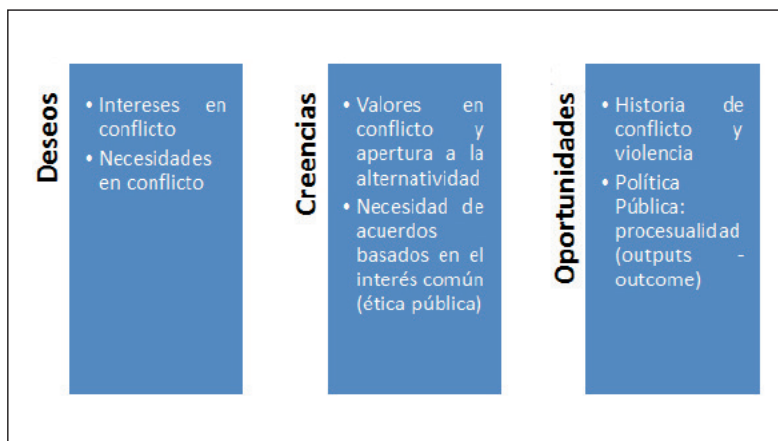
Aunque los gobiernos también ofrezcan bienes no colectivos, en términos de Olson, la esencia de una búsqueda alternativa a situaciones de conflicto y violencia radica en la propensión a configurar un “bien colectivo”, que puede denominarse “reconstrucción para la convivencia”,

lo cual, en últimas, se configura aunando esfuerzos desde las creencias que el mismo grupo humano asume al respecto. En general, la reconciliación social es un bien público puro, pero tiene una peculiaridad frente a otros bienes de este tipo, como la seguridad nacional o la protección del medio ambiente, y es que el Estado no puede proveerlo por sí solo, necesita la colaboración de otros actores sociales, su implicación; dicho esto sí parece que tiene tres características esenciales de un bien público puro: beneficia a todos, una vez producido nadie puede ser excluido de su disfrute y cuanto más se consume más se genera (como la propia ética).

Más allá de la fuente primordial que suscita la formación de grupos, bien sean grandes o pequeños, Olson le da importancia al valor que cada miembro del grupo le confiere a su pertenencia al conglomerado que, en términos económicos, está dado por el ritmo o nivel en que se obtiene el bien colectivo (1978, p. 32). Pero, en materia de reconciliación social el valor no viene dado en términos de maximización de beneficios individuales, sino en dinámica de bienestar general que debe buscarse por lo justo y la efectividad del mismo proceso.

El mismo Olson llega a afirmar que entre más grande es el grupo (en número de miembros), más lejos estará de proporcionar una cantidad óptima de bien colectivo (1978, p. 45), de ahí las dificultades de la reconstrucción de la sociedad tras un conflicto, pues afecta a toda la comunidad nacional. Un rasgo que, para el autor, se otorga a las organizaciones en la labor de afinar la búsqueda de intereses comunes está en la dimensión exclusiva o inclusiva que le es propia a cada grupo. La primera está marcada por el carácter del mercado y la segunda, por el aspecto no comercial de los grupos humanos (p. 48). Es en esta última dimensión donde nos ubicamos como grupo humano que busca un bien colectivo inclusivo, la reconstrucción social.

En síntesis, la dimensión social de los entramados humanos nos permiten palpar la complejidad que existe en la misma diversidad y pluralidad; a su vez, nos brindan la posibilidad de estructurar el marco conceptual de la reconciliación social en perspectiva de construcción colectiva de “bienes públicos”. Para nuestro caso se trata de la reconstrucción del tejido social mismo. La clave está en la configuración de una política pública basada en las creencias —siguiendo a Hedström— de quienes han vivido largos períodos de conflicto y violencia, buscando ir más allá de deseos egoístas y cortoplacistas, aprovechando las oportunidades del entorno que se expresan en mecanismos o instrumentos de cese de hostilidades y en la creación de una acción colectiva inclusiva, donde la maximización de intereses individuales ceda paso a la configuración de un consenso deliberativo. Podríamos graficarlo de la siguiente manera:

Ilustración 3. Dimensión social

Fuente: Elaboración propia

El establecimiento de un mecanismo alternativo al conflicto y la violencia a través de una política pública de reconciliación social centra su atención en la definición de un marco de *creencias* que propendan por lo justo y la eficacia dentro de la reconstrucción de lo público. Es la necesidad de construir acuerdos basados en el interés común (bien común) que permita sentar las bases del proceso mismo en un conjunto de valores y principios que faciliten la reconciliación social centrando la atención en el elemento deliberativo (facilitando el consenso) como conjunto de ideas que sostienen una política de esta índole.

1.2.3. Las creencias como base fundante de la reconciliación social

Esta dimensión teórica de la conflictividad y violencia que venimos abordando desde lo antropológico y lo social nos ubica ante una propuesta alternativa para constituir la convivencia y la coexistencia, la reconciliación social. Pero, como lo hemos señalado, deseamos ir más allá de los mecanismos o instrumentos de reconciliación social y lanzarnos a la consolidación de la reconstrucción del entramado común, medio desde el cual es factible un escenario público participativo, es decir, democrático.

Peter Hedström nos señaló los ejes sobre los cuales se configura la acción común. En términos de Olson, la acción colectiva se configura desde la definición de un bienestar general al que deben propender los diferentes grupos humanos afectados, superando los problemas de racionalidad individual y cortoplacista. En este tipo de dinámicas el valor en sí mismo se halla en la reconstrucción de tejido social que se puede diseñar y lograr a través de una política pública colectivamente asumida acorde a las características de sociedades que han vivido largos procesos de conflicto y violencia.

De esta manera, las creencias —siguiendo a Hedström— se constituyen en el elemento “bisagra” de este tipo de iniciativas. Sin embargo, estas *creencias* van a ser el conjunto de principios y valores sobre los cuales se debe diseñar la política pública en materia de reconciliación social. Recordamos que la creencia es una proposición sobre el mundo que consideramos cierta, en términos de este autor. Por ende, la reconstrucción del tejido social implica la posibilidad de proponernos una dimensión en común sobre el tipo de sociedad que debemos reconsiderar después del conflicto y la violencia, pero este elemento implica una apertura desde la racionalidad y la libertad de lo público, del bienestar general.

Por su parte, Ortega y Gasset (1996) hace una distinción entre “creencias e ideas” para investigar una estructura social. Esto determina el ritmo de variación histórica, con más fluidez donde predominan las ideas. Este análisis de la estructura social, en cuanto al ámbito de las creencias e ideas, es trabajado por Julián Marías (1993). Al abordar la propuesta de Ortega y Gasset, Marías afirma que las creencias son las grandes interpretaciones funcionales de lo real, de las que echar mano a crédito, para vivir. Lo decisivo es ser creídas, no pensadas, para su funcionamiento.

Las creencias e ideas están en la realidad, pero las primeras nos son “ajenas” frente a las segundas. Las creencias son interpretaciones de lo real que nos permiten aprehender las ideas que construimos respecto a lo que vivimos, pero son las creencias las que podemos descubrir en los efectos y en el movimiento variable de la historia, pero también en lo que ha desaparecido. “Y es fundamental conocerlas para entender una sociedad: los hombres piensan y hacen esto y no lo otro, porque ‘están’ en unas creencias concretas. Las ideas se originan para suplir, complementar, apuntalar las creencias”, agrega Marías (1993, p. 177) en su reflexión.

Creencias e ideas son órganos de certidumbre; las primeras de certeza “en que se está” y las siguientes de certeza “a la que se llega”. “La certidumbre total en que se asienta nuestra vida es, pues, una resultante de la convivencia e interacción del sistema de creencias, con el repertorio de ideas”.

Estas creencias sobre las cuales nos deviene la imagen intelectual dominante del mundo pueden provenir de la religión, relatos, novelas, el teatro, el cine y los medios de comunicación, la conversación familiar, las tertulias, la poesía, refranes, etc. Es una ideología básica común a la que luego se superponen elementos particulares de cada grupo social, señala Marías. En cuanto a materia de reconciliación social, el proceso vivido en Sudáfrica consolidó la creencia de alternativa al conflicto y la violencia a través del relato promovido por Mandela desde el mensaje de *Nation Building*, en medio aún de la agresión de una raza sobre otra, pero en la

superposición de elementos particulares como el deporte, el diálogo con el gobierno —aún en medio de la oposición de algunas facciones de los negros— y la capacidad de consensuar las diferencias. En los casos de El Salvador y Nicaragua, la apropiación de las creencias fue más difícil por las contradicciones politizadas del proceso, sobre todo, al estar involucrado el estamento militar como factor detonante del conflicto y la violencia a través de gobiernos dictatoriales. Sin embargo, el acercamiento de los gobiernos colaboradores desde la iniciativa del Grupo de Contadora posibilitó la creencia de la unión centroamericana en torno de la búsqueda de la democracia y la estabilidad de la región. Por ende, ¿cuáles son las creencias que sostienen un proceso de reconciliación social?

Añadiendo más elementos a la reflexión sobre las creencias e ideas, Marías (1993) se detiene a reflexionar sobre “lo que se sabe” y “quién lo sabe” en una sociedad. También intenta una explicación del proceso de difusión de las ideas como ingrediente clave de toda estructura social, que dependería de cuatro aspectos:

- Su origen social, el punto de la sociedad en que se engendran: Si vienen del exterior o no, por dónde se introducen, qué fracción —siempre minoritaria— del cuerpo social es la minoría creadora o introductora de esas ideas.
- Las vías de comunicación o penetración: Dependen del tamaño de la sociedad, su grado de homogeneidad, existencia o no de una élite rectora intelectual, la capacidad de irradiación y prestigio de esta, el número e importancia de las instituciones docentes, el papel de los medios de comunicación, etc.
- La velocidad y amplitud en la difusión de las ideas: Para ello tienen una importancia decisiva la extensión de la cultura media y la existencia de minorías intelectuales prestigiosas.
- Y las transformaciones que las ideas experimentan al difundirse en el seno de una sociedad. Este aspecto se considera el más delicado e interesante.

La lentitud relativa de la vida colectiva impone un *decalage* entre lo pensado por el gran intelectual y el cuerpo social en que vive. Es desde esta distinción donde nuestra propuesta sienta las bases en lo justo y efectivo de un proceso de reconciliación social, fundado en la institucionalidad que nos posibilita los pensamientos y acciones razonables y racionales. Para Amartya Sen (2002), la racionalidad y la libertad van de la mano en la consolidación de nuestras elecciones acorde al bienestar general, tal como lo señalamos cuando hicimos referencia a los usos de la racionalidad. El actuar humano está marcado por elecciones que se basan en razones que, a su vez, nos ponen ante la actitud de responsabilidad respecto al acto, donde la

libertad es el mecanismo que permite el proceder. Pero no siempre se actúa desde el bien necesario o racional, sino que en innumerables ocasiones nuestras decisiones contienen un cúmulo de deseos (intereses y necesidades) que nos confrontan con una actitud de desconocer ese bien, donde la libertad conlleva la acción pero, igualmente, la responsabilidad debe ser asumida de acuerdo al daño ejercido con ese obrar.

Desde esta perspectiva, Sen hace referencia a la razonabilidad y racionalidad de nuestras elecciones, obviamente sentando su reflexión desde las dimensiones de la maximización y minimización en la economía. Nuestra apuesta por la reconstrucción social después de períodos conflictivos y violentos nos lanza a buscar los fundamentos de la política pública de reconciliación social en las categorías de “decisiones racionales y la elección real”, desde Sen (2009). Tratando de buscar respuesta, Sen recurre a dos proposiciones al respecto: en la primera, no siempre los seres humanos tomamos decisiones racionales por la incapacidad que tenemos de concentrarnos o mantenernos firmes o alertas en la búsqueda y el empleo de la información necesaria para el seguimiento completo de la racionalidad, siguiendo el concepto de “racionalidad limitada” de H. Simon (p. 207). En la segunda perspectiva, hace referencia a la “debilidad de la voluntad”, es decir, las personas podemos saber bien lo que debemos hacer racionalmente, sin embargo, no lo hacemos. Pero las diversas posiciones que esta distinción suscita llevan a Sen a concluir que no estamos alienados del todo con las exigencias de la racionalidad, quedando así claro que la gente es capaz de razonar y criticar sus propias decisiones y las de otros (p. 209).

La dimensión grupal o social de nuestra condición, en perspectiva de Sen, nos pone ante la “preferencia social” como un mecanismo que activa el actuar racional de cada persona y, en general, de los grupos humanos. En el libro *Racionalidad y libertad* (2002) Amartya Sen especifica los dos usos diferentes que la llamada “preferencia social” tiene: la operación de mecanismos de decisión y la construcción de juicios de bienestar social (p. 268). El primer uso contiene elecciones hechas por la sociedad desde mecanismos dominantes que están implícitamente basados en lo común, para quien actúa de modo racional. Por ejemplo, las propuestas de acercamiento de diálogos entre el gobierno de Colombia y los diferentes grupos al margen de la ley o guerrilleros a lo largo de estos más de sesenta años de historia de conflicto y violencia son “elecciones que ha hecho la sociedad colombiana”, pero desde los mecanismos propuestos por el gobierno de turno y de acuerdo a unos parámetros establecidos por la partes interesadas en los acercamientos.

El segundo uso de la “preferencia social” (construcción de juicios de bienestar social) refleja una visión de “bien social” (bienestar general, en los términos que hemos asumido desde Olson), que consiste en lo que debería constituirnos en una mejor o peor sociedad. En este

punto, agrega Sen, se hacen palpables asuntos donde se combinan la diversidad de intereses y preferencias de la pluralidad de personas. Por ejemplo, la apertura de lo alternativo al conflicto y la violencia en Sudáfrica conllevó un proceso histórico de identificación de Nelson Mandela con la problemática de su raza, la confluencia de circunstancias que lo condujeron a madurar, diseñar e impulsar la preferencia del *Nation Building* como un horizonte de sentido donde se combinaron intereses y preferencias de los blancos y los negros, por ende, de los mismos grupos que se opusieron de uno y otro lado a que De Klerk y Mandela aunaran esfuerzos por una reconstrucción social.

La racionalidad es primariamente una cuestión de basar, explícita o implícitamente, nuestras elecciones en el razonamiento que podemos sustentar de manera reflexiva, y exige que nuestras opciones, al igual que nuestras acciones y finalidades, valores y prioridades, puedan sobrevivir a nuestro serio escrutinio crítico (2002, p. 211).

Esta racionalidad en el actuar social que hemos sentado como base sobre la cual las *creencias* se instauran en el eje en el que abrimos camino hacia una política pública de reconciliación social nos evocan la elección social como una oportunidad en la cual los grupos humanos pretenden diseñar e implementar los caminos de reconstrucción de su mismo contexto como un mecanismo de bienestar común. Lo justo y la eficacia que buscamos desde el inicio de nuestra investigación y que nos lanza a la búsqueda de un fundamento para lo alternativo en este tipo de contexto nos enfrenta a un modo de hacer elecciones sociales, los acuerdos o pactos a través de los cuales buscamos esos objetivos comunes.

1.2.4. Los acuerdos como explicitación de las creencias

Lo justo y eficaz de un proceso de reconciliación social buscamos ubicarlo en las *creencias* que fundamenten una política pública en esta materia. Pero, en el aparte anterior logramos captar que estas creencias tienen que ver con la racionalidad de las elecciones sociales que logramos aunar en pos de un bienestar general. Es decir, después de largos períodos de conflicto y violencia, los grupos humanos intentan optar por una preferencia social que los lleve a la reconstrucción social que, en últimas, se presenta como la mejor opción para restablecer lo público. En términos de Juan Pablo Lederach (2005) es la *imaginación moral* que está en la base de la salida alternativa al conflicto y la violencia, como “arte y alma de construir la paz”. Por este término entiende Lederach “la capacidad de imaginar algo anclado en los retos del mundo real, pero a la vez capaz de dar a luz aquello que aún no existe. En referencia a la construcción de la paz, esta es la capacidad de imaginar y generar respuestas e iniciativas constructivas que,

estando enraizadas en los retos cotidianos de la violencia, trasciendan y en última instancia rompan los amarres de esos patrones y ciclos destructivos” (2005, p. 57).

En este sentido, John Rawls nos ofrece insumos para contemplar que los acuerdos que se logren en esta clase de procesos no son otra opción que la concreción real de las creencias que el grupo humano puede asumir respecto a lo que ellos y ellas eligen como racional para sus vidas, la reconstrucción del tejido social como bienestar general. En *Liberalismo político* (2004) Rawls llega a afirmar que la estructura básica de la sociedad es la efectiva regulación de una concepción política de la justicia que se basa en el consenso entrecruzado entre las doctrinas comprensivas razonables de sus ciudadanos, es decir, hombres y mujeres abiertos y dispuestos para la cooperación social entre iguales (p. 78). Pero, ¿en qué consiste lo razonable y lo racional de este tipo de sociedad? ¿Cómo percibirlo en sociedades fragmentadas por el conflicto y la violencia, donde la igualdad rawlsiana no es factible?

Indudablemente, al igual que Rawls presupone que este tipo de sociedad no está presente en grupos humanos donde la violencia ha destruido el tejido social, empezando por nuestros casos sudafricano, nicaragüense, salvadoreño y colombiano, nosotros reconocemos la dificultad de respuestas factibles en estos ámbitos. Pero no podemos desconocer que la opción por lo razonable y racional sí nos brinda elementos de referencia para buscar la justicia en cuanto a sociedades fragmentadas y con posibilidad de abrirse a mecanismos alternativos a la misma violencia.

Siguiendo a Rawls, podemos afirmar que la definición de principios mínimos (vacunándonos contra la maximización de intereses individuales) o creencias mínimas son racionales porque son el camino que mejor acerca a los grupos humanos involucrados a la construcción de un bienestar común o general; por tanto, esa actitud de búsqueda de lo común, cooperar, es lo que los pone en actitud razonable.

Las personas son razonables en un aspecto básico cuando, estando, digamos, entre iguales, se muestran dispuestas a proponer principios y criterios en calidad de términos equitativos de cooperación, y a aceptarlos de buena gana siempre que se les asegure que los demás harán lo mismo. Las personas entienden que aceptar esas normas es razonable para todo el mundo y, por consecuencia, que son justificables ante todos, y están dispuestas a discutir los términos equitativos que otras propongan (Rawls, 2004, p. 80).

Aparece en este punto la idea de una sociedad de cooperación equitativa, donde la reciprocidad es un elemento clave al momento de hacer real lo equitativo. Es una búsqueda del beneficio individual a partir del general. En este punto, el respeto a los principios y criterios que definen la cooperación es fundamental en el espacio público, lo que implica compromiso social, elegir

de acuerdo a la preferencia grupal en general. Ser razonables es lo que nos brinda la posibilidad de estar abiertos a lo público y, en caso de conflicto y violencia, de buscar mecanismos para reconstruirlo.

En este punto, la categoría de “facultad moral” es la que abre la posibilidad de que el ser humano racional se disponga a lo razonable de la elección social por el bien común o por lo público (Rawls, 2004, p. 82). La “facultad moral” es la que nos permite ser cooperativos y cooperantes en la construcción de lo público. “La facultad moral que subyace a la capacidad de proponer, o de aceptar, y luego ser movido a la acción por los términos equitativos mismos de la cooperación es igualmente una virtud social esencial” (p. 85).

Esta dimensión del *ethos* público que hemos señalado como fundamento de nuestra propuesta se logra explicitar a través de acuerdos fundados en la cooperación y en la llamada equidad de cada miembro social respecto a lo común. Sin embargo, los acuerdos conllevan un sentido que no siempre facilita lo común. Avishai Margalit (2010) nos ofrece el concepto de *compromiso* que, a nuestro parecer, es el que mejor se acopla para poner dentro de un marco de referencia los pactos o acuerdos que sustentarán una política pública de reconciliación social, sin perder de vista que estamos dentro de la perspectiva de la elección social con miras a un bienestar general. Para Margalit el concepto de compromiso supone dos dimensiones desde donde se puede considerar: la micromoralidad¹⁴ y la macromoralidad.¹⁵ Por tanto, para este autor, la referencia para evaluar nuestro comportamiento debería estar más en la manera como asumimos nuestros compromisos, en vez de en nuestras ideas o nuestras normas (2010, p. 5). Inclusive, continúa Margalit, nosotros deberíamos decidirnos por los compromisos como nuestra segunda mejor elección.

Enfatizamos, una vez más, que nuestra perspectiva conducente a una política pública de reconciliación social debe ir más allá de nuestros *deseos* —siguiendo a Hedström—, es decir, de instrumentos de resolución de conflictos y búsquedas instrumentales de salidas alternativas al conflicto y la violencia, y asumir de fondo la dimensión de las *creencias*, esto es, la apropiación de valores que nos permitan construir y consolidar un pacto fundado en el compromiso individual y colectivo de reconstruir nuestro entramado social.

Sin embargo, el mismo concepto de *compromiso* es ambivalente, afirma Margalit. Desde una dimensión positiva, los compromisos señalan la cooperación humana. Pero, la dimensión negativa hace mención a la traición de los principios de más alto cuidado. “En algunas ocasio-

14. Hace referencia a las interacciones individuales.

15. Se refiere a las unidades políticas.

nes es una expresión benevolente y en otras ocasiones es una expresión vaga” (2010, p. 6). En esta misma línea, este pensador equipara a la ambivalencia en el concepto de compromiso la tensión existente entre los conceptos de paz y justicia, por cuanto en algunas esferas sociales la paz es la preeminencia de la justicia, pero medida desde la legalidad radical, mientras que la paz sin esa justicia de establecer la norma como parámetro de organización puede asumirse como debilidad. En otros grupos humanos la paz y la justicia se complementan en la consolidación de la convivencia. Actualmente estos conceptos se suelen asumir como “bienes competitivos”. También podemos hallar sociedades en las que la paz puede habitarse sin justicia. Este pensador asume la paz y la justicia como “bienes complementarios” (p. 8).

Con el propósito de hacer más explícita su propuesta, Margalit señala que hay una variedad de *compromisos* que no podemos desconocer y que es fundamental que tengamos en cuenta al momento de abrir canales conducentes a la creación de espacios pacíficos. La variedad la asume desde las dimensiones de la competición y la cooperación:

- Compromiso anémico. Es el encuentro basado en la competición, donde cada una de las partes busca la satisfacción de sus intereses y necesidades por encima de la otra parte. En este tipo de compromisos el reconocimiento no viene dado desde la cooperación, sino desde el “lograrlo por encima del otro”.
- Compromiso optimista. Es el reconocimiento del punto de vista del otro. Puede ser cualquier expresión de reconocimiento del otro. Un adagio popular nos puede ubicar en la comprensión de la propuesta de Margalit, “ponerse en los zapatos del otro”. En la temática de búsqueda alternativa al conflicto podemos sintetizar este tipo de compromisos con la frase que Margalit toma del Talmud: “actos en nombre de la paz”¹⁶ (2010, p. 41).
- Compromiso putrefacto o podrido (*rotten compromise*). Es un acuerdo que busca el establecimiento o el mantenimiento de un orden político inhumano basado en la crueldad sistemática y en la humillación. Usualmente, la parte que sufre la crueldad o la humillación no hace parte del acuerdo (2010, p. 54). Este tipo de compromisos han sido utilizados en varios lugares del mundo a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Sudáfrica lo utilizó el partido de gobierno para poner “frenos preventivos” a la raza negra, llegando a especificar ciertos espacios donde los negros no podían estar

16. El mismo Avishai Margalit señala los tres tipos de razones que el Talmud establece para actuar “en nombre de la paz”: compromiso para neutralizar la hostilidad, compromiso para mejorar la armonía reduciendo la fricción y compromiso para indicar a tu rival que tú reconoces la fuerza y la legitimidad de su reclamación, aun si tú pudieras ganarle en un juicio (2010, p. 41).

o acceder. De la misma manera, los gobiernos dictatoriales en Centroamérica, específicamente en El Salvador y Nicaragua, pactaron compromisos podridos para perpetuarse en el poder a costa de las clases populares, campesinas e indígenas, tal como lo veremos en nuestro tercer capítulo.

Los compromisos políticos, según la teoría de Margalit, demandan flexibilidad en los acuerdos. Por ende, un elemento clave en este tipo de dinámicas es el reconocimiento de la legitimidad de las partes en los procesos de negociación, aunque a nivel político puede ser más difícil este paso que cualquier otra dimensión. Por ejemplo, reconocer la legitimidad de un grupo al margen de la ley por un Estado contiene elementos difíciles que impiden el acceso fácil a un acuerdo. Sin embargo, añade Margalit, los compromisos optimistas pueden facilitar las cosas si se asumen más en camino hacia la negociación, en vez de determinar la negociación en sí misma (p. 42). Por ese camino va nuestra propuesta, es decir, buscamos los fundamentos esenciales que permitan el acceso a procesos conducentes a la reconstrucción, más que mecanismos basados en instrumentos que se han ido desgastando con el correr del tiempo. El reconocimiento del otro está en el mismo inicio del camino hacia el diálogo, no simplemente en las conversaciones durante la negociación, donde cada parte lo que pide es legitimidad para ser reconocida desde sus intereses grupales o, incluso, individuales. Este es un paso de humanización del enemigo, señala Margalit.

El anterior aspecto nos ubica en el punto central de la cooperación: el “reconocimiento [de] que yo no puedo incrementar mi parte sin incrementar la tuya también” (p. 43). Esta dinámica contiene unas características que Margalit señala y que vale la pena mencionar en nuestra propuesta:

- a. Construcción conjunta de un sueño, más no de fantasías. Es un insumo que facilita el compartir la identidad grupal. Por ejemplo, en Sudáfrica fue la categoría *Nation Building*.
- b. Capacidad de concesiones mutuas. Es un medio en el que yo reconozco y cedo, invitando a la otra parte a hacer lo mismo para que la “ganancia” general sea lo que beneficie la búsqueda alternativa. Es uno de los modos en los que se hace explícita la cooperación.
- c. Capacidad para romper el “punto muerto”. En infinidad de ocasiones, el “punto muerto” es el momento en el que cada parte toma posición respecto al proceso de búsqueda alternativa al conflicto y la violencia. Esto da una sensación de “estancamiento” y no

avanzar que, en términos humanos es “normal”, pero la apertura a la concesión mutua puede facilitar la ruptura de este tipo de momentos.

- d. Evitar la coerción en el proceso. Cualquier tipo de fuerza física o de otro nivel que los grupos enfrentados utilicen en un proceso de búsqueda alternativa para lograr el acuerdo que lo beneficie rompe la dinámica del compromiso.

1.2.5. Lo histórico y lo normativo en un marco de reconciliación social

El estudio de una estructura social tiene que incluir una determinación de ese sistema estimativo; sólo en función de él resulta comprensible lo que pasa, esto es, la marcha efectiva de la historia, la estratificación social, la industrialización o el abandono de la producción, la temperatura del patriotismo, el tono de la religiosidad —influido decisivamente por la estimación o desestimación del clero—, la selección de profesiones y, por consiguiente, la composición de la sociedad, las relaciones entre sexos, la tolerancia a los vicios y, por tanto, las formas morales de esa sociedad [...] (Marías, 1993, p. 177).

Abordar la búsqueda y consolidación de procesos alternativos al conflicto y la violencia, por medio de la dinámica de la reconciliación social desde el marco del institucionalismo, es una apuesta teórica, conducente al diseño de políticas efectivas para la reconstrucción de la sociedad, que proponemos asumir desde la dinámica de lo histórico y lo normativo, como ese proceso desde el cual el entrecruzamiento entre estructuras formales e informales de los diversos grupos humanos permite el acceso a la condición cooperante, siempre y cuando lo institucional permee las creencias y deseos de cada miembro y del conglomerado en general, rompiendo los esquemas individualista y egoísta.

Guy Peters (2003, p. 36–37) identifica a una institución desde varios elementos característicos:

- Tiene un rasgo estructural a nivel social y/o de gobierno. Puede ser formal (una legislatura, un organismo dentro de la burocracia pública o un marco legal) o informal (una red de organizaciones interactuantes, un conjunto de normas compartidas). Una institución trasciende a los individuos e implica grupos de individuos a través de un conjunto de interacciones pautadas que son predecibles según las relaciones específicas que existen entre actores.
- Contiene cierta estabilidad a través del tiempo.
- Afecta al comportamiento individual, es decir, conlleva restricción en el comportamiento de sus miembros.
- Debe existir cierto sentido de valores compartidos entre sus miembros.

A su vez, el mismo Peters (2003) señala que hay diferentes enfoques institucionales que se han hecho palpables a lo largo del desarrollo teórico: institucionalismo normativo (March & Olsen, 1984, 1989, 1995); institucionalismo de la elección racional –*Rational Choice*– (Weingast, 1996; Knight, 1992); institucionalismo histórico (Krasner, 1984); institucionalismo empírico (Weaver & Rockman, 1993; Immergut, 1992); institucionalismo internacional (Krasner, 1983; Rittberger, 1993) y, por último, el institucionalismo social (Schmitter, 1974; Rokkan, 1966; Knoke & Laumann, 1987; Marsh & Rhodes, 1992).

Esta investigación asume el institucionalismo histórico y el normativo, porque “el punto de partida para el análisis está en las decisiones que se toman tempranamente en la historia de toda política y de todo sistema de gobierno. Estas decisiones políticas iniciales, y los compromisos institucionalizados que de ellas surgen, supuestamente determinan las decisiones posteriores. Si al analizar el curso de una política no entendemos esas decisiones iniciales, se tornará difícil entender la lógica de su desarrollo” (Peters, 2003, p. 38). Nuestro eje temático, la opción de la reconciliación social como alternativa al conflicto y la violencia, expresada en un diseño, implementación y evaluación de una política pública, exige una revisión de las decisiones iniciales que motivaron los procesos vividos en Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y, actualmente, en Colombia y que permitieron la concreción de compromisos de cese de hostilidades, firmas de acuerdos de paz, amnistías y garantías de participación políticas para los excombatientes, entre otros, pero que no tuvieron el éxito que benefició a los grupos humanos involucrados. El desarrollo de este tipo de políticas no tuvo la gestión acertada en materia de reconstrucción social. Por ende, nuestro segundo insumo es el institucionalismo normativo, en el que “las instituciones tienen una serie de respuestas de rutina ante los problemas e intentan usar las respuestas antes de buscar alternativas que se aparten de los valores básicos. Los cambios institucionales que se ponen en práctica, de este modo, se adaptan a la lógica de lo adecuado.” (Peters, 2003, p. 57).

1.2.6. El institucionalismo histórico

En la versión del institucionalismo histórico, las instituciones configuran las estrategias y los objetivos de los actores, median en sus relaciones de cooperación y conflicto, y condicionan decisivamente los resultados del juego político (Steinmo et al., 1992, p. 9). Es importante resaltar que las instituciones no solo determinan estrategias y fines de la acción, sino que modelan las preferencias de los actores, las cuales no son estables ni exógenas ya que se desarrollan mediante la combinación de educación y experiencia y se conforman en el desarrollo mismo de las instituciones. Por su parte, las reglas de juego y la distribución de poder tienen lugar al interior de los entramados institucionales.

Al respecto, Guillermo Fuentes (2013) señala que “este enfoque tiene en cuenta las acciones y motivaciones de los diferentes actores individuales, y no solo institucionales, al tiempo que además también toma en consideración elementos de cultura política que pueden estar jugando en la adopción o el rechazo de una opción política determinada. Pero, fundamentalmente, el mayor aporte es el rol que el institucionalismo histórico le adjudica a las ideas como variable imprescindible para poder comprender los cambios y las reformas políticas (Hall & Taylor, 1996; Steinmo, 2008, Citados por Fuentes, 2013, p. 23–24).

Acceder a la salida alternativa al conflicto y la violencia, en perspectiva de reconstrucción social, buscando los fundamentos de lo que debería ser una política pública en esta temática, nos ubica en el contexto de lo institucional por la cohesión que implica una apuesta pública en perspectiva de recomponer lo fragmentado por los largos períodos de luchas entre diferentes grupos armados al margen de la ley y su enfrentamiento con las instituciones legales que una sociedad identifica. Es decir, entran en juego actores, relaciones entre los mismos, creencias que esos actores asumen y defienden, junto al reordenamiento institucional que conlleva este tipo de procesos llamados “post-conflictivos”. En este orden de ideas, al señalar las cuestiones fundamentales del neoinstitucionalismo, Fernández Pasarín (2006) define que el cómo explicar el origen de las instituciones y el nivel de influencia de estas en las preferencias y decisiones de cada actor son importantes para el análisis de los procesos políticos.

Las instituciones solo pueden ser entendidas como producto del contexto político, social e histórico y, por tanto, las acciones de los individuos están más orientadas a satisfacer normas y valores que a maximizar beneficios. De esta manera, la unidad de análisis desde la perspectiva histórico-institucionalista no son los individuos y sus preferencias, sino las organizaciones y las instituciones (March & Olsen, 1989, p. 9-11). Según Saavedra (2013), el objetivo de este tipo de institucionalismo es “realizar una comprensión profunda y contextualizada de los procesos de formación y cambio de las instituciones políticas a lo largo del tiempo, es decir, procesos temporales concretos. Su principal apuesta es entender y explicar los resultados de la acción política” (p. 33).

Las decisiones políticas tienen una finalidad, dirección y pertinencia, así como un patrón histórico de desarrollo que condiciona su accionar futuro. Por esta razón, la mayoría de los estudios le otorgan un papel central al legado institucional (*path dependence*)¹⁷ sobre las decisiones políticas. Skocpol (1992) y King (1995), citados por Peters (2003, p. 99) nos permiten abordar la idea básica de esta manera de asumir el cambio en la dinámica de lo político y, desde

17. Esta “dependencia del rumbo” consiste en la idea de que cuando los gobiernos crean una política inicial y toman decisiones institucionales en determinada área de políticas de gobierno, las normas que se originaron con la decisión persisten, a menos que exista una fuerza capaz de superar la inercia creada al ponerse en práctica el programa (Peters, 2003, p. 101).

nuestra perspectiva, es de suma importancia al plantear la reconciliación social como política pública, “las decisiones políticas que se tomen al formar una institución o al iniciar la actividad tendrán una influencia prolongada y definida sobre la política dominante”. Esta “dependencia del rumbo” (*path dependence*) es la persistencia que asumen las decisiones de lo público a lo largo del tiempo.

Al respecto, Farfán Mendoza (2007) señala que “el institucionalismo histórico tiene como fundamento principal su atención analítica en “los procesos de gestación y adopción de decisiones políticas en su evolución y secuencias históricas” (Citado por Fuentes, 2013, p. 29). Las instituciones son marcos de referencia culturales a partir de los cuales los individuos y las organizaciones construyen preferencias e interpretan la realidad. Sin embargo, March y Olsen (1989) aceptan cierto nivel de racionalidad. Los individuos tienen que tomar decisiones y, aunque estén muy lejos de intentar optimizar, realizan ciertos cálculos que son similares a los de la racionalidad limitada.

Aunque el institucionalismo histórico ponga el énfasis en la permanencia de los valores esenciales que sustentan la decisión tomada al momento de crear la política, no podemos desconocer que la sociedad es dinámica y cambiante. Con más razón en los contextos que hemos escogido para nuestra investigación, es decir, etapas de reconstrucción después de largos períodos de conflicto y violencia. Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua, junto a Colombia, son casos en los que la búsqueda alternativa a la destrucción no ha cesado. Los tres primeros países firmaron pactos o acuerdos de cese de hostilidades y avanzaron hacia la consolidación de sistemas más democráticos e, incluso, a la supresión de políticas excluyentes y segregantes, pero la decisión que abrió el cambio persistió en el tiempo en el que se rompieron por los acuerdos o no se iniciaron las reformas. En este punto cabe uno de los obstáculos que nos develan el institucionalismo histórico: cómo predecir el cambio. Aún más teniendo presente que los períodos de “post-conflicto” conllevan un cambio que, en muchas ocasiones, no se sabe cómo se implementará o asumirá.

Los resultados políticos desde esta perspectiva, estarán fuertemente condicionados por el rumbo y las configuraciones definidas inicialmente. De ahí la importancia de analizar los fenómenos políticos desde una perspectiva diacrónica: en general desde esta perspectiva, un fenómeno presente será explicado en gran medida a partir de las diferentes opciones institucionales tomadas en el pasado. Así, las instituciones ejercen un doble efecto estructurante: al mismo tiempo que influyen en la asignación de poder entre los diferentes actores, también están incidiendo en las metas que estos actores van a definir como prioritarias (Fuentes, 2013, p. 30).

En síntesis, Saavedra (2013) señala que los principales énfasis o ideas de fuerza del institucionalismo histórico son:

- Los problemas sustantivos del mundo real de la política. Es decir, busca elaborar argumentos que posibiliten la comprensión del porqué y el cómo las estructuras políticas condicionan la vida de los ciudadanos, esto es, restringen y canalizan su comportamiento (p. 33).¹⁸
- El análisis de los patrones institucionales a través del tiempo. Se incluyen en la agenda de investigación temas y/o problemas de larga duración y se evidencian relaciones temporales particulares entre variables, hallándose incidencia de antiguas instituciones con nuevas (p. 34). En este aspecto cabe recordar el *path dependence* que mencionamos con anterioridad.
- El contexto y el análisis de las instituciones. Las instituciones tienen influencia en el comportamiento y procesos políticos en cuanto a toma de decisiones de los actores involucrados, especialmente la élite de políticas, hasta los movimientos sociales que se vean afectados por la decisión. En este énfasis, se busca “analizar la interacción entre instituciones y entre organizaciones e instituciones en contextos macros, y los resultados que ese juego de intersecciones produce” (p. 35).¹⁹
- La influencia de las ideas en el desarrollo institucional. Para este método, las ideas tienen un contexto que consiste en las estructuras institucionales que ponen límites a los actores políticos cuando éstos les asignan o reasignan sentidos. “El contenido de las ideas incide en el cambio de las reglas, pues son estructuras y construcciones de sentido, es decir, llevan incorporadas las ideas (cognitivas y normativas) que le dan su orientación” (p. 35 – 36).
- Las coaliciones políticas y el cambio en las instituciones. Son conformadas por los actores y las relaciones que se establecen en ellos. La capacidad de incidencia está

18. “En consecuencia, los académicos que trabajan con el enfoque institucionalista histórico tienden preferentemente a preguntarse, ¿por qué determinadas estructuras institucionales logran institucionalizarse en algunos momentos y lugares, mientras que en otros no?, ¿cómo organizaciones parecidas desarrollan características divergentes de evolución?, ¿qué efectos producen en un sistema político determinado organizaciones con diferentes niveles de institucionalización?, ¿cómo los actores se configuran históricamente?, ¿cómo definen sus preferencias y percepciones?, ¿cómo construyen sus capacidades estratégicas? (Thelen, 1999, p. 380; Pierson & Skocpol, 2008)” (Saavedra, 2013, p. 34).

19. Siguiendo a Saavedra (2013) podemos sintetizar que, para este enfoque, las instituciones son fenómenos relacionales (Thelen, 1999, p. 384); van más allá de las explicaciones funcionalistas del desarrollo institucional, dándole importancia a la secuencia o procesos temporales, esto es, las instituciones son productos de procesos sociales (Pierson & Skocpol, 2008, p. 7). A lo anterior se suma que los investigadores en este método se detienen en consecuencias no intencionales de largo plazo de elecciones políticas y conflictos anteriores (Pierson & Skocpol, 2008, p. 8). Por último, las instituciones son reconstruidas en el tiempo, es decir, no solo se reproducen, sino que también cambian (Thelen, 1999; 2005; 2006; 2009). Estos aspectos se pueden ampliar en Saavedra (2013, p. 34 – 35).

relacionada con el poder que tengan esos actores (Mahoney & Thelen, 2009, p. 36 – 39). Ese poder, continúa señalando Saavedra (2013), son los recursos de acción que les permite a los actores influir sobre los procesos políticos. Estos recursos se necesitan para configurar la capacidad estratégica de los actores y de las coaliciones políticas. A esta dinámica relacional de elementos se añaden dimensiones como la cognitiva —que los actores converjan en visiones y explicaciones—, dimensión evaluadora o integradora de preferencias —aceptar pérdidas para obtener ganancias totales más grandes o evitar pérdidas mayores— (Scharpf, 1997, p. 58, citado por Saavedra, 2013, p. 37 – 38).

- Las estrategias de investigación: el método histórico comparativo. Recurre a este instrumento metodológico “para explicar cómo los actores se configuran históricamente, cómo definen sus preferencias y percepciones y cómo construyen sus capacidades usando sus recursos para actuar estratégicamente con sus pares” (p. 38 – 39). Lo que buscan es analizar un proceso a través del tiempo para hallar las conexiones causales entre variables, incluidas las relaciones temporales, señala Saavedra (p. 39).
- La estabilidad y el cambio institucional. Estas categorías constituyen un factor determinante de discusión, pues los teóricos —según escuelas institucionalistas— varían según la percepción de dinamicidad o no de las instituciones a lo largo de su desarrollo. Saavedra (2013) centra su atención en hacer mención de cómo en el institucionalismo histórico está presente dicha “tensión teórica” y parte del señalamiento del modelo de *equilibrio punteado o intermitente*, propuesto a mediados de los ochenta, que afirma que el cambio en las instituciones es rápido y de corta duración, seguido por largos períodos de estabilidad institucional (Krasner, 1984, citado por Saavedra, 2013, p. 41). A su vez, hace mención de los aportes hechos por Douglass North y Paul Pierson al respecto. Para el primero, el cambio institucional está dado por razones utilitaristas y/o funcionalistas, esto es, para que se adecúen los marcos institucionales a los incentivos de los actores.²⁰ Es un proceso incremental, ya que la estructura dominante impone restricciones al conjunto de decisiones para los reformadores, cuando buscan innovar a fin de prevalecer sus intereses económicos y políticos. Por ende, son necesarias la negociación y el compromiso entre jugadores, agrega Saavedra (2013). Por otro lado, señala North (2001), la estabilidad se logra con un conjunto de reglas formales, jerárquicas e informales (rutinas, costumbres, tradiciones y convenciones)

20. Esta propuesta la desarrolla más Saavedra (2013) haciendo referencia a North (2001, p. 110–118–173; 2007, p. 19).

que tienen una fuerte disposición a la sobrevivencia porque se ha vuelto parte de la conducta habitual (Saavedra, 2013, p. 42).

Para el segundo teórico, Paul Pierson, agrega Saavedra (2013), la dinámica se da a través del argumento de los mecanismos de *retornos crecientes* (*increasing returns*), entendidos como procesos sociales auto-reafirmanes o de retroalimentación positiva de patrones de desarrollo institucional surgidos en tiempos formativos, como los que distinguen las coyunturas críticas. Se caracterizan por la incertidumbre o equilibrio, la inflexibilidad o inercia, la contingencia y la ineficacia potencial.²¹

Anota Saavedra (2013), parafraseando a Pierson (2000), que estos mecanismos de retornos crecientes son importantes porque captan dos elementos claves de la dependencia de camino en los procesos políticos: muestran con claridad cómo crecen a lo largo del tiempo los costos de sustituir un diseño institucional por otro, lo que refuerza la permanencia y se le da gran importancia a la centralidad de los procesos históricos —ordenamiento temporal o secuencia específica de eventos y procesos, y sus efectos en la variación de la vida política— (p. 44).

1.2.6.1. Sentido del cambio en el institucionalismo histórico

No toda decisión política tomada en cualquier circunstancia puede tener un efecto duradero. Por ello, señala Guy Peters (2003), la misma corriente histórica del institucionalismo ha asumido el cambio como un factor de trabajo teórico. Con este fin muestra algunos acercamientos a la manera como este tipo de institucionalismo aborda el problema del cambio:

- a. El concepto de “equilibrios intermitentes” o “equilibrios punteados” (Krasner, 1984) permite vislumbrar que las instituciones pueden cambiar esas iniciativas políticas que al comienzo son catalogadas como persistentes. Krasner propone que la serie de puntos de estabilidad son viables en la implementación, pues hay “rápidos brotes de cambio institucional, seguidos por largos períodos de estancamiento” (Krasner, 1984, p. 242).
- b. Idea de las “coyunturas críticas” (Collier & Collier, 1991). Las instituciones pueden cambiar por conjunción de diversas fuerzas políticas internas. Por ejemplo, los cambios en los gobiernos latinoamericanos durante el siglo XX después de la inercia en la que cayeron en los períodos postcoloniales.

21. Para ampliar y profundizar estos conceptos se puede recurrir a Saavedra (2013, p. 43–44).

- c. Cambio por medio del aprendizaje y el moverse entre los equilibrios reaccionando ante la nueva información. Esta información puede surgir de las experiencias que van teniendo las instituciones o pueden venir de otras instituciones (Heclo, 1974; Olsen & Peters, 1996).
- d. Aspectos de cómo modificar ideas. Es el examen de la reformulación de las cuestiones políticas y la posible reformulación de las instituciones asociadas (Sabatier, 1988).
- e. Cambio gradual inherente a las instituciones mismas (Pierson, 1996). La mayor parte del diseño de las instituciones contiene disfunciones no resueltas que, en últimas, suscitan el cambio. En este sentido, el cambio es un proceso gradual que no podemos desconocer.

Saavedra (2013) nos permite acceder a una nueva corriente teórica en la que las dos dinámicas de cambio y estabilidad se fusionan, buscando una cohesión entre el *path dependence* y la evolución institucional (Thelen, 1999, 2005, 2006, 2009). Es decir, los cambios pueden ser incrementales o abruptos y los resultados pueden conducir a la continuidad y/o a la discontinuidad. El cambio a gran escala (transformador) se puede lograr en coyunturas críticas o en períodos de estabilidad, como resultado de pequeños cambios incrementales a lo largo del tiempo (Saavedra, 2013, p. 46). Siguiendo a Thelen (2005) añade que “la reproducción y la transformación institucional están condicionadas por los cambios que se producen en las coaliciones políticas que les sirven de soporte” (Saavedra, 2013, p. 46).

Para el interés de la presente investigación este aspecto es nodal en la búsqueda alternativa al conflicto y la violencia a través de un mecanismo institucional como una política pública que, en su contenido y forma, demanda interrelación de estructuras formales e informales que permitan la gestación de un cese de hostilidades, firma de acuerdos y, por ende, procesos valorativos en justicia, verdad, reparación, retribución, reinserción, entre otros elementos. Estas “exigencias de contexto” necesitan cambios de fondo en la misma dinámica de estructuras políticas, reorganización de los procesos de diseño de la política (buscando el mayor nivel de participación de todos los actores que puedan implicarse), coaliciones políticas en sistema de redes y la configuración de un marco institucional con miras a etapas de “post-acuerdos” o “post-conflicto”, según la realidad en la que se establezca. En este orden de ideas, el cambio institucional es crucial y, por ende, la estabilidad de la institucionalidad estatal debe mantenerse, sin perder adaptabilidad, como lo veremos, por ejemplo, con el sistema de justicia que puede pasar de la retributiva a la transicional, según el caso.

A su vez, podemos mencionar como ejemplo para ubicarnos desde esta perspectiva del institucionalismo histórico la experiencia de las llamadas comisiones de la verdad (teniendo en cuenta que han asumido diversidad de nombres y estructuras, según el contexto) viendo estas como mecanismos institucionales a través de los cuales las sociedades buscan elaborar el trabajo de la memoria histórica y, sobre todo, la búsqueda de la verdad. Cada tiempo histórico ubica estas comisiones como espacios de trabajo para facilitar los procesos de post-conflicto, pero no siempre tienen los mismos diseños, tal es el caso de cómo en Sudáfrica estuvo conformada por representantes de todos los estamentos sociales y se le concedió la posibilidad de dar amnistía a los victimarios. Por el contrario, la de El Salvador estuvo conformada por un pequeño grupo de colaboradores a nivel internacional y solo tenía el carácter de indagar, recoger información, presentar informe y dar recomendaciones, incluso, el tiempo fue bastante corto —6 meses de trabajo—. Ya lo cita el informe *Hechos del Callejón: Del dolor a la verdad y la reconciliación* —PNUD (2007):

En algunas de ellas el Sistema de las Naciones Unidas ofreció su experiencia y ayuda para garantizar la paz y el respeto por los derechos humanos. Muchas fueron comisiones que surgieron por iniciativas gubernamentales y otras, especialmente, por el empuje y la decisión de ciudadanos, activistas, la Iglesia, el movimiento social y víctimas que trabajaron unidos con la idea de que la verdad y la justicia son también un paso para la reconciliación, y que es indispensable, para lograr la paz, reconstruir sociedades heridas (PNUD, 2007, p. 2).

Varios invitados de estas ocho comisiones del mundo reconocen la ausencia de voluntad política y el poco esfuerzo de algunos gobiernos para implementar sus recomendaciones. Pero están de acuerdo en el papel que históricamente han tenido las víctimas y la sociedad civil, acompañadas de la Iglesia y organismos internacionales entre otros, en la creación de estas comisiones, en su puesta en marcha y funcionamiento y en la verificación de la ejecución de sus recomendaciones. También coinciden en que las comisiones se juegan su legitimidad y por lo tanto su destino por las decisiones que tomen y por sus propios actos (PNUD, 2007, p. 4).

1.2.6.2. Aportes para una política pública de reconciliación social

La eficacia de una salida alternativa al conflicto y la violencia después de largos períodos de conflicto y violencia, yendo más allá de los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, la podremos hallar en la consolidación de lo institucional basado en la buena gobernanza y unos principios de ética pública que sostengan la decisión para el cambio y la misma política en una persistencia. Obviamente, esta dimensión teórica la abordaremos en detalle al analizar cada uno de los casos que hemos escogido con miras a una aproximación a lo que debería sustentar una política como esta.

El institucionalismo histórico nos ofrece herramientas para ir hacia allá, contando con los cambios que socialmente se pueden suscitar, en especial con los altos niveles de vulnerabilidad en que queden los grupos humanos que han vivido este tipo de fragmentaciones por largos períodos. La “dependencia del rumbo” que se demanda en esta clase de iniciativas está dada por la misma experiencia de conflicto y violencia que conmina al cambio y por las creencias e ideas que se deben construir en el mismo proceso de transformación que la sociedad vislumbra en los momentos de recrudecimiento violento. El rediseño no puede ser negado, sino que debe ser asumido como oportunidad, posibilidad y capacidad de crear nuevos marcos de actuación.

Los aportes que vislumbramos desde ya para una política de reconciliación social están dados en la capacidad de adaptabilidad que el mismo modelo institucionalista histórico nos ofrece. Al respecto, Peters (2003, p. 113) nos señala que no podemos desconocer la idea de Person (1996) en cuanto las decisiones iniciales son disfuncionales y las instituciones deben abrir el espacio y el tiempo al cambio. Con mucha más razón, toda acción política que busque salidas alternativas a la conflictividad y la violencia demanda una gran capacidad de adaptarse a las demandas sociales y a las circunstancias que requieren transformación de la decisión.

A su vez, añade Guy Peters, el institucionalismo histórico funda sus bases en las ideas. Por ende, las organizaciones del sector público deben juzgar su eficiencia por la capacidad para crear políticas efectivas que pongan en práctica tales ideas. Desde allí, en relación con nuestra segunda hipótesis, las ideas y, obviamente, creencias en un proceso de reconciliación social conlleva elementos de verdad, reparación, restitución, memoria histórica, justicia, lo procesual, entre otros elementos que deben ser puestos en práctica por la misma dinámica de la decisión que se tome a través de la política pública.

Pero no solo el institucionalismo histórico nos brinda elementos para nuestro interés, sino que el horizonte de sentido último de este tipo de políticas, la reconstrucción social, nos pone en una perspectiva de acción colectiva que propende por lo común, lo público. De allí que la llamada “lógica de lo adecuado” del institucionalismo normativo nos pueda aportar más elementos para la construcción de nuestra propuesta antes de hacer el análisis de los casos que hemos escogido.

1.2.7. El institucionalismo normativo

No solo la persistencia de la política o de la decisión pública tomada nos interesa en nuestra propuesta. Ya hemos señalado que la misma fragilidad de las sociedades que inician procesos alternativos al conflicto y la violencia demanda una capacidad de adaptación y reacomodación

de factores que, junto a la consolidación de valores, permitan lo justo y eficaz de un proceso de reconciliación social. Las ideas no son solo la base para mantener en el tiempo una política, sino que las creencias posibilitan una cohesión más sólida de la reconciliación social como marco general de reconstrucción.

El institucionalismo normativo nos permite asumir los valores como eje sobre el cual consolidar las bases de las ideas y de lo persistente en el tiempo al momento de tomar decisiones en este tipo de problemáticas sociales y políticas. Para este tipo de institucionalismo las normas y los valores son fundamentales al momento de perfilar las conductas que los actores pueden o deben asumir en un marco institucional (March & Olsen, 1984, 1989, 1994, 1996).

En el institucionalismo normativo sostiene que los actores políticos no son individuos fragmentados que reflejan su socialización y su constitución psicológica, y actúan para maximizar el beneficio personal, sino individuos que reflejan fuertemente los valores de las instituciones a las que están vinculados (Peters, 2003, p. 46).

Vuelve a aparecer en nuestra reflexión la dinámica de interacción interpersonal que los individuos sostenemos en todo tipo de ámbitos en los que nos desenvolvemos. Lo diverso y plural, junto a lo complejo, constituye las vías sobre las cuales lo humano se hace factible en intercambio individual y colectivo. En este tipo de dinámicas, la asunción de valores institucionales, ligados a las perspectivas del individuo, señala el derrotero de lo institucional. Pero la capacidad de escoger entre todas las ofertas colectivas y la interpretación de las mismas nos permiten acceder al compromiso institucional que demanda la misma vida política. Más aún en materia de reconciliación social, donde la diversidad, en medio de la lucha de intereses, necesidades y valores, originó los choques y enfrentamientos por largos períodos. “Las instituciones moldean considerablemente a sus propios participantes y proveen sistemas de significación para quienes participan en la política y, en un sentido más amplio, en la vida social” (Peters, 2003, p. 47).

Los gestores de esta nueva visión del institucionalismo, March y Olsen, definen una institución como “un conjunto de normas, reglamentaciones, y sobre todo, rutinas” (1989, p. 21–26). Para proceder, señalan estos autores, las instituciones cuentan con reglas o normas; a su vez, tienen durabilidad en el tiempo y capacidad para influir en la conducta de las personas. Todas estas características se complementan con la legitimidad casi inherente que se le otorga a las instituciones, esto compromete a los miembros a comportarse de una manera o de otra (Peters, 2003, p. 50).

Este conjunto de reglas, valores y rutinas es esencial en todo proceso de reconstrucción social a través de una política de reconciliación social, por cuanto la fragmentación por conflicto

y violencia rompe lo normativo, desdibuja los valores y crea rutinas fundadas en la agresión, la muerte, el miedo, el temor y el silencio, entre otros, que impiden la consolidación de lo público. Por tanto, la tarea es suscitar el cambio para ingresar a la “lógica de lo adecuado” que influye sobre el comportamiento, tal como lo señala Peters citando a March y Olsen, y que, consideran ellos, se formaliza a través de normas o reglas. “Los comportamientos serán intencionales, pero no voluntarios cuando los individuos se encuentren motivados por los valores de la institución” (March & Olsen, 1989, p. 161, citado por Peters, 2003, p. 51).

1.2.7.1. ¿Desde y hacia dónde lo institucional normativo?

Es aparentemente sencillo el asunto de la estructuración de lo social desde la cohesión que ofrece lo normativo, el valor y la rutina en la configuración social de lo institucional. Sin embargo, la sencillez es solo aparente, pues en la pregunta por el desde y el hacia dónde es el espacio en que se configura lo institucional, cuestión sin duda compleja y juega un papel importante cuando nos adentramos en la esfera de una política que ofrezca insumos conducentes a la reconstrucción social. Siguiendo a March y Olsen, Guy Peters nos brinda la posibilidad de aprehender cómo la manera en que las sociedades estructuran la significación y la lógica de lo adecuado es lo que permite acceder al desde dónde se fundamenta este modo de abordar lo colectivo hecho institución.

La propuesta teórica señala que los individuos somos introducidos a una institución con previos parámetros de socialización que facilitan la pertenencia. Para explicitar mejor esto, se anota que “normas comunes —reciprocidad, honestidad, cooperación— que son importantes para los actores públicos se aprenden como parte del proceso general de la socialización” (Peters, 2003, p. 55). En esta perspectiva, lo normativo en materia de reconciliación social demanda una procesualidad donde las “nuevas normas de socialización” permitan la “socialización de normas desde lo conflictivo y lo violento” como transformaciones institucionales expresadas en normas comunes, tales podrían ser verdad, transparencia, restauración, reparación, acogida, inclusión, etc.

A lo anterior se suman las rutinas, que al parecer surgen después de que se comienza la interacción en un ambiente proto-institucional (Peters, 2003). Es una manera de impulsar con fuerza la participación con el propósito de aumentar las ventajas de la construcción de lo común. Por ello, lo dialógico en nuestra propuesta se configura como elemento esencial al momento de pensar en la política de reconciliación social.

En este marco, con sus aciertos y desaciertos, los exponentes de tal modelo de institucionalización señalan que el proceso de institucionalización se da en dos etapas: 1) a través de una decisión consciente de crear una organización o institución para un propósito, 2) mejorar la institución a lo largo del tiempo e insuflarle ciertos valores. No se puede desconocer que se puede presentar un desplazamiento de valores (Peters, p. 56).

Dadas las cosas de esta manera, lo normativo surge hacia una posibilidad de consolidar lo común, lo colectivo, desde la diversidad de perspectivas de valores y la confluencia que se busca a través de la misma institución que genera un proceso político que modifique la constelación inicial de valores en la construcción de lo público. Desde nuestro interés, como ejemplo, el valor de la reparación del daño, teniendo en cuenta la acción violenta que rompió o acabó lo que se busca reparar conlleva una definición del valor en términos de “mínimos” para ser reparados, pero implica una interpretación que no se queda en el devolver con dinero u objetos materiales la vida destruida durante los actos violentos. Este valor lo proponen las costumbres utilizadas en los diversos procesos de reconciliación social, pero ¿víctima, victimario, sociedad civil y gobierno entienden desde la misma perspectiva el valor de reparar? ¿Está la lógica de lo adecuado implícita? En esta misma línea de análisis deben ser considerados los otros elementos que constituyen la política.

1.2.7.2. Aportes para una política pública de reconciliación social

El cambio en las instituciones y en las decisiones que se toman respecto al ser y la misión de las mismas es uno de los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de contemplar los posibles aportes que un modelo de institucionalismo puede hacer a la búsqueda de la reconstrucción. Para el modelo normativo de lo institucional.

[...] las instituciones tienen una serie de respuestas de rutina ante los problemas e intentan utilizar las respuestas conocidas antes de buscar alternativas que se aparten de los valores básicos. Los cambios institucionales que se ponen en práctica, de este modo, se adaptan a la lógica de lo adecuado, y aquellos valores institucionales desempeñan la valiosa función de limitar la gama de la búsqueda de alternativas políticas (‘racionalidad limitada’) para la institución (Peters, p. 57).

Lo anterior nos conduce a afirmar que el aporte del institucionalismo normativo a una política pública de reconciliación social está en la configuración de esas alternativas que se deben contemplar en el diseño e implementación de las medidas de búsqueda de la verdad, construir de la memoria histórica, aplicación de la justicia y disposición para los derechos de víctimas, victimarios y sociedad civil, entre otros. Por ejemplo, el asesinato está tipificado como delito

y causa una pena que la sociedad misma establece a través de los organismos judiciales. Sin embargo, la búsqueda alternativa a la violencia demanda de la sociedad el establecimiento de unos valores judiciales que se transforman de lo penal a lo transicional. Por tanto, la pena por el delito de homicidio pasa de 30, 40 o 50 años, según la normatividad de cada país, y entra en una disminución, en amnistía o compensación.

Pero, para que una institución social se apropie de esta perspectiva lo normativo institucional ofrece la herramienta del aprendizaje como medio para que los valores se adapten al cambio desde su entorno. Es aquí donde vuelven a aparecer las oportunidades y posibilidades como insumos en la reconstrucción social. Lo normativo es lo que posibilita la adecuación de cambios y transformaciones, centrados en la “lógica de lo adecuado” que se hace explícita en la buena gobernanza y los principios de ética pública sobre los cuales se construye la institucionalidad fundante de un proceso de reconciliación social.

Esta dinámica relacional de los elementos del institucionalismo histórico con el normativo en una perspectiva de fundamentar una política pública de reconciliación social la podemos complementar²² con la metodología que en la mitad de la década de los ochenta Paul Sabatier desarrolló bajo el denominado *marco de las coaliciones promotoras*,²³ como un instrumento de análisis del porqué se producen cambios en las políticas públicas, buscando respuestas en la

22. Por no ser objeto de la presente investigación no entramos al análisis minucioso del modelo del *marco de las coaliciones promotoras*. Para un estudio detallado de esta metodología de análisis de políticas públicas se puede acceder a los textos de Sabatier, P. A.: (1984). “Faculty Interest in Policy-Oriented Advising and Research”. *Knowledge*, 5, junio, p. 469-502; (1987). “Knowledge, Policy-Oriented Learning, and Policy Change”. En *Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization*, 8, p. 649-692. (1988). “An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning”. En *Policy Sciences*, 21, p. 129-168; (1993). “Policy Change over a Decade or More”. En P. A. Sabatier y H. C. Jenkins-Smith (eds.) (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder: Westview Press; (1998). “The Advocacy Coalition Framework: Revisions and Relevance for Europe”. En *Journal of European Public Policy*, 5, 1, p. 93-130; P. A. Sabatier (ed.) (1999), *Theories of Policy Process*. Boulder: Westview Press; Sabatier P. A. y Hunter, S. (1989). “The Incorporation of Casual Perceptions into Models of Elite Belief Systems”. En *The Western Political Quarterly*, 42, 3, p. 229-261; Sabatier, P. A., Hunter, S. y McLaughlin, S. (1987). “The Devil Shift: Perceptions and Misperceptions of Opponents”. En *Western Political Quarterly*, 41, septiembre, p. 449-476; Sabatier P. A. y Jenkins-Smith, H. C. (eds.) (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder: Westview Press; Sabatier, P. A. y Jenkins-Smith, H. C. (1999). “The Advocacy Coalition Framework: An Assessment”. En P. A. Sabatier (ed.). *Theories of Policy Process*. Boulder: Westview Press; Sabatier, P. A. y Pelkey, Neil (1987). “Incorporating Multiple Actors and Guidance Instruments into Models of Regulatory Policy-Making: An Advocacy Coalition Framework”. En *Administration and Society*, 19, septiembre, p. 236-263.
23. Otro punto de referencia conceptual en la dinámica relación entre actores, instituciones y configuración de redes son las llamadas *coaliciones políticas* que aborda Saúl Saavedra Echeverry (2013), siguiendo a los teóricos de esta propuesta Mahoney y Thelen (2009). Estas coaliciones, menciona Saavedra, tiene capacidad para incidir en la dirección de las instituciones, en directa relación con el poder relativo de los actores que las conforman. Son los llamados recursos de acción que dan la posibilidad de influir en los resultados de las decisiones políticas. Los de mayor intereses son los recursos políticos, los cuales se distribuyen por medio de arreglos institucionales cuando definen competencias, otorgan o limitan derechos de participación, de veto y consagran la autonomía en la toma de decisiones (Scharpf, 1997, p. 43, citado por Saavedra, 2013, p. 37).

confluencia de las ideas que subyacen a toda política pública, es decir, aspectos cognitivos, los valores, las creencias, el aprendizaje, entre otros elementos (Martíñón, 2007, p. 282).

La teoría de las coaliciones promotoras nos permite acceder a esos elementos “causales” (acontecimientos o situaciones, desde el *process tracing*) que permiten contener en el tiempo una dinámica procesal que, a su vez, contiene otros “tiempos de procesos” que pueden conectar toda el contexto real de una situación que no solo conlleva relaciones institucionales en la historia, sino elementos normativos que, incluso, pueden cambiar. Añade Ruth Martíñón Quintero (2007) que los enfoques que desarrollan el análisis del cambio en las políticas públicas plantean “hasta qué punto las ideas que los actores traen a la esfera política son la razón del cambio o su estabilidad” (p. 283).

La conceptualización de las políticas públicas como sistema de creencias es fundamental, pues es el instrumento a través del cual el marco de las coaliciones promotoras incorpora las ideas al análisis de las políticas. Se basa en la idea de que las personas se involucran en política, al menos en parte, para trasladar sus sistemas de creencias a la política pública, y permite, como veremos, detectar el cambio (Martíñón, 2007, p. 284).

Así las cosas, cuando buscamos construir un *hacia una política pública de reconciliación social*, teniendo como marco de referencia el institucionalismo —histórico y normativo— estamos abriendo el espacio de reflexión y análisis en el que el diseño e implementación de una política pública como opción alternativa al conflicto y la violencia, no puede quedarse en una propuesta centrada en instituciones, comprendidas como organizaciones simplemente, o en la codificación a través de leyes, sino que debe ser una *red* de ideas, creencias y actores que confluyen en la dinámica de relaciones que se establecen entre los distintos niveles implicados en el ciclo de la política o que se ven afectados de una u otra manera por la misma.

Además, cuando asumimos este tipo de iniciativas después de largos períodos de fragmentación social —con todo lo que ello implica de fracturas institucionales y normativas— el rol de las creencias que cada actor o grupos de actores asumen determinará con mucha fuerza la gestión de la misma política en materia de reconstrucción social que es, en últimas, a lo que debe tender una acción pública en perspectiva de reconciliación social.

Para este método de análisis los actores están configurados por “la amplia variedad de instituciones que comparten las creencias del núcleo de política y que coordinan su comportamiento de diversas maneras” (Sabatier & Jenkins-Smith, citado por Sabatier 1999, p. 130). Para ampliar más esta definición, Ruth Martíñón (2007) precisa que “son todos aquellos que

pueden jugar un papel importante tanto en la generación, difusión y evaluación de las ideas de las políticas, como en su formulación e implantación” (p. 287).

La acción de estos actores en la dinámica misma de la política pública se enfoca en compartir creencias básicas que los diversos actores involucrados traen al problema común o público. Es lo que Martiñón Quintero denomina “trasladarlas a los problemas públicos, influyendo en el comportamiento de múltiples instituciones gubernamentales a lo largo del tiempo” (2007, p. 288). Pero, ¿qué son ese sistema de creencias que se configuran en un “elemento bisagra” para la fusión entre actores y respuesta a la necesidad pública que se pretende solventar por medio de una política? En términos del *marco de coaliciones promotoras*, “los sistema de creencias son concebidos como conjunto de prioridades de valor y asunciones causales, teoría implícitas como alcanzar los objetivos, percepciones sobre el estado del mundo (incluyendo la magnitud del problema), percepciones sobre la eficacia de los instrumentos, etc. Son las estructuras de pensamiento y opinión de las élites de las políticas públicas” (Martiñón, 2007, p. 295).

Nuestro propósito al citar brevemente el análisis que hace Ruth Martiñón Quintero respecto del modelo propuesto por Paul Sabatier es el de hacer visible cómo, al buscar una apuesta alternativa al conflicto y la violencia, más allá de la firma de acuerdos de cese de hostilidades o de paz, se configura en una tarea fundamental del conjunto de la sociedad implicada, liderado ello por las llamadas “élites de las políticas” y lo que nos atrevemos a denominar “élites de facto” (originadas en el mismo proceso conflictivo o en los procesos de diálogos conducentes a los acuerdos), que serían los diversos actores implicados en este tipo de grupos humanos. Existen igualmente “élites” en materia de víctimas, victimarios, organizaciones no gubernamentales, iglesias de diferentes credos o confesiones, sector privado, entre una *constelación* que no podemos pasar por alto y que son el centro de un acercamiento a este tipo de iniciativas públicas.

En este orden de ideas, el elemento dialógico/deliberativo será crucial al plantearnos un marco desde el cual sea factible el diseño de una política pública de reconciliación social, puesto que esta iniciativa no es lo mismo que el proceso de diálogo entre las partes enfrentadas ni, mucho menos, parte de la iniciativa de uno de los grupos enfrentados. Por lo general, los gobiernos toman la iniciativa de invitar y abrir los espacios para el diálogo creando las condiciones adecuadas o, en pocos casos, los grupos al margen del marco normativo buscan las oportunidades de entrar en conversaciones con el gobierno por desgaste del mismo proceso bélico, por cambio en sus perspectivas ideológicas o, simplemente, por un deseo grupal de reinserción a la vida civil. Pero plantearnos el *hacia la política pública de reconciliación social* demanda la creación de estructuras en red o interrelaciones entre actores para que fluya la propuesta en niveles verticales, horizontales y circulares, tal como lo vislumbraremos al final de nuestra in-

vestigación. Allí anida la propuesta del *reconciliation network* que nos posibilite plantearnos el diseño²⁴ de este tipo de políticas.

1.3. Hacia un modelo ideal de política pública de reconciliación social

Las respuestas pueden ser para nosotros diversas e, inclusive, contradictorias. Más aún cuando el momento presente de nuestra historia nos remite a los aciertos y desaciertos de infinidad de intentos por acabar las guerras y garantizar el desarrollo de los pueblos. Para Nancy Fraser (1997) este momento está caracterizado por tres elementos constitutivos:

- a. Ausencia de cualquier visión que presente una alternativa progresista del estado de cosas actual y tenga credibilidad. Ya no hay alternatividad en las luchas que buscan el progreso de los pueblos y, mucho menos, nos atrevemos a pensar, en la creación de otros caminos distintos a sentarnos a negociar para “salir del conflicto y la violencia”.
- b. La gramática de las exigencias políticas ha cambiado. El tema de clase y el problema de la redistribución ha cedido ante la presión del tema de la identidad y de las demandas de reconocimiento de esa identidad: “Se ha cambiado la redistribución por el reconocimiento” (p. 5). Esto ha polarizado nuestra realidad, donde los conflictos por redistribución pareciera que hubieran cedido a los conflictos por la identidad, aunque en el fondo la problemática origen de la violencia esté mezclada entre lo cultural y lo socio-político.

Tareas cruciales del postsocialismo: primero, cuestionar la distinción entre cultura y economía; segundo, entender cómo las dos esferas actúan conjuntamente para producir injusticias; y tercero, descubrir cómo, en tanto prerequisite para remediar las injusticias, las exigencias de reconocimiento pueden ser integradas con las pretensiones de redistribución en un proyecto político onmicomprensivo (p. 6).

- c. El resurgimiento del liberalismo económico. Las relaciones sociales están en una dinámica mercantilizada, lo que ha resquebrajado las protecciones sociales y empeorado las posibilidades de vida de millones de personas (p. 7). Hay un crecimiento desigual cada vez más fuerte en cuanto a niveles de ingreso, riqueza y capacidades según vienen afirmando los informes de Naciones Unidas sobre desarrollo desde hace más de una década.

24. Reafirmamos que la presente investigación no busca el diseño de la citada política. El objetivo es plantear el marco general y de principios que brinden la posibilidad de pensar en este particular tipo de políticas, puesto que deberían ir más del acostumbrado “tecnicismo” en el diseño de políticas públicas y plantear seriamente la reconstrucción social como garantía de estabilidad, justicia y no repetición. Esto demanda un cuidado especial en la estructuración de este tipo de iniciativas.

Por ende, ¿en qué quedan los “sueños” del diálogo como mecanismo idóneo para resolver nuestras diferencias? ¿Dónde están las propuestas de la comunidad internacional a partir de la Sociedad de Naciones y, actualmente, desde Naciones Unidas? Lo fatídico no nos conmina al fracaso, ni los desaciertos nos lanzan al pesimismo. Las oportunidades siguen estando presentes, pero los *deseos* no pueden limitarse a los ceses de hostilidades o a los mecanismos de concesiones para que no sigan atacando los grupos al margen de los marcos normativos de lo social. Apostamos por un modelo ideal que no es idealismo, sino apertura a las posibilidades de cooperación que nos constituyen en la acción común.

Se trata de la condición que Fraser expresa en los siguientes términos:

La ausencia de un proyecto emancipatorio amplio y creíble, a pesar de la proliferación de frentes de lucha; una escisión generalizada entre las políticas culturales de reconocimiento y las políticas sociales de redistribución, y el alejamiento de las pretensiones de igualdad frente a una excesiva mercantilización y un agudo crecimiento de las desigualdades materiales (1997, p. 7).

En realidad, como lo caracteriza la autora, es un marco de referencia que nos aporta pocas oportunidades de introducir mecanismos ideales basados en la justicia y en la ética pública.

Los niveles de injusticia económica y cultural marcan pautas donde lo conflictivo, por ser constitutivo de lo humano, desarrolla altos niveles de violencia. El círculo vicioso de esta clase de “compromisos podridos” se hace palpable en dinámicas de normas culturales injustamente parcializadas en contra de algunos y que los Estados institucionalizan en los sistemas políticos y económicos; a su vez, las desventajas económicas impiden la participación igualitaria en la construcción de cultura, en los ámbitos públicos y cotidianos (Fraser, 1997, p. 23). Estos retos nos ponen en dinámicas de *creencias* que deben fundamentar los deseos de salir del círculo: “la solución para la injusticia económica es algún tipo de reestructuración político-social (redistribución). La solución para la injusticia cultural, por el contrario, es algún tipo de cambio cultural o simbólico (reconocimiento)” (p. 24). En ambos caminos de solución el “elemento bisagra” es la concepción ética de lo humano, bien sea individual o grupal. Esa es nuestra apuesta: la ética pública como sostén de la reconciliación social.

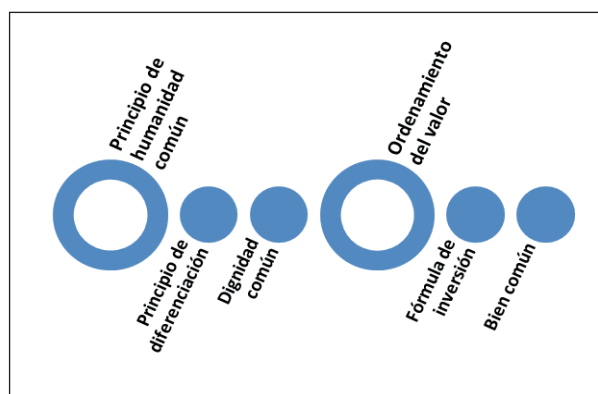
Por otro lado, Luc Boltanski y Laurent Thévenot (2006) ofrecieron un modelo de gobierno político fundado en el valor como eje sobre el cual se puede constituir una nueva perspectiva de “bien común” y, por ende, una nueva visión de justicia. Estos autores parten de unos axiomas fundamentales que ya han sido señalados por diferentes corrientes de pensamiento en la consolidación de comunidades política. Los traemos a colación como insumo desde el cual podemos

ubicar nuestra reflexión como un “cruce de principios” en red que facilitarán la dinámica de reconciliación social:

- Los miembros de un gobierno compartido conformarán una humanidad común. Se espera de este grupo de personas capacidad para los acuerdos basados en mínimos principios de humanidad (2006, p. 74).
- El principio de diferenciación debe marcar la pauta de consolidación de esta “humanidad común”, donde el extranjero pueda adaptarse a las circunstancias de cada contexto y, así mismo, su actuar pueda seguir las formas de justificación de la acción tanto como cada región lo demande, por ejemplo. En este contexto, los sistemas basados en “castas” o diferenciaciones excluyentes por materia de diferencia sexual, no podrían adaptarse a este modelo de gobierno político (p. 74).
- A lo anterior se suma la necesidad de determinar sobre qué condiciones los miembros de esta nueva organización de gobierno político conformarán cada “Estado” (región). El principio fundante en este elemento es la igual dignidad de cada miembro (p. 75).
- De este último aspecto se sigue que la manera como se hará factible ese “gobierno común” es el ordenamiento de cada Estado desde la coordinación de acciones y la distribución, expresado ello en una escala de valores para el bienestar. Aunque este aspecto no niega la tensión con la primera condición de “humanidad común”, la definición de parámetros de ordenamiento no puede desconocerse (p. 75).
- El mecanismo de salida puede ofrecerlo el llamado “modelo de humanidad ordenada”, a través del cual se puede abrir la diversidad de acuerdos (p. 76). Este momento del modelo ideal de gobierno político no desconoce el conflicto que se puede presentar entre las demandas de los miembros al nivel cercano del Estado y al nivel de Estado “macro” que el mismo esquema pretende instaurar. Es así como el mismo modelo propende por el diseño del siguiente elemento;
- Definición de “bien común” que, en últimas, es lo que garantiza que el “valor público” sea el elemento “bisagra” de la propuesta. Pero, este “bien común”, como valor, se distancia del concepto de lo auto-placentero para cada miembro, pues nos ubica ante un sentido social. Así las cosas, “bien común” y “dignidad común” se complementan en cuanto la proyección hacia lo social, lo público, que ellos mismos ejercen en cada persona. “Dignidad común se convierte en igual capacidad para actuar en términos de bien común” (p. 76).

El modelo que proponen estos autores nos ayuda a vislumbrar con más objetividad lo que nos estamos proponiendo trabajar desde el asumir los procesos de salida alternativa al conflicto y la violencia con perspectiva de consolidación de *creencias* como fundamento de una política pública de reconciliación social. O, en otros términos, es la base de diseño desde una red que podríamos comenzar a definir como un *social reconciliation network* que contengan los principios desde los cuales buscamos ese “bien común” (bienestar general, como lo asumimos desde Olson) que es la reconstrucción social. Esta breve síntesis de la propuesta Boltanski y Thévenot la podemos graficar de la siguiente manera:

Ilustración 4. Reconstrucción social



Fuente: Elaboración propia

Partiendo desde la dimensión de humanidad y abriéndola a la esfera de lo común, Boltanski y Thévenot (2006) abren la reflexión desde la economía para el diseño de un modelo que favorezca el bien común como factor desde el cual el “elemento ideal” permita la implementación de una nueva forma de gobierno común, donde cada Estado o región miembro permita el reconocimiento de la diferencia, basado en el principio de dignidad común y, desde esa preeminencia de lo humano, el “valor” (la ganancia general) permee una inversión pensada más en lo social, en vez de en lo económico simplemente.

En la esfera común del conflicto, lo humano social, la búsqueda alternativa halla sentido desde la capacidad misma de la “acción colectiva” como suma de categorías desde las cuales se configura lo común o lo público que, en últimas, es lo fragmentado por las acciones conflictivas y violentas. De esta manera, la creación de una política procesual que perdure con el tiempo, responda adaptándose a los cambios y busque la confluencia de lo común en valores, normas o reglas y rutinas que permitan la reconstrucción, en una dinámica de relación entre actores que transformen el conflicto y la violencia en oportunidades y posibilidades, es donde se funda esta propuesta hacia una política pública de reconciliación social.

Sin embargo, como lo veremos en nuestros capítulos siguientes, las búsquedas de salidas alternas que la historia de la humanidad ha marcado están sujetas a las dimensiones instrumentales del “cómo” y el “para qué” crear otras condiciones: los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y las angustiosas propuestas de gobiernos e, inclusive, de la comunidad internacional para que cesen las hostilidades y se puedan garantizar los llamados derechos democráticos,²⁵ pero el “desde dónde” y “hacia dónde” quedan desdibujados ante una sociedad que pretende simplemente quedar satisfecha con que las hostilidades cesen.

Este modelo que buscamos proponer quiere responder a ese “desde dónde” y “hacia dónde” a través del establecimiento de un conjunto de principios y valores (creencias) que permitan aprovechar la oportunidad de plantearnos una política pública de reconciliación social. Obviamente, el valor agregado de este tipo de iniciativas está en la misma línea del “bien común” o “bienestar general”, como lo hemos señalado en varios momentos de este primer capítulo, pero la manera cómo se engrana en un tipo de modelos como el que nos proponemos es lo que nos lanza al siguiente capítulo.

Lo hacemos a través de la propuesta de un modelo ideal de política pública por cuanto el llamado “bien común” en materia de postconflicto tiene que ver con la reconstrucción social de grupos humanos que han sido fragmentados por largos períodos de conflicto y violencia y, en síntesis, es la restauración de la institucionalidad de lo público pero en términos de las relaciones interpersonales “por discusión” (democracia como gobierno por discusión),²⁶ en términos de Amartya Sen (2009) o la idea de razón pública, como lo expresa John Rawls (1993). De igual manera, Elster, Dryzek, Fishkin, Cohen, Thomson, Guttman y Jürgen Habermas (2005) plantean la democracia deliberativa como opción a través de la cual consolidamos este tipo de planteamientos socio-políticos.

Una sociedad política, y en realidad cualquier agente razonable y racional, ya se trate de un individuo, de una familia o de una sociedad, o incluso de una confederación de sociedades políticas, tiene un modo de formular sus planes, de fijar sus fines en un orden de prioridades, y de tomar sus decisiones de acuerdo con ese orden. El modo en que una sociedad política hace uso de eso es su razón; la facultad de hacerlo también es su razón, pero en un sentido distinto: se trata de una facultad intelectual y moral arraigada en las capacidades de sus miembros humanos (Rawls, 1993, p. 247).

25. Estos llamados derechos democráticos, en procesos de búsqueda alternativa al conflicto y la violencia, se limitan a diálogos hacia la paz, negociación, concesiones a grupos al margen de la ley que deseen entregar armas y retornar a la vida civil (a la vida política, o no), restablecimiento de elecciones populares (si el sistema anterior era dictatorial), entre otros aspectos.

26. Término que posiblemente acuñaron Walter Bagehot y la obra de John Stuart Mill, según afirma Sen (2009, p. 354).

2. RECONCILIACIÓN SOCIAL DESDE LA ÉTICA PÚBLICA

La suma total de los esfuerzos gastados en transformar el mundo, por construir de nuevo y empezar desde el comienzo, es inferior a la que los hombres consagran a las tareas de reparación. Después de los constructores y los revolucionarios, son los cuidadores quienes parecen llamados a gobernar una nueva época histórica. La célebre tesis de Marx podría actualmente ser formulada en estos términos: los revolucionarios se han dedicado a transformar el mundo; ahora se trata de conservarlo.

Daniel Innerarity

A primera vista, la referencia a la ética pública y a la reconciliación social nos sitúa en dos ámbitos distintos del entorno humano, específicamente del académico y el investigativo. Erróneamente, el común de la gente cree que la ética pública nos ubica ante el comportamiento del funcionario público²⁷ y la reconciliación social nos brinda un aspecto socio-político, con tintes religiosos, de lo que implica el restablecimiento de relaciones interpersonales o grupales que se han roto ante una situación conflictiva o violenta. Sin embargo, nuestro interés se centra en la construcción de un “puente conceptual” en el que estos dos ámbitos abran la posibilidad de crear mecanismos prácticos que faciliten la consolidación de procesos reales de reconstrucción social.

La cita de Innerarity (2001), con la que abrimos nuestro segundo capítulo en esta investigación deja claro lo que buscamos con el llamado “puente teórico” en el diseño de este “modelo ideal” que deseamos proponer. La situación de ruptura de lo social a través de mecanismos conflictivos y violentos no conmina a una labor de “volver a empezar” en todo lo común, sino de reparar los daños y, desde allí, reconstruir ese espacio público en el que el “bienestar general” se hace necesario.

27. Para nuestro interés, la ética pública nos obliga a todos. Es el patrón moral común. La ética del funcionario público hace más referencia a la ética administrativa o ética política.

Desde esta perspectiva, la hipótesis de nuestro segundo capítulo es que sí hay una relación directa y dinámica entre ética pública y reconciliación social en cuanto a que los dos ámbitos tienen su fundamento en la creación de seres humanos abiertos a la construcción del bien común. La “acción colectiva” suscita una serie de dinámicas individuales y sociales que disponen ese espacio en el que lo público sea racional y razonablemente posible a través de la consolidación de mecanismos fundados en principios y valores. Para ello nos disponemos a hacer una aclaración de cada uno de estos términos y especificar cómo los entendemos nosotros en esta reflexión. En síntesis, nuestro objetivo es establecer un “puente directo y dinámico” en el plano académico entre la ética pública y la reconciliación social con miras a la reconstrucción social.

Esta reflexión del segundo capítulo la abordaremos en seis apartes principales. Primero, buscaremos dar respuesta a una pregunta que la presente investigación nos suscita: ¿Por qué una ética para la reconciliación social?, teniendo como telón de fondo nuestra dimensión institucional de crear redes que posibiliten la cooperación, la solidaridad y la no repetición desde la asunción de creencias e ideas, objetivadas en valores, que hagan explícitas la convivencia y la coexistencia, junto a la persistencia de la política pública en materia de reconciliación social. Posteriormente trabajaremos el concepto de reconciliación social como tal, diferenciándolo de conceptos como resolución de conflictos y transición democrática que pueden dar cabida a equívocos conceptuales. Y, allí mismo, propondremos los tres niveles desde donde podemos abordar la reconciliación social en el ámbito de lo público, señalando los principios e instrumentos que se deben tener en cuenta en esta clase de dinámicas. Luego reflexionaremos en torno a la relación dinámica entre creencias y reconciliación social, catalogando las primeras como esos fundamentos hechos principios en la ética pública que nos posibiliten la efectividad y justicia en este tipo de políticas públicas, dejando, finalmente, el “modelo ideal” de creencias que nos permita abordar cada uno de los casos desde las categorías que definiremos al concluir este capítulo.

2.1. ¿Por qué una ética para la reconciliación social?

La llamada complejidad social a la que nos referimos, expresada en conflicto e, inclusive, violencia, nos ubica en la realidad humana individual y grupal pero, a su vez, nos permite vislumbrar la manera cómo los hombres y las mujeres construimos lo público, lo de todos. Desde nuestra perspectiva, en la dinámica relacional de identidad, alteridad y diferencia aparece el interés por los “acuerdos” que permitan que el espacio común sea habitable, no una simple búsqueda de “unidad” en medio de la diferencia donde se pretenda la uniformidad peligrosa que

atenta contra la estructura de la *polis*. En línea con Innerarity, lo razonable es instituir formas de trato con el mundo que cuenten con la pluralidad de perspectivas (2006, p. 136).

Pero ¿qué es eso de asumir la ética pública como horizonte de comprensión en este tipo de iniciativas de reconstrucción social? Es creer profundamente en que sí es posible restablecer lo roto por el conflicto, pero hacerlo proactivamente. John Paul Lederach lo llama *imaginación moral*²⁸ en su texto sobre el arte y el alma de construir la paz (2008, p. 54). En este escrito Lederach afirma que hay tres claves para leer lo moral (lo ético, en nuestra propuesta) en esta labor de abrir espacios para la paz: la imaginación moral desarrolla una capacidad de percibir cosas más allá, y a un nivel más profundo de lo que salta a la vista; además, la imaginación nos ofrece un acto creativo fundamental y, por último, hay una cualidad de trascendencia.

Lederach no hace referencia a “extraños conceptos” en una dinámica socio-política hacia la paz. Por el contrario, sienta los fundamentos que exigen una ética en todo proceso de reconciliación social: lo ético nos brinda la capacidad de ver más allá del conflicto y la violencia que fragmenta la sociedad, nos da en sí la posibilidad de resaltar la reconstrucción misma. Por otro lado, nos abre a la creación de mecanismos alternativos de resolver nuestros conflictos, más allá de los procesos de diálogo, negociación, arbitraje o mediación, entre otros, que se suelen utilizar según circunstancias de tiempo y contexto. Y, por último, nos permite considerar que, más allá de colores de raza, credos o ideologías políticas, la vida humana requiere un espacio social dónde desarrollarse, independientemente de nuestra diferencias, lo que podemos llamar “auto-trascendencia” (capacidad que tiene toda persona para sentir movimiento interior ante la situación de otra persona cercana o distante).

Volviendo a Hedström, buscamos centrar el “modelo ideal” en las *creencias* (ética pública o, en términos de Lederach, imaginación moral), para romper el esquema de los deseos egoístas o individualistas que han dirigido esta forma de iniciativas (mecanismos alternativos desde lo

28. Al hacer referencia en nuestra reflexión a la ética pública hallamos la relación diferencial entre *moral* y *ética*. Estos dos conceptos contienen una relación por su origen lingüístico, el latín y el griego, respectivamente, pero “que vienen a significar lo mismo: modo de enfrentar la vida, costumbres, carácter” (Barazutti, 1999, p. 16). El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua los define de la siguiente manera: “Moral. Del latín *moralis*. Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia”. A su vez añade significaciones en sentidos cercanos: “Que no pertenece al campo de los sentidos, por ser de la apreciación del entendimiento o de la conciencia [...] Que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano [...] Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia (2001, Tomo II, p. 1535). La Ética (Del griego *éticós*, latín *ethicus*) la define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, como “Recto conforme a la moral [...] Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones morales [...] Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana (2001, Tomo I, p. 1009). Desde nuestra perspectiva, notamos una relación diferencial en cuanto a su unión en el origen lingüístico y sentido de ordenar la vida humana, pero diferente en su modo de actuar en esa misma vida.

instrumental) y un uso de las oportunidades como propuestas gubernamentales de turno, intereses de la comunidad internacional o simplismos basados en el llamado “cese de hostilidades”, sin ir a los asuntos estructurales.

El discurso filosófico respecto a la *moral* y a la ética nos permite puntualizar un poco más nuestra opción por la ética pública, sin ánimo de extendernos en la reflexión por no ser objeto directo de nuestra investigación. Vargas Machuca habla de moral como concepciones e intuiciones de que se valen las personas, los grupos humanos y las sociedades para definir lo que está bien o mal, lo que se puede hacer o lo que está prohibido y la ética estudia hasta qué punto las distintas morales se fundan en buenas razones.

Luis Barazutti (1999) insiste en que la moral y la ética demandan unión teórica y práctica para que logren sus objetivos tras el bien común. “Hay que tratar por todos los medios de mantenerlas unidas, abiertas dinámica y recíprocamente la una a la otra sin confundirlas. La ética se ha de remitir a la moral como a su suelo natal, verificando con sus conclusiones y cuanto afirma, en contacto con ella: con sus certezas del todo evidentes, innegables, sobre las que se levanta y se configura como sabiduría de los pueblos”. En otras palabras: tarea de la ética es esclarecer y legitimar la moral, abriendo a su sentido y profundizándolo en la historia, sumergida en la experiencia, en la vida humana y en la comprensión que se tiene de ella (p. 17–18).

Pero esta relación unificada y diferenciada a la que hace referencia Barazutti tiene sentido en cuanto a la construcción de la vida en común, el llamado “bien general”. Al respecto, Ernst Tugendhat (1993) define la moral como “el conjunto de reglas con respecto a las cuales alguien es juzgado como malo (o bueno) por la comunidad moral” (p. 204). La moral hace referencia a la construcción normativa en su relación directa con el comportamiento humano en conjunto, es decir, en sociedad o comunidad. De esta manera, la persona actúa moralmente cuando su acción o acciones proceden de acuerdo a esa normatividad que rige la vida en común. De donde se sigue que en “la moral se constituye la identidad social de los miembros de una comunidad. Uno se identifica valorativamente con la comunidad”²⁹ (Tugendhat, 1993, p. 205). Pero, el principio que da origen a esta realidad normativa es la convivencia que, a través de la reciprocidad, hace factible la vida en común, esto es, el interés mutuo. En nuestro primer capítulo nos aproximamos a Hedström y Olson, entre otros pensadores desde lo social, y vislumbramos cómo este “interés mutuo” contiene el elemento que permea la acción de todos los miembros de un grupo con miras a la obtención de beneficios generales.

29. Nuestro autor, siguiendo a Strawson, sintetiza en tres los sentimientos que caracterizan nuestro obrar in-moral, rompiendo la dinámica social con nuestro actuar: la indignación, el rencor y la culpabilidad. Al existir culturas en que no existe la culpabilidad, Tugendhat propone el sentimiento de vergüenza (1993, p. 202).

Consideramos que cuando John Paul Lederach hace referencia a la *imaginación moral* como motor dinamizador del “arte y el alma de construir la paz” recurre a esta dimensión de re-construir la convivencia desde la reciprocidad que surge del dolor que desgarrar el conflicto y la violencia, que se concreta en el respeto que demandan los diversos grupos humanos que alrededor del mundo han suscitado procesos alternativos en medios conflictivos y violentos. Es la recurrencia a la norma constitutiva del ser humano de buscar por todos los medios que lo común sea factible.

El comportamiento en la convivencia social se parece mucho a los juegos. Hay reglas que no se dicen pero que debemos respetar, y los trucos o engaños no son permitidos (Tugendhat, 2007, p. 66).

Nuestro interés investigativo centra su atención en la ética, específicamente en la ética pública, buscando una precisión más acorde a la construcción de una política pública en materia de reconciliación social. Las normas están establecidas, cada persona en interrelación personal es conocedora de las “reglas de juego” que posibilitan que su vida individual sea humana en el encuentro con esos otros diferenciados. Pero si no hay una expresión ampliada y profunda de esas normas que rigen la convivencia en lo práctico y cotidiano, cada acción estará determinada por el individualismo que pretende abarcar todo el espectro social para ese individuo o pequeño grupo de individuos que ponen una pauta contraria a lo general. Este ejercicio de reflexión cotidiano con miras a una apropiación más honesta de la moral es lo que hace a la ética ser lo que es.

Adela Cortina nos puede ayudar a contemplar la diferencia en esa unidad que afirmamos está implícita en los dos términos. Los vocablos “moral” y “ética” tienen el mismo significado etimológico: costumbres, carácter, usos. Sin embargo, afirma Cortina, en la práctica la diferencia está marcada en el nivel de reflexión al que nos lanza cada concepto. La ética nos permite aclarar en qué consiste el fenómeno de vida moral que, en términos de Cortina, está encarnado en la vida cotidiana (por qué existe, cómo se aplican los principios morales en los distintos niveles vitales). Por ende, la moral son las normas que rigen el nivel de la vida cotidiana y se nutre de tradiciones religiosas o seculares en la vida corriente (2007, p. 44–45).

En los casos de conflicto y violencia la normatividad moral que prohíbe o sanciona socialmente el desbordamiento de la conflictividad en destrucción de la vida y del entorno común está dada por los distintos grupos humanos. Sin embargo, la misma condición humana de labilidad nos lanza a la búsqueda incesante de nuestros intereses por encima de cualquier dimensión, sin desconocer que desde la misma moral pueden surgir hechos de destrucción de la vida, por ejemplo, las guerras suscitadas en el ámbito de lo religioso. Para ello necesitamos de la eticidad

continúa en nuestro obrar, es decir, la reflexión permanente que nos conduzca a la creación de espacios alternativos en nuestros choques diferenciales. Aún más, la ética pública —los valores en la dimensión de lo normativo-institucional— se hace más que necesaria, ya que se consolida como el patrón común que permite la existencia de morales diferentes, diversas concepciones del bien, pero asumiendo todos unos principios básicos que permiten la convivencia.

Pero no nos adherimos a la ética como algo general y desdibujado, sino que aprehendemos la visión de Juan Carlos Siurana (2009) al construir su propuesta de “la sociedad ética” desde lo que él llama el “Gabinete de la Ética Aplicada” para describir metafóricamente que el mundo de los seres humanos demanda la toma de decisiones más justas frente a acciones concretas en contextos diversos (pp. 17–18). De esta manera, utilizando la metáfora del “país de la ética”, Siurana ofrece las áreas éticas que hacen factible esa sociedad ética: ética aplicada a los sistemas, ética aplicada a las organizaciones, ética aplicada a las profesiones.

Por nuestro interés accederemos a la ética aplicada a los sistemas que, según Siurana, es donde se ubica la ética política como componente del gran sistema que establece unas reglas de juego (p. 19). En este gran marco de la ética política, nos lanzamos por la reconstrucción de lo común, lo público, que ha sido fragmentado o roto en situaciones de conflicto y violencia. Vamos tras el espacio de reflexión que nos permita la gestión de la coexistencia y convivencia en sociedades que han vivido la conflictividad en su entorno y que buscan la reconstrucción social.

2.2. ¿Qué entendemos por reconciliación social?

*Pues tanto la ventaja como el peligro dependen de la maniobra.
Sun Tzu, El arte de la guerra*

Citar un clásico del siglo VI a. C. —sobre todo que centra la atención en un camino de destrucción llamado “arte de la guerra”— dentro de un espacio de reflexión alrededor de la reconciliación social puede ser algo irónico. Pero si nos atenemos a la introducción que hace José Ramón Ayllón de la edición de este pequeño librito clásico, podemos hallar luces para desarrollar nuestra idea. Comenta Ayllón (2009, p. 8) que para Sun Tzu la mejor estrategia es la que consigue, por medio de diplomacia y negociaciones, abortar el conflicto, hacerlo innecesario. Posteriormente (2009, p. 11) nos recuerda, desde la perspectiva de Sun Tzu, que la capacidad de resolver un conflicto sin lucha es lo que distingue al prudente del ignorante,

Los clásicos, desde Confucio a Séneca, definieron la prudencia como el arte de obrar bien en cada caso. Para adquirir esa cualidad señalaron como imprescindibles varios pasos: el conocimiento de la realidad y el conocimiento propio, la reflexión moderada, la elección de una conducta buena y su correcta ejecución. Pues bien, al ser la prudencia el marco general de la conducta humana, el arte de la guerra es un caso particular de la prudencia.

La reconciliación social es vista como un conjunto de estrategias que conducen a la reconstrucción de un espacio social que ha sido roto por una situación de conflicto o violencia. Para ello, demanda un proceso que va desde el diálogo, pasando por la negociación, la mediación o la conciliación, hasta llegar a acuerdos explícitos que favorezcan el nuevo estado de cosas que se busca instituir o establecer. Esto es, la reconciliación social implica una serie de “maniobras” políticas que ofrecen opciones distintas ante la agresión, llegando a centrar la atención en el establecimiento de comisiones de verdad y reconciliación, como en los casos de Sudáfrica y Perú, por ejemplo.

Pero la reconciliación social es algo más que “maniobras” o estrategias. Implica un conjunto de elementos que parten desde el establecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la creación de estrategias institucionales que organicen este tipo de procesos, hasta la promoción de una nueva forma de asumir las realidades en contextos de post-conflicto. No podemos desconocer que la misma realidad de fragmentación vivida e, incluso, el mismo proceso que lleva a la llamada paz, en cualquier circunstancia y contexto, puede ofrecer nuevas oportunidades para el resurgimiento del conflicto o nuevos brotes hacia la violencia. Hacia allá apunta la reconciliación social. Es una “acción colectiva tras el bienestar común”, sintetizando nuestra apuesta desde el primer capítulo.

2.2.1. ¿Resolución de conflictos o reconciliación social?

La temática de búsqueda y acceso a la paz en contextos sociales que han vivido situaciones de fragmentación por conflicto y violencia ha suscitado abundante material que ofrece diversidad de mecanismos para llegar a los llamados acuerdos que apuntan a la paz. Inclusive, la confusión en el uso de los términos es común entre el público en general. Se suele hablar de resolución de conflictos indistintamente respecto a la reconciliación social, al igual que de transición democrática frente a la resolución de conflictos y a la reconciliación social. Trataremos brevemente de aclarar los conceptos para poder centrar nuestra investigación en la urgencia de la reconciliación social más que en los mecanismos de resolución de conflictos o en las medidas de transición democrática.

Ilustración 5. Transición democrática



Fuente: Elaboración propia

Los tres mecanismos que se han asumido a lo largo de la historia y según contextos determinados no están completamente distantes. Cada uno busca la salida alternativa al conflicto y la violencia desde espacios y tiempos determinados. Las diferencias están marcadas por el “cómo” se establecen los diversos medios, los orígenes y características del conflicto y en lo que pretenden proponer: una cosa es instaurar o restablecer los mecanismos democráticos (derechos civiles, elecciones populares, garantía de derechos humanos), otra cosa distinta es utilizar medios de negociación, mediación, conciliación, etc. Y, por último, el sentido profundo de la reconciliación es la reconstrucción de lo social, lo común —lo público— consolidando procesos de convivencia. Vamos a acercarnos brevemente a cada concepto.

Entendemos la resolución de conflictos³⁰ como el conjunto de mecanismos o instrumentos que favorecen el acercamiento de las partes que han venido enfrentadas por diversas circunstancias y buscan el restablecimiento de relaciones o el cese de hostilidades. Comúnmente, estos mecanismos³¹ son conocidos como los diálogos, las negociaciones, la mediación, el arbitraje, la amigable composición, etc.

30. Johan Galtung, Vicenc Fisas son dos teóricos muy reconocidos en este ámbito. Los dos ponen el énfasis en los procesos de paz y, desde allí, desarrollan toda su propuesta de resolución de conflictos. Para este aspecto se pueden consultar sus obras: Galtung, J. (2003). *Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización*. Gernika: Gernika-Gogoratuz, 354 p. Galtung, J. (1998). *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*. Gernika: Gernika-Gogoratuz, 126 p. Fisas, V. (2010). *¡Alto al fuego! Manual de procesos de paz*. Barcelona: Icaria, 117 p. Fisas, V. (2004). *Cultura de paz y gestión de conflictos*. Barcelona: Icaria, 380 p.

31. Otro autores que pueden ayudar a profundizar en esta temática son: Burton, J. (1990). *Conflict: Human Needs Theory*. Nueva York: St. Martin's Press; Burton, J. & Dukes, F. (1990). *Conflict Practices in Management: Settlement and Resolution*. Nueva York, St. Martin's Press (Humphreys, 2005).

Johan Galtung (1998) aclara que la resolución “busca el desarraigo, o al menos, suavizar, las causas del conflicto que condujeron a violencia” (p. 110). Pero, en últimas, las causas originales que suscitaron los choques tratan de ser “anestesiadas o narcotizadas” para tratar de construir un *statu quo pacífico* donde no se sigan produciendo actos de destrucción. Por ello, notamos que la resolución centra su atención en los instrumentos conducentes al cese de hostilidades, pero no puede avanzar más. Hallamos que el punto sobre el cual descansan las iniciativas a nivel mundial se centran en el derecho como mecanismo contractualista de reconstrucción social. Lo ético está ausente y la marca central está en la justicia distributiva simplemente. En este sentido, asumimos la reconciliación como puente hacia la reconstrucción social para avanzar hacia las causas estructurales que condujeron a la situación y abordar un amplio e integral trabajo individual, grupal, social y político.

Hizkias Assefa (1999) nos brinda más elementos para puntualizar la distinción entre estos dos conceptos. Tratando de aclarar el concepto de reconciliación, Assefa nos deja entrever que la resolución de conflictos enmarca los mecanismos que facilitan la supresión de los actos violentos en un conflicto, los cataloga como mecanismos de “fuerza, decisiones políticas, arbitraje, mediación, negociación y, finalmente, reconciliación” (p. 1). Sin embargo, aclara el autor, estos instrumentos de resolución de conflictos permiten abordar elementos desde diferencias sustantivas hasta relaciones interpersonales negativas. Mas no son los instrumentos adecuados para una reconstrucción más profunda y estructural de las causas de los conflictos.

Desde esta perspectiva, Assefa recurre al concepto de reconciliación más amplio que un simple mecanismo para resolver conflictos, ubicándolo como un proceso metodológico más amplio que los otros instrumentos, pues estos se quedan en el señalamiento de los actos perpetrados, la identificación de lo sucedido y los culpables, haciendo énfasis en la no continuidad de la violencia. La reconciliación va más allá, buscando el encuentro víctima–victimario dentro de un proceso de revelación de la verdad, aceptación de los hechos, reconocimiento de la ofensa y reestructuración de la vida social, asumiendo las consecuencias de los actos y evitando la impunidad, para suscitar el cambio actitudinal en las personas. La fuerza de la reconciliación está en la decisión interna y voluntaria de los implicados en el conflicto, a diferencia de los mecanismos de resolución de conflictos que contienen una ayuda externa. Para nuestro interés, el paso interno y voluntario debe ir promovido y acompañado por el Estado, lo que lo constituye en Política Pública para su mayor efectividad.

Las dos salidas alternas al conflicto – la resolución y la reconciliación – según Assefa, pretenden el cambio y la transformación de los conflictos, cada una desde metodologías particula-

res. Pero, la reconciliación social requiere de instrumentos institucionales, éticos y de gestión para una reconstrucción social integral. Por ello escogemos este camino, más allá de herramientas que resuelven parcialmente la realidad de conflicto y violencia.

2.2.2. ¿Transición democrática o reconciliación social?

Otra estrategia que algunos Estados han utilizado para buscar salidas alternativas a situaciones de conflicto y violencia es la llamada transición democrática. Aunque pareciera ser lo mismo que la resolución de conflictos y la reconciliación social, contiene elementos propios que vale la pena tener en cuenta, aunque sea brevemente.

Asumimos la transición democrática como el conjunto de medidas o instrumentos gubernamentales que, con ayuda internacional o sin ella, son impulsados para pasar de gobiernos dictatoriales o autoritarios a democráticos. También es utilizado el término ‘democratizaciones’. El sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón (1997, p. 2-3) las conceptualiza desde tres tipologías que él propone:

- Fenómenos de fundación democrática que provienen de luchas contra dictaduras oligárquicas o tradicionales, a veces con carácter patrimonialista, y donde las transiciones democráticas suceden a momentos revolucionarios o de guerra civil. Afirma el autor que en este grupo se pueden ubicar los procesos en Centroamérica.
- Las que llama propiamente transiciones son los procesos que pasan de regímenes dictatoriales a democráticos sin dinámicas revolucionarias, pero donde hay algún tipo de ruptura que no tiene que ser insurreccional. Aquí ubica los casos del Cono Sur (América del Sur), Bolivia y Paraguay.
- También se ubica en esta definición los procesos de extensión y profundización democrática que se han dado en algunos países donde había un régimen democrático restringido o semiautoritario, sin que necesariamente hayan existido dictaduras o autoritarismos radicales, lo que implica una transformación institucional. Son los casos de México y Colombia.

Jaime García Covarrubias (2005), desde la perspectiva militar chilena, identifica la transición democrática como el paso del gobierno militar al democrático, pero con la aclaración de que es posible que el proceso se inicie dentro del marco del mismo gobierno militar. Para este autor, el proceso de transición a la democracia tiene fases de desarrollo y el contexto determina sus características (p. 1).

Añade García Covarrubías que este tipo de procesos conlleva unos ejes fundamentales³² que deben tenerse en cuenta al momento de abordarlos:

- Reconocimiento de roles latentes y manifiestos
- Etapas del proceso transicional
- Diferencia entre lógica militar y política
- Pasos para mejorar la relación civil–militar.

Desde nuestro punto de vista, los procesos de transición a la democracia tienen un valor en cuanto posibilitan la reestructuración o el surgimiento de la institucionalidad política, pero carecen del elemento integrador y cohesionador del conjunto socio-político que pueden facilitar unos procesos de reconciliación social, tal como lo veremos a lo largo de nuestra reflexión.

Las dinámicas de transición, también llamadas “democratización”, son procesos “por medio de los cuales la raíz de las causas del conflicto y la articulación de las quejas de las partes pueden ser negociadas sin el recurso del derramamiento de sangre e, idealmente, con las normas y principios trazados en el derecho internacional”, expresa Thomas Franck (Franck, citado en Jarstad & Sisk, 2008, p. 5). Lo que sí está claro es que la democratización se encuentra cada vez más vinculada en la construcción de Estado, pero sin procesos electorales no hay mecanismo para generar legitimidad interna para acuerdos de paz.

Con un uso práctico del concepto de transición democrática, José María Colomer (1990)³³ se acerca a esta dimensión desde el caso español en dinámica transitoria desde la dictadura hacia la instauración del sistema democrático representativo en un mecanismo de “teoría de juegos”. En este texto, Colomer se acerca a una perspectiva teórico-práctica de lo que podemos entender como un conjunto de roles y tomas de decisión que no dependen del número de personas que optan por una acción política determinada, sino de quiénes le dan un puesto de preferencia en la decisión final. Desde esta perspectiva, la transición democrática la podemos resumir como un conjunto de medidas que contienen “comportamientos estratégicos que, mediante promesas y amenazas, conducen a la aceptación de concesiones, más que por la firmeza de las creencias de quienes protagonizan la acción” (p. 14). Es decir, “toda decisión depende del modo de decidir”, señala Colomer en el mismo texto, lo que ubica a los procesos de transición democrática entre

32. Para profundizar estos aspectos se puede abordar el artículo de García Covarrubías (2005).

33. En el año 2002 (segunda edición del libro *Political Institutions in Europe*) Josep María Colomer presenta los elementos esenciales, a nivel histórico de este tipo de procesos, de las dinámicas que se vivieron en España y Portugal después de las dictaduras (p. 171–206). Su concepción del “juego de roles en la toma de decisión” se mantiene.

una búsqueda alternativa al conflicto y la violencia, y un “juego de roles” en busca de una decisión aparentemente consensuada, bajo niveles de manipulación política.

Para hacer más explícito este “juego de roles en las tomas de decisión”, Colomer (2002) señala como estrategias claves de estos procesos conducentes a la democracia “leyes electorales, partidos políticos, elecciones, parlamentos, gobiernos nacionales, regionales y locales, relaciones entre instituciones de los Estados y la Unión Europea en lo concerniente a elecciones, política, coaliciones y criterios estratégicos, utilizados por los actores políticos bajo reglas institucionales” (2002, p. 2).

A lo anterior se suman los conceptos que aporta Juan Linz³⁴ (1987) respecto a las diversas salidas que una sociedad o sus líderes políticos buscan cuando los mecanismos de gobierno no han sido democráticos. Para Linz, el concepto de transición a la democracia no es un simple asumir instrumentos de instauración o reinstauración del régimen democrático, sino que cada situación y contexto contiene particularidades que se pueden acoplar a uno de estos tipos:

- La restauración es la creación de una nueva democracia y su consolidación después de un período relativamente corto de gobierno no democrático (1987, p. 157).
- La reinstauración es la creación del sistema democrático después de un largo período de autocracia y persecución de antiguos líderes políticos que, en consecuencia, lleva al ausentismo de muchos de ellos de la arena política. Esto contiene el ingreso de nuevos líderes al momento de volver a instaurar la democracia (1987, p. 157).
- El re-equilibramiento es un proceso político que se presenta en un sistema de gobierno que está en crisis y el electorado proyecta la alternativa ante la situación en un liderazgo que surge como “opción distinta” para poder resolver los problemas que suscitaron la situación crítica. Esta dinámica está sustentada en la confianza que los ciudadanos depositan en quien o quienes asumen el rol del cambio (1987, p. 153).

Posteriormente Juan Linz (1990) trabajó el concepto de transiciones a la democracia centrándose en los regímenes que ingresan a este modelo después de haber vivido procesos autoritarios. Linz aclara las dimensiones de lo que implica ingresar a este tipo de proceso, pues no es lo mismo redemocratización que democratización (instaurar la democracia). Redemocratiza-

34. En 1978 (*The breakdown of democratic regimes Latin America*), Juan Linz editó un texto sobre la ruptura de los regímenes democráticos, haciendo énfasis en América Latina, pero con una perspectiva de visión amplia trayendo a colación algunos casos europeos. El eje sobre el cual centró, junto a otros académicos, su análisis estuvo en el forzado comportamiento de los líderes democráticos, fundados en la pregunta de qué acciones o ausencia de acciones contribuyeron forzosamente al quiebre de la democracia en Alemania, España, Finlandia, Italia, Austria, en Europa, Brasil, Chile, Argentina, Colombia.

ción se da cuando se reasume un régimen democrático después de desplazar de su realidad uno no democrático (por ejemplo, Alemania, Austria, Italia, España, Checoslovaquia y algunos de América Latina). Instauración de la democracia es cuando una sociedad que ha vivido un régimen no democrático después de haber estado en condición de colonia, pasa a los instrumentos democráticos (Linz, 1990, p. 9).

Añade Linz que “el ingrediente esencial de una transición es la expectativa, tanto por parte del pueblo como por parte de los que detentan el poder, de que la autoridad política pronto se derivará solo de la libre decisión del electorado” (1990, p. 28). El punto de medida del restablecimiento de la democracia está dado, según Linz, en la creación o el restablecimiento del marco constitucional básico que delimite las funciones de los órganos del poder político.

De manera breve hemos dejado explícito qué entendemos por transición democrática y, por ende, su distanciamiento de lo que es la reconciliación social en las mismas líneas de definición que acabamos de esbozar. Igualmente, la aclaración pertinente de lo que es la resolución de conflictos. Ahora, nuestra reflexión continúa la línea que hemos escogido desde el inicio, la reconciliación social con miras a la reconstrucción de lo común.

2.2.3. Optamos por la reconciliación social

Para John Paul Lederach (1998), la reconciliación social tiene sentido desde lo que él llama “un marco integrado de construcción de la paz” (p. 101-114). Para este autor, la construcción de la paz conlleva asumir la realidad del conflicto como un espacio y un contexto dentro del cual se puede gestar la transformación de la realidad fragmentada en un nuevo contexto social. Según Lederach, este sentido de transformación del conflicto incluye la resolución de conflictos (el uso de instrumentos) y la estructuración del cambio necesario que, a su vez, se puede entender desde dos niveles:

- Desde un punto de vista descriptivo hace referencia a los efectos que produce el conflicto sobre la sociedad, es decir, cuáles son los cambios generales que crea la situación conflictiva sobre el grupo o grupos humanos implicados y las pautas que conlleva esa realidad.
- Desde el llamado nivel “de receta” implica la intervención deliberada para efectuar el cambio, es decir, la señalización de los objetivos que se deben establecer dentro de la tarea de transformación.

Estos niveles contienen cuatro dimensiones que no se pueden desconocer en la gestión de un proceso de construcción de paz o, para nuestro interés, en una dinámica de reconciliación social.

- La dimensión personal toca los cambios que un proceso de este tipo ejerce sobre el individuo —personal o grupal—. Incluye aspectos emocionales, perceptivos y espirituales.
- La dimensión relacional contiene los elementos relacionales que el conflicto ha roto y que se requieren reconstruir con miras a la convivencia y coexistencia pacífica. Según Lederach, esta dimensión implica la interdependencia, la afectividad relacional, los aspectos interactivos, comunicativos y expresivos del conflicto.
- La dimensión estructural, para Lederach, destaca las causas subyacentes del conflicto y las pautas y cambios que acarrea en las estructuras sociales. En este punto se deben tener en cuenta las necesidades humanas básicas, el acceso a los recursos y los modelos institucionales de toma de decisiones.
- La dimensión cultural contiene los cambios producidos por el conflicto en los modelos culturales de los grupos y las formas en que la cultura afecta el desarrollo y el tratamiento del conflicto (1998, pp. 111–113).

Nuestra opción por la reconciliación social está dada por la urgente necesidad que brota en las sociedades de abrir espacios de reconstrucción social después de experiencias de conflicto y violencia. Las dimensiones que traemos a colación desde la propuesta de Lederach nos permiten fundamentar con más fuerza este camino de investigación y reflexión, asumiendo el elemento de la ética pública como una dimensión transversal de toda la labor de construcción de paz. Por ello, proponemos abordarla desde diferentes perspectivas:

- a. Perspectiva de redes: Impulsada por organizaciones internacionales, especialmente las Naciones Unidas y, desde allí, toda la red mundial que se suscita para la prevención y resolución, junto al mantenimiento de la paz.
- b. Perspectiva según el contexto: Esta dimensión de la reconciliación social la notamos desde la experiencia que cada país y/o región tiene de su situación de conflicto y/o violencia, junto a la manera como ha buscado salidas a la situación.
- c. Perspectiva desde un *ethos*: Es el elemento que integra los principios y valores que una experiencia de recuperación de lo común debe contener para que el proceso garantice efectividad y consolidación del bien común, por cuanto la ética pública para la reconciliación social demanda la virtud cívica y la normatividad del proceso. Para esta dimensión, los elementos de la teoría de Hedström que citamos con anterioridad (deseos, creencias y oportunidades) nos permiten ubicar nuestra propuesta, dado que

la categoría de las *creencias* en la dinámica social y conflictiva comprende, a nuestro parecer, a la ética pública. Esto lo ampliaremos a lo largo de nuestra reflexión.

Al respecto, Carlos María Beristáin, en el escrito que hace para el informe “Verdad, Justicia y Reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social”, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), hace referencia a la estrecha relación que existe entre democracia y reconciliación. Para Beristáin, al hablar de eficaz salida democrática a situaciones postconflicto, se deben tener en cuenta dos perspectivas: la de estructuras y procedimientos, que permite manejar los temas en conflicto que dividen a la sociedad, y el conjunto de relaciones fundamentales entre los grupos involucrados. Enseguida, añade el autor, el compromiso democrático se orienta a buscar soluciones a las causas del conflicto, mientras que la reconciliación se dirige a las relaciones entre los que deben implementar las soluciones —Estado, líderes políticos y población— (Pacheco & Acevedo (edit.); 2005, p. 13).

Por ende, según Beristáin, la reconciliación, como recuperación de relaciones sociales fracturadas, necesita abordar la justicia económica y la participación en el poder político. La reconciliación refuerza la democracia al fomentar una recuperación de las relaciones fundamentales necesarias para la implementación de los cambios. La define, en últimas, como meta, algo por lograr, como un proceso, un medio para lograr dicha meta (Pacheco & Acevedo (edit.), 2005, pp. 10–11).

Antes de analizar cada una es importante acercarnos al concepto de reconciliación. Etimológicamente es definida como acción y efecto de reconciliar, derivando del latín *reconciliatio-onis*. A su vez, reconciliar (del latín, *reconciliare*) es volver a las amistades, atraer y acordar los ánimos unidos. Los otros significados que contiene el Diccionario de la Real Academia Español (2001) tienen que ver con el sentido religioso o sagrado del término, en cuanto al acto de confesar los pecados.

Otras referencias etimológicas señalan que reconciliación tiene que ver con “resolver, reparación, acuerdo, acercamiento, aproximación, compensación y satisfacción” (Online Etymology Dictionary, s.f). Aunque se puedan diferenciar las acepciones que se encuentran respecto al término reconciliación, hallamos el factor común de un “volver a unir o reunir” lo que ha sido roto con anterioridad. Esto lo refuerza el origen que encontramos de la palabra en el contexto bíblico.

El concepto de reconciliación parte del entorno religioso, específicamente del cristianismo. Es un término tomado del griego *katallage* (Katallagé) que significa “restablecer relaciones

entre hombres”. De allí la toma el Apóstol Pablo para definir el “restablecimiento de las relaciones entre Dios y los hombres a través de la vivencia en común de la experiencia religiosa que manifiesta Jesús de Nazareth,³⁵ haciendo referencia a la novedad que surte el cambio al pasar de la enemistad a la amistad.

Juan Manuel Granados Rojas (2008), centra la atención de su estudio en este aspecto original del concepto de reconciliación en los textos bíblicos, específicamente en la llamada literatura paulina. Señala este teólogo que “el verbo griego usado para designar la reconciliación en las Cartas de Efesios y Colosenses es *apokatalassō* (*ápokatalassó*), lo que es idéntico al término *katallagé*” (p. 7). Este término aparece solo en estas dos cartas de Pablo. Es un término que solo se menciona a partir del siglo II de la era cristiana. Con este término, la reconciliación contiene una acción en la que existe un objeto peculiar: la enemistad; esta origina la ruptura de relaciones con la divinidad y, por ende, entre quienes profesan la misma confesión de fe. Para que la acción reconciliadora se dé, por ende, la literatura paulina coloca la presencia de Dios (divinidad) en la vida de la comunidad (hombres y mujeres) y un mediador que es Jesús (Granados, 2008, pp. 11–18).

Es decir, desde el ámbito de lo religioso, la reconciliación conlleva una enemistad que la suscita. Esta se origina en una iniciativa trascendental para que los enemistados se vuelvan a reunir por un medio que, en últimas, es Jesús con una propuesta ética. En Efesios 5, 32,³⁶ señala Granados (2008), “está marcada la unidad de Cristo y la Iglesia, y tiene como consecuencia la identificación ética de los creyentes con Cristo” (p. 44). En nuestros términos, es una “acción colectiva” que asume la enemistad como factor de oportunidad para reconstruir éticamente lo público.

Aunque este término surge en un contexto religioso, han sido varias las disciplinas académicas que lo han asumido para elaborar diversas teorías. Por ejemplo, la teología lo asume para contemplar el restablecimiento de relaciones entre los seres humanos y la divinidad —según la religión o creencia religiosa— y, por supuesto, entre los miembros del grupo. La psicología lo asume para hacer referencia al reencuentro interno del ser humano o entre personas. La sociología, sobre todo la directamente relacionada con la política (sociología política), lo utiliza como fundamento del restablecimiento de relaciones interpersonales o intergrupales después

35. 2 Corintios 5, 17 – 21. “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación”.

36. “En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo” (Efesios 5, 32).

de situaciones que han fragmentado la convivencia. A su vez, la ciencia política lo elabora como fundamento alternativo en la resolución de conflictos, especializándose en lo que se ha llamado ‘reconciliación social’.

2.2.4. La reconciliación social desde la perspectiva de redes

El organismo internacional por excelencia que establece la pauta de lo que podemos entender por reconciliación social es Naciones Unidas. La historia de conflictos y guerras que caracterizaron el siglo pasado e, inclusive, lo que va corrido del presente, condujeron al desarrollo de un concepto más o menos aceptado desde este organismo, conducente a la cooperación en procesos socio-políticos que buscan la salida alternativa a situaciones conflictivas. El liderazgo del Secretario General de la ONU Boutros Boutros-Ghali (1992–1996) respecto al papel del organismo internacional frente a situaciones de conflicto y guerra motivó el desarrollo del concepto de *post-conflict peacebuilding*³⁷ para agrupar las tareas de prevenir la reanudación de hostilidades y ayudar a los países en la instauración de largos períodos de estabilidad, incluyendo políticas democráticas (Karns, 2008, p. 2). Aunque el artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas deja explícito que el organismo no intervendrá en asuntos específicos de jurisdicción interna de los Estados, la situación de guerras que se vivieron entre el final de la década de los ochenta y comienzos de los noventa motivó la gestión del Consejo de Seguridad autorizando las llamados *peacekeeping*³⁸ *operations* que tuvieron que franquear la línea divisoria entre los asuntos internos y la seguridad internacional. Se iniciaron nuevas interpretaciones de la soberanía, afirma Karns en su escrito.

En la Agenda para la Paz, a mediados de 1992, el Secretario General de Naciones Unidas utilizó el término *peacebuilding* para envolver los cambios fundamentales en las responsabilidades de Naciones Unidas respecto al mantenimiento de la paz internacional y la seguridad (concretamente actividades de ayuda en condiciones de acogida en un largo período de paz),

37. Este término hace referencia a la creación y consolidación de condiciones para el establecimiento de la paz después de una experiencia conflictiva. Serían el conjunto de estrategias que la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas en este caso (pero podría ser a través de cualquier organismo de cooperación internacional) establece para apoyar las garantías de un proceso de post-conflicto, lo que incluye la reconstrucción física e institucional de las sociedades que se han visto afectadas por la dinámica de conflicto. Desde la propuesta del Secretario General de ese entonces, Boutros Boutros-Ghali, está conformado por la diplomacia preventiva, el *peacemaking* y el *peacekeeping*.

38. Término que hace referencia al componente estratégico del “mantenimiento de la paz y la seguridad”. Lo definimos como estratégico porque consiste en la serie de medidas que Naciones Unidas promueve para los procesos de paz que incluyen desde el monitoreo de la retirada de los combatientes de las áreas de conflicto, la supervisión de elecciones democráticas y la provisión de ayudas para la reconstrucción. Para el desarrollo de estos mecanismos el organismo internacional utiliza *peacekeepers* (equipos para el mantenimiento de la paz) que, en algunas ocasiones son soldados, pero en otras son civiles.

dirigido a erradicar las causas de los conflictos y condiciones de fracaso de los mismos, y en condiciones de fortalecimiento como la instauración del sistema internacional de Westfalia, continúa expresando Karns en su informe.

Desde ese momento histórico, las Naciones Unidas promueven tres conceptos en el camino de procesos de reconciliación social que sustenta la novedad de la *peacebuilding*: la diplomacia preventiva, *peacemaking*³⁹ y *peacekeeping*. Estas tres dimensiones forman parte de una “red de herramientas” que pueda facilitar la labor de la organización internacional respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad global de manera integrada. Cabe anotar que esta serie de elementos surge dentro de un contexto de organización supra-estatal, pero aprobado por los Estados miembros del Consejo de Seguridad y, por ende, acogido por todos los miembros del pleno de Naciones Unidas. A su vez, la misma dinámica de cooperación que le es inherente al espíritu de la organización crea una red de relaciones en materia cooperante al momento de asumir situaciones de conflicto y violencia, respetando siempre la soberanía de cada Estado, la complejidad de cada situación y las múltiples lecturas que puede tener cada situación conflictiva. Podríamos vislumbrar un acercamiento al “modelo de gobierno político” que citamos con Boltanski y Thévenot al finalizar el capítulo anterior. Lo fundamental está en la creación de mecanismos de “cohesión” para que la cooperación surta efecto.

Hamber y Kelly, interesados en el tema desde una visión anglosajona, afirman que Boutros Boutros-Ghali abre una la perspectiva de la reconciliación social al hacer referencia al concepto de *peacebuilding*, definiéndolo, desde estos autores, como un proceso paulatino en el que se busca el cambio de las estructuras sociales y en las actitudes de las partes que han estado bajo la influencia del conflicto (Hamber & Gráinne, 2004).

La labor de construcción conceptual y puesta en práctica de la herramienta del *peacebuilding*, con sus tres componentes de diplomacia preventiva⁴⁰, *peacemaking* y *peacekeeping*, abre las opciones de ahondar en mecanismos alternativos que posibiliten la convivencia pacífica, siendo una de estas la reconciliación social. Esta contiene una premisa que consiste en que

39. Término con el que se define la presencia y labor de las Fuerzas Armadas amparadas por Naciones Unidas en un espacio en etapa de post-conflicto formal. Las tareas centrales en esta dinámica es la de evitar que las partes en conflicto se vuelvan a atacar y que el orden civil abra espacios factibles de convivencia. Pueden ser monitoreo del desarme de los combatientes y supervisión en la entrega de ayuda humanitaria.

40. Es un método de acción que las Naciones Unidas asumieron desde la propuesta del Secretario General Boutros Boutros-Ghali respecto a la multiplicación acelerada de conflictos. Consiste en el aprovechamiento de la información que el organismo recopila de las misiones, de los mismos países o de la creación de zonas desmilitarizadas con un espectro de prevención frente a la reincidencia o surgimiento de nuevas situaciones conflictivas. También, contiene el elemento de acercamiento a países que podrían posibilitar el acceso al post-conflicto mediante el diálogo, la negociación o la mediación.

las relaciones interpersonales requieren de atención para construir la paz. Reconciliación es el proceso de salida a situaciones de conflicto y relaciones fracturadas que incluye diferentes actividades. Es un acto voluntario que no puede ser impuesto.

Para esta línea de Hamber y Kelly, el proceso de la reconciliación social contiene elementos que se interrelacionan:

- a. Desarrollo de una visión compartida respecto a la sociedad justa e interdependiente
- b. Conocimiento y relación con el pasado conflictivo
- c. Construcción de nuevas relaciones interpersonales
- d. Significativo cambio cultural y actitudinal
- e. Cambios sustanciales a nivel social, económico y político
- f. Existencia de paradojas y contradicciones en el mismo proceso
- g. No se puede desconocer que la reconciliación tiene una carga moral en su concepto y que diferentes personas mantendrán sus propios prejuicios ideológicos

Cabe mencionar que este tipo de acercamiento a realidades de conflicto y violencia contiene aspectos de fuertes dilemas y retos que la historia ha dejado a lo largo del uso de esta clase de estrategias. Por ejemplo, Paul Collier y otros investigadores mencionan algunos de estos dilemas: la presencia de los organismos internacionales en zonas que han sido fragmentadas por el conflicto y la violencia no garantiza el advenimiento de la seguridad total, ni la promoción de la sociedad civil, ni la transformación de los actores armados en permanentes demócratas dentro de los derechos humanos, entre otros (Collier et al., citado en Jarstad & Sisk, 2008, p. 6). “El rostro del dilema más difícil para los actores internacionales, particularmente las operaciones de Naciones Unidas, son las desafiantes preguntas sobre el uso de medidas coercitivas como la fuerza” (p. 6).

Anna Jarstad (2008, p. 21–28) esquematiza los dilemas de los procesos de democratización y *peacebuilding* desde cuatro tipos: horizontal, vertical, sistemático y temporal.

- El dilema horizontal tiene que ver con cuáles deberían ser los grupos que dinamicen el proceso. Esto concierne a las relaciones horizontales entre las élites de las partes enfrentadas y los partidos políticos democráticos. La cuestión radica en que cuanto más grupos representativos de la sociedad estén en el proceso, más democrático será. Pero no solo las relaciones y la representatividad se ven afectadas por este dilema, también tiene efectos sobre el prospecto de paz que cada actor asuma. Es decir, la manera como se asuman estos aspectos favorecerá o no el avance del proceso de paz.

- El dilema vertical comprende las dificultades que se pueden presentar entre la eficacia del proceso y la legitimidad del mismo que, a su vez, contiene la relación entre élites y masa política. En ocasiones puede buscarse cumplir el deseo de lograr el cese de hostilidades y el acuerdo de paz de manera eficaz con todos los medios al alcance, pero sin contar con la participación de la pluralidad social. Esto conllevaría la ilegitimidad del mismo proceso. En otras ocasiones, los líderes o élites pueden adelantar el proceso desconociendo el elemento público del mismo, tratando de llevar los acercamientos con las partes a través de “pactos secretos” que puedan garantizar que sea efectivo.
- El dilema sistemático tiene que ver con la tensión en el ámbito de la propiedad del proceso, es decir, la dinámica del control local e internacional del mismo. La comunidad internacional puede facilitar el ámbito propicio para las negociaciones y velar por el cumplimiento de los acuerdos, pero la comunidad local es la que debe estructurar los mecanismos democráticos que favorezcan la continuidad de la paz.
- El dilema temporal contiene la solución del compromiso en los términos de los efectos a corto o largo plazo. Esto es, decisiones que el proceso pueda tomar en tiempo inmediato podrían entorpecer, a largo plazo, la reestructuración democrática. Jarstad pone el ejemplo de las restricciones democráticas que se pueden impulsar en un proceso de paz, tales como libertad de prensa y manifestaciones públicas en masa, en el tiempo corto de la misma dinámica, pero eso puede afectar la democratización en su largo término.

Con toda esta estructura de la reconciliación social desde la perspectiva de redes ampliamos el panorama de acercamiento a los procesos de reconstrucción social. Con sus aciertos y desaciertos, son mecanismos alternativos que la misma historia de conflictividad nos ha posibilitado estructurar. Pero, más allá de esta posibilidad, también podemos considerar una manera de abordar este tipo de problemáticas desde el mismo contexto en el que se desarrollan los actos violentos.

2.2.5. La reconciliación social según el contexto

Esta ubicación de lo que implica la reconciliación social desde el contexto en el que se desarrolla nos podría lanzar a innumerables folios ante la cantidad de conflictos que podemos identificar y los correspondiente procesos de reconciliación que se suscitaron: África en cada rincón, Irlanda del Norte, Euskadi con los conflictos relacionados con el nacionalismo y

su expresión terrorista, los Balcanes y las antiguas repúblicas soviéticas con su búsqueda de identidad, Medio Oriente y sus constantes tensiones entre países vecinos y, por solo mencionar algunos, los brotes de violencia política en algunos países de Latinoamérica (Chile, Argentina, Brasil, Centroamérica, Colombia y Perú, entre otros).

La situación particular de cada contexto en el que se desarrolla un conflicto y las búsquedas de salida a esas circunstancias condicionan la comprensión de la realidad. Por ejemplo, un conflicto étnico en África (Ruanda, entre utus y tutsis) puede asumir el concepto de *peacebuilding* (camino hacia la reconciliación social) que los países miembros de Naciones Unidas promueven, pero sus mismas circunstancias pueden brindar nuevos elementos que se deben tener en cuenta.

Reyes Mate (2008, p. 45) nos deja entrever que la reconciliación es una salida política madura de una experiencia de violencia. Para este autor, la problemática de la reconciliación social está en la forma como se entiende en las diferentes perspectivas sociales, culturales e históricas. En este sentido, comenta en su texto los casos de España —después de la dictadura—, Chile, Argentina y Sudáfrica, pero limitando este proceso a los trabajos de las llamadas comisiones de verdad y reconciliación que se han establecido en cada una de estas experiencias de fragmentación social a través del conflicto y la violencia, exceptuando España que no tuvo esta clase de mecanismos. Pareciera que la etapa de post-conflicto en toda sociedad que ha vivido este tipo de experiencias centrara su atención en la constitución de un espacio social en el que se pueda procesar lo vivido, incluyendo a la relación víctimas–victimarios, como un componente del retorno al estado anterior o apertura a la democracia, en casos donde el conflicto fue originado por dictaduras.

Por interés de esta investigación, contemplamos cuatro casos desde el contexto que condiciona el desarrollo de la reconciliación social: Sudáfrica, Centroamérica (El Salvador y Nicaragua) y Colombia. Cada uno de estos contextos contiene sus particularidades, Sudáfrica desde un conflicto que surge en la dominación de una potencia externa y la exclusión social de la raza negra que conllevó; Centroamérica, en estos dos países que hemos citado, desde un conflicto que surge por las grandes diferencias sociales entre una minoritaria clase social alta y una mayoritaria pobre, con sus consecuencias de monopolio y control del poder político y económico, en un contexto de “guerra fría”, lo que provoca una intervención externa de Estados Unidos al colocar gobiernos dictatoriales para frenar el acceso del “comunismo/socialismo” a la esfera de los gobiernos de esa región. Colombia presenta un conflicto con características particulares que surge después de la década de los 50 con el advenimiento de movimientos guerrilleros de tendencia marxista-leninista que iniciaron sus acciones fundadas en reclamos ideológicos de una reivindicación de las clases populares y su deseo de acceso al poder del Estado, tornándose

en grupos vandálicos que utilizaron el secuestro y la extorsión como medios para sostenerse económicamente, llegando, después de la década de 1980, a asumir un rol protagónico en el negocio del narcotráfico, hasta el día de hoy. De estos tres contextos, vale la pena destacar que Sudáfrica y Centroamérica abrieron el camino oficial hacia la reconciliación social después de acuerdos de cese de hostilidades, mientras que en Colombia se abre la posibilidad en medio del conflicto mismo.

2.2.5.1. Contexto sudafricano

La experiencia de Sudáfrica se ha constituido en punto de referencia para la procesualidad que implica una reconstrucción social. Un largo proceso de conflicto y violencia, con una “falsa democracia” únicamente para los blancos que, en términos de Merkel y Croissant (2001), es conocida como “democracia excluyente”, dio paso a una búsqueda alternativa para salir de esa situación. Charles Villa-Vicencio y Wilhelm Verwoerd lo sintetizan de la siguiente forma: Solo a través del encuentro democrático en esta clase de ejercicios de construcción de nación el amplio grupo de la población puede apropiarse e internalizar completamente este tipo de procesos. La coexistencia nacional y el último objetivo de la reconciliación nacional más que la reconciliación individual (también importante) pueden solamente suceder cuando conozcamos al otro a través del debate (2000, p. XV).

La liberación de los presos políticos desde el *apartheid*, en el año de 1990, abrió las puertas de un contexto para la reconciliación social. El entonces presidente de Sudáfrica, Frederik de Klerk, inició un proceso de reformas que comenzó a dismantlar el sistema del *apartheid* creando condiciones para que la comunidad internacional disminuyera la presión que habían impuesto al país sudafricano por las políticas racistas a las que se había llegado en anteriores gobiernos. Los años claves para vislumbrar la reconciliación social en Sudáfrica son 1990 y 1991 con la liberación de los presos políticos y el dismantelamiento de las políticas de exclusión. Se iniciaron así negociaciones entre miembros del Congreso Nacional Africano (CNA, liderado por Nelson Mandela) y el Partido Nacional (PN) del presidente De Klerk.

En el año de 1994 se celebraron las primeras elecciones democráticas, en las que fue elegido Nelson Mandela como presidente sudafricano desde una nueva realidad hacia la reconciliación social, en medio de un profundo sentimiento de esperanza por parte del pueblo de color. Durante su primer año instauró una nueva Corte Constitucional para dar sostenibilidad institucional a la labor que se iniciaba (1995); entre los meses de abril y mayo de 1995 se abolió la pena de muerte y se inauguró la Comisión de Restitución de los Derechos de la Tierra. A su vez, comen-

zaron los trabajos de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Por último, en el año de 1998 se publicó el reporte final de la Comisión respecto a los crímenes perpetrados durante el período de conflicto.

Con una clara disposición política, la Comisión centró su labor en el esclarecimiento de los crímenes contra los derechos humanos durante la etapa del *apartheid*, específicamente entre los años 1960 y 1994. Se creó un sólido grupo con representantes del mayor número de agremiaciones sociales (líderes comunitarios, organizaciones, políticos, animadores religiosos, entre otros, para un total de 17 miembros) para que ⁴¹elaboraran el camino en y desde la emblemática llamada a la “construcción de Nación” (*Nation-Building*). Para ello, se dividieron en tres comités: comité de violación de Derechos Humanos, comité de Reparaciones y Rehabilitación y comité de Amnistía. Fue un trabajo de diálogo/deliberación en equipo. Se escucharon más de 21.000 casos de violación de derechos humanos, corroborando la veracidad de los testimonios y, posteriormente, se iniciaron los procesos de reparación y rehabilitación según lo visto, escuchado y dialogado. Al finalizar el trabajo y entregar su reporte, la Comisión halló en la mayoría de los 21.298 casos denunciados veracidad en los hechos y señalamiento claro de los victimarios (Wilson, 2005, pp. 21–26).

Para evitar que la dinámica amnistía–impunidad destrozara el proceso de reconstrucción social al perder credibilidad la misma labor hacia la reconciliación, la propuesta se fundó en la justicia desde la dimensión de la restauración (justicia restaurativa), como un proceso en el que las partes que han vivido un conflicto u ofensas se acercan mutuamente para deliberar de manera recíproca cómo asumir la etapa post-conflictiva y sus implicaciones en el futuro. Además, los victimarios tienen la oportunidad de conocer el impacto de lo que han realizado y hacer la reparación respectiva, y las víctimas tienen la oportunidad de conocer lo realizado en sus daños y pérdidas (López, 2010, p. 500).

Poco a poco se nos van develando los elementos claves que configuraron el proceso de reconciliación social en Sudáfrica: el liderazgo de Nelson Mandela y sus colaboradores, la política real de un nuevo gobierno por buscar salidas negociadas a la situación de conflicto y violencia, la estructuración de una institución política que favoreció la configuración y trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación, junto a un sistema de justicia restaurativa que creó

41. Sandrine Lefranc menciona las siguientes estadísticas: 21.000 víctimas se acercaron a testificar ante la Comisión. De ese total de víctimas, 3.500 lo hicieron en audiencias públicas. Más de las tres cuartas partes de los denunciantes eran negros y más del 55%, mujeres. Esto representa unas 40.000 violaciones graves de los derechos humanos. Se documentan 9.043 muertes, 5.695 de las cuales registradas entre 1990 y 1994. Claro que esas cifras, afirma Lefranc, dice el mismo informe final de la CVR, no pueden considerarse como estadísticas definitivas sobre las consecuencias de la violencia política (2002, p. 79).

un nuevo camino judicial para la reconstrucción social a través de la verdad, la declaración de las partes implicadas (víctimas–victimarios), es decir, responsabilidad, y la reparación.

2.2.5.2. Contexto centroamericano

Cuando hacemos referencia al conflicto centroamericano no ampliamos nuestra visión al grupo total de países que conforman esta región, sino que centramos nuestra atención en los dos que más características de conflicto socio-político contienen y la consecuente etapa de post-conflicto: Nicaragua y El Salvador.

Este dato histórico puede ayudar a vislumbrar los elementos que constituyen la complejidad del conflicto en Centroamérica. Un conjunto de países pasan de ser colonias dependientes a “colonias independientes”, es decir, su situación social, económica, política y de seguridad ha dependido de la influencia externa de países potencias. En Centroamérica es más fuerte la influencia de Estados Unidos. Thomas Jefferson, expresidente norteamericano, expresó que el poder de Estados Unidos debía ejercerse en dos niveles: ideológico y político (Lafeber, 1993, p. 19).

Para que esta “profecía” del presidente Jefferson tuviera efecto, más allá de la ideología promovida por la Doctrina Monroe (1823) —*América para los americanos*— tuvo que suscitarse una dinámica de crecimiento económico en los países centroamericanos, productores de café, banano y minería, que consolidó una clase dirigente minoritaria con el poder social, económico y político, y el empobrecimiento de una mayoritaria clase popular (indígenas y campesinos) que lo resintieron. Un sistema oligárquico se fue asentando en la región: grupos oligárquicos se ubicaron como clase social en un movimiento simultáneo de tomar del poder político y el ascenso de una relación obrero-patronal marcada por la violencia y la explotación de los trabajadores.

En El Salvador, miembros de una sola familia (Meléndez Quiñónez), gobernaron entre 1913 y 1927, hasta el ascenso al poder de Pío Romero Bosque (1927 – 1931), quien legalizó los sindicatos y promulgó leyes de regulación laboral. Nicaragua vivió la ocupación norteamericana directa entre 1912 y 1933, con su consecuente cadena de gobiernos dictatoriales que favorecían la permanencia estadounidense, hasta el levantamiento de César Augusto Sandino con su causa nacionalista y anti-imperialista. Pero en el proceso de acercamientos entre norteamericanos y sandinistas apareció el líder Anastasio Somoza García, con el apoyo de la Guardia Nacional y, por ende, Estados Unidos, hasta el asesinato de Sandino en 1934. Esta convulsionada historia centroamericana se puede sintetizar en cuatro aspectos:

- a. Predominio y gran concentración del poder a favor de los terratenientes.
- b. Tendencia a la expropiación del campesinado indígena, imponiendo un ordenamiento de la propiedad territorial que las masas rurales jamás aceptaron.
- c. Una elevada dosis de violencia exigida por el propio funcionamiento de las instituciones económicas y políticas.
- d. Fuerte polarización de las clases, con debilidad estructural en los sectores medios emergentes.

Las tensiones internas en cada uno de los países, especialmente la lucha política entre una clase social minoritaria dominante y una clase mayoritaria dominada, mantuvieron durante las décadas de 1970 y 1980 la región centroamericana sumida en el conflicto y la violencia. La intervención norteamericana en esa situación fue notable al ser impulsadora de gobiernos dictatoriales contrainsurgentes. Sin embargo, la misma acción internacional en la región no se limitó a motivar este tipo de acciones, sino que fue una columna importante en el camino hacia el post-conflicto.

El 5 de enero de 1983 se creó el Grupo de Contadora como un mecanismo de cooperación internacional para impedir el aumento del conflicto y favorecer la instauración del diálogo conducente a la paz, con miras a la creación de las condiciones para la paz, el desarrollo y la democracia. Este esfuerzo tuvo un primer intento con el *Acta por la Paz y la Cooperación en América Central*, aunque solo fue acogida por Nicaragua. Estados Unidos se opuso a este acto porque la Organización de Estados Americanos estaba al margen del proceso. Sin embargo, los resultados se vieron a mediano plazo, pues en 1987 se logró el Acuerdo de Esquipulas II, en el que se firmó el “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica” (7 de agosto de 1987). Una de las recomendaciones más fuertes de este acuerdo fue la creación de comisiones de reconciliación en cada uno de los países.

De esta manera, la “colaboración internacional” de países vecinos (por ejemplo, México, Venezuela, Colombia y Panamá) para que se abrieran mecanismos conducentes a la paz, el desgaste socio-económico de la población por el conflicto y sus consecuencias, el desprestigio de los ejércitos nacionales en cada país y de los líderes políticos del momento y las orientaciones de las Naciones Unidas en el manejo de este tipo de situaciones, junto con el apoyo directo de la Iglesia católica, son algunas condiciones y circunstancias que facilitaron el acceso a la etapa del post-conflicto en Nicaragua y El Salvador.

El llamado Acuerdo de Esquipulas II desarrolla el concepto de reconciliación nacional para este momento histórico y situación real en Centroamérica con los elementos del diálogo, la

amnistía y la Comisión Nacional de Reconciliación. En el texto del Acuerdo no se define qué entienden por reconciliación, pero establece las tres columnas que este tipo de salidas al conflicto debe contener: el diálogo, la oferta de garantías a victimarios para que cesen las hostilidades (amnistía) y la creación de un ente corporativo que atiende las alternativas para salir del conflicto (Revista Envío Online).⁴²

Igualmente, el mismo acuerdo exhorta al cese de hostilidades, a abrir caminos hacia la democracia (libertad de expresión, pluralismo político y derogación de los estados de excepción y/o emergencia), a la convocatoria de elecciones libres, al cese de ayuda a fuerzas insurgentes o movimientos insurreccionales, a no usar el territorio para agredir a Estados vecinos y a incentivar la cooperación, la democracia y la libertad para la paz y el desarrollo. Todo esto tendría verificación y seguimiento internacionales.

Pero, ¿fueron suficientes estas líneas que para lograr la reconciliación nacional propusieron los países colaboradores como salida al conflicto centroamericano? ¿Hubo voluntad política y decisión firme de la sociedad para que no se continuara con las acciones violentas y se pudiera continuar viviendo en esos espacios territoriales? Algunos autores afirman que el caso de El Salvador es “modelo exitoso” porque no se repitió la etapa conflictiva hasta el día de hoy e, incluso, afirman que hay avances en su desarrollo democrático (Doyle & Sambanis, 2000).

Sin embargo, no podemos desconocer que la Reconciliación Social o Nacional, como la asumieron en estos países, no es solo el cese de hostilidades o el inicio de “ciertas expresiones” democráticas (elecciones, libertad de expresión e instituciones democráticas), sino que es un proceso en el que las condiciones sociales permiten señalar el desarrollo integral como un nuevo *modus vivendi* en el que la población no retorne al conflicto, pero sienta que lo vivido ha servido para continuar sobre las “cenizas” de lo destruido. Aparentemente, podemos decir que se centraron más en medidas de transición hacia la democracia que en verdaderos procesos de reconciliación social.

El Salvador inició los diálogos hacia esta etapa de post-conflicto cuando aún vivían procesos conflictivos (Azpuru, Blanco & Córdova, 2007, p. 9). Es decir, se corrobora nuestra afirmación de que la reconciliación social es un proceso que requiere de mecanismos e instrumentos que faciliten el acceso a la reconstrucción social misma. En el caso de Centroamérica, es un

42. Es importante tener presente que en el mismo texto se indica que esta Comisión estará integrada por dos líderes que son denominados “Delegado Propietario” y un suplente del Poder Ejecutivo; un titular y un suplente sugerido por la Conferencia Episcopal de cada país y escogido por el gobierno de una terna que envían los obispos. Además, cada gobierno debe escoger un ciudadano que no pertenezca al gobierno ni al partido de gobierno, junto con un suplente. Al estar integrado el grupo se notificará a los otros gobiernos centroamericanos.

proceso que comienza con iniciativas de ayuda internacional, motivando procesos de diálogos hacia la paz en cada país y en la praxis de acuerdos firmados por los líderes de cada país en el marco de política internacional. Fue todo un entramado de instrumentos que hicieron posible esta etapa de post-conflicto.

Al respecto, teniendo presentes las experiencias de Sudáfrica y Centroamérica, podemos afirmar que la línea del “movimiento social por el diálogo y el acuerdo” que se ha promovido en estos contextos nos presenta la reconciliación como política efectiva de reconstrucción social no en un significado de “volver a hacerse amigos”, sino un “volver a tratarse con respeto”. Es recuperar una convivencia basada en el respeto y la aceptación mutua (Elkarri.org., 2006). Bien sea con elementos de fuerte liderazgo, incentivando diálogos con todos los sectores sociales, como el caso de Sudáfrica, o de iniciativas internacionales para abrir espacios de salida a la situación conflictiva, como en el caso centroamericano, la política de reconciliación se nos vuelve a presentar como un mecanismo fundacional de nuevos espacios políticos en los que la reconstrucción de la sociedad va de la mano con la institucionalidad política basada en una justicia que promueve los valores y principios básicos de convivencia y de recuperación de lo público.

2.2.5.3 Contexto colombiano

La situación social y política de Colombia⁴³ ha sido caracterizada por la presencia constante de grupos guerrilleros (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–, Ejército de Liberación Nacional –ELN–, Ejército Popular de Liberación –EPL–) y la acción de los llamados grupos paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–) que contrarrestan la acción insurgente, marcan el mapa de actores dentro de esta dinámica, incluyendo la labor del Estado a través de las Fuerzas Militares, buscando la estabilidad de las instituciones democráticas.

Sin embargo, a lo largo de los años han sido variados los métodos gubernamentales y no gubernamentales que la sociedad colombiana ha buscado para salir de la situación conflictiva. Hacia finales de la década de 1980 y durante la década de 1990, hasta la actualidad, el factor narcotráfico ha jugado un papel movilizador del conflicto colombiano, poniéndolo en un espacio de enfrentamiento más allá de ideologías políticas o búsquedas de intereses grupales.

43. Escogemos el período comprendido entre los años 2005 y 2010 por ser el período en que se promulga la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) que da inicio a esta última fase de la búsqueda alternativa al conflicto y la violencia en Colombia, coincidiendo con la terminación del segundo período de Álvaro Uribe Vélez que, en últimas, es quien abre este modelo implantado desde la desmovilización de las AUC y, por último, el ascenso de Juan Manuel Santos a la Presidencia de Colombia, dándole un giro inicial en su primer año de gobierno (Agosto 7 de 2010 – Diciembre de 2011).

Han sido diversas las posibilidades que los gobiernos colombianos han propuesto para la resolución de esta situación. Desde ofertas de diálogos de paz y entrega de zonas del territorio colombiano a la guerrilla (la llamada Zona de Distensión) en el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998–2002), pasando por la mano fuerte del “Estatuto de Seguridad” del presidente Julio César Turbay Ayala (1978–1982) hasta el programa de “Seguridad Democrática” del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 hasta la fecha), Colombia continúa en búsqueda de la salida negociada al conflicto y la violencia, en medio de las complejidades que esta situación contiene.

Dentro del programa Seguridad Democrática del presidente Uribe Vélez el gobierno de Colombia propuso la llamada Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) como marco jurídico para el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y, eventualmente, para la desmovilización de los grupos guerrilleros. La ley ofrece garantías de disminución de tiempo de punición de delitos, acompañamiento por parte del gobierno para la reinserción a la vida civil de los desmovilizados, aporte mensual por parte del gobierno a esos desmovilizados mientras se hallan en el proceso de reinserción, entre otros elementos, siempre y cuando se sometan al proceso jurídico respectivo y, sobre todo, revelen con veracidad pública los actos cometidos en detrimento de la población civil durante el tiempo en el que participaron en los grupos al margen de la ley. El actual gobierno del presidente Santos ha reafirmado los mecanismos de la Seguridad Democrática, con un tinte más conciliador y abierto a otro tipo de alternativas, específicamente el diálogo con la guerrilla de las FARC.

El texto de la citada Ley de Justicia y Paz, en su artículo 1 señala su objeto como “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. Enseguida, en el artículo 2, establece que esa ley regulará todo el proceso (investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales), que las personas que hayan participado en grupos al margen de la ley deben cumplir siempre y cuando “decidan desmovilizarse y contribuir decididamente a la reconciliación nacional”. Más adelante, en el artículo 4, se estipula que la ley misma “dará lugar a un proceso de reconciliación nacional que deberá promover el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el debido proceso y las garantías judiciales de los procesados”.

Para desarrollar las tareas procesuales que posibiliten el pretendido proceso impulsado por la Ley 975 de 2005, el gobierno colombiano definió funciones institucionales a organismos del Estado que deben centrar su atención en el proceso. Tal es el caso de la Fiscalía General de la Nación, que, a través de la Unidad de Justicia y Paz, investiga los actos punibles y todas las condiciones del hombre o la mujer que se desmovilicen dentro de este marco jurídico. La

Policía Judicial colabora en esta misión en materia de investigación sobre secuestrados y desaparecidos. Para defensa y protección de víctimas y testigos convocados al proceso judicial, la Fiscalía cuenta con el apoyo de la Defensoría del Pueblo.

Los denominados “desmovilizados” deben cumplir el proceso judicial dentro de unas garantías que la ley estipula hacia un esclarecimiento de los hechos, aceptación de cargos, definición de pena que, en este caso, es denominada “alternativa”⁴⁴ y el cumplimiento de penas en un centro de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), entidad carcelaria de Colombia. La institución que adelantará el proceso judicial son los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. También, con el propósito de fortalecer el proceso, la ley crea la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz para que vele constitucional y legalmente por la idoneidad de la dinámica.

Desde la perspectiva de las víctimas, la Ley 975 establece que las víctimas tendrán todas las garantías para ser escuchadas, protegidas y reparadas. Para facilitarles el proceso, la ley crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación⁴⁵ por un tiempo de ocho años. A su vez, se conforman las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes (artículo 53), un fondo para la reparación de las víctimas (artículo 54) y a la Red de Solidaridad Social (llamada Acción Social) se le asignan unas funciones en este proceso (artículo 55). Para acoger y acompañar a los menores de edad que se reinsertan por medio de este proceso a la vida civil, la ley designa al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La misma realidad del conflicto colombiano demandó un énfasis especial del proceso en las víctimas. La sola mención de la Ley 975 y la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación no fueron suficientes dentro de un marco de reconstrucción social como el que se pretende en Colombia. De esta manera, en el mes de septiembre de 2010 el entonces presidente Juan Manuel Santos radicó personalmente la llamada *Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras* como un compromiso serio de voluntad política con el proceso de paz. Después de sendos debates en el Congreso de Colombia, la ley fue aprobada en el mes de mayo de 2011, dándole un refuerzo al proceso que apunta a la paz en ese país.

44. Es el término que la Ley 975 de 2005 define para el beneficio que se le otorga al hombre o la mujer que se desmoviliza del grupo al margen de la ley y se cobija dentro de la dinámica del proceso de Justicia y Paz. Desde esta perspectiva, la pena que la justicia colombiana tiene para un determinado delito no se le aplica al desmovilizado por este principio de “alternatividad” por haber contribuido a la búsqueda de la paz en el país.

45. Sus miembros son el Vicepresidente de la República o su delegado, el Procurador General de la Nación o su delegado, el Ministro del Interior y de Justicia o su delegado, el Ministro de Crédito Público y Hacienda o su delegado, el Defensor del Pueblo, dos representantes de asociaciones de víctimas y el director de la Red de Seguridad Social. El Presidente de la República designa para esta Comisión a cinco personalidades nacionales, dos de las cuales deben ser mujeres (Artículo 50).

Un medio de comunicación escrito en Colombia afirma que esta Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras “le apunta al conflicto en dos aspectos: reconoce el sufrimiento humano en la guerra, que es un deber ético inaplazable y que redundará en una mayor legitimidad del Estado y, en segundo lugar, ubica la tierra como el eje central de la reparación, lo que significa reconocer que allí, en la tierra, está el centro de gravedad del conflicto armado que ha vivido Colombia durante el último medio siglo”. Así mismo, continúa afirmando este medio de comunicación, “la ley es también una manera de incluir en el proyecto de nación a ciudadanos y comunidades que por décadas han vivido en la periferia del poder y del progreso en una especie de lejano oeste donde ha imperado la ley del más fuerte” (Revista Semana, mayo 28 de 2011, p. 10).

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el viernes 10 de junio de 2011, dándole una vigencia de diez años recalando el carácter de “grilla de partida y donde se pone a prueba la capacidad y la voluntad del Estado y de toda la sociedad colombiana para cumplirle a las víctimas” (Revista Semana, 10 junio de 2011). Quedó catalogada como la Ley 1448 del 10 de junio (Congreso de la República, 2011).

Que una ley asuma el proceso de reconstrucción social desde el reconocimiento de las víctimas como parte importante en el mismo y la problemática de la tierra como recurso de reparación es un importante aspecto de una dinámica de construcción de paz, pero demanda un compromiso social más amplio que las medidas legales e institucionales. En este sentido, en nuestro cuarto capítulo ofreceremos más espacio de análisis y reflexión a este nuevo elemento dentro del conflicto en Colombia.

2.2.6. La reconciliación social desde un *ethos*

En términos generales, la reconciliación social se nos instaura como proceso post-conflictivo y/o post-bélico que contiene un reencuentro en el entramado común. En el espacio público. No en vano el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo señala que “la reconciliación es un objetivo transversal que debería inspirar todas las políticas públicas y los programas de desarrollo, a fin de superar las tensiones causantes o resultantes del conflicto” (Pérez de Armiño & Areizaga, 2005–2006).

Auerbach Yehudith nos ofrece una reflexión respecto a la reconciliación en la dinámica de un *ethos* (costumbre) que posibilita la apertura a la reconstrucción individual y social. Nos propone la “Pirámide de la reconciliación” como una herramienta procesual fundada en una estructura narrativa. Esta consiste en la creación de “historias” sobre la historia conflictiva que una

sociedad vive partiendo de las llamadas “*Wh questions*” que utiliza la lengua inglesa⁴⁶ (what, why, who, where, when – qué, por qué, quién, dónde, cuándo). Con este método se pretende establecer fuentes de identidad y legitimidad nacional (2009, p. 8).

Al centrarse en conflictos de identidad desde esta dinámica narrativa como soporte de la “pirámide de la reconciliación”, el *ethos* nos permite afirmar que los integrantes de un proceso de reconciliación social no estarán dispuestos a alcanzarla a menos que se hayan propuesto familiarizarse con las otras narraciones, reconociéndolas como legítimas y estando listos para incorporarlas en su interior (Auerbach, 2009, p. 13). Esta “pirámide” es una metáfora para la presentación de las etapas progresivas que grupos antagonistas tienen para alcanzar la reconciliación por otro camino (2009, p. 20). Contiene unos supuestos:

- a. Reconciliación significa cambio de actitudes desde la negación y el resentimiento hasta la aceptación y la verdad. Esto es esencial en conflictos de identidad.
- b. El proceso de reconciliación en conflictos de identidad es agotador, prolongado y degradado. Puede iniciarse antes de las negociaciones de paz o durante las mismas. Pero continuará un tiempo después de acordada la paz.
- c. El proceso será iniciado por un pequeño grupo social (académicos, líderes religiosos, etc.). Al respecto, la propuesta de Olson de la acción colectiva, traída a colación en el capítulo anterior, nos permite tener en cuenta el cómo se puede quebrar el problema de la acción colectiva con incentivos selectivos y liderazgos implicados que faciliten el proceso de cohesión social en una dinámica de post-conflicto hacia la reconciliación social.
- d. El proceso incorpora dos tipos de medidas, unas llamadas “calientes” y otras, “frías”. Las llamadas “medidas calientes” hacen referencia a empatía, disculpa y perdón. Las “medidas frías” se refieren a narrativas de conocimiento y reconocimiento. El impacto de la narrativa nacional en un conflicto de identidad es la clave para entender la tenacidad y el potencial para el cambio.
- e. Es la reconciliación entre dos tipos de demandas: primero, el desarme y, luego, la incorporación de las narrativas nacionales contradictorias en el discurso público de dos sociedades antagónicas.

46. Esta propuesta procesual de reconciliación social está centrada en conflictos de identidad que necesitan crear narrativas con sentido nacional a raíz de meta-narrativas que susciten un comportamiento abierto al reconocimiento de la otra persona y/o etnia. A través de las meta-narraciones pueden incorporarse símbolos básicos, valores, creencias y códigos de comportamiento de una colectividad, sirviendo esto como la representación simbólica de un *ethos* nacional, afirma Auerbach (2009, p. 12).

Bajo esta perspectiva, el desarrollo de la “pirámide de la reconciliación”⁴⁷ desde este *ethos* narrativo busca la sanación de las heridas de la gente, pues el material de los acuerdos políticos logrados centra su atención en la resolución del conflicto y puede ser un elemento que facilite el camino hacia la reconciliación, pero no puede facilitar el necesario ambiente psicológico que haga factible la genuina reconciliación. Estos supuestos del proceso de reconciliación social los podemos soportar en la teoría de las “coaliciones ganadoras”, propia del institucionalismo normativo, donde la importancia de las ideas/creencias en la configuración de políticas es clave para la institucionalidad que permita lo justo y eficaz de una política de reconciliación social. A su vez, la dinámica relacional de los actores y la estructura respectiva de la decisión tomada por la reconstrucción social se hace explícita en la misma “pirámide” que acabamos de describir.

Esta posición de Auerbach nos brinda la oportunidad de contemplar lo que pretendemos abarcar cuando hablamos de la reconciliación social desde un *ethos* o forma de vida. Este autor se centra en los conflictos de identidad que se pueden diferenciar de los conflictos más comunes centrados en diferencias por territorio, control económico, ideologías, etc. Sin embargo, al buscar estructurar el “puente entre ética pública y reconciliación social” nos parece acertado considerar una perspectiva de lectura desde la forma de vida que se pretende reestructurar en sociedades que han vivido situaciones de conflicto y violencia. Es pertinente poner la resolución de conflictos como medio alternativo de la conflictividad en materia política, pero la reincidencia de etapas de alta beligerancia en sociedades políticamente organizadas nos lanza a confrontar los mecanismos políticos que se suelen utilizar en este tipo de situaciones para abrirnos a una opción ética. Es el ingreso al ámbito de las creencias que desde la teoría sociológica de Hedström hemos asumido como marco desde donde construimos nuestro horizonte de ética pública para la reconciliación social.

El programa USAID –Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional– da al concepto de reconciliación social una definición singular: es un proceso que comienza con la aceptación de los adversarios de los derechos de los otros para coexistir en una sociedad en guerra. Reconciliación Social no presupone tolerancia, sino que la promueve. En algunas circunstancias, podría culminar en el comienzo de la mutua confianza (Kumar, 1999, p. 9).

47. Los elementos claves de esta propuesta se pueden profundizar en el texto de Auerbach Yehudith que hemos citado. Mencionamos las siete etapas rápidamente: 1) relaciones con choques narrativos, 2) reconocimiento de las narrativas de los otros, sin necesariamente aceptarlas como verdad, 3) asumiendo, por lo menos parcialmente, la presente responsabilidad de los otros en las situaciones difíciles, 4) expresando disposición para la restitución o reparación por los errores pasados, 5) expresando empatía por la difícil situación de los otros, 6) pública disculpa y solicitud de perdón por los errores del pasado, 7) esfuerzos para incorporar narrativas opuestas dentro de una aceptación mutua de las cuentas del pasado (2009, p. 23–34).

Otro aporte a la estructuración del concepto de reconciliación social nos lo ofrece John Paul Lederach (1998, p. 59), quien la entiende como *focus* y *locus*. Es decir, como *focus* —sentido del mismo— tiene una perspectiva en cuanto se estructura y orienta hacia los aspectos relacionales de un conflicto. Como *locus* —ubicación del mismo— es un fenómeno social, un espacio —lugar o punto de encuentro— donde se reúnen las partes de un conflicto. La reconciliación, afirma Lederach, ha de invitar a la búsqueda de un encuentro donde las personas puedan replantearse sus relaciones y compartir sus percepciones, sentimientos y experiencias, con el fin de crear nuevas percepciones y una nueva experiencia compartida.

Notamos que esta concepción que tiene Lederach respecto a la reconciliación social contiene elementos religiosos que, en cierta medida, podrían condicionar un verdadero proceso político de reconciliación social. No negamos la ilación directa que podemos hallar en el concepto y su origen, pero este tipo de experiencias no puede limitarse a elementos metodológicos de “encuentro” entre las partes, sino que debe avanzar hacia la concreción de mecanismos políticos reales donde sea viable la reconstrucción social que ha sido rota por la situación de conflicto y violencia.

Lederach afirma que la reconciliación se basa en una paradoja que articula fuerzas e ideas aparentemente contradictorias, pero en verdad interdependientes. Para este autor hay tres paradojas específicas que es importante traer a colación en este momento:

- a. La reconciliación promueve un encuentro entre la expresión franca de un pasado doloroso y la búsqueda de la articulación de un futuro interdependiente a largo plazo.
- b. La reconciliación proporciona un punto de encuentro para la verdad y la misericordia, donde está ratificado y aceptado que se exponga lo que sucedió y se ceda a favor de una relación renovada.
- c. Reconoce además la necesidad de dar tiempo y espacio a la justicia y la paz, donde enmendar los daños va unido a la concepción de un futuro común.

Pero estos elementos paradójicos deben ser operacionalizados a través de una política real de reconciliación social que, conteniendo elementos éticos fundamentales, no desconozca el papel de la justicia en la dinámica de la *polis*. La relación víctima–victimario–sociedad no puede quedar supeditada a espacios de “encuentro” y expresiones de una y otra parte revelando los sentimientos, sino que la idoneidad de la reconstrucción social está en que los mismos mecanismos que la sociedad política ha instaurado para la convivencia se hagan efectivos en situaciones límite, tal como es un proceso de post-acuerdos y, luego, de post-conflicto. Ante esto podemos

mencionar que “el problema de la unidad social tampoco se soluciona mediante una solidaridad de los afectados por una misma pérdida” (Innerarity, 2006, p. 136). La apuesta es por un marco institucional fundamentado en la justicia social y en la ética pública como principios fundantes.

2.3. Principios para un proceso de reconciliación social

La fragmentación de una sociedad política por medio del conflicto contiene salidas alternativas que no pueden desconocer la alta injerencia de lo político en las mismas. Es una combinación entre medios estratégicos y fines de lo político lo que hace factible que un proceso de post-conflicto tenga éxito. Carlos Beristáin lo expresa como un dinamismo de interdependencia que está entre reconciliación y democracia. “Al hablar de una eficaz salida democrática en situaciones de post-conflicto, se deben tener en cuenta dos perspectivas: la de estructuras y la de procedimientos que permite manejar los temas en conflicto que dividen a la sociedad” (Beristáin, 2004, p. 15).

Un compromiso político democrático en proceso de post-conflicto requiere de políticas que se orienten a solucionar las causas del conflicto y que faciliten el acercamiento dialógico entre los que implementan las soluciones (Estado, políticos y población), propone Beristáin. De esta manera, la definición de unos elementos mínimos que nos permitan vislumbrar una estructura de política de reconciliación social es un elemento clave que no podemos descuidar.

Ya anotamos que la definición conceptual de reconciliación contiene en sí una polarización que no se ha podido superar a lo largo de estos más de veinte años en que se ha utilizado con fuerza. A ello se suma la diversidad de espacios contextuales en los que se ha tratado de implantar y, por ende, las distintas percepciones que existen respecto a este tipo de salidas a situaciones conflictivas. Hay grupos que confían plenamente en estos procesos, mientras otros se oponen de manera rotunda al percibir debilidad institucional en las concesiones que se pueden ofrecer al existir este mecanismo. Sus rasgos más importantes serían (Bueno, 2006, p. 67):

- a. Es un proceso paulatino que se suscita desde las mismas condiciones de conflicto y violencia. Pero este proceso no debe estar enmarcado dentro de “planes o propuestas de gobierno” que los políticos asumen, sobre todo en temporadas electorales, como programa personal o partidista. Las condiciones de fragmentación social no son susceptibles de este tipo de “trabajos temporales”. La reconciliación social es procesual y, como tal, debe ser desarrollada.
- b. Al ser un proceso que busca la salida a situaciones conflictivas y, en la mayoría de los casos, promueve la reconstrucción social, requiere del elemento dialógico (deliberati-

- vo) en todos sus tiempos. Este recurso del diálogo y/o la deliberación debe realizarse en todas las esferas sociales (autoridades, políticos, población, victimarios, víctimas, etc.).
- c. El elemento de la justicia debe ser clave para articular la dinámica misma. Pero no puede ser el tipo de justicia punitiva a la que usualmente recurrimos en la sociedad cuando existe una infracción legal. Los procesos de reconciliación social a nivel mundial han favorecido el fortalecimiento de la llamada justicia transicional,⁴⁸ como un mecanismo óptimo para facilitar el acceso al proceso de reconstrucción social.
 - d. La implementación de métodos de verdad, perdón, reparación y restitución, entre otros, son claves al momento de ejecutar estos procesos sociales.
 - e. Con este tipo de procesos, las sociedades políticas buscan la reconstrucción del tejido y la consolidación de instituciones legítimas y legales constituidas bajo un orden democrático estable.

Para John Paul Lederach la reconciliación social como proceso debe contener los elementos de la justicia, la paz, la verdad y la misericordia. A cada uno de estos componentes otorga otros instrumentos que se deben tener en cuenta, por ejemplo, para la justicia propone la igualdad, las buenas relaciones, el enderezar las cosas y la restitución como instrumentos esenciales para que el concepto de justicia soporte eficazmente este tipo de procesos.

Con toda esta estructuración cuidadosa que los procesos de reconciliación social han ido configurando a lo largo de la historia, inclusive con tantas experiencias a lo largo de la tierra en las que muchas sociedades han vivido el post-conflicto en sus territorios, se mantiene viva la pregunta ¿por qué no son tan eficaces y exitosos estos procesos en las circunstancias de reconstrucción social?

En una tentativa por acercarnos a lo que podemos apropiar como elementos esenciales de un proceso de reconciliación social, hallamos la propuesta de María Angélica Bueno Cipagauta (2006, pp. 67–73), para quien este tipo de dinámicas socio-políticas tiene un carácter multidimensional en el que intervienen dos esferas esenciales:

48. “La noción de Justicia de Transición [...] Abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella), así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos” (Secretaría General de las Naciones Unidas. “El Estado de derecho y la justicia de transición. En: Chinchón Álvarez, 2009, p. 51).

- Principios básicos que se deben tener en cuenta: Elementos que no se pueden desconocer para dar sustento al proceso y cuya presencia marca el éxito o el fracaso del mismo. Estos son verdad, memoria, justicia (carácter restaurativo), perdón, amnistía, reparación y restitución. En perspectiva de análisis de políticas públicas,⁴⁹ son las ideas y creencias que están deben ser consideradas en la fase de formulación.⁵⁰
- Actores o partes implicadas: Son los grupos o personas que intervienen o intervinieron directa o indirectamente en la dinámica de violencia o el fin de la violencia. Señala que los actores directos son las víctimas, los victimarios y el Estado. Como actores indirectos pone a la comunidad internacional, los organismos internacionales, los centros académicos, los medios de comunicación, los mediadores, la iglesias, entre otros. Desde la mirada del análisis de políticas públicas, son los actores que en coaliciones diversas impulsan el proceso. Los llamados *productos de una política pública* “surgen en la práctica de un proceso específico de toma de decisiones. Esto equivale a decir que proceden de interacciones continuadas y repetidas entre actores identificables que movilizan diversos recursos. Tales procesos se rigen por numerosas reglas institucionales, generales y/o propias del ámbito de intervención de que se trate” (Subirats et al., 2008, p. 117).

John Paul Lederach (1998, p. 57) estructura los elementos de la reconciliación social desde una dinámica que sintetiza como “el llamado a la reconciliación”. Este lugar contiene cuatro ejes sobre los cuales se dinamiza el proceso: la verdad, la justicia, la misericordia y la paz. Para profundizar en su propuesta, Lederach amplía el contenido de cada uno de estos cuatro elementos con miras a la concreción de los componentes de una dinámica de reconstrucción social.

49. Teniendo presente que el horizonte de sentido de la presente investigación es el acercamiento *hacia una política pública de reconciliación social*, sin buscar una formulación, diseño, implementación ni evaluación respectiva, si no sentar las bases de la urgente necesidad que tienen las sociedades de plantear la salida alternativa al conflicto y la violencia como un eje transversal de acción política, hacemos mención en este apartado del análisis de políticas públicas por cuanto la estructura que constituye un proceso de reconciliación social contiene en sí elementos que son identificables en la perspectiva de las políticas públicas. De esta manera, Subirats et al. (2008) señalan que en el análisis de políticas públicas hay seis tipos de productos en función de las características: 1) la definición política del problema público, 2) el programa de actuación político-administrativo, 3) el acuerdo de actuación político-administrativo, 4) los planes de acción, 5) los actos de implementación (outputs), 6) los enunciados evaluativos.

50. Este grupo esencial de principios que señalamos y que planteamos en perspectiva de una política pública de reconciliación social los podemos ubicar en la fase de formulación, más específicamente en lo que es denominado como “*la definición política del problema público* (DP). Comprende no solamente la firme decisión de emprender una intervención política, sino también, y sobre todo, el marco o *frame* desde el que se parte, la delimitación del ‘perímetro’ del problema público a resolver así como la identificación, por parte de los actores públicos, de las causas probables de éste y de las formas de intervención previstas” (Subirats et al., 2008, p. 116). Este marco desde el que se parte es el conjunto de creencias e ideas que deben elaborarse procesualmente en una definición de valores que permitan lo justo y efectivo de la reconstrucción social.

- La verdad implica admisión, transparencia, revelación y claridad en cada una de las fases y desde cada una de las partes implicadas.
- La justicia comprende la igualdad, las buenas relaciones, el enderezar las cosas y la restitución.
- La misericordia, en este tipo de procesos, hace referencia a la aceptación del otro, la gracia (impulso desde los valores y principios, en nuestros términos), el apoyo, la compasión y la cicatrización.
- La paz conlleva la armonía, la unidad, el bienestar, la seguridad y el respeto.

El equipo coordinado por Leonel Narváez (2010) concluye que la reconciliación es un proceso inaugurado con el perdón. El perdón puede prescindir de la reconciliación, pero es completado por esta (p. 81). Para este equipo de investigadores que desarrollan su trabajo desde el proyecto *Escuela de perdón y reconciliación (ESPERE)* de la Fundación para la Reconciliación, en Colombia, la reconciliación es un proceso que implica dos momentos: uno de gran énfasis psicológico y otro, más arraigado en los cambios sociales no violentos; en otras palabras, expresan ellos, para reparar personas, el perdón, para reparar relaciones, la reconciliación (2010, p. 207). A lo anterior, añaden que la reconciliación cubre diferentes niveles de contacto: reconciliación de coexistencia, la reconciliación de cohesión social y la reconciliación de comunión.⁵¹ Estos tres se fundamentan en los principios de verdad, justicia, acuerdos y memoria.

Respecto a la reconciliación social, Narváez y su equipo consideran que es un proceso político cuando se da en países en conflicto que bien puede iniciarse durante los mismos actos conflictivos o al cesar hostilidades. Estos investigadores sintetizan los presupuestos que debe contener un tipo de proceso, siguiendo a Alexandra Montoya (2006):

- Reconocimiento y legitimación de la memoria de todas las partes.
- Acuerdo en el origen del conflicto y reconocimiento de las partes que implica.
- Reconocimiento de la diversidad religiosa, ideológica y política y sus conexiones con el origen del conflicto.
- Reconocimiento de la legitimidad de las diferencias entre las partes tanto como las emociones asociadas con sus experiencias y significados atribuidos a las mismas.

51. La reconciliación de coexistencia busca el establecimiento de pactos de no agresión entre víctimas y victimarios, hecho por indiferencia, donde los cambios sociales están limitados a la no agresión. La reconciliación de cohesión social deposita un mínimo de intercambio social, también definido por la no agresión. La reconciliación de comunión representa el más fluido intercambio social, caracterizado por vínculos de amistad y solidaridad (2010, p. 208).

- Aceptación de los hechos en que hay un juicio moral que no es compartido por todas las partes y que tiene que haber un acuerdo en los valores básicos para eludir futuros conflictos.
- Reconocimiento de las consecuencias de los daños materiales, psicológicos, físicos y morales y la necesidad de reparación.
- Aceptación que durante el proceso de reconciliación pueden surgir diferencias que necesitan ser reconocidas, habladas y elaboradas para facilitar su resolución.

Según esta línea, la política de reconciliación implica una demanda basada en derechos, donde la verdad, la justicia y la garantía de no repetición están presentes en todo el estado de las ayudas políticas y mantenimiento del proceso (Narváez, 2010, p. 209).

Reflexionando desde esta misma dinámica, en un escrito anterior al presente ampliamos la propuesta de Lederach señalando nuevos elementos en un proceso de reconciliación social (Murillo, 2006, pp. 231-234):

- Consideramos el perdón un componente fundamental para este tipo de dinámicas de reconstrucción social. Contiene en sí mismo procesualidad (tiempo de espera), sanación, no olvido, celebración común o social (elementos del signo y el símbolo), restauración de personas y/o relaciones, reconstrucción de relaciones desde nuevas perspectivas (no necesariamente en la misma dinámica relacional anterior al conflicto).
- Anotamos el elemento de la paz como “paz no apresurada”, donde el restablecer lo roto por el conflicto y la violencia demanda un esfuerzo personal y social que va más allá de “programas de gobierno” o “propuestas puntuales” hacia el logro de la anhelada paz.

Robert Schreiter (1998) afirma que el proceso de reconciliación tiene las siguientes fases:

1. Fase inicial: Las relaciones de poder de una sociedad en conflicto comienzan a experimentar cambios. Se hace evidente una transformación. Crece la inestabilidad interna porque los oprimidos van afirmando su posición frente a los opresores.
2. Transformación: Se inicia la transición a través de un acontecimiento fundamental de manera simbólica. Posteriormente este acontecimiento va acompañado por otros menos significativos, pero relevantes. Aquí la reconciliación se vislumbra como posibilidad.
3. Reajuste: Comienza la reconstrucción de la sociedad. Se definen y consolidan los cambios respectivos, y se comienzan a dar los pasos para implementar elementos con visión de futuro.

En otro de sus textos, el mismo Schreiter (1992, p. 105–109) señala las características esenciales que él percibe en un proceso de reconciliación social:

- Actitud de escucha y espera (caminar al lado de las víctimas)
- Actitud de apertura a la condición humana que nos presenta en el otro (víctima o victimario)
- Actitud de atención y compasión
- Actitud de reconstrucción social sobre las ruinas de la antigua
- Confianza

La experiencia de Sudáfrica nos permite vislumbrar con más amplitud una serie de elementos que no pueden faltar en este tipo de dinámicas socio-políticas. Ante todo, la realidad conflictiva y violenta que Sudáfrica vivió a lo largo de su historia y que condujo a la búsqueda de alternativas en pro de la construcción de una realidad social y política distinta, reivindicando la dignidad de una raza mayoritariamente presente en esa región, nos presenta un factor clave en la reconciliación social: la búsqueda y definición de un marco de sentido desde donde se pueda reconstruir lo que ha sido roto. En Sudáfrica fue el proyecto de *construcción de nación* (*nation building*) después del logro de acabar con el régimen legal que justificaba la situación, el llamado *apartheid*.

Este marco general —desmantelamiento del *apartheid* y concreción del proyecto de *nation building*— posibilitó un proceso que ingresó en la denominada fase transicional en la que se llevaron a cabo elecciones, se iniciaron los procesos judiciales en medio de un contexto de amnistía que mantenía una inconformidad en gran parte de la población, especialmente víctimas, y se ingresó a un acuerdo compartido de poder con los que formaban parte del liderazgo del *apartheid*. Es la concreción de la “acción colectiva” sobre la que consideramos es fundamental consolidar una propuesta de política pública en esta materia.

Sin embargo, este proceso suscita detractores dentro y fuera de la misma dinámica porque la esfera de la relación víctima–hechos violentos–victimario suscita sentimientos encontrados entre la herida/el dolor ocasionado y sufrido, el acto punible cometido y las consecuencias personales y sociales que esto conlleva, con la subsiguiente aceptación de responsabilidades y aceptación del castigo que jurídicamente esté tipificado. La dinámica de tensión que se presenta en toda “acción colectiva”, donde la decisión está centrada en intereses individuales y/o grupales, marcando líneas claras de sentido de preferencias.

Sin embargo, aunque nos parezca irónico o contradictorio, el proceso de reconciliación social demanda un elemento ético que va más allá de procesar a los actores y sus actos, pues demanda

una “cuota de ceder para que todo el conjunto gane”. En la mayoría de los casos, la primera acusación en contra de estas estrategias está en la sensación de “impunidad” que puede dejar entre la sociedad, especialmente entre los más afectados o víctimas, por el alto grado de pérdida ante la “poca consecuencia” en el victimario de su acto. Al respecto, afirma Richard Wilson, hablar de la estructura de la reconciliación es un campo de discurso para volver aceptable y de sentido común la renuncia de la retribución legal con las ofensas del pasado. Esto crea un imperativo moral con descripciones de justicia retributiva como “deseo de sangre” y “justicia salvaje” y como una afrenta a la democratización y al nuevo orden constitucional (Wilson, 2005, p. 97).

La presencia de estos temores no puede frenar la estructuración y gestión efectiva del proceso. Por ello, en el caso de Sudáfrica, la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se constituye en un componente indispensable para esta realidad. Es decir, se necesitan mecanismos explícitos en los que la simbología resalta el importante papel de reconstrucción social en el que se halla la sociedad entera. Este tipo de organismos requiere de una dinámica interna que va marcada por el símbolo de unidad que contiene y el logro de ese marco dentro del cual el proceso se ha iniciado. El tiempo transicional que se exige al grupo humano requiere de concreciones institucionales y simbólicas donde cobre sentido el papel ético de reconstrucción en que se halla la sociedad.

A lo anterior, se suman los elementos de la justicia y el perdón, como mecanismos concretos a través de los cuales se desplaza el proceso. La justicia rompe los límites y las posibilidades de lo punitivo y se lanza a crear condiciones que permitan el acceso del victimario a la alternativa más allá del acto violento y a la víctima a la expresión pública de su rostro en busca de dignificación y, por ende, a la reparación que le es inherente por el abuso o indiferencia en el poder por parte de quien debió protegerla y garantizarle la vida. Russell Daye (2004, p. 5) enfatiza que este tipo de elementos (justicia transicional y perdón) no es un acto de perdón individual entre víctimas y victimarios, sino que es un “proceso a escala nacional”. Esto es, al afirmar que se debe crear un marco de referencia general (por ejemplo, *nation building*) se visualiza la unidad procesual que contiene en sí un sentido general o social, donde la justicia y la llamada/apertura a la experiencia del perdón no quedan como “islas” que solo pretenden ir llenando vacíos, sino que se miran desde una perspectiva amplia.

En esta línea, Daye (2004, pp. 113-144) ofrece una lista de objetivos para un programa o política sistemática de justicia transicional:

- La restauración y la celebración de la dignidad de las víctimas
- La implementación de las medidas de garantía de responsabilidad

- Afianzamiento, defensa y protección de los derechos humanos
- La implementación de las medidas para el avance de la justicia distributiva
- La prevención de la venganza y de otras formas de violencia
- La búsqueda de la reconciliación

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Pacheco, Acevedo & Galli, 2005, p. 10) afirma que, aunque la reconciliación es un término complejo sobre el que no hay consenso en su definición y alcance, sí se ha podido establecer —en términos generales— que es un proceso dinámico muy complejo y de largo plazo. No puede ser impuesto desde fuera; no hay recetas o modelos válidos para todos. Es comúnmente aceptado que el reconocimiento de la verdad y la aplicación de la justicia constituyen elementos esenciales de la reconciliación. Asimismo, hay opinión creciente sobre la contribución fundamental que un proceso continuado de reconciliación tiene para la construcción y consolidación de la democracia sostenible y el desarrollo de una cultura de observancia de los derechos humanos en sociedades de transición.

En este mismo informe, podemos asumir los dos enfoques que Beristáin percibe en los procesos de reconciliación social como marcos dentro de los cuales se definen los elementos esenciales. Para Beristáin, las autoridades establecen enfoques *de arriba-a-abajo* que plantean acciones orientadas a la búsqueda de acuerdos de paz o de transición. Sin embargo, ni aspectos como el perdón ni las etapas individuales del mismo proceso pueden ser impuestas por autoridades; lo que sí pueden es ayudar a mejorar las condiciones políticas y sociales, creando un clima que anime los pasos privados hacia esos procesos; por ejemplo, Nelson Mandela en Sudáfrica. Pero, también podemos encontrar experiencias con enfoques *de abajo-a-arriba* que estimulan la participación y la reconstrucción de las relaciones interpersonales o grupales en el ámbito comunitario. Este tipo de iniciativas son loables, pero requieren de un soporte o contexto facilitador que, en últimas, es el que ofrece la estructura política (Pacheco & Acevedo, 2005, p. 14). Es el caso de la Asamblea de la Sociedad Civil en el proceso en Guatemala, con un alto grado de “capacidad de diálogo, negociación y acuerdo entre los diferentes sectores que participaron en ella” (Álvarez, citado en Barnes (ed.), 2004, p. 63).

2.3.1. Instrumentos de la reconciliación social

A modo de ir organizando nuestras ideas desde la perspectiva que nos hemos propuesto de estructurar el puente teórico entre ética pública y reconciliación social, consideramos importante a estas alturas buscar la concreción de lo que entendemos por reconciliación social y los elementos que consideramos esenciales para este tipo de dinámicas, teniendo en cuenta que en nuestro tercer capítulo podremos detenernos en los que consideramos son los fundamentales.

Aunque el concepto de reconciliación social sea una esfera del conocimiento que no contiene un acuerdo generalizado sobre lo que entendemos por ello, sus características e implicaciones, sí podemos sintetizar que es asumido como un *proceso gradual y paulatino que surge en un contexto de conflicto y/o violencia conducente al establecimiento de nuevas condiciones de convivencia que posibiliten superar las situaciones que originaron la ruptura del contexto común (relaciones interpersonales, grupales o sociales), fundado en un ethos común*. Al ser considerado un proceso contiene dos tipos de marcos organizativos que podemos condensar en:

- Instrumentos estructurales
- Instrumentos de sentido o éticos

Cuando hacemos referencia a los instrumentos estructurales pretendemos abordar los mecanismos institucionales y estratégicos que una sociedad en conflicto asume para ingresar a este tipo de procesos: de organización política (gobierno, asociaciones, organismos internacionales, ONG, sociedad civil), procesos de toma de decisiones políticas (impulsar normas, mesas de diálogos, reuniones intersectoriales, etc.), de organización social (diálogos que conducen al inicio del proceso, negociación, mediación, acuerdos, etc., propiciados desde las organizaciones de la sociedad civil) que, junto a las estrategias (acuerdo de cese de hostilidades, ofrecimiento de beneficios judiciales para los victimarios, creación de espacios hacia la reconciliación, etc.), crearan ese marco general dentro del cual se pueda garantizar el acceso al inicio del proceso. En términos de Beristáin, estas pueden ser las iniciativas *de arriba-a-abajo*.

Los instrumentos de sentido o, como los hemos llamado, éticos son las condiciones que centran su atención en los principios y valores que van a orientar la actitud en los implicados dentro del proceso. Es decir, la sociedad política puede ofrecer todos los términos y las condiciones procedimentales para que la dinámica favorezca la salida alternativa al conflicto y la violencia (gobierno abierto al diálogo, ofrecimiento de beneficios, acogida a las víctimas, mecanismos de justicia transicional, entre otros), pero si los actos violentos continúan o se rompen los compromisos por actitudes de intransigencia por una de las partes, la reconciliación hallará piedras en el camino que crearan un ambiente de desconfianza, lo que terminará desgastando la herramienta, como posiblemente ha sucedido en muchas ocasiones. De ahí la importancia del compromiso moral, no meramente del interés inmediato.

No obstante, a primera vista se puede afirmar que es difícil garantizar la idoneidad actitudinal en los actores clave (sea político, víctima o victimario, por citar solo estos actores), es decir, es complicado acceder a ese fuero interno del sujeto y, desde luego, hacer previsiones basadas

en datos tan incontrolables. Aun así, no podemos desconocer que esta clase de dinámicas requiere un esfuerzo común o público que nos lance a ciertos mínimos esenciales en los que todos debemos coincidir para que lo social se beneficie de la reconstrucción que buscamos. Es ceder un poco a nivel individual para que todos ganemos: principio fundante de la resolución de conflictos. En suma, aunque sea difícilmente operativizable, sabemos por la experiencia existente que la dimensión moral es esencial en el proceso.

A estos dos elementos esenciales de la reconciliación que resaltamos, se añaden los que ya los diferentes autores, según el estudio de caso desde donde estructuran su teoría o la dinámica misma del proceso, señalan: justicia, verdad, reparación, restitución, compasión (misericordia), paz, acuerdos, etc. Todos son componentes de una misma dinámica procesual que busca la reconstrucción social de un espacio que ha sido fragmentado por medio del conflicto y la violencia.

Con todo y esto se mantiene viva y presente la pregunta que nos lanza a esta reflexión desde la perspectiva del establecimiento de un “puente teórico” entre la ética pública y la reconciliación social: ¿Cómo hacer más justos y efectivos los procesos de reconciliación social en situaciones de conflicto y violencia? Mas, ¿qué sucede al momento de gestionar las iniciativas alternativas al conflicto y la violencia en sociedades que han vivido largos procesos de fragmentación social? Desde la ética pública podremos dar un paso hacia nuestras respuestas. El estado de persistencia en el tiempo de este tipo de iniciativas se puede dinamizar con más efectividad desde el establecimiento de ideas y creencias con sentido de cohesión social que permita la reconstrucción de lo común. Para ello, la relación actores—estructura debe fundarse en valores institucionales de consolidación de lo público.

Con esta rápida revisión a lo que algunos autores y corrientes apprehenden como reconciliación social podemos sintetizar gráficamente este concepto como el diagrama que vislumbramos en el presente texto. En este cuadro sintético tenemos los elementos comunes que podemos definir como:

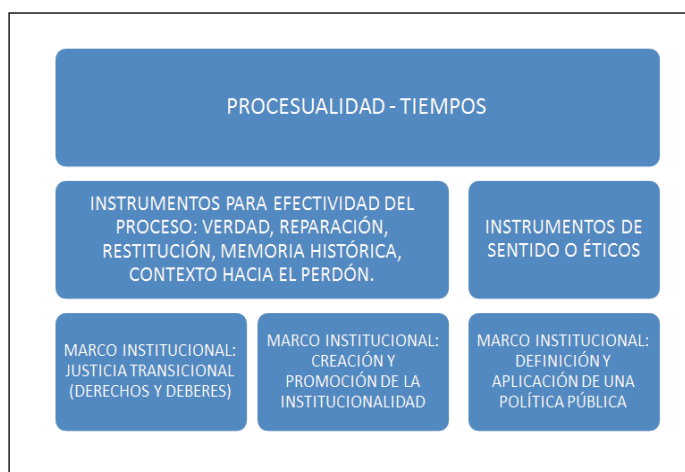
- La comprensión de que la reconciliación social es un *proceso* que, en su misma esencia, nos demanda la señalización de “tiempos”⁵² dentro del mismo.

52. De acuerdo a la organización lineal del tiempo consideramos en nuestra investigación que el tiempo de un proceso de reconciliación social contiene las dimensiones del *corto, mediano y largo* plazo. En el corto plazo tenemos en cuenta los diálogos, las negociaciones, los primeros acuerdos para el cese de hostilidades. Sin embargo, puede darse el caso del inicio del proceso en medio del conflicto, para lo cual el proceso demanda unas condiciones mínimas que garanticen el comienzo del mismo. En el mediano plazo ubicamos la creación de los instrumentos estructurales más formales y la apertura a la definición del *éthos* que garanticen el proceso en sí. Finalmente, en el largo plazo está la creación del marco integral para la reconstrucción social gestionada por una política pública clara. A su vez, aclaramos que estas dimensiones temporales no se dan

- La creación de *instrumentos* para la efectividad del mismo, tales como: la verdad, la reparación, la restitución, la creación de la memoria histórica de lo vivido y la apertura a espacios y oportunidades para el perdón. A este tipo de instrumentos los llamamos “*instrumentos estructurales*”.
- La creación y definición de *instrumentos de sentido* o éticos que logren la cohesión de la misma reconstrucción social. Es importante que se logren unos mínimos para que los acuerdos faciliten el mismo proceso. Sin compromiso moral los instrumentos serán usados estratégicamente por los actores y desnaturalizados.
- La estructuración y gestión de un *marco institucional* acorde a las circunstancias, pero que contengan el elemento de la justicia transicional (aclarando los derechos y deberes tanto de las víctimas, como de los victimarios y la sociedad en general). A su vez, este marco exige la promoción del principio de institucionalidad que va más allá de la simple creación de organismos y oficinas encargadas del proceso. También consideramos importante la definición y aplicación de una política pública clara.

Aunque los elementos del marco institucional que mencionamos no están explícitos en los autores y corrientes que hemos citado en el intento de buscar un significado de reconciliación social, lo deducimos de las mismas lecturas y nos abren la puerta para ubicar nuestro objeto de investigación.

Ilustración 6. Procesualidad – Tiempos



Fuente: Elaboración propia

una detrás de otra, hasta tanto no se haya cumplida una, sino que se van produciendo dinámica y paralelamente, contando con el efecto y el objeto de trabajo de acuerdo con el horizonte de reconstruir la sociedad.

2.3.2. Las creencias en un proceso de reconciliación social

La reconciliación es un proceso de la propia sociedad afectada por la guerra que implica el reconocimiento mutuo de los daños causados, el arrepentimiento y compromiso a no repetirlos, la reparación de agravios pasados (aunque no la venganza), la superación de los traumas, la creación de unas nuevas relaciones sociales y, en definitiva, un cambio en las percepciones mutuas y las actitudes hacia el otro. Por consiguiente, requiere un tránsito desde los sentimientos de desconfianza, hostilidad y odio hacia los de respeto, confianza, solidaridad, armonía, participación y desarrollo compartido (Bennett & Kayetisi-Blewitt, 1996, p. 42).

La mezcla entre elementos estratégicos o procedimentales con lo actitudinal en cada actor en un proceso de reconciliación nos pone ante el horizonte ético como un espacio desde donde sea posible consolidar con efectividad los procesos de reconciliación social. La dinámica vivida en Sudáfrica con la Comisión de Verdad y Reconciliación en el proceso de post-conflicto debió haber comenzado con una versión oficial del pasado que finalizaría con una amplia narrativa moral en vez de limitarse a lo histórico. El énfasis en una respuesta moral a las atrocidades en la historia de Sudáfrica deja abierta la pregunta de qué tipo de marco de explicación socio-política debería usarse para entender las causas de las violaciones a los derechos humanos (Wilson, 2005, p. 55).

Por otro lado, el proceso de post-conflicto centroamericano, específicamente en El Salvador, nos centra en la perspectiva ética al hallar puntos de vista como el del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. En el documento sobre los desafíos para la democracia y la convivencia social expresan que “debe existir una creciente participación ciudadana en defensa de su dignidad, fomentada y tomada en serio por la administración pública para generar una dinámica de credibilidad y confianza que permita avanzar —con humildad y generosidad— en el camino hacia un perdón basado en la verdad y la justicia” (Pacheco & Acevedo (edit.), 2005, p. 172).

Ante el desmantelamiento de la estructura social que un conflicto origina, la reconstrucción social debe fundarse en un *ethos* que posibilite el reencuentro de las distintas esferas sociales que se mantuvieron polarizadas por la misma situación conflictiva. Ya mencionamos con anterioridad cómo se construye el sentido social desde la perspectiva de Marc Augé, es decir, esa dinámica entre la identidad/pertenencia de los sujetos en relación de encuentro con otros distintos/diferentes (alteridad) se moviliza cuando entran en choque diversas perspectivas. En la misma línea, Hedström y Olson nos permitieron acceder a la dimensión del actuar colectivo. Desde allí, lo social cobra sentido cuando la *polis* nos abre a la dinámica de construir lo público, lo común, desde esas diferencias que se acercan dialógicamente para hacer posible esa esfera de todos. En un sentido similar, Hedström nos dejó abierta la posibilidad de considerar los deseos, las creencias y las oportunidades como columnas sobre las que se basa un análisis social.

Innerarity afirma que la invención comunitaria define una tipología azarosa de lugares y destinos, de situaciones y acontecimientos que, precisamente por su carácter heterogéneo, ofrece numerosas oportunidades para hacer valer los significantes igualitarios, para verificar lo común y lo diverso, haciendo así de la sociedad una comunidad polémica de los iguales (2006, p. 136). En este sentido, nuestra apuesta está enraizada en la revalorización de esa conflictividad (polémica) que nos permite asumir lo diverso como motor de lo común, pero desde una perspectiva ética, más allá de los simples mecanismos politizados de la sociedad.

El desarrollo de los sistemas democráticos a lo largo y ancho del mundo, acompañado del ascenso de enormes conflictos en varios rincones del planeta coloca como tema preponderante actual los mecanismos alternativos de resolución de conflictos o, en su defecto, las estrategias conducentes a la paz. Desde los organismos internacionales, pasando por la mediación y la conciliación en situaciones conflictivas, hasta llegar a la intervención directa “acordada” por bloques de países, la política (monopolio del poder) ha pretendido frenar, prevenir o evitar los choques, pero nos viene quedando una sensación de “no saber qué sucede” ante la inestabilidad social que se percibe en las sociedades que enfrentan o han vivido períodos de conflicto y violencia. Las estrategias están definidas, el surgimiento de nuevos modelos está garantizado, pero las diversas maneras de asumir estas realidades contienen en sí un *plus* que siempre hace reventar la problemática por otro lado.

Como recordamos, *nuestra hipótesis se centra en que el faltante de lo justo y la efectividad está en la ausencia del elemento ético de este tipo de procesos*. Se buscan estrategias para detener los nefastos resultados a nivel inmediato, pero no se visualiza la magnitud del mediano y largo alcance en este tipo de dinámicas. Aún más, pareciera que la salida a los conflictos centrara su atención en un asunto de mecanismos estratégicos que se politizan y condicionan a la visión de gobiernos, partidos políticos y/o ideologías. En términos de Innerarity, falta responsabilidad política respecto al futuro, lo que resulta de asumir culpas unilaterales, “una primera exigencia de la responsabilidad respecto del futuro consiste en ir más allá de la lógica de corto plazo. Tomarse el futuro en serio exige de entrada introducir el largo plazo en las consideraciones estratégicas y en las decisiones políticas. La complejidad de nuestras sociedades nos obliga de hecho a extender los escenarios futuros que hemos de tener en cuenta para nuestras actuales decisiones y planificaciones” (Innerarity, 2009, p. 39).

El elemento ético es fundamental ante la responsabilidad de la política en el futuro social. No es un simple elemento que nos ofrezca lineamientos para exigir derechos y olvidarnos que existen los deberes o, por otro lado, luchar fuertemente para que se equilibren los deberes y los

derechos, sino que es una actitud vital respecto al sentido humano de lo social, del encuentro con los otros y las posibilidades que creamos para que la convivencia sea factible. Bertrand Russell considera que los seres humanos somos una especie animal de éxito en muchos aspectos: lenguaje, fuego, agricultura, escritura, herramientas y la cooperación a gran escala. Aunque en este último aspecto de la cooperación no hemos obtenido el éxito total por un conflicto entre la inteligencia y el impulso. Ante esta falencia en los éxitos de la cooperación y nuestra tendencia al enfrentamiento, surgen la ética y los códigos morales para mediar entre estas fuerzas del impulso y el dominio, por medio de propósito y acuerdos que nos ofrezcan reglas de acción que sean movilizadas por un propósito consciente —fin deseado— (Russell, 2002, p. 16-18).

Responsabilidad implica ser responsable. “La palabra responsable evoca la respuesta, y su sufijo la capacidad; ser responsable significa literalmente ‘estar en capacidad de responder’. La respuesta es todos los días un acto segundo que sigue a una pregunta. Ella resuelve un problema, da una solución, satisface una pregunta” (Etchegoyen, 1993, p. 45). A nivel moral, la responsabilidad implica la idea de un deber que tiene el sujeto de responder por sus actos. Para Etchegoyen, la respuesta al acto desarrolla dos tipos de series causales que divergen muy a prisa:

- La eficacia. Contiene la capacidad humana de ver a lo lejos las consecuencias de sus actos. Nos permite prever los efectos del acto humano.
- La imputación. Es la capacidad de discurso que nos permite constituir la serie causal de actos humanos en relación con la causa primera del acto mismo. Es la concatenación secuencial de los diversos actos desde la causa primera.

Desde esta perspectiva, la responsabilidad ética contiene el elemento de nuestra previsibilidad en el tiempo y contexto de nuestros actos individuales en función social y cómo esos actos contienen una secuencia directamente relacionada con la causa que nos motiva para actuar de X o Y forma. “El hombre responsable no sólo puede responder, sino que piensa que debe responder y que desea responder” (Etchegoyen; 1993, p. 53). Hombres y mujeres conflictivos, en dinámica violenta, somos convocados desde nuestra responsabilidad moral en cuanto podemos, debemos y deseamos responder a la reestructuración de lo común.

La vida en común, en sociedad, implica de nosotros esta responsabilidad ética. Ernst Tugendhat (1992, p. 214) afirma que

[...] cuando el punto de orientación de la identidad social ya no es determinada comunidad sino la comunidad, la convivencia con el otro en general, la universalidad y la igualdad son inevitablemente sencillas, porque se tendrían que dar

razones especiales para explicar por qué el respeto exigido debería ser jerárquico con relación a las diferentes grupos sociales y por qué debería limitarse a una determinada comunidad. Entonces, cuando las normas morales se relacionan a la posibilidad de comunidad en general, la igualdad y la universalidad se dan por sí mismas.

En la identidad social que demanda un proceso de reconciliación social desde un *ethos* público se marca una pauta de responsabilidad que nos lanza a contemplar que un determinado grupo o comunidad es merecedor de respeto por su misma existencia dentro de la comunidad ampliada que buscamos reconstruir. Tanto víctimas como victimarios, en este tipo de procesos, nos demandan actos responsables, de respuesta eficaz e imputable, para que todos comprendamos que la universalidad y la igualdad que propendemos es razón jerárquica prioritaria para el común ampliado.

El propósito consciente o fin deseado de la ética pública, “creencias” en nuestra propuesta, debe estar en la reconstrucción social de un contexto que ha sido fragmentado por medio del conflicto y la violencia. Buscamos ir más allá de las estrategias o mecanismos egoístas y autointeresados. Buscamos una actitud vital que surge desde la misma realidad humana conflictiva, constitutiva del ser humano, que nos impulsa a creer que lo público, lo común, es factible después de la ruptura. No es una “paraíso de mermelada” el que buscamos, sino la realidad humana, netamente humana, que se responsabiliza de lo social.

2.3.3. Creencias desde lo público

Consolidar el *ethos* público implica asumir un rol humanamente social, rompiendo los esquemas de la elección individual desde la maximización de “mis” intereses y necesidades, sin tener en cuenta el ámbito del encuentro con los otros, donde juntos podemos gestar lo colectivo, lo social. Pero la dimensión que nos convoca nos lanza al ámbito de lo común, lo público, como ese espacio donde no solo nos encontramos, sino donde construimos espacios de con-vivencia —de vivir con los otros— en una dinámica inter-relacional activa.

Rodríguez-Arana (2004) define la ética como ese conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas de acuerdo con la recta razón, de tal manera que es la primera entre todas las ciencias prácticas. Más que como una reglamentación, debe entenderse como la fuente de las cualidades, la disposición al hábito moral y la adecuación personal al ideal humano. Ante esta dimensión, este autor plantea la urgente necesidad de trabajar en un cambio de valores que todo ser humano debe asumir en su vida:

- a. La piedra angular de toda construcción civil y política, y el referente seguro e ineludible de todo empeño de progreso humano y social es la dignidad del hombre, de la persona, de cada vecino.
- b. La apertura a la realidad en la que las personas aprendamos de cada experiencia personal y ajena.
- c. Un pensamiento compatible en el que las personas podamos comprender las contradicciones mismas de la historia. Es abrirnos a la comprensión que lo público no es opuesto ni contradictorio a lo privado, sino complementario.
- d. Un pensamiento dinámico que nos lleve a comprender que la realidad es abierta, dinámica, en permanente cambio; no solo evolutiva, sino preñada de libertad. Debemos superar la tendencia a definir estáticamente las cosas y circunstancias.
- e. El diálogo es elemento ético desde la bondad que se exige en sí al comunicarme con el otro/los otros.
- f. La participación, a través de la cual el individuo se hace protagonista de sus acciones y desarrollo y posibilita con su actuar que los demás también lo sean.

Javier Muguerza, en el contexto del seminario público “Derechos Humanos y Ética Pública” (Fundación Juan March, 2000, pp. 71-72), define la ética pública como contraposición a lo que se podría llamar la ética “privada”. De ahí, expresa este autor, no se desprende, sin embargo, que hayamos de contraponerla a lo que se conoce como la ética “individual” o “personal”. La razón de ello estriba en que, en definitiva, no hay otros sujetos morales que los individuos, de suerte que la ética pública hunde sus raíces en la ética individual o personal, la cual, tampoco se reduce al ámbito de lo privado. Sintetiza este autor en que la ética pública es, eminentemente, una ética social que, en últimas, implica asumir al individuo en relación (situado dentro de un contexto social).⁵³

La ética en la vida pública, para Adela Cortina, funda su base en la necesidad que tienen las instituciones humanas, especialmente las de más magnitud (el Estado, la economía y la empresa, las actividades profesionales y el llamado “tercer sector o sector social”) para que puedan funcionar. Es decir, el valor de uso les brinda la posibilidad de consolidarse legítimas y

53. Este académico basa su reflexión desde la perspectiva de Aranguren, para quien la ética del individuo en un espacio social es una ética de la alteridad o de las relaciones interpersonales. Pero esto no es suficiente en la dinámica relacional política, pues se necesita el paso de la sociedad civil a la sociedad política, donde las exigencias morales de igualdad fundan lo común, donde las relaciones impersonales hacen explícita la ética de la aliedad que, formando parte de la ética pública, está encargada de la regulación de las relaciones sociales institucionalizadas, es decir, las relaciones entre los ciudadanos que discurren en el plano de las instituciones estatales (Fundación Juan March, 2000, p. 73-74).

viables desde un actuar ético. Desde allí, la ética pública, en la perspectiva de Adela Cortina, no es simplemente el deber ser del funcionario público, sino que es un espectro del *ethos* humano que sustenta la acción en la vida en común (1998, p. 98). Son las *creencias* que hemos asumido como fundamento de un proceso de reconstrucción social a través de una política pública.

Las exigencias que Adela Cortina pone al desempeño legítimo y viable de las instituciones sociales que deben responder a la urgente necesidad del *ethos* en la acción los sintetiza así (1998, pp. 98–104):

- Credibilidad y confianza como soporte de la acción institucional.
- En la vida pública nuestro proceder debe ir más allá de la obligatoriedad jurídica. Esto es, las solas leyes no garantizan un comportamiento ético.
- La complejidad social actual nos devela una realidad en la perspectiva de resolver conflictos: lo jurídico es insuficiente, lo ético es un *plus* que garantiza mejor el camino alternativo.
- La adquisición de hábitos fiables, éticos, ante la globalización informática y financiera, es una exigencia.
- La competencia exige a las empresas “fidelizar” a los clientes con acciones que susciten confianza y credibilidad.
- Integrar a todos los que trabajan en el actuar corporativo.
- Se deben perseguir las metas por las que la sociedad ha aceptado la existencia de las instituciones y que asuman la responsabilidad social que les compete.

Se entiende que la ética es “rentable” para instituciones y organizaciones, porque es una necesidad en los sistemas abiertos, como hemos dicho, pero también porque aumenta la eficiencia en la configuración de los sistemas directivos, es factor de innovación y un elemento diferenciador, que permite proyectar a largo plazo desde los valores y, sobre todo, reduce costes de coordinación internos y externos a la organización (Cortina, 1998, p. 105).

No obstante, la ética pública es un horizonte más amplio que, fundando el actuar de las organizaciones, permea toda la vida en común. En este sentido, Adela Cortina hace referencia a la ética pública cívica como el conjunto de valores y normas que comparte una sociedad moralmente pluralista y que permite a los distintos grupos, no solo coexistir, ni únicamente convivir, sino también construir su vida juntos a través de proyectos compartidos y descubrir respuestas comunes a los desafíos que se enfrentan (1998, p. 109).

Las propuestas desde José Luis Aranguren, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Adela Cortina, Victoria Camps y Manuel Villoria Mendieta, entre otros, abren el horizonte de comprensión de

la ética pública y nos brindan la oportunidad de ampliar la esfera de lo que es la eticidad común en un entorno social, donde la construcción de lo público —la acción social tras el bienestar general— cobra sentido. Para Aranguren es ética social; según Rodríguez-Arana constituye una esfera del *ethos* que implica un más allá de la labor que desempeñemos a nivel social o personal; acorde con Adela Cortina es lo que sustenta la acción en la vida en común; para Victoria Camps son los mínimos éticos que una persona debe asimilar para aprender a convivir correctamente y en bien de todos (2010, p.103); Manuel Villoria Mendieta considera que es una hacerse colectivo (2000, p. 19).

Esta reflexión de lo ético nos ubica en la relación interpersonal que se establece en un juego entre *mi* percepción respecto a las *otras* percepciones y la *diferencia* que marca la posición respecto a la situación. Por tanto, lo subjetivo de la ética nos devela al instante la objetividad de la misma, es decir, cuando lo ético se hace práctico en sí mismo o, como lo denomina Adela Cortina, es la ética aplicada (Cortina & García-Marzá (edit.), 2003, pp. 21-23).

Esta dimensión de la ética aplicada que acabamos de citar consiste en la recurrencia a la reflexión y al lenguaje filosóficos como elemento imprescindible, pero aplicándola a los problemas cotidianos. A su vez, esta aplicación de la ética limita su ámbito de prescripción a las cuestiones exigibles por una ética cívica, y no se entromete en los proyectos personales de vida plena. Es la expresión de la ética cívica en las distintas esferas de la vida social. En este orden de ideas, es elaborada en una relación de interdisciplinariedad académica (filósofos, éticos, juristas, teólogos y afectados) que aporta al debate convicciones e intereses. Por último, afirma Adela Cortina, este tipo de ética no se construye desde una sola teoría ética (problemas diferentes requieren de teorías diferentes).

Ante lo anterior, lo objetivo de la ética, según Russell, nos permite desplazarnos de la ética personal a la esfera de la política (2002, p. 27). Esto lo ha comprobado el desarrollo mismo de lo ético en la historia humana, entre lo político y las convicciones personales religiosas y morales. Es una dualidad que podemos denominar “opuesto complementario”: “sin moralidad cívica las comunidades perecen, sin moralidad personal su supervivencia no tiene valor. Por tanto, la moralidad cívica y la personal son igualmente necesarias para un mundo feliz” (Russell, 2002, p. 28).

Tanto ética como moral son dos expresiones que no hallan diferencia ni etimológica ni práctica. Costumbres, carácter, manera de actuar, en griego y latín, nos lanzan a la misma dimensión humana que propende por el buen obrar de la persona. Al acercarnos al ámbito de lo público en su eticidad pretendemos asumir la esfera de la democracia deliberativa en cuanto sistema político que favorece la capacidad y derecho de los miembros del constructo social para definir y

gestionarse su organización, dentro del marco constitucional que previamente se ha establecido. “El aspecto deliberativo de la democracia es el sistema político que posee una esfera pública en la que los ciudadanos ven garantizado su derecho a deliberar sobre las políticas coercitivas públicas de manera que estas, una vez que han sido aprobadas en sede parlamentaria, sean el producto decantado de los intercambios ciudadanos sobre asuntos públicos” (Camps (ed.), 2010, p. 118).

La ética contiene la dimensión individual del sujeto en su relación dinámica de acción–interrelación en la diferencia. La ética pública nos pone frente a esta unión individuo–praxis desde lo diferente como marco en el que se construye el espacio en el que el ejercicio del poder contiene el diálogo y la deliberación como columnas sobre las cuales se convive y se coexiste. Pero, ¿por qué es público? Victoria Camps nos ofrece una respuesta a la que nos adherimos, “el espacio público lo constituyen los discursos formales e informales sobre asuntos que competen a todos, o asuntos públicos. Son los debates que llevan a cabo los ciudadanos sobre las políticas públicas y sobre la legislación” (p. 118). Por ende, en todo contexto hacia la reconstrucción social, el eje sobre el cual se debe diseñar y gestionar el asunto público de la paz después del conflicto y la violencia o, aún en medio del mismo, es la ética pública.

2.3.4. Fundamentación de la ética pública

Cuando ubicamos el origen de nuestro planteamiento compartimos que la situación de conflicto y violencia rompe la dinámica social que se origina en el encuentro de nuestra identidad y pertenencia con la alteridad (otras identidades y pertenencias). En este encuentro se hace patente la diferencia que abre la posibilidad del conflicto, pero no como medio de fractura social, sino como mecanismo dinamizador del mismo sentido de lo común. Al buscar la fundamentación de una ética pública para la reconciliación social no podemos desconocer este contexto donde nos ubicamos al iniciar nuestra reflexión.

¿Qué sentido tiene fundamentar lo ético? Fundamentar la ética pública no es otra cosa que hacer un ejercicio individual y social del *para* qué nos conduce a comportarnos de un modo determinado al encontrarnos con el otro/los otros, es decir, al vivir con otros en la esfera pública. A su vez, ese modo de comportarnos en lo común de X o Y manera tiene un motivo en la dinámica de la libertad individual que ve reducido su campo de acción al proclamarse la existencia de un contexto en el que no soy yo, sino que somos nosotros.

Para Aristóteles, como conocimiento y elección, la política tiende al más elevado de todos los bienes: la felicidad. En la búsqueda de este bien, la virtud⁵⁴ juega un papel de fundamento en la medida en que nos ordena la vida en común. “El bien supremo es el fin de la política y ésta pone el máximo empeño en hacer a los ciudadanos de una cierta cualidad y buenos e inclinados a practicar el bien” (Ética a Nicómaco 1099b; 2010, p. 65). Solo desde la virtud se es capaz de tomar decisiones valientes, justas, prudentes, templadas, en un contexto de conflicto y violencia. Victoria Camps lo expresa como “una labor de discernimiento: distinguir qué debe ser enseñado, qué debe ser tolerado, a quién hay que ayudar, de qué hay que hablar” (2003, p. 11).

Este discernimiento que la ética nos demanda es lo que la fundamenta y justifica, aún más en el ámbito de lo público. Ernst Tugendhat habla de la justificación de lo moral desde dos maneras: la justificación por autoridad y la justificación recíproca (2002, p. 125). La justificación moral viene dada por la existencia de “autoridades” que buscan orientar nuestro proceder y que hace explícito en la norma lo que es correcto o no en la acción humana individual y social. Por ello, la persona que actúa desde esta perspectiva tiene claro que al pertenecer a un grupo humano debe cumplir las normas que se han establecido previamente por las autoridades legítimas y no puede omitir nada porque puede ser despreciado. “Una persona que se entiende como miembro de una sociedad moral no sólo no quiere ser despreciada sino tampoco digna de desprecio” (2001, p. 129).

Respecto a la justificación recíproca, Tugendhat hace un recorrido por las propuestas morales del utilitarismo, el contractualismo y el kantismo, para concluir que lo fundante de lo moral está en el concepto de bueno en sentido de lo que es bueno para todos por igual. Esto es, el concepto de justicia desde el ámbito de la igualdad, donde cada uno cuenta por igual (2001, p. 131). Por ende, lo que fundamenta una ética pública es la simetría social tras la cual tendemos día a día en acuerdo morales de con-vivencia, vivencia con otros (alteridad).

Pero si el sentido de ser moral consiste en la simetría, entonces lo moralmente correcto tiene un sentido donde parece ser inteligible decir que lo moral mismo es mi motivo. El que una persona actúe moralmente podría ser motivado simplemente porque ella no quiere entender su comportamiento como asimétrico, como explotando sus ventajas de poder. Tiene sentido decir: esta no es la manera como la persona quiere entenderse (2001, p. 134).

54. No podemos perder de vista que para Aristóteles la virtud es doble (una intelectual y otra moral) “La intelectual toma su origen e incremento del aprendizaje en su mayor parte, por lo que necesita experiencia y tiempo; la moral, en cambio, se origina a partir de la costumbre, por lo que incluso de la costumbre ha tomado el nombre como pequeña variación. De aquí resulta también evidente que ninguna de las virtudes morales se origina en nosotros por naturaleza: en efecto, ninguna de las cosas que son por naturaleza se acostumbran a otro comportamiento [...] Por consiguiente, las virtudes no se originan ni por naturaleza ni contra naturaleza, sino que lo hacen en nosotros que, de un lado, estamos capacitados naturalmente para recibirlas y, de otro, las perfeccionamos a través de las costumbres (Ética a Nicómaco, 1103a; 2010, pp. 75–76).

¿Qué fundamenta la ética pública? La capacidad del individuo para discernir el acuerdo del *ethos común* que deseamos garantizar para que el encuentro con el otro/los otros se base en una simetría donde la autoridad o la norma no constituya el sentido último de la sociedad, sino el marco dentro del cual la humanidad es posible más allá de nuestras búsquedas personales, donde la identidad individual se constituye en colectiva favoreciendo mi ser individuo simétrico. Por ello, las *creencias* que la propuesta de política pública en materia de procesos post-conflictivos debe centrar su atención en el mismo ejercicio de reconstruir lo colectivo que fue destruido por la violencia.

Aunque la ética contenga un inicio en el individuo como sujeto-persona, hallamos la dimensión o proyección social de los principios y valores que rigen el actuar en la vida en común. Es decir, ya no avanzaremos en la lectura privada de lo ético, sino que ingresamos a la amplia gama de la ética práctica en un contexto social, la política. Recalca Tugendhat (2007, p. 66) que el comportamiento en la convivencia social se parece mucho a los juegos. Hay reglas que no se dicen pero que debemos respetar, y los trucos o engaños no son permitidos. Hedström nos reconfirma esta interpretación desde la dinámica relacional de los deseos, las creencias y las oportunidades a través de las cuales el sujeto social se gesta, tal como lo señalamos con anterioridad en este mismo capítulo.

Una de las maneras como el mismo desarrollo del pensamiento político ha concretado más esa búsqueda de la mejor sociedad política y del mejor gobierno es el ámbito de la ética pública. Estamos convencidos de que la eticidad pública no se limita a ese grupo de hombres y mujeres que prestan un servicio a lo común, lo público. “Hemos conquistado el refugio de la privacidad y unos derechos individuales, pero echamos de menos una vida pública más aceptable y más digna de crédito” (Camps, 2003, p. 9). Así, ¿dónde fundamentamos la ética pública desde una perspectiva de reconciliación social? La política es la vida ética de la vida en común. No hay espacio público sin participación colectiva, ni políticos honestos sin ciudadanos virtuosos, parafraseamos con Araguren.

Esta manera de concebir la ética pública la refuerza Adela Cortina al reclamar que la confusión de lo público como algo netamente estatal está secando las energías revitalizadoras de una sociedad civil, que no tiene por qué conquistar el Estado, pero que, por derecho propio, está en la cosa pública. A renglón seguido, añade, cuanto tiene presencia y repercusiones públicas, es público y tiene responsabilidades públicas. “A mí me parece que es importante distinguir entre lo político y lo público, y darnos cuenta de que el terreno de lo público es el terreno de toda la ciudadanía, de toda la sociedad, y que todo aquello que tiene repercusiones públicas pertenece

a lo público” (Núñez, 1996, p. 93). Nosotros sumamos a esta reflexión que, así las cosas, lo político encuentra en lo público un cauce para hacerse real.

De esta manera, Adela Cortina (1998) nos brinda la posibilidad de sintetizar la fundamentación de la ética pública que le da sentido a nuestra apuesta de política pública con sentido de reconstrucción social. “La ética pública cívica consiste en aquel conjunto de valores y normas que comparte una sociedad moralmente pluralista y que permite a los distintos grupos, no sólo coexistir, no sólo convivir, sino también construir su vida juntos a través de proyectos compartidos y descubrir respuestas comunes a los desafíos a los que se enfrentan” (p. 109). Teniendo en cuenta nuestra propuesta, el compartir creencias e ideas en torno a la reconstrucción de una sociedad que ha sido rota durante largos períodos de conflicto y violencia conlleva una búsqueda de haberes comunes y la necesidad de ampliarlos para que permanezca esta búsqueda común en el tiempo. Es ir tras lo que Adela Cortina señala como “ética de los ciudadanos de una comunidad política concreta”.

La opción que asumimos de sentar las bases teóricas de nuestra propuesta desde los dos institucionalismos (histórico y normativo) halla en este punto su fundamento, por cuanto esta ética pública en perspectiva de reconciliación social no es otro aspecto que la construcción paulatina de “la moral de las organizaciones y las instituciones, de las actividades profesionales, de las vivencias de felicidad de los distintos grupos sociales, de la opinión pública y las asociaciones cívicas. Es pues una ética de los ciudadanos, surgida de la ciudadanía, no estatal. Es la ética que nace de un pluralismo moral, tomado en serio” (Cortina, 1998, p. 110).

Aún más en contextos de conflicto y violencia, marcados por graves grietas estructurales de injusticia social, inequidad, segregación, exclusión social, entre otros, la dimensión de la ética pública nos demanda ir “más allá de la firma de pactos o acuerdos de paz” que, en últimas terminan siendo “cese de hostilidades”. Hay unos condicionamientos mínimos que la política pública de reconciliación social debe sustentar, exigencias innegociables de justicia, tal como lo señala Adela Cortina. Una propuesta como la de esta investigación demanda pensar en la justicia, la verdad, la reparación, la restitución, la garantía de derechos a las víctimas, victimarios y sociedad afectada por los actos violentos y, por supuesto, la no repetición de los hechos. “Lo que importa es crear un mundo más humano, conjugando esfuerzos. Los juegos cooperativos, cuando el objetivo es común, son sin duda más inteligentes moralmente que conflictivos” (Cortina, 1998, p. 119).

Pero este proceso contiene en el elemento dialógico una “bisagra” que permite la objetivación de la misma ética pública. Para Habermas (1996), el debate colectivo y el público deben

ser los insumos que posibiliten la justicia política que, en últimas, es la que nos brinda la posibilidad de ser “ciudadanos con razonabilidad” (p. 163). En otras palabras, la ética pública es la acción humana desde la razonabilidad, donde lo justo en lo público se funda en la construcción consensuada a través del diálogo y la deliberación, donde todos puedan aceptar la decisión tomada. “Los ciudadanos pueden tener la última palabra solo cuando desde una perspectiva globalizante e intersubjetivamente compartida podemos decir: desde el punto de vista moral que ya participamos en la *formulación de estas ideas* (Énfasis añadido)” (Habermas & Rawls, 1996, p. 173).

Para Habermas, en la medida en que logremos la consolidación de procesos de diálogo y deliberación, la voluntad política de los ciudadanos podrá hacer efectiva la sociedad como un todo políticamente estructurado. La ética pública es, en estos términos, la gestión efectiva de la voluntad colectiva de los ciudadanos. “Así, democracia viene a significar autoorganización política de la sociedad en su conjunto” (2005, p. 373). Bajo la perspectiva de nuestra propuesta, los intereses y valores de los actores implicados en procesos de salida alternativa al conflicto y la violencia deben sustentar la acción colectiva conducente a reconstruir lo roto por los actos violentos. Así las cosas, la deliberación posibilita la construcción de lo común a través de la argumentación y del razonamiento público entre ciudadanos iguales, tal como lo propone Joshua Cohen, citado por Habermas (2005). Este ejercicio permite resolver los problemas de elección colectiva (p. 381). La ética pública es este conjunto de principios que permiten que la convivencia y la coexistencia sean factibles en una sociedad que busca la salida alternativa al conflicto desde el diálogo, con miras al establecimiento de la comunidad de ciudadanos o, en nuestros términos, la reconstrucción social.

Para Jürgen Habermas el diálogo (razón comunicativa en términos estrictamente habermasianos) ofrece el medio lingüístico como canal a través del cual “se concatenan las interacciones y se estructuran las formas de vida, el que hace posible la razón comunicativa” (2005, p. 65). Pero, ¿qué referencia tiene este aspecto en nuestra propuesta? Consideramos que es referente de nuestra reflexión en cuanto que la reconstrucción social mediante la reconciliación social a través de una política pública conlleva un *fin (telos)* que representa “el entendimiento intersubjetivo que obliga a adoptar una actitud realizativa y a comprometerse con determinadas suposiciones”, añade Habermas. Es decir, el diálogo nos demanda individual y colectivamente para que nos entendamos en medio de las diferencias en nuestros deseos y creencias, pero obligándonos comunitariamente a asumir actitudes proactivas que favorezcan el restablecimiento de lo público.

Para Habermas, el discurso dentro de la dinámica democrática “cuenta con la *intersubjetividad de orden superior* que representan los procesos de entendimiento que se efectúan a través de los procedimientos democráticos o en la red de comunicación de los espacios públicos políticos (Énfasis añadido)” (2005, p. 375). La institucionalidad marca esa pauta de orden superior, pero la gestación del sentir general para reconstruir la sociedad fragmentada contiene un detonante proactivo en los diálogos que la misma sociedad civil y en los acercamientos que gobierno, líderes sociales y sociedad civil y en general desarrollen a través de los diálogos más o menos institucionalizados existentes, tal como lo señala en su propuesta.

2.3.5. Principios de ética pública para la reconciliación social

Aunque la fundamentación que hemos dado con fuerza a la ética pública radica en la individualidad de un sujeto dispuesto para la vida en común, no podemos desconocer que la relación con lo jurídico, lo normativo, aparece como un factor determinante en esa misma expresión del poder en lo social, es un punto de intersección entre lo ético y lo jurídico (valor moral y norma positiva), en términos de Pedro Cerezo Galván (2010, p. 42–43). “Hay política cuando se traducen ideales de vida, que implican creencias y valoraciones, en tareas y acciones intersubjetivas públicamente sancionadas, o dicho a la inversa, cuando se realiza un proyecto común de convivencia, al que ningún modo puede ser ajena la convicción de lo que se estima bueno o conveniente para la vida en común”.

Esta vida con otros, en común, halla en el conflicto y la violencia una posibilidad de ruptura o quiebre donde lo individual termina primando sobre lo colectivo, creando la fragmentación de ese *sensus común*. Adela Cortina busca una salida mediada al referirse a que entre algunas personas y otras hay un acuerdo en que la violencia es intrínsecamente mala, expresión de un mal existente y generadora de mal, de suerte que contextos y consecuencias no pueden hacerla buena: la violencia es siempre indeseable, indigna de ser deseada. Por otra parte, también unos y otros aducen razones de eficacia mostrada por la historia, con lo cual el presunto absolutismo de los no-violentos resulta paliado y parecen todos convenir una ética de la responsabilidad: no es por convicción desligada de la historia por la que se mantienen posiciones, sino por responsabilidad, por eficacia a largo plazo (Cortina, 2008, p. 187).

La reconciliación social fundamenta la eficacia y la eficiencia de su actuar en la ética pública, desde nuestra perspectiva, en esta dimensión responsable del sujeto conflictivo que, por diversas circunstancias, accede a la violencia como mecanismo de obtención de sus intereses, necesidades y valores. Sin embargo, reconocemos que la dimensión normativa es el eje com-

plementario para este tipo de dinámicas en cuanto se requieren unas estructuras jurídicas, institucionales y sociales que posibiliten el acceso del grupo humano afectado a la reconstrucción social. En los capítulos 3 y 4 de la presente reflexión podremos puntualizar con más detalle esta dimensión. Lo justo lo marcará la dimensión deliberativa/dialógica de una propuesta de reconciliación social y la eficacia nos la ofrecerá el “modelo ideal” de política pública, con sus estructuras, procesos e instrumentos.

En este contexto, nuestra propuesta de investigación busca avanzar en esta manera de asumir lo ético en la esfera pública. No pretendemos cerrar la lectura de la eticidad en el contexto del Estado, los gobiernos y sus funcionarios. Abrimos la mirada a una concepción más amplia de la ética pública, por cuanto la cosa pública nos implica a cada uno de los miembros del entramado social. Sobre todo, cuando abordamos las dinámicas de conflicto y violencia que han roto esta misma esfera común, atañe a cada persona la reconstrucción de la “cosa pública” que se ha roto en el período conflictivo. Una política de reconciliación social no puede desconocer el fundamento que permita la efectividad de sus mecanismos desde un *conjunto de valores y/o principios que racional y universalmente reconocidos y aceptados apoyen y favorezcan la reconstrucción de sociedades fragmentadas por el conflicto y que buscan la convivencia pacífica*.

En toda sociedad bien constituida hay un juego entre decisión innovadora y estabilización institucional. No todo es ruptura crítica a través de la correspondiente decisión, pero tampoco existe sociedad democrática allí donde esa innovación resulta de hecho imposible. Cada sociedad y cada época histórica equilibra a su manera la relación entre rutina y decisión, entre institución y ruptura. Es cierto que las instituciones tienen una función liberadora en orden a las decisiones, en la medida en que, como diría Gehlen, “esquematizan el comportamiento” y abren un espacio para la reflexión y la subjetividad (Innerarity, 2009, p. 93).

Avanzamos hacia las creencias, entendidas como ética pública, en la medida en que somos conscientes de que la realidad de fragmentación que viven nuestras sociedades políticas es una oportunidad para reconstruir el verdadero sentido fundacional de la *polis*, un interés general que se hace desde el conflicto. Pero, para acceder a esta realidad, no solo necesitamos de reflexiones subjetivas que nos permitan continuar distorsionando la relación entre pensamiento y practicidad de la vida. Una política de reconciliación social fundada en principios de ética pública puede ser garante de la innovación institucional en sociedades post-conflicto.

Esta búsqueda de nuestro *modelo ideal* nos conduce a concretar que, en términos de Manuel Villoria Mendieta, la ética pública trata de definir lo que está bien y lo que está mal para la colectividad, aquello que podría constituir un patrón moral básico de carácter universal y genera-

lizable, dado lo racional y razonable de sus fines, valores y prescripciones de conducta, patrón compatible con la propia búsqueda razonable del bien. Esta ética afecta a los individuos en tanto miembros de una sociedad (Villoria, 2000, p. 18). Añade Villoria que la ética pública es un hacerse colectivo. Un proceso en el que la colectividad y los individuos van generando aquellas pautas de conducta y aquel carácter que permiten un mejor desarrollo de la convivencia y una mayor expansión de la autonomía y libertad del ser humano (2000, p. 19).

Reconstruir socialmente un contexto humano e institucional que ha sido fragmentado por períodos de enfrentamiento conflictivo, requiere de personas y grupos humanos que mantengan la ilación “colectiva” como esa relación entre identidad, alteridad y diferenciación como columnas que sostienen la construcción del sentido. Sin embargo, esta elaboración común necesita de pautas (principios y/o valores) que favorezcan el con-vivir con otros en medio de la diferencia autónoma y libre de cada persona. Es la ética pública para políticas de reconciliación social.

2.4. Hacia el diseño de un “modelo ideal” de creencias en perspectiva de reconciliación social

La base de lo que entendemos por ética pública halla en la propuesta de John Rawls un fundamento en cuanto a las posibilidades y capacidades que ciudadanos libres e iguales tienen y desarrollan para cooperar entre sí (1993, p. 34). Obviamente, este tipo de exigencias para una eticidad pública eficaz y eficiente requiere de un contexto de liberalismo político donde la ciudadanía goce de ser el eje sobre el cual se estructura el Estado democrático.

Aunque los contextos de conflicto y violencia, en diversas realidades socio-políticas, nos han manifestado el punto álgido al que puede llegar un grupo humano en la dinámica de diferenciación, la libertad y la igualdad en los hombres y mujeres que conforman la sociedad conflictiva no puede ser desconocida, ni absolutista ni totalitariamente, así la historia nos muestra que sí hay posibilidades de ejecutar este tipo de acciones por ciertos períodos. La misma realidad de aniquilamiento de la libertad e igualdad es la que permite que la reconciliación social surja como un horizonte de posibilidad cuando deviene el desgaste del poder usurpador y del cansancio de la misma sociedad.

La forma igualitaria que el liberalismo propone, según Rawls, tiene tres elementos que en este aspecto de nuestra reflexión conviene traer a colación: 1) la garantía del valor equitativo de las libertades políticas, de manera que estas no sean puramente formales, 2) la igualdad equi-

tativa (es decir, de nuevo, no puramente formal) de oportunidades y, finalmente, 3) el llamado principio de diferencia, que afirma que las desigualdades sociales y económicas relacionadas con cargos y posiciones tienen que estructurarse de tal modo que, cualquiera que sea el nivel de esas desigualdades, grandes o pequeñas, tienen que darse a mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad (1993, p. 36).

El presupuesto para que lo anterior sea factible, señala Rawls, es el concepto igualitario de justicia que los miembros de la sociedad política deben asumir. Para que esta concepción necesaria tenga efectos benéficos sobre la realidad del grupo humano, Rawls define la cultura pública “como el fondo compartido de ideas y principios básicos implícitamente reoconocidos” (1993, p. 38), lo que dará viabilidad a la concepción política de la justicia que, para ser aceptable, tiene que estar de acuerdo con las convicciones que consideramos nuestras, en todos los niveles de generalidad y después de reflexión debida.

El modelo de sociedad que Rawls plantea para desarrollar su liberalismo político surge de la llamada idea organizadora de la misma cultura política pública. Esta idea “es la de una sociedad como sistema equitativo de cooperación social entre personas libres e iguales concebidas como miembros plenamente cooperativos a lo largo de un ciclo vital completo (1993, p. 39). En este contexto, la justicia como equidad desarrolla su objetivo práctico: “ella se presenta a sí misma como una concepción de la justicia que puede ser compartida por los ciudadanos como una base de acuerdo político razonado, informado y voluntario”. El elemento clave de esta construcción lo ubica Rawls en la razón pública que no es otra cosa que el elemento del diálogo/la deliberación en la esfera pública.

Esta cooperación social que busca el liberalismo político contiene tres elementos (1993, p. 46), a saber:

- a. La cooperación se orienta mediante reglas y procedimientos públicamente reconocidos, los cuales son aceptados por los cooperantes y concebidos como efectivamente reguladores de su conducta.
- b. La cooperación tiene que ver con la idea de equidad en la cooperación: cada uno de los participantes puede aceptar razonablemente los términos equitativos de la cooperación siempre que todos los demás los acepten del mismo modo (idea de reciprocidad).
- c. La idea de la cooperación social requiere de una noción de la ventaja racional, o del bien, para cada participante. Esa idea del bien define lo que cada uno de los miembros comprometidos con la cooperación —ya sean individuos, familias, asociaciones, o

incluso pueblos enteros estatalmente constituidos— tratan de conseguir, viendo el esquema cooperativo desde su propio punto de vista.

Estas personas, llamadas por Rawls participantes, deben contener capacidades de razonabilidad y racionalidad, tal como lo hemos expresado a lo que nos apropiamos como ética pública. La razonabilidad a la que hacemos alusión contiene el elemento diálogo/deliberativo⁵⁵ como medio para proponer principios y criterios en calidad de términos equitativos de cooperación, así como aceptarlos de buena gana siempre que se asegure que los demás harán lo mismo (1993, p. 80). En este elemento, lo razonable contiene la idea de una sociedad como sistema de cooperación equitativa y la noción de reciprocidad.⁵⁶

La racionalidad hace referencia a la capacidad del agente (individuo o colectivo) de tomar decisiones con sus características facultades de juicio y deliberación a la hora de perseguir objetivos e intereses que le son propios. Es el modo como los objetivos e intereses se adoptan y afirman, junto al modo en que se les confiere prioridad (1993, p. 81). Para nuestro caso, la racionalidad que demanda un proceso de reconciliación social radica en la capacidad para que todos los que conforman una sociedad conflictiva que ha vivido procesos de violencia, tome decisiones claras y puntuales respecto al daño ocasionado por los actos violentos y la urgente necesidad de asumir el modo apropiado que los conduzca hacia la reconstrucción de la sociedad.

Este instrumento dialógico lo asumimos desde Habermas (2005, p. 440):

[...] el espacio de la opinión pública, como mejor puede describirse es como una red para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, de opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas [...] Al igual que el mundo de la vida en su totalidad, también el espacio de la opinión pública se reproduce a través de la acción comunicativa, para la que basta con dominar un lenguaje natural.

55. Somos conscientes de que a estas alturas de la realidad política, la deliberación/lo dialógico en el ámbito de la democracia ha sido cuestionado por sus dificultades para encajar —como se pretendió desde el comienzo— en las estructuras actuales de los regímenes de democracia representativa. Al respecto, Fernando Vallespín (Beltrán & Vallespín (eds.), 2012) afirma que “la conformación específica que hoy cobra el espacio público” es la causa de las dificultades por las que pasa la gestión real de la deliberación pública. “La dificultad de encontrar espacios en los que el inevitable sistema representativo conecte de forma más eficaz con la ciudadanía, que los canales de mediación entre sociedad y política se consigan lubricar trasladando las diferentes instancias de deliberación que de hecho están presentes en muchos ámbitos sociales a los órganos decisores del sistema político” (p. 24).

56. Rawls le otorga a la idea de reciprocidad los elementos de imparcialidad, que es altruista (en tanto que movida por el bien general) y el concepto de ventaja mutua, entendida como la promoción de la ventaja de todos con respecto de su situación presente, o de la situación esperable si las cosas siguieran igual (1993, p. 80).

Esta es la razonabilidad a la que aspiramos en un proceso como el que pretendemos proponer.

Al reconocerse racionales respecto a la violencia como mecanismo para obtener los intereses particulares (de individuos o de grupos), los miembros de esa sociedad asumen la razonabilidad desde la búsqueda de acercamientos para el diálogo y la deliberación con miras al acuerdo de cooperación que demanda la fragmentación misma a la que han llegado. Esta razonabilidad y esta racionalidad que exige una ética pública para la reconciliación social, dentro del marco de la cooperación recíproca, deben entroncarse en una acción política clara y definida.

Aunque el liberalismo político rawlsiano es una propuesta que surge y se ubica en sociedades desarrolladas, con altos índices de calidad de la democracia y enfrentadas al fenómeno del pluralismo cultural, y, a su vez, ha recibido críticas desde varios frentes académicos,⁵⁷ no podemos desconocer que el elemento de la cooperación social como vinculante eje sobre el cual la justicia en equidad puede facilitar un *ethos* público distinto nos ofrece piezas claves para la estructuración de una política pública de reconciliación social.

Una fuerte crítica a este tipo de “modelos perfeccionistas” de lo político nos lo ofrece Fernando Vallespín (Beltrán & Vallespín, 2012), quien recurre al intento reconciliador de Habermas ante su propuesta de democracia deliberativa y su consecuente dificultad para ser aplicada. Vallespín nos recuerda el “modelo de esclusas” que Habermas propuso en su escrito de 1992. Este modelo consiste en la distinción entre un “centro” y una “periferia” dentro de un mismo sistema. El centro es lo que conocemos como lo gubernamental, la administración, los tribunales de justicia, los organismos representativos, etc., es lo “institucional”. La periferia sería la acción de una “esfera pública” integrada por los grupos que conforman lo social. Claro está, señala Vallespín, que los grupos de la periferia deben ejercer influencia y condicionar las acciones del “centro” (p. 33). Aunque esta división presenta las notables diferencias y, por consiguiente, problemáticas en el momento de la toma de decisiones y de gestión, sí es importante rescatar que la acción de lo colectivo puede ejercer presencia para evitar que el centro funcione dándole la espalda a la unión con la esfera pública y la sociedad civil, añade Vallespín analizando la propuesta de “reivindicación” de Habermas.

La resolución de los desacuerdos, en materia económica, afirman Luc Boltanski y Laurent Thévenot (1991, p. 43) se da como parte de un proceso coordinado que se fundamenta en dos aspectos: una identificación común de buenas promociones, cuyos intercambios definen el curso de la acción, y una evaluación común de esos objetos en términos de precios que el mercado posibilita ajustar a varias acciones. Trasladando esta dinámica comercial a lo que venimos desa-

57. Para profundizar en las críticas a la propuesta de Rawls se puede leer a Macedo, 1996.

rollando, la cooperación social es un medio de resolver los conflictos y la violencia a través de la identificación de los elementos comunes que nos permiten la equidad —es decir, la eticidad misma—, sobre lo cual se desarrolla la acción de la política pública y la evaluación misma del proceso que se debe ir ajustando a las diversas acciones individuales y grupales que se suscitan en procesos de reconstrucción social.

La acción política desde la ética pública en estos contextos debe tender a la reconstrucción social con miras al restablecimiento de la convivencia pacífica. Hannah Arendt (1958; 2005, p. 208 – 209) ubica la dinámica acción humana junto al discurso. Para esta pensadora, los hombres muestran quiénes son, revelan auténticamente su única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano a través de estas dos actividades. Tal cualidad reveladora del discurso y de la acción, añade Arendt, pasa a primer plano cuando las personas están con otras, ni a favor ni en contra, es decir, en pura contigüidad humana.

Así las cosas, la cooperación se funda en acercamientos cooperantes que surgen de la misma dinámica social en la que se encuentran los hombres y las mujeres en medio del conflicto y la violencia, pero que reconocen en la misma situación *quién* es ese alguien y *qué* es ese alguien, en los términos de Arendt (1958, p. 210). La víctima es un *quién* y un *qué* que nos revela algo de humanidad desde la situación de conflicto y violencia que ha vivido, a su vez, el victimario es un *quién* y un *qué* que nos interpela socialmente desde los miembros del entramado grupal que no han procedido según el acuerdo de convivencia que tenemos previamente al vivir juntos. El Estado se nos presenta también como un *qué* y un *quién* que desea decirnos algo desde la condición de ser la cohesión social que nos aglutina humanamente. Es la acción pública que consideramos vital desde la gestación de una política pública de reconciliación social.

La ética pública se ubica en esta relación acción–discurso (para nuestra propuesta es el elemento dialógico/deliberativo), en un proceso de reconciliación porque ella permitirá que la política pública que la hace efectiva no sea un simple conjunto de normas escritas descontextualizadas del *qué* y *quiénes* son los que están implicados. No es una fabricación de planes simplistas que van unidos a una propuesta de partido político o líder en el gobierno, sino que es un sentido profundo de reconocer que la acción política necesita de los otros, de todos, donde esté presente la naturaleza para su material y un mundo en el cual poner el producto acabado, como lo afirmaría Arendt (1958, p. 216).

Esta acción social responsable, concretada en una política pública, debe ser ética públicamente, no solo por la injerencia de todo el conjunto humano que conforma la sociedad, sino porque

[...] entendidas como decisiones tomadas desde una decisión de poder, que buscan el mayor provecho posible para el espacio público a partir de una selección deliberada de temas y alternativas de acción, las políticas públicas están siempre e inevitablemente vinculadas a una posición ética. Esta posición puede estar explícita o no; puede estar inscrita en el modelo de análisis elegido, en el tipo de racionalidad atribuida a los actores implicados en ella o trasladarse al estudio de las restricciones que enfrentará el curso de acción propuesto, pero en todo caso será inevitable (Merino, 2008, p. 1).

La perspectiva que hemos asumido de una ética pública garante de procesos de reconstrucción social contiene la sensatez pública que se nos demanda en un sistema democrático liberal. Esta sensatez la define Stephen Macedo como la “esfera pública del liberalismo en la que se puede destilar las concepciones de la virtud y la comunidad” (1991, p. 39). Esto es, la recuperación de la virtud pública significa la recuperación del sujeto conflictivo por naturaleza.

La sensatez pública de la posición del liberalismo para la paz a través de la tolerancia, la ley con destino a la libertad y los derechos orientados hacia la concepción de justicia está en esta dinámica de la virtud, parafrasea Macedo (1991, p. 40). Este sintetiza las políticas liberales en el lenguaje de la virtud, la ciudadanía, la comunidad y la humanidad floreciente (p. 254). En este orden de ideas, la justicia liberal es un modo de vivir este proceder socio-político, la cual consiste en una completa autoconciencia y un camino reflexivo críticamente, lo que se une a la justificación de la justificación pública y al compromiso de la ciudadanía constitucional de interpretación crítica.

Victoria Camps lo asume desde la misma línea del liberalismo político cuando afirma que “el objetivo de una sociedad con exigencias éticas es la ordenación justa y la plena conciencia por parte de los individuos de sus obligaciones y actitudes —de sus virtudes o disposiciones— como ciudadanos. Lo que significa que han de cambiar ciertas instituciones y han de cambiar también ciertas actitudes (1993, p. 45). En otro de sus textos, Camps nos hace contemplar la urgente necesidad de una ética pública porque “sin unos deberes de solidaridad, respeto y convivencia sentidos como tales por los ciudadanos, sin una normatividad que comprometa al individuo más allá de la normatividad jurídica, es difícil que los cambios que se proponen para mantener el Estado social lleguen a prosperar” (2010, p. 60).

En nuestra propuesta, notamos que casos de reconciliación como los que se vivieron en Sudáfrica o en Centroamérica, específicamente en El Salvador y Nicaragua, y el proceso que se ha propuesto en Colombia —en el período 2005–2011— con la llamada “Ley de Justicia y Paz”, la ausencia de la ética pública ha llevado a vacíos de fondo que mantienen a los grupos humanos con graves fracturas post-conflictivas. Aunque aparentemente la violencia desaparezca, el solo hecho de mantener a las víctimas en un devenir en búsqueda de la verdad o en asumir

su procesual dolor en el tiempo sin una ayuda cooperante del Estado es ausencia de mínimos éticos a nivel público que vuelven a quebrar la sociedad, creando un “círculo vicioso” que degenerará nuevamente en violencia. Por el lado de los victimarios también se perciben vacíos en la medida en que los procesos judiciales son lentos, las presiones políticas para el silencio empañan la dinámica y las exigencias por parte de ellos para que su “estatus de prisioneros” sea cómodo, crean una realidad de deshonestidad que rompe la confianza en la institucionalidad y en las instituciones.⁵⁸

Victoria Camps hace un señalamiento a los excluidos, en esta propuesta son las víctimas y los victimarios en un proceso de reconciliación, para señalar que las políticas sociales del Estado deben beneficiar con más ahínco a esta clase social, pero de forma que no se mantenga la exclusión *in aeternum* (2010, p. 65). Un proceso de reconciliación social sin una ética pública clara puede caer en la dinámica de re-victimización de las víctimas o de los victimarios.

Las políticas deben ir dirigidas a que las mentalidades, las preferencias y las formas de vivir de la gente se adapten a las circunstancias, con el fin no solo de salvar dichas circunstancias, sino de poder vivir una vida de mayor calidad. Un cambio de tales características, a mi juicio, no puede llevarse a cabo con meras reformas legislativas o políticas públicas adecuadas. Estas son, sin duda, imprescindibles, pero por sí solas no conseguirán cambiar las actitudes de las personas, que es de lo que finalmente ese trata. Las actitudes, las formas de vida, tienen que ver con los hábitos, la manera de ser, el carácter, el *ethos*, es decir, tienen que ver con la ética (2010, p. 67).

En la misma línea, Pedro Cerezo Galán (2005, p. 29) afirma expresamente que en lo privado cada persona es libre y las leyes no deben interferir en esa libertad, pero no podemos desconocer la limitación que es la de respetarnos mutuamente. “Que el individuo sea ante todo un ser libre para elegir la forma de vida privada que le plazca no quiere decir que no deba, al mismo tiempo, formarse y actuar como ciudadano, para la vida que no es privada sino pública [...] porque el individuo debe aprender a vivir como ciudadano y a asumir una serie de obligaciones cívicas, hablamos de virtudes públicas”. Podemos constituir las sociedades más plurales y, por ende, diferentes y manifestadoras de la alteridad, pero eso no puede impedir la comprensión de la solidaridad, el respeto mutuo, la tolerancia o la responsabilidad como exigencias del encuentro común, afirma Cerezo. Pero, hoy en día, no podemos quedarnos simplemente en el tolerar ese otro distinto, sino que la realidad nos demanda comprender la lógica de vida que el otro nos revela con su presencia; es lo que en resolución de conflicto llamaremos “ponerse en los zapatos del otro”. Esta labor es de una política pública de reconciliación social.

58. Estos aspectos los abordaremos con más detalle en los capítulos 3 y 4.

3. GESTIÓN DE LA RECONCILIACIÓN SOCIAL: SUDÁFRICA, EL SALVADOR Y NICARAGUA

¿Qué es la sociedad decente? [...] Distingo entre una sociedad decente y una sociedad civilizada. Una sociedad civilizada es aquella cuyos miembros no se humillan unos a otros, mientras que una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas.

Avishai Margalit

¿Por qué relacionar la ética pública con la reconciliación social? ¿No es obvio que todo proceso de reconstrucción humana, a nivel individual o social, contiene un *ethos* implícito? Una primaria respuesta podría ser obvia, pues cada vez que tendemos a reconstruir algo que ha sido roto debemos tener presente una serie de principios y valores que posibiliten que lo reconstruido o por reconstruir demande actitudes éticas. Pero, a pesar de ello, puede surgir una segunda respuesta desde la urgente necesidad de resaltar lo que parece obvio pero que, en el fondo no es tan simple. Reconstruir conlleva un cambio de mentalidad individual y grupal que no siempre asume un *ethos* desde donde sea posible la coexistencia y la convivencia.⁵⁹

A lo anterior podemos brindar una tercera respuesta que nos dé oportunidades para continuar nuestra reflexión. Esta posibilidad de respuesta la asumimos desde las reflexiones de Avishai Margalit (2010) y John Paul Lederach (2008). El primero nos permite responder diciendo

59. Diferenciamos los dos términos para abrir las posibilidades en el tipo de relaciones que todo proceso de reconstrucción social contiene. Desde nuestra perspectiva, la coexistencia conlleva la creación de espacios donde los miembros de un grupo humano pueden “estar y encontrarse”, pero no se implican mutuamente; es un “tener que estar en los mismos contextos”. Desde principios y valores podríamos afirmar que es lo que la tolerancia ofrece (nos toleramos, pero no nos implicamos). La reconciliación social, por su misma esencia —como lo anotaremos en el desarrollo de nuestra investigación— conduce al “implicarme” en la vida de los otros, es vivir con otros en un nuevo rol común. En términos de principios y valores es la “comprensión y solidaridad” con los otros (popularmente es el “ponerme en los zapatos del otro”). Obviamente, la procesualidad para llegar a esto no se mide simplemente con acuerdos o pactos, pues conlleva más elementos integrales. Pero los dos términos pueden estar presentes en una dinámica de reconstrucción a través de políticas de reconciliación social.

que la dinámica relacional entre ética pública y reconciliación social es urgente pensarla en función de la gestión de una política pública que abra el espacio para que la sociedad decente sea efectiva, aún después del conflicto y la violencia. Es decir, al reconstruir una sociedad se necesita reestructurar la realidad desde la creación de mecanismos que eviten que la humillación entre miembros de ese grupo humano e instituciones y sus miembros no sea el motor que degeneren en una nueva etapa de fragmentación. Por supuesto que una política pública no es la única solución, pero sí es una efectiva herramienta que puede ofrecer mecanismos de no repetición, o, en palabras de Hugh Heclo (2010), es la creación de un marco desde donde todos pensemos institucionalmente. Allí está el centro del *ethos* público que este tipo de iniciativas requiere.

Por otro lado, John Paul Lederach (2008) ofrece la categoría *imaginación moral* como clave para construir la paz. Al respecto, afirma Lederach, que llegó a este elemento conceptual haciendo una revisión bibliográfica en diversas áreas de las ciencias sociales respecto al uso de la imaginación dentro de la condición humana, individual y grupal. Esta búsqueda lo condujo a concluir que esta categoría contiene elementos comunes en el uso que le han dado los autores:

- La imaginación moral desarrolla una capacidad de percibir cosas más allá, y a un nivel más profundo, de lo que salta a la vista.
- Se ha utilizado este término para subrayar la necesidad del acto creativo. La capacidad de dar a luz algo nuevo, expresa Lederach, que por su mero nacimiento cambia nuestro mundo y la forma en la que observamos las cosas.
- La imaginación moral posee una cualidad de trascendencia. Irrumpe en nuevos territorios y se niega a quedar atado a lo que plantean las visiones existentes sobre la realidad percibida o a lo que las respuestas prescriptivas determinan como posible (Lederach, 2008, pp. 54–55).

Aclara el mismo Lederach que al hacer referencia a la *imaginación moral* en procesos conducentes a la paz no asume el concepto de moral desde la moralidad e, inclusive, llega a afirmar que esta imaginación moral que él propone para los procesos de paz no se construye alrededor de la ética (2008, p. 56). Es decir, aprehende el concepto de moral más allá de la normatividad o cumplimiento “forzado de leyes” y la ubica en la capacidad interior del sujeto —tanto individual como colectivo— para establecer mecanismos novedosos y creativos que posibiliten la vida. Para este autor, dicha capacidad humana de crear novedad a partir de la violencia no puede ser analítica, como lo es la ética, sino que debe estar abierta a todas las posibilidades de un acto creador novedoso, buscando “un espacio más allá de las piezas existentes”, como expresa literalmente.

Desde nuestra perspectiva, la mirada que Lederach limita el papel de la ética en los procesos de paz, con el respeto que este autor se merece, por cuanto considera la eticidad como reduccionismo vital o analítica innata del *ethos*. Mas, precisamente si vamos a hablar de la urgente necesidad de percibir la realidad social más allá del conflicto y la violencia, esto es, a tomar conciencia —de manera individual y colectiva— de que la fragmentación a la que hemos llegado con la situación de enfrentamiento es una oportunidad más allá de mecanismos técnicos para llegar a acuerdos, podremos responder con una actitud dispuesta a asumir los principios y valores que hagan factible la reconstrucción social.

El llamado que nos demanda ser creativamente proactivos en función de la reconstrucción social nos da la oportunidad de trascender —acordar entre todos que no podemos mantener el estatus de conflictividad y violencia como condición vital en común— a esa misma realidad que la rompe. Consideramos que la *imaginación* desde la realidad fragmentada nos permite vislumbrar la eticidad del convivir y el coexistir.

Desde esta mirada nos sumamos a la categoría *imaginación* desde Lederach, en cuanto capacidad humana para crear novedad en función de romper los esquemas preestablecidos y añadimos el elemento de ética pública como aquellos principios y valores que facilitarán que la creación de lo novedoso irrumpa efectivamente pero, eso sí, guiada por el deber moral. En este punto, Ernst Tugendhat (1998) nos ofrece elementos que consideramos de importancia tener en cuenta al iniciar el acercamiento a algunos casos de procesos de reconciliación social.

Tugendhat hace una lectura de la filosofía del problema de la paz desde dos ideas: 1) la socialización reporta a los hombres numerosas ventajas, pues hace la vida más fácil, segura y quizás más cultivada. Aunque, señala el autor, los hombres debemos renunciar al salvajismo innato. 2) La existencia del llamado “factor de competencia o factor futbolístico” que hace referencia a nuestra pertenencia a una colectividad y al establecimiento de límites con respecto y frente a otras colectividades. De esta manera, si estas identificaciones no coexisten de forma pacífica, es decir, se ven mutuamente desde la superioridad y la inferioridad, el sentimiento de autoestima de los seres humanos aumentará cuando su colectividad venza a otra u otras en cualquier rol de competencia (1998, p. 139). El trabajo, por ende, es gestionar procesos socio-políticos, de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas, que permitan que las colectividades se sitúen identitariamente junto a las otras y no frente a las otras, como lo cita el mismo autor.

La gestión de la reconciliación social está centrada en el aspecto de facilitar la reconstrucción del grupo humano inmerso en conflicto y violencia para crear nuevas condiciones que vayan más allá del ataque mutuo para que se asuma un nuevo rol donde los grupos puedan estar

junto a otros y no enfrentados. Tugendhat, en su escrito sobre el problema de la paz hoy, ofrece tres claves de lectura orientadas a la salida hacia paz (1998, pp. 140–141):

- Normalizar el sentimiento de autoestima, es decir, suprimir el sentimiento de ser despreciados o menospreciados, que presupone por su parte la reducción de la injusticia en la estructura de la sociedad. Desde nuestra perspectiva, esa labor conlleva un proceso de reconciliación social al acercarse a cada parte en el conflicto, escuchar y abrir el abanico de posibilidades con un hilo conductor que aglutine el interés general.
- El fundamento ideológico que sustenta la guerra posee un sentido ético para quienes creen en él y promueve la destrucción bélica. De esta manera, al asumir nuestra propuesta los fundamentos en la ética pública se propende por una reelaboración de lo ideológico como motor gestor del conflicto y la violencia. Buscando los principios y valores comunes indispensables para la justa convivencia entre todos los grupos humanos.
- Los intereses de los grupos de poder (militares, industriales, clase política dirigente, etc.) junto a los intereses nacionales juegan un papel determinante en las acciones bélicas. Por tanto, la puesta en escena de estos intereses nos puede conducir a un nuevo rol desde la dimensión dialógica y participativa que este tipo de procesos conlleva. O, en términos de Avishai Margalit, el compromiso implica una noción positiva que señala la cooperación. También, contiene una noción negativa que señala la traición de la mentalidad de los altos principios (2010, p. 6). En este tipo de procesos orientados a la paz, los compromisos entran en choque por el rol que juegan los intereses de los diferentes grupos, pues el camino de búsqueda de la paz demanda un compromiso de verdad y justicia, donde la cooperación debe asumirse en el acto de revelar los hechos y responder ante la estructura social desde los actos cometidos en ejercicio de la violencia.

De esta manera, buscamos colocar un primer peldaño en nuestra construcción teórica asumiendo *la gestión de la reconciliación social* como ese proceso gradual que busca la reconstrucción de la sociedad desde un imaginario de ética pública que vislumbramos en el caso que vivió Sudáfrica desde los albores de la década de los noventa y la transformación social que lograron gestar en su misma realidad. A su vez, consideramos el caso de Centroamérica, específicamente los países de Nicaragua y El Salvador. Desarrollaremos estas ideas con una visión histórica de la realidad conflictiva, sin pretender un análisis histórico de los conflictos, pero sí una aproximación a la gestión de una reconciliación que surgió desde la misma esencia de la fragmentación social que vivieron las colectividades en estos países.

La manera de abordar este tipo de dinámicas es un mecanismo que nos permitirá abrir el sentido de una política pública de reconciliación desde el horizonte de la cooperación en la construcción social. Esta dimensión cooperante, desde la teoría del juego de la acción racional, brinda la posibilidad de reconocer que el actuar en sociedad demanda unos mecanismos específicos para romper el círculo de intereses y motivaciones individualistas que pueden impedir la gestación de lo común. Estos mecanismos son sintetizados por Bonchek y Shepsle (2005) en *los valores que interioriza cada actor social para abrirse a la experiencia de la “acción con los otros” y la ejecución externa de un tercero* que, en sus propios términos, es un elemento que podría y debería evaluar la calidad de aporte de cada uno en la gestión de lo común, en lo que se constituye en el garante de seguridad de la misma dinámica (pp. 207–210).

En otras palabras, la reconciliación social como proceso dentro de una estructura política es una manera de “actuar colectivamente” desde la interiorización de unos “principios y valores” que asumimos de forma individual y colectiva, más allá de la visión de ganancia o pérdida que naturalmente como humanos podemos aprehender. Pero estos valores (creencias) que nos lanzan a la reconstrucción social después del conflicto y la violencia exigen la acción de un “tercero” que brinde las garantías para que lo común se consolide desde la convivencia y la coexistencia, teniendo en cuenta que mantendrán los “peligros” de una reincidencia por los llamados “costos” que cada actor vislumbra en su acto. Por ejemplo, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar la reinserción social de los victimarios en la vida social? ¿Hasta dónde las víctimas pueden abrirse a la reconstrucción social al lado de los victimarios? ¿Está la sociedad civil dispuesta a invertir tiempo, recursos humanos y económicos en la acogida a los victimarios y la solidaridad con las víctimas? ¿Reconoce el sector económico del país determinado que no apoyar el proceso de reconciliación implica una pérdida socio-económica? ¿El sistema de justicia de cada Estado está apto para asumir un proceso de judicialización más allá de la penalización ordinaria? ¿Es efectivo y eficaz? ¿Hay confianza en las instituciones?⁶⁰ Esto es, hay costos que se deben tener en cuenta (humanos y materiales), imperfecciones o dinámicas erradas que se podrían presentar e incentivos de los actores que no se pueden desconocer. Es la labilidad de lo humano que nos señaló Paul Ricoeur y que se hace objetiva en el encuentro con los otros, en la acción colectiva.

En nuestro capítulo anterior logramos acercarnos a los conceptos de reconciliación social y ética pública. Finalmente, dejamos claro la manera como asumimos cada uno de estos términos

60. Estos cuestionamientos que proponemos desde el objetivo de nuestra investigación surgen desde los elementos que Bonchek y Shepsle (2005) señalan para tener en cuenta ante la introducción de un tercero en la acción común: ejecución costosa, ejecución imperfecta e incentivos del ejecutor (pp. 211–213).

en esta reflexión que estamos desarrollando. Al hacer referencia a las diversas concepciones que podemos hallar respecto a la reconciliación social propusimos un cuadro-síntesis con los elementos comunes que consideramos están en las diversas posiciones al respecto. Desde ese cuadro-síntesis nos proponemos abordar los casos de reconciliación que podemos percibir o no en Sudáfrica, Centroamérica (El Salvador y Nicaragua) y Colombia. Los dos primeros los desarrollamos en este tercer capítulo y el tercero —el caso colombiano— lo abordaremos en el cuarto capítulo.

Recordamos que los elementos fundamentales que contienen un proceso de reconciliación son:

- Procesualidad – Tiempos
- Instrumentos para la efectividad del proceso: verdad, reparación, restitución, memoria histórica, contexto hacia el perdón
- Instrumentos de sentido o éticos.
- Marco institucional: Justicia transicional (derechos y deberes,; creación y promoción de la institucionalidad y definición y aplicación de una política pública.

3.1. Sudáfrica

El caso de reconciliación social en Sudáfrica es uno de los emblemas más presentados a nivel internacional cuando se toca este tema. El liderazgo de Nelson Mandela y del Arzobispo Desmond Tutu, la voluntad política del presidente De Klerk y la presencia de una sociedad civil medianamente organizada facilitaron el acceso de los sudafricanos al camino de la reconstrucción social. La Comisión de Verdad y Reconciliación sudafricana ha sido catalogada, en medio de sus aciertos y desaciertos, como un mecanismo modelo para gestionar la reconciliación a nivel social.

No pretendemos hacer un análisis sobre los aciertos y desaciertos de esta Comisión. Buscamos instrumentos que nos permitan responder a nuestra hipótesis de trabajo y sentar las bases de lo que consideramos debe ser una política pública de reconciliación social. En este sentido, el cuadro sintético que puntualizamos en el capítulo anterior y que hemos esbozado hace unas líneas nos dan las pautas para hacer esa lectura a la que recurrimos.

3.1.1. Procesualidad – Tiempos

La mayoría de los autores que hemos consultado respecto a lo que es la reconciliación social coinciden en afirmar que es un *proceso* que tiende a la reestructuración o reconstrucción de lo que ha sido roto. Es decir, la dinámica de la reconciliación contiene en sí misma un elemento de gradualidad en las maneras y los modos de buscar esa alternatividad frente al conflicto y la vio-

lencia. Devenir en proceso implica para el grupo humano objeto del mismo una concatenación de instrumentos que hagan factible el objetivo propuesto que, en este caso, hemos afirmado, es la salida alternativa a las causas que originan la fragmentación social y la consolidación de un marco de convivencia y coexistencia pacíficas.

En nuestro capítulo anterior afirmamos que el proceso contiene el elemento del *tiempo* como un marco de referencia desde donde se construye el objetivo. Esto es, las mismas circunstancias que constituyen el conflicto y la violencia conllevaron unos momentos históricos y unas causantes determinadas en ese instante. A su vez, la reconciliación social como proceso demanda unos tiempos para las distintas fases y los diversos métodos que el caso concreto exige. Por ejemplo, la historia de Sudáfrica⁶¹ nos brinda elementos para comprender la situación conflictiva y violenta durante tantos años, junto a las etapas que fueron creando la situación culmen que llevó a la sociedad sudafricana a plantearse la urgente necesidad de abrir caminos hacia la reconciliación. Sin embargo, por esa complejidad de situaciones, el proceso alternativo al conflicto no puede pretenderse en un corto lapso, como queriendo reorganizar la fragmentación de más de 50 años en seis o doce meses.

3.1.1.1. Proceso desde lo histórico

La figura del *apartheid* es un elemento determinante para asumir el proceso de reconciliación social vivido en Sudáfrica. Pero este término convertido en gestión de políticas de segregación por parte del gobierno sudafricano durante más de cinco décadas no fue solo un “discurso” que promovió la diferencia racial, sino una actitud generalizada de la sociedad sudafricana de raza blanca respecto al sector social de Sudáfrica de raza negra e, inclusive, de color.⁶² Fue un *rotten compromise* (mal compromiso),⁶³ en términos de Avishai Margalit, pactado por un grupo

61. Para una visión de la historia de Sudáfrica sugerimos acercarnos a los textos de Thompson, L. (2001). *A History of South Africa*. New Haven: Yale University Press, 3ª ed., y, Cortés López, J. L. (2007). *Historia contemporánea de África (desde 1940 hasta nuestros días)*. Madrid: Mundo Negro, 565 p.
62. Consideramos importante en este momento de nuestra reflexión tener presente que el territorio sudafricano contiene en sí un cruce de razas que condicionaron en alguna medida el desarrollo del conflicto y, por ende, desarrollan un elemento fundamental del proceso de reconciliación social. El historiador Joseph Ki-Zerbo (2011) señala dos grupos iniciales en esta región: los bosquimanos (san) y los hotentones (khoi). Luego, estos grupos se unieron con otros que fueron llegando al sur de África: swazi, zulú (pertenecían a un grupo más amplio llamado *bantúes*), pondo y xhosa. Estos grupos nativos se encontraron en el transcurso de la historia con la raza blanca, especialmente con portugueses, holandeses e ingleses. Jan Van Riebeck (1652) promovió la llegada de gente de los Países Bajos, quienes fueron llamados *bóers*. Luego, surgió un grupo mestizo llamado *bastards*, *griquas*, *coloured* (Ki-Zerbo, p. 497). Este historiador señala un detalle que vale la pena traer a colación. En el siglo XIX ya estaban en la zona de Sudáfrica los tres grupos fuertes que determinarían el desarrollo del conflicto y la violencia en ese país, “las tres B – bantúes, bóers y británicos” (p. 500).
63. Asumimos el concepto de *rotten compromise* de Avishai Margalit, para quien consiste en “un acuerdo para establecer o mantener un régimen de crueldad y humillación” —en pocas palabras, un régimen inhumano, en el sentido literal de inhumano, incapacitado para los humanos—. El régimen se refiere al gobierno o al diseño regular de comportamiento (2009, p. 89).

humano con el objetivo de promover la fragmentación social, aunque su objetivo no estuviera explícito en estos términos.

El proceso de segregación que paulatinamente se fue dando en Sudáfrica corresponde a un “mal compromiso” de una raza que, sintiendo supremacía sobre los otros grupos raciales, asumió el liderazgo y control del país, fundamentándose en un comportamiento gubernamental y, por ende, social en general de exclusividad sobre los otros grupos étnicos que habitaban la región. Fue pactado un “mal compromiso” para defender una causa “ética”, pero inmoral, desde la perspectiva de los blancos sobre los grupos humanos de color distinto de piel.

Este “distanciamiento entre dos razas: blanca y negra”, llamado *apartheid*, se promovió con más fuerza a partir del año de 1948, después de las elecciones en las que el partido nacional se consolidó en el poder político de Sudáfrica y Hendrik Frensch Verwoerd asumió el liderazgo del país. “El término *apartheid*, sin embargo, pronto desarrolló una consigna política dentro de un drástico programa sistemático de ingeniería social. El mayor responsable del desarrollo de este programa fue Hendrik Frensch Verwoerd” (Thompson, p.189).

El gobierno del partido nacional aplicó el *apartheid* a través de un maremágnum de leyes y acciones ejecutivas. En el corazón del sistema del *apartheid* estaban cuatro ideas: primera, la población de Sudáfrica comprende cuatro “grupos raciales” —blancos, color oscuro, indios y africanos— cada una con su inherente cultura. Segunda, los blancos, como la raza civilizada, fue la que tenía derecho a tener el control sobre todo el Estado. Tercera, los intereses de los blancos debían prevalecer sobre los intereses de los negros. Cuarta, el grupo racial blanco formaba una sola nación, con Afrikaans— y componentes angloparlantes, mientras los africanos pertenecían a distintas (eventualmente a diez) naciones o potenciales naciones —una fórmula que hizo de la nación blanca la más grande del país [...]

(Thompson, p. 190).

Esta fragmentación socio-política que condujo al desmembramiento ético de un país, denominado *apartheid*, centró su acción en el poderío de una raza sobre las otras, controlando absolutamente todos los estamentos sociales. Podemos sintetizar de la siguiente manera los ámbitos de coexistencia que más se vieron afectados, por cuanto de estas fracturas surgirá el clamor de un proceso de reconciliación social que buscó la reconstrucción ética y política de un pueblo:

- a. Medidas contra la dignidad de las personas
- b. Medidas contra los derechos políticos
- c. Medidas contra la coexistencia y la convivencia humana

Éticamente, podríamos afirmar que todas las medidas impulsadas durante el *apartheid* van en contra de los derechos humanos o en contra del derecho internacional humanitario y, a su

vez, son medidas que atentan contra la dignidad de la persona. Pero, teniendo en cuenta nuestra construcción teórica entre ética pública y reconciliación social, proponemos esta división pedagógica para una aprehensión más directa hacia los siguientes capítulos, donde haremos énfasis en la dimensión de la reconstrucción social.

Las *medidas contra la dignidad de la persona* en sí vienen dadas por leyes como la de Registro de Población (1950), que ponía categoría racial a cada persona; la Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos (1949) y la Ley de Inmoralidad (1950),⁶⁴ que crearon un límite legal entre las razas para contraer matrimonio y definieron como ilegales relaciones sexuales que infringieran la línea del color de piel. En el año de 1953 se emitió la Ley de la Educación Bantú a través de la cual el gobierno central asumía control de la educación nativa, quitándosela a los misioneros, para que estuviera de acuerdo con las políticas del Estado y que no se educaran con un falso imaginario que ellos y ellas (los africanos) vivirían en una sociedad de iguales derechos. Inclusive, las condiciones logísticas de la educación para los negros eran menores que para los blancos, llegando también a promover la segregación en la educación universitaria.

Este tipo de medidas agresivas contra la persona llegaron a ser tan radicales que a partir de 1948 se comenzaron a encontrar avisos de “Solamente blancos” (Only Whites) en algunos espacios públicos (taxis, ambulancias, buses, trenes, elevadores, baños, parques, iglesias, coches fúnebres, bancos, ayuntamientos, salas de cine, teatros, cafeterías, restaurantes y hoteles). A su vez, se promulgaron políticas para prevenir los contactos raciales en los deportes (aunque este tipo de medidas también eran contra la coexistencia y la convivencia).

Las *medidas contra los derechos políticos* produjeron la eliminación de los derechos de voto de la gente de color y de la gente africana, gestión promovida por el partido nacional aprovechando la mayoría en el parlamento obtenida en las elecciones de 1948. La creación de cualquier unión grupal que buscara la defensa de los derechos de los africanos quedó prohibida. En 1951 quedó abolido por el gobierno central el Consejo Representativo de los Nativos, la única institución oficial africana que existía. En materia de derechos en servicios públicos los africanos tenían enormes restricciones.

Las *medidas contra la coexistencia y la convivencia humana* surgen a partir de las Leyes de Registro de población (1950) y de la Ley de las Áreas de Grupo (1950) que no solo le dio cate-

64. Otras leyes que gestionaron con fuerza las exigencias del *apartheid* fueron: Ley de la Alteración del Orden Público (1956), Ley de Organizaciones Ilegales (1960), Ley de Sabotaje (1962), legislación de la ley general de enmienda (1966), Ley de Terrorismo (1967) y la Ley de Seguridad Interna (1976). Las leyes buscaban darle máximo poder a las fuerzas policiales del Estado para arrestar a las personas sin proceso jurídico y retenerlos indefinidamente en confinamiento solitarios, sin revelar sus identidades y sin permitir el acceso a ellos, excepto los oficiales del gobierno (Thompson, p. 199).

goría racial a cada persona sino que transformó la administración de la población africana a través de la subdivisión territorial de Sudáfrica en ocho territorios llamados ‘*homeland*’ (patria)⁶⁵ con el objetivo de una potencial “nación” africana, administrada bajo el tutelaje de los blancos por autoridades bantú, fundados en el sistema de jefes hereditarios. En esos *homelands*, afirma Thompson (2005, p. 191), una “nación” africana era para “desarrollarse a lo largo de sus propias líneas divisorias”, con todos los derechos que fueron negados en el resto del país. La base legislativa de esta nueva organización social se completó en 1971, cuando la Ley de Constitución de los *Homelands* bantú empoderó al gobierno para la gran independencia de cualquier *homeland*.

Los bantustanes o reservas, como también se les conocía, serían enclaves étnicos o *homelands* separados para todos los africanos. “Estos”, en palabras de Verwoerd, “deberán responsabilizarse de su propio destino en las reservas”, donde tendrían que “desarrollarse por su cuenta”. La idea era preservar un *status quo* en el que tres millones de blancos eran propietarios del ochenta y siete por ciento de la tierra, y relegar a ocho millones de africanos al trece por ciento restante (Mandela, 2010, p. 201).

Un mismo lenguaje dominó la estructura social del país, donde una raza puso sus intereses sobre las otras tras un discurso de preeminencia desde una lectura nacionalista gestionada a través de un aparato estatal coercitivo. Pero, las acciones políticas para desarrollar este conflicto y violencia en Sudáfrica fueron más allá de conminaciones raciales, llegando a producir agresión mental y psicológica en los diferentes grupos, con altos niveles de temor por los asesinatos de los que eran víctimas los africanos y los de color.

Los retos históricos de un devenir social fundado en el conflicto y la violencia nos ponen ante la dimensión ética como un horizonte clave en la refundación de todo grupo humano que ha vivido este tipo de experiencias. El *apartheid* y sus consecuencias sociales marcaron una pauta de agresión de la humanidad sobre la misma humanidad, expresada en grupos humanos. La categoría de imaginación de la ética pública no es un simple cúmulo de principios del deber ser respecto a la salida de la violencia o la conflictividad, sino que implica asumir a cabalidad el realismo fundado de la experiencia que el grupo humano ha vivido y vive junto al mismo pesimismo que la situación conlleva, pero un pesimismo constructivo que sea capaz de trascender la violencia, a la vez que afronta los retos inmediatos e históricos que continúan produciéndola (Lederach, 2008, p. 98).

De la misma manera como se fue destruyendo la estructura social sudafricana, y como se han destruido similares en otras partes del mundo, la dimensión ética en el ámbito público

65. Porciones de territorio que tenía administración zonal, pero dependiendo del gobierno central. A su vez, cada *homeland* estaba dividida en fragmentos grupales, cada uno con su jefe o líder. Inicialmente tuvieron autogobierno, pero paulatinamente se fueron independizando.

demanda un saber reconstruir socialmente que, en términos de John Paul Lederach (2008), es un arte en el cambio social. Este arte se hace efectivo al recurrir a la imaginación moral en la construcción de la paz, es decir, superar el límite de la técnica de la resolución de conflictos, la politización de los mismos y la simple compensación material del daño perpetrado a la víctima. Es la creación de espacios y procesos preñados de imaginación moral (Lederach, p. 102), donde la ética pública se constituye en el elemento fundante de la gestión de este tipo de políticas públicas conducentes a la reconstrucción social.

En el concepto de imaginación moral que Lederach transmite fundamentamos la dimensión de la ética pública en los procesos de reconciliación social como un soporte imaginativo de la reconstrucción sudafricana. Para él (2008, pp. 102–103), la imaginación moral en los procesos de paz conduce a:

- a. Ir más allá de los procesos técnicos, creando espacios y actitudes de autenticidad humana que permitan la trascendencia y el realismo fundado, accesibilidad y amplitud de miras, capacidad estratégica y conductas inmediatas, teniendo en cuenta el ámbito de lo público.
- b. Entender las relaciones humanas como eje y horizonte de la comunidad humana, desarrollando un compromiso incondicional de construir relaciones auténticas. En términos prácticos, es la capacidad de imaginarse la relación con los otros (victimarios, víctimas, sociedad en general, lo aclaramos nosotros en nuestro estudio) en una dimensión que supere los ciclos de violencia.
- c. Rehusar a enmarcar los retos, problemas y temas de la vida como polaridades dualísticas. Es aprender a conciliar lo que pretendemos ver como irreconciliable, donde es posible la diversidad de realidad y visiones.
- d. Creer que lo inesperado es posible. Es decir, asumimos que es una actitud de estar marcando el énfasis de la creatividad humana como horizonte de salida a los “nudos conflictivos”.
- e. Situarnos entre la biografía y la estructura social, entre lo local y lo nacional. Este lugar es el ámbito público accesible. La imaginación moral, recalca Lederach, puede ser estimulada y promovida por las capas dirigentes, pero no es propiedad o responsabilidad exclusiva del liderazgo. Es también vocación de las comunidades.

De este modo, Sudáfrica gestionó su reconciliación social desde una dimensión de imaginación ética públicamente que podemos corroborar en su misma realidad histórica. En el año de 1952 los miembros del ANC iniciaron una pasiva resistencia en el campo que fue la semilla del proceso que podemos definir como “un paso del conflicto al post-conflicto”, aunque duró hasta

1994, cuando Nelson Mandela ganó las elecciones generales de Sudáfrica e inició un nuevo período efectivo para la reconciliación social en ese país. De la masacre de 67 africanos asesinados por la policía por manifestarse en contra de la ley, pasando por las 575 personas de color que fallecieron en las confrontaciones con la policía en Soweto y otras poblaciones africanas, hasta los años de cárcel de Mandela y las negociaciones que él pudo desarrollar desde prisión en beneficio de la vida social y política de Sudáfrica, la reconciliación se nos presenta como ese proceso socio-político que avanza desde la misma realidad de conflicto y violencia, abriendo espacios y tiempos hacia la reconstrucción.

3.1.1.2. Hechos puntuales hacia el cambio

En medio de las adversas circunstancias que caracterizaron el conflicto y la violencia en Sudáfrica, se fueron haciendo palpables circunstancias que permitieron el acceso a un cambio de perspectiva:

- La resistencia y toma de conciencia por parte de la comunidad negra
- El cambio de voluntad política en el gobierno sudafricano
- La presión internacional

La resistencia y toma de conciencia por parte de la comunidad negra no tiene un hecho puntual histórico que podamos definir como el detonante, pero sí hay una suma de experiencias y personajes que fueron permitiendo que esto llegara a convertirse en la fuerza que gestó el proceso de reconciliación desde un “grito silencioso” de hombres y mujeres que sentían el peso y el cansancio de la humillación.

El eje desde el cual se fue gestando este comportamiento colectivo lo define Margalit (2010) como “tratar a los seres humanos como si fuesen no humanos”. Hay diferentes formas históricas de llegar a esta actitud, afirma el autor, entre las que rescatamos la que comenta en su texto: “hay otra forma, históricamente importante, de excluir a los humanos de la comunidad humana, que consiste en tratar a los individuos o a grupos de personas como diablos que propagan el mal absoluto y destruyen la humanidad” (p. 81). La raza negra fue catalogada como “diabólica” por un grupo humano que se identificó con el color de piel blanca, junto a las creencias religiosas de preeminencia por elección divina, y desde esta perspectiva extendieron un dominio general sobre la vida del país.

En este orden de ideas, la *imaginación ética pública* que moviliza nuestra propuesta centra su objeto de gestión en la consideración de la trascendencia que cada grupo humano tiene en cuanto

componente del entramado social sudafricano. La misma realidad de segregación inició la gestación de un proceso de reacción defensiva, en primera instancia, por parte de los negros hacia los blancos y, en segunda instancia, una apertura a la salida alternativa que conduciría al proceso de reconciliación social a partir del inicio de la década de los noventa. La capacidad de ver más allá de la realidad conflictiva y violenta no llegó como por “arte de magia”, sino que se gestionó desde la misma reacción agresiva, por un lado, y la capacidad de apertura al diálogo, por otro lado.

Nelson Mandela escribe en su autobiografía que “el nacionalismo africano era nuestro grito de batalla, y nuestro credo la creación de una nación a partir de muchas tribus, el derrocamiento de la supremacía blanca y el establecimiento de una forma de gobierno genuinamente democrática” (2010, pp. 109–110). En este escrito, Mandela marca el elemento cohesionador de lo que hemos llamado *el imaginario de ética pública* para un proceso de reconciliación social. La novedad radica en que el proceso sudafricano logró aglutinar la fuerza colectiva de los diversos grupos étnicos que conformaban el país en un sentimiento de nacionalismo reestructurador de la sociedad. La elección del *nation building* como columna central fue clave en este proceso temporal de segregación, eje sobre el cual se estructuró el conflicto en Sudáfrica.

La lucha de los africanos contra el gobierno fue un proceso duro entre protestas, manifestaciones y, por consiguiente, represiones por parte del gobierno central de Sudáfrica, llegando al arresto, y la promulgación de leyes represivas. Además, entre la población negra las divisiones respecto a la posición del proceso no se hicieron esperar. Lutuli, Mandela y sus colegas promovían el camino hacia la reconciliación entre las razas. Por otro lado, surgió Robert Sobukwe liderando un movimiento dentro de los africanos para erradicar agresivamente el dominio blanco. Esto condujo al surgimiento del Congreso Pan-africano (PAC), dentro de la misma estructura del Congreso Nacional Africano (ANC).

Entre la línea de la no-violencia promovida por el ANC (Mandela) y la línea de reacción agresiva del PAC, la resistencia avanzó hasta la ruptura fuerte en 1976 con las confrontaciones masivas. Según Thompson (2008, pp. 211–212) hubo tres desarrollos importantes en la línea de resistencia:

- El movimiento de protesta a través del arte.
- El rápido crecimiento económico en Sudáfrica originó el aumento de mano de obra semicualificada paralelo a la no cualificada y, de esta manera, el desarrollo de las ideas de conciencia de clase y el efectivo movimiento de la unión comercial a pesar de la exclusión de las negociaciones formales, entre los grupos que configuraron el mismo aumento de esta mano de obra semicualificada.

- El intento del gobierno por moldear la mente de los jóvenes negros a través del estricto control de la educación tuvo un efecto negativo, pues la ideología de la conciencia de los negros impregnó el ambiente de los colegios. Esta situación produjo los enfrentamientos fuertes en junio de 1976 cuando miles de jóvenes negros chocaron con la policía en Soweto. En esa lucha la policía mató a varios jóvenes de trece años y se inició así una serie de asesinatos por parte de la policía y de arrestos de líderes. Finalmente, la lucha de guerrilla contra el gobierno consolidó un proceso paulatino de fragmentación social.

El factor del liderazgo que asumieron los movimientos de toma de conciencia de los africanos está dado por la misma situación de exclusión en que estaba la raza negra y, por ende, las otras razas distintas a la blanca. El Congreso Nacional Africano fue uno de los impulsores de esta movilización. Igualmente, el Congreso Pan-Africano cumplió una tarea, aunque desestabilizadora, con más agresión, de movilización. Los sectores sociales de la educación y laboral fueron los detonantes más fuertes en este movimiento. “Es de sentido común que un sistema legal inmoral e injusto sólo puede engendrar desprecio hacia sus normas y sus leyes” (Mandela, 2010, p. 197).

A partir de 1960 la resistencia africana en contra del *apartheid* fue gestándose como un lento proceso de toma de conciencia de un grupo humano que estaba completamente esfumado en su dignidad y derechos. Al principio, en los años de 1960 a 1961, el gobierno reprimió con fuerza esos brotes de resistencia. Poco más de diez años después se manifestó otro brote de lucha en contra de la segregación y el gobierno volvió a actuar con represión (1976 – 1977). El imaginario ético público de esos negros era liberar a Sudáfrica del *apartheid*.

En agosto de 1983 los africanos fundaron el Frente de Unidad Democrática (UDF) con el fin de coordinar la oposición interna al *apartheid*. Esta conferencia, en la que se creó el Frente, declaró que el objetivo era crear una unidad democrática en Sudáfrica, libre de *homelands* y de áreas de grupos y basada en la voluntad de la gente. A partir de este momento sobrevinieron tres años de fuerte resistencia en todas las ciudades y alrededores de los *homelands* en Sudáfrica. Desde protestas ideológicas hasta actos de agresión y violencia acompañaron este período de fuerte búsqueda alternativa a la realidad social que se había vivido en la historia del pueblo.

A las protestas africanas, el orden público en las diferentes regiones de Sudáfrica y la represión del gobierno contra los movimientos de resistencia, la presión internacional llegó como un elemento detonante del proceso en el país surafricano.

El cambio de voluntad política en el gobierno sudafricano facilitó el proceso desde la misma crisis en la que cayó el sistema de gestión política de ese momento. La crisis política del gobierno sudafricano en el año 1978 fue un soporte fundamental para acceder al camino de la imaginación ética pública en materia de reconciliación social. La recesión económica en Sudáfrica, el alto costo que conllevó la aplicación de las leyes *apartheid*, el ascenso de la inflación y el empobrecimiento de un alto porcentaje de población blanca marcaron un declive político del partido nacional, en el gobierno, que minó la estructura que sostenía la exclusión y la discriminación. A su vez, el porcentaje de población negra aumentó notablemente.

A lo anterior se suma el declive de la política de “descolonización” que el gobierno de Verwoerd había impulsado desde la idea de “desarrollar a lo largo y ancho de sus propias líneas en sus propias áreas” (Thompson, p. 222). Internacionalmente, Sudáfrica quedó aislada en medio de Rodesia y Namibia, eminentemente de raza negra. Estas circunstancias quebraron el movimiento nacionalista afrikáner, dividiendo a la población entre los que buscaban reformas en el régimen del *apartheid*, pero manteniendo la supremacía de los blancos, tales como un grupo de prósperos profesionales, gente de negocios y terratenientes ausentes que habían reemplazado el antiguo régimen rural y las élites culturales en el control de partido nacional. Mas esta propuesta obtuvo dos movimientos contrarios, uno de derecha y otro de izquierda.

En la derecha se agruparon trabajadores urbanos afrikáner y agricultores marginales que dependían de las defensas del *apartheid* contra la competición de los negros y el número de burócratas que vivieron de administrar las leyes del *apartheid* temiendo las consecuencias de la efectiva extensión de la política de los derechos de los negros. Este grupo promovía la preservación del sistema de Verwoerd con mayor rigor. En la izquierda algunos clérigos e intelectuales afrikáner y algunos líderes de negocios comenzaron a promover la inmoralidad e inconveniencia del *apartheid* promoviendo cambios sustanciales.

La posibilidad de cambio la trajo el escándalo de corrupción que se destapó públicamente en 1978 entre algunos miembros del partido nacional, quienes utilizaron fondos públicos. Esto ocasionó la renuncia del primer ministro, John Vorster, y la elección de Pieter Willem Botha,⁶⁶

66. El nuevo gobierno de Botha buscó el cambio de las circunstancias socio-políticas en Sudáfrica, pero sin sacrificar el poder de los afrikaners. Entre las reformas que más se pueden resaltar están la de neutralización de los vecinos de Sudáfrica, diluyó los símbolos del *apartheid* y las prácticas que no eran esenciales para mantener la supremacía blanca, ganó la cooperación de grandes negocios, intensificó las diferencias étnicas y de clase entre el dominio de las gentes y suprimió las disidencias internas. También reformó las relaciones laborales, en lo concierte a la asociación de uniones comerciales. Un cambio predominante fue la redacción de una nueva constitución política en el año de 1984, constituyendo un nuevo Parlamento (tres cámaras unirraciales: blancos, colorados e indios). También, promovió reformas urbanísticas, aunque las leyes de paso se mantuvieron. Otro tipo de leyes que cambiaron fueron las de segregación en cuanto a la legalidad de partidos políticos multirraciales, y los matrimonios interraciales.

a través de quien el acercamiento hacia la reconciliación sería más accesible. Sin embargo, los cambios se establecieron desde la reglamentación gubernamental, pero la mentalidad de segregación seguía en la mayoría de la gente blanca, sobre todo en la práctica diaria de la convivencia.

Presión internacional

El factor de la presión internacional lo ofrecieron especialmente los pronunciamientos de las Naciones Unidas, exactamente en el año de 1952, cuando la Asamblea General condenó el *apartheid*; posteriormente, en 1967, la ONU creó un Comité Especial en Sudáfrica y una Unidad en Sudáfrica para exponer y denunciar los efectos del racismo allí. En el año 1973, la Asamblea General de la ONU catalogó el *apartheid* como “Crimen contra la humanidad”. En 1977, el Consejo de Seguridad de la ONU votó por el embargo de armas a Sudáfrica. Sin embargo, en el año 1978 la oposición internacional frente el *apartheid* estaba clara a nivel de documentos, pero en la práctica era supremamente débil.

Margaret Thatcher, primer ministro británico, líder de los países de la Commonwealth, promovió el inicio de los diálogos para reemplazar el régimen del *apartheid* por un gobierno popular en Sudáfrica. El gobierno debía desmilitarizar las ciudades, facilitar la libertad de reunión y expresión, suspender las detenciones de personas sin proceso judicial, poner en libertad a Nelson Mandela y otros prisioneros políticos y permitir actividades políticas normales.

Estados Unidos también ejercía presión internacional sobre la situación entre voces a favor y en contra de la continuidad del sistema *apartheid*. En 1985, el presidente Ronald Reagan promulgó una orden ejecutiva en la que se imponían límites de sanción económica a Sudáfrica. En octubre de 1986, el Congreso norteamericano aprobó la Ley Comprensiva Anti-*Apartheid*. Esta ley prohibía nuevas inversiones y préstamos bancarios con Sudáfrica, vínculos comerciales entre Sudáfrica y Estados Unidos, prohibió las importaciones de productos sudafricanos y catalogó amenazas para los países aliados que incumplieran el embargo de armas que pesaba sobre Sudáfrica.

En medio de las circunstancias internas e internacionales que hemos descrito, el gobierno sudafricano de Botha intentaba por todos los medios restablecer el orden, pero tres aspectos iban socavando progresivamente la estabilidad general (Thompson, pp. 242–243):

- a. El cambio demográfico que sufrió la población sudafricana en todo su territorio. La población blanca disminuyó en cantidad de personas mientras que los negros aumentaron notablemente en las ciudades y en los *homelands*, con el consiguiente deterioro de los *homelands*.

- b. La economía se fue tornando poco sólida y Sudáfrica ingreso en una etapa de recesión, en parte agrandada por la presión que resintió con el embargo que internacionalmente ejecutaron sobre ella.
- c. A pesar de la defensa a ultranza del gobierno de segregación y los ideales de coexistencia limitada contruidos alrededores de sus *homelands*, las poblaciones blancas y negras en Sudáfrica vivían interdependientemente.

3.1.2. Presupuestos para los instrumentos estructurales en Sudáfrica

En nuestro primer capítulo configuramos los instrumentos que un proceso de reconciliación social debe contener para su efectividad dentro del horizonte de reconstrucción de lo común que propende. Estos instrumentos los catalogamos en dos amplias dimensiones: lo estructural y el de sentido o ético. Sin desconocer la dimensión del carácter procesual de este tipo de dinámicas y, desde allí, la presencia del tiempo como factor determinante de la gestión del mismo, pretendemos en este aparte acceder a aquellos instrumentos que consideramos pueden favorecer la efectividad del mismo proceso. Desde esta perspectiva, hacemos referencia a los instrumentos de la verdad, la reparación, la restitución, la memoria histórica y el contexto hacia el perdón que pudimos percibir en el caso de Sudáfrica y, más adelante, en los casos de El Salvador y Nicaragua.

A lo largo de esta descripción no podemos desconocer la categoría de procesualidad–tiempo que hemos tenido en cuenta como componente desde el cual se desarrolla la dinámica misma. Recordamos en este momento que desde el capítulo anterior hemos asumido el tiempo procesual en sus tres usuales características: corto, mediano y largo plazo. Esto es, la apropiación de cada uno de los instrumentos para la efectividad del mismo proceso estuvo definida en una de estas implicaciones de tiempo. La gestión de la reconciliación social va marcada por medidas que se asumen para resolver asuntos inmediatos, otros para una escala media y otros para un largo espacio de tiempo, lo que demanda garantías para la continuidad.

3.1.2.1. Inicio a través del diálogo

La realidad socio-política y económica que sobrevino en el gobierno del presidente Pieter Willem Botha, en medio de los intentos de búsqueda a salidas alternativas a la situación, fue la oportunidad que grupos sudafricanos de todos los ámbitos utilizaron para abrir espacios a este encuentro intersubjetivo, en términos de Habermas, con miras a la reconciliación social. En esta

realidad, un grupo de intelectuales, clérigos, gente de negocios y líderes deportivos iniciaron acercamientos a los africanos congregados en la ANC, por medios de sus líderes exiliados y encarcelados, para abrir los diálogos conducentes a la paz. En el mes de agosto de 1987 se llevó a cabo una reunión entre 61 sudafricanos blancos, la mayoría de ellos afrikaners, y 70 miembros del ANC, en la que concluyeron que había un común interés en buscar la solución a la paz en el conflicto de Sudáfrica. Esta reunión produjo un comunicado en el que se expresó un acuerdo unánime de mutua colaboración para negociar la paz.

También sobrevinieron cambios de perspectivas en los dos grupos políticos fuertes dentro de la vida sudafricana: el partido nacional y el ANC, con mediación de la sociedad civil. No se impulsó este proceso de iniciación de negociaciones a nivel público, sino que se fueron dando paulatinos y discretos encuentros entre grupos de cada sector. Fueron las llamadas “conversaciones sobre conversaciones”, animadas por el desarrollo de relaciones personales por encima de las líneas de conflicto, contribuyendo al fortalecimiento de la confianza mutua (De Klerk, 2004, p. 21).

El mismo presidente Botha inició acercamientos con los líderes del ANC, pero en secreto, mientras ejercía su poder con agresión para frenar la resistencia anti-*apartheid*. Buscó a Mandela para hacer la propuesta de liderar el proceso desde la raza negra. El líder negro fue trasladado a una prisión en mejores condiciones muy cerca de Ciudad del Cabo. A partir de 1988 comenzaron los diálogos entre el gobierno sudafricano, en cabeza del Ministro de Justicia, y Nelson Mandela. Desde allí se redactó un memorando dirigido al Presidente en el que le exponía “yo ahora considero necesario para el interés nacional que el Congreso Nacional Africano y el gobierno pacten urgentemente la negociación de un acuerdo político efectivo”. En ese mismo escrito, respondió a la demandas del comité del Ministro de Justicia que dialogó con él afirmando que “la lucha armada fue una legítima forma de autodefensa contra un sistema de gobierno moralmente repugnante” (Thompson, 2005, p. 245).

Los dos puntos centrales que Mandela defendía como esenciales en el inicio de las negociaciones eran la exigencia del ANC sobre la regla de la mayoría en un Estado unitario y los intereses de los sudafricanos blancos sobre esta exigencia. El asunto crucial era cómo conciliar estas dos posiciones. En agosto de 1989, en la ciudad de Zimbabwe, se reunió un grupo de miembros del ANC para dialogar en torno a las conveniencias o no de tener discusiones con el gobierno. De esta reunión resultó la llamada Declaración Harare en la que dejaron explícito que el único medio para hacer posible el fin del *apartheid* era a través de las negociaciones, siempre y cuando Pretoria estuviera dispuesta a negociar genuina y seriamente. Pero, para este grupo, la negocia-

ción debería tener en cuenta cinco aspectos: terminar el estado de emergencia y sacar el Ejército de las ciudades, suprimir las restricciones sobre la actividad política, legalizar todas las organizaciones políticas, liberar todos los presos políticos y detener todas las ejecuciones políticas. No hubo sugerencias para concesiones a la población blanca. Esta declaración se constituyó, desde la perspectiva de nuestra política de reconciliación social, en herramienta clave de creación novedosa, pues los miembros del ANC aprobaron para caminar hacia la negociación con el gobierno y establecer así una nueva estrategia, más allá de la violencia y la resistencia agresiva.

3.1.2.2. De los diálogos a los acuerdos

El manejo que el presidente Botha le estaba dando a la situación, sobre todo el acercamiento paulatino a los líderes del ANC, produjo un revuelo en el partido nacional que llevó a “un golpe” al liderazgo de Botha. El partido en pleno interpretó vías autocráticas en él y decidieron destituirlo, reemplazándolo por Frederik Willem de Klerk.

De Klerk asumió el liderazgo político de Sudáfrica, en la línea del partido nacional, con la firme convicción, junto a miles de afrikaners, que en el estado de las cosas de ese momento el *apartheid* no era factible. Para responder a las circunstancias de ese contexto se necesitaban medidas más drásticas. Leonard Thompson (2000, p. 146) afirma que “después de revisar la situación, el nuevo Presidente concluyó que la mejor esperanza para su pueblo era negociar un acuerdo desde una posición de fuerza, mientras su gobierno mantuviera la fuerza dominante en el país, y él persuadió a su gabinete para aprobar una iniciativa sorprendentemente radical”.

El 2 de febrero de 1990, él anunció en el parlamento la suspensión de la prohibición sobre el ANC, sobre el Congreso Pan-Africanista (PAC) y el partido comunista sudafricano (SACP); la supresión de las restricciones en 33 organizaciones domésticas, incluyendo el Frente de Unidad Democrática y el Congreso de las Uniones de Comerciantes de Sudáfrica; la libertad de los presos políticos que habían sido encarcelados por acciones de no violencia; y la suspensión de la pena de muerte. Esto fue un largo camino en torno a la reunión de precondiciones que Mandela había expresado y a la Declaración Harare (Thompson, p. 247).

Las negociaciones entre el gobierno de De Klerk y los líderes del ANC, con Mandela como eje central, se iniciaron en medio de una polarización ideológica fuerte entre los partidos políticos sudafricanos y dentro de las mismas estructuras del ANC. Entre la población blanca había personas que mantenían la abominación frente a la idea de un posible empoderamiento de los negros dentro del contexto del país. El partido conservador, por ejemplo, se opuso claramente a las negociaciones con los africanos negros; igualmente, se podía hallar resistencia entre miem-

bros de las Fuerzas Militares, la Policía y la burocracia afrikáner. La población africana negra no se quedaba atrás en cuanto a divisiones respecto el proceso, especialmente la facción que llevaba años en la lucha guerrillera por el poder en Sudáfrica.

Sin embargo, el presidente De Klerk y Mandela iniciaron los acercamientos y diálogos. Los días 2, 3 y 4 de mayo de 1990 se realizó una reunión entre doce líderes del ANC y un grupo representante del gobierno en la residencia presidencial en Ciudad del Cabo. A partir de esa reunión el gobierno tomó la decisión de suspender el estado de emergencia, revocó las restantes leyes del *apartheid*, dejaron en libertad a muchos de los prisioneros políticos y los africanos que estaban exiliados iniciaron su retorno con inmunidad frente a persecuciones. En respuesta, Mandela anunció que el ANC abandonaba la lucha armada.

Así, con la asistencia de pacificadores provenientes de la sociedad civil y expertos técnicos de casa y del extranjero, los dirigentes sudafricanos fueron poco a poco construyendo un proceso inclusivo y con principios para guiar las múltiples transiciones al Estado tras el *apartheid*, que fueran seguidas por un gobierno de transición en el cual se compartiera el poder, para llegar finalmente a una estructura estatal y un sistema de gobierno constitucionales (De Klerk, 2004, p. 22).

Entre los años 1990 y 1994 se vivió una fuerte escalada de violencia por parte de los organismos de seguridad del Estado contra acciones del ANC.⁶⁷ Los diálogos hacia la paz se habían iniciado y los primeros acuerdos estaban quedando definidos, pero las acciones violentas se mantenían. Las persecuciones, torturas y asesinatos de oponentes políticos continuaban, mientras el gobierno negaba la realidad. El centro de los ataques contra el ANC fue la *homeland* KwaZulu y la provincia de Natal e, inclusive, en Johannesburgo.

En el año 1991 el ANC realizó su primera conferencia después de 30 años. En este encuentro, deseaba transformar su status social convirtiéndose en partido político y en una organización democrática. Los delegados en la conferencia eligieron a Mandela como nuevo presidente del ANC. A pesar de las dificultades que se tenían en KwaZulu, junto a la reacción en contra del proceso de su presidente, Mandela y De Klerk continuaron los diálogos para buscar salidas alternativas a la situación política en Sudáfrica. A finales de noviembre de 1991 se reunieron líderes de veinte organizaciones políticas para ayudar a la búsqueda de alternativas. La Convención para la Democracia de Sudáfrica (CODESA), compuesta por doce miembros de delegaciones de partidos participativos, redactó una constitución interina con miras a la organización de una

67. Según Thompson (2000, p. 248), el Instituto de Relaciones Raciales de Sudáfrica informó que en el año de 1989 fueron asesinadas por violencia política 1.403 personas. En el año 1990 fueron asesinadas 3.699 personas; en el año 1991, fueron asesinadas 2.706; en 1992, 3.347; en 1993, 3.794 y en 1994, 2.476. Miembros del servicio civil y de las fuerzas de seguridad fueron los actores de esta cadena de asesinatos.

Asamblea Constituyente que redactaría una constitución final de acuerdo a los principios que se habían definido en la constitución interina.

La búsqueda de salida a la situación de violencia contó con el fuerte apoyo de las iglesias presentes en territorio sudafricano. En noviembre de 1990 se reunieron en una conferencia nacional en la que se esbozó el deseo de encontrar respuestas al problema y los obstáculos hacia la paz. Esta conferencia dejó como resultado la Declaración Rustenburg, en la que denunciaban el *apartheid* y reclamaban una constitución democrática y más equidad en la distribución de la riqueza. En marzo de 1991 estas iglesias manifestaron la decisión de convocar una conferencia de paz, aunque se les opuso el Partido Nacional Inkatha (PLI). Esta iniciativa de las iglesias se sumó a la búsqueda de alternativas por parte del grupo de empresarios progresistas y gente de importantes corporaciones que trataban de “trascender” a la realidad (Spies Chris, citado por Barnes (ed.), 2004, p. 25).

En la elaboración de la nueva constitución estuvieron representados el gobierno, ocho partidos políticos y representantes de diez *homelands*. A su vez, la reunión recibió críticas de grupos contrarios, entre estos el Congreso Pan-Africanista (PAC) y la Organización del Pueblo Azania-no (AZAPO), por el lado africano, y del Partido Conservador por parte del grupo poblacional blanco más reaccionario.

La primera fase de la construcción de una nueva constitución fue una “declaración de intención” que dispusiera los componentes básicos de una constitución interina:

- Sufragio universal
- Declaración de derechos que incluyera derechos civiles y políticos
- Poder judicial independiente con capacidad de declarar legislación inválida
- Eliminación de los gobiernos de los *homelands*
- Incorporación de los territorios de los *homelands* en una nueva organización de provincias

La gestión de este proceso que apunta a la reconciliación social en el año de 1993 encontró un elemento político fundamental al acordarse la Constitución Interina y aprobarse el 18 de noviembre de 1993. El Foro Multipartidista que realizó el trabajo escogió el 27 de abril de 1994 para las nuevas elecciones en Sudáfrica. A su vez, el parlamento que aprobó la constitución interina creó un Concejo Ejecutivo Transicional Multipartidista que fue el gobierno *de facto* hasta la nueva elección, así como una comisión electoral independiente, que fue responsable de la organización de las elecciones.

En las palabras de clausura del Foro Multipartidista, el presidente De Klerk expresó el sentir común de la siguiente manera:

Nosotros hemos demostrado que fue posible para la gente con amplias diferencias en puntos de vista y creencias buscar básicos y agradables acuerdos a través del compromiso, a través del debate razonado y a través de la negociación. Yo añado que la constitución transicional fue la destilación de los sueños de sudafricanos que estaban privados del derecho al voto. Esto ofrece una razonable garantía de seguridad continua para esos que tradicionalmente habían tenido el voto... Esto nos satisface a todos nosotros suficientemente para encontrar urgentes asuntos y esperanzas (Thompson, p. 256).

El imaginario ético público que se fue creando en un entorno de dominación y exclusión fue gestado por un proceso político con contenido de liderazgo, en medio del conflicto y la violencia, pero sostenido en voluntades reales. La solución no estaba dada del todo, pero se vislumbra un nuevo horizonte social en quienes no habían visto otro camino que la fragmentación social. Por ello, repasar rápidamente la historia nos ha permitido corroborar que “contemplar más allá de una sola opción” (imaginario) sí tiene contenido desde un *ethos* distinto donde lo común, lo público, sea factible.

La reconciliación social aún no se había concretado, pero Sudáfrica ya tenía las bases de una gestión que será reestructuradora desde los elementos que señalaremos: voluntad política y social, liderazgo, gestión reconciliadora y garantías de no repetición, entre otros elementos. Fue un ejercicio de gestión política desde la perspectiva de crear la reconstrucción, no porque todos los actores pudieron satisfacer sus demandas y exigencias, sino porque fue factible acceder al ámbito de lo dialógico para volver a construir entre todos. “Si el espacio público tiene un valor democrático no es simplemente porque todos tienen derecho a hacer valer sus deseos o convicciones, sino porque los ponen en juego en el seno de un debate en el que se construyen sistemas públicos de integración” (Innerarity, 2006, p. 58).

Por ello hablamos de gestión de la reconciliación, por cuanto tiene un elemento fundante que impulsa la creación de la novedad en la esfera pública, un compromiso hacia una sociedad decente. Pero no lo hacemos desde una “fantasía” basada en la deliberación pública como un aspecto “perfecto”, puesto que somos conscientes de las dificultades que la misma propuesta habermasiana contiene. Sin embargo, consideramos que el elemento del diálogo y la discusión en lo público pueden servir de “bisagras” en este tipo de búsquedas políticas.

3.1.2.3. Acuerdos para la efectividad del proceso

Con el Acuerdo Nacional de Paz y la constitución interina Sudáfrica inició un proceso de reconstrucción desde su estructura política buscando la redacción de una nueva constitución política para el año de 1996. Como proceso previo, el Acuerdo Nacional de Paz fue catalogado como el primer instrumento institucionalizado de Sudáfrica para la construcción y mantenimiento de la paz (Barnes, 2004, p. 26), a través del cual los partidos políticos que lo lograron hicieron posible un espacio público donde se podía negociar el futuro del país.

Aunque el escepticismo rodeó el trabajo de los participantes en el Acuerdo Nacional de Paz (1991), la manera de trabajar y la organización institucional que propusieron facilitó el acceso del pueblo a la esfera de diálogos hacia la paz. Se creó una estructura de red formada por comisiones de paz a nivel nacional, regional y local, y comités especializados para tratar temas específicos. Podemos sintetizar este aporte del proceso a una política de reconciliación social desde lo narrado por Chris Spies (Barnes, 2004, pp. 27– 28).

- A nivel nacional se creó la Comisión Nacional de Paz, formada por 60 personas miembros de los partidos firmantes y miembros de la comisión preparatoria. A este nivel, el Acuerdo buscó la supervisión de la aplicación del compromiso a nivel general y la resolución de cualquier obstáculo político en el desarrollo del mismo. En su dinámica estaba el Secretariado Nacional de Paz que, aunque independiente de la Comisión Nacional, gestionaba las directrices de la Comisión y la labor de las comisiones regionales. El Secretariado estaba conformado por siete personas, representantes de cinco partidos y uno del Departamento de Justicia. También, se creó una Comisión de Investigación independiente (Comisión Goldstone) que investigaba la naturaleza y causas de la violencia y la intimidación políticas, para identificar a los responsables y proponer soluciones.
- A nivel regional se crearon once Comisiones Regionales de Paz, excepto en los cuatro *homelands* independientes que no firmaron el Acuerdo. Estaban encargadas de prevenir la violencia en su región utilizando diversidad de enfoques, informaban a las estructuras nacionales sobre las causas de la violencia, coordinaban actividades de la región y establecieron redes de comisiones locales. Organizaron las Comisiones de Desarrollo y Reconstrucción Socio-Económica para intermediar en proyectos de desarrollo destinados a la prevención o reducción de la violencia.
- A nivel local se establecieron Comisiones Locales de Paz, buscando una conformación lo más accesible posible a la realidad social de la zona donde trabajaban, im-

plicando a las comunidades locales en el proceso. Tenían como función fomentar la confianza y reconciliación en el nivel de base o de calle, mediar en conflictos, facilitar acuerdos de desarrollo políticos locales públicos, promover los acuerdos alcanzados y servir de enlace con la Policía y los órganos judiciales.

Esta estructura que se dio a través del Acuerdo Nacional de Paz sentó sus bases en “la manifestación de un propósito común de poner fin a la violencia” (Preámbulo del Acuerdo); dicha expresión contenía una segunda motivación que le daba sentido a esa búsqueda general: “explicitar los códigos de conducta, procedimientos y mecanismos para lograr dicho objetivo”. Es decir, el freno a la violencia que se propusieron los participantes en el Acuerdo conllevaba una serie de principios y valores que, junto a herramientas de resolución de conflictos, garantizaría “las acciones de reconstrucción, dirigidas a dar respuesta a los peores efectos de la violencia política a nivel local” (Acuerdo Nacional de Paz). Estas acciones requieren de un trabajo compartido, con miras a un desarrollo socioeconómico.

En suma, el Acuerdo Nacional de Paz contuvo cuatro acuerdos centrales:

- Un código de conducta para los partidos políticos y organizaciones
- Un código de conducta para garantizar el buen desempeño de la función policial
- Líneas generales para la reconstrucción y desarrollo de comunidades
- Establecimiento de mecanismos para poner en práctica el Acuerdo

Deji Olukotun hace una referencia de Shelagh Gastrow respecto a la síntesis que se puede hacer de los ejes centrales sobre los cuales se fundó el Acuerdo Nacional de Paz en Sudáfrica: *a)* eliminar la violencia política a través de una red de Comisiones de Paz, *b)* promocionar la democratización a través de la creación de un clima de tolerancia, *c)* facilitar la reconstrucción y el desarrollo en comunidades marcadas por la lucha (Olukotun, 2009, p. 102). Esto es, la creación de mecanismos conducentes a la reconstrucción a través de principios de ética pública y modelos estructurales de gestión de la reconciliación social.

La constitución temporal sentó las bases de una reforma democrática liberal en un país que solo había percibido la dominación y la exclusión. Contenía características peculiares, entre las que se destacan (Thompson, 2000, pp. 257–258):

- Fue una elaborada carta de derechos, incluía derechos como los clásicos derechos civiles y políticos, y también económicos, aunque muchos de los derechos económi-

cos no era posible que se impusieran por la ley, como, por ejemplo, el derecho de los niños a la seguridad, la nutrición básica y los servicios básicos de salud.

- Los servidores civiles, jueces, policías y personal militar podían mantener sus trabajos hasta la edad de jubilación, y hubo una forma de poder compartido obligatorio hasta 1999, cuando la elección sería bajo las condiciones de la nueva constitución.
- Los jefes de los partidos adquirieron extraordinarios poderes. Bajo el sistema de lista proporcional de representación, ellos prepararon la lista de los candidatos de sus partidos.
- Las “autoridades tradicionales” fueron empoderadas para aplicar la ley basada en la costumbre africana en sus comunidades, aunque con alguna frecuencia esta ley entraaba en conflicto con la declaración de derechos.
- Se instituyó la multiplicidad de lenguas: inglés, afrikaans y otras lenguas nativas, incluyendo el isiZulu, el isiXhosa y el Sesotho. Pero, en la práctica, el inglés continuaba siendo la lengua principal de los negocios y la administración.
- Finalmente, sintetiza Thompson, esta constitución incluyó aspectos de derechos humanos, restitución de tierra, ley de la costumbre y los poderes de las provincias. Sin embargo, en algunos de estos aspectos hubo ambigüedad y se vio la necesidad de acciones políticas o resolución por parte de la Corte Constitucional.

Esta fase de acuerdos para la efectividad del proceso en Sudáfrica no fue un tiempo de cese de hostilidades total. En medio del conflicto y la violencia, el gobierno y los grupos africanos que estaban a favor del proceso tuvieron que avanzar en los acercamientos y diálogos contando con la oposición de grupos en los diferentes sectores sociales: el partido conservador, el IFP, los partidos gobernantes en los *homelands* del Ciskei y Bophuthatswana, el congreso pan-africanista y la AZAPO. La resistencia a la salida negociada conllevó presión ideológica y física, atacando en las calles a las personas, según el color de piel. El 28 marzo de 1994 el IFP atacó la casa del ANC y asesinaron a 53 personas.

Las elecciones se desarrollaron en un ambiente de tranquilidad entre los días 26 al 29 de abril de 1994. Los resultados mostraron un imaginario ético político distinto. El cansancio de la violencia y el deseo de una convivencia distinta pusieron al ANC como centro del parlamento africano, seguido del partido nacional y del IFP (el partido que se había inscrito una semana antes de las elecciones). Nelson Mandela fue elegido nuevo Presidente de Sudáfrica y se posesionó el 10 de mayo. En su discurso, la reconciliación fue el eje central desde donde accedió a asumir el liderazgo de una reconstrucción que surgió de un imaginario colectivo histórico.

Fuera de la experiencia de un insólito desastre humano que nos desgastó por un largo período, debemos nacer a una sociedad de la que toda la humanidad estará orgullosa [...] Nunca, nunca, y nunca volverá a suceder esto ni esta bella tierra experimentará la opresión de ningún otro (Thompson, p. 264).

3.2. Centroamérica (El Salvador y Nicaragua)

Tengo mucha sed; me duelen los pies; tengo piedras en el zapato; seguro nos van a matar [...] ¿Por qué nos quieren matar si no hicimos nada?

*Chavita*⁶⁸ en *Voces inocentes*⁶⁹

El conflicto en Centroamérica, especialmente en Nicaragua y El Salvador, nos pone ante otra dimensión de la reconciliación social. Ya no es la realidad procesual de una historia de razas enfrentadas, sobre todo una dominada por otra, y el reclamo de las mismas por una salida ética de la situación conflictiva, sino que encontramos unos contextos políticos movilizadores por luchas frente a la injusticia social y al régimen dictatorial que implantaron los que controlaban el poder político.

La recurrencia que hacemos a la frase de una de las representaciones cinematográficas del conflicto centroamericano nos permite dejar expuesta nuestra hipótesis en este tercer capítulo: la reconciliación social en gestión es un proceso de búsqueda alternativa de la coexistencia y la convivencia pacífica que es factible a través de mecanismos de cooperación internacional, diálogo de las partes en el conflicto e instrumentos políticos de retorno a la democracia. Para buscar respuestas que nos permitan sentar las bases de este tipo de políticas públicas recurrimos a los casos de Nicaragua y El Salvador por ser dos de los más representativos de la historia del conflicto en Centroamérica y por contener elementos de acierto y desacierto claros que nos brindan insumos para la construcción de nuestra política pública de reconciliación fundada en principios de ética pública.

La complejidad, incluso actual, del caso de Guatemala nos hace distanciarnos del posible acercamiento académico. El elemento cultural indígena y sus diversas categorías en la realidad guatemalteca nos podría lanzar a otro horizonte de reflexión frente a los propósitos que nos hemos trazado desde el inicio de nuestra reflexión. Su importancia y particularidad resaltan para

68. Niño protagonista de la película *Voces inocentes*, de 2004, 1ª escena. En esta primera escena, la imagen muestra los pies de unos niños, acompañados de unos militares, caminando en medio de la lluvia por un camino polvoriento y barroso. Los niños caminan con las manos en la nuca y avanzan llevados a la fuerza por militares salvadoreños. En ese momento, el niño protagonista, “Chavita”, va haciendo esta reflexión.

69. Película dirigida por Luis Mandoki, México, en el año 2004, basada en la infancia del escritor salvadoreño Óscar Torres. Muestra uno de los rostros de la guerra en El Salvador, el uso de niños por parte del Ejército y la injusticia vivida por el pueblo durante el tiempo de la guerra.

una investigación profunda con solo este caso, ante lo cual optamos por los contextos nicaragüenses y salvadoreños, respectivamente.

Los tres conflictos aunque ligados presentan características distintas:

Guatemala tiene el componente indigenista al que se combate con los más terribles sistemas de contraguerrillas: desplazamiento forzado de la población, aldeas protegidas e incursiones de castigo.

El Salvador es el ejemplo más consumado de conflicto revolucionario liderado por partidos políticos de base marxista que pasan a la clandestinidad. Alternan guerrilla rural con insurrección general y guerrilla urbana, siempre innovando formas de poner en jaque al gobierno constituido.

Nicaragua representa la lucha de un pueblo contra el tirano. El FSLN recurrirá a golpes espectaculares (ocupaciones del Palacio Nacional), a la creación de zonas liberadas, la convergencia por columnas desde estas zonas sobre la capital (Managua), la toma del poder y la preparación de la nación para hacer frente a la contra-revolución, por ejemplo, mediante la movilización nacional (Díaz, Romero & Morán, 2010, p. 20).

Por su dinámica cercana, consideramos que los casos de Nicaragua y El Salvador nos pueden brindar esas herramientas académicas que necesitamos para la prueba de nuestra hipótesis general. Preferimos, como ya hemos indicado previamente, no abordar la particularidad de Guatemala para evitar demasiada extensión en nuestros textos y la posibilidad de abrir demasiados espacios nuevos de investigación que, en este momento, no vendrían al caso. A su vez, reiteramos que no estamos trabajando estudios de caso comparativos, si no que accedemos a las realidades históricas vividas dentro de los procesos dirigidos a la reconciliación social en estos dos países centroamericanos para, desde allí, extraer los instrumentos que nos permiten fundamentar nuestra propuesta de eticidad pública.

La manera como Centroamérica, específicamente Nicaragua y El Salvador, ingresó a la dinámica de reconciliación social está marcada por una fuerte influencia de ayuda internacional y concretizada en acuerdos internacionales.⁷⁰ Este elemento tipifica el proceso que apunta a la

70. Los acuerdos internacionales que más marcaron este proceso fueron 1) la Declaración de Contadora en enero de 1983, firmada por los cancilleres de Colombia, México, Panamá y Venezuela, 2) las Declaraciones de Esquipulas I y II, 1986 y 1987 respectivamente, pactadas por los presidentes de Centroamérica, buscando adoptar las sugerencias de la Declaración de Contadora y del Grupo de Apoyo a la Paz, 3) el Grupo de Lima o Grupo de Apoyo a Contadora, organizado a raíz del pronunciamiento oficial de los Presidentes de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay el 29 de julio de 1985, respondiendo a la sugerencia que el Grupo de Contadora hizo a todos los países latinoamericanos ese mismo año. De esta dinámica surgió el llamado “Grupo de los Ocho” el 24 y 25 de agosto de 1985 en Cartagena (Colombia). 4) El Mensaje de Caraballeda para la paz surgió de la segunda reunión del Grupo de los Ocho, en Venezuela, en el año de 1986, 5) la Declaración de Guatemala del 14 de enero de 1986, pactada por los Presidentes centroamericanos de acuerdo al Mensaje de Caraballeda, 6) la Declaración de Buenos Aires en abril de 1987, en la que se hacía pública la preocupación de las partes interesadas en la resolución del conflicto en Centroamérica por los estancamientos en los procesos respectivos, 7) el Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia, firmado en noviembre de 1987,

salida negociada del conflicto como una gestión pública promovida desde la cooperación internacional y asumiendo la voluntad política interna de cada país.

3.2.1. Procesualidad – Tiempos

Samuel Huntington afirma que “las distinciones cruciales entre grupos humanos atañen a sus valores, creencias, instituciones y estructuras sociales, no a su talla física, la forma de su cabeza ni el color de su piel” (2005, p. 50). Desde esta perspectiva, el conflicto en la historia de Nicaragua y El Salvador, a diferencia de Sudáfrica, no halla en la diferenciación racial un elemento motivador, aunque contenga visos en la dialéctica social entre ricos y pobres. Las diferencias que marcan lo vivido en la conflictividad y violencia de los países centroamericanos conllevan elementos institucionales y estructurales, al igual que deseos, creencias y oportunidades respecto a la manera de gestionar el poder político. Por ende, plantearnos una búsqueda de elementos de ética pública en este tipo de contexto, que conduzcan hacia la reconstrucción socio-política, nos lanza a considerar la historia que enmarcó esta problemática.

Este tipo de gestión política dirigida hacia la reconstrucción debe ir más allá de los acuerdos “parciales” o negociaciones hacia la paz. No es un “corto plazo de tiempo”, plasmado en “promesas de partidos políticos o líderes políticos”. Deben ser procesos que tienden a resolver medidas inmediatas, pero con perspectiva de “mediano y largo plazo” para la efectividad de la reconstrucción. Los casos de Nicaragua y El Salvador nos brindan más herramientas o insumos de construcción de nuestra política pública de reconciliación social, por cuanto “la política comienza a abandonar el ciclo de los proyectos y deseos y a tocar el mundo real sólo cuando concurren ‘las condiciones iniciales’”, y por consiguiente desatan el proceso de causación. “Las condiciones iniciales” parecen ser dos hechos: el consenso en torno del objetivo de la política, por ende, en torno del acontecimiento que se desea que ocurra (*en nuestro caso, el fin de las circunstancias conflictivas y violentas*) y el consenso en torno de los recursos e instrumentos a utilizar para producir el acontecimiento preferido (*en nuestro caso, la reconstrucción social a través de la reconciliación social como proceso*). En el fondo, son los medios y los fines de un curso de acción o, dicho en lenguaje casual, son los factores productivos y los efectos esperados de un curso de acción” (Aguilar, 2007, p. 45).

8) reuniones de Cancilleres del grupo de los Ocho en Cartagena (Colombia) y Oaxaca (México) en 1988, originando la reunión de Presidentes del mismo grupo, 8) la Declaración de Uruguay, surgida de la reunión de Presidente del grupo de los Ocho, en octubre de 1988, en la que se invitaba a Estados Unidos a un “nuevo diálogo” respecto a la problemática económica de Latinoamérica, 9) la Reunión de Cancilleres del Grupo de los Ocho en Puerto Ordaz, Venezuela, en el año de 1989.

No recurrimos a este conflicto con historia para relatar una serie de acontecimientos progresivos que condujeron a la fragmentación de unos países, sino que buscamos esas “condiciones iniciales” que nos facilitarán percibir el acierto o desacierto de unos procesos de reconciliación social y, desde allí, estructurar un marco de ética pública desde el cual se puede proyectar una efectividad de las dinámicas de reconstrucción democrática. Es lo que Stephen Macedo llama “sensatez pública” en la posición del liberalismo frente a la paz, la libertad dentro de los límites de la ley y los derechos orientados hacia la concepción de justicia, en sociedad plurales que necesitan elaborar aspectos urgentes que van más allá de las diferencias filosóficas o religiosas: el aseguramiento de libertades básicas y el establecimiento imparcial de principios de distribución (Macedo, 1991, pp. 40–47).

Es decir, el conflicto y la violencia en Nicaragua y El Salvador no son relevantes por la dinámica de salida negociada del conflicto y las alternativas de cese de hostilidades que se presentaron, sino por la estructura que eficaz o ineficazmente se presentó para hacer viable o inviable una sólida política pública de reconciliación. ¿Fue esto posible? Miremos la historia implícita en ello.

3.2.1.1. Desde lo histórico

Con sus particularidades, el caso centroamericano sostiene un punto en común con el sudamericano en cuanto la situación de fuerte diferenciación social entre una minoría dominante y una mayoría indígena y/o campesina dominada, originando una escalada conflictiva que se intensificó con la intervención extranjera, especialmente norteamericana, durante los años 1960 y 1970 ante la creciente incidencia de la revolución cubana en el hemisferio latinoamericano.

3.2.1.2. Realidades causantes del conflicto

En este contexto, el 1 de enero de 1959 la revolución cubana dejó de ser un “momento político” más de la historia latinoamericana y del Caribe, llegando a constituirse en el inicio de un “comienzo” de búsqueda de sociedad socialista en medio del conflicto entre clases dominantes y dominadas. Estados Unidos fortaleció la defensa de su espectro territorial y, por supuesto, Centroamérica no quedaba ajena a esta situación. La situación socio-política y económica en la que se hallaban los pueblos de El Salvador y Nicaragua, entre los otros de la zona, encontraba todas las ventajas para desarrollar un largo proceso conflictivo que conduciría a nuestro objetivo central de investigación: la reconciliación social en países marcados por el control extranjero, la inestabilidad política y enormes diferencias sociales.

No absolutizamos ese momento como la fuente originaria del conflicto en Centroamérica, pues los antecedentes también se encuentran en una ilación de enfrentamientos sociales desde la Conquista, la Colonia hasta la crisis económica mundial de la década de 1930. El desempleo, la reducción de salarios en el sector cafetero, en contraste con la comodidad de los grandes terratenientes, marcaron el contexto de aquel momento. Para esa época el partido comunista hacía sus primeras incursiones populares en El Salvador⁷¹ y motivó los primeros levantamientos sociales del momento y la represión por parte del gobierno del general Martínez, dejando para la historia salvadoreña la llamada “matanza” en 1932 (Martí i Puig, 2004, pp. 52–56). La relación de “cooperación y apoyo” entre las élites salvadoreñas y las fuerzas armadas se afianzó dando origen al llamado “despotismo reaccionario” que comparte Enrique Baloyra en su escrito del año 1983.

En Nicaragua la situación no fue muy distinta. El Acuerdo de Tipitapa o Pacto del Espino Negro, firmado el 4 de mayo de 1927, cesó el enfrentamiento entre liberales y conservadores; también definió el nuevo sistema político nicaragüense: creación de la Guardia Nacional (única fuerza policial y militar de la República), establecimiento de la Ley Electoral (Ley Dodds Law).⁷² De la misma manera, consolidó los lazos financieros con las entidades bancarias estadounidenses (Martí i Puig, 2004, pp. 56–61).

Pero lo que pareció “un milagro democrático” para los norteamericanos, fue cayendo en un conflicto interno que repercutiría años más tarde. La Guardia Nacional fue rápidamente controlada por los liberales, los generales Augusto César Sandino y Pancho Cabuya no aceptaron las condiciones del acuerdo, dando inicio así a un enfrentamiento entre miembros de la Guardia y los marines que ayudaban en la formación del cuerpo militar nicaragüense. Esto llevó a un enfrentamiento entre estas dos fuerzas que inicialmente estaban unidas tras el objetivo de frenar los movimientos revolucionarios. Las revueltas campesinas sobrevinieron, muchas lideradas por Sandino. En 1927 se formó el “Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua” (EDSN), incentivando la lucha. En 1932 se celebraron elecciones, en medio de la retirada de los marines y el control de la Guardia Nacional por parte de oficiales nicaragüenses. Sandino negoció con el gobierno y con el nuevo director de la Guardia, Anastasio Somoza García (Martí i Puig, 2004, p. 61). Pero los meses de negociaciones (diciembre de 1932 – febrero de 1933) solo facilitaron dos años de “tranquilidad”, terminando con el asesinato de Sandino el 21 de febrero de 1934.

En las elecciones de 1936 Anastasio Somoza se lanzó como candidato presidencial y ganó, comenzando para Nicaragua un largo período de “gobiernos personales” que conducirían a la

71. Partido liderado en ese momento histórico por Agustín Farabundo Martí.

72. Consistía en las normas para que el sistema bipartidista favoreciera la democracia.

crisis más fuerte de los años 70 y 80. El asesinato del líder político Pedro Joaquín Chamorro (10 de enero de 1978), promovido por el dictador Anastasio Somoza Debayle, constituyó el detonante de los años de lucha (Historial General de Centroamérica, 1993, p. 35) en Nicaragua. Fue la explosión de una problemática que se venía gestando a lo largo de la historia misma en un contexto social complejo de grandes diferencias sociales, originando el nacimiento del grupo revolucionario Frente Sandinista de Liberación Nacional –FSLN–.

Los “gobiernos de la dinastía Somoza” duraron desde 1937, cuando se posesionó Somoza padre como Presidente de la República, pasando por su asesinato en 1956 y la consecuente posesión como presidente de su hijo Luis Somoza (1956 – 1964), el gobierno de Anastasio Somoza Debayle (1964 – 1979), hasta la huida de “Tachito” (hijo menor de Somoza padre) después de una crisis generalizada y la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las repercusiones no tardaron en llegar a los países vecinos: El Salvador y Guatemala, en condiciones socio-económicas y políticas parecidas, iniciaron procesos conflictivos. El historiador Carlos Figueroa Ibarra, sintetiza de la siguiente manera ese proceso:

La crisis fue en Nicaragua, Guatemala y El Salvador esencialmente de carácter político, y esto se refiere al carácter dictatorial de los gobiernos durante largos períodos de tiempo, a la conformación de un Estado autoritario basado en el control militar de los recursos de poder, en la aplicación reiterada de la fuerza para cumplir con las funciones de control social y orden político. A menudo, en su versión más perversa, el terror. Se produce así un verdadero déficit hegemónico que condujo a la guerra civil (Historia General de Centroamérica, 1993, p. 37).

Por su parte, El Salvador venía del fraude electoral de 1977 en medio de una complejidad política delicada. En 1979, cuando Nicaragua ya vivía su proceso revolucionario, se llevó a cabo un golpe de Estado en el que asume el poder una Junta de Gobierno que, a primera vista, quería reunir a varios sectores de la sociedad y buscar la reconstrucción salvadoreña, pero el Ejército presionó para mantener el control y en 1980, al año siguiente, los miembros de la Junta más afines a la línea democrática abandonaron el Cuerpo Colegiado de Gobierno y continuó un gobierno contrainsurgente. Esta situación condujo a la organización del grupo insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN–. En 1982 la guerrilla ya tenía control del norte del país.

Ese mismo año se llevan a cabo las primeras elecciones para constituir una asamblea nacional constituyente, pero el ascenso de grupos de derecha a ese ente colegiado trajo como consecuencia políticas de *statu quo*, freno a la reforma agraria y el ascenso a la Presidencia de un hombre de derecha y ajeno a las reformas sociales, Álvaro Magaña. Estados Unidos in-

tentó mediar en el llamado “Pacto de Apaneca” (1982) incentivando un gobierno de “Unidad Nacional”. En 1984 se volvieron a realizar elecciones, en las que ganó Napoleón Duarte —de la Democracia Cristiana— frente al candidato de la derecha. Este gobierno no tuvo éxito en la búsqueda de un nuevo rumbo para El Salvador.

Desde 1977 la represión por parte de grupos paramilitares se había afianzado, entre estos grupos fueron conocidas las Fuerzas Armadas de Liberación Anticomunista (FALANGE), la Unión Guerrera Blanca (UGB) u ORDEN. También, el gobierno tomó medidas represivas.

En las elecciones legislativas de 1988, quedando derrotada la Democracia Cristiana frente al partido ARENA, se abrió el triunfo de estos últimos en las elecciones presidenciales de 1989, en las que fue elegido como Presidente Alfredo Cristiani. Al comenzar este nuevo período presidencial los salvadoreños vivieron la ofensiva urbana de la guerrilla en San Salvador, como resultado, un tercio de la ciudad fue retenido durante varios días y se originó una nueva acción del Ejército donde perdieron la vida muchos salvadoreños en los barrios populares de la capital.

En situación similar, el gobierno nicaragüense pasó de ser instrumento de conciliación entre intereses económicos y políticos intra-elitistas a un “campo de lucha” entre la familia Somoza y la burguesía del país. Martí i Puig describe esta situación como un traslado del “Estado de todos (o, mínimo, de todos aquellos que hasta entonces habían negociado o intercambiado intereses) a un instrumento de los Somoza” (2004, p. 100). La situación llegó al límite desde dos circunstancias claras:

- Una gestión gubernamental centrada en la *prohibición*: Limitaciones a la libertad de expresión en radio y televisión, prohibición de exhibir rótulos de cualquier índole sin la autorización respectiva; en 1967 una ley permitía cerrar rotativos que constituyeran una amenaza para la paz y la tranquilidad pública; en 1971 se dictó la necesidad de guardar el respeto absoluto a los símbolos patrios. “En aquel entonces, era popular el dicho que rezaba: ‘había tantas prohibiciones que el Estado podía meter preso a cualquiera por cualquier cosa’ (Martí i Puig, p. 102).
- Una crisis política, en cuanto afectó a la estabilidad del régimen de Somoza. La empresa de los Somoza utilizó recursos públicos y los resortes del Estado en sectores económicos en los que las empresas de las élites tradicionales gestionaban. Esto suscitó malestar en la burguesía (Martí i Puig, p. 103).

Ante el malestar social, tanto del pueblo como de la burguesía, el régimen somocista recurrió al recrudecimiento de la represión. Pero, la sensación de malestar se ampliaba cada vez

más. El FSLN continuó luchando por la resistencia, con golpes militares fuertes en el año de 1977. Los Estados Unidos, en la administración de Jimmy Carter, comenzó a dar un “giro retórico” al incentivar el discurso sobre los derechos humanos y la defensa del *statu quo* en la región tuvo una disminución notable. Desde esta perspectiva, Nicaragua sintió los efectos de este “cambio” cuando le suspendieron la ayuda militar en marzo de 1977.

El hecho que marca la crisis fue el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978, con lo que se dio un giro de “crisis política a crisis revolucionaria” (Martí i Puig, p. 139). Las élites ya no podían discrepar con el sistema somocista. En este contexto, el año de 1978 Nicaragua contempló el secuestro de la Asamblea Nacional por parte del FSLN.⁷³ Este hecho incrementó la acción revolucionaria con el método de guerrillas y alta participación popular en el conflicto nicaragüense.⁷⁴ El ascenso de esta revolución popular, sentando un marco político llamado “sandinismo”, junto a la presión internacional para que las salidas al conflicto en Nicaragua fueran distintas a la violencia, y la política Carter en perspectiva “retórica” de cambio en la intervención trajeron como consecuencia la huida del último Somoza, Tachito, del territorio nicaragüense y los acercamientos a los instrumentos estructurales que consideramos en nuestra reflexión.

La situación en El Salvador se agravó ante la suma de fraudes electorales en las elecciones de 1972, 1977 y 1979, fundamentalmente, creándose un ambiente de desconfianza generalizada en la población y el ascenso de los militares al poder ejecutivo salvadoreño. Después de las elecciones de 1979 se instauró una Junta Revolucionaria de Gobierno que buscó la desmovilización de las organizaciones radicales y controlar las facciones más reaccionarias del mismo Ejército. La revolución popular se organizó alrededor del FMLN y del FDR (Frente Democrático Revolucionario).

A partir de 1980 el régimen de represión se enfatizó a través de leyes concretas en materia de reforma agraria por medio de expropiación de tierras, nacionalización de entidades crediticias y de ahorro, etc. Según Martí i Puig, la Junta de Gobierno buscaba quitarle a la insurgencia la “paternidad” de sus reivindicaciones (2004, p. 213). Contrario a Nicaragua, la acción de

73. Salvador Martí i Puig y David Close son los editores de un texto en el que se detalle con más precisión el rol del FSLN en la política nicaragüense. Martí i Puig, S., y Close, D. (eds.) (2009). *Nicaragua y el FSLN (1979 – 2009) ¿Qué queda de la revolución?* Barcelona: Ballaterra.

74. Este movimiento fue característico por la cualidad de popular que tomó, caracterizada por una “masa de pobretariado más que proletariado, en términos de Martí i Puig (2004, p. 145), pero una perspectiva de futuro clara, pues se sentían motivados más por el deseo de derrocar un régimen específico que por gestionar un proyecto macro. A esto se suma el impacto del desarrollo acelerado y desigual en Nicaragua, junto a la presión del régimen de los Somoza: gestión que desarrolló una conciencia popular en la que el rechazo de la miseria, la falta de trabajo y de tierra reforzaban el repudio al somocismo (p. 146).

Estados Unidos fue de promoción del régimen contra-guerrillero. A finales de 1981, la misma administración Carter reactivó la ayuda militar para el gobierno salvadoreño con este fin. Luego, el gobierno de Ronald Reagan reforzaría la ayuda.⁷⁵

Con esta ayuda, en medio de la búsqueda de desmovilizar la “insurrección”, en 1982 se celebraron elecciones “restringidas”, a las que solo podían acceder los candidatos de la democracia cristiana y las de derecha, para elegir una asamblea constituyente. Quedó así establecido un marco de referencia para los instrumentos estructurales a los que nos hemos referido.

Tabla 1. Cuadro síntesis de similitudes en la procesualidad – el tiempo

	SUDÁFRICA	CENTROAMÉRICA
• Largo proceso de conflicto	Sí	Sí
• Aumento progresivo de la violencia	Sí	Sí
• Uso de instrumentos represivos por parte del Estado	Sí Especialmente por medios jurídicos (promulgación de leyes discriminatorias) y, en una última fase, con violencia física, llegando a homicidios.	Sí Sobre todo con leyes de “prohibición”, represión y acciones directas conducentes al asesinato sistematizado (usando “escuadrones de la muerte”).
• Marcada diferenciación social	Sí Centrada en la diferenciación racial por color de piel.	Sí. Centrada en distribución inequitativa del ingreso, creando “cordones de miseria”.
• Control del poder político por parte de un sector social	Sí Solo una raza tenía acceso al control del poder político. Paulatinamente, se fueron dando cambios, pero los negros siempre quedaban por fuera de cualquier reforma.	Sí En Nicaragua, una familia, “Los Somoza”. En El Salvador, las élites, en un primer momento, luego los militares. Finalmente, la Democracia Cristiana.

75. La “ayuda” de los Estados Unidos al caso salvadoreño estuvo centrado en dos perspectivas: apoyo a todo el ámbito militar (dinero y formación de militares) y el diseño de “marketing político” para que el candidato democratacristiano Napoleón Duarte fuera entrando en la vida de los salvadoreños: elaborar una institucionalidad liberal susceptible de ser homologada en el exterior como una democracia representativa, que sirviera para marginar a las fuerzas insurgentes a partir de un discurso “civilista” y “democrático”, a la vez que intentaban implementar reformas que permitieran la desmovilización (Martí i Puig, 2004, p. 217–218).

	SUDÁFRICA	CENTROAMÉRICA
• Régimen de “democracia disfrazada” a unos intereses particulares	Sí Intereses económicos de la raza blanca sobre las otras razas.	Sí La burguesía, creando fraudes electorales y acomodando los regímenes políticos a los intereses económicos.
• Intervención extranjera	Sí Gran Bretaña.	Sí Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia

Nuestra perspectiva de reflexión nos ubica ante el acceso del proceso mismo a lo que hemos denominado “instrumentos estructurales”, es decir, los mecanismos que cada contexto necesitó para la efectividad o inoperancia del proceso de reconstrucción social. En los casos que hemos traído a colación, Sudáfrica y Centroamérica, hallamos puntos en común de un largo proceso histórico de conflicto y violencia que, a su vez, demandó medidas a corto plazo para frenar el ascenso de la violencia, mediano plazo para crear unas mínimas condiciones hacia la recuperación de lo fragmentado y a largo plazo para hacer viable el retorno a la democracia desde la convivencia y la coexistencia. Pero, ¿cuáles fueron los presupuestos sobre los que Nicaragua y Centroamérica gestaron la dinámica de la reconciliación social?

3.2.2. Presupuestos para los instrumentos estructurales en Centroamérica

Casi siempre la historia de los hombres es el triunfo de la necesidad sobre la libertad. Los hombres se proponen metas y su praxis introduce transformaciones esenciales en la naturaleza y en la sociedad, pero no necesariamente en el sentido en el que los ideales y las ideologías las habían imaginado. Estos se encuentran enclaustrados en el ámbito de lo realmente existente, es decir de las posibilidades de la economía, de las correlaciones en la política y de los límites de la cultura. Es en este sentido que podemos decir que Centroamérica presenció en la década de los ochenta y principios de los noventa el triunfo de la realidad sobre la utopía (Carlos Figueroa Ibarra).

En el caso de Sudáfrica los presupuestos hacia los instrumentos estructurales del proceso los hallamos en la dinámica relacional que se gestó desde los diálogos hacia los acuerdos y, finalmente, en la concreción misma de los puntos en común hechos “acuerdo”. En estos dos casos centroamericanos, los diálogos y las búsquedas de “puntos en común” también se hicieron presentes pero con un fuerte elemento de intervención extranjera y presión interna a través de los llamados “procesos revolucionarios” que se dieron en El Salvador y en Nicaragua.

3.3. Instrumentos estructurales en Sudáfrica

La gestión de una nueva Sudáfrica la inició Nelson Mandela, dándole fuerza a la categoría de “Unidad Nacional” basada en el respeto a las culturas que habitaban el territorio sudafricano en sus particularidades y diferencias étnicas y raciales. El liderazgo de Mandela condujo el proceso a la impresión de una serie de símbolos públicos a través de los cuales el nuevo mensaje de unión fue calando en la sociedad en general: visitó en sus casas a los expresidentes Botha y Verwoerd, cenó con el General Johan Willemse —formador del comando de Robben Island—, almorzó con Percy Yutar —quien persiguió al mismo Mandela y logró que lo sentenciaran a prisión y un— domingo se unió a la celebración religiosa en una iglesia afrikáner. Uno de los elementos simbólicos de unificación que más marcaron el trabajo que inició la reconciliación fue la identificación del rugby como deporte sudafricano,⁷⁶ el cual había sido identificado hasta ese momento como un deporte blanco, especialmente Afrikáner.

Podemos afirmar que la reconciliación social en Sudáfrica comenzó, en sí misma, a través de la simbología política que Mandela transmitió a toda la sociedad sudafricana y al mundo en general. Utilizar el deporte como mecanismo político fue una estrategia que permitió contemplar la reconstrucción social del país desde una perspectiva que trascendió a los mecanismos procedimentales de la resolución de conflictos. Es decir, no solo los diálogos, la negociación, la mediación, el arbitraje, entre otros, soportaron un proceso hacia el reencuentro social, sino que la misma dinámica común fue utilizada por Mandela para imprimir una fuerza a la urgente necesidad de su país. Narrativamente, John Carlin (2009) lo describe de la siguiente manera:

En esa segunda entrevista, con la grabadora encendida, me explicó [Mandela a Carlin] que la primera vez que se había hecho una idea del poder político del deporte había sido en la cárcel; que había utilizado la Copa del Mundo del rugby de 1995 como instrumento en el gran objetivo estratégico que se había propuesto para sus cinco años como primer presidente elegido democráticamente de Sudáfrica: reconciliar a los blancos y los negros y crear las condiciones para una paz duradera en un país que, sólo cinco años antes, cuando él salió de la prisión, contenía todos los elementos para una guerra civil (Carlin, 2009, p. 15).

La visión ampliada de Mandela de asumir el deporte del rugby como símbolo de unificación se convirtió en estrategia política de reconciliación social. El contexto sudafricano y la oportunidad de la Copa del Mundo de rugby de 1995 fueron los componentes que posibilitaron

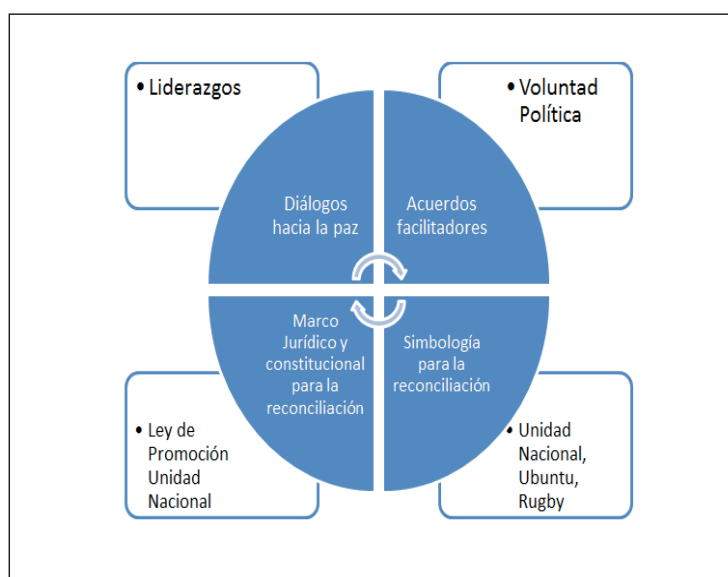
76. Este hecho histórico y político de Sudáfrica fue asumido narrativamente por el escritor John Carlin en el libro *Playing the enemy: Nelson Mandela and the Game that Made a Nation*, publicado en 2008, y traducido al castellano bajo el título *El factor humano*, en el año de 2009. También fue llevada al cine en la película *Invictus* en el año 2009, dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por Morgan Freeman.

el acceso del líder negro, ahora Presidente de Sudáfrica, a los jugadores del equipo nacional, “los Springboks”. John Carlin, en la novela que describe literariamente este hecho, narra este engranaje “deporte–política” en el primer capítulo de su obra cuando afirma que el día de la final de la Copa entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, los jugadores tenían doble tensión: el final deportivo y el sentirse con la responsabilidad de ser instrumentos unificadores de una sociedad fragmentada por el conflicto y la violencia durante décadas.

Eran como otros hombres blancos sudafricanos y como la mayoría de los hombres en todas partes, en el sentido de que pensaban poco en la política y mucho en el deporte. Sin embargo, cuando Mandela había ido a verles un mes antes, el día antes de que comenzara el campeonato, les había asaltado una idea nueva: que se habían convertido literalmente en actores políticos. En la mañana de la final, comprendieron con impresionante claridad que la victoria contra Nueva Zelanda podía permitir algo aparentemente imposible, unir a un país más polarizado por la división racial que ningún otro en el mundo (Carlin, p. 26).

El inicio de la reconciliación en Sudáfrica contó con elementos de liderazgo personal en cabeza de Mandela; la creación y transmisión de un mensaje de unidad racional para contrarrestar la fragmentación de años de violencia, junto a la gestión de símbolos a través de los cuales se pudo dinamizar esa unión en construcción, por ejemplo, la mencionada Copa del Mundo de rugby de 1995; y, entre otros elementos, la elaboración de un marco constitucional y jurídico que abrió las puertas de la realidad de la reconstrucción social. La gestión de la reconciliación social se constituyó en una urgencia ética y política, por cuanto “si no hablamos acerca de los crímenes del *apartheid*, continuarán viviendo entre nosotros comiéndonos como un cáncer”, afirmaría Mandela (Thompson, 2000, p. 274).

Ilustración 7. Reconciliación social



Fuente: Elaboración propia

3.3.1. Ley de Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación

Aunque el mensaje que convocaba a la reconciliación social en Sudáfrica contenía elementos de voluntad política, apertura de grupos humanos dispuestos a concretar ese anhelo, liderazgos promotores del mismo y mensajes/símbolos hacia la unidad nacional, la realidad de reconstrucción política de un país que ha estado sumido en el conflicto y la violencia necesita de los mecanismos políticos precisos que posibiliten el acceso real a las estrategias encaminadas a la reconciliación. En el caso de Sudáfrica, estos mecanismos fueron el marco constitucional (Constitución Interina, en un primer momento, posteriormente Nueva Constitución de 1996) y el marco jurídico que estableció la Ley 34 de 1995 (Promotion of National Unity and Reconciliation, 1995), con la estructuración y trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

El 19 de julio de 1995 fue aprobada la Ley 34, conocida como la *Ley de Unidad Nacional y Reconciliación*, estipulando la fecha de inicio de los compromisos que citaba para el 1 de diciembre del mismo año. Este marco jurídico fue creado como iniciativa gubernamental para “investigar y establecer un panorama lo más completo posible de la naturaleza, causas y extensión de las graves violaciones de derechos humanos cometidos desde el 1 de marzo de 1960 hasta la fecha límite⁷⁷ establecida en la Constitución, que se cometieron durante el conflicto pasado victimizando a personas”.

A su vez, la misma ley brindó la posibilidad de ofrecer la amnistía a los victimarios, siempre y cuando realizaran un completo desvelamiento de los hechos relevantes relacionados con objetivos políticos cometidos durante el conflicto. También, buscó proporcionar a las víctimas una oportunidad para relatar las violaciones que ellos sufrieron. En todo este contexto, la misma ley ofreció el marco jurídico para la reparación, restauración y rehabilitación de la dignidad humana y civil de las víctimas. Para que este proceso tuviera más fuerza cohesionadora a nivel general, la ley estableció, a nuestro modo de ver las cosas, el ámbito de lo público como marco de referencia y garantía, estipulando el “reporte a la nación de las violaciones perpetradas y de las víctimas”, junto a las recomendaciones que se debían ofrecer para evitar la repetición de los hechos, la cual estuvo en manos de la Comisión de graves violaciones a los derechos humanos.

Para el logro de estos objetivos, la ley estableció la constitución de la *Comisión de Verdad y Reconciliación*, compuesta de tres órganos de gestión: Comité de violación de Derechos Humanos, Comité de Amnistía y Comité de Reparación y Rehabilitación. Pero, más allá de la creación de un órgano institucional que buscaba la verdad y ofrecía pautas para la reconcilia-

77. La misma ley estableció esa fecha límite en el día 8 de octubre de 1990.

ción, la Ley 34 de 1995 encarnó un espíritu de gestión política que se fundó en los principios de creación de un “puente histórico” entre el pasado conflictivo y violento, y un futuro de reconocimiento de los derechos humanos, la instauración de la democracia y la coexistencia pacífica, independientemente del color de piel, la raza, la clase social, la creencia o el género.

Para que este “puente” entre pasado y futuro fuera efectivo, la misma ley definió como principios de soporte la verdad para conocer los hechos del pasado y visualizar la no repetición; la unidad nacional como marco simbólico desde el cual la reconciliación fuera posible para la reconstrucción social; la amnistía como herramienta facilitadora del proceso en cuanto le abrió a los victimarios oportunidades para colaborar. Es un proceso que surgió, en términos de la misma ley, de la necesidad de entendimiento, en vez de venganza, de reparación, en vez de retaliación, de Ubuntu,⁷⁸ en vez de victimización.

Aunque jurídica y políticamente la ley tenía una justificación institucional en orden al restablecimiento de las cosas desde un *ethos* político urgente después del conflicto y la violencia, la construcción de un “puente conceptual” entre ética pública y reconciliación social nos conduce a la identificación de esos principios y valores que deben fundamentar y acompañar este tipo de procesos para que, yendo más allá de los comunes procedimientos de pacificación en el manejo del poder, se establezca una verdadera coexistencia y convivencia que reordene socialmente a un país o grupo de países.

La Ley de Unidad Nacional y Reconciliación Social contenía las directrices básicas para darle orden al proceso de reconstrucción social, pero lo que hemos llamado el espíritu de la reconciliación social, es decir, lo que justifica este tipo de procedimientos, demanda un imaginario ético que se funda en la creación de simbolismo que aglutinen y dinamicen el trabajo: la unión nacional, el concepto de *Ubuntu*, el deporte como cohesionador del proceso y la creación de una institución eje sobre la que cae el peso de la búsqueda de la verdad y punto de encuentro entre víctimas, victimarios y sociedad, son elementos claves de la reconstrucción social en y desde el espacio de lo público, sin descuidar la dimensión individual y grupal que estén implicadas.

La ley contenía 49 artículos en los que estipulaban los mecanismos para avanzar en el proceso de reconciliación. Centraba su atención en la creación y gestión de la Comisión de Verdad y Reconciliación. En el tiempo posterior a su promulgación y entrada en vigor, la ley tuvo cinco

78. Palabra de la lengua xhosa que implica respeto, compartir, solidaridad, comunidad, confianza, desinterés. La pregunta que la contiene es: ¿vas a hacer algo para ayudar a la comunidad que está a tu alrededor, para ayudarla a mejorar? La expresión completa en xhosa es *Ubuntu ngumuntu ngabantu* que se puede traducir aproximadamente por: “una persona sólo es persona a través de otras personas” (Figueras, 2010, p. 93 – 94).

enmiendas⁷⁹ que definieron mejor algunos aspectos de contenido y forma. Ninguno tocó un aspecto esencial de la Comisión, la autonomía casi total,⁸⁰ para garantizar la efectividad del proceso.

3.3.2. La Comisión de Verdad y Reconciliación

Entre 1993 y 1996 Sudáfrica entró en un período de transición, caracterizado por un marco constitucional que fue sostenido por las dos constituciones respectivas. El horizonte tras el cual avanzaba el país era el de la transformación social y política generalizada. Johnny De Lange lo cataloga como “una aproximación a la transformación social de nuestra unida, democrática y próspera sociedad”. Por ello, agrega el mismo autor, “la transformación es un proyecto holístico para cambiar las actitudes, las conciencias y las condiciones materiales de nuestra gente en un camino significativo para reflejar los valores por lo que luchamos y ahora están encarnados en nuestra constitución y en la cultura de los derechos humanos por la que nos esforzamos” (Villa-Vicencio & Verwoerd, 2000, p. 16).

Desde esta perspectiva, la Comisión de Verdad y Reconciliación (en adelante, CVR), fue un mecanismo alternativo a escala política, pero también fue un proceso de gestión pública en el que la transformación socio-política era la razón de ser del mismo. Por tanto, los valores sobre los cuales se estructuró esta dinámica fueron vitales para la búsqueda de la reconstrucción social, con los tres elementos característicos: reconciliación, reconstrucción y desarrollo.

El marco de la Ley 34 de 1995 señala que la CVR tuvo como objetivos fundamentales: establecer un panorama, lo más completo posible, de las causas, naturaleza y tamaño de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 1 de abril de 1960⁸¹ hasta una fecha límite; facilitar la garantía de amnistía para las personas que declaren la verdad de los hechos cometidos con objetivos políticos; establecer y hacer conocer el destino de las víctimas restaurando su dignidad humana y civil, y recomendando una reparación y finalmente, elaborar y entregar un informe sobre las conclusiones y recomendaciones que se podían ofrecer en los casos.

Organizacionalmente, la CVR se estructuró en tres comités: de violaciones de derechos humanos, de amnistía y de reparación/rehabilitación. Además, se designó una unidad investiga-

79. Las enmiendas están registradas como las leyes 87 de 1995, 18 de 1997, 84 de 1997, 33 de 1998 y 23 de 2003.

80. El capítulo 7 de la ley, número 36, especifica este aspecto de la casi total autonomía de la Comisión.

81. Es el día de la masacre de Sharpeville, cerca de Johannesburgo, donde fueron asesinados 69 manifestantes de la no violencia (Daye, 2004, p. 29).

tiva. La misma ley señaló que los miembros de la CVR eran designados por el Presidente de la República, previa consulta a sus ministros, y estaría conformado por un grupo de personas entre 11 y 17 miembros. La condición *sine qua non* de quienes fueran designados para esta Comisión era el carácter de imparcialidad que posibilitara mayor eficacia y efectividad en las labores de la misma (Ley 34 de 1995, número 7, inciso b).

La ley estableció ocho funciones precisas para la CVR, cada una de estas funciones estaba enmarcada dentro de las categorías del “facilitar, iniciar y coordinar” todas las investigaciones en materia de violación de derechos humanos, derechos de las víctimas; acceso de los victimarios a la amnistía ofrecida por el gobierno, preparar un informe comprehensivo y objetivo sobre la información recogida; hacer recomendaciones al Presidente respecto a medidas de reparación y rehabilitación, y al Ministro de Justicia respecto a la garantía de brindarles seguridad a las víctimas y realizar recomendaciones al Presidente respecto a la creación de instituciones que garanticen la estabilidad y justicia de la sociedad e institucional, administrativa y legislativa que favorezcan la no repetición de los hechos violentos (Ley 34 de 1995, número 4).

Para que estas funciones tuvieran el efecto esperado, la misma ley le otorgó a la CVR una serie de poderes que le imprimen un carácter especial a la gestión de la reconciliación social en el contexto sudafricano. Estos poderes están explicitados en el capítulo 2, numeral 2, de la Ley 34 de 1995. Consideramos que estos poderes de la CVR se pueden dividir en dos amplios espectros:

- La capacidad de auto-organizarse: determinar los miembros de los comités, las oficinas necesarias para la gestión de funciones, definir los subcomités según las funciones de la comisión y de las mismas necesidades.
- La capacidad de gestión, que va desde la conducción de cualquier investigación que le ataña por su funcionalidad y la procesualidad misma de la gestión en cuanto al respeto de funciones y solicitud de permisos respectivos en el manejo de la información. Por ejemplo: conducir cualquier investigación o mantener la atención cuando lo juzgue conveniente y establecer la referencia de la unidad investigativa pertinente; remitir temáticas específicas o generales para darles orientación e instrucciones, o revisar decisiones, de cualquier comité, subcomité o unidad investigativa, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones.

3.3.3. El Comité de Violación de Derechos Humanos

La ley instituía su conformación en el número 13 de la misma. Tenía un presidente y dos vicepresidentes. No podía tener más de diez miembros que eran escogidos por la Comisión entre los ciudadanos sudafricanos de adecuada y correcta conducta, y que representara la comunidad sudafricana. Aunque podríamos recurrir al adagio popular que “el papel aguanta todo”, consideramos importante rescatar que las exigencias de idoneidad e imparcialidad que la misma ley reclama para quienes conformaron este grupo humano que gestionó la reconciliación social en Sudáfrica son ya claros visos de la necesidad de mantener un marco ético previo y, por ende, fundante de este tipo de iniciativas. No estamos hablando de una gestión pública de mecanismos para que cesen las hostilidades, sino que proponemos un espíritu institucional general que permee la transformación socio-política del país que la busca. Es lo que hemos denominado “pensar institucionalmente” desde la teoría de Hugh Heclo (2010).

Este Comité tenía poderes, tareas y funciones que la misma ley especificaba. Señalamos que la tarea más puntual era la de hacer efectivas las funciones de la CVR en materia de violación de derechos humanos, específicamente todo el trabajo que implicó la escucha de las víctimas, la corroboración de la información y la determinación de los hechos recogidos de acuerdo a los parámetros de la ley. A su vez, podía dar recomendaciones en materia de violación de derechos humanos y enviar información a los subcomités o unidad investigativa que pudiera profundizar en los casos. Finalmente, enviaba los casos al Comité de Reparación y Rehabilitación para que continuara el proceso dentro de la dinámica de la reconciliación social que se gestionaba.

3.3.4. El Comité de Reparación y Rehabilitación

La esencia de este componente de la CVR se encontraba en el capítulo 5 de la Ley 34 de 1995. La ley lo constituyó en cabeza de un presidente, un vicepresidente y un equipo de un número no mayor a cinco miembros. Los poderes, tareas y funciones se centraban en la acogida de los casos que remitían los comités de violación de derechos humanos y de amnistía. Además, podía dar recomendaciones respecto a los casos que recibía de acuerdo a las medidas interinas dentro de las que se estaba desarrollando el proceso como las adecuadas a la reparación de las víctimas.

En términos de gestión, este comité asumía la labor de ofrecer alternativas a las víctimas para sentir la “solidaridad estatal y social” en materia de reparar el daño sufrido y/o sentir la rehabilitación en sus vidas. Indudablemente, la tarea de este grupo conllevaba otra serie accio-

nes que no se limitaban a la entrega de un “monto de dinero” o elemento material con el que se pretendía compensar la pérdida, sino que la realidad sudafricana ponía en la esfera pública una labor de solidaridad afectiva y efectiva con las víctimas, donde el perdón público jugó un papel fundamental en este proceso transformativo. En nuestros términos, es la gestión pública de una transformación que se funda en la efectividad de lo administrativo y lo afectivo, dándole sentido a la institucionalidad de la reconstrucción social a través de la reconciliación social.

La reparación y la rehabilitación contienen en sí mismas una dimensión procesual administrativa y otra ética, pues la reconstrucción social conlleva un marco institucional y una creación del *ethos* de coexistencia y convivencia. En esta línea, la dinámica de la ética pública que fundamenta nuestra propuesta nos permite unirnos a Victoria Camps cuando afirma que

[...] la ética no puede prescindir de la parte afectiva o emotiva del ser humano porque una de sus tareas es, precisamente, poner orden, organizar y dotar de sentido a los afectos o las emociones. La ética no ignora la sensibilidad ni se empeña en reprimirla, lo que pretende es encauzarla en dirección apropiada. ¿Apropiada para qué? Para aprender a vivir, que es, al mismo tiempo, aprender a convivir de la mejor manera posible” (Camps, 2011, p, 25).

Sin embargo, la misma realidad socio-política de Sudáfrica colocó en entredicho esta gestión de la transformación a través del proceso de reconciliación social con la incidencia pública de las tareas del Comité de Amnistía. Las dificultades no se presentaron en cuanto a la existencia de este tipo de grupos en una CVR, sino las implicaciones individuales y colectivas que contiene el recibir a los victimarios en un proceso de conflicto y violencia con “ventajas” ante la justicia por el mal cometido, quedando la esfera pública marcada por un halo de “impunidad” que afectó y siempre afecta este tipo de dinámicas.

3.4. Instrumentos estructurales en El Salvador y Nicaragua

El llamado proceso de reconciliación social en Centroamérica, específicamente en El Salvador y Nicaragua, contiene elementos relacionados con el de Sudáfrica, pero la especificidad de sus contextos nos ofrece también aspectos diferenciados. Para reconocer la gestión de la reconstrucción social a través de la dinámica de reconciliación con los instrumentos de la verdad, la reparación, la restitución, la memoria histórica y el contexto hacia el perdón, tal como lo vislumbramos en el caso sudafricano, debemos acceder al componente de la *transición democrática* como columna vertebral sobre la cual la realidad salvadoreña y nicaragüense buscaron salidas alternativas al conflicto y la violencia.

Desde nuestra propuesta, los instrumentos para la efectividad del proceso o estructurales se configuraron desde el marco institucional que ofrecieron los mecanismos de *transición democrática* que se impulsaron en estos dos países centroamericanos. El sociólogo centroamericano Edelberto Torres-Rivas (2008) recoge la reflexión de Joan Botella y Josep M. Sanahuja (1998), en la que se percibe que el proceso de post-conflicto en El Salvador y Nicaragua es “transición desde sociedades autoritarias” (p. 169). Añaden estos autores con la consecuente adhesión de Torres-Rivas en que “la transición, literalmente, alude al comienzo de un proceso específico, determinado, que intermedia entre un arranque y un punto de llegada. En este caso es el intervalo histórico entre el fin de un régimen político (autoritario) y el comienzo de otro (democrático), y en medio, un desarrollo de acontecimientos que dan contenido a lo que hemos llamado desarrollo democrático” (p. 169).

En este mismo texto que estamos citando, los autores añaden que los casos de El Salvador y Nicaragua fueron procesos de *instauración de la democracia*, por cuanto las experiencias previas de los llamados “régimenes democráticos” que vislumbramos en la historia no fueron explícitamente democracias. A lo anterior, añaden la ausencia de liderazgos y tradiciones de períodos democráticos anteriores. Por tanto, se podría hablar de “democracias nuevas” facilitadas por los marcos institucionales creados desde el plan de paz de Óscar Arias, 1987, pero promovido por el Acuerdo de Contadora de 1983 y sellado por los Acuerdos de Esquipulas I —en 1986— y II —en 1987— (ACNUR, s.f.).

A diferencia de la posición que Torres-Rivas trae en su antología, Leonardo Morlino (2009) afirma que ante

[...] la existencia y el grado de afirmación de una previa política de democracia de masas, con consistencia y relativamente duradera, la nueva instauración debería llamarse *redemocratización*. Es decir, debería usarse un término específico para indicar que en el país ya ha existido una democracia liberal de masas, caracterizada por las libertades civiles, el sufragio universal masculino, partidos de masas más o menos organizados de modo capilar, sindicatos y otras asociaciones de clase. En otras palabras, con distinta duración e intensidad ha existido una realidad de politización colectiva (Énfasis añadido)” (p. 104).

En el caso de El Salvador, podría vislumbrarse este término, pero en de Nicaragua, no lo consideramos por la larga duración de la “dictadura personalista de los Somoza”. Preferimos asumir el concepto de “novedad”.

Las llamadas “democracias nuevas”, siguiendo la antología de Torres-Rivas (2008) se caracterizaron por los elementos de *novedad* en el acceso a la esfera política de nuevas generaciones como, por ejemplo, las propias de la revolución sandinista que pasó de la acción revolucionaria guerrillera al acceso al poder político por medio de elecciones democráticas. Pero, el ingreso de estos nuevos grupos suscitó un nuevo régimen, desprendiéndose del régimen anterior. Tal

es el caso del proceso vivido en El Salvador, donde los regímenes autoritarios que gobernaron con represión política, fraude electoral y negación de derechos civiles fueron desplazados por el acceso a la gobernabilidad democrática de respeto a los derechos humanos, elecciones un poco más transparentes y reivindicación de la reconstrucción social a través de los instrumentos de la reconciliación como la Comisión de Verdad y Reconciliación.

El golpe de Estado del 15 de octubre de 1979 en El Salvador abrió una nueva perspectiva al quebrarse el régimen de “democracia oculta militarizada”, dando inicio a un camino que culminó con las elecciones para una asamblea constituyente en 1982 y la elección de José Napoleón Duarte como Presidente en 1984. Aunque no podemos desconocer que en esas elecciones hubo ausentismo en el pluralismo político, pues solo fue la Democracia Cristiana la que presentó candidatos, y no es hasta 1994 cuando se presenta el nuevo actor político, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN–, a elecciones, cuando se manifiesta ese rol de “democracia nueva”.

El caso de Nicaragua contiene también sus elementos particulares. Afirmar Torres-Rivas (2008) que no presenta elementos claros de *transición democrática* por cuanto el enfrentamiento fue con un régimen dictatorial, nosotros lo hemos llamado “personalista autoritario”, que gobernó por cerca de 43 años con tres hombres de la familia Somoza y que fueron derrotados por la fuerza “revolucionaria de la guerrilla sandinista” (1961 – 1979). La entrada en escena como gestores políticos legales de los sandinistas surge desde el año de 1979 cuando acceden al poder después de derrocar al último Somoza. Sin embargo, no lo hicieron con métodos democráticos, sino con “ocupaciones entusiastas”⁸² que emergían del sueño revolucionario, como el control de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Se negaron a promover comicios electorales hasta 1984, cuando buscaron la reivindicación de su legitimidad ante el pueblo convocando elecciones y presentándose con Daniel Ortega y Sergio Ramírez a los cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente. El éxito popular fue fuerte y lograron la Presidencia, la Vicepresidencia y un alto porcentaje de escaños en el Congreso, donde compartieron el período con otros partidos que pudieron acceder a las elecciones ante la reforma de la Ley Electoral de 1982.

Como lo afirmamos con anterioridad, Nicaragua fue un caso de *instauración de democracia* por novedad de un nuevo actor y una reforma sustancial⁸³ de la visión de construir sociedad po-

82. Torres-Rivas asume el concepto de sandinismo de la siguiente forma: “no es una ideología ni un programa; fue siempre un adjetivo emocional que sirvió tanto para ocultar como para estimular o indefinir. De hecho, el sandinismo fue tributario de diversas fuentes ideológicas y doctrinarias, que utilizó oportuna e indiscriminadamente, de manera ecléctica (2008, p. 179).

83. Torres-Rivas afirma que la convicción de la reforma estaba en que la democracia es la participación de las masas en todos los asuntos de la vida social, en donde las dimensiones socio-económicas fueron prioritarias (p. 179). “Una formidable movilización popular en las tareas de reconstrucción nacional (alfabetización, salud, limpieza, etc.) dio la sensación de participación y poder” (2008, p. 180).

Ilustración 8. Proceso de Paz

Fuente: Elaboración propia

lítica.⁸⁴ Pero la novedad no se vislumbró ante los “entusiasmos revolucionarios” que crearon un régimen hiper-presidencialista que ampliaba potestades al Presidente de la República y muchos poderes a los miembros de la llamada Dirección Nacional (Martí i Puig, 2009, p. 19). A esto se suman las medidas contrarrevolucionarias que los mismos sandinistas impulsaron en medio de la guerra que continuaba, enfrentados a los “alzados en armas”, llamados “Contras” (posteriormente, denominados “resistencia”), afirma Martí i Puig. En 1990 los sandinistas perdieron las elecciones ante el descontento de un pueblo que vio las “ilusiones de la revolución” hechas crisis socio-económica.

El elemento de la *transición democrática*, en clave de *instauración*, con las particularidades que contiene en El Salvador y Nicaragua nos ofrece nueva perspectiva a la hora de abordar la reconstrucción social desde la dimensión de la reconciliación. Pero, ¿desde dónde vienen estos instrumentos estructurales que se sustentan en la transición hacia la democracia? Indudablemente, desde la visión que la cooperación internacional brindó en cuanto marco de referencia para resolver la problemática en los dos países. Este marco lo ofrecen los documentos de la línea Contadora.

84. Martí i Puig señala cuatro grandes aportes de los sandinistas en el poder político de Nicaragua: derrota de una dictadura personalista; implementación de importantes reformas sociales y económicas (reforma agraria, políticas de vivienda, salud y educación; el cambio que supuso la revolución en la forma de percibir la política por parte del pueblo nicaragüense, generando una transformación de la cultura política que, en cierta medida, produjo un “empoderamiento” de muchos ciudadanos de “a pie”; y con ello se extendió una cultura política más participativa en la que hombres y mujeres de estratos humildes visibilizaron sus derechos y espacios en el ámbito político. Y, por último, la creación de un marco constitucional (Constitución de 1987) con el que se pudo transferir el poder en las elecciones de 1990 (2009, p. 19 -20).

3.4.1. De las iniciativas a los acuerdos

A diferencia de Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua (en sí la región centroamericana) no vieron un camino de salidas alternativas al conflicto y la violencia por medio del diálogo directo o indirecto entre las partes implicadas y, desde allí, el logro de un acuerdo nacional de paz. La situación en estos países americanos concentra elementos de desgaste de los regímenes autoritarios, crisis socio-económicas a la que condujeron los mismos tipos de gobierno, gestación de procesos revolucionarios y la iniciativa de la cooperación internacional para buscar salidas distintas a la guerra.

Por ello, optamos por abordar los instrumentos estructurales de este proceso desde las iniciativas internacionales que condujeron a los acuerdos que más facilitaron los procesos de paz salvadoreño y nicaragüense. Estas invitaciones surgieron de países cercanos a la realidad centroamericana, especialmente de Colombia, México, Panamá y Venezuela. De esta manera, se suscitó el llamado proceso de Contadora que consistió en un “sistema de acción conjunta para promover la paz, especialmente los conflictos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que amenazaban con desestabilizar la región” (Díaz Barrado, Romero & Morán, 2010, p. 56). Este mecanismo fue una herramienta multilateral de cooperación e intervención para abrir caminos de concertación.

Los investigadores Díaz Barrado, Romero y Morán (2010) señalan que los antecedentes de este proceso están en el plan de paz propuesto por el entonces presidente de México, José Luis Portillo, en 1982.⁸⁵ También se llega a afirmar que otro antecedente fue la iniciativa del entonces Presidente de Panamá, Ricardo de la Espriella, quien aspira a acordar con el gobierno de México una búsqueda negociada para la salida del conflicto en Centroamérica. Esto parece ser lo que motiva la reunión de Contadora en 1983.

La Declaración de Contadora (1983) consistió en un “llamado urgente a todos los países centroamericanos para que a través del diálogo y la negociación” se buscara una salida a los conflictos. El objetivo era establecer “un clima permanente de convivencia pacífica y respeto mutuo entre los Estados”. Uno de los medios para facilitar este tipo de proceso fue el señalamiento de la conveniencia de incorporar la colaboración de países de la región. Así, quedó señalado el “marco de iniciativas” previas a los Acuerdos de Esquipulas I y II que constituyeron el eje sobre el cual se estructuró el proceso de paz en El Salvador y Nicaragua.

85. Este plan de paz contenía los puntos esenciales en: desmilitarizar la región, la firma de acuerdos de no agresión entre países de la región y la búsqueda de solución negociada a los conflictos existentes.

3.4.2. Acuerdos de Esquipulas I y II

El 25 de mayo de 1986 los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras firmaron el Acuerdo de Esquipulas I en el que reafirman que el contexto creado por el proceso de Contadora es el mejor instrumento que Centroamérica tenía en ese momento para iniciar procesos reales conducentes a la paz en la región. En este sentido, Esquipulas I es la manifestación conjunta del deseo de firmar el Acuerdo de Contadora y ponerle “objetivo claro” a las salidas alternativas a la problemática del conflicto y la violencia.

Reafirman que el diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo son los mecanismos más eficaces para conseguir la paz y la integración. Para garantizar este proceso, acuerdan crear dos instancias “institucionales”: formalizar las reuniones de presidentes y el parlamento centroamericano, este último como un espacio de elección por sufragio directo de los pueblos. Posteriormente, en el número 4 del mismo Acuerdo (1986), ratifican que los mecanismos más idóneos para la paz en la región son “un auténtico proceso democrático pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la soberanía y la integridad territorial de los Estados y el derecho de todas las naciones a la libre autodeterminación de su modelo económico, político y social” (Acuerdo Esquipulas I, 1986).

Asumiendo nuestro objetivo de investigación, la reconciliación social no aparece explícita como una herramienta clave dentro del proceso de paz que los países centroamericanos se plantean desde los mecanismos de cooperación internacional motivados en el proceso de Contadora y en los mismos acuerdos a los que van llegando los respectivos presidentes. Lo que podemos vislumbrar en esta primera fase de los instrumentos estructurales que estamos señalando en los casos de El Salvador y Nicaragua es la instauración de mecanismos de ayuda internacional, diálogos entre presidentes y acuerdos de “puntos de conciliación” para acceder a un camino hacia la paz. En el año de 1986 ningún país centroamericano vislumbraba la reconciliación social como espacio y tiempo factible para reconstruir la región. Por lo menos, eso podemos percibir en estos primeros documentos.

Al año siguiente, los días 6 y 7 de agosto de 1987, se volvieron a reunir los Presidentes de los cinco países interesados en el proceso de paz centroamericano en Esquipulas. Señalaban el proceso de Contadora y el grupo de Apoyo para la Paz, creado en las mismas circunstancias de búsqueda de alternativas, como “marcos de referencia” en la iniciativa, junto al apoyo de la comunidad internacional en general, especialmente la Comunidad Económica Europea de ese entonces y el llamado de la Iglesia católica. Este Acuerdo de Esquipulas II parte de los puntos esenciales de acuerdo (Esquipulas II, 1987):

- Asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para Centroamérica.
- Comprometernos a luchar por la paz y erradicar la guerra.
- Hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores.
- Dedicar a las juventudes de América Central, cuyas legítimas aspiraciones de paz y justicia social, de libertad y reconciliación, han sido frustradas durante muchas generaciones, estos esfuerzos de paz.
- Colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de libertad e independencia de la reconciliación a que aspiramos en Centroamérica.

La misma realidad y el proceso en general, junto a la ayuda internacional, han madurado en cuanto a los principios fundamentales de esta dinámica. Hay un señalamiento de la procesualidad histórica que se ha vivido y, desde allí mismo, se plantea “el forjar un destino para la paz” como elemento de tiempo procesual que llevó a la experiencia vivida en cada país. Esto se concretó en el compromiso por luchar para erradicar la guerra y crear las condiciones idóneas para la misma paz. Catalogan “el diálogo y la razón” como instrumentos eficaces que, en nuestra caso, son elementos estructurales y, por supuesto, de sentido.

Finalmente, desde este comienzo del texto del mismo acuerdo, aparece la reconciliación como un componente de la misma dinámica. La ponen junto a la paz, la justicia social y la libertad, como uno de los insumos hacia la paz que la juventud ha percibido como frustrados. Pero esa misma reconciliación que se pretendía, según el texto del Acuerdo, hallaría su símbolo de expresión en la creación y consolidación del Parlamento Centroamericano que se buscaba organizar. Pero, ¿cómo la entendieron? ¿Solo como “sueño frustrado” de las juventudes? O ¿como símbolo de un ente macro como el Parlamento?

El documento del Acuerdo de Esquipulas II no define clara y explícitamente lo que entendieron por reconciliación. Este Acuerdo contenía once capítulos en los que se especificaban los mecanismos que consideran idóneos para el proceso en la región.⁸⁶ En el primer capítulo comienzan directamente mencionando la “reconciliación nacional”. No la definen directamente, pero la ponen como mecanismo para restablecer relaciones donde han sido rotas por el conflicto. Ellos proponían recurrir a los instrumentos de la participación popular, en procesos de auténtica democracia, sobre bases de justicia, libertad y democracia. En síntesis, el instrumento

86. Estos mecanismos son: Reconciliación Nacional (con los instrumentos del diálogo, la amnistía y la Comisión Nacional de Reconciliación); la exhortación al cese de hostilidades; democratización; elecciones libres; cese de ayuda a fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales; no uso del territorio para agredir a otros Estados; negociación en materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamento; refugiados y desplazados; cooperación, democratización y libertad para la paz y el desarrollo; verificación y seguimiento internacional (Esquipulas II, 1987).

que más parecía idóneo para iniciar este camino era “el diálogo con los grupos opositores”, pero los gobiernos abrirían el camino a las conversaciones con grupos desarmados y que se hubieran acogido a la amnistía.

A lo anterior se sumaba la posibilidad de establecer decretos de amnistía, pero garantizando “la inviolabilidad de la vida, la libertad en todas sus formas, los bienes materiales y la seguridad de quienes ingresen a estos procesos”. También el Acuerdo crea la Comisión Nacional de Reconciliación para “constatar la vigencia real del proceso de reconciliación nacional”. La Comisión de Reconciliación fue creada como ente de verificación de las otras medidas, tales como amnistía, cese del fuego, democratización y elecciones libres. De tal manera que se reconfirma nuestra previa afirmación respecto a la visión que notamos en el proceso de Nicaragua y El Salvador, por cuanto es un proceso de *transición a la democracia* o, con más puntualidad, *de instauración* en el que la reconciliación no fue dinámica autónoma y garante de la reconstrucción social, como en Sudáfrica, sino un componente más de lo que implicó instaurar la democracia después de tantos años de conflicto y violencia.

A nivel general, el proceso de Contadora, explicitado y ampliado en los Acuerdos de Esquipulas, abrió un horizonte de reconciliación nacional que formaba parte de una dinámica macro de búsqueda de salidas alternativas a la situación de conflicto y violencia en Nicaragua y El Salvador, sobre todo centrado en el interés internacional y regional de crear los mecanismos idóneos para la vivencia real de la democracia en una zona donde los autoritarismos, las “democracias simuladas” y la guerra habían impedido la convivencia y la coexistencia. Pero de la “letra del Acuerdo” a la concreción de la realidad hacia la paz faltaban aún la voluntad política, los liderazgos auténticos y la participación de pueblos enteros.

3.4.3. Las firmas de la paz

El Salvador sintió la llegada a una nueva etapa después del Acuerdo de Chapultepec (16 de enero de 1992), posterior al proceso histórico que hemos sintetizado brevemente y que nos ha permitido corroborar la procesualidad de este tipo de experiencias hacia la Reconciliación Social. Desde aquel día, nuevos procesos se dieron en esta república centroamericana, pero también develaron las “sombras” que las salidas alternativas a los conflictos contienen cuando no existen valores y principios fundamentales para la convivencia. Hay dos versiones distintas de un mismo país: la de las víctimas y la de los victimarios; la de los que no recibieron justicia y la de los que se beneficiaron con la impunidad; la de los muchos que tienen poco y la de los pocos que tienen mucho, afirma Benjamín Cuéllar Martínez (Pacheco & Acevedo, 2005, p. 144).

Aunque 1992 es catalogado como el año de la paz y el inicio de la etapa del post-conflicto en El Salvador, el llamado Acuerdo de Ginebra (1990) tiene más substancia en materia de pilares para la reconciliación: fin de la guerra por vía política en un corto lapso, democratización del país, respeto irrestricto de los Derechos Humanos y la reunificación de la sociedad. En el año de 1993 la Comisión de la Verdad presentó el informe respectivo a la sociedad salvadoreña y al mundo en general, después de cumplir su misión de investigar los hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella reclama el conocimiento público de la verdad. Esta Comisión debía *recomendar* medidas orientadas a la convivencia y al restablecimiento social.

Este informe final no fue lo suficientemente satisfactorio por cuanto se ubicó en un solo texto actos violentos que ya se sabían por otros organismos de cooperación y defensa de Derechos Humanos; a su vez, eran crímenes que no fueron lo suficientemente investigados para determinar la definición del victimario y su penalización. Los actos fueron catalogados como factor político por cada actor en el conflicto, Fuerza Militares y grupos revolucionarios. También se definieron dos fallos claros en ese informe: la omisión de datos y valoraciones de casos de violencia contra mujeres y el no haber sido más firmes o haber tenido más fuerza al concluir y solicitar acciones de reparación, según lo afirma Cuéllar Benítez. Por último, la Comisión de Verdad entregó su informe y no verificó el cumplimiento de sus recomendaciones, lo que agravó la sensación de malestar entre los más afectados por el conflicto, sobre todo con la invitación del entonces presidente Alfredo Cristiani, un día antes de la entrega del informe, al *perdón y olvido*.

Nicaragua tuvo que enfrentar la realidad entre lo “heredado” por el dictador Anastasio Somoza Debayle y sus seguidores, llamados “somocistas”, y el Frente Sandinista de Liberación que asumió el poder después de 1979, cuando el dictador dejó el poder. Cuando estaba en el poder el FSL surgió el grupo “Los Contras”, fundamentalmente de línea “somocista”, que se opuso al establecimiento de un sistema social en Nicaragua. Esto desarrolló en la década de los ochenta el centro del conflicto que colocará a este país en la misma dinámica de post-conflicto al igual que El Salvador y Guatemala. La etapa de convulsión interna culminó en el año de 1990 cuando se celebraron elecciones democráticas, siendo elegida la señora Violeta Chamorro. Este gobierno, elegido popularmente, dando inicio a la etapa de post-conflicto en el país centró su atención en el programa de reconstrucción nacional que giró alrededor de la reforma monetaria, la reducción del Ejército y la desmovilización de la insurgencia llamada “Contra”.

La presencia de las Naciones Unidas y la OEA –Organización de Estados Americanos– fue clave en este proceso, por cuanto la década de los ochenta marcó un hito en el desarrollo de conflictos de alta intensidad en esta *región* centroamericana. Para la comunidad internacional,

estos conflictos internos en países de Centroamérica estaban interrelacionados y, por ende, la resolución debería estar igualmente relacionada. Por ejemplo, La resolución del conflicto en Nicaragua fue identificada como “llave” en el proceso de El Salvador y en otros sitios (Karns, 2008, p. 12).

La etapa del post-conflicto nicaragüense centró su atención en dos puntos clave: verificar la ejecución de los lineamientos del Acuerdo de Esquipulas II en esa zona y la desmovilización, el desarme, la repatriación y la reintegración de las fuerzas de los “Contra”. No fue un proceso como el de Guatemala o El Salvador, en los que uno de los ejes sobre los cuales se buscaba la reconstrucción estaba en la instauración de comisiones de verdad o de reconocimiento acerca de los crímenes y atrocidades cometidas durante el conflicto. Para Nicaragua, la esencia estaba en la consolidación democrática institucional y la desmovilización de los integrantes de los llamados “Contras”. Estos eran componentes esenciales de su proceso de reconciliación nacional.

3.4.4. ¿La reconciliación a través de comisiones?⁸⁷

3.4.4.1. El Salvador

Después de los acuerdos de paz en contextos que han sufrido el conflicto y la violencia, las sociedades suelen abrir espacios que permeen un nuevo horizonte de sentido social. En la mayoría de los casos se crean órganos inter-sectoriales a través de los cuales la población sienta que está plasmada una nueva realidad que pretende abrir otras alternativas a las vividas durante los tiempos de enfrentamiento. Tal es el caso de las llamadas comisiones de verdad y reconciliación, por utilizar el término en general.

El Salvador y Nicaragua buscaron la reconstrucción social, aún más la *instauración de la democracia* por diversas vías políticas. El Salvador selló el camino hacia la paz mediante los llamados Acuerdos de Chapultepec, después de una extensa trayectoria de diálogos y negociaciones, en el año de 1992. El proceso se dio desde los Acuerdos de Esquipulas, como contexto más amplio, hasta las negociaciones entre el gobierno y el FMLN que fueron definiendo pactos hacia la paz: Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990, Acuerdos de San José del 26 de julio

87. Como el mismo concepto de reconciliación no tiene unanimidad en su percepción, la puesta en práctica de este tipo de mecanismos alternativos también contiene una serie de dificultades que se pueden vislumbrar a lo largo del estudio de los diversos contextos en los que se ha implementado o intentado implementar. Una de las confusiones más comunes es creer que la reconciliación social es la instauración de los mecanismos de las comisiones de verdad y reconciliación, tal como se ha llamado en la mayoría de los contextos. En este sentido, al abordar este instrumento de las Comisiones consideramos pertinente hacernos la pregunta si el establecimiento de este instrumento ya implica el entramado de relaciones que debe suscitar la misma dinámica reconciliadora.

de 1990, de México del 27 de abril de 1991 y de Nueva York del 25 de septiembre de 1991 (Marxists.org, 1992). Todo con el apoyo del Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, y la comunidad internacional.

Este Acuerdo de Chapultepec reafirma el propósito que las partes habían manifestado en el Acuerdo de Ginebra, “terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña” (Acuerdo de Chapultepec, 1992). El texto que expresa y pacta el cese de hostilidades en El Salvador centró su atención en la reestructuración de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, como exigencia del FMLN para cesar las hostilidades y abrir caminos conducentes a la paz. De esta manera, se crearon condiciones de reformulación institucional para la gestión de la transición democrática que la misma realidad demandaba en la sociedad salvadoreña. El énfasis estaba en la reestructuración de los mecanismos que el Estado utilizó para controlar el poder, más allá del ámbito de los recursos democráticos.

El Acuerdo de Ginebra —del 4 de abril de 1990— (CEDEMA, 1990) había dejado los cuatro puntos esenciales que resaltó Chapultepec dos años más tarde. Este proceso lo realizaron, desde los señalamientos del texto, a través de diálogos directos y con la intermediación del Secretario General de las Naciones Unidas. Asumen el principio de “discreción informativa” a nivel público, solo en manos del Secretario General y de la posible consulta a partidos políticos y diversas agrupaciones sociales para ofrecer un proceso más sólido.

Pero hasta este punto del proceso de paz en El Salvador, la reconciliación no aparecía como eje sobre el cual se podría pensar en la reconstrucción del país. Como lo hemos afirmado reiteradamente, el énfasis estaba en la *instauración* de la democracia, en cuanto el poder político había sido manipulado y utilizado desde una perspectiva totalitaria, desplazando completamente la visión de lo común. Por ello, notamos que estos primeros acuerdos se centraban en una dinámica democratizadora. Sin embargo, la visión de “reunificar la sociedad salvadoreña” aporta un ápice para que en el año de 1991, en medio de la reunión en México entre el gobierno y el FMLN, se sentaran las bases de cómo se podría gestar esa “reunificación” más allá de las reformas institucionales. Consideramos que en ese contexto surgió la comisión de la verdad como ese instrumento idóneo para gestionar el citado propósito.

El llamado Acuerdo de México —27 de abril de 1991— (DHNET, s.f.) expresó la conveniencia de crear la comisión. Este grupo de apoyo al proceso se constituyó, por manifestación de la partes, por el Secretario General de la ONU, con previa consulta a la partes. El objetivo era la “investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuyo impacto sobre

la sociedad reclama[ba] con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad”. En este sentido, el mismo texto señalaba lo que la Comisión debía tener en cuenta:

- La singular trascendencia que pueda atribuirse a los hechos a ser investigados, sus características y repercusiones, así como la conmoción social que originaron, y
- La necesidad de crear confianza en los cambios positivos que el proceso de paz impulsa y de estimular el tránsito hacia la reconciliación nacional.

El trabajo parte de una necesidad implícita en las mismas circunstancias, “reunificar a los salvadoreños” (desde nuestra perspectiva, la reconstrucción social), pero señalando la importancia de la “herida que ocasionaron los hechos” a la sociedad en general. Sin embargo, esta tarea no era un simple “escuchar y relatar”, sino un develar “la verdad” que permitiera la creación de la confianza que haría posible la reconciliación nacional. Es el documento en el que aparece explícitamente relacionada la reconciliación en el proceso de democratización que buscaba El Salvador.

En este orden de ideas, los principios que las mismas partes señalan en el acuerdo, para que la dinámica fuera efectiva son: contribución mutua a la reconciliación de la sociedad salvadoreña, el esclarecimiento de los hechos que implicaba asumir la verdad como “baluarte significativo”, las voluntades para que lo acordado llegara a feliz término y, por supuesto, los medios reales con que se podía llegar a lo deseado que, entendemos, fueron las reformas institucionales que se llevaron a cabo.

Desde el documento, la Comisión tuvo las siguientes funciones:

- Investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980 para que la verdad sea conocida. Para ello tenía en cuenta:
 - La singular trascendencia de los hechos (características, repercusión), así como la conmoción que crearon.
 - La necesidad de crear confianza en el mismo proceso.
- Recomendar disposiciones de orden legal, político y administrativo. Estas pueden ser para prevenir repetición de hechos o iniciativas hacia la reconciliación social.
- Se esforzará en tomar decisiones por unanimidad o, si no es posible, con el voto de la mayoría.
- Si algún caso no reúne las características que compete a la Comisión, podían enviar el caso a la Fiscalía General de la República.

Estas funciones le otorgaron a la Comisión las facultades de “recoger la información que considere pertinente”; igualmente, estas fuentes las podía utilizar de la manera más conveniente para el proceso con total libertad. De la misma manera, podía entrevistar a las personas o grupos que creyera oportuno y visitar cualquier establecimiento que ofreciera datos para la dinámica hacia la paz. A su vez, las partes se comprometieron a cooperar con la Comisión. El trabajo de este grupo finalizaría con la entrega del informe respectivo. Obviamente se dejó claro que las investigaciones de la Comisión no eximían de otro tipo de indagación judicial si se veía pertinente.

A diferencia de la Comisión de Verdad y Reconciliación sudafricana, la de El Salvador no contó con participación de la sociedad civil, pues fue un acuerdo entre las partes en el proceso de negociación (gobierno y FMLN), y estuvo compuesta por personas extranjeras: Belisario Betancur (Colombia), Thomas Burgenthal (Estados Unidos) Reinaldo Figueredo (Venezuela). El 15 de marzo de 1993 se publicó el informe final llamado “De la locura a la esperanza: la guerra de los 12 años en El Salvador” (Derechoshumanos.net, 1993).

Por un período de seis meses trabajaron según lo establecido en los acuerdos. El informe se presentó en una considerable extensión de folios que desarrollaron la visión que la Comisión halló en las investigaciones de lo que habían significado doce años de guerra. Finaliza el mismo informe con algunas recomendaciones centradas en el contexto general de una sociedad de injusticia y organizada al margen del Estado de derecho, con un gran énfasis en la falta de garantía a los derechos humanos. El órgano militar del Estado salvadoreño se fue adueñando del poder político, quedando la organización del Estado sin el control debido de las ramas del poder. A lo anterior se suma la formación e incremento de grupos armados ilegales que actuaron impunemente contra la población. “La resultante de todo este vínculo vicioso fue un estado en el que ciertos y determinados elementos de la sociedad se encontraron inmunes a cualquier contención gubernamental o política y fraguaron así la más abyecta impunidad” (Informe “de la locura a la esperanza”, p. 186).

Las recomendaciones⁸⁸ se basaron en los principios de la democracia, la participación, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. El tiempo que sugerían para la gestión de este conjunto de aspectos es el de “sin demora”, sin establecer una procesualidad determinada que, en este caso, recayó en la dinámica que lideraron los gobiernos y los representantes del FMLN.

88. Las recomendaciones están contenidas dentro del texto y se sintetizan en: separación de las Fuerzas Armadas de los funcionarios que están implicados en graves crímenes, a su vez, separación de los cargos públicos de funcionarios que estaban en las mismas condiciones que los militares. También recomendaban inhabilitar para cargos públicos a quienes estaban dentro de procesos investigativos relacionados con la guerra. En cuanto a lo institucional, recomendaban una reforma judicial que implicaba la reforma de la Corte y del Consejo de la Judicatura, entre otros aspectos (Reporte “de la locura a la esperanza”).

Una recomendación muy puntual desde nuestro interés de investigación es un espacio que se debía crear en la sociedad salvadoreña para la reconciliación nacional desde la “noción de unidad fraterna del pueblo de El Salvador”. Para ello, proponen pasar de la confrontación a la asimilación de lo ocurrido para desterrarlo del porvenir de relación de convivencia y tolerancia, según el texto señala. La herramienta para este aspecto es la introspección colectiva sobre la realidad y una determinación de erradicar ese tipo de experiencias. “Un paso ineludible, cargado de amargura, es la observación y el reconocimiento de lo que ocurrió y que no debe repetirse jamás” (p. 195). Pero, es un aspecto bastante subjetivo que demanda de acciones concretas por parte de todos los órganos sociales para re-crear ese espacio público donde sea posible la llamada “unidad”.

Los valores que señalaban explícitamente para esta dinámica eran la verdad, el perdón que facilite rectificar hacia el porvenir, y la justicia que debía sancionar a los infractores y reparar a las víctimas (material y moral). Para darle efectividad al proceso, la Comisión recomendó la creación de un foro de la verdad y la reconciliación como espacio de encuentro y diálogo de la sociedad salvadoreña, y el seguimiento de la comunidad internacional a través de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

En este orden de ideas, El Salvador asumió un proceso de *instauración democrática* desde un proceso de negociaciones que condujeron al cese de hostilidades, la apertura de reformas sustanciales para la convivencia y la vivencia de un proceso de verdad/reconciliación manifestado en la figura de la Comisión. Más allá de la efectividad o no del proceso que podremos señalar en nuestro último capítulo, es importante dejar constancia de los instrumentos estructurales que podemos percibir del proceso salvadoreño. Con sus respectivas similitudes al sudafricano y, obviamente, sus diferencias, la dinámica nos permitirá señalar los aciertos y desaciertos de una proceso que no condujo a una política pública de reconciliación social, sino a un instrumento de “resolución de conflictos” o, más aún, a una salida alternativa al conflicto que se centró en el cese de hostilidades y en el desarrollo de acuerdos conciliadores entre las partes implicadas.

3.4.4.2. Nicaragua

El proceso de paz nicaragüense se desarrolló en circunstancias distintas a la realidad salvadoreña, aunque la vecindad regional lo unía y las etapas de conflicto y violencia eran más o menos homogéneas en su temporalidad. Nicaragua fue Sandino, Somoza, sandinismo y, por supuesto, es instauración democrática. La historia no nos señala creación de mecanismos explícitos de salida alternativa al conflicto, tales como comisiones de verdad, estrategias de reconciliación, símbolos de reconstrucción social, entre otros.

Nicaragua no fue reconciliación social en perspectiva de reconstrucción nacional, sino que fue instauración de la democracia para que la guerra no continuara desangrando el país. “Desde una perspectiva pragmático-resignada,⁸⁹ la realidad del poder establece el horizonte de lo socialmente posible y de lo políticamente deseable” (Martí i Puig & Close, 2009, p. 137). Esta realidad nicaragüense abrió la perspectiva de la salida del conflicto desde una situación real de urgente necesidad de instaurar la paz, pero con unas condiciones difusas de “gestión del poder”, por cuanto la caída del régimen Somoza no garantizó el acceso a la convivencia pacífica, sino el advenimiento al poder del movimiento revolucionario que del “sueño” pasó al poder político y, consecuentemente, al fracaso de un intento que necesitó el paso de la derecha política y el refuerzo de una gestión de reestructuración institucional como el de la Presidenta Violeta de Chamorro. En 1979, el FSLN alcanzó el poder fundado en tres valores: la soberanía nacional, la justicia social y la democracia popular.

El conflicto en Nicaragua fue dejando huellas de una fuerte división socio-económica, gestada por la manipulación del poder político en manos de unos dictadores, que se expresó en la consolidación de un pequeño grupo dominante y su indiferencia ante la situación de marginación de la mayoría de la población. Y, por el lado, los pobres; la actitud fue de fatalismo y reacción revolucionaria. Ante esta situación, la reconciliación social no fue vista, en primera instancia, como mecanismo alternativo, si no como un componente que resultaría de la instauración de lo que se necesitaba para garantizar un orden: la democracia real.

En el año de 1988 Humberto Ortega tenía el liderazgo del proceso de negociaciones entre el gobierno sandinista y los Contras y logró el Acuerdo de Sapoá en el que se concretó la reducción de efectivos del grupo que luchaba contra el gobierno. En 1989 se firmaron dos acuerdos complementarios en esta dinámica hacia la paz, centrados esta vez en el tema del desarme de la llamada resistencia nacional (nombre dado a los Contra). En 1990 sobrevino la derrota electoral de los sandinistas ante la unión multipartidista expresada en la denominada UNO.

Los acuerdos de 1988 centraron la atención en una amnistía política general, la suspensión del Estado de emergencia nacional y la censura de prensa. En los de 1989 el FSLN convocó a diálogos entre diversos sectores socio-políticos, lo que dejó como resultado los Acuerdos de Managua en los que se contempló la desmovilización de los Contras (Kinloch, 2005, p. 353).

Ya hemos anotado que el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro en el año 1978 fue el hecho que desencadenó una fuerte oposición y revuelta popular que condujo a la toma del

89. Martí i Puig y Close (2009) definen el pragmatismo-resignado como una visión de la política y del poder que induce a los miembros de una organización —o una sociedad— a asumir que lo políticamente deseable debe subordinarse a lo circunstancialmente posible.

poder político por parte del FSLN al año siguiente. El llamado “sueño revolucionario” llegó al poder con muchas esperanzas que en diez días de gobierno fueron convirtiéndose en desencantos a través del enfrentamiento con los Contras y la pérdida de confianza por parte del pueblo. En 1990 pierden las elecciones, tal como lo señalamos, ante la unión multipartidista llamada UNO.

Esta segunda fase del proceso post-dictadura⁹⁰ está caracterizado por la “triple transición” que la señora Violeta Barrios de Chamorro gestionó: “desde una revolución a una democracia minimalista; desde un poder estatista con voluntad transformadora en lo social y económico a un Estado liberal; y desde una sociedad polarizada a una más unida y cohesionada” (Martí i Puig & Close, 2009, p. 23). Luego, gobernó Arnoldo Alemán Lacayo (1996 – 2001) desde una dinámica antisandinista, aunque fue cediendo hasta firmar acuerdos como, por ejemplo, la Ley sobre la Propiedad para cerrar las disputas existentes en torno a la titularidad de las tierras y viviendas expropiadas por los sandinistas durante la revolución. El acercamiento más conocido es “el pacto”⁹¹, en el que el presidente Alemán y el líder de los sandinistas, Ortega, acuerdan cuotas de poder, reformas constitucionales y de leyes ordinarias.

Los diálogos para la desmovilización de la resistencia, los acuerdos, el adelanto de las elecciones y el ascenso de un nuevo gobierno elegido democráticamente, dentro del llamado de Esquipulas II, se constituyeron en los instrumentos desde donde Nicaragua vislumbró un acceso a la reconciliación nacional, pero no con el formal proceso de instauración de comisión de verdad o estructura de justicia transicional específica. El elemento de la amnistía marcó un referente desde donde se pudo preparar el terreno para una posible alternativa al conflicto y la violencia.

Entre los años 2001 y 2006 gobernó Enrique Bolaños Geyer, con Daniel Ortega (sandinista) como presidente de la Asamblea Nacional.⁹² Este gobierno fue caracterizado por un enfrentamiento entre hombres de política, específicamente entre Alemán y el mismo Presidente, a lo que se sumó la adhesión del sandinismo a las acusaciones contra el ex presidente Alemán. Posteriormente, se vivió el enfrentamiento entre el presidente Bolaños y los sandinistas. En últimas, la gestión política en la era post-conflictiva en Nicaragua develó la inmadurez del mismo sistema democrático en el país y abrió las puertas para el advenimiento del FMSLN al poder en las elecciones de 2006 hasta la fecha. Esta vez, afirma Martí i Puig, como “partido que se había resignado a actuar pragmáticamente dentro de la moral política tradicional nicaragüense y dentro del marco de acción establecido por la lógica neoliberal” (2009, p. 165).

90. Señalamos como primera fase del proceso post-dictadura en Nicaragua el primer gobierno del sandinismo (1979 – 1990).

91. Acuerdo entre los sandinistas y el partido liberal constitucionalista para monopolizar el control político y el Estado nicaragüense (Martí i Puig, 2009, p. 149).

92. Por el artículo 133 de la Constitución Política, el candidato presidencial que queda de segundo en las elecciones tiene derecho a esta cargo (Martí i Puig, 2009, p. 24).

Citar brevemente lo que implicaron los distintos gobiernos en Nicaragua desde 1979 y la caída del régimen Somocista no permite corroborar la afirmación que hacíamos al inicio de este aparte de nuestra reflexión, las circunstancias del poder establecen lo que la sociedad hace posible y lo que políticamente desea. El pueblo nicaragüense no clamó por un proceso de reconciliación social, ni por comisiones de la verdad ni procesos de amnistía o aspectos relacionados. Nicaragua calló ante la lucha de grupos políticos por el control del poder, mientras algunas reformas sociales promovidas desde el primer gobierno sandinista fueron abriendo paso. Es decir, la urgente necesidad de la democracia primó sobre una reconstrucción social a través de métodos de diálogos, negociaciones, acuerdos, etc., hacia la paz.

El gobierno de Violeta de Chamorro, inmediatamente después de los sandinistas, inició cambios dentro de una fuerte fragmentación política, atraso socio-económico y débiles estructuras de solidaridad humana, resultado de un largo período de guerra entre el sandinismo y los Contras. Sin embargo, el FMLN continuó siendo el partido político con más presencia, aunque la coalición los hubiera derrotado y ellos mismos experimentaron la división interna viendo nacer el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) en 1995. “El mal ejemplo viene de los mismos políticos nicaragüenses, que se definen en el pleito menudo, ya que no existen sino en rivalidad permanente. Su naturaleza histórica viene del personalismo más radical y de una pérdida de lealtades hacia la nación”, afirman Botella y Sanahuja (Torres-Rivas, 2008, p. 199).

De esta manera, los instrumentos estructurales en el proceso nicaragüense se encaminaron más hacia la instauración democrática como espacio en el que fuera posible acceder a una reconstrucción social. Es decir, la reconciliación como la hemos asumido desde Sudáfrica y El Salvador no se presentó en este país, pues el interés de los grupos enfrentados venía centrado en asumir un verdadero rol político en un país donde la fragmentación fue hija del abuso del mismo poder. Las pautas de cambio se ofrecieron desde las reformas dentro del marco institucional.

3.5. Marco institucional: la justicia

Cuando citamos el concepto de institución o lo institucional sobrevienen a nuestras estructuras de pensamiento ideas de organización, normatividad, gestión organizacional, etc. Sin embargo, lo institucional abarca dimensiones más amplias de procedimientos u organización de relaciones interpersonal o intergrupales. Douglass C. North (1990) define las instituciones como “las reglas de juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones que crea la interacción humana. En consecuencia, ellas estructuran iniciativas en los intercambios humanos en ámbitos políticos, sociales o económicos” (p. 3).

Este ámbito que reduce lo institucional a “reglas de juego” para delinear las interacciones humanas va más allá en la dinámica de políticas públicas, puesto que “los problemas y las soluciones de políticas públicas existen en un espacio constitucional o institucional, pero también en un entorno económico o social más amplio” (Parsons, 2007, p. 252). Es decir, las instituciones y su espíritu, lo institucional, no son solo “maneras de entrar en un juego” de relaciones interpersonal o sociales para organizar el mismo encuentro relacional, sino que si se diseñan adecuadamente hacen factible que los inconvenientes que conlleva la misma convivencia hallen salidas que beneficien el mismo espacio de lo común.

“Una institución es una colección relativamente permanente de reglas y prácticas organizadas, incrustadas en estructuras de significado y recursos que son relativamente invariables en el rostro del movimiento de los individuos y relativamente resistente a las preferencias de la idiosincrasia y a las expectativas de los individuos y a los cambios de las circunstancias externas”, señalaban March y Olsen al final de la década de los ochenta (Rhodes, Binder & Rockman (edit.), 2006, p. 3). Se vuelven a marcar los elementos de las reglas de comportamiento individual y grupal que definen el comportamiento en relaciones internas y externas a las mismas situaciones de convivencia.

De esta manera, señalamos la existencia de un “marco institucional” en una dinámica de reconciliación social como un componente a través del cual los objetivos trazados con miras a la reconstrucción de la sociedad se hagan factible en la creación de unas instituciones que plasmen los “mínimos acuerdos” a los que se debe llegar al ingresar en este tipo de procesos y a la manera como se desarrollará todo. Pero, como lo anotaremos en el numeral siguiente, lo institucional también demanda una manera de ser y estar en la institución que gestiona un proceso. Es lo que llamamos “pensar institucionalmente” y que asumimos desde la propuesta de Hugh Heclo. En Sudáfrica marcaron la pauta la Constitución interina y, por ende, la nueva Constitución después del inicio de la presidencia de Nelson Mandela. Desde esta presencia constitucional, las instituciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacional de Paz fueron marcos institucionales desde donde se engranó el proceso mismo.

En Centroamérica, específicamente en El Salvador y Nicaragua, el marco institucional quedó determinado por los mismos procesos de *transición democrática* o, como lo hemos señalado con anterioridad, de *instauración* de la democracia. De esta forma, la Comisión de la verdad salvadoreña fue un aspecto del marco institucional de la etapa de post-conflicto en ese país. Los procesos políticos de “lucha por el poder” en Nicaragua determinaron las reformas institucionales en materia de Constitución Política y sus respectivas reformas constitucionales,

participación política, estructuración de los derechos de los ciudadanos, reformas en el sistema de justicia, entre otros.⁹³

Como primer “marco institucional” que rescatamos en un proceso de reconciliación social tenemos el aparato de justicia que esa sociedad contenga pero, por las circunstancias especiales, debe ser adaptado para facilitar la reconstrucción grupal. Los autores que citamos en el primer capítulo al buscar la conceptualización de la reconciliación coinciden en que el elemento de la justicia es clave para evitar falsas expectativas dentro de este tipo de dinámicas o “concreción de acuerdos” sin “sólidas bases”.

En el caso de Sudáfrica, como un mecanismo procedimental que garantizara la efectividad del proceso y la transparencia en el desarrollo de toda la dinámica, la Ley 34 de 1995 brindó la posibilidad de crear Unidades de Investigación según la perspectiva de la Comisión o de uno de los Comités, teniendo en cuenta las temáticas de trabajo que se iban desarrollando. En el capítulo 6 de la misma ley se especificaban el contexto y las circunstancias que podrían dar lugar a la creación de Unidades de Investigación. El número de personas que podían conformar esas unidades dependía de las necesidades, pero era indispensable que estuvieran uno o dos de los comisionados allí. Las funciones estarían dentro del marco del área a la que perteneciera la unidad, es decir, comisión en general o comité específico.

Con el propósito de obtener mejor la información, las unidades investigativas podían proceder investigando en lugares y circunstancias reales, concretas, donde era factible recibir las pruebas necesarias que conducían al esclarecimiento de los hechos que llegaban a su circunscripción. La misma ley exigía la transparencia en estos procedimientos investigativos, aunque señalaba que si en algún momento sobrevenía un dato que pudiera afectar el desenlace de la información, los informes o demás datos orientados al ámbito de lo público podían ser mantenidos bajo secreto procedimental con el aval de la comisión o del comité respectivo. Cabe aclarar que ni la Comisión, ni los comités ni la unidad investigativa tenían poder judicial sobre las personas o casos que investigaban.

No podemos desconocer que el elemento de lo jurídico es clave en todo proceso de reconciliación social. Que una sociedad ingrese a la esfera de la reconstrucción después de haber vivido largos períodos de conflicto y violencia, no quiere decir que ese grupo humano accede al ámbito de la impunidad. Reconciliación social es restablecimiento de relaciones fundadas en la verdad y, por ende, el acceso a la realidad de los hechos implica acciones de solidaridad con las

93. A este respecto hacen referencia Álvarez Arguello, G. y Vintró Castels, J. en un escrito de 2009 llamado *Evolución constitucional y cambios institucionales en Nicaragua (1987 – 2007)*. En: Martí i Puig, S. y Close, D. (eds.). Barcelona: Bellaterra, p. 169 – 220.

víctimas y victimarios, pero también contempla asumir la responsabilidad de los actos violentos y acceder a la reparación y restitución del daño. De esta manera, la justicia puede asumir su gestión de la dinámica restaurativa, retributiva o transicional,⁹⁴ de acuerdo con los acuerdos de cada grupo humano, e ingresar como componente integrador de una política de reconciliación social.

3.5.1. Sudáfrica

En el caso de Sudáfrica, hallamos un claro elemento de amnistía explicitado en la misma ley y en la configuración de la CVR. Toda democracia en transición, afirma Ruseel Daye (2004, p. 79), tiene una serie de desafíos, dilemas y asuntos relacionados con la justicia. “Esto incluye la dignidad de las víctimas, responsabilidad de los victimarios, la necesidad de construir una cultura de los derechos humanos, justicia distributiva, darle tratamiento a los deseos de venganza y la conexión entre justicia y reconciliación”.⁹⁵ La CVR no tenía función judicial, en términos del grado de responsabilidad y la pena correspondiente, pero sí cumplió una función de apoyo al sistema legal sudafricano para garantizar la idoneidad del proceso desde el cumplimiento del compromiso de la verdad.

94. Por *justicia retributiva* se puede entender la forma tradicional como el Estado enfrenta y reprime los comportamientos que considera lesivos y perjudiciales para el logro de la paz y la tranquilidad. Su fundamento se halla en el individualismo, el individuo aislado, el cual por el miedo que le causa morir en forma violenta se asocia con los demás individuos, celebra un contrato social y construye la sociedad civil. *La justicia transicional* hace su aparición cuando los Estados luego de una guerra se enfrentan al problema de qué hacer con los vencidos; surge como una especie de justicia *sui generis*. Inicialmente, la justicia transicional centró su atención en la imposición de castigos a los vencidos, pero con el transcurrir de la historia se han venido añadiendo compromisos como respetar los derechos humanos y la responsabilidad penal individual, hasta abrir espacios para que los acuerdos de reconciliación entre grupos enfrentados sea factible, accediendo a mecanismos de la justicia retributiva, pero con “menor grado de inflexión de las penas”, por ejemplo, las amnistías, indultos, rebajas de penas o mecanismos de administración judicial especiales para el caso y el tiempo respetivo e investigaciones sobre la violación de los derechos humanos, junto al enjuiciamiento y reparación de los efectos causados. *La justicia restaurativa* surgió a mediados de los años setenta, tratando de resolver los problemas que presentaba la justicia retributiva. Este tipo de justicia parte del supuesto de que el hombre es un ser social y entiende que el conflicto nace muchas veces de sentimientos morales de injusticia, experiencias de menosprecio o falta de reconocimiento. Es un complemento de la retributiva, donde el Estado es el único facultado para investigar e imponer sanciones, pero en muchas se hace patente el faltante de trabajar sobre la responsabilidad del sujeto infractor, que reconozca el daño y el dolor causado; mientras se debe tener en cuenta a la víctima más allá de una simple fuente de información procesal. También, la restaurativa le añade a la retributiva el elemento de la “comunidad” como espacio de encuentro entre víctima y victimario que facilita la reconciliación, la reintegración, la comunicación y la reparación individual y colectiva. (Justiciarestaurativa.com, s.f.)

95. Un debate común en este tipo de procesos conducentes a la reconciliación social está en el ámbito de lo jurídico, especialmente entre la dinámica de justicia restaurativa, retributiva y transicional. Tratando de acercarnos a cada uno de estos conceptos recurrimos a los aportes del grupo de investigación “Justicia Restaurativa, un camino para la transformación” de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y la Universidad Pontificia Bolivariana, en Colombia. (Restaurativa.com, s.f.) Otros autores que pueden facilitar el acceso a este sistema judicial son: Elster, J. (2006) *Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica*. Buenos Aires: Katz, 340 p.; Centro Internacional para la Justicia Transicional (2008). *El Legado de la verdad: Impacto de la Justicia Transicional en la Construcción de la Democracia en América Latina*. Conference Paper 3/2007. Serie Enfrentando el Pasado (Dealing with the Past). Bogotá, 258 p.

El número 33, de la misma Ley 34, dejó claro que todas sus acciones eran públicas, fundado ello en un interés de justicia y apertura procesual para todas las personas. Para dar mayor garantía a la transparencia, principio fundante de todo proceso de reconciliación social, pero sin afectar la seguridad de los involucrados directamente, la legislación brindó la posibilidad a la comisión de constituir un programa de protección de testigos que, liderado por el Presidente de la República, consultados el ministro de justicia y la comisión, pudiera organizar este tipo de programas a través de medidas interinas y permitiera la seguridad de quienes colaboraran en el esclarecimiento de los hechos.

Por otro lado, en lo relacionado con la justicia, el capítulo 4 de la Ley 34 de 1995 se centró en la conformación y desarrollo del Comité de Amnistía dentro de la CVR. Estuvo conformado por un presidente, un vicepresidente y un grupo que designaba el Presidente de la República. Como dato curioso, en este grupo no se especificaba el número exacto de miembros, pero sí se señalaba que por lo menos tres de la comisión debían estar presentes. Igualmente, volvió a insistir en la idoneidad y cualificación ética y cívica de quienes podían ser miembros de este comité. Las tareas que atañían a este grupo eran fundamentales para la efectividad y eficacia del proceso en general, pues les correspondía el acceso a quienes habían cometido los actos de violencia y la promoción de la verdad pública como marco garante del mismo proceso.

Respecto a este comité notamos una particularidad en cuanto al desarrollo de las investigaciones y, por ende, el ofrecimiento de la amnistía a las personas que la solicitaban, ya que la Ley 34 no definió los poderes que ostentaba como en los otros dos comités. Para evitar dificultades en el desarrollo de las tareas y abrir el espectro de lo público en esta labor, el texto de la ley aclaró el procedimiento que se debía seguir para solicitar la amnistía, especificando puntualmente que solo podían acceder a este beneficio en la colaboración con el proceso las personas que habían cometido actos asociados con objetivos políticos (Capítulo 4, número 20, 2).

Por ello, señalaba a cualquier miembro de una organización de conocimiento público o de movimiento de liberación, cualquier empleado del Estado o miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Así mismo, agregaba el texto legal que daba soporte a este comité, los criterios que debían seguirse para determinar si el acto tenía carácter político: el motivo que condujo a que se realizara el acto violento, el contexto en el que se realizó (especificando si el acto fue cometido en alguna revuelta política, disturbio, evento o reacción), la naturaleza y efecto legal del hecho, incluyendo la gravedad; además, el objetivo del acto violento y si fue cometido en la ejecución de un orden superior o en nombre de alguna organización, institución o movimiento de liberación. Por último, debía especificar la estrecha relación entre el acto y el objetivo político perseguido (Capítulo 4, número 20, 3).

Recogida la información, el comité debía comunicar a la persona y, si es del caso, a la víctima sobre la decisión respecto a la solicitud en relación directa con el acto u ofensa que declaró. Posteriormente, debía publicarse en los medios oficiales la decisión con la lista de personas que eran cobijadas por la amnistía (Capítulo 4, número 20, 5 – 6). Por otro lado, dejaba claro que las personas que habían sido beneficiadas con la amnistía no podían ser catalogadas como criminales ni civilmente responsables de los actos u ofensas (número 20, 7). Por último, dejaba especificado que si la persona era catalogada como víctima desde el acto y ofensa que cometió, debía ser remitida al Comité de Reparación y Rehabilitación; inclusive, si la amnistía se rechazaba, pero se encontraba había sido víctima número (número 22, 1 – 2).

El camino de la amnistía y reparaciones es el sendero que nuestra nación escogió para caminar, atravesando desde la peste del pasado hacia la promesa de un mejor futuro usando el “puente histórico” referido en la Constitución, uno de cuyos pilares fue la Comisión de Verdad y Reconciliación. Otros caminos podrían haber sido escogidos. Eso podría ser así. El hecho es que Sudáfrica escogió este camino, nosotros hemos caminado y seguimos y creemos que una significativa contribución ha sido hecha para la promoción de la unidad nacional y la reconciliación (Tutu, 1999, p. 65).

Aunque el marco institucional centrado en la justicia haya sido un soporte fundamental en la experiencia de reconciliación social en Sudáfrica, no podemos desconocer que este tipo de dinámicas conlleva una serie de retos dentro de un marco de reconstrucción social y apertura a la convivencia y a la coexistencia después de una experiencia de conflicto y violencia. Rescatamos los dos grandes obstáculos y retos que el proceso tuvo que enfrentar en el caso sudafricano: la tensión entre amnistía e impunidad, la diferencia entre crímenes comunes y violaciones a los derechos humanos, y la aclaración entre crímenes por origen racista y crímenes por motivos políticos.

3.5.1.1. Amnistía e impunidad

Para evitar que la dinámica amnistía–impunidad destrozara el proceso de reconstrucción social al perder credibilidad la misma labor hacia la reconciliación, la propuesta se fundó en la justicia desde la dimensión de la restauración (justicia restaurativa), como un proceso en el que las partes que han vivido un conflicto u ofensas se acercan mutuamente para deliberar cómo asumir la etapa post-conflictiva y sus implicaciones en el futuro. Además, los victimarios tienen la oportunidad de conocer el impacto de lo que han realizado y hacer la reparación respectiva, y las víctimas tienen la oportunidad de conocer lo realizado en sus daños y pérdidas (López, 2010, p. 500).

En esta dinámica resalta la labor de “eje central” que la Comisión de Verdad y Reconciliación jugó, pues su fundamento se estructuró en una justificación moral que Rajeev Bhargava (Villa-Vicencio & Verwoerd, 2000, pp. 60–67) sintetiza en tres ejes:

- i. Este tipo de Comisiones ayuda a las sociedades a pasar de un estado de barbarie a uno de mínimas condiciones de decencia.⁹⁶ Esto se logra, ante todo, por la confianza que se construye en normas procedimentales de justicia, junto a la capacidad de escucha y acogida a la víctima, pero con medidas claras de reparar y posiciones definidas frente a los victimarios.
- ii A lo anterior, se suma el equilibrio que deben asumir al catalogar los actos violentos entre hechos simétricos o asimétricos en su dimensión de barbarie. Es decir, si la generación del mal que condujo a estos actos fue producido por un grupo en particular que controla el poder político en contra de otro grupo – víctimas – quienes no tienen responsabilidad, es “barbarie asimétrica”. Por otro lado, si la causa del mal está en todos los miembros del grupo social, quienes se atacan unos a otros, es “barbarie simétrica”. Es parte esencial del proceso judicial que esta dimensión se tenga en cuenta, pues el “encuentro” entre víctimas – victimarios y sociedad requiere de una “tierra abonada” que evite que la rabia desenlace en venganza y se repita la historia.
- iii Las Comisiones de la Verdad no deberían avanzar simplemente en la búsqueda de la reconciliación. También es importante considerar la creación de condiciones para que la “Sociedad mínimamente decente” sea factible. Esto es, en nuestros términos, la concreción de los principios y/o valores éticos públicos que nos permitan el acceso a la convivencia pacífica después del conflicto y la violencia.

En diciembre de 1995 la CVR inició sus labores con la división tripartita que hemos descrito con anterioridad. Durante el año que cursó entre 1996 y 1997, el Comité de violación de Derechos Humanos se acercó a las víctimas en muchas zonas del país en un contexto de pública acogida y transparencia en las labores. Aunque la ley establecía las funciones, poderes y tareas de la comisión y de cada comité, haciendo énfasis en la reconstrucción de los hechos con miras al establecimiento de la verdad, conducente a la reconstrucción social que hiciera factible la reconciliación, este trabajo “investigativo” de escucha y acercamiento a la realidad de las víctimas terminó siendo una labor de “atención compasiva” del dolor de los otros.

96. Por “condiciones mínimas de decencia” (Sociedad mínimamente decente) este autor entiende el mejor marco ético disponible en una sociedad que no los ha logrado. Una sociedad “mínimamente decente” no está libre de explotación, injusticia o comportamientos degradantes. Incluso, puede que no encarne igualdad política. Aun así, en este orden social algunas voces pueden ser escuchadas, algunos pueden asegurar dominio político y la mayoría de los marginados y explotados pueden hacer parte de las negociaciones, aunque las condiciones de desigualdad se mantenga (2000, pp. 60–61).

No es que se haya tergiversado la esencia del comité, sino que la misma realidad de dolor y tristeza que estaba en el corazón de tantos y tantas sudafricanos(as) fue puesta sobre la mesa cuando el gobierno abrió el espacio de hablar, después de tantos años de silencio temeroso. Sandrine Lefranc sintetiza esta dimensión del trabajo del Comité de Violación de Derechos Humanos con la expresión “tribunal de las lágrimas”, con un ritual y lenguaje singulares (2002, p. 75).

Es decir, la gestión de la reconciliación social, desde la perspectiva que estamos hallando en Sudáfrica, se va consolidando procesualmente como una dinámica entre lo institucional-jurídico y lo social-emocional que, en muchos casos, debe promoverse con sumo cuidado para evitar los extremismos que pueden hacer fracasar las dinámicas de reconstrucción social. Gestionar de manera pública etapas de conflicto y violencia e, inclusive, post-conflictivas no requiere únicamente de dinámicas procedimentales desde lo institucional, sino una aprehensión de lo humano-individual como componente cohesionador de la gestión de este tipo de políticas. No se gestiona política del dolor/sufrimiento humano individual como área aislada, sino las causas de la violencia que fragmentan la sociedad, pero que contiene la dimensión emocional en cuanto lo común está diseñado desde la individualidad humana. Desde allí, insistimos, lo ético es indispensable al gestionar la reconciliación social.

Desarrollado el primer año de trabajo del Comité de Violación de Derechos Humanos, en medio de la “escucha compasiva”, la CVR vio la necesidad de acelerar la dinámica del proceso, para ello se estableció un mecanismo de recolección de información donde la víctima centrara su testimonio a un tiempo definido y a las categorías preestablecidas para la exposición de los actos de violencia. La institucionalidad prevaleció en la dinámica sobre lo emotivo, pues la presión del tiempo de referencia para el informe (1998) originó este giro.

A partir de 1997, cuando ya se habían establecido los parámetros para la amnistía, el Comité de Derechos Humanos y, por su esencia, el Comité de Amnistía, iniciaron el acceso a quienes estaban catalogados como victimarios o sujetos de actuar violento durante el período establecido por la ley.

Los delitos que la ley estipulaba como grave violación a los Derechos Humanos se enmarcaron entre el 1 de marzo de 1990 y la llamada fecha límite, escogida para el 10 de mayo de 1994. Estos actos fueron catalogados desde dos perspectivas:

- Asesinato, secuestro, tortura o severo tratamiento de cualquier persona, o
- Cualquier intento, conspiración, incitación, instigación, orden u obtención para cometer un acto referido en el parágrafo a —es decir, la lista que haya sido definida de manera inmediatamente anterior— (Ley 34 de 1995, capítulo 1, número 1).

En su desarrollo, la Comisión centró la atención en los casos más graves y delicados, minusvalorando la violencia cotidiana que se fue instaurando en la vida socio-política de Sudáfrica durante el período del *apartheid*. Al respecto, Richard Wilson expresa que esto erosionó el verdadero sentido de una concepción democrática de la justicia, creándose una falsa distinción entre los aspectos normativos de un racionalizado y autoritario orden e ilegales formas de coerción y violencia física, cuando este segundo aspecto implicó toda la estructura que se dio (Wilson, 2001, pp. 34–35).

Sin embargo, los esfuerzos por un proceso efectivo no se hicieron esperar. Por ejemplo, con el fin de conducir los aspectos del contexto institucional a través de los cuales operó el *apartheid*, los comisionados organizaron nueve espacios de escucha en diferentes sectores de Estado y sociedad: trabajo y negocios, comunidades religiosas, comunidad legal, sector de la salud, de los medios de comunicación y prisiones, y uno especial de escucha desde el servicio militar obligatorio, niños y jóvenes, y mujeres.

Según el caso que cada persona presentaba, el área respectiva asumía el proceso de recopilación de información y, posteriormente, presentaba el conjunto al comité respectivo. A través de este método, la CVR pudo sobrepasar algunas limitaciones de su dificultoso trabajo, aunque fragmentariamente se pudieron recoger elementos importantes del contexto social e institucional del *apartheid*.

3.5.1.2. Violaciones a los derechos humanos y crímenes comunes

La dinámica del proceso de amnistía, con sus aciertos y desaciertos, trajo como consecuencia un conflicto jurídico en cuanto a la definición de los parámetros para catalogar el nivel de los delitos que entrarían dentro de la esfera del proceso de reconciliación social. El primer nivel de discrepancia se centró en la definición de qué se entendería como acto a través del cual se violaron derechos humanos o su especificidad dejaba la situación en un crimen común.

La categoría que puso la discusión fue la del carácter político o no de los derechos humanos. Richard A. Wilson (2001, p. 80) afirma que las tensiones se presentaron en los enfrentamientos ideológicos que desarrollaron las agencias promotoras de Derechos Humanos y los partidos políticos o entre los partidos políticos y los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos.

La aclaración debió asumir la distinción entre un abuso realizado por motivos políticos — donde se hacen expresas las violaciones a los derechos humanos— y lo que se podría entender como un acto criminal simple. En términos generales, el conflicto ideológico estaba en qué era necesario establecer para definir si un acto de violencia durante el *apartheid* era una acción

política o no. Sin lugar a dudas, la distinción no fue fácil dentro de las discusiones por la ambigüedad e indistinción que se fue hallando en las versiones que se escuchan por parte de los victimarios y de las víctimas, pues los victimarios cometieron, en muchos casos, actos violentos que pretendían tener causa política, pero que también eran crímenes comunes.

Richard Wilson (2001) trata de encontrar aclaraciones al hacer referencia a la propuesta de algunas organizaciones anti-*apartheid* al respecto. Estas organizaciones entendieron las violaciones a los derechos humanos como las acciones violentas entre las pandillas que se enfrentaron a la Policía en medio de barricadas y desarrollo de boicots, así como asesinatos de uno y otro grupos, entre ellos, por rivalidades personales, incluyendo crímenes convencionales como los robos. Sin embargo, otros grupos catalogaron como actos políticos, acciones criminales de las pandillas, por ejemplo, en áreas alrededor de Johannesburgo como el Vaal, East Rand y West Rand. El medio que posibilitó una aclaración más puntual en esta discusión jurídica fue la dinámica establecida entre los crímenes por causas racistas y los motivos políticos.

3.5.1.3. Crímenes por origen racista y crímenes por motivos políticos

En la búsqueda por aclarar estos aspectos que dieron origen a confusiones y enfrentamientos entre partes integrantes del proceso de reconciliación social en Sudáfrica, Richard Wilson (2001) anota que la distinción entre estos dos niveles de criminalidad —actos de origen racista y actos de origen político— tiene que ver con lo que se entendía por ideología política y creencia privada.

La necesidad de aclarar estos conceptos se presentó en el desarrollo de los trabajos de la Comisión de Amnistía al catalogar el racismo como acto por motivo político. La misma historia del *apartheid* y la manera como se asumió el racismo en Sudáfrica motivaron la ubicación de esta actitud como elemento central en la política de segregación. Pero, al avanzar la escucha de los victimarios y las víctimas, se fueron encontrando elementos que conducían a la confusión de conceptos, puesto que en algunos casos se percibía un elemento personal en la acción del acto violento. El constitucionalismo no racial del ANC promovía que los asuntos relacionados con la raza, la etnia y la cultura no tenían connotaciones políticas. “Las expresiones culturales o las identificaciones étnicas estaban reducidas al nivel de las creencias privadas y no podían entrar dentro de la esfera política pública y no eran motivación política” (Wilson, p. 89).

Sociológicamente tampoco hubo mucha aclaración, pues las corrientes definían como “acto político” toda operación de poder en dos esferas: instituciones públicas y sociedad en general y el racismo siempre opera, desde esta perspectiva, en los dos niveles simultáneamente. El racis-

mo no surge como hecho aislado o solo de políticas de Estado, pero sí se puede percibir en él una interacción de fuerzas entre políticas, sociedades y culturales motivaciones. Sin embargo, Richard Wilson cita a la Helen Suzman (liberal) quien afirma que en esta discusión el caso de Sudáfrica es especial, pues la condición política, económica y social de las personas, en su nivel individual, estaba condicionada por su raza (Wilson, p. 90).

En síntesis, las ideas del liberalismo clásico influyeron en la dinámica de reconciliación social desde la perspectiva de *nation-building*, aunque rechazaba la categoría de acto político para los crímenes por motivos de raza e identidad, creó un contexto político donde la raza y la etnicidad en algunos casos eran excluidos de la categoría de crimen por motivo político en la violación de derechos humanos. El Comité de Amnistía tuvo que trabajar en la temática al desarrollar la clarificación de cómo las acciones contra la raza y las etnias actuaron en la sociedad del *apartheid*.

Con todo lo anterior, el soporte de la justicia en los procesos de reconciliación social tiene que ver con los puntos de referencia que una sociedad moderna debe atender en su actividad moral, como los describe Adela Cortina (2010): “las metas sociales que le dan sentido y legitimidad social, los mecanismos adecuados para alcanzarlas en una sociedad moderna, el marco jurídico-político de esas sociedad, las exigencias de la moral cívica alcanzada por esa sociedad y las exigencias de una ética crítica” (p, 46). La justicia dentro de un marco institucional en procesos de reconstrucción social va más allá de los aparatos de justicia, más allá de los espacios de los juzgados, por cuanto implica la asunción de una transformación social donde víctimas, victimarios, sociedad civil y en general aprehendan la convivencia y la coexistencia como factores desde los cuales lo político se gestiona de manera participativa. Es “pensar institucionalmente” en una acción colectiva como la que se reconstruye desde la reconciliación social.

3.5.2. El Salvador y Nicaragua

Después de un largo y cruento período de conflicto y violencia estos dos países centroamericanos vivieron un proceso de reacomodación de su estatus social y, por ende, de sentar las bases para democratizar sus pueblos. Los salvadoreños lo lograron a través de un proceso de paz que se selló con el Acuerdo de Chapultepec y la instauración de la Comisión de la verdad. Nicaragua asumió un camino de ascenso al poder de la llamada revolución, en medio de un conflicto que se acentuó con el movimiento de los Contras hasta llegar al llamado “fracaso de la revolución sandinista” y el acceso al poder de una coalición multipartidista (UNO) que brindó mecanismos de reformas constitucionales e institucionales, aunque con la presión de los sandinistas.

Por tanto, la dinámica fue muy distinta a Sudáfrica. El marco institucional de la justicia en estos dos casos tomó rutas distintas. La justicia transicional se hizo palpable en El Salvador, mientras que en Nicaragua el que hemos llamado “sueño revolucionario” desdibujó el dolor de las víctimas de la época Somoza y, posteriormente, las de la lucha entre sandinismo y Contras.

Según algunos datos, 75.000 salvadoreños no combatientes fueron ejecutados extrajudicialmente por el régimen.⁹⁷ Los desaparecidos llegaron a ser contabilizados en 8.000 personas. No se ha podido establecer el número exacto de detenidos, torturados, desplazados y obligados a abandonar el país, señala Benjamín Cuéllar Benítez (Fundación para el Debido Proceso Legal, 2010, p. 130). La Comisión de la Verdad asumió su labor desde los compromisos adquiridos por las partes en los acuerdos. La esperanza de un cese de hostilidades y una reforma a fondo de la estructura social y política estaba viva. Por ello, en materia de justicia los puntos estaban señalados por el Acuerdo de México de 1991 al señalarse una reforma al sistema de justicia para garantizar el respeto a los derechos humanos. Inclusive se llegó a plantear la reforma de la Corte Suprema de Justicia, un nuevo procedimiento para elegir a sus miembros. También, el presupuesto general de la nación tendría un 6% para el órgano judicial. La creación del procurador para la defensa de los derechos humanos también se contempló y la elección de los titulares del Ministerio Público (Fiscal General y Procurador General) se haría por dos tercios de los votos del Parlamento (p. 134).

En materia explícita del proceso de reconciliación social desde la Comisión, las recomendaciones se centraron en reformas institucionales para evitar la repetición de hechos de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Por ello, la Comisión dejó clara la urgente necesidad de reformar el sistema de justicia, después de tantos años en los que la “democracia había estado disfrazada” en la gestión de los militares. Por ello, un punto de reforma sería también la Policía Nacional Civil. En 1997 se aprobó el Código Penal que está vigente hasta la fecha actual. Como novedad en esta materia podemos señalar el principio de universalidad de la justicia penal y el señalamiento claro de ciertos delitos contra la humanidad —genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, desaparición forzada cometida por persona particular y la desaparición de personas permitida culposamente— (Fundación para el Debido Proceso legal, p. 135).

Al presentar las recomendaciones, el informe final de la Comisión de la Verdad señala el círculo vicioso que degeneró la realidad salvadoreña. Por un lado, impunidad por la acción gubernamental de agresión contra la población y, por otro, la impunidad general ante tales actos.

97. El texto mismo del informe de la Comisión de la verdad señala que recibieron 22.000 denuncias de graves hechos de violencia ocurridos entre enero de 1980 y julio de 1991. Más de 7.000 fueron recibidas directamente en las oficinas de la Comisión. Las demás llegaron por medio de Organizaciones No gubernamentales y gubernamentales (Informe “de la locura a la esperanza, IV: casos y patrones de violencia, inciso A).

Muestra de ello es que las tres ramas del poder público no cumplían su misión social, generándose una fragmentación profunda.

La acción de la justicia transicional en El Salvador estuvo atenta al trabajo con las víctimas y a la idoneidad en los procesos de esclarecimiento de la verdad. Pero, la sensación que queda es la de imperante impunidad, continuación del silencioso dolor de las víctimas, “vida normal” de quienes actuaron intelectual o activamente en los graves crímenes, incumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos y un recrudecimiento de la violencia delincuencia en la vida de los salvadoreños. Cuéllar Benítez menciona que en el año de 2009 llegaron a contabilizarse oficialmente 4.367 asesinatos por este tipo de violencia actual (p. 145).⁹⁸ La sensación de impunidad sigue presente en la realidad salvadoreña:

Recientemente, el Estado salvadoreño ha sido puesto en cuestionamiento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a su falta en la impartición de justicia, en especial en los casos emblemáticos de los crímenes de lesa humanidad contra el Arzobispo de San Salvador, Mons. Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, así como la Masacre de los sacerdotes jesuitas.

Tanto las víctimas (familiares y representantes de éstos), como la CIDH, le dijeron al Estado salvadoreño que ha incumplido en dos cosas: no ha investigado, procesado y sancionado a los asesinos de Mons. Romero ni a los que cometieron la Masacre de los jesuitas, además de que no ha adecuado las leyes internas para que tenga lugar la justicia contra aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil (1980-1992). Ello se refiere a que El Salvador no ha abolido la amnistía de 1993 (ContraPunto, 2011).

La amnistía pactada en el año de 1993, beneficiando a los actores políticos que estuvieron involucrados en graves crímenes durante el período de la guerra, continúa perjudicando la reconstrucción social en este país. El presidente Mauricio Funes se negó a abolir la ley y el sistema de justicia se mantiene inoperante ante la magnitud de los hechos que, aunque no se analice a fondo la situación hoy, los crímenes delincuenciales en este presente son consecuencia de un “mal cierre”, de un proceso de conflicto y violencia que tendría que haber ido más allá de los mecanismos de *instauración democrática* y reforma institucional. Como los señalamos con Bonchek y Shepsle, la acción social demanda una interiorización de valores que permita que los actores en el conflicto y la sociedad en general asuman un rol proactivo más allá de los simples costos de beneficios que pueden obtener de un proceso como estos. Lo corrobora Ramiro Aguilar Torres en una columna del diario digital ContraPunto en el año de 2009:

98. Esta realidad la presentó en el año de 2008 el fotoperiodista español Christian Poveda en el documental *La vida loca (Mara la 18)*. Es un trabajo que hizo al convivir en esa realidad salvadoreña de hoy durante año y medio. La realidad de las maras (pandillas juveniles que se dedican a la extorsión, al robo y al tráfico de drogas). El creador de este reportaje fue asesinado el 2 de septiembre de 2009 por miembros de maras. (Documaniatv.com, 2009)

Cuando el país decide cambiar su estructura institucional y su amalgama ideológica como consecuencia de un proceso electoral, las cosas no pueden hacerse a trompicones. Los que llegan al poder quieren hacerlo todo ya; pero no deben olvidar que ciertas prácticas sociales e institucionales (no hablo de prácticas políticas) son atávicas y por ende, de cambio sobre resultados.

La mejor forma de ir transitando políticamente es hacer el cambio, medir los resultados, pulir el cambio, ampliarlo, y volver a medir los resultados; si éstos son positivos en la práctica, no en el imaginario propagandístico de la dirigencia, el pueblo los acepta y los encarna.

Uno de los elementos fundamentales de toda transición es dejar andar a la justicia a su propio ritmo, no presionarla para que destape todos los delitos y todos los errores del antiguo régimen a la vez. No hablo de impunidad. Hablo de investigar los delitos, armar las acusaciones con sólidas pruebas, prepararse para un juicio en toda la regla y con todas las garantías al acusado. Dejar el efecto mediático para otros empeños (ContraPunto, 2009, La transición salvadoreña).

Por su lado, Nicaragua fundamentó su reconstrucción social desde la búsqueda de instauración de la democracia, como lo hemos señalado insistentemente. Por las circunstancias históricas que hemos esbozado, los nicaragüenses tuvieron que enfrentar una revolución que pretendió controlar el paso de la dictadura del clan Somoza a la democratización, pero con un “uso abusivo del poder”. Esta situación mantuvo el estado de violencia y guerra a través del enfrentamiento con la resistencia nacional o los Contras. Finalmente, en 1989 se logró el desarme y el adelanto de las elecciones, en las que los sandinistas perdieron el poder, pero siguieron presionando por “detrás” de escena su rol en el país.

En los años noventa, el FSLN revolucionario de 1979 se había convertido en una maquinaria política encabezada por un caudillo —con el apoyo de su esposa— construyó una alianza tras otra con corruptos políticos, antiguos archienemigos, personajes de la élite económica y la reaccionaria vieja guardia eclesiástica de la Iglesia Católica [...] Acomodos y pactos secretos concretados en el pasado por Ortega con presidentes conservadores, que condujeron a una dualidad en el control del sector judicial y público —sólo el Ejército y la Policía mantuvieron su autonomía institucional— fueron disimulados bajo la bandera de “paz y reconciliación”: “¿Paz después de qué? Y ¿reconciliación entre quienes?” (Kruijt, 2009, pp. 226–227).

El marco institucional de la justicia, fundamental en un proceso de reconciliación social se cataloga como “viciado” cuando las circunstancias socio-políticas presentan una realidad como la nicaragüense. Sin la interiorización de valores claros frente a la reconstrucción que se pretende obtener después de la fragmentación por la guerra no es posible cimentar una justicia apta. El elemento de la “amnistía general”, definida en los acuerdos de 1988 entre el gobierno del FSLN y la resistencia atenta contra la implementación de lo judicial en las dinámicas en las que el esclarecimiento de la verdad es clave.

El acceso a los primeros intentos democráticos en el año de 1979, con la caída del último de los Somoza, y la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), fueron el marco institucional dentro del cual la justicia en el período post-dictadura pretendió ser elemento integrador. Sin embargo, el FSLN en el poder asumió un liderazgo que concentró toda la dinámica de la llamada “reconstrucción nacional”. Desde el año de 1987 se inició una serie de reformas constitucionales e institucionales que pretendieron facilitar esta dinámica. El 21 de agosto de 1979 se implementó el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses que, junto a la derogación de la constitución somocista de 1974 y el nuevo ordenamiento gubernamental con la JGRN, sentaron las bases de lo que sería el cambio, narran Álvarez Argüello y Vintró Castells (Martí i Puig & Close, 2009, p. 170).

En el año de 1987 se promulgó la nueva Constitución Política de Nicaragua,⁹⁹ desde la cual se creó el nuevo marco de reordenamiento en el país. Esta nueva Carta Política nicaragüense ha tenido varias reformas hasta la fecha. Para nuestro interés, citamos brevemente la impronta en materia del marco de justicia que le dio la reforma de 1995 o Ley 192, en la que se normatiza el Estado Social de Derecho. En esta ocasión se hace explícito el carácter de democracia pluralista y representativa que debe enmarcar la reconstrucción social en el país. De la misma manera, se amplían los derechos de los ciudadanos y las garantías de su ejercicio, especialmente en materia de reforzamiento de los órganos de justicia, sobre todo la organización de este órgano del poder frente a lo legislativo y lo ejecutivo. Desde aquí, la Corte Suprema de Justicia unificó lo jurídico en Nicaragua (creando la Sala de lo Contencioso-Administrativo y reformulando la de lo Constitucional).

Sin embargo, a la luz de un proceso de reconciliación social podemos cuestionar estas iniciativas de reformas institucionales y constitucionales frente al papel de la justicia en materia de graves violaciones a la vida durante el tiempo del conflicto y la violencia. La sensación que nos queda es un proceso de politización democrática, pero no de un objetivo claro y contundente respecto a la reconstrucción social desde una dinámica de reencuentro de lo fragmentado durante la guerra. Martínez Barahona señala que “una década civil, la herencia de un personalismo político, la corrupción y una pobreza endémica han influido en las instituciones políticas de Nicaragua” (Martí i Puig, 2009, p. 221).

99. Álvarez Argüello y Vintró Castells comentan que esta nueva Constitución fue de énfasis sandinista dentro de una tradición liberal-democrática con reformas importantes hasta la fecha (aquí sólo mencionamos las tres primeras): reforma constitucional de enero de 1990 (autorización para el adelanto de elecciones), reforma *non nata* de 1994 (simplificación del procedimiento de reforma parcial de la Constitución), reforma de 1995 (Ley 192. Homologación liberal-democrática y Estado Social de Derecho) (Martí i Puig & Close, 2009, p. 171 – 220).

Las luchas por el control del poder en este país centroamericano han puesto a la justicia como una institución condicionada por los enfrentamientos politiqueros.

Estas circunstancias afectan a la democracia nicaragüense en dos sentidos: En primer lugar, se limita aún más el ya ineficiente sistema de pesos y contrapesos, confirmando la ausencia de controles internos de los funcionarios (*accountability* horizontal). En segundo lugar se afirma la ausencia de subordinación de los actores al estado de derecho que protegería a la ciudadanía de abusos de poder. Sin un poder judicial independiente, esto es imposible (Martí i Puig, 2009, p. 224).

Las Cortes han sido catalogadas en Nicaragua como “espacios personalistas”, contaminadas por pactos y favoritismo, añade Martínez Barahona¹⁰⁰. Lo que nos deja un vacío en una dinámica efectiva de reconciliación social. Por este motivo consideramos que no se puede hacer referencia a un marco jurídico de justicia transicional ni restaurativa dentro de un contexto de politización del órgano judicial y, en general, de todo lo que implica un período hacia la paz.

Que en Nicaragua se haya cambiado el régimen de “autoritarismo personalista” por un “logro victorioso de la revolución popular” en manos del FSLN no implica que la transición se haya asumido efectivamente. En lo teórico pudo sucederse un cambio, una transición, y el pueblo pudo iniciar un recurso a las urnas con más “libertad condicionada”, pero allí no se agotan los presupuestos de convivencia y coexistencia pacíficas que consideramos fundamentales en nuestra propuesta para hablar de procesos de reconciliación social. Democratización no es reconciliación social ni mucho menos la reconciliación implica una democracia real si no se dan las condiciones mínimas que acción colectiva que hemos descrito con anterioridad.

Un proceso revolucionario que se fue politizando y asumió los defectos de la misma politización, una ley de amnistía acomodada a las circunstancias, un ambiente de corrupción, una pobreza extrema de la mayoría del pueblo fue el panorama que dejó una etapa de acercamiento post-conflicto, pero no de reconstrucción social a fondo. La promoción de una amnistía en medio de estas circunstancias quiebra el marco institucional que debe sustentar este tipo de dinámicas. Brandon Hamber (2009/2011) comenta en texto conclusivo de su investigación en el caso de Sudáfrica que, cuando se hizo pública la decisión del acceso a la amnistía, la sensación general fue de inexistencia de la justicia y señala una pregunta que queda en el ambiente: “¿Qué ocurre cuando un país, por motivos políticos, decide que la retribución por los crímenes del pasado no es posible y que es preferible la amnistía? Dicho de otra forma, ¿qué pasa cuando un país elige la paz por encima de la justicia?” (p. 218).

100. Esta autora expone con más detalle esa situación en su texto *El sistema judicial: ¿el “secuestro” política de una Corte Suprema?* (Martí i Puig & Close, 2009, pp. 221– 263).

El trabajo realizado en Sudáfrica dejó entrever, en la perspectiva de Hamber, que el deseo profundo de la víctima está en la justicia, especialmente en la retributiva. La gente quiere “compensación” por injusticias recibidas y “castigar”, por eso los procesos judiciales son un marco de referencia importante en esta clase de dinámicas. En este orden de ideas, cada contexto debe asumir el rol del marco de justicia como eje vertebral de la reconstrucción social en su multidimensión, con actos como reparaciones, reconocimiento, restitución o petición de perdón (Hamber, 2009/2011, p. 221). No obstante, demanda de los tribunales o de la institución trabajos que produzcan justicia.

3.6. Marco institucional: creación y promoción de la institucionalidad

La manera como se gestiona un proceso de reconciliación social tiene que ver mucho con los mecanismos que se apliquen para hacer más efectivo un tipo de dinámicas como esta. Por ello, en la revisión general de nuestro concepto de reconciliación, trabajado en el segundo capítulo, hallamos un elemento común en muchos autores en la consideración de una serie de instrumentos para lograr el objetivo. Este tipo de instrumentos o mecanismos los llamamos “marco” para hacer referencia a la serie de elementos que las sociedades configuran en estas circunstancias.

Mas no dejamos este llamado marco como un simple esquema que pretende ser un receptáculo de todo tipo de iniciativas conducentes a la reconstrucción social, sino que consideramos el marco institucional como una estructura donde se fusionan los instrumentos organizacionales, es decir, la creación o definición de espacios institucionales que asumen las tareas de gestionar el proceso mismo, en una relación coordinadora. También, asumimos el concepto de ‘institucional’ más allá de este ámbito de las organizaciones y apropiamos el concepto de ‘pensar institucionalmente’ que nos comparte Hugh Heclo (2010). Es decir, la reconciliación social no es un asunto exclusivo de los actores en el conflicto, ni mucho menos interés particular de partidos políticos o gobernantes. “Pensar institucionalmente es una mezcla de cognición y apego emocional que produce hábitos de actuación. Es también un tema que nos invita a emitir juicios sobre otras personas y, en no menor medida, sobre nosotros mismos” (p. 17).

Para Heclo, el punto de engranaje en esta actitud en y desde las instituciones es “el medio de orientación en un mundo en el que la persona esté participando. Cuando se piensa en clave institucional, se está en plena identificación con la institución y sus valores” (pp. 209–210). En un proceso de reconciliación como el de Sudáfrica esta perspectiva fue determinante en la

dinámica misma desde la creación y promoción de símbolos conducentes a la paz, tal como los describimos con anterioridad. El liderazgo de hombres como Nelson Mandela, el presidente De Klerk, el arzobispo Desmond Tutu y los diversos grupos en todas las esferas sociales permitió que la llamada a la “construcción de nación” (*nation building*) se constituyera en ese sentimiento de “pensar institucionalmente” por una reconstrucción social que urgentemente percibieron como necesaria. Así mismo, podríamos recurrir al uso del rugby como ese medio a través del cual el deporte se convirtió en factor de gestión política.

El mismo Hugh Heclo deja claro que el pensar institucionalmente contiene una acción que se deriva de su misma esencia: la finalidad que se deriva del mismo objetivo que se trazan las instituciones (p. 214). De manera que la intención plasmada en el Acuerdo Nacional de Paz de Sudáfrica sienta las bases de la institucionalidad a la que se dirigen las instituciones que hagan posible la dinámica: “La intención de este Acuerdo es promover la paz y la prosperidad en comunidades golpeadas por la violencia. El derecho de todas las personas a vivir en paz y armonía será fomentado por la aplicación de este Acuerdo” (Barnes (edit.), p. 41). Pero la complejidad de las situaciones de conflicto y violencia requiere una acción colectiva definida para que la salida alternativa a través de la reconciliación sea efectiva.

Bonchek y Shesple (2005) señalan que la *acción colectiva* se hace patente cuando “los grupos de individuos que persiguen algún interés común o algún objetivo compartido actúan con algún costo o hacen alguna contribución en beneficio de la meta común” (p. 221). A su vez, Hedström y Olson nos ayudaron a percibir esta exigencia desde nuestro marco teórico. La elección es aunar esfuerzos. El insumo desde donde parte esta acción en común es la cooperación que se suscita entre los miembros del grupo que buscan disfrutar de un bienestar que les ofrece la organización, más allá de si contribuyeron o no al logro. Es decir, en la misma dicotomía del aportar o no para el logro de lo general, la cooperación se funda en la internalización de valores que le brindan la posibilidad a quien pertenece a una institución y se abre al pensar institucionalmente. Según parece, señalan Bonchek y Shesple, en grupos la problemática de cuántos y qué aportan no ocasiona mayor inconveniente porque las mismas circunstancias de bienestar común gestionan el deseo general de colaborar.

Desde nuestra propuesta, la complejidad aumenta cuando hablamos de procesos de reconciliación social por la dimensión en número de personas. Bonchek y Shesple lo llaman la “cooperación en multiplicidad” (p. 227). La idea central estriba en que, cuando hay tanta diversidad de personas, la cooperación se da independientemente de si alguna o algunas no aportan, pues el beneficio llega con la ayuda de un buen número de miembros del conglomerado. Inclusive,

añaden los autores, la acción colectiva contiene una problemática en este tipo de situaciones como es el conflicto de intereses (p. 230). Para salir de la encrucijada a la que llega el gestionar en común (acción colectiva) estos autores citan la salida institucional que ofrece Mancur Olson que, en otras palabras, es en la intervención de un tercero (institución y lo institucional) desde donde se toma la decisión para que el beneficio común llegue a todos, independientemente del aporte o no de todos.

En procesos de reconciliación social esta visión es importante, pues no todos los miembros del conglomerado estarán abiertos a aportar en la dinámica con miras a la reconstrucción social o los intereses en pugna interpondrán dificultades a los acuerdos. Pero, más allá de estos elementos, la acción de una institución creada por la misma sociedad interesada en resolver el conflicto y la violencia, avalada por las demás instituciones del grupo humano, debe establecer las reglas de juego y gestionar en pos de ese beneficio común. Para ello, pensar institucionalmente debe ser una herramienta clave en la apropiación de valores que permitan una acción colectiva más eficaz y eficiente.

Aunque Olson rechaza este tipo de acciones en grupos múltiples, por la dificultad de la diversidad misma, y niega que la labor política halle en este tipo de dinámicas una gran fuente de energía, Bochek y Shesple insisten en que sí es factible la acción colectiva desde la cooperación e internalización de valores, como lo señalamos con anterioridad, pero añaden —refutando a Olson— que los liderazgos (organizan y mantienen grupos), la ideología y los sistemas de creencias posibilitan que una acción en común a gran escala tenga efectos benéficos para todos (Bochek & Shesple, 2005, pp. 237–243).

Los elementos de la ideología y del sistema de creencias (que señalamos cuando nos referimos al enfoque analítico del cambio social de Peter Hedström) se fundamentan en la herramienta *experimental del comportamiento humano*. Es decir, según la teoría de la acción racional, el comportamiento de los seres humanos es instrumental por cuanto las personas actuamos motivadas por propósitos y objetivos. Mas Bonchek y Shesple añaden que el actuar también es experimental. En otras palabras, los humanos actuamos también porque nos gustan las cosas, nos sentimos bien, experimentamos placer, etc. En nuestro tema de interés, nos gusta la convivencia y la coexistencia antes que la violencia y la guerra.

Esta intención se constituyó en institución al crearse la Comisión Nacional de Paz y la Comisión de Verdad y Reconciliación, creada por la ley de la Unidad Nacional y de la Reconciliación, tal como lo describimos antes. A su vez, la misma Comisión centró su objetivo para el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el tiempo del conflicto y la violencia,

circunscribiendo el tiempo a los años de 1960 a 1994. Este mecanismo institucional reforzaba su pensamiento institucional para permear a toda la sociedad a través de los instrumentos de la verdad, la construcción de una memoria histórica, la reparación y el camino hacia el perdón. Sin lugar a dudas este pensamiento institucional estaba sentado sobre el llamado a la Unidad Nacional que Mandela tanto promovió.

Pero, la creación de estos espacios en los tiempos adecuados solo constituye un factor del gran conglomerado de instrumentos que un proceso de reconstrucción nos demanda. Este pensar desde lo institucional a que hacemos referencia también convoca a la actitud humana, individual y colectivamente, a asumir actitudes coherentes con la finalidad que perseguimos. En este aspecto, por ejemplo, el caso de Mandela es llamativo. La capacidad de liderazgo que le es constitutiva permitió que la institucionalidad del proceso en todo el país, e inclusive, a nivel internacional tomara fuerza. Para el mismo Mandela, “el liderazgo puede caer en dos categorías: a) Los que son inconsistentes, cuyas acciones no pueden ser pronosticadas, que están de acuerdo hoy con un tema y lo repudian al día siguiente; b) los que son consistentes, quienes tienen un sentido del honor, una visión. La primera tarea del líder es crear una visión” (Mandela, 2010, p. 345).

Víctor De Currea-Lugo (2007) afirma que

[...] cuando la guerra, como mecanismo, se desgasta y se entra en una situación de imposibilidad militar de una parte sobre la otra (empate negativo), la paz podría ser una propuesta revolucionaria, incluso instrumentalmente, un proyecto transformador, una salida política, una opción desesperada o un poco de todo lo anterior. Esta lógica llevó a varios gobiernos a desarrollar negociaciones de paz, leyes de amnistía y/o indultos y procesos de reinserción guerrillera en El Salvador, Nicaragua y Colombia (p. 68).

Es la politización de la etapa final de un conflicto, pero el pensar institucionalmente va más allá de estos mecanismos. A diferencia de Sudáfrica, los casos de El Salvador y Nicaragua no avanzaron más allá de reformas institucionales y constitucionales, tal como lo hemos descrito con anterioridad.

El Salvador avanzó dentro de la dinámica de la reconciliación con la creación de una comisión de la verdad que trabajó durante seis meses y dejó un informe que no originó cambios sustanciales para la reconstrucción social, sobre todo en materia de amnistía–impunidad. Por su lado, Nicaragua no gestionó procesos reales de institucionalización de las actitudes por quedarse enfrascada en luchas internas por el control del poder político y la entronización del sandinismo como “sueño de masas”, pero sí al “fracaso personalista”. Se tuvo reformas constitucionales y de instituciones, apertura a los derechos humanos y civiles, acuerdos para la pluralidad y la

participación política, comisiones de paz, veeduría de la comunidad internacional, entre otros tantos mecanismos, pero la reconstrucción social no llegó al fondo de la raíz, por cuanto la politización de la paz va más allá de estos mecanismos.

A nuestro parecer, faltaron mecanismos idóneos y eficaces para desarrollar la salida de la guerra y el camino hacia la paz por medio de la reconciliación, pero también estuvo ausente la internalización de valores fundamentales para que la acción colectiva en este tipo de circunstancias sea efectiva.

3.7. Marco institucional: hacia la definición y aplicación de una política pública

El enfoque de la sociología analítica de Hedström (Noguera, 2010) nos amplió el espectro de lectura al contemplar cómo se estructura la dinámica social desde los *deseos, las creencias y las oportunidades* que entran en juego al plantear una dinámica de reconciliación social. O, en palabras de Marc Augé (como lo anotamos en nuestro primer capítulo) es el juego relacional entre alteridad, diferenciación y conflicto el que posibilita que la acción en común sea factible; lo que Olson marca como fundante de una acción común. Sin embargo, este marco teórico demanda una gestión práctica real que la haga demostrable, es lo que la política pública puede aportarnos en nuestra búsqueda.

Aunque el desarrollo explícito de este tipo de políticas lo daremos en nuestro último capítulo, nos parece oportuno vislumbrar cómo los casos que hemos descrito en este capítulo nos brindan elementos que pueden constituir una política pública. Pero, ¿este tipo de políticas se estructura de la misma manera que una de educación, salud o vivienda? ¿Solo son importantes las necesidades de la sociedad en una situación real y la voluntad política? Respuestas a las que pretendemos llegar cuando finalicemos nuestros casos y expongamos lo que entendemos por esta clase de gestiones públicas. Lo que sí nos puede ayudar a vislumbrar el camino hacia el diseño de la reconciliación social en clave de política pública es el asumir el concepto de ‘Estado relacional’¹⁰¹ como ese contexto que se pretende reconstruir desde una acción colectiva fundada en la cooperación y la interiorización de valores.

101. Es el modelo de Estado que Longo e Ysa (2008) proponen en la gestión pública contemporánea donde las sociedades tienen un papel más dinámico y proactivo de lo que tenían en el modelo de Estado de bienestar. Este modelo sustenta su propuesta en que “el Estado ha dejado de ser omnipotente y autosuficiente, para asumir la complejidad y la interdependencia presentes en los problemas sociales y que asume que la resolución de los mismos sólo se puede abordar contando con la participación activa de la sociedad” (p. 51). Este modelo de Estado requiere del principio de corresponsabilidad como eje sobre el cual se consolida lo común a través de “tomar conciencia de objetivos comunes e identificarlos adecuadamente; la asunción de responsabilidades concretas en su consecución; y, la articulación efectiva de las responsabilidades asumidas por cada una de las partes” (p. 52). Es lo objetivo del diálogo y la cooperación.

En esta dinámica de interacción entre lo dialógico y lo cooperativo que promueve el Estado relacional que necesitamos para una apuesta por la reconstrucción social Boncheck y Shesple (2005) buscan desarrollar la idea de *bienes públicos* dentro de un marco de acción colectiva. Para ello, recurren a la economía en su dinámica relacional con la política que, en últimas, es la que puede dirimir los conflictos de intereses por el máximo bienestar que cada actor social busca obtener de un bien.

Para Boncheck y Shesple, los *bienes públicos* “no son excluyentes —cualquiera puede disfrutarlos, ya sea que haya pagado por ese privilegio o no— y son de oferta colectiva —el uso que una persona hace de ellos no disminuye la oferta disponible para los otros—” (2005, p. 251). Pero son conscientes de que la lucha de intereses por el grado de beneficio ante el aporte dado por el mismo y la posible satisfacción del bien por quien no aportó puede crear el obstáculo para que ese bien beneficie al grupo en general, ante lo que debe aparecer la institución política como fuerza que compense la lucha y proteja la dinámica benéfica del mismo.

La paradoja del suministro público, afirman estos autores, “es que el suministro público no es algo que ocurra por sí solo; es necesario poner en movimiento la presión política para alentar a las instituciones gubernamentales a hacer del suministro una política pública; y también es necesario hacer proyectos de ley y asignaciones y crear agencias gubernamentales. Se debe persuadir a los actores políticos a actuar” (p. 258). Desde nuestra perspectiva, la reconstrucción social a través de la reconciliación social se debe gestionar a través de una política pública, pero no por mecanismos de politización de procesos de paz, ni para respuestas inmediatistas de programas de gobierno, si no en cuanto moviliza a todos los actores políticos en un sentido de corresponsabilidad y alienta a las instituciones para que se hagan proyectos de ley, asignaciones, agencias y un marco de valores para que sean eficaces. No es un *bien público* en materia económica el que se debe pretender ofrecer, sino un *bien común* que ofrece bienestar y puede ser asumido por todos desde la internalización de valores de convivencia y coexistencia.

Por ejemplo, la interacción que se ha establecido entre la sociedad en general, las instituciones políticas y la sociedad civil en algunos procesos de paz ha dejado de manifiesto, en línea con Robert Putnam, que “una sana sociedad civil es una herramienta para gestar la labor de la democracia” (Jarstad & Sisk, 2008, p. 185). Es decir, la sociedad civil es un microcosmos para el desarrollo de las normas y prácticas democráticas, señala Belloni, citando a Putnam. Esto es, la interacción social en un juego de roles y el encuentro de objetivos de una organización social refuerzan el ambiente de cooperación que tanto se necesitan en este tipo de procesos. Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua asumieron dinámicas hacia la paz que hicieron palpable o no esta realidad.

Mandela asumió la Presidencia de Sudáfrica en medio de un profundo sentimiento de esperanza por parte del pueblo de color. Durante su primer año instauró una nueva Corte Constitucional para dar sostenibilidad institucional a la labor que se iniciaba (1995). Entre los meses de abril y mayo de 1995 se abolió la pena de muerte y se inauguró la Comisión de Restitución de los Derechos de la Tierra. A su vez, comenzaron los trabajos de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Por último, en el año de 1998 se publicó el reporte final de la Comisión respecto a los crímenes perpetrados durante el período de conflicto.

En el desarrollo de sus labores, la CVR sudafricana se destacó en tres niveles esenciales de gestión para facilitar el logro del objetivo que se habían propuesto desde la Constitución Interina y el Acuerdo Nacional de Paz. Estos tres niveles los analiza Priscilla Hayner (Villa-Vicencio & Verwoerd, 2000, pp. 36–41) y los podemos sintetizar en:

- a. El poder que tenía para otorgar la amnistía a los victimarios individuales, íntimamente ligado a la verdad pública que se promovió desde los mismos albores de la dinámica conducente a la reconstrucción social. A este poder tan fuerte de la CVR sudafricana se suman otros poderes que permitieron más efectividad en la gestión de la reconciliación, por ejemplo, el poder de citar a los implicados, facilidades de investigación, capacidad de confiscación. De la misma manera, se destacó el sofisticado programa de protección de testigos.
- b. El carácter público del proceso fue un aspecto que se debe tener en cuenta al momento de contemplar la gestión de la reconciliación social. Marcando el acento en la urgencia de la verdad y la necesidad de hacerla *vox populi*, como ejercicio de confrontación con los actos del pasado, permitieron que lo común se restableciera desde una actitud de compromiso social. El desarrollo de este aspecto se favoreció con la división sectorial que hicieron desde los actos de agresión a la vida. Por ejemplo, el sector de la salud, el de las iglesias, etc. En este sentido, el apoyo de las organizaciones no gubernamentales de cooperación (ONG) fue clave para consolidar un trabajo de equipo, sobre todo en el acceso a las pequeñas comunidades.
- c. El arte con el que se construyó el proyecto y se desarrolló el mismo permitió que la dinámica de gestión presentara efectividad, en medio de las dificultades y errores que conllevó y que puntualizaremos más adelante. Cuando Hayner propone esta característica, hace referencia al *cómo* se fue gestando toda la dinámica, por ejemplo, el detalle de la manera en que fueron elegidos los comisionados, quienes fueron entrevistados en sesiones públicas. Nosotros creemos que este ejercicio evitó el nombramiento a dedo de los mismos y, por ende, la politización del proceso, sintiéndose la

población parte activa de la misma gestión. También se puede destacar el elemento de la escucha atenta durante largas horas de testimonios de personas, tanto víctimas como victimarios.

El concepto de reconciliación que la CVR asumió en Sudáfrica marcó un aspecto particular de este proceso. La reconciliación fue asumida como un objetivo de búsqueda de la verdad. Es decir, no fue un objetivo nacional o política nacional, sino un camino para reconciliar una nación fracturada y sanar las heridas de sus almas angustiadas. No fue asumida como fin, sino como medio para llegar a la construcción de nación. Por ello, el escenario público de las expectativas se centró en la esperanza de la reconciliación que debería ser en ese momento alcanzada en el curso de las operaciones de la Comisión. El involucramiento de la sociedad fue desde esta perspectiva, por ello, las víctimas y los sobrevivientes asumieron su rol desde la pregunta de cómo reconciliarse con sus victimarios, sobrellevando la frustración, aún en medio de la ira, desde la posibilidad o imposibilidad de un perdón no tan fácil, o quién pide primero una sincera disculpa, y además una simbólica reparación de sus malhechores.

El mismo desarrollo de la gestión de la reconciliación social, desde la perspectiva sudafricana, con sus aciertos y desaciertos, puso sobre la escena serias dificultades que estuvieron presentes a lo largo de la dinámica y que se reforzaron al terminar su labor con el informe final en el año de 1998. Entre estas dificultades se destacan la relación amnistía–impunidad, la tercera fuerza, violaciones a los derechos humanos, crímenes comunes, crímenes racistas, crímenes por motivos políticos.

Nicaragua y El Salvador presentaron un contexto diferente, tal como lo hemos esbozado en este mismo capítulo, en el que lo que buscamos apropiar como política pública de reconciliación social no se vislumbró. A diferencia de Sudáfrica, en estos dos casos de países centroamericanos se aunaron sus esfuerzos políticos y de cooperación internacional en lo que hemos llamado *transición a la democracia*. Es decir, el interés estuvo más en la salida de los gobiernos autoritarios hacia verdaderos espacios de participación. Por ello, los procesos centroamericanos son catalogados más como *procesos de paz*.

Aunque en El Salvador se instauró una comisión de la verdad, su cometido no fue el de crear un espacio de reconstrucción a través de la reconciliación. El término de reconciliación nacional lo maneja el mandato de esta comisión, pero la dinámica se desarrolló más en una investigación para aclarar los aspectos oscuros en el desarrollo de la etapa de conflicto y violencia. Los acuerdos derivados del Acta de Chapultepec “tenían como objetivo implementar varias

medidas para romper la desconfianza que reinaba entre las partes y establecer una comprensión común sobre los eventos del pasado” (Ceballos, 2009, p. 69). La Comisión surgió en este sentido, pero como acuerdo entre las partes enfrentadas, sin participación de la sociedad civil.

El objetivo de esta Comisión era la verdad y la reconciliación más que la justicia, continúa señalando Ceballos (2009). El ámbito de la justicia estaba reservado a la Fiscalía General, en los casos que los comisionados consideraban necesario. Es decir, los objetivos estaban estructurados desde un “intento organizacional” por lograr el conocimiento de lo ocurrido y que favoreciera el acceso a la reconciliación, pero no estaba enmarcado dentro de una visión política general de reconstruir el país a fondo. Esta realidad se percibió en el informe final que terminó dando recomendaciones en materias como reforma de la Fuerza Pública; en aspectos como reparación, reconciliación y prevención se debía confluir en un debate público y, en materia sustancial de justicia para este tipo de situaciones, cuestionó la debilidad de la Oficina del Consejo Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos y recomendó la creación de una procuraduría delegada.

A primera vista, El Salvador buscó una salida negociada al conflicto y la violencia, pero no sentó las bases de una verdadera política de reconciliación social. El interés por el cese de hostilidades, el retorno del sistema democrático y una comunidad internacional satisfecha por el llamado “éxito del proceso de paz”, oscurecieron la urgente necesidad de un tipo de dinámicas como la que proponemos en esta investigación. Este proceso lo sintetiza Vicenc Fisas de la siguiente manera:

Los factores determinantes para la obtención de los acuerdos fueron varios: el anhelo de paz del pueblo salvadoreño, los cambios de la derecha civil, la deslegitimación de las Fuerzas Armadas, el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, el empate militar entre las FFAA y el FMLN, la flexibilización de las posiciones, la mediación de las Naciones Unidas, la labor de los Países Amigos (España, México, Colombia y Venezuela), el papel positivo de la Iglesia Católica y de la Comisión Nacional de Reconciliación, el nuevo escenario geopolítico (fin del imperio soviético, derrota sandinista), la presión de los Estados Unidos en la etapa final y la influencia del grupo de Contadora (Fisas, 2010, p. 6).

Una experiencia más lejana a este tipo de políticas públicas fue la de Nicaragua. Este país centroamericano también centró su interés en *la instauración de la democracia* en vez de la reconstrucción social profunda. De la caída de los Somoza al triunfo de la revolución sandinista solo hubo un cambio de “líderes”, pero los mecanismos continuaron zanjando las diferencias sociales. Al FSLN en el poder se le avaló el cúmulo de reformas sociales que promovieron desde 1979. Sin embargo, las mismas desilusiones que presentaron hasta el año 1990 dejaron en entredicho el proceso nicaragüense.

En este caso el enfrentamiento se centró entre los antiguos revolucionarios —FSLN— y los llamados Contras o resistencia. Finalmente, logrado el acuerdo de paz y la reinserción de los miembros de la resistencia, los sandinistas continuaron en el poder entre el descontento social que se fue aumentando cada año hasta la manifestación democrática de 1990 que los sacó del mando, aunque mantuvieron su presión política en una aparente oposición que era más “negociación secreta” para estar “como detrás del poder”.

Reconciliación clara y explícita no hubo. Procesos de diálogos y negociación, sí; búsquedas de asumir roles del proceso de Contadora, sí. Pero política clara de paz en materia de reconciliación social, no. Inclusive, como lo describimos con anterioridad, las reformas constitucionales e institucionales pusieron en entredicho el papel de la justicia dentro del contexto nicaragüense después de los Somoza. Esto lo reconfirmamos al abordar un texto como el de Christopher Hammond (2007) quien identifica los elementos esenciales del proceso en Nicaragua desde la democratización, la desmilitarización y reinserción de los violentos, la integración regional en materia de cooperación, promoción y defensa de los derechos humanos y la creación de una cultura de paz (aunque señala que falta articulación en este aspecto).

Nicaragua abrió espacio para la cooperación internacional en su territorio, pero la voluntad política del gobierno sandinista y, posteriormente, de los otros gobiernos no crearon un contexto de política pública al respecto. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos (OEA) desarrolló un programa sobre convivencia y seguridad ciudadana a través de la creación de unas zonas llamadas *frontera del conflicto o la nueva frontera agrícola*, con el objetivo de facilitar la pacificación y la institucionalización del país, a partir de 1990. Este programa lideró la desmovilización de actores armados, la repatriación de personas que habían sido desplazadas por la violencia y distribución de ayuda humanitaria, sobre todo a comunidades campesinas, junto a proyectos de vivienda y productivos. Luego, estuvieron en el monitoreo de respeto de los derechos humanos (Spehar, OEA).

Daniel Innerarity trae la siguiente afirmación en uno de sus textos: “La política es, en primer lugar, una gestión de asuntos desde el punto de vista de su contingencia, es decir, considerándolos como abiertos, decidibles, imprevisibles, opinables, controvertidos, revisables [...]. Lo específicamente político es aquella dimensión de los problemas que no pueden resolver adecuadamente esas otras profesiones. Politizar es situar las cosas en un ámbito de pública discusión, arrebatárselas a los técnicos, los profetas y los fanáticos” (2002, p. 27). Desde esta perspectiva, nuestras pinceladas orientadas hacia la reconciliación social contemplan en Sudáfrica la apertura imprevisible, controvertible y revisable de la esfera de la reconstrucción social para que la coexistencia y la convivencia sean factibles.

Pero, ¿por qué tenemos que acceder a este campo de lo imprevisible si es factible predecir la gestión política desde las propuestas de los partidos y líderes políticos? Porque lo que Sudáfrica nos ha legado es que los procesos de conflicto y violencia fragmentan a tal punto la esfera social que no es factible prever, a primera vista, un futuro de convivencia pacífica si no se gesta y desarrolla un proceso decidible, opinable, controvertido y revisable expresado en una política pública. Además, la realidad de fragmentación social pone en evidencia fallas estructurales en lo humano —individual y grupalmente— y en toda la organización que la colectividad se ha instituido. De esta manera, el caso de Sudáfrica nos brinda la posibilidad de gestionar la realidad de fragmentación y colocar a nuestros grupos humanos en dinámica de reelaboración de lo común desde un ejercicio de política pública.

La exigencia que nos presenta una realidad como esta estriba en la capacidad de responsabilizarnos —individual y socialmente— de la labor de reconstrucción de lo común. Hemos afirmado que las situaciones de conflicto y violencia son oportunidades para reconsiderar la gestión común que se ausentó y nos condujo a esa etapa de fragmentación. En este sentido, recurrimos a la responsabilidad porque las oportunidades que la gestión política asume para trabajar son espacios y tiempos en los que nos lanzamos a hacer factible la coexistencia y la convivencia. “La racionalidad de la política es el aprovechamiento de la oportunidad”, afirma Innerarity (2002, p. 30).

Para nuestros efectos, asumimos el concepto de responsabilidad desde la propuesta de Alain Etchegoyen (1993, p. 46), para quien la noción de responsabilidad envuelve la idea de una relación de causa y efecto, entre un agente y sus actos (incluye los actos efectivos como los actos de la palabra y de la escritura). Por ende, esta dinámica de agente-causa y efecto, siguiendo a Etchegoyen, contiene cuatro categorías que traemos a colación para avanzar en nuestra visión de la política de reconciliación social que se gestó en Sudáfrica: la causalidad que suscita el proceso en sí mismo, la consciencia del mismo, el poder (capacidad) que hay en los agentes y en el mismo proceso y la respuesta dada a esta oportunidad dada por la contingencia histórica de la década de los noventa.

La *causalidad* que podemos vislumbrar en este proceso no es tanto un elemento particular que se podría señalar y definir, sino que es un conjunto de elementos que podemos sintetizar en la misma realidad histórica de encuentro de colectividades, caracterizadas por particularidades étnicas, en un mismo territorio, pero con intereses grupales distintos. Inicialmente estaban los primeros grupos que los historiadores identifican. Luego el acceso de los grupos de raza blanca, originarios de Europa, que ingresaron al territorio sudafricano inesperadamente, pero que fueron hallando motivos económicos y políticos para tomar posesión de esa tierra. Esta situa-

ción racial o étnica se mezcló con las percepciones ideológicas que los grupos blancos traían, fundamentados en principios religiosos que los condujeron a una actitud de preponderancia, dominio y control sobre los nativos. Tal situación se enfatizó cuando la presencia no se limitó a lo económico y político, sino que el factor social introdujo el encuentro de razas de distinto color a través del nacimiento de hijos de colores diferentes (los *coloured*).

A lo anterior se suma el papel político que los blancos fueron asumiendo en la región a partir de la organización que dieron al país. No solo la estructura estatal sino el proceder judicial emanó de los blancos, auto-ubicándose como “raza privilegiada” con derecho a controlar y definir los lineamientos del país. De esta manera de ver las cosas surgieron las políticas de segregación que fueron el núcleo desde donde estalló el conflicto y la violencia. Esta misma situación suscitó entre los negros sentimientos de reacción y rebelión paulatina que los gobiernos contrarrestaron agresivamente en algunos momentos más que en otros. Persecuciones, acusaciones, prohibiciones, detenciones, presos políticos, muertes, hasta masacres fueron las manifestaciones causales de una situación que desbordó los límites del conflicto humano.

Entre acción fuerte del gobierno y la reacción de los negros ante la segregación, la historia de Sudáfrica en medio del conflicto nos legó el elemento de la *consciencia* que cada actor en la problemática fue asumiendo. Los blancos estaban convencidos de que su proceder era correcto y defendían el *statu quo* para mantener su preeminencia en todos los aspectos de la vida social. Los negros reaccionaban protestando, incluso luchando, por un cambio de situación. Esta consciencia produjo liderazgos vitales para el proceso entre los negros, pero también entre los blancos, especialmente entre profesionales y gente que fue percibiendo un “mal olor” en las políticas del *apartheid*. El Acuerdo Nacional de Paz, eje sobre el cual se concretiza la urgente necesidad de paz en Sudáfrica, fue el instrumento que caló hasta el fondo de una reestructuración que clamaba entre muchos sectores sociales del país.

Las direcciones de los dos partidos más poderosos, el Congreso Nacional Africano (ANC) y el gobernante partido nacional (PN), fueron las más influyentes tanto en impulsar y dar forma al proceso de negociación como en la decisión de sus resultados sustantivos. Durante el largo proceso de transición, estos dos partidos, así como los demás, mantuvieron una batería de conversaciones bilaterales, para resolver diferencias o hacer alianzas en busca de objetivos compartidos. No obstante, el proceso fundamental se organizó en torno a foros de negociación multipartidistas formalmente constituidos, que permitieron que los grupos políticos más pequeños pudieran exponer sus puntos de vista y contribuir a dar forma a los acuerdos. Con el tiempo, estos foros fueron abriéndose a los medios de comunicación, quedando así expuestos al escrutinio de la ciudadanía (Barnes & De Klerk, 2004, p. 31–32).

En este tipo de dinámicas el efecto de lo público lo pone la misma *consciencia* que surge en los distintos sectores que conforman el entramado social y que sienten la urgente necesidad de asumir un rol proactivo en la búsqueda de salidas a la situación. Es una especie de efecto cascada que se va suscitando en la realidad misma, con liderazgos definidos y reconocidos públicamente. De esta forma, el efecto de la causa sobre el acto trae como resultado un “compromiso de responsabilidad” que asumen grupalmente, en una visión primera, e individualmente, en un segundo nivel. La responsabilidad que asumieron los grupos fue permeando un nivel micro de formaciones sociales que, a la postre, facilitarían el acceso individual de la víctima y el victimario a la dinámica en sí de la reconciliación social.

De tal manera que la toma de conciencia objetivada en el compromiso responsable se gestiona desde el *poder* o capacidad de respuesta. Este *poder* es capacidad, pero también es gestión política del compromiso adquirido en el contexto social. Este poder se ejerce en común desde la representatividad y la participación en las decisiones de interés general. En términos de Innerarity es “tomar en consideración las consecuencias de las propias decisiones y omisiones” (2009, p. 38). En Sudáfrica, el mismo proceso condujo a la dinámica participativa y se objetivó en el Acuerdo Nacional de Paz, la Constitución Interina, la Comisión de Verdad y Reconciliación y, finalmente, con la Constitución de 1996. Todo dentro de un marco de recuperación de la democracia avalado por las elecciones presidenciales de 1994 en las que el líder Nelson Mandela fue elegido presidente de la nueva etapa de transformación socio-política.

Esta capacidad y ejercicio de poder que conllevó *respuestas* en el ejercicio de responsabilidad social condujo a un proceso gradual de búsqueda de la verdad y práctica de la amnistía, con miras a la reconstrucción de la sociedad. No fue un horizonte de reconciliación unido a un planteamiento de algún partido político o amasado con una legislatura de Presidencia, sino que fue la puesta en escena de un tiempo hacia el cual tendía la nueva Sudáfrica. La respuesta fue el proceso de reconciliación social —*Ubuntu*— jalonado por un deseo de *nation building* en el que todos se sintieron convocados responsablemente. La utilización de palabras que congregaban el sentido social (por ejemplo, la palabra de los xhosa *Ubuntu*, el concepto de *construir nación*, la propuesta de *unidad nacional*, entre otros). A su vez, la recurrencia de Mandela a la Copa del Mundo de rugby, buscando la unión de Sudáfrica en torno a un deporte que había sido catalogado como exclusivo de los blancos o de la raza dominante y, la dinámica creada por los partidos políticos, las iglesias y el mismo gobierno de abrir una nueva oportunidad al reencuentro en la verdad pública, son algunas respuestas del compromiso responsable al que lanzó la realidad de conflicto y violencia al pueblo sudafricano y, desde allí, a las pinceladas de lo que podría referirse como una política de reconciliación social.

Hay bienes comunes que sólo se pueden asegurar articulando medidas inmediatas con el largo plazo: el medio ambiente, la paz, la estabilidad institucional, la sostenibilidad en general... Su gestión requiere cambios a nivel individual, colectivo e institucional para incluir en nuestras consideraciones y prácticas, una perspectiva temporal más amplia [...] Nuestro mayor desafío consiste en volver a pensar y articular en la práctica la relación entre acción, conocimiento y responsabilidad (Innerarity, 2009, pp. 41–43).

4. COLOMBIA:

¿HACIA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE RECONCILIACIÓN SOCIAL?

Yo soy el enemigo que tú asesinaste, mi amigo

Nir Eisikovits

Dentro de los análisis de conflicto y violencia, junto al de procesos de paz, el caso de Colombia tiene unas particularidades que, aunque puede ser asumido para estudios dentro de la temática, lo ubican dentro de un régimen especial para analizar. Es un conflicto que lleva cerca de 65 años, con diversos matices que se mezclan entre guerra de guerrillas de izquierda, grupos al margen de la ley de tendencia de extrema derecha, narcotráfico y, en medio de todo, incursiones de estos grupos en cada matiz. Por ejemplo, hallamos grupos guerrilleros en el negocio del narcotráfico, grupos de autodefensa y paramilitares¹⁰² dentro de la misma dinámica del tráfico de drogas e, incluso, negocio ilegal de armamento militar. A lo anterior se suma el involucramiento de miembros de las Fuerzas Militares y Fuerzas Armadas dentro de la dinámica ilegal —en especial participando en organizaciones de tendencia de autodefensas y paramilitares— y personajes de la vida política del país inmersos en la participación en cualquiera de las dos posiciones, es lo que públicamente llegó a llamarse “la parapolítica” y “la farcopolítica”.

102. Para Marcos Palacios (2012) “los paramilitares han sido los grupos más elusivos del conflicto armado colombiano. Nacen y pelechan en los intersticios del narcotráfico, el latifundismo, el clientelismo y las prácticas de contrainsurgencia. *Prima facie* aparecen con el carácter reactivo de fuerzas supletorias del Estado ante la acción guerrillera. A partir de ahí fueron insertándose en los entramados de la política local, regional, nacional. Comenzó durante la violencia en figuras como la “contra chusma” o los ‘pájaros’; luego, en 1965, tuvo estatus legal, restringido a los ámbitos locales. Pero, en el desbarajuste social que produjo el narcotráfico en la década de 1980, hubo cruces de alianzas, tácitas o expresas, entre políticos clientelistas, ganaderos establecidos y nuevos terratenientes de origen narcotraficante que podían contar con el apoyo de oficiales del ejército, policía o el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad)” (Palacios, 2012, p. 170).

La misma particularidad del conflicto colombiano ha dado lugar a diferentes corrientes académicas de investigación y estudio que, sin distanciarse mucho, marcan pautas de análisis diferenciado. Podríamos sintetizar estas maneras de abordar el conflicto en Colombia desde tres perspectivas:

- El conflicto colombiano como fenómeno de violencia. Es la llamada corriente de los violentólogos.¹⁰³
- El conflicto colombiano dentro de dinámicas de procesos de paz. Son los llamados “pazólogos”.¹⁰⁴
- Análisis del caso colombiano en perspectiva de conflicto armado. Los que podemos llamar “conflictólogos”.¹⁰⁵

En Colombia la reconciliación social no se ha concretado, la realidad no ha ido más allá de procesos de diálogo, negociación y firma de acuerdos con los diferentes grupos a lo largo de esta historia de 65 años de enfrentamientos. En términos generales, ha quedado en textos de propuestas de paz, leyes y decretos. Sin embargo, esta investigación asume el caso colombiano, junto al sudafricano, salvadoreño y nicaragüense, para fundamentar la urgente necesidad de establecer una *política pública de reconciliación social* y, de esta manera, consolidar procesos de reconstrucción social después de largos períodos de conflicto y violencia, tal como lo hemos venido afirmando a lo largo del presente texto.

103. Esta corriente de pensamiento surgió a finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa. Surgieron en medio de las ciencias sociales y buscaron dar respuesta al fenómeno de la violencia como eje sobre el cual se podría leer el conflicto en Colombia. Este grupo de intelectuales se concentraron en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia –IEPRI–. Entre estos tenemos a Guzmán, G.; Umaña Luna, E. y Fals Borda, E. (1962). *La violencia en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional. Oquist, P. (1978). *Violencia, conflicto y política en Colombia*. Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos; Pécaut, D. (1987) *Colombia. Orden y violencia: 1930 – 1954*. Bogotá: CEREC – Siglo XXI. 2 Vols.; Pécaut, D. (2001). *Guerra contra la sociedad*. Bogotá: Planeta.

104. Más allá del análisis de la violencia y sus efectos, un grupo de académicos ha centrado su atención en contemplar los procesos de paz como un mecanismo apto para analizar la realidad de Colombia, en sus muchos intentos de buscar la paz, en perspectiva comparada o simplemente en sus mismas dinámicas de acuerdo a los gobiernos implicados y a los grupos dispuestos para ello. Inclusive, algunos han optado por centrar su atención en algunos de los elementos que configuran el proceso, por ejemplo, el fenómeno de las autodefensas y los paramilitares. Entre estos tenemos a García-Durán, M. (2009). De la insurgencia a la democracia. Estudios de caso. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular – Cinep; Bouvier, V. (2009). *Colombia: building peace in a time of war*. Washington: United States Institute of Peace; Romero, M. (2003). Paramilitares y Autodefensas – 1982–2003. Bogotá: Planeta; Duncan, G. (2006). *Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Bogotá: Planeta.

105. En esta perspectiva de lectura del caso de Colombia podemos ubicar a los académicos y analistas que van más allá de la corriente de los violentólogos y perciben la realidad colombiana como un proceso de conflicto armado, con sus particularidades. Encontramos en esta línea de trabajo a Pizarro-Leongómez, E. (2004). *Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*. Bogotá: Norm; Leal Buitrago, F. (edit.) (2006). *En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI*. Bogotá: Norma.

Colombia “no solo es uno de los lugares del mundo con uno de los conflictos guerrilleros de más larga duración, sino que también es un país donde se han explorado procesos de paz con la insurgencia armada por más de 25 años” (Patiño, Grabe y García-Durán, 2009, p. 43). La complejidad de la misma realidad colombiana conlleva la diversidad de análisis a que ha dado lugar este conflicto y que nos lanza a interesarnos en plantearnos un acercamiento a la política pública. En términos de Virginia Bouvier, el caso de Colombia suscita palabras de referencia como “guerra, violencia, drogas, secuestro, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), armas, paramilitares, niños soldados, corrupción, explotación sexual y trata de blancas. Aunque también se encuentran otras expresiones como café, música, menos relacionadas con el conflicto” (2009, p. 3).

Según las circunstancias y visiones gubernamentales, el conflicto en Colombia ha buscado salida en los diferentes encuentros entre los grupos guerrilleros (cada uno por su lado) y los gobiernos de Belisario Betancur (1982 – 1986), Virgilio Barco Vargas (1986 – 1990), César Gaviria (1990 – 1994) y Andrés Pastrana (1998 – 2002), sintetiza Marc Chernick (Bouvier, ed., 2009, p. 73–74). Betancur y Pastrana desarrollaron procesos de paz basados en acuerdos generales, pero fracasaron. Barco y Gaviria gestionaron pequeños acercamientos, lograron acuerdos con algunos de los pequeños grupos de guerrillas, incluyendo el Movimiento 19 de Abril (M-19), Quintín Lame (movimiento indígena de guerrilla) y una mayoritaria facción del Ejército Popular de Liberación (EPL). En estos procesos la desmovilización estuvo acompañada por amnistía.

En la última década, 2002 a 2010, el conflicto y la violencia ha buscado salidas alternativas bajo el gobierno de Álvaro Uribe, quien centró su atención en la oferta del programa de desmovilización, desarme y reinserción a la vida civil a los grupos paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–), dentro de un marco legal llamado “Ley de Justicia y Paz” (Ley 975 de 2005, para el ordenamiento jurídico colombiano) y algunas conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional –ELN–, en La Habana y Caracas, que no fueron más allá del llamado “Acuerdo base del proceso de diálogo Gobierno Nacional – ELN” (AIPAZCOMUN, 2008).

Sin embargo, los intentos de llegar a la anhelada paz no han sido los mecanismos más acertados para resolver el problema de conflicto y violencia en Colombia. A su vez, los casos de Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua también presentan resurgimientos de escalas de violencia, como dando a entender que si no se establecen mecanismos que toquen las causas estructurales de lo conflictivo y lo violento, las salidas alternativas no irán más allá de acuerdos de cese de hostilidades. En este sentido, Carlo Nasi afirma que “difícilmente puede esperarse que los

procesos de paz produzcan transformaciones económicas significativas. Al cabo de conflictos prolongados y destructivos, las facciones armadas no pueden volver a un país próspero e igualitario en corto plazo, simplemente en firmar un acuerdo de paz” (2007, p. 215).

Para el interés de esta investigación, el conflicto en Colombia puede ser leído desde los elementos de análisis que venimos trabajando y desde donde hemos abordado los casos de Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua. Volviendo a la diferencia contextual y circunstancial de los casos que hemos asumido en la presente investigación, recordamos que Colombia no ha finalizado su largo período de enfrentamiento, marcado por quiebres estructurales en materia de justicia social,¹⁰⁶ equidad¹⁰⁷ y corrupción,¹⁰⁸ entre otros aspectos. Nuevamente, traemos a colación estos elementos:

- Procesualidad – Tiempos
- Instrumentos para la efectividad del proceso: verdad, reparación, restitución, memoria histórica, contexto hacia el perdón
- Instrumentos de sentido o éticos
- Marco Institucional: Justicia transicional (derechos y deberes); creación y promoción de la institucionalidad y definición y aplicación de una política pública.

106. Para acercarnos a estos desniveles en el contexto de la realidad colombiana, el gobierno cuenta con el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), que es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Este organismo informó que en materia de necesidades básicas insatisfechas (vivienda, servicios públicos básicos, espacio básico doméstico, asistencia escolar y dependencia económica) en el año 2005 un porcentaje de población colombiana no contaba con estos “mínimos humanos”. Tal es el caso de 10,4% que no tenía vivienda adecuada, 7,4% no contaba con servicios públicos básicos, 11,1% de los hogares vivía en hacinamiento. El 10,6% “sobrevivía en la miseria al no contar con estas necesidades básicas. (DANE, s.f.)

107. Para justificar nuestra afirmación del contexto de injusticia social e inequidad, las estadísticas del DANE en materia de pobreza. Para el año 2009, el porcentaje de personas en situación de pobreza en el país fue del 45,5% (Una población total de 43.705.507 en el año 2009). En centros urbanos fue de 39,6% y en zonas rurales de 64,3%. En pobreza extrema se encontraba un porcentaje de población del 16,4% (en los centros urbanos se encontró un índice de población del 12,4% y en las zonas rurales de 29,1%), llegando a ser catalogadas estas personas en situación de “indigencia”. En el año 2010 el porcentaje nacional de pobreza fue del 44,2% (38,6% en zonas urbanas y 61,8 en rural). En pobreza extrema estaba el 14,7 de la población nacional (11,2% en lo urbano y 26,2% en lo rural) (DANE, s.f.).

108. El informe de Transparencia Internacional para el año 2010 catalogó a Colombia en el puesto 78, entre 178 países, con un promedio de 3,5% dentro de la escala de corrupción. En esa ocasión se ubicó en esa posición junto a China, Grecia, Lesoto, Perú, Serbia y Tailandia. El año anterior, 2009, estuvo ubicada en el puesto 75, con un porcentaje de 3,7%. (Transparencia Internacional, s.f.). Los resultados del año 2010 dieron origen a un artículo de prensa online de la entonces directora de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, quien señalaba en ese texto algunas condiciones estructurales del Estado colombiano, del sistema y del ejercicio político que se constituían en caldo de cultivo de la corrupción: concentración creciente del poder ejecutivo y las debilidades del sistema de pesos y contrapesos, clientelismo, impunidad, falta de transparencia en la financiación de la política, la “cultura del atajo” y del “todo vale”, fallas en el diseño de la institucionalidad estatal, entre otros: Ungar, E. (2010). La Corrupción en Colombia. En: *razonpublica.com*. Economía y sociedad, noviembre 1.

4.1. La procesualidad de un largo conflicto: temporalidad hacia la reconciliación social

Como hemos señalado con anterioridad, la reconciliación social contiene el elemento de lo procesual—lo temporal como un marco de referencia que se puede concretar en las tres medidas en que el ser humano divide el tiempo: corto, mediano y largo plazo. Pero, al abordar un conflicto de tanto alcance temporal como el colombiano, sin que exista un real acercamiento a la reconciliación, nos aparece en el trasfondo de nuestra investigación la dimensión de un pasado y un presente conflictivos, junto a una visión de futuro que podría expresarse en la concreción de la política pública de reconciliación social.

En perspectiva del tiempo, Colombia ha buscado salidas alternativas al conflicto y a la violencia desde un marco de referencia centrado en la paz, más no en la reconstrucción social. Aún más, esta búsqueda de la paz ha colocado su énfasis en diálogos, negociaciones y firmas de acuerdos de cese de hostilidades, desmovilización, amnistías y reintegración de los combatientes a la vida civil, pero no ha dado un marco general de solución a la problemática generalizada de la violencia. “No es posible equiparar los procesos de construcción de paz con los acuerdos de las negociaciones de paz de conflictos armados. Bajo este entendido, al abordar el conflicto colombiano, se considera que siendo muy importante su solución negociada, por estar estrechamente vinculada a las posibilidades de la paz en Colombia; un eventual acuerdo de paz no sería suficiente por sí solo para materializar o construir paz en este país” (Hernández, 2012, p. 39).¹⁰⁹

En este contexto, el elemento de desarrollo histórico del caso colombiano implica abordar la lectura desde la perspectiva de la violencia como fenómeno manifiesto del conflicto latente que origina el desborde de la acción cruenta que lleva al enfrentamiento entre distintos actores. Es una combinación entre lo estructural y lo histórico para marcar lo temporal de una búsqueda de la paz que, en nuestros términos, no ha avanzado efectivamente hacia la reconciliación social.

En el año 2002 el Centro de Investigación y Educación Popular —CINEP— presentó los resultados de una investigación desarrollada por el equipo académico llamado “Conflicto social y violencia” en un texto titulado “Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado”. Por el interés de esta investigación, citamos literalmente una parte en la que nos podemos poner en perspectiva de reafirmar la urgente necesidad de plantearnos la política pública de reconciliación social:

109. Esta afirmación puede comprobarse desde los análisis de Johan Galtung (1998), Vicenc Fisas (2004), González Posso, C., Herbolzheimer, K. & Montaña Mestizo, T. (eds.) (2010). *La vía ciudadana para construir la paz*. Bogotá: Espacio Creativo.

El conjunto de violencias de Colombia tiene que ver con varios trasfondos en el largo plazo que deben confrontarse con procesos sociales desencadenados a partir de los años sesenta, hasta desembocar la coyuntura de corto plazo. Así, en el largo plazo habría que tener en cuenta que:

- a) La manera como se pobló el país y se organizó la estructura económica y social, desde los tiempos de la colonia española, creó las bases de un problema agrario que hasta el día de hoy permanece sin solución.
- b) La permanencia de este problema campesino obedece en buena parte a la manera como se construyó el Estado colombiano, a partir de la configuración política de la colonia, y la manera como fracasaron, al menos en parte, los diversos intentos de crear un Estado de carácter moderno. Esta incapacidad se expresa en la dificultad para construir estructuras políticas que permitan expresar los cambios recientes de la sociedad colombiana y los problemas sempiternos del mundo campesino, sobre todo en las zonas de colonización marginal. La articulación gradual y paulatina de nuevos territorios y poblaciones al conjunto de la vida nacional, que ha sido el resultado de un proceso constante de colonización a lo largo de los siglos, ha producido una diferenciación de la relación de los aparatos estatales con las distintas regiones. Esta relación varía tanto en el espacio como en el tiempo y se mueve con diferentes lógicas políticas, según el grado en que la presencia de los aparatos estatales del orden nacional sea mediada o no por la clase política local y regional, ligada al bipartidismo (González, Bolívar & Vázquez, 2002, p. 43–44).

No obstante, esta configuración de raíces estructurales e históricas en el largo plazo no puede desdibujar o enrarecer el impacto de los acontecimientos a mediano plazo, insiste la investigación que citamos del CINEP. Entre este otro grupo de factores señalan: consecuencias de la violencia en la década de los cincuenta, el régimen político del Frente Nacional en el que se impidió la expresión política de conflictos entre grupos sociales, puesto que el control estaba en los dos partidos tradicionales (liberales y conservadores); la rápida urbanización de la población colombiana y la migración por épocas de los campesinos a las ciudades, que sobrepasaron la capacidad del Estado para prestar los servicios públicos adecuados, y la imposibilidad de la industria nacional para absorber la mano de obra que llegaba. A lo anterior se suma la rápida influencia de nuevas corrientes de pensamiento durante la década de los sesenta, lo que llevó a un secularismo inminente y rápido en las clases sociales media y alta, al aumento de la cobertura educativa, al surgimiento de nuevas clases sociales medias, a la transformación del papel de la mujer en la sociedad y las referencias culturales que tenía el país para canalizar y dar sentido a los procesos sociales (Estados Unidos y el bloque socialista).

Finalmente, dentro de este esbozo de lo temporal, el surgimiento y la rápida injerencia del narcotráfico dentro del maremágnum de elementos sociales condicionaron la economía y la política del país a una dinámica de búsqueda del llamado “dinero fácil”, para solventar carencias vitales (especialmente entre los estratos sociales más bajos), pero también para escalar a mejores niveles económicos (comienzan a aparecer nuevos líderes en la clase media y algunos de

la clase alta para consolidar poder). Esta gama de condicionamientos, trajeron como resultado la transformación de los grupos guerrilleros al plantear sus estrategias en nuevos escenarios de control de territorio y negocio ilícito de drogas, el surgimiento de los grupos de paramilitares y de autodefensas de derecha que, junto a la deslegitimación del régimen político (González, Bolívar & Vásquez, 2002) nos deja entrever la complejidad del conflicto colombiano.

Más allá de los nombres con que más se conoce el caso de Colombia, es decir, FARC, ELN, EPL, paramilitares, AUC, Pablo Escobar (Narcotráfico) y, últimamente desde el 11 de septiembre de 2001, el término “terroristas” dio paso a la denominación de “narcoterroristas”,¹¹⁰ el conflicto y la violencia colombiana es un entramado de elementos que en el tiempo se ha ido configurando en insumos para un modelo de búsqueda alternativa que no sobrepasa los aportes de los procesos de paz o, en su defecto, se limita a diálogos entre actores y gobierno, marcando el sello y la firma de acuerdos, pero la reconstrucción social de fondo no se ha podido concretar.

La realidad del conflicto en Colombia ha ido más allá de los procesos de diálogos y firma, junto a acuerdos entre guerrillas y gobierno o, incluso, entre paramilitares y gobierno. Los intentos continúan y los análisis no se detienen para intentar dar respuestas o buscar salidas alternativas a un cúmulo de años en los que solo la destrucción ha primado. Las recientes investigaciones de ODECOFI¹¹¹ nos permiten acercarnos a una propuesta analítica que en el sentido de nuestra investigación es pertinente. En su último libro, el investigador Fernán González González (2014) nos brinda la posibilidad de acercarnos a esta visión de ODECOFI. Concluyen en sus investigaciones que los fenómenos violentos tienen una explicación interactiva y multiescalar, actuales y anteriores, mediante la interrelación entre factores estructurales y subjetivos (González, 2014, p. 27):

Los elementos estructurales serían:

- a. La configuración social de las regiones, su poblamiento y cohesión interna, ligados a un programa agrario nunca resuelto;
- b. La integración territorial y política de las regiones y sus pobladores mediante el sistema político bipartidista;
- c. Las tensiones y contradicciones sociales que se derivan de los dos procesos anteriores, frente a la incapacidad del régimen para tramitarlas adecuadamente.

Los factores subjetivos serían:

- a. Las interpretaciones que personas y grupos sociales hacen de esas tensiones,
- b. Sus valoraciones de las mismas tiene que ver con sus hábitos de pensamiento,
- c. Sus preconcepciones y marcos ideológicos, que finalmente arrojan opciones y decisiones voluntarias frente a la situación así diagnosticada (González, 2014, p. 27).

110. Expresión para identificar a los grupos al margen de la ley que se encontraban dentro de las esferas de la guerrilla y que mezclaban las acciones violentas con el narcotráfico.

111. Observatorio para el Desarrollo, la Convivencia y el Fortalecimiento Institucional (s.f.)

En este contexto, cuando nos propusimos tener presente el método *process traning* que citamos en nuestra introducción, lo hacíamos pensando en buscar un instrumento que nos permitiera analizar este tipo de fenómenos conflictivos y violentos que hemos estado trayendo a colación a lo largo de este texto. Cada uno de los casos que trabajamos conlleva una serie de elementos de fondo que originan, sostienen la evolución o involución de la problemática y, por ende, abren la perspectiva de salida. Así las cosas, una política pública que ofrezca herramientas para la reconstrucción social, después de largos períodos de fragmentación social, no puede ser diseñada ni implementada como cualquier otra que busca satisfacer necesidades o demandas ciudadanas del común. Lo que está en juego en este tipo de iniciativas es la reconstrucción de lo público que contiene los ejes de la convivencia y la coexistencia, factores desde donde tiene sentido la política.

No en vano el investigador Marcos Palacios (2012) define estos intentos de búsqueda alternativa al conflicto y la violencia en Colombia como:

[...] las políticas de pacificación de todos los gobiernos colombianos de los últimos 60 años muestran un límite claro: no consiguen ajustarse al ideal del Estado moderno o Leviatán. A partir de 1985 la lucha militar no se libró fundamentalmente entre guerrillas y fuerza pública, sino entre guerrillas, narcotraficantes y paramilitares en torno a territorios que se fueron haciendo cada vez más fluidos o inestables para quienes suponían tener un control. Es decir, que el cuadro de las conversaciones de paz que se daba entre guerrillas y Estado no reproducía puntualmente lo que ocurría en el ‘campo de batalla’ (Palacios, 2012, p. 137).

4.1.1. Tiempos marcados por dinámicas violentas y procesos hacia la paz

El caso colombiano está marcado por las diferentes corrientes de investigación en materia de conflicto y violencia en Colombia para hacer referencia a los llamados procesos de paz que diversos gobiernos han motivado y gestionado para acabar con la situación en este país. Marc W. Chernick (1996) expresó en el seminario sobre procesos de negociación y paz en la Universidad de los Andes (Bogotá, D.C.) que en algunas de estas búsquedas alternativas desde el gobierno de Belisario Betancur (1982 – 1986) hasta ese momento de su ponencia (época del gobierno de Ernesto Samper, 1994 – 1998), el telón de fondo no ha sido negociar una solución al conflicto armado, sino legitimar la Estado frente a la deslegitimación de la guerrilla (p. 5).

Aunque la visión se perciba bastante corta en materia de búsqueda de la paz, los logros han estado más en acuerdos parciales en materia de cese de hostilidades, garantías para que los miembros de los grupos al margen de la ley vuelvan a la vida civil y definiciones en asuntos de amnistías o indultos, según el caso. Por ejemplo, comenta Chernick en el mismo texto citado, el

proceso con el entonces presidente Betancur reconoció la oposición armada como actor político y se reconoció el diálogo como elemento fundamental para buscar alternativas, a lo que se sumó que Colombia (como otros países en la región) necesitaba una redefinición democrática. Posteriormente, el gobierno de Virgilio Barco (1986 – 1990) hizo una evaluación del anterior proceso y se definió asumir el tema de la búsqueda la paz a través de la creación de la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación de la Presidencia, con miras a un compromiso más sólido con la problemática. La negociación se centró en temas específicos como el desarme y la reincorporación de los futuros excombatientes a la vida política.¹¹²

La década de los ochenta marca una temporalidad que vale la pena mencionar someramente para abordar nuestro centro de atención en los años 2005 a 2010. Dos gobiernos (Betancur: 1982 – 1986 y Barco: 1986 – 1990) dan la pauta. Betancur les brindó el estatus político que la guerrilla estaba buscando y ofreció espacios para el diálogo. Sin embargo, la fuerza paramilitar creció y el narcotráfico hizo su ascenso fuerte en la sociedad colombiana cooptando desde los sectores populares para armar sus “ejércitos propios”, pasando por todo tipo de personas interesadas en el negocio ilícito de las drogas —en todos los niveles: desde el cultivo, pasando por la producción hasta la distribución y comercialización, incluso llegando a consolidar una especie de élite que surgió con un estatus de vida socio-económico bastante acomodado, fruto del negocio—.

Esta década no ofrece un conflicto armado de solo carácter político, tal como lo había señalada el presidente Betancur, sino que torna matices mezclados con narcotráfico, involucramiento de sectores políticos, económicos, deportivos y hasta militares, en todo el entramado al que llegó la situación en Colombia desde comienzos de los ochenta. En 1984 asesinan al entonces Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, detonando una serie de factores diversos en los que había caído la violencia en Colombia. La guerra abrasó el territorio nacional en materia insurgente en la zona rural, junto al cultivo y producción de drogas ilícitas, pero también abarcó las ciudades con la lucha entre carteles del narcotráfico y, por ende, el Estado defendiéndose, pero también luchando contra esta fuerza.

Entre 1986 y 1990 Barco busca la continuidad en política de paz, sobre todo con la insurgencia. El punto nodal lo puso en la temática de la rehabilitación, normalización y reconciliación, pero en perspectiva de una organización creada para que trabajara la temática. Mas el incremento de las acciones del narcotráfico abría nuevas perspectivas de la violencia en Colombia y el tema de los procesos de diálogo con las guerrillas cesó hasta 1989, después de una serie

112. Para apoyar esta temática este gobierno propuso el Plan Nacional de Rehabilitación y el establecimiento de Consejos municipales y departamentales de rehabilitación para fomentar la participación ciudadana.

de acercamientos que dieron como resultado la firma del acuerdo con el grupo M-19, liderado por Carlos Pizarro, y con los grupos Quintín Lame y un porcentaje del EPL. Pero, reiteramos, no fue un proceso de paz integral ni mucho menos un acercamiento a la reconstrucción social, simplemente fueron acuerdos centrados en intereses por parte del Estado para consolidarse en su legitimidad al frente de la deslegitimidad de la guerrilla.

El final de la década los ochenta estuvo marcado por un vaivén de procesos en materia conflictiva en Colombia que complejizan el análisis del caso. El narcotráfico tomó más fuerza con el negocio y, por ende, con lo que conllevó en materia de violencia. El asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento (Partido Liberal) en 1989 fue un detonante de cómo este país no solo enfrentaba una lucha insurgente desde la década de los cincuenta, sino que la misma fragmentación social de raíz ya lanzaba a la sociedad colombiana a una división entre los ataques de la insurgencia, el involucramiento de muchos sectores sociales en la actividad de las drogas y el ascenso de los paramilitares como esa opción que nació como posibilidad de “ejércitos particulares” para defenderse de la guerrilla y de nuevos actores en el narcotráfico.

Lo procesual/temporal en el caso de Colombia demanda un acercamiento analítico concienzudo cuando pensamos en ir hacia una política pública en materia de reconstrucción social. Lo que nos atrevemos llamar paños de agua tibia, es decir, diálogos y negociaciones con miras a la firma de acuerdos de paz, nos brinda la herramienta de reflexión, siguiendo el esquema que nos hemos trazado con los casos que hemos trabajado, pero no es la procesualidad o la temporalidad de una honda dinámica de resolver el fondo de la problemática. Fernán González González (2014) lo concluye en la introducción de su texto:

Explicar la violencia colombiana como un resultado no planeado previamente de manera voluntaria sino algo impremeditado, resultante de la combinación de esas contradicciones estructurales de larga duración y del ámbito nacional, con tensiones sociales, económicas y políticas de orden regional y local en el mediano y el corto plazos, interrelacionadas con interpretaciones complotistas y maniqueas de la sociedad, tanto de los sectores de izquierda como de derecha, en un contexto mundial y continental marcado inicialmente por la Guerra Fría y luego por la lucha mundial contra el terrorismo y el narcotráfico, todo lo que conduce a las opciones voluntarias de algunos actores y grupos sociales por la solución violenta de esas contradicciones y tensiones (González, 2014, pp. 27–28).

La década de los noventa afianzó el ascenso de la violencia en todos los frentes que se habían definido hasta finales de los ochenta. La desmovilización de los tres grupos guerrilleros que firmaron en 1989 no detuvo a la guerrilla de las FARC, el ELN y un pequeño grupo del EPL, que no aceptó las condiciones. Este frente insurgente asumió un rol más agresivo contra la población civil, ataques a bases militares y secuestro de personas. Los grupos paramilitares

reforzaron su ataque a todo grupo social involucrado o cercano a la guerrilla, incluso, las masacres selectivas fueron sistemáticamente medios que utilizaron para amedrentar a la población, polarizar el país y “dar una señal” de presencia activa. Por otro lado, el narcotráfico continuó reforzando su actividad con el aumento de “ejércitos personales o sicarios”, definición de “territorios de familias o capos” y acciones violentas. Lo anterior podemos mezclarlo con el paulatino involucramiento de algunos sectores de los grupos de paramilitares y guerrillas al negocio del narcotráfico por el poder que les ofrecía en materia de dominio territorial y economía.

En el año 1990 inició la presidencia César Gaviria Trujillo (finalizó su período en 1994). Ese año, en plena campaña presidencial, fueron asesinados Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo) y Carlos Pizarro Leongómez (26 de abril), candidatos de partidos políticos de izquierda que habían surgido de procesos de desmovilización anterior. En medio de la convulsionada campaña por la Presidencia y el desborde de la violencia por parte de los narcotraficantes, el panorama socio-político de Colombia se vio enmarcado por la propuesta de una reforma constitucional que dio origen a la nueva Constitución Política de 1991. Dentro de las reformas más significativas en materia de conflicto y violencia, estuvo el cambio de un Ministro de Defensa civil en vez del militar que se solía nombrar, de manera que el estamento militar comenzó a ser liderado por una persona externa al campo castrense.

En materia de diálogos hacia la paz, el año 1991 nos vuelve a ofrecer lo procesual/temporal específicamente. Se inició un nuevo ciclo de diálogos con las dos más grandes guerrillas —FARC y ELN—, pero se diferenció el tema del cese de hostilidades y la incorporación de los excombatientes a la vida civil frente al de los problemas sustanciales de fondo en la realidad del país. Desde la perspectiva de Carlo Nasi (Bouvier (edit.), 2009) se reitera que la negociación para la solución del conflicto no es suficiente para la paz (p.59). Las negociaciones del gobierno de Betancur con los grupos de guerrillas M-19, EPL y FARC concluyeron en pequeñas treguas; solo con el M-19 se llegó a hablar de un diálogo nacional para encontrar solución a la guerra en Colombia. Mas este diálogo solo subrayó la premisa de que el gobierno nacional y la sociedad debían trabajar las causas estructurales del conflicto si realmente se quería detener la guerra.

Para Nasi (2009), el gobierno de Barco impulsó la llamada “Iniciativa de paz” con dos líneas para avanzar en las negociaciones de paz: una substantiva y otra procedimental. La substantiva se refería a la introducción de acuerdos de reforma política con los grupos de guerrillas y la procedimental hacía referencia al proceso de desmovilización de las organizaciones guerrilleras. En la misma línea que Chernick, los procesos se centraron más en lo procedimental, sin mayor avance en lo substancial (p. 59–60). En este sentido, señala Nasi, en el gobierno de Gaviria la temática volverá a tocar la urgente necesidad de dialogar sobre los problemas estructurales del

conflicto en Colombia, lo que se notó desde el mismo contexto de los diálogos de Caracas (1991) y Tlaxcla (1992), cuando el gobierno abrió espacios de diálogos con los grupos guerrilleros reunidos (FARC, ELN y EPL) en la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar – CGSB.

Durante la década de 1990, tanto las FARC, bajo el mando único de Manuel Marulanda o Tirofijo, como el ELN, iniciaron una devastadora serie de ataques masivos contra bases militares, emboscadas y tomas guerrilleras; que se saldó con la muerte de cientos de militares y campesinos, a pesar de los ingentes esfuerzos del gobierno que multiplicó los recursos del sector de la defensa y reclutó a miles de nuevas tropas. Por esta época, los paramilitares también crecieron con el apoyo de cientos de desmovilizados del EPL (Morán, 2013, p. 8).

El cruce de elementos del conflicto colombiano, durante la década de los noventa, y la consecuente complejidad que conllevó, repercutió en la línea que asumió el siguiente presidente Ernesto Samper (1994 – 1998). Este nuevo gobierno liberal en Colombia reasumió el carácter político para el conflicto armado y le volvió a dar carácter de importancia al diálogo con los grupos guerrilleros. Desafortunadamente, señala Chernick, la crisis de legitimidad que tuvo que asumir el gobierno Samper con los escándalos de acercamientos al narcotráfico durante la campaña presidencial cambiaron el rumbo de los acercamientos a la guerrilla. Entre 1996 y 1998 la guerrilla de las FARC dio fuertes golpes militares a batallones del Ejército: Pastascoy, El Billar y Las Delicias, narra Nasi en su texto (Bouvier, 2009, p. 45). Con el ELN, el gobierno de Samper logró los diálogos en Río Verde (Antioquia), de donde surgió el espacio de convocar la llamada Convención Nacional, como un espacio de participación y construcción colectiva con miras a las reformas que permitieran la paz.

Esta descripción de los niveles desde donde se han asumido las búsquedas alternativas al caso colombiano, nos lleva a citar textualmente a Chernick en la conclusión que hizo a su conferencia en el año 1996, desde donde podemos corroborar el sentido de nuestra investigación en materia de búsqueda del horizonte de sentido de la reconciliación social: reconstrucción de la estructura social, económica y política a fondo.

Estoy convencido de que se puede llegar a una paz negociada en Colombia. Pero no se pueden seguir desperdiciando las oportunidades de negociación cuando se presentan. ¿Cuántas generaciones de colombianos han experimentado la guerra? Ya es tiempo de terminar con la idea de que Colombia es excepcional y de que la violencia es una característica permanente de la vida política del país. Hay que aprender tanto de las experiencias internacionales como de las experiencias colombianas en materia de negociaciones. Así, el país puede encontrar una solución definitiva al conflicto armado (Chernick, 1996, p. 8).

Al finalizar el gobierno de Samper, el país estaba bastante fraccionado en materia de seguridad. Las Fuerzas Militares y Armadas habían recibido bastantes golpes, el número de policías y militares secuestrados fue alto, mientras el paramilitarismo continuaba actuando en regiones donde tradicionalmente la guerrilla había dominado. Lo anterior condujo a que Colombia eligiera al candidato por el partido conservador Andrés Pastrana Arango para el período presidencial entre 1998 y 2002. En este cuatrienio el tema de la búsqueda de la paz estaba planteado desde la misma campaña presidencial que contuvo los siguientes puntos esenciales: disposición de la guerrilla de las FARC para reunirse con el entonces candidato Andrés Pastrana, la rápida iniciación del proceso de paz, la exigencia del despeje de los cinco municipios ubicados en el departamento del Meta y del Caquetá y el marginamiento de los grupos paramilitares de cualquier negociación (González, Bolívar & Vásquez, 2002, p. 67).

Paralelo a estas iniciativas que concluyeron con el encuentro entre el presidente electo Pastrana y el dirigente de las FARC, Manuel Marulanda, en junio de 1998, se realizó el encuentro entre sociedad civil y los miembros del ELN, en Alemania. Del encuentro entre sociedad civil y ELN salió como resultado la firma del llamado Acuerdo de Puerta del Cielo, dando continuidad a las conversaciones desarrolladas en Maguncia y en Río Verde (Antioquia) respecto al instrumento de la Convención Nacional. Sin embargo, este “caudal de iniciativas hacia la anhelada paz” estuvo acompañado de acciones de la guerrilla en materia de secuestros en masa en vías nacionales (acciones que llegaron a llamarse “pescas milagrosas” por la acción sorpresa que tenía para las víctimas al ser interceptados en cualquier momento y circunstancias, especialmente en espacios como vías nacionales o espacios de encuentro social, tal como iglesias o clubes), ataques a la infraestructura petrolera del país y enfrentamientos con las fuerzas del Estado.

4.1.2. Temporalidad marcada por los dobles mensajes (Gobierno de Andrés Pastrana. 1998 – 2002)

Las conclusiones de la investigación del grupo del CINEP, citada al inicio de este capítulo, nos brinda la oportunidad de llamar a esta fase de lo procesual/temporal en Colombia ‘dobles mensajes’, por la voluntad e inconsistencia de las partes para llegar a un acuerdo. Señalan los investigadores que hemos citado, en el texto conclusivo, que el llamado Proceso de Paz, durante el gobierno de Pastrana, tuvo su centro en la solicitud acogida por el mismo Presidente de “despejar una zona del oriente del país”, teniendo como centro la ciudad de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá. Allí las FARC asumieron el control territorial, demandando la salida de la Fuerza Pública y ubicando allí un centro de operaciones que, con el paso del tiempo, fue una ventaja estratégica desde donde ellos continuaron incursionando violentamente. Sin embargo, el aumento de los ataques de los grupos de autodefensas contra poblaciones campesinas

condujeron a que las FARC decidieran suspender unilateralmente los diálogos. Exigían avanzar en el canje de policías secuestrados por guerrilleros prisioneros, que se luchara contra los paramilitares y que se mantuviera la zona de despeje (González, Bolívar & Vásquez, 2002, p. 79).

Ilustración 9. Detalle del área de la zona de despeje



Fuente: Colombia.com, 2002

Pero este proceso hizo palpable las vicisitudes que este tipo de dinámicas puede comprender. En este caso, el actuar de los llamados grupos paramilitares en contra de la insurgencia y de la población civil condujo a reacciones de congelamiento y suspensión de diálogos, reacciones por parte de la misma guerrilla y al fortalecimiento de la llamada zona de despeje, en beneficio de la presencia de la FARC en esa región del país. Las exigencias de las FARC, como decíamos más arriba, se centraba en tres puntos: el canje de guerrilleros presos por los policías y militares secuestrados, la lucha contra el paramilitarismo y mantener la zona de despeje bajo su control (González, Bolívar & Vásquez, 2002). Para ubicar mejor las características de este proceso, junto a los tiempos, durante el gobierno Pastrana cubrimos brevemente los elementos según los grupos involucrados:

4.1.2.1 Dinámica con las FARC

La utilización de mecanismos como ataques a la población civil, centrados ahora en el secuestro en muchas circunstancias, originó un desplazamiento de lo rural a lo urbano de las acciones propiamente intempestivas de la guerrilla. “La lógica territorial hizo que la guerra entre las guerrillas, los grupos paramilitares y el Estado dejara de ser vista como algo que ocurría en las regiones periféricas, lejos de las ciudades importantes y los centros de producción económica, para pasar a ser percibida como una amenaza para el desarrollo y la vida cotidiana de todos los colombianos, incluso los ciudadanos” (González, 2014, p. 430).

La propuesta de paz con esta guerrilla conllevó la fragmentación del territorio nacional al entregárseles, por parte del gobierno Pastrana, la zona llamada “El Caguán”. Como un espacio y tiempo propicio para los diálogos, el gobierno optó por el despeje de esa región geográfica del país, afectando a una considerable población campesina que quedó bajo las directrices y desmanes de las FARC. Sumado a lo anterior, la guerrilla liderada por Marulanda presionaba el canje de policías y militares secuestrados por los llamados “presos políticos” (guerrilleros que habían sido aprehendidos por las fuerzas del Estado y estaban presos) y exigían la desaparición de los paramilitares al considerarlos “hijos del mismo Estado” y trabajaban en unión con las fuerzas militares y armadas.

Las estrategias políticas, junto a las militares y, por ende, los intereses de crear condiciones territoriales para sentar el control, son ejes sobre los cuales el proceso gobierno Pastrana–FARC avanzó. Cada parte ponía su voluntad, pero no cesaban los ataques y la expansión territorial de la guerrilla no tenía otro objetivo que el control que desde su inicio habían buscado y que ahora tenía, aunque fuera por presión y “negociación de intereses”. Citamos algunos puntos conclusivos de investigaciones del caso para dejar claro cómo esta investigación continúa corroborando que los procesos conducentes a la reconstrucción no pueden quedar enfrascados o limitados a “pactos de mutuas concesiones” sin tener en cuenta lo estructural.

- Lo que hemos denominado ‘dobles mensajes’ en esta dinámica del conflicto y la violencia en Colombia durante el gobierno de Pastrana, fue creando en todas las esferas sociales un sentimiento de desazón en medio de las altas expectativas que iba dando la posibilidad de un cese de hostilidades y apertura a nuevas experiencias conducentes a la paz. Sin embargo, las FARC hicieron pública una exigencia de “impuesto” a personas que tuvieran un capital superior a un millón de dólares, fue la llamada “ley 002”, mientras que avanzaban en los diálogos con el gobierno nacional y se daba inicio a las audiencias públicas como mecanismo de participación de las poblaciones en el proceso.
- Aumentaron las amenazas, intimidaciones y vetos contra funcionarios públicos del orden nacional, regional y local, encaminados a establecer una ausencia total de las autoridades estatales en la región (González, 2014, p. 432).
- Los hechos violentos no cesaron. “Entre esos hechos violentos se destaca la masacre de la familia Turbay Cote, perpetrada por las FARC el 30 de diciembre de 2000 en la vía que conduce de Florencia a Puerto Rico (González, 2014, p. 432).
- A lo anterior se sumó el secuestro y posterior asesinato de los indigenistas norteamericanos cometidos en marzo de 1999. Secuestraron al periodista Guillermo Cortés

en enero del año 2000. Y lideraron el paro armado cumplido en el Putumayo como rechazo al Plan Colombia (González, 2014, p. 433–434). El asesinato de los indigenistas le dio giro al papel de Estados Unidos frente al proceso de paz del gobierno Pastrana e, incluso, redujo la voluntad del mismo gobierno al respecto.

- Frente al ascenso del fenómeno de la corrupción por parte de algunos políticos de regiones en Colombia, las FARC emitieron la llamada “ley 003 o ley para castigar los funcionarios y políticos corruptos” (González, Bolívar & Vásquez, 2002). Pero no son mecanismos unificados en criterios y formas, puesto que estamos haciendo referencia a de la definición de un mismo problema por tratar, en dos perspectivas distintas. Indudablemente, las AUC lucharían contra los políticos y funcionarios de la línea de izquierda y las FARC contras los de línea de derecha.
- En el mes de abril del año 2000 las FARC lanzaron el Movimiento Bolivariano para darle fundamento popular al proceso de diálogo con el gobierno. En la mesa de negociación se continuaba trabajando con la temática en derecho internacional humanitario, cese al fuego y disminución de hostilidades, aunque los frentes que estaban en las regiones seguían presionando con ataques a poblaciones. Cabe mencionar la manera cómo buscaban la salida al Océano Pacífico desde la zona de despeje (tomas a las poblaciones de Algeciras en Huila y Roncesvalles, Villa Rica e Icononzo en Tolima).

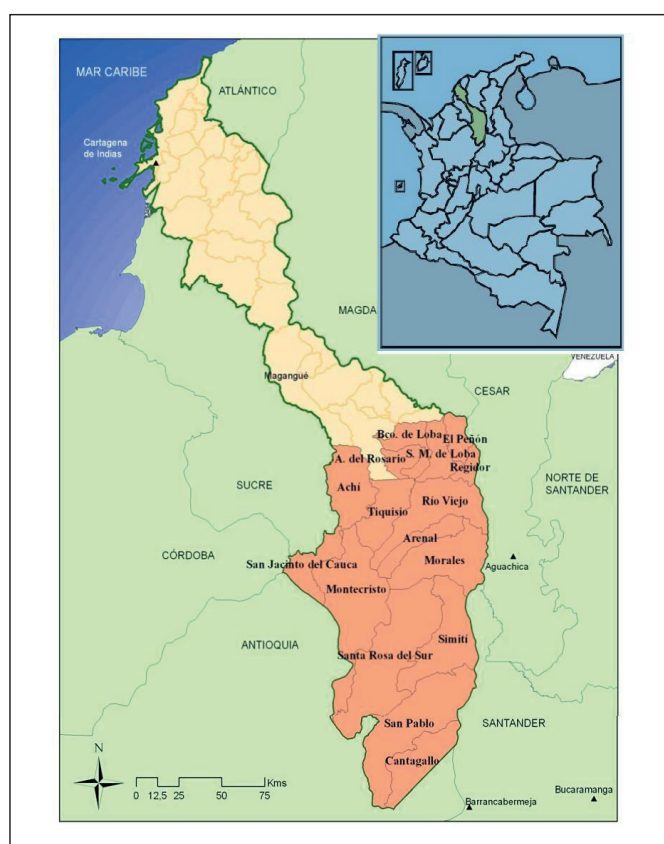
4.1.2.2. Dinámica con el ELN

El otro grupo guerrillero colombiano con bastante influencia sobre la dinámica conflictiva y violenta, el Ejército de Liberación Nacional –ELN–, manifestó intenciones de ingresar a una perspectiva de diálogo con el gobierno de Andrés Pastrana. Este grupo llegó con la propuesta de una Convención Nacional que proponían desarrollar despejando cuatro municipios del sur de Bolívar: Simití, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Morales, ya que pedían garantías de seguridad para la población al catalogar esta zona de despeje para ellos como posibilidad y necesidad, tal como mencionan González, Bolívar y Vásquez (2002) en su investigación.

En el mes de enero de 1999 el encuentro del gobierno nacional con dirigentes del ELN en Caracas (Venezuela) no trajo mayores aportes positivos para un eventual proceso. “El ELN afirmó entonces ante la opinión pública que el gobierno carecía de una estrategia de paz y de voluntad política para iniciar formalmente los diálogos con la organización guerrillera” (González, Bolívar & Vásquez, 2002). Las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC– se opusieron completamente a nivel explícito en comunicados y a nivel de acción guerrera a través de un proceso de “toma de la región del Magdalena Medio” donde este grupo había tenido alta influencia

e injerencia. En este orden de ideas, en medio de una supuesta voluntad de paz el ELN continuaba atacando municipios y llegando a acciones de masacres, como Machuca (Octubre de 1998), de secuestro, como el del avión de Avianca (abril de 1999) al que obligaron a aterrizar en zona de la serranía de San Lucas (Sur de Bolívar); el secuestro masivo de fieles en la iglesia de La María, al sur de la ciudad de Cali y el secuestro en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura (González, 2014, p. 438). Esos hechos condujeron a que el gobierno Pastrana respondiera con la suspensión de todo intento de acercamiento con el ELN.

**Ilustración 10. Sur del Departamento de Bolívar,
con respecto al departamento y al país. Municipios que comprende esta región**



Fuente: Colombia. En marcha la Segunda Caravana Internacional por la Vida y Contra el Despojo en el Sur de Bolívar (NOTIAGEN, 2011).

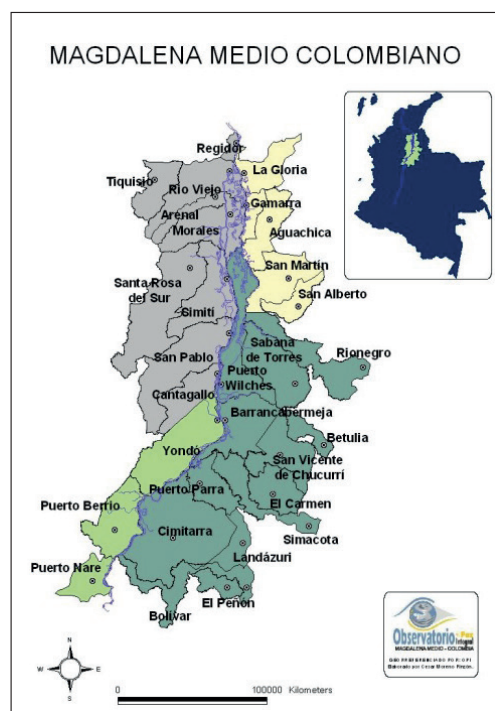
El proceso con el ELN avanzaba con la búsqueda de la llamada “zona de despeje en el Sur de Bolívar”, buscando mediación en el Congreso de la República, centrando las conversaciones en una comisión de facilitación y las reuniones entre el gobierno nacional, el ELN, los dirigentes de la marcha campesina por el despeje de la zona y las autoridades regionales y locales. En el año se llevó a cabo una reunión entre el gobierno, la sociedad civil y el ELN en Suiza, tratando de estructurar formalmente las conversaciones con este grupo guerrillero, abriendo la

posibilidad de definir el área para los diálogos, siempre y cuando se le consultara a las comunidades involucradas (González, Bolívar & Vásquez, 2002).

Las AUC continuaban con su ofensiva para dominar el territorio que había sido de control guerrillero y el ELN inició acciones contra la infraestructura eléctrica del país y la movilidad entre ciudades colombianas, especialmente en la vía que une a Bogotá con Medellín, donde realizaron secuestros de personas que viajaban por esa zona. A su vez, el ELN lideró procesos de marchas campesinas en el sur de Bolívar para continuar presionando la zona de despeje y la convención nacional. En medio de este choque también se suscitó un enfrentamiento entre dos grupos de región de las FARC y el ELN en el oriente antioqueño (el frente 9º de las FARC con el bloque Carlos Alirio Buitrago del ELN).

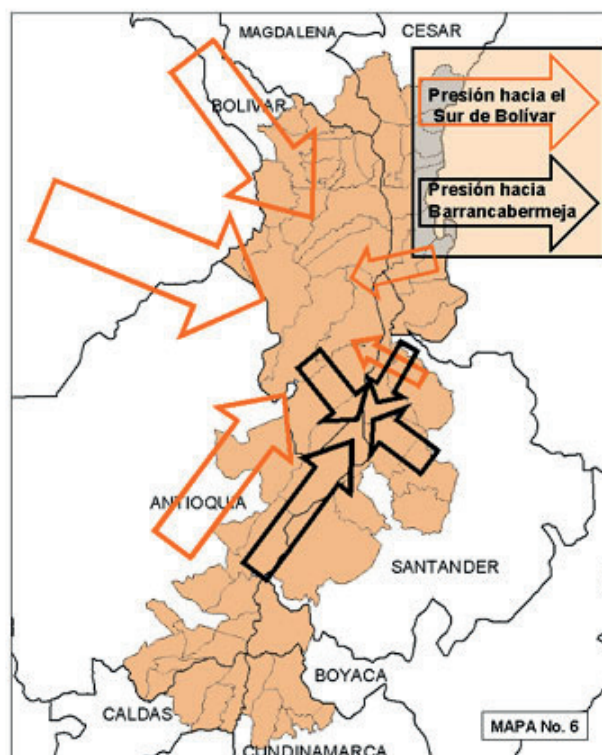
La presión paramilitar logró la “victoria que buscaban” en el intento de no despejar la zona del sur de Bolívar, pero en este año de 2001 se pudo concretar un acuerdo de transición y una tregua para la Navidad de ese año, seguido del acuerdo en Cuba, llenado de optimismo el proceso con este grupo guerrillero. En esta ocasión se reunieron representantes del gobierno, del ELN y la Comisión de Notables. Pero los avances no fueron más allá de firmas de textos que no facilitaron acuerdos claros. El 3 de junio de 2002 el presidente Pastrana rompió diálogos con el ELN ante la imposibilidad de cumplir las demandas y exigencias de ese grupo guerrillero, mientras el COCE (Comando Central) emitió un comunicado dejando explícito que ellos se mantenían dispuestos a trabajar en la salida negociada al conflicto.

Ilustración 11. Mapa del Magdalena Medio Colombiano completo



Fuente: Cartografía Magdalena Medio, 2008

Ilustración 12. Presión de las autodefensas hacia el sur de Bolívar y Barrancabermeja



Fuente: DerechosHumanos.gov, 2010

En este punto de la situación de la temporalidad de los procesos de paz que estamos caracterizando en la perspectiva de la presente investigación vale la pena traer a colación la categorización que González, Bolívar y Vásquez (2002) dan a las tensiones entre las distintas facciones involucradas en intentos de diálogos y enfrentamientos, simultáneamente. Estos investigadores asumen “el paso de un juego de interacciones estratégicas a un juego de interacciones negativas”, por cuanto la manifestaciones de intenciones de sentarse a dialogar con el gobierno, por parte de los elenos, la presión de los paramilitares por obstaculizar todo intento de Convención Nacional, junto al despeje de otra zona en Colombia, y el gobierno Pastrana desarrollando diálogos con las FARC y la apertura de posibilidades para trabajar con el ELN, se entremezcló con las cruentas acciones violentas de las partes en el conflicto a finales del mes de mayo y comienzos de junio de 1999.¹¹³

113. El 29 de mayo los paramilitares cometieron masacres en el municipio de La Gabarra y varias veredas del municipio de Tibú (Norte de Santander). El 30 de mayo el ELN secuestró un grupo de personas de la iglesia de La María, en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). A mediados del mes de mayo, las AUC asesinaron al profesor Hernán Henao en predios de la Universidad de Antioquia (universidad pública colombiana), en Medellín. Así mismo, avanzaron en la “toma de la región” en el sur de Bolívar a través de masacres e intimidaciones a las poblaciones.

4.1.2.3. Dinámica con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) – Paramilitares

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de las AUC y de la sociedad civil. Por parte de las AUC amenazaron y actuaron en contra de poblaciones donde se percibía presencia o apoyo al ELN y realizaron masacres por cada red eléctrica nacional atacada por el grupo guerrillero. Por el lado de la sociedad civil del sur de Bolívar se inició el movimiento nacional por el “No despeje”. Esta serie de enfrentamientos estuvieron marcados por pérdidas materiales y humanas por cada grupo enfrentado y, obviamente, en la población civil. Las AUC cometieron en esta dinámica una de las masacres más fuertes con miras a impactar el avance de la guerrilla. En el corregimiento de El Salado,¹¹⁴ municipio del Carmen de Bolívar, en la región de los Montes de María, torturaron y degollaron 46 campesinos, abusaron sexualmente de varias mujeres y destruyeron completamente el caserío.

Las AUC continuaron su acción violenta, buscando sentar un precedente y evitar que avanzaran los procesos con la insurgencia. Secuestraron al diputado antioqueño Guillermo León Valencia, hermano de Fabio Valencia Cossio, uno de los negociadores del gobierno con la guerrilla. Para González, Bolívar y Vásquez (2002) esta era una manera de hacerle “juicio al proceso de paz”. Durante el año 2000, las AUC continuaron con la ofensiva contra el ELN ingresando violentamente a las poblaciones que estaban en la zona de la serranía de San Lucas (Sur de Bolívar). En noviembre del mismo año 2000 las AUC secuestraron a siete congresistas, sobre todo para reaccionar contra el proceso y el trámite ante el Congreso de la “ley de canje” de guerrilleros presos por policías y militares. Este acto condujo a que las FARC congelaran los diálogos.

Las autodefensas procedieron con objetivos centrales:

- Consolidar su poder de expansión territorial y control de situaciones que afectaran la población con inmersión de toda corriente o acción de izquierda.
- Para lo anterior, iniciaron un proceso de “recuperación de territorios” que estaban dominados por la guerrilla a través de masacres y acciones cruentas con alto número de víctimas.

114. En la división territorial colombiana, el corregimiento es una división del área rural del municipio, la cual incluye un núcleo de población, considerada en los planes de ordenamiento territorial, P.O.T. El artículo 117 de la Ley 136 de 1994 faculta al concejo municipal para que mediante acuerdos establezca esta división, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local. (DANE, s.f.)

- Centrar su acción violenta en zonas de injerencia guerrillera, especialmente evitando que se replicara el modelo impuesto por las FARC en la zona de despeje y cerrar por todos los medios las mismas intenciones por parte del ELN.
- Motivar el movimiento social de “No al despeje” en la región del Sur de Bolívar.
- Reaccionar efectivamente en contra del proceso de diálogo con los dos grupos guerrilleros a través de secuestros de políticos, amenazas a líderes sociales, incursiones violentas a poblaciones y asesinato sistemático de personas y poblaciones.¹¹⁵
- Contra regiones de dominio de las FARC también actuaron cruentamente. Especialmente después del ataque de las FARC al campamento central de las AUC en el Nudo del Paramillo (28 de diciembre de 1998). Las acciones de retaliación fueron en Bajo Putumayo y en los departamentos de Bolívar, Sucre y Antioquia (González, 2014, p. 436).

Ilustración 13. Mapa Regional Montes de María



Fuente: ICKE.com

115. Fernán González González (2014) señala algunas en zonas de tradición del ELN: masacres de la inspección de El Tigre, del municipio de Valle del Guamuez, el 9 de enero de 1999, y del Placer, La Dorada, Las Brisas, El Empalme y El Vergel, municipio de San Miguel (7 de noviembre de 1999) (p. 438).

4.1.2.4. Consecuencias de los “dobles mensajes”

A pesar de todo este esfuerzo, en un tiempo estipulado desde la perspectiva de las partes en los diálogos, como marcando una temporalidad desde el llamado período presidencial de cuatro años, se desconocieron las complejidades de una largo período conflictivo y violento, en el marco de un país inmerso en la injusticia, la inequidad, la desigualdad social y la segregación, entre otros factores sociales, económicos y políticos. A su vez, la misma realidad de dialogar en medio de los enfrentamientos, con las diferentes perspectivas desde las FARC, el ELN, las pequeñas facciones del EPL (Ejército Popular de Liberación) que aún actuaban y las AUC en completa oposición ideológica, económica y bélica a los eventuales diálogos, fueron poniendo en tela de juicio un proceso que no acababa de encontrar los mejores fundamentos para el llamado acuerdo de paz.

En medio de esta marea de elementos, el problema de la corrupción ha sido un punto nodal en la problemática colombiana. La cooptación del Estado por parte de los grandes caciques políticos regionales, manteniéndose en los cargos de elección popular por largas décadas y definiendo los temas neurálgicos de las entidades territoriales, condujo a una campaña contra la corrupción por parte de las AUC, obviamente usando los mecanismos violentos que suelen asumir este tipo de grupos al margen de la ley.

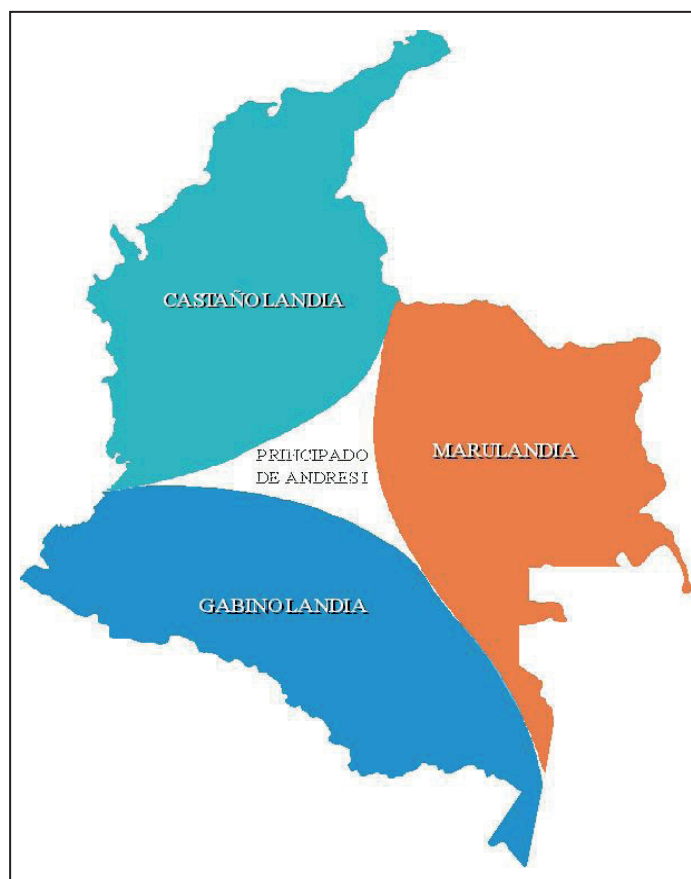
Los carteles del narcotráfico asumieron prontamente el control político local. En los municipios y gobernaciones donde mantenían un fuerte control intentaron influir en nombramientos de alcaldes y gobernadores, y la elección popular de esos cargos permitió a muchos narcotraficantes participar directamente en la vida política. Esa intervención en política es atribuible a tres causas: En primer lugar, la búsqueda de reconocimiento social y político. El segundo motivo fue la mayor presión de la fuerza pública y, en general, de la institucionalidad colombiana, así como la presión estadounidense, que comenzó a ser significativa desde mediados de la década de los ochenta sobre esta nueva clase emergente de narcotraficantes. Por último, esta incursión encontró en el creciente secuestro de las guerrillas un discurso justificador para esa época y con la conformación del MAS (Muerte a Secuestradores) hizo de este, y del discurso de derecha radical, ejes para incursionar en el mundo político (López, 2010, p. 145).

A lo anterior se suma la desazón que invadió a la población en general al sentir que el territorio del país se encontraba completamente fragmentado y que los ingentes esfuerzos por abrir caminos hacia lo alternativo al conflicto y la violencia no había dado resultado. Fernán González lo define como “un momento táctico de las FARC, que se inscribía coherentemente en los propósitos estratégicos del crecimiento militar mediante métodos de guerra nuevos, como el acercamiento gradual y el copamiento de los cascos urbanos y las ciudades intermedias, la

consolidación de sus zonas tradicionales de influencia en el sur del país y el cubrimiento de espacios que anteriormente habían estado bajo la influencia del EPL y el ELN” (González, 2014, pp. 443–444).

Otro elemento que vale la pena mencionar es la regionalización del país según el “poder de mando” en cada parte: el norte del país en manos de los paramilitares, el suroccidente bajo dominio de las FARC (llegando al noroccidente a dividirse entre facciones del EPL y las FARC), en el noriente el ELN. Esta distribución territorial puede ser definida por acciones y señalada en investigaciones, pero no podemos desconocer que la presencia de cada actor estaba generalizada en el país, simplemente se señalan estas regiones como centros desde donde se emanaba poder e influencia.

El desgaste al que llegó este proceso, marcando la temporalidad de lo que denominamos dobles mensajes en su complejidad, fue expresada en una nota de prensa (D’Artagnan, 1999, p. 5A–6A) a través de una expresión “simbólica” de cómo quedó “reestructurado el mapa de Colombia” en el marco del proceso de diálogos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. Gráficamente se puede vislumbrar cómo la zona norte de Colombia, correspondiente a los departamentos frente a la costa caribe, fue denominada “castañolandia”, parodiando la fuerte presencia de los paramilitares, liderados por Carlos Castaño. La región oriental, límites con Venezuela y Brasil, fue designada como “marulandia”, para expresar el asentamiento y centro de operaciones de las FARC. La región del sur, abarcando la zona amazónica colombiana, límites con Ecuador, Perú y Brasil, fue llamada “gabinolandia”, expresando la zona de alta injerencia del ELN. Como una ironía, en el centro colocaron el llamado “principado de Andrés I”, señalando cómo durante el gobierno de Andrés Pastrana la situación llegó a tal grado de fragmentación que solo en el centro del país hubo gobernabilidad. Fue presentado en un medio de prensa de circulación nacional de la siguiente forma:

Ilustración 14. Mapa de Colombia

Fuente: D'Artagnan, 1999

4.1.3. Tiempo de crisis del proceso

La aprobación por parte de Estados Unidos del llamado Plan Colombia¹¹⁶ para apoyar la lucha contrainsurgente y la erradicación de los cultivos ilícitos, con un aumento considerable de dinero por parte del gobierno norteamericano para Colombia fue un factor que detonó el inicio de la crisis del proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las FARC a partir de finales del año 2000 y comienzos del 2001. En este contexto, los días 8 y 9 de febrero de 2001 se reunieron nuevamente Marulanda y el presidente Andrés Pastrana en la localidad Los Pozos, dentro de la zona de distensión, para tratar los temas de intercambio de presos por secuestrados, la lucha contra los paramilitares por parte del gobierno, los resultados hasta ese momento del proceso de diálogos y negociación, y el Plan Colombia. En medio de tantas dificultades hasta el momento y de la impopularidad en la que estaba el gobierno, junto a la desconfianza que creaba a nivel general el mismo proceso, de esa reunión surgió el llamado Acuerdo de Los Pozos (Planeta Paz, s.f.), en el que definieron la creación de una comisión de personalidades nacionales para que

116. Entendido como el conjunto de disposiciones legales y fondos presupuestarios del gobierno de los Estados Unidos, ejecutado en Colombia por distintas agencias estadounidenses, pasó rápidamente de la “guerra a las drogas” al de la sinergia de la guerra unificada a narcotraficantes y terroristas metiendo a las guerrillas en la clasificación. No cabe duda de que fue definitivo en debilitar a las FARC, pues un 80% se destinó al campo militar (Palacios, 2012, p. 165).

ayudaran con orientaciones sobre estos puntos neurálgicos del proceso.

La llamada Comisión de Notables se creó el 11 de mayo de 2001 y se le entregó como tarea desarrollar los puntos del Acuerdo de Los Pozos en un plazo de 90 días. El informe lo entregaron el 27 de septiembre de 2001 con un llamado para hacer un “giro considerable en la negociación, especialmente un cese de hostilidades por seis meses”. Durante estos 90 días se firmó el llamado “Acuerdo humanitario para el intercambio de guerrillero presos por policías y militares secuestrados” —junio 2 de 2001— (Planeta Paz, s.f.), con una presencia de diez países amigos y el Reino Unido.

La ayuda del Plan Colombia, centrada en más dinero para la seguridad y defensa, junto al desmantelamiento de redes de narcotráfico, le dio un nuevo giro al proceso. Las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia recibieron todo el apoyo económico, logístico y político para enfrentar las embatidas de los grupos al margen de la ley, sobre todo frenando el avance guerrillero a las zonas urbanas del país. Por ende, la guerrilla se dedicó a centrar su acción en zonas rurales donde el Estado no podía acceder con facilidad. El escepticismo por parte de la población colombiana, las dificultades para un consenso en pro de la paz, pero al estilo como se estaba llevando en el gobierno Pastrana, dejaron una sensación generalizada de estar “en manos de la guerrilla” y no poder experimentar la seguridad que el Estado debería garantizar.

Para el investigador Marcos Palacios (2012), “en perspectiva, el Plan Colombia selló la adhesión incondicional de los gobiernos Pastrana y Uribe a las políticas de seguridad de Washington. Concebido inicialmente como un programa económico para la paz, ofreciendo alternativas viables a los cultivos campesinos de hoja de coca, terminó en un plan de guerra que busca remediar la insuficiencia fiscal y militar del Estado colombiano frente a la insurgencia guerrillera” (Palacios, 2012, p. 166). A comienzos del año 2002 las tensiones y la crisis en el proceso estaban a la orden día. El 8 de enero de ese año, el llamado “estado mayor central de las FARC” emitió un comunicado público en el que señalaban al gobierno nacional como mayor causante del fracaso de los diálogos. El 9 de enero se da por terminado el proceso de diálogos con las FARC. Con la mediación del representante de Naciones Unidas en Colombia y la visita de los países facilitadores a la zona de distensión, el 14 de enero se logró acordar la reanudación de diálogos a partir del 20 de enero. Se acordó una tregua a partir del 7 de abril y se creó un acuerdo sobre la conformación de una Comisión Internacional de Acompañamiento. El 7 de febrero Pastrana y las FARC firmaron el “Acuerdo sobre Acompañamiento Nacional e Internacional a la Mesa de Diálogo y Negociación” (Pacemaker, s.f.).

Pero los dobles mensajes volvieron a hacerse presentes con el secuestro del avión de Aires que cubría la ruta entre Neiva (Huila) y Bogotá, en el que secuestraron al senador Jorge Eduar-

do Géchem, liberando a la mayoría de pasajeros. Este acto agresivo condujo a que el presidente Pastrana suspendiera unilateral y definitivamente los diálogos con las FARC, les quitara el estatus político, reactivara las órdenes de captura contra los mimebros de ese grupo guerrillero y diera por terminadas las garantías en la zona de distensión. La lucha militar contra las FARC se intensificó, el grupo guerrillero aumentó las acciones bélicas (llegando al secuestro de los diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en su propia sede, el 11 de abril de 2002, y a secuestrar y asesinar al gobernador del departamento de Antioquia Guillermo Gaviria y a su asesor de paz, el exministro Gilberto Echeverri). Por su lado, las AUC también aumentaron su actuar bélico contra las FARC, llegando a perpetrar la masacre de Bojayá (Chocó) el 2 de mayo de 2002.

En síntesis, los protagonistas de la guerra y la paz parecen haber actuado cambiando los términos de la ecuación – que ya es lugar común – de que la guerra es política por otros medios. Lo que ahora acontece es que la política y la paz son la continuación de la guerra por otros medios. Pero, tal vez lo que parece un contrasentido desde fuera de la lógica de los sectores armados, resulte coherente y claro para la lógica de ellos, de acuerdo con la cual guerra y política no aparecen como dos momentos contradictorios de la acción sino que guardan continuidad. Y que, posiblemente es un error concebir que la política y paz son sinónimos, mientras que los actores armados las conciben como aspectos complementarios y funcionales, donde hablar de paz es parte de los fines político-militares. En efecto, la profundización de la guerra, la erosión de la legitimidad de la salida política negociada y el frustrado intento de sentar las bases de un proceso de negociación irreversible, expresan dramáticamente que, desde hace mucho tiempo, las causas estructurales del conflicto armado interno colombiano se siguen imponiendo sobre las coyunturas y las vicisitudes de corto plazo (González, Bolívar & Vásquez, 2002).

La temporalidad previa a la etapa de interés de la presente investigación (2005 – 2010), reflejada en las decisiones políticas del gobierno de Andrés Pastrana, con las consecuencias de fragmentación y polarización del país en torno a una guerrilla de las FARC que tomó ventaja frente al gobierno mismo y a la población, el congelamiento de los diálogos con la guerrilla del ELN y la fuerza que tomaron los paramilitares, ofrece un panorama de “urgente cambio” en la perspectiva gubernamental en Colombia. En este contexto, las elecciones presidenciales de 2002 llevaron al primer cargo ejecutivo a Álvaro Uribe Vélez, quien encarnó el deseo de seguridad de millones de colombianos que sentían que “ya no se podía salir ni a la esquina de sus casas”.

En el mes de agosto de 2002 comenzó el período presidencial de Uribe Vélez encarnando la “seguridad democrática” como su programa de gobierno y asumiendo un rol fuerte frente a la guerrilla en materia militarista. La ayuda de los dineros del Plan Colombia se tornaron en un fuerte apoyo para aumentar el pie de fuerza militar y policial, la militarización de las principales

ciudades del país, junto a las carreteras que conectaban cada región y que habían sido “campos de trabajo para el secuestro” por parte de los grupos guerrilleros.

4.1.4. Temporalidad en perspectiva de Seguridad Democrática:

Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006)

Con el 53% del total de los votos sufragados en las elecciones de 2002 (5.862.655 votos), Álvaro Uribe Vélez fue elegido Presidente por primera vez desde la Constitución de 1991 en primera vuelta. El eslogan que promovió durante su campaña para la presidencia encarnó la urgente necesidad de reorganizar institucionalmente el país, pues los resultados del gobierno de Andrés Pastrana (1998 – 2002) en materia de seguridad por el avance y ventajas de la guerrilla no eran los mejores: *mano firme, corazón grande*, acompañado de una fotografía de Uribe Vélez mirando a lo lejos, su mano derecha en el corazón y la bandera de Colombia ondeando al fondo.¹¹⁷

Aprovechando el liderazgo que encarnaba, mezclado con la credibilidad que había presentado a lo largo de su carrera política como Alcalde de Medellín, Concejal de la misma ciudad, Senador por el departamento de Antioquia, Gobernador de Antioquia y líder del Partido Liberal en su región, Uribe Vélez propuso un Plan Nacional de Desarrollo para ese período llamado “Hacia un Gobierno Comunitario” (DNP, s.f.). Este plan de desarrollo planteaba en cinco capítulos la consolidación de un Estado colombiano fundado en la seguridad democrática y el respeto por el derecho mismo: 1) brindar seguridad democrática, 2) impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, 3) construir equidad social, 4) incrementar la transparencia y eficiencia del Estado y 5) fomentar el crecimiento macroeconómico.

La fragmentación del territorio nacional de Colombia en zonas de despeje, el avance y ventaja de la guerrilla para “marcar territorios de acción” en detrimento de la población civil a través de secuestros y ataques, junto al tráfico de drogas ilícitas, comenzaron a “tener un freno” con la política de la seguridad democrática. El primer capítulo del plan de desarrollo de Uribe Vélez centró su atención en los aspectos de:

- Control del territorio y defensa de la soberanía nacional
- Combate al problema de las drogas ilícitas y al crimen organizado

117. Richard Eugenie hace un análisis desde el marketing político de esta imagen durante la campaña presidencial en Colombia durante el año 2002 (Eugenie, 2008, pp. 73–100).

- Fortalecimiento del servicio de justicia
- Desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto
- Protección y promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario
- Fortalecimiento de la convivencia y de los valores.
- Dimensión internacional.

En términos generales, los colombianos optaron por una persona que tuviera la firme decisión de hacer frente al flagelo del conflicto armado y la violencia que generaban los grupos guerrilleros. Esta temporalidad encarnó mecanismos de decisión política fundados en el aumento del gasto nacional en materia de defensa y seguridad para que, desde allí, se reimpulsara el desarrollo económico de Colombia que, por la misma situación de violencia, había decaído bastante ante la fuga de capital extranjero en el país y la inestabilidad que ello suscitó.¹¹⁸ “Sin seguridad no hay prosperidad, no hay sosiego y no puede haber futuro”, puntualizó el mismo texto del Plan Nacional de Desarrollo del primer gobierno de Uribe Vélez.

Eduardo Pizarro Leongómez (2004) puntualizó las características de este nuevo esquema para el manejo del conflicto colombiano señalando que “durante la administración Pastrana, bajo la cual se inició la modernización de las Fuerzas Armadas, la política de paz constituía el Plan A, mientras que una eventual confrontación militar era concebida como proyecto alternativo o Plan B. Con Uribe, la lógica se revirtió: el Plan A es el debilitamiento militar de la guerrilla y el Plan B una eventual salida negociada” (Pizarro, 2004, p. 303). En este orden de ideas, los acercamientos para diálogos con las AUC y con el ELN manifestaban el giro en materia de seguridad y defensa que Uribe le dio desde el mismo comienzo al conflicto en Colombia, pero la reacción guerrillera contra las FARC sí las puso en primera línea bélica. En síntesis, el modelo de seguridad democrática contuvo cuatro ejes centrales, desde la perspectiva de Pizarro (2004, pp. 304-308):

- La reconstrucción del Estado y de la gobernabilidad democrática. A través de la multiplicación de miembros de las Fuerzas Armadas y su presencia en todo el territorio nacional. Para reforzar este instrumento, el gobierno también se propuso la creación de la figura de “soldados campesinos”, quienes prestarían seguridad en los territorios donde ellos mismos viven. A su vez, se planteó la creación de una extensa red de

118. Según el profesor Francisco Leal Buitrago (experto en asuntos políticos, militares y de conflicto), siguiendo los reportes del Ministerio de Defensa durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006 y 2006 – 2010) el presupuesto nacional gastó en defensa: 986 mil millones de pesos colombianos en 2002, 858 mil millones en 2004, 758 mil millones en 2005, un billón 115 mil millones en 2006, un billón 107 mil millones en 2007 y tres billones 405 mil millones en 2008. A su vez, el pie de fuerza de militares y Policía pasó de 356.539 miembros a 421.418 en 2008. (Leal, Francisco, 2010).

informantes para que la Fuerza Pública tuviera la información necesaria en esta tarea de devolver seguridad democrática.

- La quiebra de las “economías de guerra”. El objetivo se centró en atacar el recurso del negocio de las drogas ilícitas que le estaban dando ingresos a los grupos al margen de la ley. Junto a ello, aumentó el control sobre el movimiento del lavado de activos que estaba unido al narcotráfico.
- La superación del “empate negativo”. Alcanzar un elevado número de miembros de la Fuerza Pública para poder abarcar el amplio territorio de Colombia, junto a la complejidad geográfica que facilita el movimiento de los grupos ilegales. Creó las llamadas “brigadas móviles” para desplazamiento efectivo en la guerra, aumentó el número de soldados profesionales y entrenó unidades especializadas, por ejemplo, la Antiterrorismo.
- Negociaciones de paz. Con el objetivo de crear un escenario de paz, reforzando el estamento militar, junto a estrategias de más efectividad en el enfrentamiento con los actores en el conflicto, y el dinero del Plan Colombia dedicado a esta área prioritaria que el gobierno Uribe diseñó y gestionó, se abrieron espacios para diálogos con las AUC y el ELN,¹¹⁹ a su vez que permitió la ayuda de la comunidad internacional a través de mediaciones por medio de la ONU y países amigos de la paz.

En este marco de referencia, la política de paz del gobierno Uribe recogió del miedo de un país completamente arrinconado y “atrincherado” en sus casas, el anhelo de un “sentirse seguros”. Marco Palacios (2012) cita una anécdota que recoge la expresión simbólica de la “recuperación” de la sensación de seguridad durante el primer año de Uribe: “no había transcurrido un año de su posesión cuando unas tres cuartas partes de colombianos, sin aparentes distinguos de clase social o adscripción política, percibían que el Estado había reconsquitado el territorio: *Colombia viva* [sic]. *Viaja por ella*” (Palacios, 2012, p. 169). El miedo a viajar por las carrete-

119. Con el ELN el gobierno Uribe Vélez gestionó varios intentos de diálogos conducentes a un proceso con miras a la paz. Mauricio García Durán (2006) señala que desde los primeros meses de gobierno se tuvieron confidencialmente conversaciones en Cuba, pero se rompieron en diciembre de 2002. En el año 2003 el grupo de países amigos (Francia, España, Noruega, Cuba y Suiza) motivaron el reinicio de conversaciones y la configuración de una Comisión Civil para ser facilitadora, pero no hubo resultados favorables a la paz. En junio de 2004, México facilitó un proceso de contactos que tampoco ayudó, pues se rompieron las opciones en abril de 2005, cuando México rechazó el voto negativo contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. A partir de 2005 se inició un nuevo intento con la salida de la cárcel de Francisco Galán (ex-combatiente del ELN) que había sido capturado en 1992. En este orden, entre el 16 y el 21 de diciembre de 2005 se llevaron a cabo consultas en Cuba para ver las posibilidades de estos diálogos. En febrero de 2006 se retomaron los acercamientos sin resultados favorecedores de la paz (García Durán, 2006, pp. 503 – 504. En: Leal Buitrago, 2006). A lo anterior, se suma los esfuerzos que continuaron entre 2005 – 2007, concretándose con la *Propuesta de Acuerdo Base entre el gobierno nacional y el ELN*, en 2008.

ras colombianas, incluso tomar un avión, afectando el sector turístico nacional e internacional, fue solo un punto álgido durante el gobierno de Pastrana. La campaña a la que hace referencia Marcos Palacios y que acabamos de citar buscó ser una muestra de resultados de la efectividad de la seguridad democrática y la reactivación de la industria del turismo en Colombia. Durante esta época se gestionó el Plan Estratégico de Seguridad que consistía en el aumento del pie de Fuerza Policial y Militar en espacios de turismo y en carreteras.¹²⁰ El lanzamiento estuvo centrado en las llamadas “caravanas turísticas” que impulsó el gobierno nacional para temporadas fuertes de vacaciones o en fechas de fiestas locales reconocidas, por ejemplo, Semana Santa, descanso de verano, temporada de Navidad, entre otros. Estas caravanas iban acompañadas de personal militar y policial, junto a un cúmulo de publicidades.

Tal como lo señalamos en nuestra marco teórico, el institucionalismo histórico nos permite acceder a la búsqueda de una política pública de reconciliación social desde una perspectiva de asumir los procesos sociales y políticos dentro de un marco de continuidad que permita la toma de decisiones desde las mismas categorías que las circunstancias objetivan en principios y valores desde donde lo común se construye. Como lo cita Saavedra (2013) “es un cuerpo de ideas coherentes que tiene como objetivo central realizar una comprensión profunda y contextualizada de los procesos de formación y cambio de las instituciones políticas a lo largo del tiempo, es decir, procesos temporales concretos” (p. 33).

Al hacer síntesis de la manera como el caso colombiano ha ido buscando salidas alternativas al conflicto y la violencia, dentro del marco de lo temporal a través de las propuestas de los gobiernos pretendemos acercarnos a los problemas sustanciales de lo político en materia de procesos hacia la paz, en el caso colombiano y los patrones institucionales a través del tiempo que se han pretendido configurar en esta dinámica. Esto para vislumbrar cómo el contexto de esa situación ofrece los instrumentos esenciales de lo que propondremos como *reconciliation network*.

4.1.4.1. Una alternativa: la Ley de Justicia y Paz

En medio de las estrategias de seguridad democrática que Uribe Vélez impulsó durante su primer gobierno (2002 – 2006), poniendo todo el énfasis en la defensa del derecho y la soberanía nacional, se iniciaron conversaciones con los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia o paramilitares, como comúnmente se les denominaba. El máximo líder de esta

120. La campaña se llamó “Vive Colombia” y el lema exacto era: “Colombia Vive, viaja por ella”. Conllevó publicidad en medios de comunicación escritos, visuales y auditivos (Antigua campaña nacional de promoción turística, 2007, 2008) (Caracol Radio, 2001).

organización al margen de la ley se llamaba Carlos Castaño quien, junto a su hermano Fidel Castaño, promovieron y consolidaron el accionar de este grupo en contra de los movimientos guerrilleros. Siendo candidato a la Presidencia de la República, Uribe expresó públicamente las tres condiciones que les ponía a los paramilitares para entrar en fase de diálogos y negociación: detener los ataques contra la población civil, dejar de secuestrar y cesar el narcotráfico (Romeo, 2006, p. 377, citado por Leal Buitrago, 2006).

Al finalizar el gobierno de Pastrana, entre 2001 y 2002, las AUC asumieron un rol de agresión violenta y se dieron a la tarea de “recuperar” la soberanía del Estado. Como lo resumimos de manera breve en ese aparte de esta investigación, ingresaron a las regiones que tradicionalmente eran de dominio de la guerrilla y realizaron toda clase de ataques, intimidaciones y masacres, buscando asumir el control que, según ellos, el gobierno había perdido por la “mano blanda” que el mismo proceso de diálogos había suscitado.

En estas circunstancias, el gobierno Uribe Vélez le propone a los hermanos Castaño un proceso de desarme y desmovilización,¹²¹ con unas garantías legales enmarcadas dentro de la llamada Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz)¹²² para que favorecieran caminos hacia la paz en Colombia. En este sentido, la temporalidad marcada por la apuesta del gobierno Uribe la podemos sintetizar en una dinámica de opuestos complementarios entre recrudecimiento militar en contra de las guerrillas y apertura al diálogo, negociación y acuerdos de cese de hostilidades con los grupos de autodefensa.

La Ley de Justicia y Paz es el marco jurídico más exigente y riguroso que ha tenido proceso de paz alguno en los últimos decenios, tanto en Colombia como en el mundo. Su mérito es mayor si se tiene en cuenta que los grupos paramilitares no habían sido derrotados por el Estado sino que, por el contrario, estaban en su cota más alta de fortaleza económica, política y militar. Esto permite pensar que, de no haber producido su desmovilización, muy seguramente hubieran continuado en un proceso acelerado de expansión y crecimiento, con todas las secuelas de violencia ligadas a su dinámica irregular (Rangel, 2009).

El proceso de conversaciones con los líderes se concretó en el año 2003 cuando aceptaron organizar la desmovilización y acogerse al proceso. Para apoyar legalmente este proceso, el go-

121. Es el conocido Acuerdo de Santa Fe Ralito (julio de 2003) en el que se señaló que se desmovilizarían en diciembre de 2005, aunque desde diciembre de 2002 ya estaban sentadas las bases con la declaración de cese al fuego y el inicio de trabajos de la comisión de exploración para diseñar el proceso con las AUC. En este acuerdo se definió que la desmovilización comenzaría antes de terminar ese año de 2003 y concluiría en 2005.

122. Texto de la Ley en: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2005, también pueden consultarse en este link los decretos nacionales a través de los cuales se fue reglamentando la Ley 975 de 2005.

bierno propuso una ley que denominaron *Ley de Alternatividad Penal*, pero que no fue aprobada por el Congreso de la República por las implicaciones de crímenes de lesa humanidad y todo tipo de violación a los derechos humanos durante los enfrentamientos y ataques de los grupos. Sin embargo, el gobierno Uribe Vélez continuó en la búsqueda de garantías jurídicas para facilitar el proceso de desarme y desmovilización de los grupos al margen de la ley. De esta manera, en el año 2005 se aprobó la llamada Ley de Justicia y Paz que configuró el marco procesual desde el cual nuevamente Colombia intentó la salida alternativa al conflicto y la violencia.

Acceder a procesos de desarme y desmovilización, junto a la oferta de alternativas penales para grupos de personas que han violentado atrocemente a otros seres humanos no es un tema de fácil acceso ni comprensión. Aún más, pretender resolver la complejidad del conflicto armado de más de sesenta años de duración por medio de un proceso planteado por esta ley no es tan comprensible en muchas esferas sociales. Esta ley presentó resistencias por parte de sectores defensores de derechos humanos e, incluso, por las Naciones Unidas, puesto que no se aceptaba la rebaja de penas a quienes habían atacado violentamente a la población y, menos aún, se permitiría la impunidad, tal como se había vivido en procesos anteriores con otro tipo de grupos ilegales o en otros casos como El Salvador y Nicaragua.

En medio de los enfrentamientos ideológicos y políticos, la ley se hizo efectiva en el año 2005, surtiendo los procesos constitucionales colombianos e, incluso, llegando a las instancias de la Corte Constitucional colombiana sobre la constitucionalidad o no de la misma, demandada por unos ciudadanos después de ser promulgada.¹²³ En este orden de ideas, la temporalidad de este proceso va marcada por una iniciativa gubernamental dentro del marco de una apuesta de gobierno en materia de seguridad y defensa, con implicaciones sociales en choque y hacia una dinámica procesual en la que debemos identificar la existencia o no de instrumentos de efectividad y de sentido o éticos en perspectiva de reconciliación social, tal como lo hemos venido desarrollando a lo largo de la presente investigación. Posteriormente, abordaremos el marco institucional que debe estar implícito dentro de este tipo de iniciativas.

4.1.4.2. Proceso desde la Ley de Justicia y Paz

A través de doce capítulos, la llamada Ley de Justicia y Paz buscó desarrollar el mismo objeto que define la norma en el artículo 1: “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación”. La misma

123. Texto de la sentencia de la Corte Constitucional en Fiscalía General de La Nación, 2005.

ley define como grupo al margen de la ley a grupos guerrilleros o de autodefensas que estén definidos dentro del marco de la Ley 782 de 2002.¹²⁴

En este sentido, la ley buscó investigar, procesar y sancionar, junto al ofrecimiento de beneficios judiciales para miembros de estos grupos que se hayan desmovilizado para contribuir a la reconciliación nacional. Desde el mismo inicio del texto la ley pone la reconciliación como un fin tras el cual debe avanzar el proceso que ella misma regula. Desde la perspectiva de la presente investigación, poner la reconciliación como un fin de la misma normativa obstaculiza la dimensión de procesualidad que hemos señalado desde que optamos por lo que entendemos en este texto por reconciliación social. Inclusive, una norma no garantiza la consecución de este nivel ideal de convivencia por cuanto la complejidad de las situaciones demandan otra serie de elementos que estamos hallando en cada uno de los casos y que delimitaremos más adelante. Por la complejidad de la norma misma, la ley fue reglamentada por el gobierno nacional a través de doce decretos reglamentarios desde su promulgación, buscando afinar instrumentos de aplicabilidad.¹²⁵

Los principios que se señalaban en la ley eran:

- La interpretación y aplicación de la ley está de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia (Art. 2).
- La reinserción con probabilidades de amnistía, indulto o beneficia se hace presente, pero de acuerdo a las disposiciones de la Ley 782 de 2002 (Art. 2).
- La alternatividad penal ofrece garantías para favorecer la pena del excombatiente que colabore con el proceso de justicia (Art. 3). El tiempo de la pena lo estipuló entre cinco y ocho años. Para hacer efectivo este aspecto, se contemplaba la gravedad de los hechos y el excombatiente debía colaborar con esclarecer los hechos.
- Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y al debido proceso; así mismo como las garantías judiciales para los procesados (Art. 4).
- El enfoque diferencial¹²⁶ fue tenido en cuenta por una ley posterior, pero vale la pena

124. Ley 782 de 2002, artículo 3, parágrafo 1. “Se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2002).

125. La lista completa de estos decretos reglamentarios se pueden encontrar en Fiscalía General de La Nación, 2005.

126. Adicionado posteriormente por el artículo 3 de la Ley 1592 de 2012. El texto de esta ley está disponible en: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012 Desde la perspectiva de esta investigación, este principio surtió efecto por los inconvenientes presentados en la primera fase del proceso de Justicia y Paz (2005 – 2010) en materia de reconocer a grupos humanos en condiciones especiales, tales como indígenas, comunidades afrodescendientes, niños, jóvenes, comunidad LGTB, entre otros, que habían sido victimizados en diversas circunstancias.

mencionarlo en este aparte para ubicar la dimensión de los principios en su conjunto. Esta dimensión ha sido tenida en cuenta dentro del proceso para evitar violación a derechos fundamentales de grupos humanos con condiciones especiales (Art. 5 A).

- El derecho a la justicia debe ser garantizado por el Estado para toda persona que haya sido violentada personal o colectivamente por un grupo al margen de la ley. Esto debe gestionarse con los recursos más aptos y con la garantía de no repetición (Art. 6).¹²⁷
- El derecho a la verdad está estipulado como un principio fundante de la salida alternativa al conflicto y la violencia, y consiste en conocer la manera y los hechos cómo fueron atacados, pero también el paradero de víctimas de secuestro y desaparición forzada (Art. 7).¹²⁸
- El derecho a la reparación enmarcaba restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de conductas (Art. 8).¹²⁹ La misma ley definía estos derechos de la siguiente manera:

Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.

La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y psicológicos como consecuencia del delito.

La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.

Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.

127. Cabe mencionar que este artículo fue modificado por el artículo 4 de la Ley 1592 de 2012. En la modificación queda explícito que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. Para más exactitud en la definición de los términos de los derechos de las víctimas, la Ley 1448 de 2001, también llamada *Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras*. El texto de esta ley está disponible en Legis, 2011. Por no estar dentro del período trabajado en la presente investigación, solo se sugiere la ubicación del texto online.

128. Este artículo fue derogado por la Ley 1592 de 2012.

129. Derogado por el artículo 41 de la Ley 1592 de 2012 dentro del marco legal específico para víctimas del conflicto.

Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley (Ley 975 de 2005).

- Por último, en esta primera reglamentación, la norma define desmovilización como el acto individual o colectivo de dejar armas y abandonar el grupo al margen de la ley, ante una autoridad competente (Art. 9). La Ley 782 de 2002 reglamentó esta manera de entregarse cada excombatiente.

Lo normativo enmarca la dinámica desde donde el proceso debe fundar sus bases. Sin embargo, vislumbrar un *hacia de la política pública de reconciliación social*, tal como lo hemos venido señalando a lo largo del presente texto, contiene elementos más sustanciales que la ley debe favorecer, pero que se configuran en el eje central de la reconstrucción social que se pretende con esta serie de procesos. Estamos hablando de los sujetos implicados y su rol en la misma búsqueda alternativa al conflicto y la violencia. En el caso colombiano son las víctimas y los excombatientes quienes se acogen al proceso que se planteó desde la Ley de Justicia y Paz.

La seguridad democrática que propuso el gobierno Uribe Vélez, como garantía de condiciones para ir a la mesa de diálogos con cada uno de los grupos al margen de la ley, se gestionó desde la acción bélica contras las FARC, la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, los acercamientos para diálogos con las AUC y el ELN y un marco jurídico que brindara opciones a quienes deseaban dejar las armas para buscar el retorno a la vida ciudadana en contextos de convivencia civil. Los ejes articuladores de esta dinámica fueron, por supuesto, los colombianos en su sentido social, pero el centro más apropiado estuvo, y está aún, en la relación de víctimas y excombatientes, con el gobierno como facilitador y garante de posibilidades de salida alternativa y de derechos tanto de una parte como de otra. A primera vista, la ley se consideró centrada en opciones y oportunidades para los excombatientes, especialmente para los miembros de las AUC y, en alguna medida, para los guerrilleros.

Teniendo en cuenta las categorías de análisis que hemos propuesto y desde donde hemos trabajado los casos anteriores, los instrumentos para la efectividad del proceso (verdad, reparación, restitución, memoria histórica, contexto hacia el perdón) que el caso colombiano nos presenta en esta primera fase desde la Ley de Justicia y Paz, están determinados por el marco jurídico de la Ley 975/2005 (implementada con los decretos reglamentarios respectivos), pero solo tienen gestión efectiva en la relación con las víctimas y los excombatientes. Por ello, brevemente tenemos en cuenta lo que la ley estipula respecto a la categoría de víctima y excomba-

tiende, antes de entrar a puntualizar los instrumentos que acabamos de citar y que confrontaremos con los datos que nos ofrecen los acercamientos realizados a las personas que participaron en los grupos de discusión.

4.1.4.2.1. Perspectiva de la norma hacia los excombatientes

Abordando el título-objetivo de la ley se puede corroborar que fue pensada, en primera instancia, para que regresaran a la vida civil quienes habían estado dentro de las filas de los grupos alzados en armas (esta investigación los asume como excombatientes).¹³⁰ A renglón seguido, la paz es el horizonte de sentido y, para ello, la ayuda humanitaria es un instrumento de ayuda. No se vislumbran aún las víctimas dentro del marco de la ley, pero se puede presuponer que al hacer referencia a lo humanitario habría una cabida para ellas.

Al definir el objeto (artículo 1), tal como lo señalamos con anterioridad al presentar el marco general de la ley, señala que los procesos de paz se facilitarán con la reincorporación (individual o colectiva)¹³¹ de quienes pertenecieron a grupos al margen de la ley y, en segunda instancia, también permitirán esos procesos que se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En este mismo artículo 1, la ley define lo que se conocerá como “grupo armada organizado”, bien sea de la guerrilla o autodefensa. Pero, no hay una definición explícita a víctima al comienzo del texto de la norma.

Un aspecto que causó bastante desazón entre la población civil, especialmente entre las víctimas, fue la dimensión de la alternatividad de la pena. Los criterios generales que la ley estipula para esto es la ayuda del beneficiario a la paz, colaborar con la justicia, reparar a las víc-

130. En términos desde la ley, el grupo de desmovilizado es llamado de dos maneras: *postulado* es aquel miembro del grupo armado al margen de la ley que se ha acogido a los parámetros de la Ley 975/2005 y que está privado de la libertad en los centros de reclusión que el gobierno designa. *Participante del programa de reinserción* es aquel excombatiente que se desmovilizó con su grupo y no tenía cuentas pendientes con la justicia en materia de delitos cometidos dentro de la dinámica de conflicto armado. Este grupo se encontraba coordinado por la Agencia Presidencial para la Reintegración –ACR– y participaba de todos los programas de formación, acompañamiento psicosocial y apoyo para buscar empleo. En términos generales, el país los ha venido llamando *desmovilizados o reinsertados*.

131. Teniendo presente la perspectiva de lo estructural que nos interesa en este aparte de nuestra investigación, conviene citar otro conjunto de normatividades que acompañaron este proceso desde la dimensión gubernamental en Colombia. Para gestionar con más efectividad las diferentes temáticas económicas y sociales, la administración pública colombiana cuenta con el *Consejo Nacional de Política Económica y Social* (CONPES), dentro de la estructura del Departamento Nacional de Planeación (DNP). La labor se centra en apoyar documentos sobre políticas que atañen el desarrollo económico y social del país. Lo hace a través de los llamados Documentos CONPES que se promulgan de acuerdo a las necesidades, van catalogados por número de referenciación, fechas y temáticas. Puede consultarse la información en: DNP, 2011.

timas y una adecuada resocialización¹³². A esto, se sumó la disminución del tiempo para pagar por los delitos. Incluso, la sensación que fue produciendo el mismo proceso fue de ineficacia e ineficiencia en materia de verdad y justicia, tal como lo corroboraremos al abordar el análisis de las respuestas recogidas en los grupos de discusión que permitieron recoger información para la presente investigación. Igualmente, en el artículo 4 se señala que dentro de este marco jurídico que propende por la reconciliación nacional, junto a los derechos de las víctimas, también se deben brindar las garantías judiciales de los procesados, así como el respeto al debido proceso.

En lo que respecta a los requisitos para la desmovilización (Capítulo II de la Ley 975/2005) los artículos 10 y 11 indican que todo el grupo cumpla el acto de desmovilización y desmantelamiento, entregue los bienes adquiridos ilegalmente, cese actos delictivos, que no se organicen para tráfico de estupefacientes o enriquecimiento ilícito, que libere a los secuestrados que tengan y que entregue los menores de edad que hayan estado en sus filas. Para la desmovilización individual se señalan como requisitos entregar información o colaborar con el desmantelamiento del grupo al que se pertenecía, que se suscriba acta de compromiso con el gobierno, que se haya desmovilizado y dejado las armas, que se cese acción delictiva, que se entreguen bienes productos de ilegalidad y que no se haya tenido como finalidad tráfico de estupefacientes o enriquecimiento ilícito. Prácticamente se hacen las mismas exigencias en las dos posibilidades de entrar al proceso.

El compromiso al desmovilizarse conlleva una apertura a la llamada resocialización de quien estuvo en un grupo al margen de la ley y debe, no solo colaborar con la justicia, sino que es necesario que ingrese al proceso de trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo en que esté privado de la libertad y desarrolle actividades que favorezcan la desmovilización del grupo (Artículo 29). Después de cumplida la pena alternativa, el desmovilizado tendrá libertad a prueba, en continua comunicación con las instituciones judiciales que se le asignen.

Siendo eje clave para el sentido de esta norma, los excombatientes que estén dentro del proceso fueron considerados sujetos oferentes para garantizar que el derecho a la verdad y a la reparación tuviera efecto que favoreciera la dinámica de búsqueda alternativa al conflicto y la violencia, fundándose todo en el derecho a la justicia. Desde este derecho de lo jurídico que tanto sociedad general, como víctimas y como excombatientes, se sostienen los otros dos derechos y, por ende, la búsqueda de la reconstrucción social,¹³³ de acuerdo a lo dispuesto por la ley. Los que

132. El documento CONPES que reglamentó con más precisión esta política económica y social dentro del marco del proceso de justicia y paz es el número 3554 del 1 de diciembre de 2008. Se encuentra bajo la denominación: “Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y grupos armados ilegales”. Su texto se puede consultar en Conpes, 2008.

133. Como apoyo a esta dimensión estructural que estamos desarrollando, el CONPES emitió el documento 3607

pertenecieron a estos grupos armados al margen de la ley debían recibir en su derecho a la justicia el respeto por sus vidas, el cumplimiento del debido proceso y las “ventajas” que se les ofreció desde los diálogos, la negociación y la firma de los acuerdos para la desmovilización: alternabilidad de pena, programas de resocialización, acompañamiento judicial. Desde esta perspectiva, la ley en su conjunto contempla todos estos aspectos que fueron reglamentados por decretos que periódicamente fueron promulgados para ir poniendo en ejercicio efectivo el mismo proceso.

4.1.4.2.2. Perspectiva de la norma hacia las víctimas

Teniendo como objetivo central la reincorporación de excombatientes a la vida civil, tal como lo hemos señalado con anterioridad, para garantizar la paz y, de esta forma, los derechos de las víctimas, este grupo humano afectado durante el conflicto y la violencia en Colombia no tiene mayor impacto en la estructura de la norma. No es que queden por fuera del material jurídico que sustenta el llamado Proceso de Justicia y Paz, sino que no son percibidas como ejes centrales, al estilo que se da a los excombatientes. En los tres primeros artículos escasamente se menciona algo referente al carácter de víctima.

Es hasta el artículo 4 que la ley establezca los derechos que tienen las víctimas dentro de un marco de reconciliación nacional que se debe dar. Ante todo hay una presuposición de fases de la reconciliación social que no son tenidos en cuenta. Se mezclan sin distinción, en un marco de reconstrucción de lo común, diálogos de acercamientos, diálogos conducentes a la paz, negociación, firma de acuerdos, etapa de pos-acuerdos, etapa de pos-conflicto, reestructuración social, reconciliación social y, finalmente, todo en un marco de la paz. A pesar de ello, la ley marca como derechos de las víctimas la verdad, la justicia y la reparación,¹³⁴ además de respetarles el debido proceso.

Para garantizar la dinamicidad de lo que la ley estipula como reconciliación nacional, en perspectiva hacia las víctimas, en el año 2006 se promulgó el Decreto 3391 del 29 de septiembre, con el objeto de impulsar programas restaurativos para atender el desarrollo humano y social de las víctimas, las comunidades y los ofensores, buscando así restablecer vínculos sociales.

del 14 de septiembre de 2009 denominado “Importancia estratégica Programa de Apoyo a Comunidades Receptoras de Población Desmovilizada en Colombia Desarrollado con la Cooperación Financiera No Reembolsable de la Comunidad Europea” (Conpes, 2009).

134. Apenas hasta el año 2008, mediante el decreto 1290 del 22 de abril, se creó un programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de grupos armados al margen de la ley. Este programa estuvo a cargo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional —llamado comúnmente Acción Social—.

Es apenas en el artículo 5 donde la ley entra a definir normativamente lo que se entendía por víctima en ese marco del Proceso de Justicia y Paz. En síntesis, la ley señaló en ese momento, que “víctima era toda persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales” (Artículo 5. Ley 975/2005). A renglón seguido, el texto de la misma ley añade que víctima también se consideraba al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando esta esté muerta o desaparecida.

La condición de víctima se adquiere en ese marco, independientemente de si el victimario fue aprehendido o no. Igualmente, se introduce el concepto de víctima para miembros de la Fuerza Pública que hayan sido afectados o perdido su vida en calidad de servicio de defensa del Estado.¹³⁵ Por ende, la misma condición de víctima pasa a sus familiares en la igual condición de relación familiar, cuando la persona activa haya muerto o desaparecido.

Definido el espectro conceptual de víctima, la ley tuvo que ser reglamentada en materia procedimental para las víctimas con el Decreto 315 del 7 de febrero de 2007 para estipular todo lo relacionado con lo procesal para ser catalogado como víctima, la participación de las víctimas en las versiones libres ante los excombatientes que rindieran información ante la sociedad, el acceso a la ayuda judicial por parte del Estado a través de un defensor público cuando no tuviera facilidad económica para un abogado, entre otros elementos. También, pensando en la reparación a la víctima, el Estado colombiano estipuló por Decreto 1290 del 22 de abril de 2008 una indemnización solidaria para las víctimas de acuerdo con un listado de daños catalogados desde homicidio, desaparición forzada y secuestro (el que más recibía en ese momento, 40 salarios mínimos legales vigentes) hasta desplazamiento forzado (27 salarios mínimos vigentes los que menos recibían). Pero, esta indemnización solidaria también contuvo unos condicionamientos en materia de distribución del monto total dado a las víctimas cuando eran un grupo, disminución de la ayuda si habían recibido aportes de Acción Social y, si fue por desplazamiento forzado, se les daba por medio de FONVIVIENDA, para que pudieran acceder a una vivienda.

En materia de los tres derechos estipulados por la ley, las víctimas son sujeto beneficiario de la justicia, la verdad y la reparación (art. 6, 7 y 8). El Estado debe garantizar el acceso a los

135. Esta dimensión también fue reglamentada con más precisión mediante documento CONPES 3591 del 1 de Junio de 2009 denominado “Sistema de Rehabilitación Integral para la Fuerza Pública”, buscando dar herramientas al Ministerio de Defensa para trabajar con los miembros de estas Fuerzas que hayan quedado discapacitados en prestación del servicio (Conpes, 2009).

procesos judiciales que les permita a las víctimas conocer la verdad de los hechos y, por ende, obtener la reparación respectiva y la garantía de no repetición de los hechos violentos. En esta materia de derechos, la ley aborda con más detenimiento el derecho a la reparación mediante el Decreto 3391 de 29 de septiembre de 2006, en el que se estableció claramente el proceso y el modo de hacer efectivo el ejercicio de este derecho de reparación. En este decreto se estipularon ocho posibles medidas de satisfacción que el Comité de Reparaciones Administrativas podía hacer efectivas de acuerdo a las circunstancias. Traemos a colación literalmente para tener un panorama general de lo que la ley disponía para el proceso, de manera que podamos confrontar con lo expresado por los que participaron en los grupos de discusión:

- a. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor.
- b. Efectuar las publicaciones a que haya lugar relacionadas con el literal anterior, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social.
- c. Realización de actos conmemorativos, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social.
- d. Otorgamiento de condecoraciones y otros reconocimientos públicos, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social.
- e. Realización de homenajes públicos, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social.
- f. Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y reconciliación, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social.
- g. Difusión pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho que la victimizó, siempre que no provoque más daños innecesarios ni genere peligros de seguridad, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social.
- h. Colaborar para la identificación de cadáveres y su inhumación posterior, según las tradiciones familiares y comunitarias, a través de las entidades competentes para tal fin.
- i. Acceso preferente a los servicios sociales ofrecidos por el Estado, a través de las diferentes entidades y organismos competentes.
- j. Difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hechas por los victimarios, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social.

Parágrafo. Para la aplicación de las medidas de satisfacción a que se refieren los literales anteriores, se deberá contar con el consentimiento de las víctimas (Artículo 8. Decreto 3391/2008).

Un elemento importante para resaltar, desde la perspectiva de esta investigación, estriba en que los tres derechos fundamentales de las víctimas contienen otra serie de derechos a los que quien sea declarado como tal, siguiendo los requerimientos de la norma, puede acceder: la reparación integral (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y seguridad de no repetición). “Como se puede observar, se trata de un conjunto de medidas que deben ser adopta-

das en la sentencia y que buscan reivindicar social y moralmente a la víctima, y su reintegración en forma digna al grupo social al que pertenece; además, están orientadas a hacer explícita la voluntad de los excombatientes y de sus miembros de comprometerse con la paz y reincorporarse a la vida civil” (GTZ, 2010, p. 52).

4.2. Presupuestos para los instrumentos estructurales en Colombia

Como lo trabajamos en los casos de Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua, los países que han vivido estas experiencias de largo aliento en conflicto y violencia han buscado salidas alternativas por todos los medios posibles. Cada contexto particulariza los medios para hallar la anhelada paz. Sin embargo, hay unos factores comunes que unen este tipo de iniciativas, pues siempre se evita la réplica de la violencia y, mucho más, utilizar lo bélico como absoluto campo de transformación social. Por lo menos es lo que se puede constatar cuando los principios democráticos quieren ser la base sobre la cual gestar las dinámicas de reconstrucción social.

El tiempo o lo procesal que hemos podido describir según cada caso conlleva implicaciones gubernamentales que facilitan o no los acercamientos a las partes enfrentadas y el ofrecimiento de diversas búsquedas. Hemos podido corroborar que este tiempo se ha limitado a ofertas de gobiernos de turno, presencia de cooperación internacional y/o desgaste por parte de la población afectada después de tantos años de guerra y que suscita en diferentes movimientos sociales un “soñar el cambio” —la imaginación moral que desde Lederach trabajamos—.

Para el caso colombiano, como lo vamos anotando, lo estructural está completamente ligado al marco general que la Ley 975/2005 da al llamado Proceso de Justicia y Paz, en ese primer tiempo procesual de 2005 a 2010, centrado fundamentalmente en la implementación de la ley a través de decretos reglamentarios para los casos que la misma dinámica iba poniendo en materia de retos, exigencias y demandas, junto a los documentos CONPES que ya señalamos con anterioridad. Al describir lo procesal/temporal del inicio de este proceso en el aparte anterior de este capítulo, fueron apareciendo elementos que contienen instrumentos estructurales, pero que no quisimos abordar solo desde esta perspectiva, pues esa primera fase de acercamientos, firma del acuerdo de desmovilización y marco jurídico, dan pauta a lo temporal unido a perspectivas gubernamentales y, obviamente, a dinámicas judiciales.

En este orden de ideas, la apuesta por la paz en Colombia desde la perspectiva del gobierno de Uribe Vélez está enmarcada dentro de los llamados procesos de *desarme, desmovilización y reintegración (DDR)*. Estos aspectos son los “elementos fundamentales de una negociación

oficial de paz” (Labrador & Gómez, 2010, p. 30). Al respecto, Albert Caramés, Vicenc Fisas y Daniel Luz (2006), según cita de Karem Labrador Araújo y Mario Gómez Jiménez (2010),

Ha de ser un proceso de dignificación de las personas que intervienen en él, pues han dejado las armas de manera voluntaria y como resultado de una negociación y un acuerdo [...] El DDR constituye una oportunidad para la construcción de la seguridad y, por lo tanto, es uno de los ingredientes más importantes para lograr la estabilidad y la construcción de la paz [...] La propia naturaleza de estos programas puede convertir a los antiguos combatientes en actores activos para el desarrollo económico y social (Caramés et al., 2006, citado en Labrador & Gómez, 2010, p. 30 – 31).

Este tipo de iniciativas gubernamentales busca la recuperación de la estabilidad después de períodos de conflicto y violencia, recurriendo a los marcos normativos y reformas de estructurales sociales, económicas, políticas e institucionales centradas en la recuperación de quienes delinquieron durante la dinámica de conflicto y violencia.¹³⁶ Aunque en materia de salidas alternativas es una opción este tipo de iniciativas, en Colombia no se puede desconocer el cúmulo de víctimas que a lo largo y ancho del territorio nacional han dejado los años de confrontación bélica. De esta manera, al hacer referencia a los presupuestos estructurales de la apuesta del gobierno Uribe Vélez, no podemos desconocer que van más allá de la aplicación de DDR a la realidad colombiana. Como lo anotaremos más adelante, ahondar en lo estructural en este caso es acceder a lo multidimensional de una compleja realidad como la de este país.

Por literatura nacional e internacional respecto al tema del DDR se pueden puntualizar aspectos como que este tipo de ejercicios “no siempre está integrado a una política de paz que promueva la transformación social y erradique de fondo las causas originales del conflicto armado” (Springer, 2005, p. 62–63, citado por Labrador & Gómez, 2010). Igualmente, son tan variados los contextos en los que se suscitan los enfrentamientos que demandan alternativas para la paz que, así mismo, el DDR abre el abanico de opciones para ofrecer estructuralmente un marco desde el cual proceder: “nos referimos al alto al fuego o cese de hostilidades; al acuerdo político; a la claridad de las fases del DDR, respecto al conjunto de elementos políticos del proceso de paz [...]” (Labrador y Gómez, 2010, p. 38). En definitiva, “el proceso de DDR se divide en tres componentes básicos: desarme, desmovilización y reintegración. Sin embargo, en algunos casos la comunidad internacional agrega una nueva R a la sigla DDR, para sumar,

136. Tal es la preocupación que suscita el documento CONPES 3673 del 19 de julio de 2010 denominado “Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y de los Grupos Delictivos Organizados”. Este punto es central dentro del proceso de conversaciones y diálogos conducentes a los acuerdos de movilización, que queda claramente explícito en la Ley 975/2005 y reglamentado con más precisión en este documento (CONPES, 2010).

como condición, la cabal rehabilitación” (Naraghi & Pampell, 2006, citado por Labrador & Gómez, 2010).

El espectro de las víctimas quedó plasmado en la ley, por cuanto la reconciliación social no se hace solo entre combatiente y gobierno nacional, es decir, entre Estado legítimo y grupos al margen de la ley, sino que contiene un elemento de cohesión social que no se puede desconocer y comienza con el involucramiento de las víctimas a toda búsqueda de salida hacia la paz. Aunque la Ley 975/2005, junto a la normatividad reglamentaria que suscitó estén centradas en la desmovilización y reinserción de quienes estuvieron en grupos ilegales, el alto grupo de víctimas en Colombia también forma parte del presupuesto estructural que debe ser considerado en esta clase de iniciativas.

4.2.1. Instrumentos estructurales en Colombia

Tal como lo anotamos al hacer referencia a los casos de Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua, lo estructural parte desde los procesos de acercamiento a diálogos y procesos de negociación, pasando por estructuración y firma de acuerdos para el cese de hostilidades o no agresión, hasta la normatividad que permite las reformas de estructuras y crea las condiciones para que las hostilidades queden “atrás en la historia, sin olvidarlas”, creación de condiciones para el trato con quienes perpetraron ataques a la población, el reconocimiento de las víctimas y la reforma o creación de instituciones que dinamicen la nueva etapa de los llamados “pos-acuerdos, pos-conflicto, restablecimiento de relaciones interpersonales”, entre otros elementos.

Colombia no fue ajena a esta dinámica. La misma Ley de Justicia y Paz es un instrumento estructural que pudimos revisar en el apartado anterior de este capítulo, tal como nos acercamos a la Ley de Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación, en Sudáfrica, y a los Acuerdos de Esquipulas que suscitaron los procesos en El Salvador y Nicaragua. En esta parte de nuestro texto pasamos a contemplar las instituciones que fueron creadas para implementar las orientaciones que la misma Ley 975/2005 dio a Colombia: Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, Tribunales Superiores de Distrito Judicial para la Justicia y la Paz, Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Comisiones Regionales para la Restitución de Tierras y Fondo para la Reparación de las Víctimas.

4.2.1.1. Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz

La Fiscalía General de la Nación obtuvo una reorganización en esta temática desde la Ley 975. Se creó esta unidad delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito para la Justicia y la Paz. Con competencia nacional. La función que la ley le dio fue la de realizar las funciones de la Fiscalía, pero en materia del Proceso de Justicia y Paz específicamente. Para sus tareas se le asignó una Policía judicial exclusiva para estos asuntos y de competencia nacional también.

Lo anterior conllevó la creación de nuevos cargos en la Fiscalía, con especificidad de funciones en materia del proceso. Este personal se dividió entre nuevas contrataciones y algunos funcionarios que ya estaban en la Fiscalía fueron trasladados a esta nueva unidad.

4.2.1.2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial para la Justicia y Paz

En la organización de la administración de justicia, estas unidades forman parte de lo que constitucionalmente se define como jurisdicción ordinaria. Estructuran lo jurídico de forma desconcentrada a través de la división de unidades territoriales en esta área, lo que los circunscribe al nivel del distrito judicial para gestionar asuntos penales, civiles, laborales, familiares, agrarios o mixtos, de acuerdo a los asuntos que le sean demandados. Para el caso del Proceso de Justicia y Paz, la Ley 975/2005 creó una sala especial para este tipo de casos y por ello asumieron el nombre complementario de “para la justicia y la paz”.

El Capítulo VII, artículo 32, ofrece los elementos de acción para esta unidad de administración de justicia en el sistema colombiano. Según la norma, estos tribunales (designados por el Consejo Superior de la Judicatura) podían, en esa etapa del proceso, adelantar etapas de juzgamiento de los procesos, vigilar el cumplimiento de penas y las obligaciones impuestas a los condenados. Igualmente, la ley asigna como tarea específica de la secretaría de estos tribunales la organización, sistematización y conservación de los archivos en los que reposen las informaciones revisadas de los excombatientes para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y preservar del olvido la memoria colectiva.

4.2.1.3. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)

En el artículo 50 (reglamentado por el Decreto 4760 de diciembre 30 de 2005) se crea la CNRR conformada por el Vice-Presidente de la República o su delegado, el Procurador General de la Nación o su delegado, el Ministro del Interior y de Justicia o su delegado, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el Defensor del Pueblo; dos representantes de organizaciones de víctimas y el Director de la Red de Solidaridad Social, quien desempeñará

la Secretaría Técnica. Añade el artículo que el Presidente de la República designaría a cinco personalidades, de las cuales dos debían ser mujeres. En cuanto a tiempo, la ley le estipula una vigencia de ocho años.

El Decreto Reglamentario 4760/2005 añade más elementos de conformación, tales como: la CNRR puede invitar a sus sesiones a funcionarios del Estado, organismos o personalidades nacionales o internacionales, según temática o necesidades. Igualmente, señala el proceso para la selección de los dos representantes de organizaciones de víctimas mediante convocatoria pública. También este decreto define que los recursos serán asignados por la llamada Acción Social y el ordenador del gasto será el Alto Consejero para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Funciones que la ley le señala fueron:

Garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos.

Hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades locales a fin de garantizar la desmovilización plena de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, y el cabal funcionamiento de las instituciones en esos territorios. Para estos efectos la Comisión Nacional Reparación y Reconciliación podrá invitar a participar a organismos o personalidades extranjeras.

Hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación de que trata la presente ley y señalar recomendaciones para su adecuada ejecución.

Presentar, dentro del término de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente ley, ante el Gobierno Nacional y las Comisiones de Paz de Senado y Cámara de Representantes, un informe acerca del proceso de reparación a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley.

Recomendar los criterios para las reparaciones de que trata la presente ley, con cargo al Fondo de Reparación a las Víctimas.

Coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes.

Adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional (Artículo 51).

De las funciones originales dadas por la ley en 2005, solo la que hacía referencia a presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales se inhibió por Sentencia de la Corte C-575-06, pues afecta el manejo de información de procesos judiciales (Corte Constitucional, 2006).

En su gestión directa en pos de las víctimas y para facilitar los procesos respectivos, la CNRR se organizó internamente desde una Dirección Ejecutiva, apoyada en su labor por las

áreas de trabajo en temáticas de 1) atención y reparación a víctimas, 2) reconciliación, 3) desarme, desmovilización y reintegración, 4) memoria histórica, 5) género y poblaciones específicas, 6) jurídica, 7) prensa y comunicaciones, 8) administrativa y financiera. Con el ánimo de desarrollar mejor su trabajo a nivel nacional, regional y local, se crearon seis sedes regionales: Antioquia (Medellín), Sincelejo, Centro (Bogotá, D.C.), Nororiente (Bucaramanga), Barranquilla y la sede nacional en Bogotá, D.C.

Para hacer explícito el proceso y los pasos que las víctimas podían realizar en sus reclamaciones se atendían solicitudes diarias de orientación y se ayudaba en la orientación a cada persona en materia de documentación y organizaciones del Estado a las que podía acudir, pues la CNRR no tenía poder decisorio en ninguna esfera pública ni privada. Crearon boletines informativos¹³⁷ en los que presentaban noticias cortas de estadísticas de víctimas atendidas y referenciadas, campañas que desarrollaban en regiones, etc. Para información más extensa publicaron el Boletín de la CNRR que mensualmente distribuían para presentar experiencias o analizar diversos temas que estaban a la orden del día. A su vez, mantuvieron en constante publicación trípticos con información básica de derechos de las víctimas, deberes, procesos a seguir en diferentes reclamaciones, etc.

En entrevista con el entonces Director Ejecutivo (Eduardo Pizarro Leongómez) se puede constatar la percepción que a finales del año 2010 se tenía al llegar a los cinco primeros años de existencia:

Hace cinco años cuando se dictó la Ley de Justicia y paz y se creó la CNRR, el Vicepresidente Francisco Santos me propuso este cargo, yo tuve serias dudas de aceptar; porque las pocas Comisiones exitosas que hay en el mundo se han hecho partiendo de la post dictadura, mi gran duda era empezar un Proceso de atención a víctimas en medio de un conflicto armado; cuando el universo de víctimas sigue creciendo. Mi otra duda era el escepticismo que existía en el mundo sobre las ONGs. Había salido un libro de Rodrigo Uprimny llamado *Justicia Transicional sin transición*, era demoledor frente al intento de hacer esta experiencia frente al conflicto; sin embargo yo decía que a pesar del escepticismo, de no tener experiencias y de las críticas a la Ley de Justicia y paz valía la pena hacerlo, siento que no me equivoqué.

Añade Pizarro Leongómez en esa entrevista, que hasta finales de 2010 el proceso desde la CNRR había logrado cinco aciertos: 1) poner en la agenda pública el tema de las víctimas y sus derechos, 2) organizaciones de víctimas (hasta ese momento había 4.500 inscritas en el registro), 3) en ese momento se estaba creando el Registro Único de Víctimas –RUV–, 4) se ha adaptado

137. Conocido como Informativo de Justicia y Paz. Caminos. Hacia la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación.

el Estado para este tipo de procesos, desde todas las organizaciones involucradas en Justicia y Paz, 5) el marco legal ha avanzado en materia de normatividad que legisle desde y para las víctimas (en ese momento estaba en curso legislativo la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).

4.2.1.4. Comisiones Regionales para la Restitución de Tierras

La función de esta unidad está dada en el artículo 52. Allí se estipula que estarían con la responsabilidad de propiciar los trámites respecto a la reclamación de propiedad y tenencia de bienes. Aunque quedó estipulado en la Ley 975, es apenas con el Decreto 176 del 24 de enero de 2008¹³⁸ que se reglamenta su funcionamiento. En el artículo 53 se define la composición de las mismas: un representante de la CNRR (preside), un delegado de la Procuraduría para la Justicia y la Paz, delegado de la Personería Municipal o Distrital, delegado del Defensor del Pueblo y un delegado del Ministerio del Interior y de Justicia. Junto a ellos estaría un delegado de las comunidades religiosas del país que nombrara el gobierno nacional.

4.2.1.5. Fondo para la Reparación de las Víctimas

Esta figura de “cuenta especial” no tenía personería jurídica, su ordenador del gastos sería el Director de la Red de Solidaridad Social, sería supervisado por la Contraloría General de la República. Los recursos provendrían de los bienes que entreguen los miembros de grupos armados al margen de la ley que ingresen al proceso y cumplan los compromisos en esta materia, recursos del presupuesto nacional y de donaciones nacionales o extranjeras. Este organismo también fue organizado por Decreto Reglamentario 4760 de 30 de diciembre de 2005.

Para apoyar la función del Fondo, la misma ley estipuló que la Red de Solidaridad Social debía ser la administradora del Fondo, además de adelantar acciones de reparación y liquidar y pagar indemnizaciones judiciales. El mismo Decreto Reglamentario 4760/2005 designó la creación de un Comité de Coordinación Interinstitucional, formado por diversas entidades del sector político para ayudar a coordinar y articular el ejercicio de cada institución en la aplicación de la Ley 975/2005.

138. El artículo 2 del decreto 176/2008 le dio 26 funciones a este tipo de Comisiones. Pueden ser revisadas en: Fiscalía General de la Nación, 2005. Cabe señalar que este artículo modificó y amplió el artículo 23/2005 que ya había legislado las primeras funciones que reglamentaba la normatividad de la ley de justicia y paz en esta materia.

4.2.1.6. Otros roles de estructura institucional

Defensoría Pública. Esta unidad judicial de Colombia fue resaltada en la ley para garantizar a imputados, juzgados y condenados el acompañamiento de defensa a que tiene derecho todo ser humano. A su vez, la Defensoría del Pueblo quedó asignada para asistir a las víctimas en sus reclamaciones de derechos (Artículo 34).

Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz. De una manera muy sencilla, la ley asigna al Ministerio Público en la dinámica del proceso. Señala que el Procurador General de la Nación debía crear este tipo de unidades para cumplir las funciones constitucionales asignadas a esta área, pero en especificidad del proceso (Artículo 35).

Organizaciones sociales de apoyo y acompañamiento a víctimas. Igualmente, de manera somera, este punto lo señala la ley dándole al Procurador General de la Nación la orientación de impulsar mecanismos de participación para este tipo de organizaciones (art. 36).

4.2.1.7. Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR)

Aunque la Ley 975/2005 no la crea puntualmente como estas otras instituciones para consolidar la estructura de gestión del proceso, la llamada ACR cumplió un papel vital en materia de apoyo y acompañamiento de los excombatientes que estaban en el proceso. Esta tiene su antecedente en el Programa para la Reincorporación de la Vida Civil (PRVC) que fue creado en el primer gobierno de Uribe Vélez, adjunto al Ministerio del Interior y de Justicia (2003 – 2006). Posteriormente, durante el primer año de implementación del proceso, con la Ley de Justicia y Paz, el mismo presidente Uribe lo transformó en la ACR y fue trasladada al fuero de Presidencia.

El alto número de desmovilizados que fue aumentando cada año hasta el último bloque desmovilizado en diciembre de 2005 demandó más atención por parte del gobierno. En este sentido, el PRVC no tenía la infraestructura adecuada para recibir tantas demandas de servicios. Ya no solo era un asunto de atender psicosocialmente a los desmovilizados, facilitarles algo de formación, brindarles el servicio básico de salud y darles una ayuda económica mensual, sino que los procesos judiciales complejizaron el proceso y la cantidad de personas en el programa suscitó la urgencia de reforma.

La ACR centró su trabajo en el esquema del DDR, con mayor capacidad de atención a más personas desmovilizadas, con un enfoque de más control sobre la participación de ellos en los

diversos programas y unas exigencias que evitaran la superficialidad en cada camino de reintegración y se solventaran los errores cometidos en la primera fase de este tipo de iniciativas con el PRVC, como, por ejemplo, que cada uno de ellos reclamaban la ayuda económica, pero no había un control sobre sus actividades diarias, llegando algunos a estar en el programa y continuar delinquiendo.

Según la misma presentación que hace de su historia la ACR en su página web, se sintetiza que la entidad “se enfocó en lograr que la reintegración se convirtiera en una política de Estado. Así, buscó brindar oportunidades a las personas desmovilizadas mediante una ruta de reintegración personalizada con beneficios de tipo psicosocial, educativo, económico y de oportunidades de generación de ingresos, con el fin de permitir que los desmovilizados encontraran una vida sostenible en la civilidad” (ACR, 2014). El programa que la ACR desarrolló entre 2006 y 2011, que funcionó como tal, involucró también a familias de los excombatientes que estaban en el programa buscando hacer efectivo el concepto de “sostenibilidad de la reintegración”.

En septiembre de 2010 el presidente Juan Manuel Santos, con su nueva perspectiva frente a la temática de la paz, cambió al director y le comenzó a dar un giro a esta entidad para que fuera más allá del proceso de reintegración. Ahora debía rediseñarse organizacionalmente, trabajar desde los retos de la reintegración como eje articulador de un proceso conducente a la paz desde el trabajo con los excombatientes y articularse con las otras entidades estructurales que apoyan la salida alternativa al conflicto y la violencia en Colombia. En el mes de noviembre de 2011 la ACR se convirtió en la Agencia Colombiana para la Reintegración (Decreto 4138 de noviembre 3 de 2011). Quedó adscrita al Departamento Administrativo de Presidencia de la República (DARE).¹³⁹

En entrevista realizada a Natalia Salazar, la entonces asesora del Alto Consejero Presidencial para la Reintegración (Alejandro Eder Garcés), corroboramos que a finales del año 2010 el proceso era considerado en buenos términos, con avances dentro de la experiencia con comunidades de desmovilizados, sus familias y algo con poblaciones que habían sido victimizadas, pero los ajustes se debían realizar, especialmente en materia económica, pues era donde ponían más énfasis quienes se beneficiaban del proceso.

139. Desde la perspectiva de la misma ACR, transformarse de Alta Consejería a una Agencia de Estado es garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la reintegración. En este sentido administrativo, la ACR cuenta, desde 2011, con mayor autonomía en la administración, financiera y presupuestal, y con una estructura organizacional más sólida (ACR, 2014).

Hemos ido avanzando en el Proceso de Reintegración. El promedio que tenemos es de siete reintegraciones en un día. Llegan al Programa de Ayuda Humanitaria del Desmovilizado y luego son dirigidos a la ACR.

Mi percepción es el avance que existe en el Proceso. Aunque tenemos que hacer un ajuste en la reintegración económica, porque además de darle al reintegrado un ambiente familiar, también se le debe dar un ambiente laboral. Los procesos productivos que tienen los reintegrados no tienen una visión a largo plazo; los reintegrados deben ser preparados para competir con otros Proyectos productivos.

Desde la Reintegración social que incluye salud, educación y psicosocial; se debe motivar a los reintegrados para que no solo asistan por el dinero que se les paga.

El lema con el que apoyaron el trabajo en estos primeros años fue: *La reintegración. El camino hacia la paz*. A través de las diferentes unidades en todo el país, focalizando su acción por regiones con ciudades más o menos centrales para el acceso de los participantes, crearon unidades de apoyo en los diversos programas, entraron en trabajo con entidades públicas (especialmente con alcaldías y gobernaciones), presentaron resultados a través de los avances de los excombatientes que mejor se adaptaban al proceso y, con mucho fuerza, desplegaron una publicidad por medios de comunicación y material impreso como trípticos donde explicaban la ruta de reintegración, los beneficios para los participantes, los programas de acompañamiento psicosocial, formación para el trabajo, generación de ingresos (a través de contactos para trabajo y propuestas de negocios), acceso a la salud básica, y cómo el sector privado podía involucrarse para apoyar este proceso.

También promovieron campañas publicitarias a través de postales, plegables, etc., tales como “Yo soy amigo de la reintegración”, “a mi libertad no pienso renunciar”. A su vez, la ACR tuvo un programa institucional a las 6:00 p.m., todos los domingos, por televisión, y a las 8:30 p.m., por radio. Aprovecharon las redes sociales con una página por *flickr* y *Facebook*. Otra manera de divulgar la dinámica del proceso, en un intento de llegar al corazón del país, también publicaron un pequeño “boletín informativo”.

4.2.2. Hacia un marco de lo institucional en Colombia

Como lo trabajamos en los casos de Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua, el diseño de este llamado *modelo ideal* en perspectiva de ir hacia la urgente necesidad de diseñar una política pública de reconciliación social, el insumo de lo institucional rompe los esquemas de lo organizacional y asume, en perspectiva de políticas públicas, roles que no se limitan solo a lo constitucional o institucional, sino que abarca entornos económicos o sociales, tal como lo esbozamos con Parsons (2007). Para el caso de la salida alternativa al conflicto y la violencia, a través de la

institucionalización de la reconciliación social como política, no solo se enmarca en el diseño de acuerdos de cese de hostilidades o propuestas de “ventajas” para quienes acceden ingresar a dinámicas distintas a la guerra, sino que contiene estructuras de fondo que no pueden desconocerse al momento de ir a las raíces de lo que suscitó la conflictividad y la violencia.

Los objetivos que se traza una sociedad que busca reconstruirse después de años de destrucción pueden gestar procesos de institucionalismo marcado por “acuerdos mínimos” en los que las creencias fundamenten ese nuevo horizonte de sentido social que se desea crear en los procesos que posibiliten la reconciliación social. En Colombia la historia ha dejado experiencias institucionales de búsqueda de salidas alternativas al conflicto y la violencia, tal como lo hemos señalado en este capítulo, pero siempre los “acuerdos sectorizados” han dejado un cúmulo de sombras que no permiten encontrar el punto álgido de repuesta. El recrudecimiento de la violencia, las nuevas formas de acción de los grupos al margen de la ley y el mantenimiento de las fallas estructurales a nivel socio-económico no han permitido que los procesos tengan un efectivo benéfico para palpar la “sensación de paz”.

Entre los años 2005 y 2010, aunque hubo un tiempo previo de conversaciones (2003 – 2005), el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez mezcló la política gubernamental de la fuerza ante los grupos que actúan fuera del marco de la ley y los acercamientos con algunos de ellos para vislumbrar la posibilidad de una salida dialogada. Lo más “acertado” se logró con las llamadas AUC, tal como lo hemos venido describiendo, según la perspectiva del gobierno y lo que la comunidad internacional entendió como el “desmonte” de factores causantes de enfrentamientos en el país. La evaluación de esos primeros ya la asumiremos con el análisis del trabajo de campo realizado al respecto. Durante el mismo período los acercamientos con el ELN no dieron mayores resultados, rompiéndose la iniciativa en el año de 2007 a 2008. Con las FARC el enfrentamiento sí fue más bélico y la seguridad democrática avanzó hasta la recuperación del país, llevando a Álvaro Uribe a un segundo período de gobierno entre 2006 y 2010.

La Ley 975/2005 es el marco institucional que hemos ubicado en perspectiva de los objetivos de esta investigación. Estructuralmente ofreció, y aún ofrece, una serie de mecanismos e instrumentos que brindaron la configuración de un proceso distinto, más allá de simples acuerdos y ofrecimientos de amnistías, donde lo institucional tomó luces organizacionales, de principios y deberes fundamentales. Por ejemplo, por primera vez en un proceso en Colombia la amnistía no es objeto central de acuerdos, sino que se asumen los mecanismos de justicia transicional de verdad, justicia y reparación. Por otro lado, la visibilización de las víctimas como sujetos activos de derechos, deberes y clamor de responsabilidad social es una novedad

que no puede desconocerse al momento de establecer los parámetros de lo institucional en el caso de Colombia.

El marco de lo institucional en Colombia, planteado por el Proceso de Justicia y Paz, está dado por la misma Ley 975/2005, pero no se limita a un conjunto de artículos, a la par del conjunto de decretos reglamentarios y todo el conjunto de normas que hemos esbozado con anterioridad dentro de la estructura misma de la dinámica hacia la apuesta por la paz con la oferta de desmovilización, desarme y reintegración, sino que el camino hacia una política pública en esta temática demanda la definición, aclaración e implementación de principios rectores sobre los cuales se garantice lo justo, lo efectivo, lo eficaz y la no repetición de hechos, con lo que, aunque no se resuelva de raíz todo, sí se sustenta una reconstrucción de lo común.

En el artículo 4 de la Ley 975/2005 se consagran estos principios rectores de lo que define lo institucional en la propuesta que Colombia ha hecho para la búsqueda de la paz desde esta perspectiva de Justicia y Paz: derecho a la verdad, la justicia, la reparación y el debido proceso. En Sudáfrica la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al lado de la Comisión Nacional de Paz y, en El Salvador y Nicaragua, los procesos de transición democrática marcaron la pauta de lo institucional en visión estructural. En los tres países trabajados la pauta eje estuvo dada por la justicia que, en cada circunstancia, fue gestionada a través de aciertos y desaciertos que nos van a permitir encontrar sendas hacia esa política pública como necesidad imperiosa de procesos de reconstrucción social.

La verdad, la justicia y la reparación son señalados como ejes institucionales de un marco jurídico que favorece a las víctimas. A renglón seguido, el mismo artículo indica que los ex-combatientes que se cobijen para el llamado proceso de Justicia y Paz tienen derecho al debido proceso y a las garantías judiciales. En suma, el debido proceso y las garantías judiciales también serán objeto del derecho de víctimas.

4.2.2.1. El derecho a la verdad desde la ley 975 de 2005

Este aspecto está definido en el artículo 7 de la misma ley. Hace explicitación de términos en cuanto el derecho a la verdad es un derecho de toda la sociedad, pues ha sido fragmentado por la violencia, pero es especialmente un derecho inalienable que no puede desconocerse en este tipo de dinámicas. A renglón seguido expresa que son las víctimas las que de manera especial deben acceder a este principio rector orientado hacia la reconciliación social. La información desde donde se esperan los insumos para construir esa verdad es de los grupos al margen

de la ley, quienes deben dar datos sobre los actos en los que cometieron delitos y que motivaron la victimización respectiva, el paradero de los secuestrados y de desaparecidos forzosamente.

Para que lo anterior se lleve a cabo dentro de los parámetros legales, con el debido respeto de las personas y haciendo efectivo el ejercicio del derecho, los procesos judiciales deben promover las investigaciones y dar la información respectiva a los implicados en calidad de víctimas.¹⁴⁰

Un elemento que favorece la apertura de otros espacios o mecanismos para la búsqueda de la verdad lo estipula el artículo al señalar que en un período posterior se pueden aplicar otros instrumentos para el logro de obtener la verdad. En este marco, se puede pensar en el diseño de una comisión de la verdad para el caso colombiano o comisiones de investigación al respecto. El esclarecimiento de la verdad está claramente tipificado en el artículo 15 de la Ley 975/2005. Esta se encuentra en manos de las autoridades y sobre los hechos objeto de investigación, garantizando la defensa de los excombatientes.

A este derecho hecho procedimiento, la directriz que abre la posibilidad de implementar otros mecanismos para esclarecer la verdad, se suma la dimensión de la *memoria histórica* que se suele asumir en este tipo de procesos y que la ley estipula en el capítulo X, bajo el título *Conservación de Archivos*. Aunque la norma lo tome desde esa perspectiva, esta investigación considera que es más importante centrar la atención al respecto en el *Deber de la Memoria* que se señala en el artículo 56. Este deber, deja claramente establecido la ley, es tarea del Estado para conocer causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley. Todo dentro de procedimientos idóneos.

Verdad–narración–conocimiento y memoria histórica se configuran en una dinámica relacional que abre las posibilidades del acceso a la vida e historia de seres humanos, individual o colectivamente configurados, sujetos de acciones colectivas que permiten la reconstrucción social. La ley no señala expresamente esta dinámica, pero se puede deducir para objeto de esta investigación desde lo trabajado en los casos de Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua. La manera como la Ley de Justicia y Paz asume la dinámica entre verdad y memoria está en la preservación de la historia, pero se centra más en lo procedimental en materia judicial y cuidado de

140. La ley 975/2005 (artículo 17) creó la figura de las llamadas “versiones libres” como espacios en los que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, INPEC, cita a los postulados (desmovilizados privados de la libertad) para que rindan indagatoria ante la justicia colombiana y ante las víctimas. Es importante anotar que antes de este ejercicio el Fiscal Delegado del caso respectivo ha hecho indagatorias preliminares. Este proceso lo reglamentó el Decreto 4760 de diciembre 30 de 2005 (Fiscalía, 2013). Posteriormente fue reglamentado con más precisión por los Decretos 2898 de 29 de agosto de 2006, 4417 de 7 de diciembre de 2006 y 315 de 7 de febrero de 2007.

los archivos que en sí misma, en el sentido de garante hacia la paz de recordar con sentido de reconstrucción (memoria histórica).

4.2.2.2. El derecho a reparación desde la Ley 975 de 2005

La norma legisla este derecho haciendo referencia al acceso que las víctimas deben tener a recomponer, material o simbólicamente, lo destruido por los actores en el conflicto. Por ello, el artículo 8 hace referencia a restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición como expresiones concretas del amplio concepto de reparación. Es un derecho que recae en beneficio de las víctimas y demanda de parte de los excombatientes compromisos y responsabilidades. Cada uno de estos instrumentos que haría factible la reparación ya fueron citados con anterioridad en este mismo capítulo.

Con el propósito de dejar más explícito este derecho que la ley ofrece para las víctimas, el Decreto 3391 de 29 de septiembre de 2006 reglamentó con más precisión la reparación que se deriva de la misma dinámica del Proceso de Justicia y Paz. Esta reparación, señala el decreto, podía ser individual, colectiva o simbólica, dejando claro que no solo hace referencia a la dimensión económica, sino a la búsqueda de reparar integralmente a quienes fueron victimizados. Igualmente, el decreto asignó como tarea de la CNRR, para ese momento del proceso, la formulación de la reparación bajo criterios de proporcionalidad restaurativa para que las medidas que se tomen al respecto estén dentro del marco de lo justo. En lo que respecta a la reparación colectiva,¹⁴¹ el decreto señala que es el mecanismo más idóneo para resarcir a las comunidades que fueron masivamente atacadas, lo que permitiría la reconstrucción psicosocial del grupo humano (Fiscalía, 2005).

Frente al caso sudafricano y los dos centroamericanos, el colombiano se diferencia en cuanto que la iniciativa surge de un marco normativo que sustenta un proceso de DDR (desmovilización, desarme y reintegración) que surge entre dos partes, pero en medio aún de enfrentamientos con otras partes. En los primeros casos trabajados en el capítulo 3 de este texto, los acuerdos y el cese de hostilidades permitieron el inicio de trabajos de comisiones de la verdad, desde donde se derivaron las sugerencias de reparación para las víctimas. Por ejemplo, en Sudáfrica,

141. En el artículo 49 se estipula que estas medidas están dirigidas a recuperar la institucionalidad del Estado Social de Derecho, a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por la violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia.

El Comité de Reparación y Rehabilitación subrayó los principios generales de este deber hacia las víctimas: 1) Reparación: el derecho a una compensación justa y adecuada; 2) Restitución: el derecho al restablecimiento de la situación anterior a la violación de los derechos; 3) Rehabilitación: el derecho a la atención médica y psicológica, al igual que otros servicios y/o intervenciones a nivel individual o comunitario que facilitarían la rehabilitación íntegra; 5) Restablecimiento de la dignidad: el derecho del individuo o la comunidad al reconocimiento de la violación cometida y el derecho al sentido de la vida; 6) Garantía de no repetición: el derecho a una garantía, mediante una intervención y reforma legislativas y/o institucionales apropiadas, de que los hechos violentos no se repetirán (Kiza, 2010, citado por GTZ, 2010, p. 29).

No pretendemos presentar modelos de medidas de reparación como los instrumentos más eficaces en la tarea que se han propuesto, pues reconocemos que las fallas han estado presentes a lo largo y ancho del mundo. Estamos presentando las experiencias que casos como Sudáfrica y Colombia han tenido en esta materia desde la perspectiva normativa e institucional, sin desconocer la complejidad que conllevan este tipo de trabajos en pos de la reconstrucción de sociedades que han sido fragmentadas por muchos años de violencia. Este tipo de iniciativas demandan de la voluntad política un compromiso más allá de aceptar y publicar las conclusiones de las comisiones o los comités respectivos.

En este contexto, Florián Huber (2010) explica que la normatividad que sustenta el Proceso de Justicia y Paz (Ley 975/2005) prevé cuatro mecanismos de reparación judicial, institucional y administrativo. A nivel judicial, las personas victimizadas por desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley que están dentro del proceso de Justicia y Paz (identificados y condenados) pueden acceder a la figura del *incidente de reparación* ante la Sala del Tribunal de Justicia y Paz (Artículo 23). En el artículo 42 se señala la reparación vía judicial para víctimas sin victimario identificado a través del incidente de reparación especial, fuera de un proceso penal (a través del Fondo de Reparación) (Huber, 2010, citado por GTZ, 2010, pp. 50–51).

A las dos anteriores formas de reparación, la ley suma la creación de un programa colectivo de reparación con acciones que permitan recuperar la institucionalidad, recuperar y promover derechos de los ciudadanos afectados por el conflicto, y el reconocimiento/dignificación de las víctimas. Por último, la ley (artículo 55) deja abierto el espacio para la creación de un programa de reparación individual por vía administrativa, lo que se concreta a través de los Decretos Reglamentarios 1290 de 22 de abril de 2008. Trataremos de esbozar someramente estos instrumentos como insumo de nuestras reflexiones, pero no ameritan una exégesis jurídica propiamente dicha por no ser objeto de esta investigación.

El Proceso de Justicia y Paz desde esta normatividad definió la reparación individual administrativa de la siguiente manera: “De acuerdo con el principio de solidaridad, se entiende por reparación individual administrativa el conjunto de medidas de reparación que el Estado reconoce a las víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales, por hechos atribuibles a los grupos organizados al margen de la ley” (Artículo 2. Decreto 1290 de 22 de abril de 2008). El programa derivado de esta normatividad pretendía cubrir los derechos de la vida, integridad física, salud física y mental, libertad individual y libertad sexual. Igualmente, señalaba las clases de medidas para este tipo de reparación: restitución, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Es decir, la misma Ley 975/2005, junto a los decretos reglamentarios, asume el lenguaje común y va definiendo gradualmente los procesos de reparación y cómo las víctimas pueden acceder a cada uno de estos ámbitos.

La llamada reparación integral se dispone en el artículo 23 de la Ley 975/2005. Por este acto se entiende el proceso que se inicia cuando en la audiencia la sala del Tribunal Superior de Distrito declara la legalidad de aceptación de cargos, previa solicitud de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público, el magistrado ponente abre el llamado “incidente de reparación integral” que debería cursar en audiencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes. Esta audiencia debía iniciar con intervención de la víctima, o su representante legal o abogado de oficio, para que expresara la forma de reparación que pretendía indicando pruebas que ameriten la solicitud. Posteriormente, la sala debía informar al imputado y acompañaba proceso de conciliación.

En el capítulo IX (artículos 42 al 49)¹⁴² la Ley de Justicia y Paz marca la pauta en lo referente a este derecho de las víctimas. Ese conjunto de articulados parte del deber de reparar que tienen los excombatientes que se cobijen bajo la propuesta. Esto lo podrían hacer directamente al momento de declarar o, si es por parte del grupo armado en bloque, la reparación recaería sobre el Fondo de Reparación.

Respecto a las garantías de no repetición, el mismo Decreto 3391 de 2006 estipuló las medidas de seguimiento y control que la Policía Nacional debía tener sobre los desmovilizados que estaban en el programa de reinserción. Cabe anotar que este es uno de los puntos más vulnerables en materia de gestión, por cuanto la dificultad de monitoreo de cada uno de los excombatientes aumenta a medida que crece el número de desmovilizados y la seguridad tiene otras esferas que demandan trabajo. Pero, es bueno señalar que la ley lo estipula. Otro asunto es evaluar hasta qué punto fue efectivo. A su vez, se señalan como actos de reparación:

142. El Decreto 3391 de 2006 puntualiza lo referente a la responsabilidad de reparar, los mecanismos para la reparación de víctimas y la determinación judicial para la reparación.

Son actos de reparación integral los siguientes: 1) La entrega al Estado de bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de las víctimas. 2) La declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas más vinculadas con ella. 3) El reconocimiento público de haber causado daños a las víctimas, la declaración pública de arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales conductas punibles. 4) La colaboración eficaz para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y la localización de los cadáveres de las víctimas. 5) La búsqueda de los desaparecidos y de los restos de personas muertas, y la ayuda para identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias (Ley 975/2005, Artículo 44).

A lo anterior se suman las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición que la misma ley delimita en el artículo 48. Estas deberán incluir:

1) La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial, en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad. 2) La búsqueda de los desaparecidos o de las personas muertas y la ayuda para identificarlas y volverlas a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentra principalmente a cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. 3) La decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en primer grado de consanguinidad. 4) La disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 5) La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones, todo lo cual estará a cargo de los órganos judiciales que intervengan en los procesos de que trata la presente ley. 6) La sala competente del Tribunal Superior de Distrito judicial podrá ordenar conmemoraciones, homenajes y reconocimiento a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones podrá recomendar a los órganos políticos o de gobierno de los distintos niveles, la adopción de este tipo de medidas. 7) La prevención de violaciones de derechos humanos. 49.8 La asistencia a cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los responsables de las violaciones. Esta medida podrá ser impuesta a los condenados por la sala competente Tribunal Superior de Distrito Judicial.

En el marco procesal del esquema de reparación propuesto por el gobierno de Uribe contenido en la Ley de Justicia y Paz, la carga probatoria siempre estuvo en cabeza de las víctimas, por ejemplo, cuando la víctima era de un agente estatal tan solo para acreditarse como víctima debía demostrarle al Estado su condición (así lo contempló el Decreto 1290 de 2008, Reparación por Vía Administrativa). Así pues, si el modelo legislativo dejaba toda la carga procesal en cabeza de las víctimas, las cuales muchas veces no sabían ni siquiera leer, entonces difícilmente se abordaría la reconstrucción del tejido social roto por la violencia. Lo anterior denota que se estaba lejos de cerrar el círculo de violencia generado por el conflicto armado, lo cual consecuentemente evidencia la no intención de promover una política pública conducente a una paz sostenible.

4.2.2.3. El derecho a la justicia desde la Ley 975 de 2005

El marco fundante de este tipo de iniciativas está dado en el elemento de la justicia. Es como una especie de bisagra desde donde es posible el acceso a la dinámica conducente a la paz, evitando que el silencio y la impunidad imperen en tiempos posteriores a los acuerdos o a la implementación de reformas estructurales en las que se considera importante la reconstrucción social. La justicia conlleva elementos procesales que la ley señala, pero también contiene principios sobre los cuales se asientan lo justo y la efectividad de esta clase de procesos.

El derecho de la justicia en dinámicas conducentes a la paz pertenece a la esfera de lo humano individual y colectivo de quienes han padecido los efectos de la violencia (víctimas), pero también de quienes han cometido actos de barbarie (victimarios) e, incluso, de la sociedad en general que ha visto la fractura de lo común como un factor determinante. Por parte del Estado es una obligación que emana de la misma configuración del poder político en el sistema constitucional que nos cohesiona como sociedad.

En la misma definición del objeto de la ley aparece explícito. La justicia como proceso facilita la dinámica hacia la paz y la reincorporación de los excombatientes, posibilitando que el derecho de las víctimas prime, en la medida en que la responsabilidad de quienes ocasionaron daño se hace público y se delimita la pena, junto a la reparación. En este sentido, lo procedimental de la justicia como derecho está definido en el artículo 2 al señalar que la investigación, el procesamiento y la sanción, junto a los beneficios judiciales a que dé lugar, están regulados por la misma normatividad y buscan la reconciliación nacional.

La justicia como derecho en este tipo de procesos puede también conllevar amnistías, indultos o cualquier otro beneficio para quienes colaboren con ella misma. En este caso, la normatividad colombiana se enmarca en la Ley 782 de 2002 y en perspectiva de un marco internacional de leyes al respecto. Esta serie de medidas adoptadas por Colombia para asumir lo procedimental en materia de justicia dentro del esquema de Justicia y Paz fue definido por el Decreto 3391 de 29 de septiembre de 2006 como la consagración de “una política criminal de justicia restaurativa para la transición hacia el logro de una paz sostenible”.

Esta dimensión procedimental de la justicia como derecho va acompañada de principios que se fundan en derechos de las víctimas y de los excombatientes, así como en deberes. Por parte de los excombatientes, el compromiso de desmovilizarse e iniciar el proceso de reinserción constituye un deber que asume derechos ante la sociedad y la justicia. Así mismo, son sujetos de derechos en lo procedimental. Este acuerdo lleva implícito el deber de cesar la violencia y el derecho de la convivencia pacífica que, en últimas, son resultados de lo procesual/lo temporal.

A lo anterior, el deber de no repetir actos violentos se constituye en el derecho a la paz que la sociedad tiene inherente y que ha sido violado por la agresión de los grupos al margen de la ley.

Con este entramado de deberes y derechos que conlleva la justicia como derecho, la recuperación de la institucionalidad es un derecho de los ciudadanos en cuanto constituyentes de un entramado social y es un deber del Estado garantizarla. De ahí, la propuesta de los gobiernos por abrir alternativas al conflicto y la violencia en todo momento y circunstancia. Es lo que se conoce como recuperación del Estado de derecho o del Estado social de derecho, según el contexto.

Pero, ¿cómo hacer tangible este cruce de variables de la justicia como derecho más allá de lo procedimental, teniendo presente los principios fundantes? Pareciera que la ley centrara su atención en que la justicia beneficiara solo a las víctimas, es, incluso, una lectura en la gente del común. Es decir, hay justicia cuando el victimario declara, asume responsabilidades y paga la pena que merece por el delito cometido. No en vano la ley misma señala que la garantía de los derechos de verdad, justicia y reparación debe ser para las víctimas. Pero la posibilidad de la alternatividad penal (artículo 3) también configura una dinámica de deberes y derechos para el excombatiente. De manera que manifestar la verdad y reparar o facilitar los medios para la reparación, junto al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la firma de los acuerdos, conlleva una justicia en la que el excombatiente también es sujeto activo de derechos.

A lo anterior se suma el derecho al debido proceso como un instrumento más de la justicia en dinámicas conducentes a la paz. El debido proceso va de la mano del respeto de las garantías judiciales de los procesados. Se mezclan lo procedimental con la dignidad de la persona humana, aun en condición de excombatiente. En este mismo orden de ideas, el Decreto 3391 de 29 de septiembre de 2006 define los programas restaurativos para la reconciliación nacional (artículo 19). El desarrollo humano y social es para las víctimas, las comunidades y los excombatientes.¹⁴³ De ahí la definición de justicia restaurativa para la transición y, por ende, lo justo y efectivo de estos procesos.

143. El artículo del decreto señala, entre otras opciones: *a)* propiciar la reconstrucción personal de la víctima y el victimario como sujetos sociales, de las relaciones entre ellos, y de ellos con la comunidad, *b)* recuperar la situación emocional de la población afectada, *c)* fortalecer las organizaciones sociales, a través de capacitación especializada y acompañamiento en los procesos de reconciliación que estimulen la participación activa y responsable de las víctimas, las comunidades y los ofensores, *d)* propender por la elaboración de la memoria histórica del proceso de reconciliación, *e)* propiciar el restablecimiento de las víctimas en el plano emocional físico y social, *f)* impulsar la vinculación de las víctimas y de los desmovilizados a proyectos productivos o programas de generación de ingresos y capacitación vocacional que posibiliten su acceso a empleos productivos, estimulando el apoyo por parte del sector privado y la sociedad civil para facilitar su reinserción social. Estos programas se diseñarán e implementarán con la colaboración de las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil y religiosas y podrán ser operados por la Defensoría del Pueblo, por organizaciones civiles autorizadas por el gobierno nacional, casas de justicia y centros de convivencia ciudadana y en los establecimientos de reclusión para justicia y paz en los que se cumpla la privación efectiva de la libertad de los desmovilizados que se acojan a la Ley 975 de 2005. Lo anterior, sin perjuicio de los que adelante Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

El texto de la Ley 975/2005, señala en el artículo 6 que este derecho a la justicia, como deber del Estado, conlleva investigación efectiva para identificar, capturar y sancionar a los responsables de crímenes en el escenario de conflicto y violencia, pero también garantizarle a las víctimas el acceso a los recursos que busquen la reparación del daño y tomar medidas para no repetir actos. No añade más elementos, aunque todo el texto de la ley es un compilado de orientaciones acerca de cómo es la efectividad de este tipo de definiciones. Desde los requisitos para la desmovilización grupal o individual, pasando por los principios procesales¹⁴⁴ y todo lo que contienen en sí mismos, hasta la posibilidad de acuerdos humanitarios con los grupos que se desmovilicen, la ley plantea la justicia en términos de lo justo fundado en la recuperación de sujetos, institucionalidad y restablecimiento de lo común. La efectividad dependerá de la perspectiva evaluativa de quienes han vivido el proceso en este marco legal y se han visto beneficiados o perjudicados por las directrices. Hasta este momento, la descripción de cómo el proceso fue planteado y desde dónde inició la apuesta por la paz, una vez más en el contexto colombiano, nos da un acercamiento a los elementos esenciales que se plantean en dinámicas alternativas al conflicto y la violencia, tal como lo señalamos en los casos de Sudáfrica, El Salvador y Nicaragua. El caso colombiano nos brinda la posibilidad de aproximarnos a los efectos reales de esta iniciativa en sus primeros cinco años de implementación (2005 – 2010).

La justicia y la paz, desde hace muchos años, son aspiraciones de la población colombiana. Pero más que deseos, la justicia y la paz son derechos inalienables de todas las personas y de todos los pueblos en el mundo. Tales derechos están estrechamente ligados entre sí, ambos son vitales para hacer digna la convivencia en la sociedad y para alcanzar la democracia. Entre los fines esenciales de un Estado de derecho está el hacer realidad la justicia y sobre esta base construir o mantener la paz; por consiguiente, los esfuerzos de los gobernantes deben estar enfocados hacia tales propósito (Díaz & Marín, 2008, p. 10).

En este contexto, ¿El entramado estructural e institucional que propone la Ley 975/2005 es la única garantía para que la justicia sea realidad y desde allí construir la paz? Aproximarse a algunos de sus actores puede permitirnos hallar respuestas en sus primeros años de implementación y, desde allí, vislumbrar un *hacia una política pública de reconciliación social*.

4.3. Aproximaciones a los efectos de un proceso (2005 – 2010)

En febrero de 2010 la organización internacional Human Rights Watch publicó un informe titulado *Herederos de los paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia*, (Human Rights Watch, 2010) en el que presenta la forma de violencia que se inició en Colombia a partir

144. Estos son oralidad (artículo 12), celeridad (artículo 13), defensa (artículo 14) y esclarecimiento de la verdad (artículo 15).

de 2007 y 2008, producto de los fallos que el proceso de desmovilización, bajo el marco de la Ley 975/2005, trajo consigo. En dicho informe, la organización aborda la cuestión, entre otras, de en qué medida se relaciona el surgimiento de los grupos sucesores con el mal diseño y la inadecuada ejecución por parte del gobierno del proceso de desmovilización de numeros líderes y tropas de las AUC. Durante dos años realizaron un trabajo de campo en el territorio nacional para concluir que los grupos llamados BACRIM (Bandas Criminales)¹⁴⁵ son “continuación de algunos bloques o grupos paramilitares”. Los jefes de estos grupos fueron mandos medios de grupos que nunca se desmovilizaron o que continuaron cometiendo actos de delictivos, aún en medio del proceso de Justicia y Paz. Iniciaron operaciones de forma similar a los ex AUC: “controlan territorios mediante amenaza y extorsión, participan en narcotráfico y otras actividades delictivas, y cometen abusos generalizados contra civiles” (HRW, 2010).

Las fallas estructurales a nivel social en el país, causa primordial del conflicto en Colombia, junto a las grietas que este proceso tuvo entre 2005 y 2010, centradas en el no desmantelamiento de las estructuras criminales, ni de las redes de apoyo económico y político que tenían los paramilitares, sostuvieron una base desde donde pudieron organizarse en esta nueva perspectiva quienes no accedieron al proceso o no fueron controlados debidamente mientras iniciaron la dinámica de desmovilización, señala el informe. Para efectos de esta investigación, el marco normativo de la Ley de Justicia y Paz, junto con los decretos reglamentarios y el entramado organizacional que creó, además de los respectivos programas de reinserción y atención a desmovilizados, acompañado del proceso de atención a víctimas, no resolvieron el problema de fondo.

La prisa del gobierno era ofrecer un contexto político de búsqueda de soluciones frente a la guerra, mostrando resultados a la opinión pública, a la comunidad internacional, sobre todo ante la solicitud de Estados Unidos respecto al efecto del Plan Colombia, y crear una cortina de humo ante el ascenso militar en la dinámica de la seguridad democrática. Por un lado, dinero para la seguridad y defensa, por el otro, apertura a las conversaciones para acordar el desmantelamiento de los grupos al margen de la ley en perspectiva paramilitar.

Esta percepción de HRW, en el año 2010, no es exclusiva de esta organización o de este tipo de perspectivas. Algunos investigadores sociales también aportaron a este análisis de la etapa de pos-desmovilización de las AUC en Colombia y esos primeros años de implementación de la apuesta del gobierno a través del proceso de Justicia y Paz.

145. Estos grupos fueron referenciados por el gobierno con este nombre. Las fuerzas militares y armadas los catalogaron de esta manera en todo proceso de confrontación. Para el año 2010 eran conocidos con nombres como los Urabeños, los Rastrojos, el ERPAC, los Paisas, los Machos, Nueva Generación, el Grupo del Magdalena Medio y Renacer. HRW también afirmó en ese informe la existencia de un grupos llamado las Águilas Negras, que la Policía Nacional no incluía en ese momento en la lista (HRW, 2010).

Desde comienzos del 2008 las acciones unilaterales por año de los llamados grupos neo-paramilitares han sido mayores que las realizadas por las FARC [...] ¿Es esto una respuesta a la extradición de los jefes paras en abril del años pasado o es solo un resultado de la ausencia de una verdadera política de seguridad y reconciliación? Lo que se observa es que el gobierno de la seguridad democrática no tiene una política para enfrentar el problema de crecimiento de los grupos surgidos luego de la desmovilización de las AUC, y su creciente influencia en actividades ilegales urbanas. El gobierno se aferra a lo que ya sabe, le da réditos electorales y lo mantiene arriba en las encuestas: la derrota y humillación de las FARC (Romero & Arias, 2010).

En línea similar, la Comisión Colombiana de Juristas presentó informes de análisis y seguimiento a la implementación de la Ley 975/2005 en el año 2010. Por ejemplo, en el segundo informe (2010), estadísticamente se muestra cómo se fue incumpliendo de manera sistemática la promesa del cese de hostilidades por parte de los desmovilizados grupos de AUC, en relación con el derecho a la vida.

Se ha registrado que, entre la fecha de inicio de cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares el 1 de diciembre de 2002 y el 30 de junio de 2008, por los menos 4.300 personas han sido asesinadas o desaparecidas por fuera de combate por grupos paramilitares. Las violaciones al derecho a la vida demuestran que lamentablemente los grupos paramilitares continúan existiendo y que siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos bajo los mismos patrones y agrediendo a los mismos sectores o grupos de la sociedad que han venido atacando desde sus orígenes (Díaz & Gallón, 2010, p, 25).

Incluso, a 2010 el Estado colombiano había sido condenado como responsable por la creación de grupos de paramilitares y, desde allí, por crímenes cometidos por este tipo de grupos en casos de desaparición forzada de 19 comerciantes (sentencia del 5 de julio de 2004), la masacre de Mapiripán (sentencia del 15 de septiembre de 2005), los casos de la Granja y El Aro (sentencia del 1 de julio de 2006) y en la masacre de la Rochela (sentencia del 11 de mayo de 2007) (Díaz & Gallón, 2010, p, 55). Aunque estos crímenes fueron anteriores al proceso de desmovilización, se manifiesta cómo la propuesta de la Ley 975/2005 mantuvo la tensión explícita en muchos sectores sociales de Colombia en esos primeros cinco años de implementación. El recurso constante a la historia de crímenes, desapariciones forzadas, desplazamiento de poblaciones enteras en zonas rurales, connivencia con las Fuerzas Militares y Armadas, al compás de alianzas con políticos regionales, es una suma de títulos o denominaciones para identificar la confrontación que este proceso suscitó en Colombia.

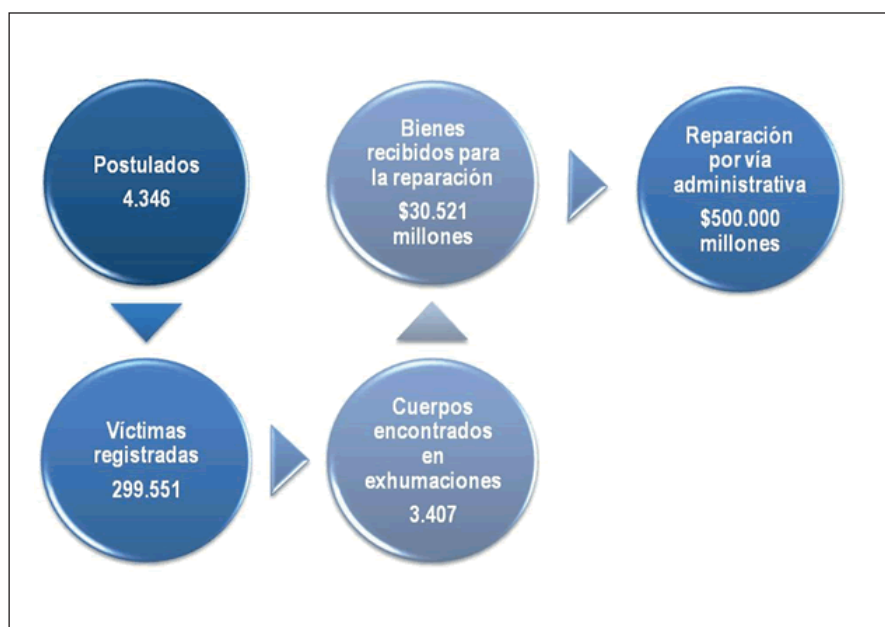
Claudia López Hernández (2010) editó un trabajo conjunto de académicos, investigadores y comunicadores sociales (medios de comunicación) en el que presenta la manera como el país colombiano fue captado sistemática por los grupos la margen de la ley (paramilitares y guerri-

llas), en alianzas estratégicas con militares, policías y políticos, que regional y localmente fragmentaron el territorio nacional tras los intereses individuales que, de manera grupal, marcaron la historia del conflicto armado de más de 65 años de existencia.

En buena parte de la formación de imaginarios que realizaron los grupos paramilitares y que ahora realizan los llamados grupos emergentes, se ven tres tendencias. En primer lugar, un discurso contrainsurgente que, en muchos casos, no se cumplió, pero que sirvió de base para aglutinar una importante base de apoyo. Una segunda tendencia es la crítica al Estado colombiano, al mismo tiempo que se adelantaba su capura y cooptación [...] Por último, el paramilitarismo colombiano logró autonomía financiera con respecto al Estado y las elites dirigentes que promovieron su creación [...] Desde su origen, los paramilitares contaron con el narcotráfico como factor de independencia económica y armada (López, 2010, pp, 90 – 91).

Pero, más allá del ámbito académico e investigativo en esta temática, otro tipo de organizaciones del sector jurídico en Colombia, como la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), presentó un balance de resultados de la aplicación de la ley de Justicia y Paz a agosto de 2010 en los siguientes términos:

Ilustración 15. Ley de Justicia y Paz



Fuente: Balance de gestión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Julio de 2010. Informe de Gestión 2002 – 2010 del Ministerio del Interior y de Justicia. Fiscalía General de la Nación – Unidad de Justicia y Paz: número de exhumaciones con corte a 31 de julio de 2010. (CEJ, 2010)

Mientras las fuertes críticas al proceso se hacían presentes en materia de forma y fondo de la propuesta surgida desde el mismo gobierno con el diseño e impulso a la Ley 975, con la estructuración del mismo proceso, los entes gubernamentales presentaban resultados numéricos y estadísticos de la efectividad de la apuesta por la paz desde el marco de Justicia y Paz. En este informe de la CEJ que estamos citando, el número de miembros de las ex AUC desmovilizados ascendía a mediados del año 2010 a 31.810 (31.671 de los grupos paramilitares y 101 de las FARC). Pero, también se resalta que el número total de personas en este proceso era incierto. Las cifras no concordaban en términos generales. De allí se desprende que solo estaban como “postulados” (procesados por el marco legal de la 975/2005) 4.346 exmiembros de las AUC.

Respecto a esta serie de incongruencias en el manejo de datos y la efectividad del proceso, la dinámica de recolección de datos que este proyecto de investigación posibilitó brindó la posibilidad de acceder a un grupo de desmovilizados/“postulados” que se encontraban privados de la libertad en la cárcel de Valledupar (Cesar). El 21 de diciembre de 2010 se pudo dialogar con seis, de un total de siete que estaban en ese centro penitenciario, bajo el liderazgo de “El Samario”¹⁴⁶ (uno de los líderes del Bloque Norte de las AUC). Este grupo cuestionó los engaños que tenía el proceso hasta 2010, por ejemplo, “El Samario” sostiene que ellos no eran más de 2.700 efectivos en el Bloque, entonces, ¿De dónde afirma el gobierno que se desmovilizaron 5.000? Llegaron a afirmar que el “los acuerdos no se cumplieron. Tal es el caso de la desmovilización de los jefes a Estados Unidos” (Entrevista E1CNRR, 6P. Anexos, tabla 15).

Los medios de comunicación también asumieron el rol de análisis periodístico y presentación ante la opinión pública de la “síntesis de los primeros años” de Justicia y Paz como un momento en el cual las diferencias entre la lectura de aciertos que hacía el gobierno —con sus instituciones respectivas apoyándolo— y la de los desaciertos que presentaban ONG nacionales e internacionales, colectivos de abogados, la academia y centros de investigación social, crearon una zona gris que dejan esos cinco años de la propuesta de la Ley 975/2005, con una sensación de no saberse a ciencia cierta qué pasaba en Colombia. La imagen que se presentaba era de golpes certeros a la guerrilla, especialmente a las FARC, avances en la desmovilización de las AUC, conversaciones secretas con el ELN y la negación a aceptar que las fallas del Proceso de Justicia y Paz estaban al orden del día, llegando a reforzarse la repetición de los hechos a través de los nuevos grupos BACRIM, aunque el gobierno negara la existencia del paramilitarismo en Colombia desde 2005.

146. Su nombre es Alcides Mattos Tabares. Ingresó a las AUC en 1997. Sus versiones dentro del proceso de Justicia y Paz han puesto ante la opinión pública los nexos de empresas multinacionales extractoras de minería como la Drummond con paramilitares. (Verdadabierta.com, 2010).

La revista *Semana* publicó un análisis en febrero de 2010 titulado “¿Qué tanto ha funcionado Justicia y Paz?”, en el que precisamente se muestran las confusiones presentes en este momento respecto a la efectividad o no del proceso. Éxito y optimismo por un lado, fracaso y pesimismo, por el otro. Más allá de cifras, el cuestionamiento estaba en ¿ha sido exitoso el balance de verdad, justicia y reparación integrales?(Semana.com, 2010) Uno de los puntos que señala el artículo, punto que también tocó el grupo con el que se dialogó dentro de la recolección de datos de esta investigación, es la ruptura del acuerdo al desmovilizarse los jefes de las ex AUC (Mancuso, Don Berna, Jorge 40, entre otros), quienes dialogaron para los acuerdos para la desmovilización y se acogieron al proceso, pero que, al ir dando sus versiones, pusieron en tela de juicio la gestión de los gobierno nacional, regional y local, con lo que se provocó la repentina extradición en el año 2009, sin que existiera un tratado previo entre los dos gobiernos. En ese momento la lectura que hicieron los desmovilizados fue de incumplimiento de lo pactado y el silencio o la información incompleta o falsa llenaron los espacios de las llamadas versiones libres —mecanismo instaurado por la Ley 975/2005 como instrumento para apoyar la búsqueda de la verdad—.

La extradición de los ex jefes es entonces leída como incumplimiento. Al respecto, fue consultado el fiscal de Justicia y Paz n° 29 (Grupo 5)¹⁴⁷ quien aclaró que “El Gobierno hizo promesas que no se podían cumplir. Por ejemplo, los delitos de rebelión, la sedición y la asonada son delitos políticos, desde la Ley 975, pero la Corte Constitucional no los acogió en esa categoría de delitos políticos. El gobierno se comprometió a no extraditarlos, pues los que no tenían procesos judiciales quedaban sin problemas, pero la Corte Constitucional dice que sí hubo concierto para delinquir” (Entrevista E4FGN, LB. Anexos, tabla 42). La confrontación entre marcos institucionales respecto a la norma tampoco estuvo presente en estos primeros años del proceso.

A lo anterior se suma la ausencia de sentencias condenatorias (en el marco de Justicia y Paz). A 2010 no había sido condenado ningún ex jefe o ex miembro de los grupos por algún delito, dentro de la cantidad de crímenes. La sentencia que más avanzó y se definió fue la de Wilson Salazar Carrascal, alias “El Loro”, pero fue anulada el 31 de Julio de 2009 por la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Para el fiscal 29 (Entrevista E4FGN, LB. Anexos, tabla 42). El 29 de junio de 2010 la prensa colombiana hizo referencia a las primeras sentencias condenatorias dentro de este proceso para Uber Enrique Bánquez Martínez, alias

147. En ese momento era el Doctor Luis Isnardo Barrera. Fue entrevistado en la sede central de la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, el 23 de diciembre de 2010.

Juancho Dique, y Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino¹⁴⁸ de ocho años de cárcel, acorde con lo que señala la Ley 975/2005 en la alternatividad penal.(El colombiano.com, s.f.) Sin embargo, esta primera sentencia condenatoria fue apelada por las víctimas al no aceptar los montos de reparación administrativa que se les señaló en este proceso (incluía monto económico para cada familia y reconstrucción de zonas de beneficio público, tales como escuelas, centros de salud, etc.)(Verdadabierta.com, s.f.). Apenas el mes de abril de 2011 fue ratificada por la Corte la sentencia condenatoria de estos dos ex jefes paramilitares, después de superar el proceso de apelación que había sido interpuesto. (Russo, 2011)

En medio de estas contradictorias lecturas respecto a la dinámica que presentó para Colombia el proceso de Justicia y Paz, la pertinente búsqueda planteada en materia de *hacia dónde ir* después de largos períodos de conflicto y violencia se sustenta en la reconstrucción desde los institucionalismos histórico y normativo que permitieron que las acciones y motivaciones de los diferentes actores involucrados en las perspectivas y contextos de Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia demarcaran las líneas generales de opciones políticas que cada uno de estos países se han trazado en materia de reconstrucción social a través de la reconciliación social.

En el juego han entrado actores, relaciones entre ellos, creencias de cada parte y un trabajo de reordenamiento institucional, buscando la reconfiguración de lo roto por los enfrentamientos y todos los esquemas sociales que la conflictividad y la violencia dejan. Así las cosas, lo institucional en un período después de la fractura es la recomposición que la reconciliación social asumida como política pública puede brindar a través de los instrumentos éticos que demanda. Las decisiones políticas en este sentido deben contener un fin, direccionamiento y pertinencia fundada en los principios de lo que hace justos y efectivos estos procesos.

La dinámica del cambio de este tipo de procesos exige el acercamiento a actores, a sus creencias y a sus perspectivas, mas sin desconocer que la transformación también conlleva tiempos y espacios en los que se estancan los procesos, pues las diferencias se hacen presentes. Sin embargo, estas iniciativas asimismo motivan coyunturas críticas que pueden ser asumidas como impulsos fuertes de cambio, pero también reconociendo la experiencia que lega lo institucional a lo largo del tiempo o de otros contextos, tal como lo dejan estos cuatro casos escogidos en este trabajo.

148. Ambos fueron condenados por los hechos cometidos en tres caseríos de la región de Montes de María (Bolívar): Mampuján (2000), San Cayetano (2000) e Isla Múcura (Bolívar) (2003). Estos hechos fueron llevados a cabo por el Bloque Héroes de Montes de María, afectaron a 1.111 personas (1.081 por desplazamiento forzado, 11 por homicidio, 17 por secuestro y 2 por delitos contra el patrimonio). (Monroy, 2010).

En este orden de ideas, la cohesión puede apoyarse en los valores que lo normativo ofrece para que la recomposición social sea factible. Diálogos, negociaciones, acuerdos, procesos de DDR, reparaciones integrales, restituciones, búsquedas de la verdad (comisiones de la verdad, por ejemplo), amnistías, indultos, penas alternativas, entre tantas otras opciones, son ese conjunto de instrumentos que posibilitan el perfilar conductas de actores en períodos que apuntan hacia la reconciliación social. Es la búsqueda de normas, reglamentaciones y rutinas que abren el espacio para la reconfiguración de lo público. En términos de reconciliación social son la justicia, la reparación, la restitución, el papel de la memoria histórica, la no repetición de los hechos, etc. Cabe aclarar que esto va más allá de la simple norma como conjunto de articulados para lo procedimental en lo judicial.

Con el ánimo de completar este conjunto de variables y acercarnos al *hacia una política pública de reconciliación social*, el caso colombiano brindó oportunidades de un trabajo de campo realizado hasta donde se logró por motivos de seguridad personal, junto a la seguridad de los sujetos-objetos de estudio (desmovilizados, víctimas y funcionarios de entidades encargadas del Proceso de Justicia y Paz, hasta 2010). Metodológicamente lo esbozamos en la introducción y en los anexos se presentan los detalles y características de esos instrumentos. Ahora, abrimos el espacio para reflexionar conclusivamente la información recogida, reafirmando los puntos traídos a colación desde las críticas que recayeron sobre el proceso al finalizar el quinto año de su implementación.

4.3.1. Caracterización de los grupos objeto de estudio

Sustentados en los instrumentos metodológicos de *Grupos de Discusión (GD)* y las *Entrevistas Cualitativas (EC)* se recurrió a las entidades ejes del proceso propuesto por la Ley 975/2005: Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR), Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y un pequeño contacto con la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación.

Con el apoyo y la coordinación de la oficinas centrales en Bogotá, D.C. se tuvo acceso a las oficinas regionales de:

- Bogotá, D.C. (Oficinas nacional y región centro del país).
- Barrancabermeja (Santander). Brindó la posibilidad de acceder a San Pablo (Sur de Bolívar).
- Bucaramanga (Santander).

- Medellín (Antioquia).
- Montería (Córdoba). Brindó la posibilidad de acceder al municipio de Tierralta (Córdoba) y al corregimiento de Valencia (perteneciente a Tierralta, Córdoba).
- Cali (Valle).
- Villavicencio (Meta). Brindó la posibilidad de acceder al municipio de Granada (Meta).
- Valledupar (Cesar). Brindó la posibilidad de acceder a Riohacha (Guajira).

Esta distribución se realizó pensando en cubrir la mayor parte del territorio, aprovechando la organización territorial de las dos entidades a cargo del proceo. En la región del norte del país se logró acceder a Montería (Córdoba), Valledupar (Cesar) y Riohacha (Guajira). En la región oriental de Colombia se pudo llegar a Bucaramanga (Santander) y a Barrancabermeja (Santander), incluso entrando por esta zona al sur del departamento de Bolívar que, aunque es del Caribe, tiene territorio en la región del Magdalena Medio, con más fácil acceso a Barrancabermeja y a Bucaramanga que a la misma capital de Bolívar (Cartagena). Pero la extensión del territorio colombiano permite tener claro que el oriente también comprende la región llamada Llanos Orientales (con límites fronterizos con Venezuela y Brasil) que, por ser selvática, tuvo más presencia guerrillera y paramilitar, su ingreso es difícil por escasez de medios de comunicación expeditos y por seguridad. En este sentido solo se pudo acceder a Villavicencio (Meta) y al municipio de Granada (Meta). La región central se cubrió con trabajos en Medellín (Antioquia) y Bogotá, D.C.; finalmente, el suroccidente con el acceso a las oficinas en Cali (Valle).

En estas zonas se pudieron reunir en GD 130 excombatientes que estaban dentro del proceso. De esos, seis se encontraban dentro del esquema de “postulados” en la cárcel de Valledupar. Un grupo de 123 sí participó GD. No obstante, en total se logró tener contacto con 131 desmovilizados/reinsertados, pues en Granada (Meta) no se pudo tener acceso a GD por seguridad y alta presencia de las BACRIM, aunque sí hubo un excombatiente de la guerrilla (duró doce años en la guerra) que estaba en el proceso y accedió a una entrevista personal, sin identificarse.

Igualmente, se llevaron a cabo GD con cien víctimas en la mayoría de estas zonas. Es importante aclarar que las once víctimas del GD aplicado en Riohacha no permitieron recoger lo discutido en medio magnético o grabación por asuntos de seguridad. En la ciudad de Villavicencio (Meta) solo se pudieron desarrollar cuatro entrevistas a víctimas que facilitaron el acceso a la información, pero conservando también sin develar su identidad. Lo mismo sucedió en Granada (Meta) con tres víctimas que colaboraron con la investigación. En Riohacha (Guajira) se tuvo acercamiento a una comunidad indígena wayuú, asentada en la zona rural del municipio de Ma-

naure (Guajira), en la ranchería Shiruria, donde se logró el diálogo con el líder indígena. En total 108 víctimas permitieron recoger información —cien en GD y ocho en entrevistas personales—.

De esta manera, el trabajo de campo a través del instrumento de GD y algunas entrevistas cualitativas a víctimas y participantes del programa con la ACR se pudo realizar con un total de 248 personas involucradas dentro del esquema que la Ley 975/2005 planteó como salida alternativa al conflicto y la violencia en Colombia, con un fuerte componente de beneficios para los excombatientes de las AUC, algunos de la guerrilla y ofrecimiento de derechos de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

También se buscaron acercamientos con funcionarios de las dos entidades que más asumieron la gestión del proceso. Por parte de la CNRR ofrecieron información once funcionarios de todas las oficinas a donde se pudo recoger, desde el entonces presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro Leongómez (sede nacional en Bogotá, D.C.), hasta los comisionados Ana Teresa Bernal y Monseñor Nel Beltrán (Obispo de la Diócesis de Sincelejo). Por parte de la ACR permitieron recoger información ocho funcionarios en las oficinas regionales a donde se trabajó. Desde la sede central, Bogotá, D.C., colaboraron con la participación de una de las asistentes del Alto Consejero Presidencial, hasta enlaces en zonas como Barrancabermeja (Santander). En total fueron 19 personas que estaban implicadas directamente en el proceso por su desempeño profesional en cada una de las áreas o unidades que se pueden corroborar en los anexos respectivos.

A su vez se tuvo contacto con otro tipo de funcionarios que no laboraban directamente con la ACR o CNRR, pero si lo hacían en dependencias por las que pasaba algo del proceso de Justicia y Paz. Tales son los casos de una funcionaria de la Alcaldía de Medellín que coordinaba el Programa de Paz y Reconciliación que ya funcionaba desde antes de que se instalara la ACR en la ciudad y tenía trabajo con este tipo de grupos humanos que habían estado en el conflicto armado. De la misma manera, se pudo comunicar con dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación – Unidad de Justicia y Paz que, en esos momentos del proceso, no eran de fácil comunicación. En síntesis, por parte de instituciones involucradas en el proceso se consiguió información de 22 personas.

Por último, tratando de buscar una perspectiva más integral de análisis académico, en el trabajo de campo hubo acercamientos a algunos docentes e investigadores para indagar sobre perspectivas teóricas respecto a la ética pública, a la reconciliación social, a la implicación de un proceso de este tipo fundado en una ética pública, entre otros temas. En total fueron cinco personas: tres académicos de universidades españolas, un investigador social del CINEP Bogotá, D.C., un excombatiente que participa activamente en dinámicas hacia la paz.

4.3.1.1. Caracterización de los participantes de los grupos de discusión víctimas –GDV–

Ya mencionamos que el trabajo de campo para esta investigación pudo acceder a 108 personas en la categoría de víctimas dentro del Proceso de Justicia y Paz. De las cien personas que participaron en los GD, 17 eran hombres y 83 mujeres. De los ocho entrevistados, tres hombres y cinco mujeres. El promedio general de edades fue de 45,57.

Sitio GD	Promedio edades (años)	Promedio años en el Proceso de Justicia y Paz (años)	Promedio nivel de escolaridad
Barrancabermeja	51,83	5,29	-5 con educación media (entre 9º grado y título de bachiller) -9 con educación primaria -2 con estudios técnicos -2 sin estudios
Montería	49,47	5,09	-4 con estudios de bachillerato (solo 2 con título de bachiller) -9 con educación primaria -1 con estudios técnicos -7 sin estudios
Riohacha	41,45	5,41	-4 con estudios de bachillerato (3 con título de bachiller). -2 con educación primaria -4 con estudios técnicos -1 sin estudios
San Pablo (Bolívar)	44,5	2,75	-4 estudios de bachillerato (2 con título de bachiller) -3 estudiando los fines de semana para obtener título de bachiller. -4 estudios de primaria -1 sin estudio
Tierralta (Córdoba)	52,44	2,88	-1 con estudios de bachillerato (sin título en ese momento) -1 con estudios universitarios (sin título en ese momento) -1 profesional en educación -2 con estudios técnicos -8 con estudios de primaria -5 sin estudios

Sitio GD	Promedio edades (años)	Promedio años en el Proceso de Justicia y Paz (años)	Promedio nivel de escolaridad
Bucaramanga (Santander)	43,85	5,52	-5 con estudios de bachillerato (1 con título de bachiller) -1 profesional en educación -14 con estudios de primaria
Entrevistas a víctimas en Villavicencio (Meta) (4 personas)	46,25	2 (promedio)	-3 con estudios de bachillerato (1 con título de bachiller) -1 sin estudios
Entrevistas a víctimas en Granada (Meta) (3 personas)	52,66	2,8	-1 con estudios de bachillerato y algunos diplomados -1 con estudios de primaria y algunos diplomados -1 sin estudios
Indígena Wayúu en Riohacha (Guajira)	70	5	-Sin estudios

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al tiempo de estar en el proceso, en Barrancabermeja cuatro víctimas informaron que llevaban más de cinco años en el proceso. Tres anotaron doce años y una, ocho años. Esto puede darnos a entender que había desconocimiento general del proceso a 2010, pues tantos años podrían ser indicativo de que habían sido victimizadas desde ese tiempo y haber hecho reclamación, pero fuera del marco de Justicia y Paz. De trece participantes en este GD, seis personas escribieron que no estaban en el proceso, de estas, tres manifestaron “no estar de acuerdo con el proceso”. Otra persona puso solo una X, lo que puede indicar que no está en el proceso o que no entendió la pregunta. Otra más indicó que no estaba en el proceso y añadió que hace 19 años es víctima, una persona no respondió nada en esa pregunta.

A la pregunta de *por qué grupo se siente victimizada* respondieron así: dos por la guerrilla, catorce por las AUC y dos por otros (puede ser de cualquier grupo, pero no lo tienen claro, o de nuevos grupos como las BACRIM). De estos 18, seis dicen haber sido doblemente victimizadas (por guerrilla y AUC o por AUC y Estado). De estas seis, una persona dice haber sido victimizada tres veces (por guerrilla, AUC y Estado).

En Montería, de los 21 participantes, dos anotaron que llevaban nueve años en el proceso. Esto puede indicar que fueron victimizadas en esa época e hicieron reclamaciones por vías judiciales anteriores a Justicia y Paz. También, puede significar confusión en la apropiación de la dinámica de Justicia y Paz.

Respecto al grupo del que se sienten victimizadas, 19 personas afirmaron serlo por las AUC, una por la guerrilla y una por la categoría “Otros” (dando a entender que percibió una mezcla de todos los actores cuando atacaron a su familia).

En Riohacha, de los once participantes, cuatro respondieron que llevaban más de cinco años en el proceso: dos afirmaron contar seis años, uno, diez años y otra persona, doce años. Puede indicar desconocimiento de la dinámica desde la Ley 975/2005 y que mezclan las primeras reclamaciones al momento de ser victimizadas con el proceso al año 2010.

En ese momento sentían que fueron victimizadas una persona por la guerrilla, seis por las AUC y cuatro por “Otros” (haciendo referencia a las BACRIM).

En San Pablo (Bolívar), de los doce participantes, dos afirmaron llevar más de cinco años en el proceso: una persona ocho años y otra seis. Una persona escribió llevar menos del año en el proceso. Y otra afirmó no estar en el proceso porque era reciente la muerte de su familiar a manos de los paramilitares (así seguían siendo llamados los nuevos grupos o BACRIM).

Respecto a la pregunta de por qué grupo se sienten victimizadas, una persona respondió que por la guerrilla, seis por las AUC, una por el Estado y cuatro por “Otros” (haciendo referencia a las BACRIM).

En Tierralta (Córdoba), de los 18 participantes, tres afirmaron llevar más de cinco años (los tres decían llevar seis años). Dos dejaron explícito que no estaba en el proceso “por miedo”. Una persona anotó que llevaba un mes y una persona no puso nada.

Expresaron que fueron victimizadas por las AUC 16 personas, dos por otros (haciendo referencia a BACRIM). De las 16 personas victimizadas por las AUC, una afirmó haber sido (doblemente) victimizada también por el Estado.

En Bucaramanga (Santander), de los veinte participantes, ocho afirmaron llevar más de cinco años en el proceso: una llevaba seis años, tres contaban ocho años, uno anotaba nueve años, dos sumaron diez años y una persona veinte años. Una no anotó nada.

Once personas afirmaron haber sido victimizadas por la guerrilla, ocho por las AUC (pero de estas ocho, tres escribieron haber sido victimizadas doblemente por guerrilla y AUC). Una persona anotó que fue victimizada por “Otros” (sin especificar qué grupo).

Entre las personas entrevistadas en Villavicencio (Meta), tres de las cuatro personas víctimas respondieron que estaban dentro del promedio de tiempo en el Proceso de Justicia y Paz y una no cotestó nada. Afirman que fueron victimizadas dos por la guerrilla y dos por AUC.

En las entrevistas en Granada (Meta), tres personas víctimas afirmaron estar dentro de los tiempos de Justicia y Paz, es decir, menos de cinco años. Solo una afirmó tener resuelta su condición (en 17 meses le resolvieron su condición y reparación), es líder de una asociación de víctimas, lo que pudo haberle beneficiado, pues al serlo debía estar ante todas las entidades del Estado. Afirman que fueron victimizadas por las AUC.

El indígena entrevistado en la ranchería Shiruría, en Manaure (Guajira), manifestó haber sido victimizado por las AUC. No tenía ningún tipo de estudio. En el año 2010 cumplió cinco años en el proceso.

Con esta serie de datos, en la presente investigación se infiere que el grupo de víctimas está caracterizado por un mayor número de mujeres que de hombres, de donde se sigue que el carácter de víctima asume más un rol femenino por la dimensión materna y de esposa. Por lo general quienes asumen el rol agresivo de enfrentar la guerra son hombres y en su mayoría, son los varones quienes también reciben el mayor impacto de los grupos al margen de la ley al ser aniquilados, según la dinámica de cada grupo. Un común denominador es que la mujer es más bien utilizada como instrumento y sujeto de humillación por parte de los miembros de grupos violentos. A su vez, el promedio de edades entre los 40 y 55 años marca una pauta de ser mujeres y hombres en edades de ser esposas(os), madres o padres.

Otro elemento que vale la pena resaltar y tener en cuenta es la situación socio-económica y la baja escolaridad, pues en su mayoría solo tenían estudios de primaria, muy pocas víctimas habían alcanzado estudios de bachillerato o más a 2010. Esto se reconfirma por la apariencia percibida en todos los grupos al recibir mujeres u hombres en condición de víctima de extracción social popular y, por lo general, campesina. En este sentido, los orígenes de la victimización recaen fundamentalmente en los grupos de las AUC y de la guerrilla, aunque pocas afirmaron haber sido victimizadas por el Estado (Fuerzas Militares o Armadas), reafirmando lo descrito en la primera parte de este capítulo sobre los vínculos de organismos del Estado con los grupos al margen de la ley, especialmente con los paramilitares.

La mayoría de las personas que participaron en los GD con víctimas suman un promedio de años en el Proceso de Justicia y Paz entre dos y cinco años y medio, aproximadamente. Sin embargo, tal como lo señalamos en cada caracterización por ciudades, algunas referencias a

tiempos como diez, doce o veinte años, contiene elementos confusos en la interpretación y ubicación de la víctima respecto al proceso. La victimización pudo haberse dado contando todos esos años e, incluso, pudo haberse interpuesto recurso judicial para reclamar, pero antes de la propuesta de la Ley 975/2005. Al momento de los GD (Noviembre – Diciembre de 2010) muchas de estas personas tenían desconocimiento del proceso o estaban iniciando (incluso reiniciando) procesos ante las instituciones respectivas.

Tal como anotaremos más adelante al hacer análisis de la información recogida en los GD, los grupos de víctimas reconocieron en la CNRR un gran apoyo a nivel de orientación, acompañamiento y asesoría, pero se quejaban de las instituciones que tenían que ver con lo procedimental en materia de reconocimiento, reparación y restitución. Al año 2010 los altos índices de quejas radicaban en la lentitud en el proceso, “silencio” de los organismos encargados de los procesos y un sentimiento de injusticia e inequidad frente al proceso con los desmovilizados.

4.3.1.2. Caracterización de grupos de discusión participantes en el Programa ACR

El trabajo de campo con excombatientes se hizo con un total de 130 entre hombres y mujeres. De estos, 123 participaron en GD, seis pudieron contactarse en la cárcel de Valledupar (Cesar) y uno ofreció entrevista en Granada (Meta). Fueron cien hombres (93 en GD, seis postulados y un entrevistado) y 31 mujeres. Con un promedio de edad de 30,57 años.

Sitio GD	Promedio edades (años)	Promedio años en el grupo al margen de la ley	Promedio años en el proceso	Nivel de escolaridad
Barrancabermeja 13 pertenecieron a las AUC	22,05	3.083 (7 no pusieron tiempo).	4,75 (7 no pusieron tiempo).	-8 con estudios de bachillerato -3 con estudios de primaria -2 no indicaron nivel de estudios
Bogotá, D.C. 8 pertenecieron a la guerrilla. 2 pertenecieron a las AUC.	30,20	5.8 (2 no pusieron tiempo)	2,91 (1 no puso tiempo)	-8 con estudios de bachillerato -2 con estudios de primaria

Sitio GD	Promedio edades (años)	Promedio años en el grupo al margen de la ley	Promedio años en el proceso	Nivel de escolaridad
Bogotá, D.C. (2) 17 mujeres que pertenecieron a la guerrilla	25,88 (solo mujeres)	7,35	3,06 (1 no puso tiempo)	-7 con estudios de bachillerato -9 con estudios de primaria -1 no puso nivel de estudios
Cali (Valle) 12 pertenecieron a la guerrilla 3 pertenecieron a las AUC	25,46	7,13	4,84	Todo el grupo estaba adelantando bachillerato, junto a un técnico administrativo.
Montería (Córdoba) Todo el grupo perteneció a las AUC	37,90	3.54	4,71 años (1 no puso tiempo)	-17 con estudios de bachillerato -3 con estudios de primaria -2 no pusieron nivel de estudios
San Pablo (Bolívar) Todo el grupo perteneció a las AUC	30,13 (2 no pusieron edad)	2,94	4,23	-8 con estudios de bachillerato (2 bachilleres, estaban estudiando un técnico) -8 con estudios de primaria -1 no indicó nivel de estudios
Valencia (Córdoba)	33,06 (1 no indicó edad)	3,43	4,61 (1 no indicó tiempo)	-7 con estudios de bachillerato (2 bachilleres titulados) -9 con estudios de primaria
Medellín (Antioquia) Todos pertenecieron a las AUC. Uno escribió que duró 12 en grupos (“escuela de sicarios”).	35,35	2,75 (2 no indicaron tiempo)	5,85 (6 afirman estar en el proceso más de 5 años)	-14 con estudios de bachillerato por el Programa de la ACR -8 no habían estudiado antes ni durante la pertenencia a los grupos al margen de la ley. Ahora adelantan estudios con el Programa.

Sitio GD	Promedio edades (años)	Promedio años en el grupo al margen de la ley	Promedio años en el proceso	Nivel de escolaridad
Postulados cárcel de Valledupar Todo el grupo perteneció a las AUC (eran 7 en ese momento, pero solo estuvieron 6 en el momento de la conversación)	35,16	5,05	4	
Participante entrevistado (Granada, Meta)	57	12 (guerrilla)	0,5	-Con estudios de primaria

Fuente: Elaboración propia

A diferencia de los participantes en los GD de víctimas, en los del Programa de la ACR se hallaron más hombres que mujeres. Teniendo en cuenta la perspectiva vista con los grupos de víctimas, la dinámica de conflicto y violencia suele poner a los hombres en perspectiva de agresión contra las otras personas, aunque se pueden corroborar excepciones, y a la mujer como sujeto que recibe agresiones de una u otra manera. A lo anterior se puede añadir el cambio en los promedios de edades, por cuanto el 30,57 de los excombatientes, contrasta con el 45,57 de las víctimas. Los participantes tendían a ser más jóvenes, aunque algunos llegaban a tener entre 50 y 60 años, mas el gran número de jóvenes están bajo el promedio.

Respecto a los años de pertenencia a los grupos al margen de la ley, los participantes en los GD, en su juventud, muestran promedios bajos (entre un poco sobre dos años y medio y algo más de siete años, excepto el entrevistado en Granada, Meta que llegó a sumar doce años en la guerrilla). No se desconoce que algunos manifestaron pertenencia a esta serie de grupos de más de siete años, pero en su gran mayoría no excedían este número de años. De ahí se desprende que la vinculación al proceso dentro de Justicia y Paz (Programa ACR, excepto los seis que estaban en la cárcel) estaba entre tres y cinco años. A primera vista se puede afirmar que el proceso benefició a muchos excombatientes que llevaban pocos años en grupos al margen de la ley. Vuelve en este punto el cuestionamiento que se le hacía al proceso al cumplir los cinco primeros años respecto a si el número de desmovilizados era realmente el número de activos al momento de desmovilizarse. Existe una relación proporcional entre los años en el conflicto

armado y la pertenencia al Programa ACR en cuanto a la edad de los participantes, la poca permanencia en la guerra y la participación en los procesos de la Ley 975/2005.

Por las mismas ofertas de la Ley de Justicia y Paz, el promedio de años en el proceso es más unificado entre los participantes del programa de la ACR que en las víctimas, puesto que estas personas que estuvieron en grupos al margen de la ley iniciaron el camino con la misma puesta en marcha de la dinámica desde la perspectiva de la Ley 975. Aunque señalen una suma de años en los grupos más allá de 2005, no entra en choque como las respuestas de los grupos de víctimas, para quienes estar en el proceso desde hace diez o doce años se confundía con los cinco años que llevaba el proceso a 2010.

La mayoría de los participantes que facilitaron el trabajo de campo de esta investigación pertenecieron a las AUC, pocos a la guerrilla. Como dato importante está que se logró trabajar con un grupo de mujeres excombatientes de la guerrilla. Por lo general no se encontraron muchas mujeres en los grupos donde la mayoría habían estado en las filas de las AUC. Todos se encontraban en procesos de reintegración a través de formación en estudios de bachillerato, quienes habían llegado al proceso sin estudiar o sin haber avanzado más allá de la primaria. Si contaban con algún estudio de bachillerato al llegar al programa, continuaban hasta terminar y seguían en procesos de educación técnica. Es importante anotar que todos estos grupos fueron abordados en sus aulas de clase o en algún taller de formación.

Otro elemento que puede ayudar a las conclusiones de esta investigación es notar cómo en las ciudades más extensas de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, por ejemplo) el promedio de edad aumenta en los excombatientes, puesto que allí confluyeron de todas partes del país. A su vez, en regiones como la de Montería el promedio de edad es alto por la alta confrontación que se vivió en esa zona al ser un centro de acción de los paramilitares cuando el conflicto era más álgido. Por último, el GD en Medellín presentó detalles como etapas distintas de participación en grupos entre sicarios (ejércitos del narcotráfico) y paso por los paramilitares. Esto último es entendible por el contexto de violencia compleja que ha presentado esta ciudad desde la mezcla entre narcotráfico, paramilitares y acceso de la guerrilla a zonas populares.

4.3.2. ¿Efectivo el proceso de Justicia y Paz a 2010?

En el año 2010 el común de los colombianos destacaba la sensación de seguridad que nuevamente tenían. Los ocho años de gobierno de Uribe Vélez habían traído experiencias de poder movilizarse nuevamente por el país, acudir a sitios de encuentro público sin el temor de perder libertad en manos de algún grupo al margen de la ley, las inversiones extranjeras

habían reactivado la economía y el país se hallaba en un momento en el que el conflicto armado “no existía” (desde la perspectiva del mismo gobierno) y solo se luchaba contra “grupos de narcoterroristas” que continuarían siendo atacados en defensa de la estabilidad democrática. Parecía que el discurso de la Seguridad Democrática había dejado sus resultados.

Como balance de estos años, Fernán González (2014) señala que los dos gobiernos de Uribe Vélez ahondaron en los cambios desde la perspectiva Pastrana a la Seguridad Democrática, es decir, se fracturó el “empate militar” que sostuvo la guerrilla de las FARC con las Fuerzas Militares y Armadas durante Pastrana. Sin embargo, el desbalance que se dio en favor del país, en contra de la guerrilla, no solo fue militar y estratégico, sino en aislamiento internacional y el rechazo hacia ese grupo en muchos sectores del interior y exterior del Colombia. No hubo una eliminación total del grupo, pero sí fueron duramente franqueados, aunque mantuvieran presencia en regiones apartadas del territorio nacional. A lo anterior se sumó el incremento del presupuesto nacional en seguridad y defensa, beneficiando a las Fuerzas Militares y Armadas y a muchas regiones del país donde la ausencia del Estado había facilitado el aumento de los grupos al margen de la ley, pero así mismo, señala González (2014), esto conllevó un aumento de efectos negativos en materia de derechos humanos al paso de los principios y estrategias de la Seguridad Democrática.

También, señala González (2014), la negativa del gobierno Uribe Vélez a reconocer la existencia del conflicto armado fue un factor que centró la atención en las relaciones bastante cercanas con Estados Unidos, enemistad con los vecinos (Venezuela, Ecuador, Brasil, entre otros), así como que la dinámica de la guerra se tornó “narcoterrorista”.¹⁴⁹ A esto se sumaron los escándalos de la parapolítica, el aumento del número de miembros y ataques de las BACRIM y, esta investigación añade, el inicio de las investigaciones y judicializaciones de funcionarios del gobierno Uribe Vélez. “En síntesis, en materia de paz y guerra los ocho años del gobierno uribista se pueden resumir como la guerra contra las FARC, la negociación con las AUC y la pasividad ante el rearme paramilitar, al lado del destape de las ambiguas relaciones de algunos sectores políticos con los grupos paramilitares” (González, 2014, p. 481).

Si se buscan respuestas al interrogante de la efectividad del proceso de Justicia y Paz a final de 2010, terminado el gobierno Uribe Vélez e iniciada la nueva perspectiva desde Juan Manuel Santos (2010 – 2014), lo primero que pueden aparecer son perspectivas numéricas que el mismo gobierno ponía a disposición de la opinión pública y de la comunidad internacional.

149. Los medios de comunicación cubrieron esta afirmación del entonces Presidente. (Semana.com, 2005).

Por ejemplo, según los “Informativos de Justicia y Paz: Caminos. Hacia la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación” de la CNRR (edición n° 2 de abril de 2010), el número de postulados era de 4.112 y llevaban 2.341 versiones libres, de estas habían terminado con confesión 228. En la edición n° 4 de junio de 2010 el total de versiones libres terminadas era de 1.514 y en curso estaban 917, para un total de 2.431.¹⁵⁰ En este mismo boletín presentaron estadísticas de un total de 5.539 bienes entregados por los distintos bloques de las ex AUC al Fondo de Reparación de Víctimas.

En el mismo boletín, pero en su edición n° 7 (septiembre de 2010) presentaron las estadísticas de 4.346 postulados (ex AUC en cárceles). En ese informativo, entregaban datos como: 266 postulados con formulación de imputación con 21.949 delitos imputados; 70 en sala de conocimiento para realizarles audiencia de legalización de cargos; 12 con legalización de cargos por 3.282 homicidios; 3 en desarrollo de la audiencia del incidente de reparación integral y 2 condenados por la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Justicia y Paz (Edgar Cobos Téllez y Uber Enrique Banquez) sentencia esta que, como se vio en el análisis del proceso, fue suspendida y solo en 2011 se hizo efectiva. En ese mismo boletín repetían los datos de versiones libres que habían dado en el de junio de 2010.¹⁵¹

En la edición 8 de octubre de 2010 presentaban datos del número de víctimas atendidas: 243.214.¹⁵² De este número total, señalaban en ese informativo que se habían atendido 4.335 víctimas que reclamaban restitución de tierras, 1.779 casos de reclamación por las sedes y 530 ante el Comité Técnico Regional o Comisión Regional de Restitución de Bienes. Entre tantas estadísticas se podría inferir que el Proceso de Justicia y Paz avanzaba a 2010 a “paso lento pero seguro”. El gobierno se sentía seguro de lo iniciado y gestionado. Se negaba el conflicto armado, se promulgaba que todos los grupos paramilitares se habían desmovilizado y estaban en el Programa de la ACR o estaban respondiendo ante la justicia, las víctimas estaban siendo atendidas y cada día se visibilizaban más los resultados.

Respecto al proceso con desmovilizados o participantes del Programa de la ACR, el informe anual de gestión (período comprendido entre marzo 2009 y mayo 2010) (Presidencia, 2010) presentaba también estadísticas llamativas para un proceso como el planteado en Colombia a raíz de la Ley 975/2005. Por ejemplo, entre agosto de 2002 y marzo 2010 se habían desmovili-

150. Estos datos los tomaba la CNRR de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. Los de esta edición del informativo son a 30 de abril de 2010.

151. Estos mismos datos de junio de 2010, sin cambiar en un solo número en septiembre de 2010, señalaban que estaban tomados de la Unidad de Justicia y Paz a julio 31 de 2010.

152. Este dato lo tomaron del reporte de información consolidada de 2005 a junio de 2010 por la CNRR.

zados 50.639 personas de diversidad de grupos al margen de la ley. De las AUC 31.810 y 18.829 de forma individual (proveniente de grupos guerrilleros). Al proceso de reintegración habían ingresado 1.816 nuevos participantes entre junio 2009 y marzo 2010.

En perspectiva de beneficios para los participantes y sus familias, expresaba el informe que el total de beneficiados había sido de 34.871 (marzo de 2009 y marzo de 2010), 69.878 familias y 3.675.939 personas de comunidades receptoras de desmovilizados. Estos beneficios se centraban en atención en salud, acceso a la educación, acompañamiento psicosocial, seguridad, apoyo económico para la reintegración, formación para el trabajo, generación de oportunidades laborales, servicio social, planes de negocio, entre otros ámbitos. Es decir, todo un marco de procesos de desarme, desmovilización y reintegración. El informe terminaba con una perspectiva de mejoramiento y proyección al futuro en términos de:

Con el objetivo de lograr la sostenibilidad del Proceso de Reintegración, se desarrollan tres estrategias: i) la regionalización de la Política de Reintegración mediante la participación activa y corresponsable de los gobiernos departamentales y municipales, el sector privado y la comunidad ii) la institucionalización de la Política con las entidades públicas nacionales y iii) el respaldo de la comunidad internacional en materia de DDR - Desarme, Desmovilización y Reintegración y la consolidación de la paz.

A nivel regional, se han firmado 13 convenios marco con alcaldías y gobernaciones que facilitan la articulación interinstitucional y visibilizan la reintegración en la agenda pública local. Con las instituciones del nivel nacional, la ACR promovió la unificación de criterios de intervención con logros como: La formulación del modelo único de reintegración que permitió articular con el Ministerio de Defensa a través del PAHD, y con el ICBF, para la prestación de los servicios y definición de roles; el diseño de un Modelo Integral de Educación y Formación para la Reintegración con el SENA con el fin fortalecer la calidad y pertinencia en el servicio educativo para la población desmovilizada articulada a la formación para el trabajo.

A nivel internacional, el proceso de reintegración colombiano se posiciona como una buena práctica válida, real y como uno de los más completos en este ámbito, incrementando el respaldo político, técnico y financiero. En desarrollo de la estrategia de Cooperación Técnica e intercambio de experiencias, denominada Sur – Sur, 47 expertos internacionales de 15 países, coincidieron en que el proceso colombiano es uno de los más completos del mundo. Recomendaron que la Política Nacional de Reintegración se convierta en una Política de Estado, independiente de los gobiernos (Informe de Gestión ACR, 2010).

Esta serie de informes y datos no supera el cuestionamiento acerca de la efectividad del proceso a 2010. Incluso, la afirmación de “política nacional de reintegración” suscita interrogantes que atañen al objetivo de esta investigación. ¿Un programa del marco de DDR en Colombia ya configura política pública? ¿Una ley ya es política pública? ¿Se necesitan varias políticas

públicas para asumir un proceso hacia la paz? Es decir, ¿la política pública con los excombatientes debe ser distinta con las víctimas? ¿La reconstrucción social que implica reconfigurar lo público no demanda *una política pública de reconciliación social*?

Desde la perspectiva de gestión pública en materia de salida alternativa al conflicto y la violencia en Colombia, la percepción que se tenía a 2010, incluso hasta el presente, es que la Ley 975/2005, junto a los decretos reglamentarios, los documentos CONPES que la configuran en la praxis y la normatividad que se ha venido construyendo en esta dinámica, crea políticas públicas que se hacen programas de atención a desmovilizados y/o a víctimas, según el caso. Incluso en el año 2008 la agencia USAID (Del pueblo de los Estados Unidos) con la Procuraduría General de la Nación (específicamente, la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Éticos) hicieron una publicación titulada “Seguimiento a políticas públicas en materia de desmovilización y reinserción”, centrada en las dimensiones de derecho a la verdad, memoria histórica y protección de archivos, derecho a la reparación integral, atención integral a las víctimas y beneficios jurídicos y administrativos a los desmovilizados.

Respecto a las víctimas, más allá de las ofertas de verdad, justicia y reparación que la Ley de Justicia y Paz señala, no hubo un instrumento claro que facilitara el proceso al estilo de la ACR y su programa para desmovilizados. La CNRR fue una institución que apoyó los procesos de reclamación, pero no tenía poder de decisión y menos de gestión más allá de ser receptáculo y orientadora de las personas que se acercaban a reclamar sus derechos por “haber sido objeto de ataques”. Este sector social recibió durante la administración de Uribe Vélez sendos golpes jurídicos al no ser prioridad en la dinámica para la paz más allá de los artículos de la Ley de Justicia y Paz. Entre 2006 y 2009 el Partido Liberal Colombiano defendió la iniciativa de la ley de víctimas, en cabeza del entonces representante a la Cámara del Congreso, Guillermo Rivera, pero fue derrotada por el mismo Presidente de la República¹⁵³ con alegaciones como de ser demasiado costosa para el país, que las víctimas no podían recibir el mismo trato que los desmovilizados, entre otros puntos. (La Silla Vacía, 2015).

Es en el cambio de gobierno de Uribe a Santos (agosto 7 de 2010) cuando el tema de la paz cambia de perspectiva en Colombia. El famoso “continuismo” en la Seguridad Democrática que llevó a Juan Manuel Santos a ganar apabullantemente esas elecciones no fue certero. La voluntad política hacia lo social, el acercamiento a diálogos con la guerrilla y la Ley de Vícti-

153. El presidente Álvaro Uribe Vélez había objetado la Ley 1408 de 2010 que creaba el banco genético para las víctimas de desaparición forzada, pero la Corte Constitucional la aprobó y fue sancionada. (Congreso de la República, 2010).

mas (promulgada bajo la numeración 1448 de 2011) dejaron la salida alternativa al conflicto y la violencia en Colombia con un nuevo tinte.

Sin embargo, los resultados que el entonces gobierno presentó al país y al mundo entero en materia de avance en perspectiva de paz contrastaba con muchos incrementos de la violencia en dimensiones de BACRIM, relaciones de políticos cercanos a la línea del presidente Uribe con los paramilitares e investigados por actividades ilícitas, otros en regiones involucrados con grupos al margen de la ley, aumento en estadísticas de violación de derechos humanos y con la desazón de las víctimas frente a un proceso que “privilegiaba” a los desmovilizados. Pero a este gran porcentaje de colombianos y colombianas los dejaba en la “eterna espera” de una respuesta de alguna institución del Estado encargada de su caso. Esto solo para dejar un dato que sobrepasa los límites del tiempo de esta investigación, pero que puede reconfirmar los aspectos conclusivos a los que vamos llegando para ir *hacia esa política pública* que surge como necesidad imperante en una sociedad fragmentada no solo por la guerra interna, sino por los desniveles estructurales que demandan una reestructuración a fondo.

El Grupo de Memoria Histórica (GMH) entregó al país el informe *¡Basta ya!* en el año 2013, en el que se señala que “la memoria se afincó en Colombia no como una experiencia del posconflicto, sino como factor explícito de denuncia y afirmación de diferencias. Es una respuesta militante a la cotidianidad de la guerra y al silencio que se quiso imponer sobre muchas víctimas. La memoria es una expresión de rebeldía frente a la violencia y a la impunidad” (GMH, 2013). Pero este señalamiento va unido al número de víctimas registrado en ese informe, recogidos los datos entre los años 1958 y 2012, que ascendía a 220.000 personas, aproximadamente, pues el mismo informe deja constancia que por la magnitud de la guerra en Colombia es difícil llegar a un número preciso de las personas victimizadas, teniendo en cuenta que conflicto como el colombiano tiene las características del “anonimato, la invisibilización y la imposibilidad de reconocer a todas sus víctimas” (GMH, 2013).

El acceso a grupos de participantes del Programa de la ACR hasta 2010 y a grupos de víctimas cercanas a la dinámica de la entonces CNRR, junto a un grupo de funcionarios de las instituciones encargadas del proceso, según cada perspectiva, permitió ahondar en más material conclusivo para esta investigación. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2010 y los primeros días del mes de enero de 2011 se llevó a cabo la recolección de la información con los instrumentos metodológicos de los grupos de discusión (GD) y entrevistas cualitativas (EC) a personas que facilitaron información desde sus puntos de vista y experiencias. En los anexos del presente texto se puede tener la información respectiva a participantes, sitios en los

que se llevaron a cabo los GD, preguntas, esquema de las reuniones y la transcripción de la información recolectada. Para el procesamiento de la información y la identificación de variables de análisis nos apoyamos en el instrumento *ATLAS.ti* 6.2. En los sitios donde no se permitió acceder a medios magnéticos de grabación, la información se recogió manualmente por parte del investigador y está también disponible en los anexos.

La información previa esbozada en la descripción del caso colombiano, la apoyamos a partir del siguiente aparte con el análisis de las variables que escogimos para una percepción general sobre la efectividad del proceso que los involucrados tenían a finales del año 2010, al finalizar los cinco primeros años de la propuesta de Justicia y Paz, y dejando el umbral al giro que le dio Juan Manuel Santos al proceso de paz en Colombia desde el 7 de agosto de 2010, dando una nueva señal al presentar él mismo como presidente el proyecto de ley de víctimas al Congreso de la República en un gesto de compromiso con la salida alternativa al conflicto en el país y reorganizando la ACR y transformando Acción Social y la CNRR en la Unidad de Atención a Víctimas, Unidad para la Consolidación Territorial y el Centro de Memoria Histórica (junto con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), como unidades adscritas al entonces recién creado Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

4.3.2.1. Perspectiva de la efectividad del proceso desde los funcionarios de instituciones encargadas

La visión altamente positiva que presentaba el gobierno Uribe Vélez a la opinión pública y a la comunidad internacional al finalizar los ocho años de mandato contrastaba con la visión de algunas ONG, medios de comunicación y ámbitos académicos y de investigación social, cuando se cumplieron los cinco años del Proceso de Justicia y Paz. En un intento por tomar la temperatura, esta investigación se acercó a algunos funcionarios de la ACR, de la CNRR y a dos fiscales de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía (Ver Anexos 3.1.1. y 3.1.2.) para indagar acerca de la percepción que en ese momento tenían del proceso, sobre todo ellos que estaban en la dinámica de lo procesual, procedimental y en el trato día a día con desmovilizados y víctimas.

De la CNRR se entró en contacto con once funcionarios, de la ACR, con ocho; de la Unidad de Justicia y Paz, con dos y, por último, se logró una entrevista con una funcionaria de la Alcaldía de Medellín que lideraba el proceso con excombatientes en el Programa de Paz y Reconciliación de esa alcaldía. Con ellos trabajamos la metodología de EC, nivel semiestructuradas,

fundados en las preguntas que se pueden leer en el numeral 1.3 de los anexos de este texto. Es importante señalar que en el aparte 3.1.2 del citado numeral también se encuentran preguntas que se fueron suscitando de acuerdo a puntos o tópicos que tocaban con el entrevistado.

El primer aspecto que se buscó indagar en el trabajo de campo fue el de la percepción frente al Proceso de Justicia y Paz, buscando apoyo en la puntualización de los aciertos y desaciertos que podían identificar en la dinámica. Del número total de personas que participaron en los GD y que fueron entrevistadas (267), en su condición de estar involucrados en el proceso como funcionarios o participantes (desmovilizados y víctimas), notamos 71 referencias a que el Proceso tiene aciertos que se pueden identificar. Esta investigación clasifica los aciertos en variables que a continuación se sintetizan:

- a. *Perspectiva estructural del proceso.* Lo que concierne a la manera como percibían que el proceso estaba gestionando lo planteado o lo que se iba adaptando.
- b. *Perspectiva de lo humano desde los participantes.* Hace referencia a la dimensión humana de ese sujeto (individual o colectivo), que es elemento “bisagra” en un camino hacia la reconciliación social.
- c. *Perspectiva de lo institucional.* Es lo que hace referencia a las dinámicas de las instituciones, pero también a las redes que posibilitan la gestión del proceso o que la misma dinámica facilita.

4.3.2.1.1. Perspectiva estructural del proceso

- La coincidencia en valor del Proceso de Justicia y Paz es generalizada en todos los funcionarios que se desempeñaban en alguna de las instituciones que estaban gestionando las dinámicas con desmovilizados, víctimas o en lo judicial en general. En esa línea, desde la CNRR se rescata la visibilidad que habían adquirido las víctimas a finales del año 2010, al cumplirse los primeros cinco años del proceso. En todos los años que llevaba el conflicto armado en Colombia y las búsquedas de paz, el centro se había puesto en los excombatientes y su desmovilización, ofreciéndoles garantías para que supuestamente la estabilidad retornara sin desconocer fallos estructurales, por lo menos, disminuyera la intensidad de los ataques con un grupo menos al margen de la ley. A partir de 2005 la figura de la víctima como sujeto que ha sufrido y demanda de la sociedad atención en cuanto derechos de verdad, justicia y reparación es central. En términos de la entonces comisionada de la CNRR, “el país comenzó a darse cuenta de qué era lo que había pasado y estaba pasando” (Entrevista E2CNRR, ATB. Anexos, tabla 31).

- A lo anterior se suma la creación de instituciones gubernamentales que se encargaron del proceso, empoderándose y asumiendo el rol de gestoras de dinámicas de ex combatientes o víctimas, según el rol. En este marco de lo institucional, la búsqueda pública de la verdad fue una dimensión que procesualmente se fue dando, aunque con fallos y lunares, pero se abrió esa visión que no se había tenido en los procesos anteriores en Colombia. A su vez, el hecho de que la sociedad identifique una entidad que acoge, escucha, acompaña y orienta a las víctimas es un elemento crucial en esta dinámica.
- La procesual en la unificación de procedimientos que se ha venido gestando desde la Ley 975/2005 ha facilitado la oportuna asesoría a los grupos de víctimas que se van acercando a hacer la reclamación de sus derechos. En esto, el ámbito de la reparación ha sido un elemento fundamental en la misión de la CNRR (Entrevista E2CNRR. MNB. Anexos, tabla 28).
- La misma dinámica que planteó la Ley 975/2005 ha dejado una disminución en la intensidad del conflicto (Entrevista E1CNRR. Anexos, tabla 15).
- Desde la visión de los funcionarios de la ACR, al año 2010 el programa estaba muy bien diseñado, aunque faltaba adaptarlo a contextos, pues en todas las ciudades o sitios donde estaba no se podían plantear las mismas opciones. Se rescataba de manera especial el diseño por rutas para que cada participante avance, siendo esta una manera especial de trabajar y ofrecerles muchas oportunidades a los participantes (Entrevista E3ACR, EJ. Anexos, tabla 33).
- La apuesta por rutas de formación y acompañamiento es un valor agregado que se reconoce en todos los ámbitos.
- El diseño del programa ayudaba a que los avances fueran más precisos, aunque no se desconocían los fallos. Cuando un participante faltaba a alguna actividad se le sancionaba económicamente. Al comenzar se les hacía una selección para que accedieran a una formación y se les ayudaba a escoger formación (una especie de orientación profesional). Desde que iniciaban llenaban una ficha informativa y se les hacía seguimiento (Entrevista E3ACR, JDC. Anexos, tabla 34).
- Al año 2010 las demandas y exigencias que iban quedando del proceso ponían a la ACR en una permanente construcción de oferta en servicios, sobre todo para fortalecer los aciertos. “Aciertos: estamos creando una estrategia diferencial para mujeres, afrodescendientes e indígenas; tenemos líneas de atención al desmovilizado y las rutas de reintegración que guían al desmovilizado desde la ayuda humanitaria hasta la reintegración con la sociedad. Necesitamos fortalecer el núcleo familiar del reintegrado” (E3ACR, NS. Anexos, tabla 35).

4.3.2.1.2. Perspectiva de lo humano desde los participantes

- La fuerza que las mismas comunidades de víctimas iban configurando en su interior para iniciar procesos de reconstrucción grupal o comunitaria constituye otro acierto importante. Por ejemplo, el movimiento de “las abrazadas” en el Oriente Antioqueño, que aglutina mujeres víctimas que se apoyan entre ellas y hacen presencia ante el dolor de toda víctima. Son víctimas que se brindan soporte entre sí y que lo brindan a otras. (Entrevista E2CNRR, ATB. Anexos, tabla 31). El sentido de esta investigación percibe en esta visión la variable de “imaginación moral” que citamos con Juan Pablo Lederach en nuestro marco teórico.
- El Programa beneficiaba al participante de la ACR en motivación y organización.
- Los aciertos del Programa de la ACR se pueden señalar más en dinámicas de formación para el trabajo y aspectos más externos, pero en cuanto a transformar personas el asunto es más complejo (E3ACR, JDC. Anexos, tabla 34). Sin embargo, se van notando cambios que permiten ver qué se va acertando paulatinamente. Respecto a la pregunta que si creía que los participantes habían cambiado, el funcionario respondió: “Claro que sí. Los reintegrados cambiaron sus armas por educación; hace dos años era difícil comunicarnos con ellos porque eran agresivos y ahora han cambiado” (Entrevista E3ACR, JDC. Anexos, tabla 34. Entrevista E3ACR, NR. Anexos, tabla 32).
- La estrategia de definir un tiempo “prudente” para el camino de la reinserción de los excombatientes fue señalado como un acierto. Se establecía que era entre cinco y siete años, pues no se podía crear una “dependencia” del Estado. La idea era que el excombatiente pudiera asumir su rol de autosuficiencia (E3ACR, NS. Anexos, tabla 35). A esto se añade un acierto en lo referente a “conocer el límite”, puesto que no se puede estar siempre en el programa y hay participantes que quieren ser más independientes después del proceso de formación y acompañamiento (E3ACR, RG. Anexos, tabla 39).
- El trabajo integral con el participante, su familia y las comunidades receptoras (E3ACR, NR. Anexos, tabla 32). No solo se plantearon esquemas para que quien había pertenecido al grupo se beneficiara del proceso, sino que se pensó efectivamente en involucrar a su familia y a la comunidad que los recibía o los veía retornar en otro sentido de vida. Obviamente, este acierto se fue construyendo con el correr de los cinco años.

4.3.2.1.3. Perspectiva de lo institucional

- En la visión de las víctimas, la CNRR percibió como acierto la configuración de dinámicas asociativas entre las víctimas. La misma experiencia del dolor y el sufrimiento les permitió configurar redes sociales de apoyo. La propia CNRR era un foco de apo-

yo y acompañamiento a las víctimas. Era ese espacio en el que se sentía acogidas y escuchadas.

- Este era un proceso que estaba en construcción permanente y que permitía estar aprendiendo. Al inicio los participantes centraba su atención solo en la ayuda económica, en ese momento, a finales de 2010, había una sensación de que en muchos estaba el interés de formarse y crecer (E3ACR, JT. Anexos, tabla 36. Entrevista E3ACR, RG. Anexos, tabla 39). Aún más, esta misma dinámica la vivió el Programa de la Alcaldía de Medellín, anterior al programa oficial de la ACR (E4AM, CCM. Anexos, tabla 40). En este sentido, el mismo Programa demandó dinámicas de establecimiento de redes sociales y económicas de apoyo.
- La adaptación del programa a contextos a lo vocacional, a contextos urbanos o rurales, fueron aciertos que se mencionaron desde perspectivas positivas para la dinámica de reintegración (E3ACR, NR. Anexos, tabla 32). Es decir, el apoyo desde la dimensión diferencial ha facilitado el acceso a grupos en contextos determinados donde no se pueden aplicar las mismas herramientas que en otros contextos (E3ACR, RG. Anexos, tabla 39).

Un acierto de nuestra área es acercarnos a los procesos de atención diferencial, reconociendo la necesidad de atender condiciones particulares de la población esto incluye: condiciones contextuales, regionales, culturales, étnicas y género; tenemos unos rangos de intervención diferencial definidos donde se encuentra el grupo etario, no se trabaja igual con los jóvenes que con adultos mayores; tema del mando medio, la situación de discapacidad, el consumo de sustancias y trastornos mentales; esto ha sido un gran logro, el hecho de que desde nivel central se haya reconocido la necesidad de generar intervenciones diferenciales (Entrevista E3ACR, RG. Anexos, tabla 39).

- La dinámica de trabajo integral entre unidades del Programa ha facilitado progresos de los participantes. Por ejemplo, formación para el trabajo con la unidad de educación donde se unían para apoyar y reforzar procesos (Entrevista E3ACR, RG. Anexos, tabla 39).
- Existía la voluntad política en algunas administraciones locales de Colombia para aportar al proceso. Por ejemplo, en Medellín la alcaldía inició un proceso antes que la ACR se configurara. A su vez, ha colaborado el sector privado (E4AM, CCM. Anexos, tabla 40).

Ha existido desde el principio, como te conté, desde esa primera administración cuando se dio la desmovilización, la voluntad política está, Medellín ha sido una ciudad muy polémica en ese tema, es la ciudad que más desmovilizados tiene, es una cultura que está ligada al narcotráfico como se sabe, de bandas con una situación muy difícil y muy compleja en ese tema; entonces siempre ha tenido la voluntad, por eso mismo, porque hace parte de las dificultades que tiene la ciudad en las cuales hay que intervenir significativamente (Entrevista E4AM, CCM).

Aciertos: este es un proceso que hemos venido aprendiendo desde la desmovilización del M-19 y otros procesos de paz anteriores; los participantes entienden que no solamente dejando las armas se llega la paz, un proceso de reintegración es el camino para llegar a la paz; no solamente contando con los participantes, también con sus familias y las comunidades. Van creciendo las actividades que desarrollamos con familias y comunidades; junto al Estado mantenemos un control sobre los participantes, esto nos ha permitido tener bajos niveles de reincidencia; dentro de los veinticinco casos de reintegración en el mundo, Colombia tiene los niveles más bajos de reincidencia con un 8%.

Nos falta buscar mecanismos reales para una reintegración completa, los participantes deben dejar de pensar que este es un proceso asistencialista y una pensión de por vida; en estos momentos estamos creando estrategias para socializarlas con el país en el año 2012. Las estrategias que estamos manejando en estos momentos no son suficientemente amplias, porque la población con que trabajamos es diversa y tiene muchas complejidades; los participantes tienen un mejor proceso de reintegración en las ciudades, en términos de formación para el trabajo la oferta laboral es buena y los proyectos productivos se pueden realizar; respecto al proceso de reintegración en las zonas rurales, no solamente ayudamos a paramilitares y guerrilleros, también a informantes campesinos de la guerra, estos participantes solo saben trabajar la tierra, no les podemos exigir noveno grado de bachillerato para acceder a formación para el trabajo; necesitamos ayudarlos con Capital Semilla para que puedan acceder a un proyecto productivo y que sigan trabajando la tierra; pero en estos momentos no tenemos el capital necesario y en el año 2011 nos van a recortar el presupuesto; tenemos que buscar los mecanismos para que los nuevos reintegrados obtengan los beneficios del proceso (E3A-CR, GACR. Anexos, tabla 37).

- Desde la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación los dos funcionarios afirmaban que el proceso iba avanzando entre aciertos y desaciertos. El área de exhumaciones expresaba que para la víctima era importante saber del paradero de su familiar o recibir los restos. La expresión “hasta no ver no creer” mostraba esa situación de no saber del destino de su ser querido (Entrevista E4FGN, LC. Anexos, tabla 41).
- Las instituciones que han asumido lo procesal en materia de justicia han recibido todo el peso y la responsabilidad. No se puede negar que el proceso es de toda la sociedad. Demanda tiempo, paciencia, saber esperar. A medida que aumentaban las reclamaciones por parte de las víctimas y el número de desmovilizados aumentaba, se complejizó todo y el número de funcionarios de la Fiscalía se iba quedando corto (E4FGN. LB. Anexos, tabla 42).

Con la síntesis de aciertos que se pueden traer a colación en este texto, también cabe la pertinencia de hacer referencia a los *desaciertos* que se podían señalar en ese momento de finales de 2010, por parte de los mismos funcionarios de estas instituciones encargadas del proceso. Consideramos las mismas variables de agrupamiento lo estructural, lo humano y lo institucional, como sigue. En total se hicieron 57 referencias a este tipo de fallas del proceso.

4.3.2.1.4. Perspectiva estructural del proceso

- El diseño inicial de Justicia y Paz desde la sola centralidad en el desmovilizado, sin pensar en la víctima propiamente dicha sino con el transcurso de la dinámica. “Para nadie es un secreto que el proceso empezó ayudando a los desmovilizados; pero, al empezar a trabajar con desmovilización y con conciliación, nació la idea de trabajar con las víctimas. En medio del proceso con los desmovilizados se llegó a pensar que existen unas víctimas, las cuales deben ser vinculadas al Proceso” (E2CNRR, SMS).
- El inicio del proceso dependió de una negociación del gobierno con comandantes de las ex AUC, no fue negociación política. A lo anterior se suma que los paramilitares no eran una organización política sino un grupo armado, por tanto, al momento de exigir compromisos no hay quién responda (Entrevista E2CNRR, HQ. Anexos, tabla 15).
- La sensación generalizada de estar compensando el dolor con dinero. Hay más énfasis en la reparación económica que en la reconstrucción de las personas. “Arrancamos el proceso de una manera desmesurada, sin pensar y sin planear cuáles serían las consecuencias y de cuál manera manejaríamos un proceso de reparación administrativa” (E2CNRR, SMS. Anexos, tabla 22).
- Politización de los programas en lo local. Por ejemplo, el cambio de gestores de lo público ha condicionado la cercanía con las instituciones o el nivel de facilidad para avanzar en programas (E2CNRR, MD. Anexos, tabla 24).
- Gestionar este tipo de procesos sin contar con la gente.

Al crearse las sedes se crearon las estructuras, se empezó a trabajar a nivel nacional, se recogió el pensamiento y la reflexión de las regiones en los encuentros nacionales y se trabajó muy bien.

Los trabajos dependían más de otras cosas que de nosotros, por ejemplo, se hizo una reparación colectiva en un centro educativo que se reparó, restauró y dotó, pero al año no existían vestigios del trabajo que se hizo; porque no se pueden hacer cosas para el pueblo sin el pueblo, existiendo una aplastante tradición paramilitar.

Se hicieron proyectos pilotos dignos, pero, para mí, la CNRR como ente político habría podido reunir muchas víctimas en organizaciones sociales, fundamentadas y liberadas de los violentos (E2CNRR, NB. Anexos, tabla 28).

- El Programa de la ACR tenía fallas en el aspecto educativo, pues los procesos no garantizaban la calidad de la formación. Terminaban procesos participantes que no sabían ni leer, ni escribir bien, pero se les daba grado (E3ACR, EJ. Anexos, tabla 33).
- La visibilidad de los programas y procesos era baja (E3ACR, EJ. E3ACR, NS).
- La formación para el trabajo necesitaba reajustes.

Desaciertos: desafortunadamente cuando se le brinda tantas oportunidades a una persona, no lo aprovechan de una forma adecuada, hay reintegrados que se inscriben a los cursos solo por recibir dinero; finalmente no se están logrando las metas con los reintegrados. Estamos preparando para el mundo laboral a reintegrados que tienen más de 35 años y que no tienen ninguna experiencia laboral. El Gobierno tendría que analizar la posibilidad de conectarlos con un sector productivo. No solamente es recibir educación, sino adquirir experiencia para poder competir a nivel laboral (E3ACR, EJ).

4.3.2.1.5. Perspectiva de lo humano desde los participantes

- La dimensión cultural de darle más prioridad a lo económico que a lo hondo en la transformación personal (E3ACR, JT. Anexos, tabla 36). El centro estaba puesto más en lo material. Por parte de los desmovilizados, la obsesión estaba en si llegaba el dinero mensual o no, si debían ir a los programas para que nos les disminuyeran el subsidio o justificar su ausencia por una u otra razón. Por el lado de las víctimas, el centro estaba en el monto que recibirían cuando la Fiscalía definiera si tenían derecho a reparación o no, y a cuánto ascendería. El investigador de este trabajo tuvo la experiencia de vivir en el sur de Bolívar y recibir solicitudes de víctimas en el despacho parroquial que pedían partidas de bautismo para que “le pagaran el muerto”.

4.3.2.1.6. Perspectiva de lo institucional

- “El gobierno prometió cosas que no se podían cumplir. Por ejemplo, los delitos de rebelión, la sedición y la asonada son delitos políticos, desde la ley 975, pero la Corte Constitucional no los acogió en esa categoría de delitos políticos. El gobierno se comprometió a no extraditarlos, pues los que no tenían procesos judiciales quedaban sin problemas, pero la Corte Constitucional dice que sí hubo concierto para delinquir” (E4FGN, LB. Anexos, tabla 42).

- Fallas en la coordinación entre instituciones encargadas. “Ha sido difícil trabajar con Acción Social” (E2CNRR, MD. Anexos, tabla 24). La Fiscalía no se coordinaba bien con el INPEC para tener presente a los postulados en versiones libres. Las víctimas se quedaban esperando a los postulados en los sitios definidos para las versiones libres, etc.

Otro aspecto que vale la pena tener presente al analizar el caso de Colombia son los faltantes que los funcionarios percibían en el proceso al finalizar el año 2010. Del total de participantes en todas las dinámicas del trabajo de campo (GD y EC) se hicieron 79 referencias a cosas que faltaban en el mismo proceso. Entre estos podemos citar fundamentalmente:

- Las expectativas de las personas que participaban en el proceso eran muy altas. Por ejemplo, pretendían que la reparación integral estuviera en corto tiempo. Se quejan mucho de la lentitud del proceso. No se tenía en perspectiva que lo judicial demanda tiempo.
- Faltaba coordinación entre las instituciones. Por ejemplo, la Fiscalía debía ir creciendo en la perspectiva que el proceso no tiene solo desmovilizados, sino que también hay víctimas con derechos. También hay desarticulación entre la Fiscalía y el INPEC. (Entrevista E2CNRR, JV. Anexos, tabla 21).

Hay grandes problemas de articulación entre la Unidad de Justicia y Paz y el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) se anulan versiones libres porque el victimario llegó tarde a la versión; es un tema que debe tratarse a nivel nacional, reunir al Director del INPEC con el Director de Justicia y Paz para saber qué está pasando con los permisos de los victimarios.

Este Proceso va muy lento...faltan funcionarios, logística y recursos; en el Valle del Cauca hasta el 2009 se estaban recibiendo versiones de libres de 13 paramilitares y en este año se han rendido versiones libres de hasta 130 paramilitares; un solo Fiscal con 8 investigadores y 2 fiscales auxiliares, en qué momento se va atender tantas versiones libres (E2CNRR, JV).

Desaciertos son muchos, pero es un proceso que ha sido flexible y dinámico, es difícil trabajar con una problemática tan fuerte como es “la guerra” y pensar en resultados cuantitativos de un día para otro; cuando se trabaja en lo social se debe pensar en otros rangos de medición, porque los que se han utilizado no son los mejores y esto genera que la lectura del proceso se vea afectada. Estamos en el camino de empezar a reconocer aspectos cualitativos, tenemos dificultad con reincidencia o reinserción; pero también hay buenos procesos. De cien personas que se desmovilizan, cuatro tengan la posibilidad de un Proceso de vida, es una ganancia para nosotros.

Otro desacierto es la centralización excesiva, se deben regionalizar algunos aspectos del Proceso (E3ACR, RG. Anexos, tabla 39).

- La cesación del conflicto para que los avances fueran más visibles y no se confundieran las dinámicas, como es el caso de los grupos que no se desmovilizaron (por ejemplo, en el Casanare). Además, la guerrilla persistía en sus ataques (Entrevista E2CNRR, SMS. Anexos, tabla 22).
- La dinámica que se proyectaba ya en ese tiempo con el problema de la tierra.
- Faltaba una política pública con énfasis social claro, no asistencialista.
- Faltaba trabajar la estigmatización social que subsistía y, aún subsiste, en la sociedad Colombia. Ser de izquierda era ser comunista o guerrillero (E2CNRR, LGA)
- Trabajar con más certeza sobre política de restitución de bienes (E2CNRR, EP. Anexos, tabla 26). Se necesitaba un gran voluntariado social.
- Faltaba decisión política por parte de los sujetos procesales y de la sociedad. Algunos desmovilizados comenzaron a hablar y al incumplirles acuerdos, callaron (E2CNRR, JH. Anexos, tabla 27).
- La dimensión jurídica debía acelerar más los procesos.
- Se debía evaluar el ámbito del proceso productivo, pues sin tener para comer se podía volver a delinquir.
- Faltaba mejorar dinámicas del proceso de reintegración económica.
- Faltaba más compromiso del sector privado, aunque era difícil porque fue de los más afectados con los ataques.
- Faltaban crear mecanismos reales de reintegración completa. Ayudar a que los participantes dejaran de pensar que era un programa asistencialista y de pensión para toda la vida (E3ACR, GACR. Anexos, tabla 37).
- En las Unidades de Justicia y Paz faltaba personal a medida que pasaban los años. Incluso, tenían pocos laboratorios ante la demanda (E4FGN, LC. Anexos, tabla 41)
- Se debía tener cuidado con re-victimizar.
- Faltaba “saber esperar”. Lo judicial suele ser demorado. La gente quería tener noticias y resultados en el inmediato futuro (E4FNG, LC).

En suma, el acercamiento a los actores de la CNRR, la ACR y a los dos funcionarios de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, añadiendo al de la funcionaria de la Alcaldía de Medellín, encargada del proceso con este grupo humano de ex combatientes, permiten hacer una aproximación conclusiva primaria, faltando la información que ofrecieron los grupos de víctimas y de participantes en el Programa de la ACR a través de los GD, de que al finalizar los primeros cinco años de la propuesta de Justicia y Paz la dinámica alternativa del conflicto armado en Colombia contaba con un “color gris” que dejaba la sensación de estar

avanzando la propuesta, pero con muchas zonas oscuras que ponían en entredicho la efectividad de esta apuesta gubernamental.

No se niegan aciertos, pero tampoco se desconocen desaciertos y falencias que debían superarse si se quería avanzar en la apuesta por la búsqueda de la paz. La sensación generalizada era que se estaba trabajando, algunas veces “con las uñas”, pero se hacía todo lo posible por gestionar. Todos creían en el proceso y estaban convencidos de estar haciendo lo mejor posible por atender a su “público objetivo”. Los datos estadísticos no los preocupaban u obsesionaban para mostrar el efecto real del proceso, pero sí seguían soñando en que los retos daban a la dinámica un sentido proactivo:

Pienso que el Proceso se debe fortalecer, este Proceso es necesario, debe hacerse con toda la sinceridad y transparencia necesaria para que las víctimas no se sientan excluidas. Romper la brecha entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos, crear consensos y acuerdos que nos permitan beneficiar tanto a las víctimas como a los victimarios; porque los victimarios también fueron víctimas, víctimas de una no atención en educación, no fueron atendidas sus necesidades básicas; participantes de 17 años que la única forma de sustentar a sus hijos, fue pertenecer a un grupo armado ilegal; fueron victimarios a raíz de su condición de víctimas, obviamente no los estoy justificando (E3ACR, JT).

Este es un Proceso que está en construcción, una víctima de Medellín decía “este Proceso tiene más esperanza que experiencia”. Ojalá los hombres que se desmovilizaron jamás vuelvan a la guerra. Nosotros como CNRR vamos a los municipios y con las Personerías, Alcaldías y víctimas, insistimos en no volver a repetir la historia (E2CNRR, LGA. Anexos, tabla 23).

4.3.2.2. Perspectiva de la efectividad del Proceso desde los GD

Estando yo en la cárcel, una muchacha llegó diciendo que tenía una tesis de grado sobre la guerra y le dije que tema escogió y me dice sobre el enemigo y le dije ah carajo, si sobre el enemigo cual es la visión de guerra del enemigo y me puso a pensar sobre la visión del enemigo y la primera reflexión que yo hice es que estando uno en la guerra, el enemigo es el diferente más cercano, ese lo catalogan; entonces nosotros estábamos en un campamento y el diferente más cercano era un señor que tenía una gran tienda y era bien amarrado y se estaba volviendo rico, allí concentramos la visión del enemigo, superamos la visión del rico de la vereda y nos fuimos a buscarlo en el inspector de la Policía, dijimos este no es y fuimos a buscarlo en el Alcalde y dijimos este no es y así, en la medida que usted capta que el enemigo no es ese, va a buscar un diferente más allá, digo yo como aprender todos esos procesos en la reconciliación y en la ética pública, una de las cosas de la ética pública que tiene que ver con estos procesos de reconciliación es que están más cercanas las perdedores a la ética pública que los ganadores, es decir la humildad que le da a uno la derrota, lo obliga a decir estuvo mal hecho y la soberbia de quienes triunfan les impiden ver la humildad, yo pienso que este tipo de cosas no hay quien las reflexione, no hay (Entrevista E5AC, FG. Anexos, tabla 46).

Los participantes en los GD que se pudieron desarrollar, apoyados en las coordinaciones centrales de la ACR y de la CNRR, contaron un número de personas unidas bajo la dimensión del conflicto y la violencia. Eso, la guerra, la destrucción, la fragmentación los unía desde dos perspectivas distintas: víctimas y excombatientes. Ya se señalaron las características de esos grupos de poblaciones. En este momento se busca traer a colación la percepción que tenían respecto al Proceso de Justicia y Paz a finales de 2010, junto a la visión que se podría captar del entonces dinamismo que el gobierno le imprimió desde 2005 hasta ese año a una búsqueda alternativa al conflicto y la violencia, centrando la atención en la desmovilización de los grupos paramilitares y abriendo la oportunidad para los integrantes de grupos guerrilleros.

Citar a uno de los entrevistados, Alias “Pacho Galán” —excombatiente del ELN— y convencido acérrimo de la paz después de que vivió su proceso en la cárcel, pretende ser una excusa para acceder a las creencias que fundamentan el acceso de este trabajo al tema de *hacia la política pública* que proponemos se debe trabajar en este tipo de dinámicas. Esta perspectiva del institucionalismo histórico y del normativo que asumimos como marco de referencia conlleva tener presente que la perspectiva de los sujetos, individuales o colectivos, frente a una apuesta como la de la Ley 975/2005 y todo lo que implicó para Colombia, más allá de una normatividad y una estructura surgida a raíz de esta, pero desconociendo los elementos que subyacen a la reconfiguración de lo común.

Uno de nuestros instrumentos metodológicos, el *process tracing*, permitió tener en cuenta estos elementos al hacer referencia a la inferencia causal al tener presente que el desarrollo de los acontecimientos o situaciones en el tiempo pueden ser mejor analizados al describir adecuadamente un evento o situación en un momento dado en el tiempo, donde el cambio y la secuencia sientan las bases de la reflexión respecto a un fenómeno social (Collier, 2011). La historia de conflicto y violencia, descrita en los casos de Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia, brindan una suma de situaciones en el tiempo que se analizan desde la génesis histórica que condujo a los cuatro distintos procesos de búsqueda alternativa al conflicto y la violencia. Mandela y De Klerk, con el *nation building*; Esquipulas y sus apuestas de paz, con la voluntad de la partes de llegar a acuerdos y, finalmente, la suma de intentos de acuerdos de paz a través de negociaciones con grupos en diferentes épocas, concentrando el último intento con la Ley de Justicia y Paz, marcan esos acontecimientos que van dando instrumentos de soporte para ir hacia ese trabajo previo de diseñar una política pública.

Entre 2005 y 2010 se promulgó e implementó la Ley 975/2005 en Colombia. Incluía la creación de un cuerpo normativo que la implementara, el diseño y la organización de institucio-

nes encargadas, la acogida de un caudal de personas como ex combatientes y víctimas ante un conglomerado social que estaba acostumbrado a leer en las páginas de sus historia que tal o cual gobierno estaba dialogando con tal o cual grupo, que se firmaron acuerdos y que se ofreció una serie de garantías para que los grupos se desarticularan. Sin embargo, los acontecimientos demostraban que las cosas no se resolvían tan fácilmente. Algo pasaba, pues los enfrentamientos aumentaban, se sabía que los muertos se seguían contando, pero sin saberse el número exacto y el problema parecía que “eran esos grupos”.

En esos cinco años, la sociedad colombiana y la comunidad internacional en general comenzaron a tener datos que iban creciendo cada día con el aumento de desmovilizados (como postulados o como participantes del proceso) y del número de víctimas. Las instituciones del Estado fueron notando cómo sus oficinas y escritorios se llenaban cada día de nuevas solicitudes en cualquier esfera que la ley lo permitía y las exigencias de derechos no se detenían. Se accedió a algunos de esos grupos y se les propuso conversar, a través de la metodología de los Grupos de Discusión (GD), sobre la percepción que tenían del proceso.

Con el propósito de organizar mejor la información, se retoman las tres variables de análisis que asumimos con los datos obtenidos de los funcionarios de las entidades del proceso: la dimensión de lo estructural, de lo humano y de lo institucional. El número de participantes en los diferentes GD y sus características ya fueron objeto de presentación anteriormente en este mismo capítulo.

Consideramos importante resaltar que tanto participantes del Programa de la ACR como víctimas que habían accedido a los servicios de la entonces CNRR llegaban a estas instituciones con un sentido de “reclamo” de derechos, según cada caso. Los excombatientes venían recurriendo a los acuerdos suscritos para la desmovilización y los procesos que debían cumplir para seguir contando con el apoyo que se les había prometido y las víctimas buscaban el cumplimiento de su derecho a la justicia, la verdad y la reparación. Por tanto, la perspectiva en la visión frente al proceso conlleva una dimensión subjetiva (la mayoría de las veces muy individualizada) y centradas en exigencias respecto a las obligaciones del Estado con ellas. No sin desconocer que es común tener este tipo de reacciones y búsqueda de intereses fundados en la perspectiva de “tienen la obligación de darme”, sobre todo cuando están en juego elementos económicos para grupos humanos que han sido desplazados, agredidos, viven en condiciones socio-económicas difíciles o se han acostumbrado a un estilo de vida donde el “acceso al dinero fácil” es el común denominador. Tampoco se pretende desconocer las falencias en materias de gestión de lo público que suelen encontrarse en lo estatal, especialmente cuando están en juego dinámicas de lo procesal a nivel judicial o la entrega de subsidios, en la línea del Estado de bienestar.

Respecto a los aciertos que se le podían adjudicar al proceso se señalaron:

4.3.2.2.1. Perspectiva de lo estructural desde los participantes

Suscitar un diálogo grupal para percibir la visión que los “usuarios” tienen de un proceso como el de Justicia y Paz tiene sus tonalidades. Ya aclaramos que el origen socio-económico, junto a las condiciones de víctima o excombatiente en un contexto histórico de tanto conflicto y violencia, abre la interpretación analítica con percepciones que se mezclan entre lo programático del proceso, como tal, y los intereses, necesidades y valores de cada persona. Esta mirada de lo estructural hacía referencia a cómo aprecian los participantes la manera en que se estaba llevando la dinámica desde la ACR y la CNRR. Indudablemente, salieron a la luz en los GD anotaciones de asuntos personales y experiencias muy precisas, junto a información que aporta a esta reflexión.

- En la línea de formación educativa, los participantes de la ACR destacan la posibilidad de recibir formación técnica o tecnológica en el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) (G1R, RBA 5. Anexos, tabla 7). La formación fue señalada como un factor clave en el Programa (G2R, RB1 y 2 Anexos, tabla 8).
- Es un programa piloto ante la realidad de muchos países que han vivido cosas parecidas. Les habían brindado (hasta 2010) apoyo económico, acompañamiento psicosocial, formación académica, formación profesional (G4R, RC 2. Anexos, tabla 10).
- Las víctimas perciben que la ley ha sido beneficiosa en cuanto a que ha permitido conocer el paradero de sus familiares y, en algunos casos, acercarse a quienes perpetraron los hechos contra ellos. Sin embargo, sienten que se puede caer en la impunidad si no se tiene cuidado en el proceso (G1V, VB1. Anexos, tabla 1).
- Las percepciones se dividían entre lo visto por los excombatientes en las bondades de un programa que los acogía y les ayudaba a reincorporarse a la vida civil y lo percibido por las víctimas que valoraban el trabajo de la CNRR. Del Programa de la ACR se resaltaron elementos más de programas y proyectos, sin desconocer las falencias, puesto que efectivamente podían asistir y recibir beneficios. Por el lado de la CNRR, las víctimas agradecían tener una oficina a dónde llegar, que allí las escucharan, las orientaran y las apoyaran. Pero la institucionalidad, en cuanto estructura, era cuestionada por la desinformación, la lentitud en los procesos y la poca transparencia (elementos que volverán a ser resaltados en desaciertos).

4.3.2.2.2. Perspectiva de lo humano desde los participantes

Teniendo en cuenta que las creencias, los valores, son instrumentos claves en los procesos de reconstrucción social, esta investigación consideró importante traer a colación el elemento de lo humano, por cuanto, más allá de la norma o de los programas y procesos que se deriven de este tipo de iniciativas, lo que marca la pauta de efectividad es la condición en la que los sujetos activos en este tipo de experiencias va a recibir y dar en una reconfiguración de lo público, después de largos períodos de conflicto y violencia. Algunas percepciones registradas fueron:

- Se tenía desde la visión de algunos participantes de la ACR: “la única ventaja es que estamos vivos” (G1R, RBA 2).
- Otros, anotaron haber aprendido a controlar emociones, sentían que en ese momento ya podían pensar antes de actuar, aunque los problemas económicos los agobiaban (G1R, RBA 2).
- Rescatan mucho la dimensión de lo psicosocial como un factor que los había ayudado.
- Destacan el buen trato recibido de los funcionarios de la ACR.
- Sienten que les transmitieron valores para reintegrarse a la sociedad (G4R, RC 2. Anexos, tabla 10).
- Con el apoyo de los tutores habían hecho un ejercicio de reflexión y valoración de sus vidas: “Ponemos en práctica el valor de la tolerancia; somos conscientes de haber participado en un conflicto armado y que ahora estamos en un proceso; me desmovilicé de camuflado, fusil, corazón y pensamiento. Mi vida ha cambiado gracias a la terapia psicosocial” (G6R, SP1. Anexos, tabla 12).
- Las víctimas se sentían acogidas y apoyadas por la CNRR. Desafortunadamente, por su condición, en esta visión no hubo muchos comentarios que facilitaran conocer aciertos en materia de la dignificación, aunque la misión y visión de la CNRR lo planteara. Precisamente, en los desaciertos aumentarán los comentarios de estos GD.
- Para las víctimas saber de sus familiares desaparecidos, recibir los restos, poder vivir ese duelo sabiendo que tenían a “ese ser querido así fuera en huesos”, ha sido algo que valoraron desde que la ley permitió la dinámica de sacar a la luz pública esta realidades.

4.3.2.2.3. Perspectiva desde lo institucional de los participantes

- La CNRR ha sido un valor fundamental de apoyo, acogida y orientación (G8V, VB 5. Anexos, tabla 8).

- La ACR también ha sido considerada como una institución que favorecía el proceso de reinserción de los participantes. Aunque muchas de las quejas e inconformismos iban dirigidos a dinámicas procedimentales y reclamos por lo económico, lo laboral, lo habitacional, entre otros, la ACR no era la causante en sí de las fallas, pero debía recibir los golpes por ser la que primero aparecía desde la perspectiva gubernamental.
- La relación con las comunidades fue un factor importante que se catalogó entre percepciones como “ir siendo aceptados” hasta “estigmatizados”. Sin embargo, apareció como un elemento de lo institucional, en cuanto a las redes informales que esta investigación asume.
- El dolor y el sufrimiento fue uniendo grupo de víctimas que permitieron el apoyo entre ellas y la asociatividad.

En la visión de los *desaciertos*, los señalamientos son bastantes extensos, puesto que, como ya describíamos, este tipo de grupos humanos entienden lo efectivo de una dinámica como esta primordialmente desde el acceso a las necesidades básicas de un ser humano. Esta investigación sintetiza las siguientes visiones, de acuerdo con los mismos criterios:

4.3.2.2.4. Perspectiva de lo estructural

- Para los GD de víctimas, la rebaja de la pena (alternatividad penal) no es justa pues el daño infligido fue grande. La percepción es que la ley se hizo para beneficiar a los paramilitares.
- En su gran mayoría, los participantes del Programa de la ACR coincidían en que las fallas más notorias del programa estaba en las líneas económica y formativa. Por ejemplo, fueron constantes las quejas por el monto del subsidio que se les daba, pues sentían que no podían vivir bien con esa suma. A esto se suma el reclamo de que si faltaban a alguna actividad se les disminuía el monto del subsidio. O, a medida que avanzaban en la formación, iban recibiendo menos dinero. Respecto al proceso formativo, manifestaban quejas en la calidad de la educación, puesto que los graduaban aún sin saber leer ni escribir bien (G1R, RBA 1, 2, 3 y 4. Anexos, tabla 7) (G2R, RB4 y 5. Anexos, tabla 8).
- Señalaban los excombatientes que no se concretaba lo de los proyectos productivos.
- Una queja reiterativa de los excombatientes era que a ellos les daban la ayuda económica y debían ir a los procesos formativos y de acompañamiento, pero que no les ayudaban a “conseguir el empleo”. Sentían que el programa debía llevarlos hasta el empleo mismo (G1R, RBA 2).

- Los excombatientes afirmaban que hubo incumplimiento de promesas frente a lo acordado al momento de la desmovilización. Hacían referencia a que les habían prometido acceso a salud, vivienda digna y trabajo honrado (G1R, RBA 3 y 6) (G2R, RB1) (G5R, RM 4) (G6R, SP1. Anexos, tabla 12).

El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en el albergue de ochenta mujeres, nos prometió salud (en el hospital que quisiéramos), educación (en la universidad que fuera y al precio que fuera), vivienda (donde quisiéramos) que trajéramos a nuestras familias porque tendrían todo el apoyo. Eso fue una gran mentira. Respecto al proyecto productivo, lo presentamos y pasan los años y no nos lo aprueban, por mucho que estudiemos para presentarlo, no lo aprueban; hacemos derechos de petición y los funcionarios dicen que no aparecen los papeles (G3R, R2B5. Anexos, tabla 9).

- Tanto en los GD de excombatientes como de víctimas, se registra un gran desacuerdo en la lentitud en los tiempos de trámites, presentada por parte de las instituciones encargadas (G1V, VB1 y 2. Anexos, tabla 1) (G5V, VSP 2. Anexos, tabla 4). Por ejemplo, en Barrancabermeja entregaron los restos de los desaparecidos de la masacre de 1998 once años después. Este señalamiento fue tan reiterativo que traemos como cita textual dos tipos de comentarios que pueden ubicar el presente análisis, uno de una abogada de víctimas y otros dos de víctimas.

Hay engaños, hay expectativas demasiado altas, tenemos que tener un punto de equilibrio, no podemos pensar que un Proceso de Justicia y Paz es un proceso distinto al ordinario; porque es una justicia transicional, es decir, que una justicia de paso, logre en tan rápido tiempo sacar de la impunidad lo que lleva veinte, quince y diez años escondido; por la lentitud del proceso. Algunas víctimas se sienten decepcionadas y defraudadas. Lo que ha hecho el Proceso es callar a la víctima, el victimario habla y es lo que él diga, porque la víctima no tiene el espacio; aunque la ley lo diga, los fiscales o los jueces de la Alta Magistratura no abren el espacio para que la víctima se exprese, la ley sí determina los momentos para ello; esto ha hecho que el victimario siempre esté en el primer lugar, siempre sea el actor principal del Proceso y la víctima esté en último lugar; entonces va quedando una verdad a medias (que es la verdad del victimario) y no la verdad real. Eso por lo pronto era lo que quería aportar (G1V, Abogada de Víctimas. Anexos, tabla 1).

En otro contexto, dos víctimas opinaron respecto a los tiempos y procedimientos para entregar documentos:

Víctima 3: No. Hace dos años radiqué mis documentos, enviaron el radicado a mi casa, he ido a Acción Social de Barrancabermeja y no me han resuelto nada. Para mí no tiene ningún valor porque no ha avanzado.

Víctima 1: Hace un año y medio radiqué mis documentos, incluso fui hasta Barrancabermeja y me dijeron que lo que pasara con los documentos en San Pablo dependía de Barrancabermeja; luego me dirigí a la Fiscalía me dijeron: “nosotros somos seccional Santander, debe dirigirse al municipio de Simití, tiene dieciocho meses hábiles, si Acción Social no realiza el Proceso como es, debe dirigirse a Simití”. No he avanzado más, este Proceso es muy lento (G5V, VSP1 y 3. Anexos, tabla 4).

- Se siente que los diálogos y acuerdos fueron solo con los jefes, no con todos los combatientes. Esto los puso en la posición de solo obedecer. Salieron mandados y al ingresar al proceso o estar en la vida sin armas, los inconvenientes han ido creciendo:

Quiero opinar sobre la Ley 975 de Justicia y Paz, en esta negociación participaron únicamente nuestros jefes, a nosotros no nos dejaron participar. La ley 975 se tramitó a la ligera; por eso la Corte Constitucional ha declarado algunos puntos inexequibles, el fallo de la Corte impide que nos acojamos a los beneficios del Principio de Oportunidad, más de 17.000 reintegrados de las AUC hemos sido perjudicados (G4R, RC2. Anexos, tabla 10).

- En algunas experiencias mezclar los con ex combatientes de las AUC con los de la guerrilla no se percibía como la mejor manera de avanzar. Se sentían inseguros estando con ex guerrilleros, pues la perspectiva de los excombatientes de las AUC era completamente opuesta a la guerrilla (G5R, RM10. Anexos, tabla 11).
- Excombatientes de las AUCE experimentan inseguridad frente a los compañeros que no se desmovilizaron, a la Policía Nacional y a excombatientes de la guerrilla (G5R, RM 4, 5 y 10. Anexos, tabla 11).
- Los GD de víctimas sentían que todos los beneficios recaían en los excombatientes, mientras ellas eran “re-victimizadas” por la manera como eran tratadas por las instituciones del Estado.
- En algunas regiones, sobre todo las más lejanas, no había garantías para que las víctimas accedieran al proceso. Había mucho miedo, temor (G5V, VSP 2. Anexos, tabla 4).

La ventaja de Programa: la educación. Hace un año y seis meses me salí de las FARC, duré trece años en la guerrilla.

Las desventajas: son muchas, hay mucha injusticia en este Programa; porque hay muchos guerrilleros que pasamos gran parte de nuestras vidas en un grupo armado ilegal, es muy duro llegar a la selva de cemento (ciudad) a pagar arriendo y mantener a nuestras familias.

A este Programa le falta el impulso de crear empresas donde nosotros podamos trabajar. Hay reintegrados que no conocen nada de la ciudad, no saben que es un Transmilenio; prácticamente vienen del monte con los ojos cerrados. Rein-

tegrados que no tienen familia, porque los mismos grupos armados ilegales se las mataron, a esta gente hay que apoyarlos para que salgan adelante. Sufrimos el rechazo de la sociedad, por eso no nos dan trabajo, porque piensan que somos asesinos o ladrones; por eso pedimos que nos ayuden a conseguir empleo, para desarrollarnos como seres humanos y mostrarle al mundo que podemos. Los reintegrados que cumplimos con los compromisos, necesitamos que nos cumplan y nos apoyen.

A los reintegrados nos obligan a cumplir con cuatro capacitaciones, a estudiar; por eso no podemos trabajar porque ningún jefe nos daría permiso cuatro veces en el mes.

Hay reintegrados que por ser tan poca la ayuda; se vuelven ladrones y sicarios. En Bogotá existen bandas de reintegrados que delinquen, por la falta de oportunidades. Si este Programa sigue teniendo falencias se formará un gran problema en Bogotá (G2R, RB6. Anexos, tabla 8).

4.3.2.2.5. Perspectiva de lo humano desde los participantes

En este es ámbito las susceptibilidades personales salieron a relucir mucho más, lo que es entendible. Hacer referencia a la destrucción de la vida, pasar por encima de la dignidad, aún con la aquiescencia del Estado, solo deja dolor, rabia, rencor, deseos de venganza y un grito de clamor ante la injusticia, que ninguna ley, programa o política puede subsanar. Sin embargo, la construcción de lo público se gesta en medio de esas realidades que van a configurar la búsqueda de un consenso en medio del disenso (conflicto).

- Los participantes de la ACR se sentían estigmatizados socialmente (G1R, RBA 1, 5 y 6. Anexos, tabla 7). A esto se añadía que no percibían voluntad política de que se les colaborara. “Me tratan bien, pero porque no saben que soy desmovilizado” (G1R, RBA 4) (G3R, R2B 2, 5 y 6) (G4R, RC2). Hasta por los compañeros que se quedaron delinquiendo se sentían estigmatizados como “sapos” (G2R, RB4. Anexos, tabla 8).
- La prestación del servicio de salud también fue catalogada como ineficaz e ineficiente.
- Una participante compartió su experiencia de sentir que algunas personas la trataban bien, aunque sabían que era desmovilizada, otras eran más dura con ella. Aunque afirmaba que no le gustaba decir que estaba en el proceso. Solo le compartía a los más cercanos (G3R, R2B8).
- Para las víctimas, esta dimensión fue catalogada como la más difícil. El mismo dolor, el sufrimiento y haber sido sujetos de abusos e indignidades ya los ponía en una perspectiva en la que lo humano era un desacierto atroz. En la mayoría de los GD se percibía la sensación de descontento con el proceso, la lentitud misma, la desinformación, la manera cómo las hacían ir de oficina en oficina pasando papeles, el hecho de no

recibir apoyos, entre muchos otros elementos. El término re-victimización apareció en algunos grupos.

[...] sí, y yo voy a la Acción Social y me dicen “tú no sales aquí, tú no sales, así me dicen yo metí papeles hace como cuatro años y metí también con Acción Social y tampoco los papeles me han salido, inclusive para reuniones como que no me tienen en cuenta, porque como soy una persona que no sé leer ni nada, entonces no me tienen en cuenta y tengo un vecino que va a las reuniones y yo casi ni me entero, entonces, Padre, cuando uno lo pisotean, Padre, todo el mundo lo pisa, ya me entendió (Mujer víctima entrevistada en Montería. Anexo, tabla 2).

4.3.2.2.6. Perspectiva de lo institucional

- Como lo afirmamos con anterioridad, la dimensión institucional fue manejada por los participantes desde la figura de la ACR y la CNRR, según el caso, en primera instancia. Estas dos eran las entidades más cercanas a lo que ellos buscaban desde su ingreso a los respectivos procesos. En ese sentido, frente a estas dos instancias los desaciertos tenían que ver más con programas, proyectos, etc. y no en cuanto a la existencia de las dos unidades del proceso.
- Lo institucional como desacierto fue catalogado desde la desarticulación que percibían tanto participantes de la ACR como víctimas en el manejo de sus procesos. Por ejemplo, las víctimas acudían a diferentes organizaciones públicas para hacer su solicitud de derechos y no había una articulación. En el GD de San Pablo (Bolívar), el investigador hizo la pregunta precisa sobre a qué entidades habían acudido y cinco víctimas dieron nombres distintos: “Fiscalía, Acción Social, Cruz Roja, Casa de la Justicia, Personería” (G8V, VB 1, 2, 3, 7. Anexos, tabla 4). En el caso de los excombatientes, la Fiscalía los continuaba solicitando, estando aún en el Programa, y afirmaban ser “acosados” por la Policía Nacional en algunas ocasiones. En el caso de los postulados ya anotamos la desarticulación entre INPEC y Fiscalía para el caso de las versiones libres.

Finalmente, las dimensiones de los aciertos y desaciertos condujeron a que los GD se animaran a preguntar acerca de los faltantes que podrían percibirle al proceso. La misma ley estipuló unos tiempos en los que se buscaba llevar a cabo la dinámica. A los cinco años ya estaban la suma de críticas y cuestionamientos al proceso, los escasos resultados en penas y en reparación, la aglomeración en los estrados judiciales de casos por resolver, el número de víctimas no consolidado, las reclamaciones constantes, pero se presentaba el proceso como un “gran triunfo

de la democracia”. No se desconocían los aciertos, pero estos no se limitaban solo a números, sino a cuestiones cualitativas.

- Para las dos visiones, víctimas y participantes del Programa ACR, aunque recibían formación, sentían que era importante entrar en diálogo con el sector privado, pues no les permitían acceder al mercado laboral tan fácilmente. Les pedían experiencia de meses o años y no se tenía en cuenta que ellos no habían trabajado durante mucho tiempo (G1R, RBA 1 y 2. Anexos, tabla 7).
- No se hallaba voluntad política por parte de las administraciones públicas respecto al programa y al apoyo a los participantes, ni con los excombatientes ni con las víctimas.
- Los participantes en la ACR insistieron en las fallas en mejorar la calidad de los programas de formación, la estabilidad económica con un subsidio más acorde con sus necesidades, el apoyo para proyectos productivos más certeros con sus urgencias socio-económicas y la ayuda para que fueran contratados laboralmente.
- Las víctimas consideraban que las fallas estaban en agilizar los procesos, recibir respuestas más verídicas por parte de las instituciones y, obviamente, el acceso real a la verdad.
- Por ejemplo, en Tierralta (Córdoba) algunas víctimas expresaban al respecto:

Víctima 8: Primero la verdad. Cuando nos digan la verdad de los hechos, el gobierno estará dando un gran paso para las víctimas.

Víctima 2: La justicia. Los paramilitares cuando se entregan dicen: vamos a decir la verdad sobre los hechos. Los paramilitares no han sido sinceros, declaran a medias. Cuando la verdad funciona todo funciona bien. El Estado es cómplice de la mentira.

Víctima 7: Trabajando unidos, siendo solidarios podemos alcanzar la verdad. Las víctimas que han llevado el Proceso en grupo han tenido una respuesta, ya han sido reparadas. Nosotros en Tierralta llevamos el proceso individualmente, por eso no hemos tenido una respuesta (G6V, VTC 2, 8 y 7. Anexos, tabla 5).

En síntesis, los faltantes hacían referencia a la falta de respuestas eficaces por parte del gobierno y, por ende, de los programas. Estas respuestas partían desde la dimensión económica hasta los resultados en solicitudes de reivindicación de derechos y acceso a medios de subsistencias dignos como vivienda, salud, trabajo.

4.3.2.3. Desde las perspectivas hacia la necesidad de una política pública

Con esta serie de caracterizaciones respecto a las perspectivas que tenían a finales del año 2010 las diferentes personas que se encontraban involucradas en el Proceso de Justicia y Paz en Colombia queda un panorama de hitos en materia de salidas alternativas al conflicto y la violencia en Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia. Cada contexto con sus particularidades ofrece insumos para abrir las consideraciones finales que permitan acceder a la urgente necesidad de plantear políticas públicas en materia de reconciliación social, más allá de los diálogos, negociaciones, acuerdos y programas.

Acerca de lo que acabamos de sintetizar del acceso a las personas en Colombia, también podemos mencionar referencias que se hicieron en los GD y en las EC que, igualmente, dejan espacio para más insumos desde la reconfiguración de lo público en períodos de pos-acuerdos y pos-conflictos. Se establecieron veinte referencias a las precariedades en el cumplimiento de las llamadas “promesas” durante los acuerdos con las ex AUC o las ofertas a víctimas, presentan el tema de la ayuda humanitaria como un elemento que se debe considerar al plantear este tipo de procesos, poniendo un alto énfasis en “promesas de mejorar las condiciones de vida a cambio de dejar las armas” o en “sabemos que has sufrido, te van a dar lo que necesitas o perdiste”. El asistencialismo o la oficina de beneficencia, en esquema de Estado de bienestar, fractura las verdaderas dimensiones de reconstrucción social. No solo fueron veinte referencias a ayudas y deseo de que se les diera más, sino que configuran la manera de diseñar una apuesta por la paz a cambio de “programitas sociales de ayuda”, donde los beneficiados siempre querrán más y el Estado no hallará asidero ante tanta demanda. ¿Por qué no arriesgarse por verdaderas reformas estructurales de la gestión de lo público y de trabajar a fondo las raíces de los problemas?

En este orden de ideas, se dieron 36 referencias a no creerle al proceso. Expresiones como “este proceso va al fracaso” dejan entrever que el esfuerzo gubernamental para ofrecer garantías no debe apoyarse solo en programas y proyectos focalizados y basados en ayuda humanitaria. Trabajar lo subjetivo es garantía de reconfiguración de lo público, fundado en un esquema participativo y deliberativo. No se puede gestar este tipo de dinámicas desde iniciativas gubernamentales sin contar con la perspectiva de los ciudadanos.

Se registran las mismas fallas en la dinámica de desmovilización. Desde la manera como se procedió hasta el método final de regreso de estos hombres y estas mujeres a la vida civil, señalado en varios momentos por algunos participantes de la ACR o, incluso, por víctimas, se explican las 16 referencias al recrudecimiento de la violencia con la nueva forma que tomaron los combatientes que no aceptaron la desmovilización, las llamadas BACRIM. Inclusive, en

algunas regiones, como Granada y Villavicencio (Meta), no se podían reunir personas o asistir por miedo, pues estaban atacando bastante en ese tiempo la región. El proceso inició “despavoridamente”, pero no se midió la magnitud de los efectos de lo que se buscaba (en número de personas, costos y demandas o solicitudes frente a los derechos). Aún más, el gobierno no midió las consecuencias del inicio de las versiones libres y la cantidad de miembros de la Fuerza Pública y funcionarios públicos que iban a estar involucrados en las dinámicas del terror que utilizaron los diferentes bloques de las ex AUC. De allí se puede inferir la extradición repentina de los ex comandantes, suscitando el silencio en los que quedaron en el proceso en las cárceles de Colombia.

La referencia a la categoría “tiempo” (45 veces) pone la perspectiva de lo procesual, como lo hemos trabajado a lo largo de esta investigación, sobre “la mesa de análisis”. El tiempo marca la historia de conflicto y violencia, ese tiempo también marca las dinámicas alternativas, pero señala que cada programa y proceso tiene un ritmo que no depende de cada persona, sino de la manera como se gestiona lo público en cada contexto. Muchas personas hacían referencia al tiempo para indicar lentitud y quejarse, pero los fiscales y abogados señalaban que lo judicial es de “tener paciencia” y “saber esperar”. ¿Puede una ley estipular períodos para alcanzar la paz o la reconciliación nacional? Por ejemplo, la CNRR se creó para ocho años de funcionamiento. A los cinco años, el nuevo presidente Juan Manuel Santos diseñó su reconfiguración y cesó en funciones antes de tiempo.

Por decisión del Estado nos quedan seis meses de trabajo en la CNRR. Se trabajó mucho en lo visual y tangible, no sé si es lo más decisivo o si fue suficientemente completo para restitución de bienes materiales. Para su tesis tiene que analizar la visión desde las víctimas. La reparación es lo mejor de la CNRR. La reconciliación es lo más deficiente de la CNRR.

La CNRR es un hijo natural que sólo tiene un apellido: “Reparación”, no se pudo trabajar en la reconciliación a causa de prejuicios que existen en el campo político en el seno de la CNRR, hablar de reconciliación era como hablar de fragilidad y no se podía hablar de perdón; sino de perdón y olvido, es decir impunidad, por eso la reconciliación es lo menos trabajado.

Al terminar el trabajo en la CNRR, terminamos bien porque realmente con la reparación hicimos mucho; aunque en experiencias piloto se gastó mucho dinero y tiempo, pero el trabajo fue muy meritorio, pienso que hay fallas como la falta organización de unas víctimas autónomas y asesoradas (Monseñor Nel Beltrán, E2CNRR, MNB. Anexos tabla 28).

En este orden de ideas, las 36 referencias a la acción de la voluntad política también es un referente que se puede tener en cuenta. Está desde la perspectiva de si había voluntad por parte de los entes públicos para apoyar el proceso y el programa, pero en su mayoría se desconocía

ese apoyo. Especialmente las administraciones locales habían estado completamente ausentes en apoyar cualquier aspecto. La alcaldía que más había apoyado era la de Medellín, pues le había apostado a los desmovilizados desde el año 2003. Incluso, llegaron a citar experiencias en las que lo político aprovechó las elecciones para el año 2006, y luego en las de 2010, para ganar adeptos y votos “jugando con la misma dinámica” de los participantes.

Un último elemento que esta investigación hace presente desde la información recogida en los GD y en las EC es el referente a un “ser trascendente”, en quien ponen las esperanzas de un fuerte apoyo emocional y afectivo para avanzar en el proceso. Sobre todo, las víctimas fueron muy recurrentes en esta dimensión. Se puede explicar por la condición de dolor, sufrimiento, en la que se busca un soporte sobre el cual avanzar. También, por el origen humilde, sencillo, rural y popular de muchas de estas personas. Y, por supuesto, la misma referencia a la reconciliación trae consigo una carga trascendental que no puede desconocerse en ninguno de los casos trabajados en esta investigación: Sudáfrica lo trabajó desde Mandela y Tutu, la Iglesia Católica lo fue en El Salvador y Nicaragua y en Colombia es un factor que no queda excluido. Vale la pena tener en cuenta cómo en Valledupar (Cesar) se tuvo acceso a los líderes de una comunidad cristiana que había sido victimizada por los actores al margen de la ley y se mantenían animados por su experiencia comunitaria de fe y sus líderes, pastores. Afirmaba el líder respecto a la pregunta que se le hizo sobre el papel de la fe cristiana de ellos en el proceso de ser comunidades víctimas doblemente victimizadas (por guerrilla y AUC): “En el sentido que Dios a uno lo ayuda mucho frente al rencor, en días pasados se hablaba de la secuelas que le quedan a uno, obviamente queda uno dolido por los amigos que le mataron pero trata uno es de perdonar y yo creo que sí ayudó, nos ayudó en el sentido de ver por ahí en la calle a Cabecitas, al mismo Caliche” (E1CNRR, JP. Anexos, tabla 14).

Diversidad de procesos la historia del siglo XX han dejado a la humanidad como cúmulo de instrumentos para plantear seriamente salidas alternativas al conflicto y la violencia, más allá de pactos. La reconstrucción social es elemento sustancial de este tipo de iniciativas. En Irlanda del Norte, el informe de investigación de la Universidad de Ulster, a través del Instituto de Investigación en Conflictos Internacionales –INCORE– concluyó en ocho recomendaciones para la construcción de sociedades integradas, compartidas y cohesionadas:

- Acoger un profundo cambio en el lenguaje.
- Adoptar una red estratégica para la acción y un significativo compromiso de recursos.
- Crear eficientes y significativas estructuras a través de las cuales pueda trabajarse el progreso.

- Desarrollar estrategias de comprensión de qué se está trabajando y por qué.
- Integrar y establecer opciones en la cuales se pueda soportar la integración.
- Articular buenas relaciones, reconciliación y trato con el pasado.
- Aprovechar la oportunidad presente de las conmemoraciones para construir el espacio de encuentro, diálogo y aprendizaje entre comunidades.
- Ser más efectivo en el uso de la información, las estadísticas y los informes de investigación (Kelly, 2012).

En perspectiva similar, esta investigación ofrece unas consideraciones finales y apuesta por ese *modelo ideal* que brinde la posibilidad de idear el camino *hacia política pública de reconciliación social*, fundada en lo justo y lo efectivo: la deliberación, la institucionalidad y la ética pública.

El tema se enfoca en concientizar a todo el país sobre la reintegración. Buscamos que todos los participantes se vuelvan ciudadanos con deberes y derechos, que el país los reconozca como tal; si este proceso lo hacemos con ayuda de la comunidad, del sector privado, sector público y la comunidad internacional; demostrándoles que este proceso es factible y que le estamos devolviendo ciudadanos responsables a la sociedad, las puertas se abrirán; cuando la sociedad reconozca que un participante a quién nosotros le dimos oportunidad de empleo, lo asesoramos en la creación de un proyecto productivo, le dimos educación [...] le estamos quitando un arma a la guerra, le estamos quitando muertos y secuestros al país; pero esto se logrará cuando la gente acepte al participante como ciudadano (Gerente Cali, E3ACR, GACR. Anexos tabla 37).

La virtud de la razonabilidad es hacer concesiones para ambas partes. Una cosa sería una amnistía (excesivo), acercar a los presos. A los otros habría que pedirles a qué están dispuestos a renunciar. Este valor es político y es ético porque esto no se puede regular. No se puede establecer un decreto que diga que hay que ser razonables. Se pide a la gente que sean más generosos [...] es pasar de vivir de una forma de vivir en conflicto a otra en la que se deben curar heridas (Victoria Camps. E5AC, VC. Anexos, tabla 22).

5. CONSIDERACIONES FINALES HACIA EL MODELO IDEAL

Estamos acostumbrados a leer las tradicionales *conclusiones* repetitivas para el cierre de este tipo de trabajos investigativos. En esta ocasión, no procederemos en esa misma línea, por cuanto la complejidad de las dinámicas a las que nos hemos acercado desde Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia permiten dejar el discurso abierto, de forma que la apropiación de estas ideas expuestas posibiliten análisis desde las diversas categorías que pueden surgir del conflicto y la violencia en la sociedad.

Las *conclusiones* dan la sensación del “punto final”. Ofrecen el cierre del discurso y el análisis como pretendiendo recoger las últimas consideraciones que se pueden tener frente a un tema. Pero hacer referencia al conflicto y la violencia es reconocer que el cambio y la transformación brindan la oportunidad de seguir constituyendo lo social, lo público, en medio de lo complejo. El conflicto es constitutivo de la naturaleza humana, se hace explícito en la vida en común, en el encuentro con el otro, y, desde allí, la tarea está en gestar espacios y tiempos en los que la exacerbación de lo conflictivo, la violencia, no fragmente esa vida en común.

En este sentido, esta investigación opta por dejar algunas *consideraciones finales hacia el modelo ideal* que se propuso desde el inicio de este escrito. Son apuntes que se pueden recoger al buscar darle “punto final” a esta manera de abordar el problema que nos planteamos, pero no se pretende dar la última palabra. Son anotaciones “finales” para este tiempo de lectura, investigación y análisis, pero no son el cierre definitivo. Siete presupuestos han sido construidos en el texto como puntos de partida:

- 1) La naturaleza conflictiva del ser humano conlleva continuas posibilidades de quiebre y fragmentación en la relación de encuentro con el otro/los otros y, a su vez, brinda las oportunidades de la recomposición de lo quebrado o fragmentado. Es decir, el conflicto en sí es

cúmulo de posibilidades y oportunidades. Pero esta fusión de la destrucción y la reconstrucción nos lleva a la complejidad como un factor característico de la vida social.

- 2) La misma complejidad que caracteriza la vida en común es el marco de referencia desde el cual comprender las acciones individuales y colectivas que entran en choque y ocasionan la inestabilidad que rompe el espacio público; esta complejidad nos lleva a plantearnos estrategias de gestión de lo común para reestablecer la co-existencia y la convivencia en medio de la diferencia, sin que la destrucción prime.
- 3) Las estrategias para crear esos espacios de reconfiguración de lo público han sido variadas a lo largo de la historia de conflictos en el mundo, pero la sensación de “no haber aprendido a vivir como humanos” impera en muchas sociedades a lo largo y ancho de la tierra. Si tenemos consciencia del nivel de destrucción al que podemos llegar con nuestras acciones irracionales ¿por qué siguen imperando actitudes que permiten la exacerbación del conflicto, dejando que llegue a los brotes de violencia e, incluso, a la guerra?
- 4) La respuesta violenta se suscita ante la negativa de las personas a hacer uso de la racionalidad, en la perspectiva que Amartya Sen nos ayudó a comprender: 1. Lo normativo nos ayuda a pensar y actuar sabia y juiciosamente, pero se rechaza hoy en día por el cortoplacismo en la toma de decisiones; 2. Además de lo anterior, podemos elegir racionalmente desde las condiciones antropológicas que nos lanzan a maximizar nuestras preferencias, pero hacerlo de forma inteligente implica cooperación y no juegos de suma cero; y 3, por último, cuando compartimos el espacio social o común, debemos actuar razonablemente, para acercarnos a la comprensión de qué hacen y por qué hacen lo que hacen los otros, cómo y qué conocen y qué podemos aprender de esos otros con quienes configuramos lo público, pero esa razonabilidad está lejos de ser compartida en el actuar colectivo.
- 5) Esta misma pregunta inicial que nos planteamos y que sostuvo la presente investigación en “tensión permanente”, la del por qué no son efectivos los procesos de salida alternativa al conflicto y la violencia, permite que nuestro siguiente presupuesto se centre en lo que el denominaríamos un problema de acción colectiva: ¿Qué esperamos de los otros, para actuar de forma que no abusen de nuestra buena fé? La manera cómo actúa una persona con la que se comparten espacios comunes puede condicionar la acción personal para que la acción esté en línea con los comportamientos o con la percepción que yo tenga de sus comportamientos o, incluso, con la expectativa que yo tenga de los mismos. Pero si yo sólo espero egoísmo o, incluso, violencia de la otra parte ¿qué puedo hacer sino actuar de forma egoísta y violenta también? ¿Será éste el obstáculo fundamental para que después de tantos

conflictos y violencia a lo largo de la historia, especialmente en los siglos XIX y XX, las sociedades no hayamos encontrado mecanismos efectivos y justos que permeen acciones que faciliten la co-existencia y la convivencia?

- 6) Nuestro sexto presupuesto parte de la idea de que a pesar de todo, conociendo los fundamentos del actuar humano, podríamos diseñar e implementar estrategias que, desde la eficaz gestión de lo público, incentivaran un uso razonable de la cooperación. La dimensión del *policy-making* nos da las posibilidades de comprender y evaluar cómo podemos trabajar mancomunadamente en esta línea de actuar razonablemente en la esfera común desde lo cooperativo.
- 7) Por último, la labor desde el *policy-making*, consiste en introducir programas basados en la razonabilidad, contruidos desde la cooperación y hacia la reconfiguración de la esfera pública; la estrategia no puede basarse en el modelo *top – down* y centrar su atención en “firmas de acuerdos de cese de hostilidades”, propuestas gubernamentales para que los grupos al margen de la ley entreguen las armas y reciban “beneficios o incentivos”, junto a mecanismos de recoger la memoria de los hechos conflictivos y violentos para suscitar una serie de símbolos de reparación; no puede hacerse desconociendo el derecho social a la convivencia pacífica basada en principios de justicia, verdad, reparación y restitución efectivas. Tanto la formulación como la implementación es una labor procesual que va marcada por apuestas que contienen elementos intrasubjetivos e intersubjetivos, en un marco institucional participativo.

En este orden, la pregunta que suscitó esta investigación giró alrededor de ¿Cómo hacer más justos y efectivos los procesos de reconciliación social en situaciones de conflicto y violencia? Y, para hallar algunas líneas generales de respuesta, se abordaron los casos de Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia, en sus particularidades históricas, temporales, causales, procesuales y de salidas alternativas, por contener elementos de análisis en los que la conflictividad marcó altos niveles de acceso a la violencia, la fragmentación social marcó a los grupos humanos implicados y a la comunidad internacional, y son presentados como “ejemplos de procesos hacia la paz”, con niveles de aciertos y desaciertos que nos permiten, a través de los *mecanismos causales*, trazar acontecimientos y situaciones sobre el tiempo.

Desde la perspectiva que nos abrió la pregunta de investigación y ubicados en la complejidad que nos ofrecieron los cuatro casos escogidos, nos planteamos las siguientes hipótesis para validar: 1) *Un proceso de reconciliación social es justo cuando contiene el elemento deliberativo como espacio de imparcialidad en el que los intereses de todos los miembros son tenidos*

en cuenta. Y es efectivo cuando los mecanismos institucionales que buscan la convivencia y la coexistencia después del conflicto se fundamentan en bases de institucionalidad guiada por la buena gobernanza y, en última instancia por la ética pública. 2) Todo proceso de reconciliación social debe contener instrumentos (como la verdad, reparación, restitución, memoria histórica, contexto hacia el perdón, entre otros), procesos (tiempos y fases) y estructuras que deben respetarse para que el conjunto del proceso, guiado por la justicia y la ética, funcione.

La validación de estas hipótesis la trabajamos desde los fundamentos teóricos que abordamos con el enfoque de los institucionalismos histórico y normativo, enfoques que aportaron instrumentos desde los cuales pudimos acceder a la “ruptura reflexiva y analítica” de lo complejo de este tipo de gestiones en el ámbito de lo político, lo que lleva más a la sensación de ineffectividad que de efectividad. Para apoyar esta fundamentación teórica, también recurrimos a revisar la perspectiva de la acción colectiva, como elemento teórico clave que ofrece instrumentos de análisis eficaces. Finalmente, se asumió una perspectiva de buena gobernanza, sostenida sobre la ética pública, desde donde la institucionalidad permita la transformación de la fragmentación social hacia reglas de co-existencia y convivencia. Para esto, catalogamos las creencias como el “elemento bisagra” que nos permitiría plantear nuestra propuesta. Una propuesta donde la ética pública y la reconciliación social se fusionan como bases sobre las cuales es factible gestionar lo público en períodos de pos-acuerdos y pos-conflictos.

La reconciliación social, los procesos conducentes a la paz, la reconstrucción social, después de períodos de conflicto y violencia, no son los diálogos, las negociaciones, las firmas de acuerdos hacia la paz. Las iniciativas gubernamentales deben gestionar las búsquedas para lograr la estabilidad social en materias como seguridad, institucionalidad, problemas sociales, pero no deberían excluir el acercamiento e involucramiento de todos los sectores de la sociedad, sobre todo cuando se trata de hacer frente a la humillación de seres humanos, cuando la dignidad de la persona ha sido pisoteada y se han violado todas las garantías. Otros casos a nivel mundial han dejado lecciones desde donde se debería aprender en esta temática, de manera especial en cómo gestionar lo público después de la violencia:

La indulgencia mostrada hacia los victimarios, el silencio en torno a los crímenes y la falta de empatía con las víctimas tuvieron como consecuencia que la siguiente generación en los años 60 ya no aguantara más. Habían estado siguiendo los procesos judiciales que por fin se venían celebrando desde 1958 contra los responsables del genocidio judío, sobre todo el proceso contra Eichmann en Jerusalén y el gran proceso de Auschwitz en Fráncfort del Meno. Ahora encaraban de forma ofensiva temas relacionados con la culpa y la responsabilidad, temas mayormente esquivados por sus padres. Y desarrollaron un profundo sentimiento de alienación con respecto a los representantes e instituciones de Alemania Occidental, que pretendían atribuir los crímenes del régimen nacionalsocialista

únicamente a un pequeño grupo en torno a Hitler y dar a entender que los ciudadanos de a pie habían sido seducidos (Joachim Gauk, 2013) (Konrad Adenauer Stiftung, 2013).

En este sentido, la presente investigación propone el *modelo ideal* hacia el diseño de una PP de reconciliación basada en la apuesta de las variables del *reconciliation network* para abordar la reconfiguración de lo público en procesos de pos-acuerdos y pos-conflictos. Ante todo, señalamos el eje estructural sobre el cual debería iniciarse el diseño de una política pública. Esto es, nos ubicamos en el paso previo al diseñar que, en otros términos, es lo que los gobiernos deberían realizar cuando se detecta la necesidad social a la que desean dar respuesta con una u otra política. “Es necesario señalar que son los síntomas de un problema social los que habitualmente constituyen el punto de partida de la “toma de conciencia” y del debate sobre la necesidad de una política pública” (Subirats, Knoepfel et al, 2012, p. 36). Pero, se necesita articulación y tener presente todas las alternativas de intervención de lo público, para considerar si es importante abordar la realidad a través de una política pública (PP). No es conveniente sentir que lo público siempre demanda al Estado-ventanilla que responde a todas las “demandas sociales” (Subirats, Knoepfel et al, 2012).

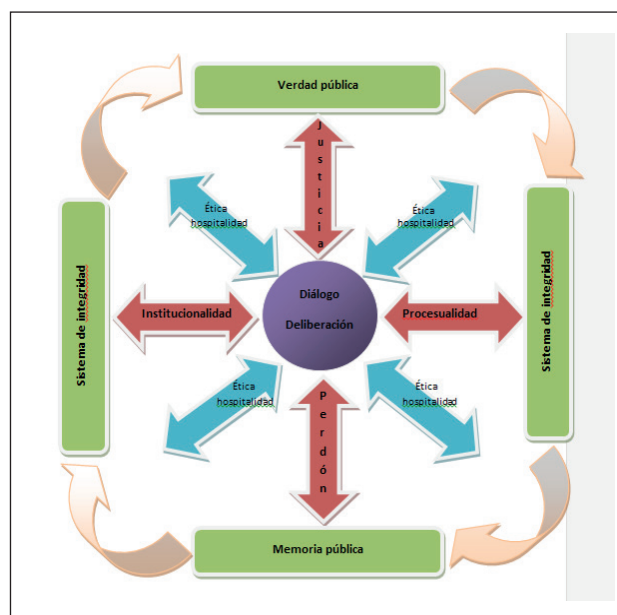
En Colombia, por ejemplo, se cayó en este error de pretender resolver todas las demandas sociales que el proceso de Justicia y Paz abrió desde 2005 al presente. Se habla de “políticas públicas para la reintegración”, “política pública de reparación”, “política pública de restitución de tierras”, entre otros tantos términos. Hay una tendencia generalizada a considerar que aprobar y promulgar una norma, ya es Política Pública (en adelante, PP). Diseñar e implementar un programa social, ya es PP. O, por otro lado, escuchar todas las demandas sociales e intentar dar respuesta, ya implica una PP. En términos generales, este tipo de procesos deberían ser PP, “Inevitablemente debe ser política, no creo que Sudáfrica no haya sido política pública, lo que pasa es que fue a corto plazo; tuvo gran mérito que se hiciera una política pública de transición que con un 60% de resultados fue lograda. La política pública en situaciones de alta conflictividad como en Colombia debe tener la fase de Transición y la fase de Sostenibilidad. Las cosas funcionan solamente cuando las quiere la mayoría, tiene que existir un acuerdo nacional” (Entrevista a Xabier Etxeberria. E5AC, XE. Anexos, tabla 18).

Lo normativo, lo administrativo, lo social y lo institucional confluyen tras un objetivo que se persigue desde la toma de decisión conjunta. Ya no son decisiones *top – down* o *bottom – up* como tradicionalmente se señalaba. Toda la hondura y anchura de la realidad social, en perspectiva de períodos transitorios, demanda más articulación que “decisiones unilineales o direc-

tivas” al estilo gerencial. La confluencia es un elemento clave en este tipo de abordajes y, como algo que no se puede perder de vista, la dinámica transformacional debe estar presente en todo momento. Al trabajar procesos de reconstrucción no se puede pretender mantener un abordaje de los problemas sociales desde una visión lineal, por el contrario, los desniveles se deben anticipar. Por ejemplo, la alternatividad penal es factible en Colombia por la ley 975/2005, aunque el dolor de las víctimas clame una justicia que llegue hasta pagar la pena por la atrocidad cometida. En Sudáfrica, las primeras decisiones de Mandela en materia de reforma Constitucional, la eliminación de la pena de muerte, la configuración de la Comisiones, entre otros puntos, facilitó el camino hacia el encuentro con los otros y el “darse cuenta” de un país que la discriminación no podía seguir permeando la vida en común. Sin embargo, la normatividad internacional coloca a Colombia en el compromiso de respeto y justicia ante los crímenes de lesa humanidad que no pueden dar cabida a amnistías ni indultos. En Sudáfrica, fue la misma presión de un “bloqueo económico” y el interés de otros países por la situación social lo que condujo a De Klerk a tomar medidas desde el ejecutivo para facilitar el acceso al reencuentro.

En este asunto, las normas buscan la conciliación en los intereses del gobierno colombiano, pero los procesos suscitados en las víctimas conllevan también un elemento que no puede ser desconocido en la reconstrucción de esa esfera de lo público. En el país sudafricano, la liberación de los presos políticos, el acuerdo con Mandela y las primeras elecciones en 1994, abrieron las puertas hacia la dinámica de construir Nación. ¿Cómo plantear una PP en estas circunstancias? “La injusticia florece no solo debido a que las normas de la justicia son conculcadas a diario de manera activa por la gente. Los ciudadanos pasivos que dan la espalda a las víctimas reales o potenciales también contribuyen con su propio grano de arena a la montaña total de la iniquidad” (Shklar, 2010, p. 81).

Para acceder a esta propuesta, proponemos el siguiente diagrama a través del cual presentamos el *Reconciliation Network* que debería fundamentar ese *hacia la Política Pública*:

Ilustración 16. Reconciliation Network

Fuente: Elaboración propia

La tarea de mantener la estabilidad, el orden, la seguridad, propias del Estado, no puede desconocer la interrelación dialógica con la sociedad, aún más, cuando se necesita reconfigurar lo público desde la justicia, la reparación, la restitución, con miras a un camino hacia la paz que abra puertas al acceso a la reconciliación social. La diversidad, la complejidad y el dinamismo, señala Kooiman (2004), son variables que permiten gestionar lo público desde la línea fronteriza, pero interrelacionada, entre lo social y lo político. En este orden, los institucionalismos histórico y normativo nos brindaron elementos de análisis que hemos desarrollado a lo largo de la investigación y en los que corroboramos que la categoría “preferencia social”, que asumimos desde Sen, puede ser una herramienta de diseño de ese modelo ideal que permita el uso de “juicios de bienestar social”, en procesos de pos-acuerdos y pos-conflictos.

Esos cambios y esas reformas, que las sociedades gestan en el movimiento dinámico que experimentan, son ejes sobre los cuales la apuesta por la reconstrucción social se debe consolidar en una política pública. Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua y Colombia nos han permitido conocer cómo lo complejo de lo diverso se transforma en instrumentos de gestión, en decisiones individuales o grupales, en iniciativas y en organizaciones o instituciones que permean creencias, intereses y valores. El caso sudafricano reconfiguró una sociedad segregada bajo liderazgos personales identificables que cohesionaron los sueños comunes en la construcción de nación. Eso dinamizó, cambió, la perspectiva desde lo institucional de las reformas y del proceso de reconciliación social. Por el contrario, los casos de El Salvador y Nicaragua transformaron los esquemas autoritarios en procesos de democratización, por iniciativa internacio-

nal, sin cohesiones sociales de fondo, con la consecuente sensación de impunidad y retorno a la violencia en poco tiempo. Que hayan podido ir a las urnas, no implicó una reconfiguración de lo público.

Apostar por lo justo en una dinámica de reconciliación social es colocar el elemento de lo dialógico y deliberativo como elemento nodal del trabajo de gestar lo público. Lo señalamos en varios apartes de esta investigación y lo insistimos al optar por el concepto de PP por el que optamos. Pero, la deliberación a la que se debe aspirar no es un organizar reuniones de todo tipo, donde a la gente se les lance la pregunta de “¿Qué necesitan?” y, menos aún, poner a disposición de la ciudadanía ese “Estado-Ventanilla” que solo escucha, afirma que va a proceder y no cumple lo que promete. “Habermas ve que las condiciones del diálogo deben ser institucionalmente justas (todos deben poder hablar, deben tener la misma información, no debe haber desigualdades), pero es prácticamente imposible. Hay que intentar que el diálogo sea lo más simétrico posible; pero, puede ser simétrico y ser un mal diálogo, pues lo que se intenta no es construir algo común” (Entrevista a Victoria Camps. E5AC, VC. Anexos, tabla 18).

Este elemento de la deliberación se plantea en términos de que “solo a través de las comunicaciones públicas pueden llenarse las instituciones de libertad con la sustancia de una formación racional de la opinión y la voluntad políticas” (Jiménez, 2005; Habermas, 2005). Esto es, la dinámica de lo que implica la común-acción (comunicación) pública es lo que permitirá que la participación sea factible y efectiva y lo diverso sea oportunidad plural, no posibilidad de exacerbar el conflicto. Por ello, recurriendo nuevamente a Habermas, lo dialógico y deliberativo pretende facilitar “el entendimiento entre sujetos que actúan comunicativamente, midiendo por pretensiones de validez que – sobre el trasfondo masivo de un mundo de la vida intersubjetivamente compartido – representan una invitación y desafío a posicionarse con un sí o un no. Están enderezadas a la crítica y mantienen presente la posibilidad de una resolución o desempeño discursivos, a la vez que el riesgo de disenso” (Habermas, 2005, p. 400). Crear mecanismos de gestión de lo público en sociedades que han sido fragmentadas por la violencia, no puede desconocer esta dimensión, pues lo punitivo clama justicia ante el dolor y el sufrimiento de quienes fueron maltratados. Quienes son víctimas, no solo claman por derechos como justicia, verdad y reparación, sino por la reconfiguración de sus sujetos para abrirse nuevamente a lo común. Esto es deliberar.

Igualmente, se deben considerar las dinámicas de interrelación entre los actores y, por ende, entre los recursos y los actores. Señalar el derrotero del acceso del sandinismo a la arena política implicaba un medir el consenso de la población, no solo acordar la conformación del grupo

y lanzarse a elecciones. Crear un programa para los desmovilizados, liderado por la ACR, implicaba el acercamiento a las víctimas y no esperar que las circunstancias colocaran la urgencia de la necesidad. O, en otro sentido, acordar la desmovilización con ofertas de dinero sin un trabajo mancomunado con la sociedad, trajo consigo la dinámica del “parásito” en quienes venían de delinquir, enviarlos a sus casas a que esperaran la pensión mensual y no garantizar un “no volver a las acciones ilegales”. Lanzarse a elecciones y asumir la presidencia la línea de la revolución sandinista iba más allá de acceder al poder y replicar los “vicios” por los que luchaban. La situación socio-económica de los nicaragüenses confronta hasta donde la lucha no puede quedarse en “discursivismo” y la gestión de los períodos de pos-acuerdos y pos-conflicto, implica apuesta real y efectiva por la reestructuración.

Por consiguiente, la *Buena Gobernanza* (BG) es el marco sobre el cual una PP hacia la reconciliación social debe diseñarse. En el año 2005, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que una economía podía prosperar promocionando la BG, es decir, trabajar con los aspectos de imperio de la ley, incremento de la eficiencia y la rendición de cuentas en el sector público y lucha contra la corrupción. Pero no solo estos son los aspectos de la BG, pues en sociedades pos-acuerdos o pos-conflicto, como las hemos trabajado, el imperio de la ley puede ser combinada con la obsesión por lo normativo, aunque lo procedimental tarde o lo impune se haga presente; la eficiencia y la rendición de cuentas en el sector público puede no interesar a las clases populares o a las víctimas, quienes solo piden verdad, reparación y que los victimarios paguen cárcel.

La BG debe ser entendida en las dimensiones sociales de lo político, lo legal y las instituciones administrativas que hacen posible promulgar e implementar políticas que pueden ser entendidas como “bienes públicos” (Rothstein, 2014; Levi-Faur, 2014, p. 143). Pero la perspectiva del concepto de BG no puede delimitar el necesario uso de la reconfiguración de lo público en esta apuesta, centrada en los principios de la ética pública, que sustentan esa BG para la reconciliación social. Es decir, lo que sustenta la BG que demandan estos procesos no es solo la ausencia de corrupción, imperio de la ley, la rendición de cuentas, sino que la categoría de bienestar humano, donde la participación y la deliberación son esenciales en esta dimensión, y la efectividad medida en términos de lo cualitativo en la reconstrucción, no solo en las estadísticas, es lo que garantizará que la dinámica hacia la paz rompa los tradicionales esquemas de cese de hostilidades. La reconciliación social gestada sobre la BG permite sintetizar que no es un momento de la búsqueda de la paz, sino la creación de condiciones que posibilitan la estructuración de contextos que la favorezcan.

Los principios (Creencias) que sustentan la PP en esta materia, objetivados a través de la norma, los comportamientos y las rutinas de los grupos humanos que se implican en la gestión, no son condicionantes que coartan la reconstrucción social, si no que la deben facilitar. La norma como norma no debe ser asumida como absoluto sobre el cual descansa un proceso hacia la reconfiguración de lo común. De esta manera, los valores deberían configurar todo proceso que gestione apuestas en períodos de pos-acuerdos y pos-conflicto, así las conductas de los actores involucrados, directa o indirectamente, podrían ser asumidas y conducidas hacia las respuestas institucionales que la misma sociedad demanda en la reconfiguración de lo común. Esto es, el conjunto de normas y reglamentaciones que las cuatro sociedades traídas a colación se dieron con miras a la salida alternativa al conflicto y la violencia, no deberían limitarse a lo procedimental, sino que deberían configurar rutinas expresadas en creencias y actitudes que favorezcan la convivencia y la coexistencia. No en vano Xabier Etxeberria (2009, 2011)¹⁵⁴ habla de “pedagogía para la paz” o de “virtudes para la paz”, así como otras corrientes investigativas en muchas partes del mundo.

La ética no es una cuestión puramente institucional. Los cambios que se vayan produciendo en la sociedad no es una cuestión sólo institucional, formal, que pueda llevar a cabo el derecho. La ética es una asunto de voluntad de todos, compartida. Una reconciliación sin cambio ético no es posible. En Colombia la ética cívica se ha trabajado mucho. En la época de Antanas Mockus (Pedro Santana). La ciudadanía es algo importante. Colombia ha cultivado mucho este aspecto.

La gente piensa que civismo es no saltar las señales de tránsito, no rayar paredes, etc. Pero, eso es civismo. Pero, eso es un buen ejemplo de que se reduce a normas, entonces si se puede reducir a derechos, pues puede haber una ordenanza municipal. Se intenta que la gente se reprima sin necesidad de la multa. La contradicción de los Estados liberales es que la libertad no produce por sí mismo una sociedad más moral. No queremos renunciar a las libertades, pero cómo hacemos para educar las libertades.

Si la sociedad comparte unos valores, la gente misma sanciona. No se infringen normas porque viene sanción. Yo creo que se puede trasladar este concepto a la reconciliación social (Entrevista a Victoria Camps. E5AC, VC. Anexos, tabla 18).

La ética pública es el insumo por excelencia para este tipo de PP en materia de reconstruir lo fragmentado hasta lo hondo de la configuración social. No solo como un requisito o un supuesto que es obvio, sino como un elemento de cohesión. “Toda política pública supone, siempre e invariablemente, una selección de problemas públicos y una elección entre alternativas de solución más o menos afines, o más o menos contrarias. Y de ahí que ninguna política pueda aspirar

154. Textos pedagógicos como: La educación para la paz vertebrada por las víctimas (2009) y Virtudes para la paz (2011). Publicaciones desde Bakeaz, Bilbao (España).

a la neutralidad ética. Por el contrario: al seleccionar problemas y elegir cauces para la acción pública, toda política es también una afirmación de valores” (Merino, 2008).

Esta investigación considera conveniente resaltar este elemento ético, pues las problemáticas que suscitan la reflexión se han percibido en la manera cómo procedieron las gestiones de los procesos hacia la salida alternativa de conflictos en los cuatro casos: uso del poder político para favorecer intereses privados (Impunidad en El Salvador, manipulación como partido político por parte del sandinismo y la conveniencia de responder a Estados Unidos por parte del gobierno Uribe Vélez en el proceso con los ex AUC); centrarse en un solo punto de la agenda, descuidando el espacio público en su conjunto (cumplimiento de algunas sugerencias de la Comisión de la Verdad en El Salvador, las más convenientes para quienes deseaban dejar pasar la historia sin mayores efectos; inicio del proceso solo pensando en ex paramilitares y víctimas después, en el caso de Colombia); o, el asumir valores que no se corresponden con el éxito de la política pública (por ejemplo, pena alternativa en Colombia, desconociendo a las víctimas). Obviamente, señala Merino (2008), dejar explícito esos principios éticos no garantiza que las falencias desaparecerán, pero sí se puede colocar un precedente y anticipar acciones al respecto. Las claves que ofrece Merino (2008) permiten objetivar esta serie de principios en una PP hacia la reconciliación social asumiendo la propuesta de la ética de la hospitalidad de Innerarity. Señala Merino:

- La primera se refiere al reconocimiento explícito de un espacio público pluralista y poliárquico, en el que se debaten los problemas y las soluciones disponibles conforme a ciertos procedimientos basados en el Estado de derecho.
- El segundo supuesto necesario para nuestros fines, sea el reconocimiento de los márgenes de libertad que tienen las personas que actúan a nombre del Estado para decidir su orientación. Dicho de otro modo, este estudio asume que el sujeto de la ética es el individuo (o los individuos) que toma decisiones y no las políticas públicas que se desprenden de esas decisiones. Pero asume también que esas personas no actúan a título privado, sino que están investidos del poder político legítimo para tomar decisiones que involucran el empleo de recursos públicos.
- El análisis propuesto parte del supuesto de que la ética analítica no se expresa tanto en los códigos morales invocados (de la naturaleza que sean), cuanto en la conducta efectivamente realizada. En este sentido, no discute las razones (o las sinrazones) de una ideología política en particular, de un credo religioso o de un discurso de principios partidarios (Merino, 2008).

Así las cosas, la ética de la hospitalidad ofrece un cambio de perspectiva en la gestión de este tipo de PP. No es ofrecer cosas o esperar algo, es construir mancomunadamente. Esto va desde el cambio del lenguaje que se use hacia los sujetos directamente implicados hasta la

manera como la sociedad acoja a quienes viven procesos de reintegración o de procesamiento del dolor y el sufrimiento. Cuando se gestiona públicamente la vulnerabilidad humana, la delicadeza en la gestión debe ser prioridad, sin pensar que se vaya al extremo de “alcahuetar”. Es reconfigurar el espacio común en debates (diálogo y deliberación), liderados por los gestores de lo público en su perspectiva de responsabilidad constitucional y de deber ético, y la transformación complementaria de lo codificado moralmente no tiene que estar escrito para ser vivido. Ir a las causas estructurales que originaron la exacerbación del conflicto en violencia y buscar impactos constructivos es la tarea ética primordial. Asumir los mínimos de la convivencia y la coexistencia en esa reestructuración es un código que debe ir implícito, sin necesidad que esté escrito o legislado.

Al proponer este *modelo ideal* a través del *Reconciliation Network* no estamos desconociendo que las iniciativas conducentes a las salidas negociadas al conflicto y la violencia desconocen el elemento ético siempre. En los diálogos con los diferentes participantes de los GD, caso Colombia, al preguntárseles por la existencia de valores en el proceso, se notó una percepción desde los ex combatientes en una sola perspectiva: lo que les estaban enseñando y cómo algunos señalaban el crecimiento en el manejo de sus emociones y actitudes más comprensivas. Por el lado de las víctimas, sin embargo, había un desconocimiento total, pues se sentía vulneradas, maltratadas, pisoteadas, etc. Incluso, las fallas del mismo proceso les impedían ver la dimensión ética del ser reconocidas, visibilizadas, o la capacidad de asociarse desde la experiencia común del dolor, etc., que los funcionarios si lo notaban y señalaban. En Sudáfrica, la dimensión del *Nation Building* conllevó la visión del reconocimiento del otro, el poder compartir espacios comunes sin la destrucción y, mucho menos, la segregación. En El Salvador y Nicaragua, las recomendaciones de la Comisión de Verdad (Salvador) y el nuevo espacio político para los sandinistas (Nicaragua), promovían dimensiones de reconocer los daños, crear lo simbólico que rescate el valor de la vida, entre otros aspectos.

Igualmente, se puede avanzar en esta perspectiva ética desde los principios que sustentan una ley como la de Justicia y Paz o de la ley de Promoción de la Unidad Nacional y Reconciliación (Sudáfrica). Es común leer en las leyes los llamados principios, a su vez que se pueden percibir en los documentos una política pública con sentido social, aspectos como “responsabilidad, subsidiariedad, corresponsabilidad, diferenciación, etc.”, pero el asunto es, ¿Se crean las condiciones para que eso sea efectivo?

Apostarle al diseño de una PP de Reconciliación Social con un fuerte componente ético es sentar las bases de una reconstrucción en la que “la sociedad se convierte en una variable

individualmente disponible” (Innerarity, 2008, p. 67), es un construir todo el marco legal, procesual, procedimental e institucional de lo que implica reconfigurar lo que se fragmentó en tanto tiempo de violencia.

Las creencias de los individuos, disponen la efectividad de este tipo de dinámicas más allá del “egoísmo individualista”, donde se pretende sacar el mayor provecho de las oportunidades. En ese sentido, lo institucional debe ser la objetivación de la apuesta. Es como el “elemento bisagra” que permite y facilita la participación, la deliberación, la construcción de consensos – sin negar que el disenso puede permanecer –, la creación de asociaciones ciudadanas que repliquen los modelos de convivencia y coexistencia. En esta creación de posibilidades es donde la verdad se constituye en facilitadora de la reconstrucción, el perdón permea desde lo subjetivo de cada individuo víctima y excombatiente lo objetivo del “re-encuentro social” y la memoria se hace narración para que cada decisión política no olvide que la historia no se puede repetir.

Vale la pena en este punto, debido a la susceptibilidad del sujeto que se maneja cuando están presentes las ofensas y las heridas del ofendido, que consideremos cómo la reintegración comunitaria es un ejemplo claro de la necesidad de plantear la PP en perspectiva de ética de la hospitalidad, sustentada en lo dialógico. La reintegración se asume como proceso vivido por las sociedades en períodos de transición y que contiene estrategias de corto plazo para distanciar a los excombatientes de la vida al margen de la ley y la sociedad ingrese a dinámicas de paz o se finalicen las reformas estructurales a nivel de seguridad o político, señala Caramés (2008). Esto está planteado en forma de programas de apoyo para los excombatientes puedan tener ingresos y evitar que retornen a la agresión como medio de ataque y subsistencia, por lo que está dentro de los marcos de acción del DDR. Pero está comprobado que este tipo de iniciativas deben estar enmarcadas en compromisos de largo plazo, desarrollo y transformación, señaló el informe de la International Peace Academy en su informe del año 2003 y al que hace referencia Caramés (2008). En esta línea, este tipo de programas no pueden quedar desligados de una Política Pública que sostenga el proceso en general.

Aunque existen varias formas de reintegración, esta investigación recurre en estas líneas de consideraciones finales a la llamada reintegración comunitaria, como un ejemplo para corroborar cómo la dinámica de gestión de lo público después de períodos de conflicto y violencia debe estar afincada en una dimensión de PP, más allá de programas sueltos, tal como lo confirmamos a lo largo de la investigación. Este tipo de reintegración es la adecuación de instrumentos y capacidades a las comunidades para apoyar el retorno de los excombatientes a la vida pública, en una procesualidad, parafraseando a Caramés (2008). Podría sintetizarse que es un mecanismo

de unión de esfuerzos para gestar la reconfiguración de lo público en contextos a donde retornan los que afectaron a la población y, desde allí, hacer viable la co-existencia y la convivencia. Por ende, lo dialógico y lo deliberativo son ejes transversales de toda la dinámica, especialmente teniendo en cuenta el desarrollo que se debe construir después de la violencia.

Los otros elementos del *Reconciliation Network* que sostienen esta dinámica dialógica/deliberativa, facilitadora e impulsada de esa ética donde ser huésped o anfitrión, y vivir en el tiempo de las dos maneras, es descubrir la identidad que contiene expectativas, origina obligaciones y responsabilidades, parafrasenado a Innerarity. Lo Institucional, la Justicia, el Perdón y lo Procesual cohesionan la oferta de una PP que rompe los esquemas de acuerdos llenos de concesiones hacia los excombatientes y desconocimientos del sufrimiento del otro.

Lo Institucional se propone desde la creación de redes sociales de grupos humanos en los que lo común teja el sentido social. Es crear esto de ser huéspedes y anfitriones según tiempos y circunstancias, donde lo público prima. Pero, esto debe estar conectado con las instituciones (entendidas como organizaciones) que tienen como ser y misión la configuración de lo público. Desde gobiernos hasta asociaciones de ciudadanos, junto con los grupos humanos que comúnmente funcionan en la esfera común o, inclusive, que se puedan suscitar o motivar, la reconstrucción social tiene un “tejido de hilos” donde las creencias de los individuos confluyan en la lógica de esa búsqueda posible de los tiempos pos-acuerdos y pos-conflicto.

La tradicional institución en este tipo de procesos creada a lo largo y ancho del mundo son las Comisiones de la Verdad. En los casos de Sudáfrica y Centroamérica, fueron un instrumento clave para trabajar ámbitos como la memoria, la verdad y establecer mecanismos de reparación material o simbólica para las víctimas. En Colombia no ha sido posible por la polarización social que ha originado el mismo conflicto, los sectores más radicales hacia la derecha se han opuesto y la justificación más fuerte ha sido que aún hay enfrentamientos y que no se puede garantizar la objetividad de la misma. Lo que sí se ha establecido en Colombia es el Grupo de Memoria Histórica que en las dos estructuras que han existido desde la ley 975/2005 (CNRR y ahora DPS) ha estado presente el tema de recoger la narración de los hechos conflictivos y violentos que se han vivido para fijar ese relato que permitirá mantener vivo lo sucedido, tomar conciencia de hasta dónde se pudo llegar y apoyar las garantías de no repetición. En la nueva estructura del DPS es denominada Comisión de Memoria Histórica) ya han entregado resultados a través de informes respectivos (Banco de la República, 2015).

Estas comunes instituciones en períodos de pos-acuerdos o pos-conflicto han tenido poca independencia política, escasa participación ciudadana (las víctimas se han limitado a narrar

y sentirse escuchadas) y siempre se han quedado en recomendaciones a los gobiernos o a los sectores que se encargan de los períodos de transición. Excepcionalmente, en Sudáfrica se rescató el elemento de estar conformada por representantes de todos los sectores sociales. “En condiciones ideales, los términos de una Comisión se desarrollarían a través de un enfoque consultivo, incluyendo una discusión abierta entre el gobierno, la sociedad civil, los grupos de víctimas y otras personas que pudiesen verse afectadas por el trabajo de la comisión”. Factor clave, señalan investigadores al respecto, es la independencia política y operativa, junto a la financiera y operacional (González & Varney, 2013, pp. 19 – 21).

La creación de un *Ministerio de la Reconciliación o de la paz* (como a bien se vea) es clave y vital para que este tipo de apuestas se sustenten en la efectividad y lo justo. Crear unidades, áreas, programas, organismos, para cada detalle que un proceso de esta naturaleza demanda es desgastante. Aún más, crear estas unidades para un tiempo determinado también es demasiado ambicioso y, peor aún, si no se les deja llegar al tiempo estipulado y un cambio de gobierno o administración ya percibe que debe cambiarse o transformarse. El vicio humano de los individuos de querer pasar a la historia de nuestras instituciones como esos “grandes gestores” que hacen cambios frente a lo que hizo o pensó el antecesor, es un enemigo viral de las apuestas sociales de los países que buscan trabajar esta dimensión.

Este ministerio debe asumir en un “solo techo” todo el trabajo con víctimas, excombatientes, sociedad civil, sector privado, ONG’s, cooperación internacional. La dimensión judicial de estas dinámicas sí debe quedar en manos de la institucionalidad responsable, pero en continua colaboración con el ministerio encargado. Algo parecido a la situación del caso siguiente, pero guardando sus proporciones: Fiscalía se encargaba de lo judicial, mientras que la ACR, CNRR y otros organismos asumían el acompañar y formar. El error lo percibimos en los “celos institucionales” que, en últimas, son asuntos de individuos, pero que nacen también por la desinformación o confusiones al momento de plantear el proceso. Por ejemplo, la Fiscalía organizaba las versiones libres de los postulados con las víctimas, pero el INPEC demoraba o negaba los permisos para que los líderes de las ex AUC asistieran. Por el lado de las víctimas, la entonces Acción Social lideraba procesos de ayuda a sectores populares -obviamente asumió parte del proceso con víctimas-, pero no colaboraba con CNRR. Los últimos perjudicados son los miembros de esa sociedad y, directamente, las víctimas y los ex combatientes. De ahí la expresión, “demasiado lento el proceso”, que en varias expresiones de los GD se encontraron.

La Justicia es declarada como “principio rector” en todos los procesos que se dan y han dado en esta temática. Pero, la alternatividad penal hace que esta dimensión de la justicia cree

condiciones que faciliten los procesos, no pensando tanto en lo punitivo como la justicia ordinaria lo señala, si no en que la reconfiguración de lo público sea lo más beneficioso. Por esto, el marco de la justicia va acompañado de la verdad, la reparación y la garantía de no petición de los hechos. En cada uno de los 4 casos trabajados lo percibimos de una u otra manera. La Justicia Transicional ha sido uno de esos giros que el elemento judicial ha asumido en muchos procesos conducentes a la búsqueda de la paz. Comenzó a configurarse con fuerza y ahínco después del final de los ochenta, debido a las transformaciones mundiales: mirar hacia atrás, buscando enfrentar el pasado lleno de atrocidades, pero con la visión hacia delante (Mani, 2005. En: Minow, Crocker & Mani, 2011, p. 156). Ya se anotó cómo Sudáfrica optó por la justicia restaurativa, dándole un giro al proceso desde la construcción de Nación que, una opción por lo punitivo simplemente hubiera obstaculizado, dio facilidades al proceso, más no simplismos.

Pero no significa que la Justicia Transicional logre subsanar las heridas que quedan de un largo período de conflicto y violencia. Contiene un dilema que, Mani (2005) lo señala como: “cómo atender las reclamaciones legítimas de justicia presentadas por las víctimas y los sobrevivientes de abusos horribles, de tal manera que se consiga el delicado balance entre evitar la vuelta al conflicto o a una crisis, por lado, y por otro consolidar una paz duradera basada en la equidad, el respeto y la inclusión, lo que requiere reformas institucionales y cambios sistemáticos” (Mani, 2005, p. 158). La politización de estos procesos, el circunscribir estas dinámicas a períodos constitucionales de gobierno, es un común denominador que atenta los procesos hacia la paz, pues la procesualidad, el tiempo, la construcción paulatina de programas y proyectos al respecto no es un asunto de querer reconfigurar en 4 u 8 años, lo que se destruyó en más de 60, por ejemplo. Lo que se comprueba es que el retorno a la violencia o la repetición de los hechos se producen, a veces, por las prisas politiqueras o las obsesiones gubernamentales de “firmar acuerdos”, para que se pase a la historia como gestores de algo que debe implicar a la sociedad en general.

No en vano, incluir el debate y la deliberación pública en la perspectiva de la justicia transicional debería ser un modelo ideal, aunque se es consciente de los “celos y temores” que los gobiernos mantienen frente al ceder algo en la dinámica de administración de lo público, en este caso, los procesos judiciales y los puntos pactados en un acuerdo hacia la transición¹⁵⁵.

155. Se debe tener en cuenta que, aunque se estructure un marco dialógico en materia de justicia transicional, los riesgos siempre se harán presentes en este tipo de dinámicas. La ONG *Crisis Group* presentó un informe en el año 2013 sobre la Justicia Transicional en Colombia, vale la pena traer a colación algunas generalidades sobre esos riesgos del mismo modelo de este tipo de justicia en sociedades *pos*. Riesgos para sostener estos procesos nunca estarán ausentes, tal es el caso de pensar que las soluciones acordadas por la partes para ingresar a los procesos por medio de justicia transicional no pueden ser vistas como fáciles, siempre hay complejidad que se debe considerar; igualmente, se deben considerar los actores externos que tienen influencia,

“A lo que se puede aspirar es a que los desacuerdos sobre los fines, las concesiones mutuas y los medios para conseguir esos fines se reduzcan al mínimo posible mediante una deliberación pública y que permita que todos sean escuchados por igual y que fomente acuerdos moralmente aceptables” (Crocker, 2002; Minow, Crocker & Mani, 2011, pp. 132 – 133).

Este elemento de la justicia, en perspectiva transicional, necesitaría acuerdos mínimos en aspectos como: fundamentarse en una evaluación realista de la capacidad administrativa y financiera de los gobiernos y de los grupos humanos implicados; se debe ofrecer seguridad jurídica para los excombatientes, esto es, certeza sobre el futuro para que todos los miembros de los grupos al margen de la ley se sientan convencidos de la dejación de armas y de la reintegración; fundar el proceso en el principio de diferenciación en el proceso con ex AUC y ex guerrilleros y, por ejemplo, con agentes del Estado; y, respetarse las obligaciones internacionales y nacionales de cada país en relación a los Derechos Humanos (derechos de víctimas a la verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición). Lo procesual, el tiempo, y lo procedimental deben cohesionarse en esta dinámicas, para ello es necesaria la creación de contextos institucionales acordes a las circunstancias.

Junto a la justicia, la verdad – la memoria, configuran un “trípode” garante de lo justo y lo efectivo. “La garantía del derecho a la verdad se busca, fundamentalmente, a través de la garantía y el respeto del derecho a la justicia o, en una dirección distinta, se invoca expresamente el derecho a la verdad en aras de garantizar el derecho a la justicia” (Rincón, 2010, p. 53). Justicia – verdad son narración de un tiempo (procesual), pero es narración de hechos que violentaron la vida, fragmentaron lo común y desestabilizaron la coexistencia. De ahí que la memoria, aunque no se catalogue como derecho, si es fundamento del derecho a la verdad y, por ende, a la justicia. Aún más, la memoria pública garantizará la reparación individual y colectiva. El derecho a la verdad es “el derecho a saber lo que ocurrió. Extendiéndolo a sus raíces en la historia, al contexto en el que ocurre y en el que se hace posible” (Rincón, 2010, p. 54). Siguiendo el Conjunto de Principios contra la impunidad, Tatiana Rincón (2010), destaca dos que pueden considerarse en este momento de la investigación: “1) El deber de recordar que incumbe al Estado y que implica, entre otros, un deber de preservar los archivos y otras pruebas relativas a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y

pues “un acuerdo que no cumpla con los estándares internacionales, en particular el de la persecución penal de los máximos responsables de ambas partes por delitos internacionales graves, puede provocar resultados adversos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e incluso conducir a una investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI)” (Crisis Group, 2013, pp. 13–16). A lo anterior se añade el peligro que se puede presentar si un acuerdo de justicia transicional conlleva a debilidades sustanciales en materia de reconfiguración de lo público, pues puede traer problemas políticos (Tal es caso de temas como: tratamiento jurídico, beneficios de reintegración y contribución a las reparaciones).

un deber de garantizar a la sociedad en su conjunto el conocimiento de tales violaciones; y 2) El sentido de las medidas que el Estado está obligado a adoptar para cumplir con esos deberes, que es el de estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, a evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas” (Rincón, 2010 p. 54). Justicia, Verdad y Memoria, ya ofrecen el tiempo y el espacio de la reparación que, en sí, permiten la justificación de la reconstrucción social.

Lo procesual va ligado al tiempo de gestar lo público. Es un tiempo en el que los períodos de nombramiento no condicionan los procesos. El periodo en el cargo no puede condicionar lo temporal de las dinámicas de reconstrucción social. Por ello, la PP de reconciliación social no es una apuesta que depende de partido, tendencia ideológica o período en el cargo, es una labor del conjunto de la sociedad que lanza a los grupos humanos a sentir que la tarea es continua y dinámica. Los casos que se han trabajado intentaron delimitar en el tiempo tareas de las Comisiones o Unidades en el ámbito hacia la paz, pero no se garantiza la reconfiguración completa con solo colocar en la ley un período para una institución. Es decir, la PP debe pasar a ser Política de Estado de largo aliento, más allá de figuras políticas o períodos de gobiernos de partidos políticos.

El perdón lanza la reflexión hacia dinámicas subjetivas o intra-personales, con injerencia en lo interpersonal. El perdón no se decreta. Una ley no puede legislar la actitud y disponibilidad hacia el perdón. Es uno de los ámbitos, por no decir que el más, que crea dificultad en este tipo de apuestas. Pero, no por eso se va a colocar como algo que imposibilita la reconciliación social. Sudáfrica lo trabajó muy bien en perspectiva de lo trascendental. El caso de Colombia permitió corroborar cómo en muchos de los GD, sobre todo de víctimas, la referencia a lo trascendental (Dios, en términos de religiosidad popular), contiene esta variable que no puede ser desconocida y, más bien, podría ser mejor aprovechada. Igualmente, en los casos de El Salvador y Nicaragua, el papel de la Iglesia Católica fue importante y crucial al momento de buscar salidas concretas. Por ser un elemento tan subjetivo, el perdón demanda actitud de acogida, escucha, apoyo (solidaridad, compasión, empatía, entre otros principios) que no niegan el dolor, ni suprimen el sufrimiento y, mucho menos, invitan al olvido. La memoria ayuda a que el perdón posibilite a quien lo necesita, asumirlo como proceso en continuo recordar narrando y narrar recordando para repararse así mismo.

El Perdón en su sentido más denso y propio también es perdón de la víctima al victimario, la víctima puede poner condiciones para ese perdón, porque puede decir que no quiere perdonar y el victimario debería moralmente sentir arrepentimiento, debería estar en disposición de pedir perdón; pero existe una lógica subjetiva que depende de las convicciones, del carácter, de las experiencias etc.,

y de nuevo pueden querer que esto se dé en la privacidad o en lo público para verlo como referencia ejemplarizante, más que política de perdón público deben ser políticas públicas inspiradas en las lógicas del perdón, en el sentido de dar una oportunidad al otro si el otro muestra una cierta disposición (Entrevista a Xabier Etxberria. E5AC, XE. Anexos, tabla 18).

Perdonar no es categoría normativa que se legisla y promulga. Es actitud de disposición interior que permea lo colectivo en la medida en que cada sujeto implicado la vivencia y la oferta. Es algo que podríamos llamar *significación común*, es decir, cuando cada víctima la logra percibir en su vida, con las condiciones sociales y políticas que la favorecen, el otro, los otros, la van compartiendo y se va creando una red de intersubjetividades que no olvida, pero si se abre a la perspectiva del futuro en otra dimensión más de pos-conflicto. Obviamente, no todas las personas las vivirán al mismo ritmo y, mucho menos, de la misma manera, pero que cada individuo que lo logre lo comparta y exprese ya crea una dinámica del perdón que, en últimas, podría configurar el perdón público. Así mismo, los excombatientes tienen una dimensión de perdón que deben trabajar y dejarse acompañar para que su reintegración no sea solo de dineros o programas, sino de reconfiguraciones internas. Por ende, este *modelo ideal* posibilita el pensar el diseño de una reconciliación desde el ámbito de lo cívico, lo público, más no en lo personal (intra-sujetos) que, podrá ser vivido por víctimas, excombatientes y sociedad, siempre y cuando las condiciones cívicas estén acorde al derecho y al deber.

Como se mencionó, la memoria va de la mano de la Justicia, la verdad y, por consiguiente, la garantía de no repetición. Este es otro elemento que no se puede legislar más allá de garantizar el recuento de los hechos y la conservación de todo tipo de archivos o información que pueda permitir el esclarecimiento de hechos, junto al conservar que esa historia no se debe repetir, pero es la misma condición humana la que en el recuento puede configurar un espacio público en el que confluye el pasado, con el dolor/sufrimiento presente, y la mirada de un futuro que quiere recomponer y no repetir. Esperar forma parte de la actitud individual y colectiva de una sociedad en la que solo se aspira a rearmar, desde allí la espera es derecho y deber.

Una cultura ha de vérselas con sus muertos y sus descendientes si no quiere que se le hagan presentes de forma espectral. La detención del presente fijado en sí mismo desencadena el miedo que es propio de toda carencia de memoria y previsión. De este presente desmemoriado se apodera un miedo difuso, pues no recuerda nada similar ni ha previsto cómo afrontar lo imprevisible. El miedo es la sensación habitual de quien no tiene experiencia ni confianza, es decir, pasado y futuro. La concentración en el presente torna amenazante cualquier dimensión que haga valer otros aspectos de la temporalidad humana (Innerarity, 2008, p. 97).

Esta dimensión subjetiva que esta serie de dinámicas conlleva no puede ser desconocida al momento de diseñar e implementar una estrategia de gestión de lo público a través de una PP. No es que la política va a gestionar hasta la dimensión interna de la persona, pero si se deben crear las condiciones de institucionalidad (redes y organizaciones coordinadas y cooperantes; que lo procedimental de la justicia tenga efectos sobre el interés de conocer la verdad por parte de las víctimas; la reparación y la restitución deben contener la virtud del reconocimiento de la dignidad de la persona; y al evitar la politización del proceso se refuerza la confianza en las instituciones).

La reconciliación social no se reglamenta, se crean contextos para acceder paulatinamente a ella. El perdón público no es una ordenanza de ley, es la creación de insumos para que las personas lo vayan apropiando a ritmos propios. La reintegración social no es automática porque lo organiza una norma y se crean organismos que la implementen a través de programas, eso demanda disposición del sujeto que fue combatiente y apertura de los grupos humanos para volver a aceptar y acoger a esas personas. El camino hacia la llamada paz no se logra con acuerdos, amnistías y, mucho menos, con indultos e impunidad, se gesta a través de la gestión de las dinámicas humanas, individuales y grupales, que se necesitan tejer en perspectiva social.

Finalmente, como toda política pública o proceso de gestión de lo público, la integridad debe ser un marco que se configura como deber y como derecho. Como deber, atañe a los principios éticos de lo individual y lo colectivo, marcando la esfera de lo mínimos principios que posibilitan que la convivencia y la coexistencia sean efectivos. Como derecho marca una pauta de la preeminencia de la norma en la constitución de lo común y, por ende, es el soporte para que la individualidad no reafirme la destrucción que la violencia hizo a lo largo del tiempo. Esta propuesta la asumimos desde “la búsqueda de la verdad a través del debate y el discurso” (Villoria, 2012, p. 108). En última, el *network* planteado vuelve a su dinámica: lo dialógico suscita el intercambio con miras a buscar consenso en medio del disenso. La institucionalidad lo gestiona, fundada en principios de justicia, verdad y contexto hacia el perdón, todo dentro de la dinámica del tiempo procesual más allá de períodos preestablecidos. La memoria es un instrumento de fijación en el tiempo que cambia continuamente en perspectiva de reconfigurar lo público, sentando las bases para las garantías de no repetición se hagan efectivas.

La integridad que podría cohesionar esta dinámicas hacia la reconciliación tiene que ver con las actividades cooperativas que son prácticas de convivencia y coexistencia, es decir, la acción colectiva que suscita la PP hacia la reconstrucción y, esa misma práctica, le da sustento al proceso que se gestiona desde la misma PP. Se podría asumir el espíritu y esencia de la propuesta

de la integridad, en perspectiva de crear una dinámica procedimental y práctica de permanente evaluación de los procesos que se suscitan desde una PP, pero de reconstruir lo que brindará la opción de la convivencia y la coexistencia. La opción de Jeremy Pope, se puede asumir desde la perspectiva de OCDE, por cuanto la organización o la red de organizaciones que asuman los procesos en dinámicas de reconciliación social son las que van a objetivar real y efectivamente la integridad del proceso.

La complejidad de contextos pos-acuerdos y pos-conflictivos, demanda un marco de integridad en el que se puedan diseñar, implementar y evaluar instrumentos que creen un contexto de eficacia y eficiencia en procedimientos, mecanismos y creación de programas, proyectos y actos de atención, acompañamiento y asesoría de los distintos grupos humanos involucrados, en gestión de red (no trabajos aislados y, mucho menos, búsqueda de liderazgos individuales u organizacionales). Y, por otro lado, la definición y establecimiento de mecanismos de interrelación con el entorno desde donde surge la necesidad de la PP, pero también el rediseño que se desea hacer de la misma. La construcción de la herramienta queda como tarea del paso siguiente a este ejercicio que se ha hecho, el diseño.

Queda así establecida la urgente necesidad de plantearnos este *modelo ideal* buscando una gestión efectiva y eficaz de los procesos de pos-acuerdos y pos-conflictos, lejos de la tendencia humana a usar partidistamente lo que no debe ser politizado de forma sesgada: la coexistencia y la convivencia. Que lo político nos permee no quiere decir que la politización partidista de la reconfiguración de lo público sea algo normal. Por el contrario, en temas de reconstrucción social, es urgente diseñar una política pública que, en últimas debe convertirse en política de Estado que no solo propende por construir vivienda, ofrecer subsidios, mejorar malla vial, entre tantas necesidades sociales, si no en tocar las honduras estructurales que ofrecen oportunidades para que no se repliquen los actos violentos.

No la conciencia y la obligación moral sino la violencia, el temor y el deseo de seguridad son, pues, a nuestro juicio, la fuente primordial que impulsa a construir y reconstruir sin cesar la convivencia civilizada. Mientras más generalizados estén, tanto menos autoritarios pueden llegar a ser los resultados finales del edificio social. Pero no hay que llamarnos a ilusiones: detrás de todo consenso aparentemente espontáneo subyace siempre la coerción callada ejercida por el miedo al caos y la violencia generalizada, a veces personificados y sublimados por la fuerza de la autoridad legítima (Restrepo, 1995. En Motta (comp.), 1995, p. 104).

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar V., L.F. (2007). La Implementación de las Políticas. México, Porrúa.
- Aranguren, J. L. (1996). Ética y Política. España, Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.
- Arendt, H. (2005). La condición humana. Introducción de Manuel Cruz. España, Barcelona: Paidós (edición original 1958).
- Aristóteles. (2010). Ética a Nicómaco. Introducción, traducción y notas de José Luis Calvo Martínez. España, Madrid: Alianza Editorial.
- Augé, M. (1996). El sentido de los otros. España, Barcelona: Ediciones Paidós.
- Augé, M. (1987). El viajero subterráneo. España, Barcelona: Editorial Gedisa.
- Azpuru, D., Blanco, L., & Córdova, R. et al. (2007). Construyendo la democracia en sociedades posconflicto: Un enfoque comparado entre Guatemala y El Salvador. Guatemala: F&G Editores.
- Barazzutti, L. (1999). Ética Pública y Sociedad Pluralista. Argentina, Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Barnes, C. (ed.). (2004). Haciendo propio el proceso. La participación ciudadana en los procesos de paz. Bizkaia, España, Gernika-Gogoratuz, Documento No. 15.
- Beltrán, E. & Vallespín, F. (2012). Deliberación Pública y Democracias Contemporáneas. España, Madrid: Editorial Síntesis.
- Bennett, J. & M. Kayetisi-blewitt. (1996). “Beyond ‘Working in Conflict’: Understanding Conflict and Building Peace”, *Network Paper* nº 18, Relief and Rehabilitation Network, ODI-Euronaid, Londres.

- Boltanski, L. & Thévenot, L. (2006). *On justification. Economies of Worth*. Princeton, New Jersey, Princeton: University Press.
- Bonchek, M. & Shepsle, K. (2005). *Las fórmulas de la política. Instituciones, racionalidad y comportamiento*. España, Madrid: Taurus.
- Botella, J. & Sanahuja, J. (1998). *Centroamérica después de la crisis*. Barcelona, Institut de Ciencies Politiques i Sociales de la Universitat de Barcelona.
- Bouvier, V. (2009). *Building peace in a time of war*. Washington, D.C. United States Institute of peace press. (Ed.). Colombia.
- Camps, V. (2003). *Virtudes Públicas*. España, Madrid, Espasa Calpe: edición original, 1990.
- Camps, V. (2010). *El Declive de la Ciudadanía*. España, Madrid: PPC editorial.
- Camps, V. (ed.). (2010). *Democracia sin Ciudadanos. La construcción de la ciudadanía en las democracias liberales*. España, Madrid: Editorial Trotta.
- Camps, V. (2011). *El Gobierno de las emociones*. España, Barcelona: Editorial Herder.
- Canales Aliende, J. M., Benito, G., V. & Agulló M. R. (2007). *Documentos Básicos de Ética Pública y Lucha contra la Corrupción*. España, San Vicente (Alicante): Editorial Club Universitario.
- Carames, A. (s.f.). *La reintegración comunitaria*. Agencia Española de Cooperacion Internacional.
- Carlin, J. (2009). *El factor humano*. España, Barcelona: Editorial Seix Barral.
- Ceballos Medina, M. (2009). *Comisiones de la verdad. Guatemala, El Salvador, Sudáfrica. Perspectivas para Colombia*. Medellín: La carreta editores.
- Cerezo Galán, P. (ed.). (2005). *Democracia y virtudes cívicas*. España, Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.
- Colomer, J. M. (1990). *El arte de la manipulación política*. España, Barcelona: Editorial Anagrama.
- Colomer, J. M. (2002). *Political Institutions in Europe* (2nd ed.). London: Routledge.
- Coller, X. (2005). *Estudio de casos*. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas – CIS. Cuadernos Metodológicos. No. 30.

- Conpes. (2008). Política nacional de reintegración social y económica 3554. [PDF]. Recuperado de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3554.pdf>
- Conpes. (2008). Política nacional de reintegración social y económica 3607. [PDF]. Recuperado de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3607.pdf>
- Cortina, A. (1998). Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad. España, Madrid: Editorial Taurus.
- Cortina, A. (2007). Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía en el siglo XXI. Oviedo: Ediciones Nobel.
- Cortina, A. (5ª. Ed.). (2008). Ética Aplicada y Democracia Radical. España, Madrid: Editorial Tecnos.
- Cortina, A. & García-Marzá, D. (2003). Razón Pública y Éticas Aplicadas. Los caminos de la razón práctica en una sociedad pluralista. España, Madrid: Editorial Tecnos.
- Cortina, A. (2010). Justicia Cordial. España, Madrid: Editorial Trotta.
- Chernick, M. W. (Octubre – Diciembre, 1996). Aprender del pasado. Breve historia de los procesos de paz en Colombia (1982 – 1996). Revista Online *Colombia Internacional*, 36. Recuperado de <http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/241/index.php?id=241>
- Daye, R. (2004). Political Forgiveness. Lessons from South Africa. New York: Orbis Books.
- De Currea Lugo, V. (2007). Poder y Guerrillas en América Latina. Una mirada a la historia del guerrillero de a pie. España, Málaga: Sepha Edición.
- De Klerk, E. (2004). La transición negociada de Sudáfrica. Contexto, Análisis y Valoración. En: BARNES, Catherine (ed.). Haciendo propio el proceso. La participación ciudadana en los procesos de paz. Gernika – Bizkaia, Gernika Gogoratuz Centro de Investigación para la paz. Documento de Trabajo No. 15.
- Dörner, D. (2009). La lógica del fracaso. España, Madrid: Editorial Modus Laborandi.
- Doyle, M. & Simbanis, N. (December, 2000). Internatinal Peacebuilding: A Theoretical and Quantitative Analysis. *American Political Science Review*. 4 (94).
- Etchegoyen, A. (1993). Les Temps des Responsables. Francia, Paris: Éditions Julliard.
- Farfán Mendoza, G. (2007). “El nuevo Institucionalismo Histórico y las políticas sociales” en Revista Polis, 3(1), 87-124.

- Ferri Durá, J. (Coord.), Román Marugán, P., Cotarelo, R., Noguera, T. (2006). *Ética Pública y Buen Gobierno*. Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP), Consejería de Presidencia, España, Madrid: Comunidad de Madrid.
- Figueras, A. (2006). *Ubuntu. Sudáfrica. El Triunfo de la Concordia*. España, Barcelona: Plataforma Editorial.
- Fraser, N. (1997). *Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”*. Colombia, Bogotá, D.C.: Siglo del hombre editores.
- Fernández Pasarín, A. M. (2006). “*El neoinstitucionalismo como instrumento de análisis del proceso de integración europea*” en Cuadernos de Trabajo Nº 46, Instituto de Estudios Europeos: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Fuentes, G. (2013). *La creación del sistema nacional integrado de salud en Uruguay (2005 – 2012): impulso reformista con freno desde los puntos y actores de veto*. Madrid: Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset – Universidad Complutense de Madrid. Tesis Doctoral: Doctorado en Gobierno y Administración Pública.
- Fundación Juan March. (2000). *Ética Pública y Estado de Derecho*. Cuaderno del Seminario Público. España, Madrid: Fundación Juan March.
- Galtung, J. (1998). *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*. Gernika, Gernika-Gogoratuz.
- García-Durán, M. (Ed.). (2009). *De la insurgencia a la democracia. Estudio de caso*. Colombia, Bogotá, D.C: Centro de Investigación y Educación Popular – Cinep.
- Granados Rojas, J M. (2008). *La reconciliación en la Carta a los Efesios y en la Carta a los Colosenses*. Italia, Roma: Pontificio Instituto Bíblico.
- González, F., Bolívar, I. & Vásquez, T. (2002). *Violencia Política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*. Colombia, Bogotá, D.C. Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP.
- González González, Fernán (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá, D.C: Odecofi – Cinep – Colciencias.
- Gutiérrez Brito, J. (2008). *Dinámica del grupo de discusión*. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas – CIS. Cuadernos Metodológicos. No. 41.
- Habermas, J. & Rawls, J. (1996). *Debate sobre el liberalismo político*. España, Barcelona: Ediciones Paidós.

- Habermas, J. (2005). *Facticidad & Validez*, España, Madrid: Editorial Trotta.
- Hamber, B. (2009, 2011). *Transformar las sociedades después de la violencia política. Verdad, reconciliación y salud mental*. España, Barcelona: Ediciones Bellaterra.
- Heclo, H. (2010). *Pensar Institucionalmente*. España, Barcelona: Editorial Paidós.
- Hernández Delgado, E. (2012). *Intervenir antes que anochezca. Mediaciones, intervenciones y diplomacias no violentas de base social en el conflicto armado colombiano*. Bucaramanga, Santander, Universidad Autónoma de Bucaramanga.
- Historia General de Centroamérica. (1993). *Sociedad Estatal Quinto Centenario. Tomos I – VI*. España, Madrid.
- Huntington, S. (2005). *El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial*. España, Barcelona: Paidós.
- Innerarity, D. (2009, 2011). *Ética de la hospitalidad*. España, Barcelona: Ediciones Península.
- Innerarity, D. (2002). *La Transformación de la política*. España, Barcelona: Editorial Península.
- Innerarity, D. (2006). *El Nuevo Espacio Público*. España, Madrid: Espasa Calpe.
- Innerarity, D. (2009). *El futuro y sus enemigos*. España, Barcelona: Paidós.
- Izquierdo, A. & Lago, S. (2008). *Ética Pública. Desafíos y propuestas*. España, Barcelona: Ediciones Bellaterra.
- Jarstad, A. K., Sisk & Timothy D. (2008). *From War to Democracy. Dilemmas of peacebuilding*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lafeber, W. (1993). *Inevitable Revolutions: The United States in Central America*. Estados Unidos New York: Norton & Company.
- Lederach, J. P. (1998). *Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas*. España, Bilbao: Gernika Gogoratuz.
- Lederach, J. P. (2008). *La imaginación moral*. Colombia, Bogotá, D.C: Grupo editorial Norma.
- Longo, F. & Ysa, T. (eds.). (2008). *Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI. Escola d'Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya*. España, Barcelona: Ediciones Bellaterra.
- Kinloch, T. F. (2005). *Historia de Nicaragua*. Nicaragua, Managua: IHNCA-UCA.

- Kruijt, D. (2009). *Guerrillas. Guerra y paz en centroamérica*. España, Barcelona: Icaria Editorial.
- Lefranc, S. (2005). *Políticas del Perdón*. Colombia, Bogotá, D.C.: Grupo editorial Norma.
- Linz, J. J. (ed.) (1978). *The breakdown of democratic regimes: Latin America*. London, The Johns Hopkins: University Press,.
- Linz, J. J. (1987). *La quiebra de las democracias*. España, Madrid: Alianza Editorial.
- Linz, J. J. (julio – septiembre de 1990). Transiciones a la democracia. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas – CIS, 51. 7–33.
- López Guzmán, M. D. (2010). *Desafíos del perdón después de Auschwitz. Reflexiones de Jankélévitch desde la Shoa*. España, Madrid: Editorial San Pablo.
- Lopez Pérez, E. (2010). *Excessive Love amidst the Unforgivable. Political Mystics & Mestizo-Forgiveness in Conflict & Peace*. Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Godgeleerdheid. Dissertation for the Degree of Doctor in Theology.
- Macedo, S. (1991). *Liberal Virtues. Citizenship, Virtue, and Community in Liberal Constitutionalism*: Oxford, Clarendon Press.
- Mandela, N. (2010). *El Largo Camino hacia la libertad*. España, Madrid: Ediciones Santillana.
- Mandela, N. (2010). *Conversations with myself*. London: Macmillan Publishers.
- Marías, J. (1993). *La Estructura Social*, España, Madrid: Alianza Editorial.
- Marina, J. A. (2010). *Las culturas fracasadas. El talento y la estupidez de las sociedades*. España, Barcelona: Editorial Anagrama.
- Margalit, A. (2009). *On Compromise and rotten compromises*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Margalit, A. (1997, 2010). *La sociedad decente*. España, Barcelona: Editorial Paidós.
- Martí I Puig, S. (2004). *Tiranías, rebeliones y democracia. Itinerarios políticos comparados en Centroamérica*. España, Barcelona: Ediciones Bellaterra.
- Martí I Puig, S. & Close, D. (eds.). (2009). *Nicaragua y el FSLN (1979 – 2009): ¿Qué queda de la revolución?*. España, Barcelona: Ediciones Bellaterra.

- Martínez Sotomayor, C. (1974). *El nuevo Caribe, la independencia de las colonias Británicas*. Santiago: Editorial Andrés Bello.
- Martiñón Quintero, R. (II semestre, 2007). La incorporación de las ideas al análisis de las políticas públicas en el marco de las coaliciones promotoras. *Revista Gestión y Política Pública*. (XVI), 281–318.
- Merkel, W. & Croissant, A. (2001). La democracia defectuosa como regimen político. Instituciones formales e informales. *MÁIZ SUÁREZ*. Construcción de Europa, democracia y globalización, 1, 119–150.
- Morlino, L. (2009). *Democracias y Democratizaciones*. España, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- Motta, C. (Comp.) (1995). *Ética y Conflicto*. Colombia, Bogotá, D.C: Tercer Mundo Editores.
- Murillo Amaris, E. (2006). *El quehacer teológico en un contexto de conflicto. Del texto de la labilidad humana al pretexto de la reconciliación*. Colombia, Bogotá, D.C. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Teología. Tesina de Máster en Teología.
- Nasi, C. (2007). *Cuando callan los fusiles. Impacto de la paz negociada en Colombia y en Centroamérica*. Colombia, Bogotá, D.C.: Editorial Norma.
- Narváez, L. (2010). *Political Culture of forgiveness and reconciliation*. Colombia, Bogotá, D.C.: Fundación para la reconciliación.
- Noguera, J. A. (ed.). (2010). *Teoría Sociológica Analítica*. España, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- North, Douglass C. (1990). *Institutions, Institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Núñez Ladevéze, L. (Ed.). (1996). *Ética Pública y Moral Social*. España, Madrid: Editorial Noesis.
- Olson, M. (ed. Ori. 1978) (1992). *La Lógica de la Acción Colectiva*. México: Limusa-Noriega.
- Ortega y Gasset, J. (1996). *El Hombre y la Gente*, *Revista de Occidente*, España, Madrid: Alianza Editorial.
- Ortega y Gasset, J. (1985). *El Espectador*, España, Madrid: Biblioteca Nueva.

- Parsons, W. (2007). Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y práctica de políticas públicas. Flacso – México.
- Rangel Suárez, A. et al (2009). Justicia y Paz. ¿Cuál es el precio que debemos pagar? Colombia, Bogotá, D.C.: Intermedio Editores.
- Rawls, J. (2004). Liberalismo Político. New York, Columbia: University Press.
- Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española, 22ª. Edición. Tomos I y II. Madrid.
- Reyes, M. (2008). Justicia desde las víctimas. Terrorismo, memoria, reconciliación. España, Barcelona: Anthropos Editorial.
- Rhodes, r.a.w., Binder, Sarah A. & Rockman, Bert A. (ed.). (2006). The Oxford Handbook of Political Institutions. New York: Oxford University Press.
- Ricoeur, P. (1982). Finitud y Culpabilidad. España, Madrid: Ediciones Taurus.
- Ricoeur P. (1984). Educación y Política. Argentina, Buenos Aires: Editorial Docencia.
- Russell, B. (2002). Sociedad humana: ética y política. España, Madrid: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya).
- Saavedra Echeverry, S. (2013). Análisis comparado de la evolución institucional del servicio civil de carrera en la administración pública nacional – APN – y en la Contraloría General de la República de Colombia – CGR – en el período 1991 – 2010. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED – Madrid (España). Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Doctorado en Ciencias Políticas y de la Administración.
- Saavedra, S. (2013). Análisis comparado de la evolución institucional del servicio civil de carrera en la administración pública nacional – APN – y en la Contraloría General de la República de Colombia – CGR – en el período 1991 – 2010. Tesis Doctoral en Ciencia Política y de la Administración. Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED –.
- Schreiter, R. (1992). Violencia y reconciliación. Maliaño (Cantabria): Editorial Sal Terrae.
- Schreiter, R. (1998). El Ministerio de la Reconciliación. Colombia, Santander: Sal Terrae.
- Sen, A. (2002). Rationality and Freedom. Cambridge: Havard University Press.
- Sen, A. (2009). La idea de la justicia. España, Madrid: Taurus Editores.

- Siurana, J. C. (2009). *La Sociedad Ética. Indicadores para evaluar éticamente una sociedad*. Canoves: Editorial Proteus.
- Sófocles. (1985). *Tragedias Completas*. (Trad. Vara Donado, J.) En Luca de Tena, J.I. (eds. 1. 15), España, Madrid: Lavel, S.
- Subirats, J., Knoepfel, P., Larrue, C. & Varone, F. (2008). *Análisis y gestión de políticas públicas*. España, Barcelona: Editorial Planeta.
- Sun Tzu. (2009). *El Arte de la Guerra*. Ed. de José Ramón Ayllón. España, Madrid: Ediciones Martínez Roca, 18ª.
- Thompson, L. (2001). *A History of South Africa*. New Have (Connecticut): Yale University Press Publications.
- Torres-Rivas, E. (2008). *Centroamérica: entre revoluciones y democracia*. Colombia, Bogotá: Siglo del Hombre editoriales, coedición CLACSO.
- Toynbee, A. (1952). *Guerra y Civilización*. España, Madrid: Alianza Editorial.
- Tugendhat, E. (1992). *Ser, verdad, acción. Ensayos filosóficos*. España, Barcelona: Editorial Gedisa.
- Tugendhat, E. (1993). *Autoconciencia y Autodeterminación*. España, Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- Tugendhat, E. (1998). *Ética y Política*. España, Madrid, Editorial Tecnos.
- Tugendhat, E. (1999). *Diálogo en Leticia*. España, Barcelona, Editorial Gedisa.
- Tugendhat, E. (2001). *Problemas*. España, Barcelona: Editorial Gedisa.
- Tugendhat, E. (2007). *El libro de Manuel y Camila. Diálogos sobre ética*. España, Barcelona: Editorial Gedisa.
- Tutu, D. (1999). *No future without forgiveness*. New York: Doubleday.
- Valles, M. (2009). *Entrevistas Cualitativas*. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas – CIS. Cuadernos Metodológicos. No. 32.
- Vanini, M. (ed.). (1995). *Encuentros con la Historia*. Nicaragua, Managua: Instituto de Historia de Nicaragua.

Villa-Vicencio, C. & Verwoerd, W. (2000). Looking back reaching forward. Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa. Cape Town (South Africa): University of Cape Town Press.

Villoria Medieta, M. (2000). Ética Pública y Corrupción: Curso de ética administrativa. España, Madrid: Editorial Tecnos.

Wilson, R. (2001). The Politics of Truth and Reconciliation in South Africa: Legitimizing the Post-Apartheid state. Cambridge: Cambridge University Press.

Enlaces por Internet

ACNUR. (1983). Declaración de Contadora. [PDF]. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2513>

ACNUR. (1986). Declaración de Esquipulas I. [PDF]. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2529>

ACNUR. (1987). Declaración de Esquipulas II. [PDF]. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/2530>.

ACNUR. (2014). Colombia: rindiendo cuentas frente a la comunidad caqueteña. [online] Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/>

Aipaz. (Abril, 2008). Propuesta de acuerdo base Gobierno Nacional-ELN. Oficina Alto Comisionado para la Paz [en línea]. Recuperado de: http://www.aipazcomun.org/IMG/pdf_PRO-PUESTA_DE_ACUERDO_BASE_Gobierno_Nacional-_ELN_2008.pdf

Agencia Colombiana de Reintegración. (s.f.) Reseña Histórica. [online] Recuperado de <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/resena.aspx>

Assefa, H. (Mayo,1999). The Meaning of Reconciliation. European Centre for Conflict Prevention. European Platform for Conflict Prevention and Transformation. People Building Peace, [Recursos electrónicos]. Recuperado de http://www.gppac.net/documents/pbp_f/part1/1_part1.htm.

Auerbach, Y. (2009). The Reconciliation Pyramid: A narrative-based framework for analyzing identity conflicts. Web Page Publication of International Society of Political Psychology, [Wiley Online Library] Recuperado de <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9221.2008.00692.x/full>.

- Beristáin, C. M. (2004). Reconciliación luego de conflictos violentos: un marco teórico. En: International IDEA publications, [online] Recuperado de <http://www.idea.int/publications/vjr/upload/Reconciliaci%C3%B3n%20luego%20de%20conflictos%20violentos%20-%20un%20marco%20te%C3%B3rico.pdf>
- Bueno Cipagauta, M. A. (Junio 2006). La reconciliación como un proceso socio-político. Aproximaciones teóricas. *Revista Reflexión Política*, 8(15) IEP-UNAB (Colombia). Recuperado de <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11001506>.
- Bunge, M. (2009). Entre razón y fe (Debate entre Habermas – Ratzinger). Biblioteca Escéptica [Online] Recuperado de <https://bibliotecaesceptica.wordpress.com/2009/05/07/entre-razon-y-fe-debate-entre-habermas-ratzinger/>
- Canal Capital Bogota. (Junio, 28 de 2012). En Cómo va la paz, último informe realizado por International Crisis Group sobre las BACRIM [Video]. Recuperado de <http://youtu.be/Ijc-voNuhhco>
- Caracol.com. (2001). En marcha campaña ‘Vive Colombia’ para incentivar turismo. [Online] Recuperado de <http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/en-marcha-campana-vive-colombia-para-incentivar-turismo/20010918/nota/29500.aspx>
- Cedema.org. (1990). Acuerdos de Ginebra. [Online]. Recuperado de <http://www.cedema.org/ver.php?id=2696>
- Chinchón Álvarez, J. (2009) Justicia Transicional: “Memoria histórica” y responsabilidad internacional del Estado. Un análisis general a propósito del cumplimiento de ciertas obligaciones internacionales en juego y después de más de tres décadas del inicio formal de la transición política española. *Revista de Derecho de Extremadura*, 4, 49–74. Recuperado de <http://eprints.ucm.es/9169/>.
- Colombia.com. (2002). Proceso de Paz en Colombia Año 2002. [Online]. Recuperado de http://www.colombia.com/especiales/2002/proceso_paz/creacion.asp
- Corporación Excelencia en la Justicia. (Agosto, 2010). Resultados de la Ley de Justicia y Paz tras sus 5 años de vigencia. [online] recuperado de <http://www.cej.org.co/index.php/todos-justi/2384-resultados-de-la-ley-de-justicia-y-paz-tras-sus-5-anos-de-vigencia>
- Corporación Nuevo Arco Iris. (Abril, 2010). El Declive de la Seguridad Democrática. *Revista Arcanos*. 13 (15). [online] Recuperado de http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/arcanos/revista_ARCANOS_15.pdf.

- DANE. (2005). Insatisfechas -NBI-. [Online] Recuperado de <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi>
- DANE. (s.f.). Pobreza y Desigualdad. [Online]. Recuperado de <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/pobreza>
- DANE. (s.f.). Conceptos Básicos. [Online]. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf
- Díaz Barrado, C. M., Romero Serrano, J. & Morán Blanco, S. (Junio, 2010). Los conflictos armados en Centroamérica. Madrid, Instituto de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” – Escuela de Guerra del Ejército/Ministerio de Defensa de España. Catálogo General de Publicaciones Oficiales. [Online] Recuperado de http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Conflictos_centroamerica.pdf
- DHNET.ORG. (2013). Nunca más el Salvador. [Online] Recuperado de http://www.dhnet.org.br/memoria/comissoes2/el_salvador/nunca_mas_el_salvador_cv_1.pdf
- El colombiano.com. (Abril, 2011). Ratificada condena contra “Juancho Dique” y “Diego Vecino” por masacre de Mampuján. [Online] Recuperado de http://www.elcolombiano.com/por_masacre_de_mampujan_fue_ratificada_condena_contra_juancho_dique_y_diego_vecino-DFEC_131525
- El Herald.com. (Abril, 2011). Confirman condena a ‘Diego Vecino’ y a ‘Juancho Dique’. [Online] Recuperado de <http://www.elheraldo.co/region/confirman-condena-diego-vecino-y-juancho-dique-18996>
- Fisas, V. (2010). Procesos de Paz Comparados. Escola de Cultura de Paz. *Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Quaderns de Construcció de Pau*, 14(16) Recuperado de http://escolapau.uab.es/img/qcp/procesos_paz_comparados.pdf
- Fundación Acción Pro Derechos Humanos. (1993). Informe “de la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en el salvador” (comisión de la verdad para el salvador). [Online]. Recuperado de <http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/informe-de-la-locura-a-la-esperanza.htm>
- García Covarrubías, J. (2005). Las Transiciones a la Democracia en América Latina: ejes fundamentales. Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Publicaciones 1, 1–6 [Online]. Recuperado de <http://iugm.es/publicaciones/estudios/fuerzas-armadas-y-sociedad/>.

- Garreton, M. A. (Marzo – Abril de 1997). Revisando las Transiciones Democráticas en América Latina. *Revista Nueva Sociedad*, 148, 20–29. Recuperado de http://www.nuso.org/upload/articulos/2575_1.pdf.
- Hamber, B. & Gráinne, K. (2004). A working definition of reconciliation. En: Brandon Hamber Web Page, Publications, Conference Papers. Recuperado de http://www.brandonhamber.com/pubs_papers.htm.
- Hammond, C. (2007). La construcción de paz y esperanza en Nicaragua: los procesos de paz y su legado hoy en día. Bennington College University. [Página Web]. Recuperado de <http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1182...isp...>
- Historico.derechosHumanos.org. (s.f.) Observatorio del Programa Presidencial De Derechos Humanos Y DIH. [Online]. Recuperado de http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/magdalename-dio/cap1.htm
- Human Rights Watch. (2010). Herederos de los Paramilitares La Nueva Cara de la Violencia en Colombia. [PDF] Recuperado de <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/colombia0210spwebwcover.pdf>
- Humphreys, M. (Agosto, 2005) Natural Resources, Conflict and Conflict Resolution. *Columbia University, Journal of Conflict Resolution*, 49(4) 508–537. Recuperado de http://www.columbia.edu/~mh2245/papers1/MH8JCR05_paper.pdf.
- Jiménez Villarejo, C. (2009). El valor constitucional Justicia, ¿en crisis? En: VII Congreso de Estudios Vascos, [Página Web] Recuperado de <http://www.eusko-ikaskuntza.org/eu/congresos/xvii/prensa/Videos/#nota4>
- La Fm. (junio, 2010). Primeras condenas contra dos jefes paramilitares en Justicia y Paz. [Online] Recuperado de <http://www.lafm.com.co/noticias/justicia/29-06-10/primeras-condenas-contradosjefesparamilitaresenjusticiaypaz>
- Leal Buitrago, F. (2010). La política de la seguridad democrática. En: razonpublica.com (18 de enero de 2010). Recuperado de <http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/693-la-polca-de-seguridad-democrca.html>.
- Mara la 18. (2010). Documental La vida loca. [Video]. Recuperado de http://www.documaniatv.com/social/la-vida-loca-mara-la-18-video_638a4083f.html

- Notiagen. (Agosto, 2011). Colombia. En marcha la Segunda Caravana Internacional por la Vida y Contra el Despojo en el Sur de Bolívar. [Online]. Recuperado <https://notiagen.wordpress.com/2011/08/06/colombia-en-marcha-la-segunda-caravana-internacional-por-la-vida-y-contra-el-despojo-en-el-sur-de-bolivar/>
- Karns, M. (Agosto 28, 2008) The Roots of UN Post-conflict peacebuilding: a case study of an autonomous agency. Paper at the annual meeting of the APSA 2008 Annual Meeting, Hynes Convention center, Boston, Massachusetts, (Online) Recuperado de http://www.allacademic.com/one/www/research/index.php?click_key=1.
- Kumar, K. (Enero, 1999) Promoting Social Reconciliation in Postconflict Societies. Center for Development Information and Evaluation. U.S. Agency for International Development. [Online] Recuperado de <http://www.oecd.org/dataoecd/51/9/35112635.pdf>.
- Justiciarestaurativa. Com (2013). Editorial. [Online] Recuperado de http://www.justiciarestaurativa.com/Revista_Editorial.htm
- Marxists.org. (1992). Acuerdos de Paz. [Online]. Recuperado de <http://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/archivo/fmln/1992/ene/16/acuerdosdepaz/index.htm>
- Monroy, J. (Junio, 2010). Primeras condenas a ex Auc en Justicia y Paz. El Colombiano.com [Online] Recuperado de http://www.elcolombiano.com/primeras_condenas_a_ex_auc_en_justicia_y_paz-CVEC_95043
- ODECOFI. (Junio, 2014). Video Institucional. [Video]. Recuperado de <http://www.odecofi.org/>
- Online Etymology Dictionary. (s.f.). Reconciliation. Recuperado de <http://www.etymonline.com/index.php?search=reconciliation&searchmode=none>
- Olukotun, D. (2009). The Spirit of The National Peace Accord: The past and future of conflict resolution in South Africa. *African Journal of Conflict Resolution*, 9(1) Recuperado de <http://www.ajol.info/index.php/ajcr/article/viewFile/52167/40793>.
- Opi.org. (s.f.). Mapa Magdalena Medio. [Imagen]. Recuperado de <http://www.opi.org.co/Carografia/18.jpg>
- Osorio, C. (Octubre, 2010). Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo: historia de su cruzada para aprobar la ley de víctimas. La silla vacía [Online] recuperado de <http://lasillavacia.com/historia/19190>

- PeaceMaker. (s.f.). Acuerdo sobre el acompañamiento nacional e Internacional a la mesa de diálogo y negociación. [Online]. Recuperado de http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_020207_Acuerdo%20Sobre%20El%20Acompa%C3%B1amiento%20Nacional%20E%20Internacional.pdf
- Pacheco Ureamuno, G, Acevedo Narea, L. & Galli, G.(eds.). (Noviembre, 2005). Instituto Interamericano de Derechos Humanos – International Institute For Democracy And Electoral Assistance. *Verdad, Justicia y Reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social*. (Online) Recuperado de http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_395509089/IDEA-IIDH.pdf.
- Pacheco Oreamuno, G.& Acevedo Narea, L. (edit.). (2005). Verdad, Justicia y Reparación. Desafíos para Democracia y la Convivencia Social. San José de Costa Rica. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. [Online]. Recuperado de http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_395509089/IDEA-IIDH.pdf
- Pérez de Armiño, C. & Areizaga, M. (s.f.). Reconciliación. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Bilbao, Hegoa, [Online] Recuperado de <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/204>.
- Planeta Paz. (s.f.). Acuerdo de los Pozos. [Online]. Recuperado de <http://paginasyboletines.com/curriculo/planetapaz/documentos/biblioteca/pozos.pdf>
- Planeta Paz. (s.f.). Acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC-EP 2 de Junio de 2001, Acuerdo Humanitario. [Online]. Recuperado de <http://paginasyboletines.com/curriculo/planetapaz/documentos/biblioteca/humanitario.pdf>
- PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (diciembre-enero, 2007). Informe: Hechos del Callejón (edición especial): Del dolor a la verdad y a la reconciliación. Año 2 y 3 [Online] Recuperado de <http://pnud.org.co/hechosdepaz/echos/pdf/21.pdf>
- Presidencia Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas. (2010). Informe anual de gestión alta consejería para la reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas (ACR). [PDF] Recuperado de <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documentos%20Informes%20de%20gestin/Informe%20de%20gesti%C3%B3n%20del%202009-2010.pdf>
- Promotion of national unity and reconciliation act 34 Of 1995. (1995). Regulations under this Act. [Online]. Recuperado de <http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf>

- Ungar, E. (noviembre, 2010). La corrupción en Colombia. *RazonPublica.com* [Online]. Recuperado de <http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/1510-la-corrupcion-en-colombia.html>
- Revista Semana. (Mayo, 28 de 2011). *Un paso histórico*. Sección: Nación. [Online] Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/ley-victimas-paso-historico/157521-3.aspx>.
- Revista Semana. (Junio 10 de 2011). *Presidente Santos sancionó ley de víctimas*. Sección: Nación. [Online] Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/presidente-santos-sanciono-ley-victimas/158208-3.aspx>.
- Richard, Eugenie (2008). Disponible en: Álvaro Uribe: la comunicación por la imagen. Principios de marketing político. Bogotá, D.C. Universidad Externado de Colombia. Revista Ópera, No. 8. pp. 73 – 100. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/675/67500804.pdf>.
- Rodríguez-Arana Muñoz, J. (2004). La Ética en la Administración Pública. Ponencia en la Universidad Autónoma de México, [Online]. Recuperado de <http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1632/27.pdf>.
- Sanchez Russo, D. (Abril, 2011). La Corte Suprema confirmó la condena de ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ .Única sentencia de Justicia y Paz. *El espectador.com* [Online] Recuperado de <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/unica-sentencia-de-justicia-y-paz-articulo-266292>
- Semana.com. (Febrero, 2005). Sí hay guerra, señor presidente. [Online] Recuperado de <http://www.semana.com/portada/articulo/si-guerra-senor-presidente/70763-3>
- Semana.com. (Febrero, 2010). ¿Qué tanto ha funcionado Justicia y Paz? [Online] Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/conflicto-armado/articulo/que-tanto-ha-funcionado-justicia-paz/112945-3>
- Spehan, E. (s.f.). Las Comisiones de Paz en Nicaragua. OEA. 13 P. [Online] Recuperado de <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=361972>.
- Transparency International. (2010). Corruption Perceptions Index 2010. [Online] Recuperado de <http://www.transparency.org/cpi2010/results>
- Verdadabierta.com. (s.f.). Las víctimas de Mampuján apelan la primera sentencia de Justicia y Paz. [Online] Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/la-historia/2530-ipor-que-las-victimas-apelaron-la-primera-sentencia-de-justicia-y-paz>.

Verdadabierta.com. (Diciembre, 2010). La versión de ‘Samario’ sobre la Drummond y los ‘paras’. [Online] Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/jefes-de-la-auc/2918-la-version-de-samario-sobre-la-drummond-y-los-paras>

Vive mi país, Vive Colombia!!!. (Enero, 2008). Vive Colombia, Viaja por Ella. [Video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=grnPzO9_JBs

Vive mi país, Vive Colombia!!!. (Diciembre, 2007). Vive Colombia, Viaja por Ella. [Video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=6C6Op-pgV4Q>

Citas Materiales Legislativos

Decreto 4760 de 2005. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 189-11 de la Carta Política y por la Ley 975 de 2005” El Congreso de la República de Colombia. (2005).

Decretos 2898 de 2006. “Por el cual se modifica el Decreto 2898 de 2006”. Ministerio del Interior y de Justicia. (2006).

Decreto 3391 de 2006. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 189-11 de la Carta Política y por la Ley 975 de 2005, y”. Ministerio del Interior y de Justicia. (2006).

Decreto 3391 de 2006. “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 189-11 de la Carta Política y por la Ley 975 de 2005, y”. Ministerio del Interior y de Justicia. (2006).

Decreto 315 de 2007. “por medio del cual se reglamenta la intervención de las víctimas durante la etapa de investigación en los procesos de Justicia y Paz de acuerdo con lo previsto por la Ley 975 de 2005”. Ministerio del Interior y de Justicia. (2007).

Decreto 1290 de 2008. “Derogado por el art. 297 Decreto Nacional 4800 de 2011. Por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley.” Ministerio del Interior y de Justicia. (2008).

Decreto 176 de 2008. “Derogado por el art. 99, Decreto Nacional 3011 de 2013. Por el cual se reglamentan los artículos 51, numeral 52.7; 52 y 53 de la Ley 975 de 2005”. Ministerio del Interior y de Justicia. (2008).

Decreto 4138 de 2011. “Por el cual se crea la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se establecen sus objetivos y estructura”. Ministerio del Interior y de Justicia. (2011).

Ley 418 de 1997. “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”. El Congreso de la República de Colombia. (1997).

Ley 548 de 1999. “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones”. El Congreso de la República de Colombia. (1999).

Ley 782 de 2002. “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”. El Congreso de la República de Colombia. (2002).

Ley 975 de 2005, Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Fiscalía General de la Nación (2005)

Ley 1408 de 2010. “por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación”. El Congreso de la República de Colombia. (2010).

Ley 1448 de 2011, Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. El Congreso De La República de Colombia (2011).

Ley 1592 de 2012, Por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones”. El Congreso de la República de Colombia, (2012).

ANEXOS

Programa de Doctorado

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tesis Doctoral

HACIA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE RECONCILIACIÓN SOCIAL

Doctorando(a)

EDWIN MURILLO AMARÍS

Director de la Tesis

DR. MANUEL VILLORIA MENDIETA

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

ÍNDICE GENERAL DE ANEXOS

1.	Información Anexos.	388
1.1.	Presentación General	388
1.2.	Preparación del acceso a los Grupos de Discusión en esta investigación	390
1.3.	Modelos de preguntas en los GD.	391
2.	Esquemas de debate en GD.	392
3.	Modelos de Preguntas para entrevistas cualitativas (EC)	393
3.1.	Aspectos generales de las EC.	393
3.1.1.	Lista de funcionarios entrevistados que laboraban a 2010 con la ACR o con la CNRR	
	a. Funcionarios de la CNRR entrevistados	394
	b. Funcionarios de la ACR entrevistados	395
3.1.2.	Funcionarios de algunas entidades públicas que trabajaban en proyectos o programas relacionados con el proceso de paz desde la perspectiva de la ley 975/2005	396
3.1.3.	Integrantes de programas del proceso, como víctimas o desmovilizados, que por motivos de seguridad no aceptaron asistir a los GD o estaban privados de la libertad (en el caso de los desmovilizados) o se encontraban en situación de amenaza	396
3.1.4.	Docentes e investigadores de diversas disciplinas de las ciencias sociales que de una u otra manera han trabajado temáticas relacionadas con la paz, reconciliación social, ética pública, entre otros.	397
3.2.	Modelo de preguntas	398
3.2.1	Preguntas ejes sobre las cuales se motivaron y prepararon las entrevistas	398
3.2.2.	Algunas preguntas que se suscitaron durante las entrevistas de acuerdo a las respuestas que iban ofreciendo los entrevistados	398

4.	Listas de Codificación	400
4.1.	Lista. Codificación grupos de discusión / Víctimas Barrancabermeja (Santander) ...	400
4.2.	Lista. Codificación grupos de discusión / Víctima Granada (Meta)	400
4.3.	Lista. Codificación grupos de discusión / Víctimas Montería (Córdoba)	401
4.4.	Lista. Codificación grupos de discusión / Víctimas Riohacha (Guajira)	401
4.5.	Lista. Codificación grupos de discusión / Víctimas San Pablo (Sur de Bolívar)	402
4.6.	Lista. Codificación grupos de discusión / Víctimas Tierralta (Córdoba)	402
4.7.	Lista. Codificación entrevistas / Víctimas Villavicencio (Meta).....	403
4.8.	Lista. Grupos de Discusión / Víctimas Bucaramanga (Santander)	403
4.9.	Lista. Grupos de Discusión / Víctimas Granada (Meta)	404
4.10.	Lista. Grupos de Discusión / Víctimas Montería (Córdoba).....	404
4.11.	Lista. Codificación Grupos de Discusión / Desmovilizados- Reintegrados Barrancabermeja (Santander).....	405
4.12.	Lista. Codificación Grupos de Discusión / Desmovilizados- Reintegrados Bogotá (Cundinamarca)	405
4.13.	Lista. Codificación Grupos de Discusión / Desmovilizados- Reintegrados Bogotá (Cundinamarca)	406
4.14.	Lista. Codificación Grupos de Discusión / Desmovilizados- Reintegrados Santiago de Cali (Valle del Cauca).....	406
4.15.	Lista. Codificación Grupos de Discusión / Desmovilizados- Reintegrados Montería (Córdoba).....	407
4.16.	Lista. Codificación Grupos de Discusión / Desmovilizados- Reintegrados San Pablo (Bolívar)	408
4.17.	Lista. Codificación Grupos de Discusión / Desmovilizados- Reintegrados Valencia (Córdoba).....	408
4.18.	Lista. Codificación entrevistas / CNRR Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.....	409
4.19.	Lista. Codificación entrevistas / Funcionarios de la ACR (Agencia Colombiana para la Reintegración) encontraban en situación de amenaza.	410

ÍNDICE DE ENTREVISTAS Y GRUPOS DE DISCUSIÓN

Tabla 1. Víctimas Barrancabermeja (Santander)	411
Tabla 2. Víctimas Montería (Córdoba)	432
Tabla 3. Víctimas Riohacha (Córdoba).....	439
Tabla 4. Víctimas San Pablo (Sur de Bolívar)	440
Tabla 5. Víctimas Tierralta (Córdoba)	448
Tabla 6. Víctimas Bucaramanga (Santander).....	454
Tabla 7. Reinsertados Barrancabermeja (Santander)	460
Tabla 8. Reinsertados Bogotá N° 1	465
Tabla 9. Reinsertados Bogotá N° 2	472
Tabla 10. Reinsertados Santiago de Cali (Valle del Cauca)	480
Tabla 11. Reinsertados Montería.....	485
Tabla 12. Reinsertados San Pablo (Bolívar)	490
Tabla 13. Reinsertados Valencia (Córdoba).....	494
Tabla 14. Reinsertados Medellín (Antioquia).....	499
Tabla 15. Entrevista Hufley Quintero	501
Tabla 16. Entrevista José Luis Peralta Pacheco	512
Tabla 17. Entrevista Mujer Líder de Asociación de Adultos Mayores Víctimas del Conflicto CNRR.....	522
Tabla 18. Entrevista Desmovilizados (Postulados) En La Cárcel De Valledupar.....	531
Tabla 19. Víctimas Villavicencio	534
Tabla 20. Entrevista Claudio Epienayú Líder Wayuu (Shiruria)	538
Tabla 21. Entrevista Jorge Vásquez	540
Tabla 22. Entrevista Sandra Milena Sánchez.....	545
Tabla 23. Entrevista Luis Gonzalo Agudelo	549

Tabla 24. Entrevista María Díaz	553
Tabla 25. Entrevista Antonio Calvo	557
Tabla 26. Entrevista Eduardo Pizarro León Gómez.....	560
Tabla 27. Entrevista José Hernández	564
Tabla 28. Entrevista Monseñor Nel Beltrán.....	567
Tabla 29. Entrevista Alejandro Suárez.....	572
Tabla 30. Entrevista Lina Rondón	577
Tabla 31. Entrevista Ana Teresa Bernal	585
Tabla 32. Entrevista Néstor Ruiz	594
Tabla 33. Entrevista Eliana Jiménez	598
Tabla 34. Entrevista José Diomer Correa.....	601
Tabla 35. Entrevista Natalia Salazar	603
Tabla 36. Entrevista Jorge Toloza	606
Tabla 37. Entrevista Gerente ACR Cali.	608
Tabla 38. Entrevista William Meneses (ACR).....	610
Tabla 39. Entrevista Rocío Gutiérrez.....	611
Tabla 40. Entrevista Clara Inés Cortez Mesa.....	614
Tabla 41. Entrevista Dra. Luz Dary Cáceres Fiscalía General de La Nación.....	623
Tabla 42. Entrevista Dr. Luis Isnardo Barrera - Fiscalía General de La Nación	624
Tabla 43. Entrevista a un colombiano que está dentro del proceso de Reintegración Social, a partir de las ofertas que da la ley 975 o la llamada ley de justicia y paz.....	627
Tabla 44. Entrevista Juan Carlos Siurana	632
Tabla 45. Entrevista Xabier Etxeberría	636
Tabla 46. Entrevista Francisco Galán	641
Tabla 47. Entrevista dos agentes de pastoral.....	650
Tabla 48. Entrevistas Padre Javier Giraldo	654
Tabla 49. Entrevistas Victoria Camps	664

1. INFORMACIÓN ANEXOS

1.1. Presentación general

Para ahondar en el caso de Colombia, considerando las posibilidades de acceso al *trabajo de campo* por seguridad personal y condiciones de actitudes de prevención por parte de las personas que participaban en los programas de la ACR y la CNRR al año 2010, junto a la tramitología que se debió cursar ante las entidades gubernamentales respectivas para los permisos respectivos, asumimos los instrumentos metodológicos de los *grupos de discusión* (GD) y *entrevistas cualitativas* (EC) a funcionarios de las organizaciones que lideraban los procesos con víctimas y desmovilizados, pero también con docentes o investigadores en disciplinas de las ciencias sociales que en alguna medida habían estado cerca de trabajos académicos en torno a temáticas de paz, reconciliación social y ética pública.

Teniendo en cuenta que la dinámica de un *grupo de discusión* asume la creación de una situación discursiva grupal para que los participantes se manifiesten y hablen natural y espontáneamente, tal como lo señalamos en la introducción siguiendo a Jesús Gutiérrez (2008), accedimos a grupos conformados por personas que estaban dentro del proceso que se fue estructurando desde el marco de la ley de Justicia y Paz en Colombia. Estos grupos fueron organizados desde las direcciones regionales de la ACR o CNRR, según el organigrama que se pudo hacer con cada una de estas entidades. Cabe rescatar que se accedió a los grupos separadamente, es decir, solo grupos de víctimas o solo grupos de desmovilizados. En ningún momento hubo un grupo donde compartieran personas de los sectores simultáneamente.

La dinámica de los *grupos de discusión* sugiere que “antes de iniciarse el grupo, el moderador cuenta con el perfil de las personas convocadas para la reunión” (Gutiérrez, 2008, p, 121). En este tipo de investigaciones, y por los contextos en los que se presenta, no es fácil tener esta información antes, debido a la situación de “implementación en la marcha” del proceso definido

por la Ley 975/2005, junto a la problemática de seguridad de los participantes y de la protección que ameritan. De ahí que solo se pudo diseñar una sencilla ficha que recogiera los datos básicos de cada uno de los participantes, incluso sin poder conocer sus nombres ni identificación, ni mucho menos su dirección. Esta ficha se les repartía y se les pedía que la llenaran al final de la reunión, buscando que los niveles de confianza suscitados durante el ejercicio brindaran la posibilidad de obtener de las personas la información que allí se les pedía. Esta ficha contenía estos puntos y considerando si estaban dentro del proceso de ACR o de la CNRR:

Fichas de información básica de participantes en GD

FICHA PARTICIPANTES TEMA. ÉTICA PÚBLICA Y RECONCILIACIÓN SOCIAL EN SOCIEDADES CONFLICTIVAS: UNA PERSPECTIVA DESDE COLOMBIA INVESTIGADOR: P. EDWIN MURILLO AMARÍS, S.J.		
Género: F _____	M _____	EDAD: _____
Tiempo de participación en el proceso de reintegración social: _____		
Tiempo de vinculación al Grupo al Margen de la ley: _____		
Grupo al que perteneció: G _____ AUC _____ OTROS: _____		
Grado de escolaridad: _____		

FICHA PARTICIPANTES TEMA. ÉTICA PÚBLICA Y RECONCILIACIÓN SOCIAL EN SOCIEDADES CONFLICTIVAS: UNA PERSPECTIVA DESDE COLOMBIA INVESTIGADOR: P. EDWIN MURILLO AMARÍS, S.J.		
Género: F _____	M _____	EDAD: _____
Tiempo de participación		
en el proceso de reparación y reconciliación: _____		
Se siente víctima de qué actor armado: G _____ AUC _____ ESTADO _____		
OTROS: _____		
Grado de escolaridad: _____		

De acuerdo con los lineamientos que Gutiérrez (2008) da de esta dinámica, la información preliminar acerca de los participantes en los GD facilita aspectos como: 1) conocer composición del grupo y el perfil sociodemográfico de cada participantes; 2) conocer la adecuación de los distintos participantes para la investigación y el grupo diseñado; 3) detectar errores en la captación, y posibles participantes desmarcados o fuera de las cuotas propuestas para dicho grupo; 4) reconocer a los participantes que asisten a la reunión, y su ubicación estratégica en la sala en función de sus perfiles; 5) evaluar y explicar el funcionamiento del grupo y los posibles efectos provocados a lo largo de la sesión, etc. (p. 122).

1.2. Preparación del acceso a los Grupos de Discusión en esta investigación

Por las particularidades descritas en el texto de la investigación, el acceso a los participantes en los diferentes grupos demandó un trabajo de acercamiento previo a las entidades encargadas de los procesos: ACR y CNRR. Cada una de las organizaciones solicitó información sobre el proyecto y citas con coordinadores o líderes en las oficinas nacionales, ubicadas en Bogotá, D.C. Desde allí se comunicaron con las oficinas regionales en:

- Bogotá, D.C. (Oficinas Nacional y Regional Centro),
- Barrancabermeja (Santander). Este punto permitió el acercamiento también a víctimas en San Pablo (Sur de Bolívar), accediendo por el río Magdalena,
- Bucaramanga (Santander).
- Medellín (Antioquia).
- Montería (Córdoba). Este punto nos permitió acceder al municipio de Tierralta (Córdoba) y a un grupo de desmovilizados en el corregimiento de Valencia, perteneciente al municipio de Tierralta.
- Santiago de Cali (Oficina Regional Valle del Cauca).
- Villavicencio (Meta – Sede Regional Llanos Orientales). Desde este punto se pudo acceder a víctimas en el municipio de Granada (Meta).
- Valledupar (Cesar – Oficina Regional). En esta visita se pudo ingresar a la cárcel y se logró realizar un GD con el grupo de siete “postulados” que estaban dentro del proceso de justicia y paz. En Riohacha, Guajira, se logró realizar un GD con un grupo de víctimas y una visita a una comunidad indígena wayúu. La información de estas tres actividades está en anexos escritos, más no en audio, debido en unos casos a la imposibilidad de utilizar grabadora en la cárcel y en otros por razones de seguridad de los entrevistados que temen por sus vidas.

Definidas las citas con los coordinadores o líderes regionales para que convocaran a los participantes, se procedió a los viajes y acceso a los diferentes sitios. Desde las oficinas nacionales se dieron las aprobaciones al trabajo de campo, después de ser presentado y revisado el proyecto. Las condiciones de tiempo y espacio fueron facilitadas por cada oficina regional.

1.3. Modelos de preguntas en los GD

Por la naturaleza de la dinámica de los GD, el moderador (en este caso, investigador en el presente texto) fue presentado ante el grupo por parte de la coordinadora o el líder del programa en el que estaban, en el caso de los desmovilizados, o quien los convocaba desde la CNRR, en el caso de las víctimas. Posteriormente, se hizo la ubicación frente al objeto de investigación y se les agradecía la colaboración. La “situación artificial”, tal como la expresa la dinámica desde Gutiérrez (2008) se iniciaba con preguntas¹⁵⁶ tales como:

- A ustedes como víctimas del conflicto armado, les planteé las siguientes preguntas respecto al proceso que viven, desde su condición de víctimas:
 - ¿Cómo perciben este proceso? ¿Creen en el proceso?
 - ¿Qué luces y sombras, aciertos y desaciertos le encuentran al proceso? También, vamos a mirar si ese proceso tiene valores, tiene aspectos que debemos rescatar.
 - Y por último, tratar de proyectar ¿qué le faltaría al proceso? Y ¿cómo se podría mejorar el proceso?
 - ¿Cómo se sienten con el proceso? ¿Qué está pasando con el proceso?
 - ¿Cómo perciben el proceso? ¿Qué ventajas y desventajas le ven al proceso?
 - ¿Ustedes creen en el proceso?
 - ¿Qué futuro le ven al proceso?
 - ¿Ustedes creen en la reconciliación social?
- Con los grupos de desmovilizados, se plantearon preguntas parecidas a las suscitadas para los grupos de víctimas, guardando las proporciones de cada contexto.
 - ¿Qué percepción tienen frente al programa de reintegración? Ventajas y desventajas.
 - En términos generales, ¿cómo ven el proceso?
 - ¿Han visto valores en el proceso?

156. Es importante aclarar que por la condición de baja escolaridad en la mayoría de los casos de las víctimas, junto a su condición de sencillez a nivel socio-económico, y los temores que llevaban en su interior por la victimización y el “miedo” a que supieran donde estaban, las preguntas se debían ajustar de acuerdo al auditorio que se encontraba al momento de entrar en relación con el respectivo grupo.

- ¿Qué necesita el proceso para mejorar?
- ¿Ustedes creen en el Programa de reintegración?
- ¿Cómo es el trato de la sociedad hacia los reinsertados?

2. Esquema de debate de los GD

El desarrollo de las sesiones de trabajo en cada grupo de discusión siguió las orientaciones de la dinámica metodológica de los GD que Gutiérrez (2008) sugiere. El tema se presentó con la estrategia de presentación directa del tema, centrándose esta parte en un abordaje directo específico de la información que se requería dar a cada grupo. Es decir, al estar el objeto de la investigación identificado y específico, el tema y las preguntas fueron concretos, buscando un desarrollo preciso y puntual (Gutiérrez, 2008, p. 57).

Ante lo anterior, considerando que esta dinámica de los GD es “un dispositivo para la producción de textos que sirven de soporte a discursos y representaciones sociales” (Alonso, 1998, p. 101. En: Gutiérrez, 2008), el esquema de los debates que se llevaron a cabo se fundaron en la orientación del trabajo grupal para “*reflexionar* sobre las prácticas grupales y su inclusión en la realidad social donde intervienen” (Gutiérrez, p. 73). Esto es, con los grupos de víctimas y desmovilizados dentro del proceso suscitado por la ley 975/2005 en Colombia, asumimos el instrumento metodológico de los GD para que las personas involucradas ofrecieran información reflexiva sobre la percepción, prácticas y actitudes en la realidad social en las que intervienen como sujetos del proceso llamado de “Justicia y Paz”.

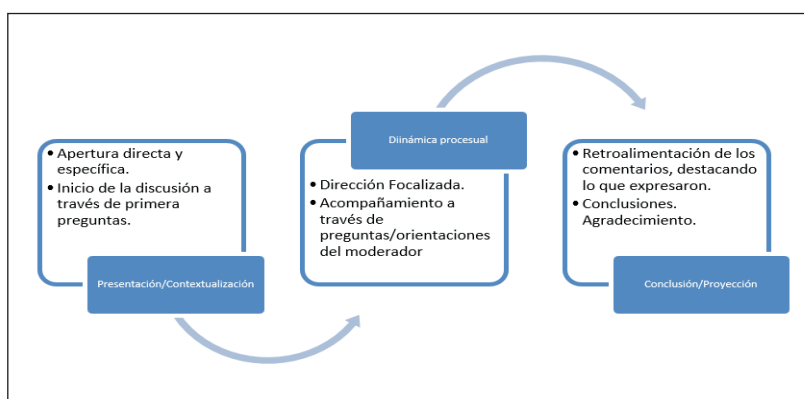
Lo anterior se trabajó a través de técnicas grupales de directividad media y focalización de restricción nivel medio, siguiendo la propuesta de Gutiérrez (2008, p. 74). Es decir, orientando claramente las reflexiones, desde las preguntas planteadas en relación con los objetivos, se fueron orientando las respuestas de los participantes con preguntas aclaratorias en pos del logro de lo propuesto en la investigación, con comentarios-preguntas para que las personas tomaran conciencia de lo que se estaba hablando o devolviéndoles la confirmación a través de expresiones como: “lo que usted quiere decir es (...)”, o, con preguntas que buscaban más información o puntualización de datos. Lo anterior, evitando la libertad de expresión que podría tergiversar la búsqueda de logros de la investigación y la manipulación de la misma información.

A su vez, la focalización (centro de información de acuerdo a los objetivos) también fue dinamizada en un nivel medio, evitando la dispersión de ideas a través de comentarios o la manipulación del momento al estar ante una persona externa a los procedimientos y exigen-

cias del mismo proceso. El hecho de sentir que se podían “desahogar” por las “decepciones o frustraciones” de sus demandas ante el proceso, podía ser un factor que determinara hacia una dispersión el momento del encuentro.

El debate fue desarrollado haciendo la contextualización directa e invitándolos a trabajar la primera pregunta centrada en la percepción que tenían frente al proceso, para buscar que identificaran aciertos y desaciertos en el mismo. De allí se derivaron los primeros comentarios que permitieron ir abriendo el diálogo. En algunos grupos se tuvo que utilizar la estrategia de invitar a hablar o repetir la pregunta con otros elementos sinónimos para que se fueran motivando, especialmente en grupos donde la timidez predominaba¹⁵⁷. Podríamos esquematizar los debates de la siguiente manera:

Ilustración 1. Debates



Fuente: Elaboración propia

Es importante tener en cuenta que el cierre se consideró un momento importante para retroalimentar lo que ellos expresaron, tratando de mantener los puntos más relevantes desde lo que cada grupo manifestó. Finalmente, Algo que se agradeció y valoró fue que a la conclusión la acompañara un agradecimiento. Con esta construcción de confianza los participantes llenaron la ficha informativa y expresaron también un agradecimiento por el ejercicio de “dejarlos expresar, conversar con ellos y escucharlos”.

3. Modelos de preguntas para entrevistas cualitativas (EC)

3.1. Aspectos generales de las EC

El instrumento que permitió el acceso a algunos funcionarios de las entidades líderes del proceso es el de las EC semiestructuradas, tal como lo señalamos desde la introducción de

¹⁵⁷. Este fue un factor fácilmente identificable en los grupos con víctimas. Los desmovilizados estuvieron más prestos a hablar, llegando a la queja constante frente al proceso.

este texto, de acuerdo con los lineamientos de Vallés (2009). El formato de entrevistas utilizado contiene preguntas abiertas, concretas y específicas, buscando la complementariedad en la información que recibimos de las fuentes textuales y en los GD. Los actores que permitieron acceder para aplicar este instrumento y facilitaron información fueron:

- a. Funcionarios de la ACR y la CNRR.
- b. Funcionarios de algunas entidades públicas que trabajaban en proyectos o programas relacionados con el proceso de paz desde la perspectiva de la ley 975/2005.
- c. Integrantes de programas del proceso, como víctimas o desmovilizados, que por motivos de seguridad no aceptaron asistir a los GD o estaban privados de la libertad (en el caso de los desmovilizados) o se encontraban en situación de amenaza.
- d. Docentes e investigadores de diversas disciplinas de las ciencias sociales que de una u otra manera han trabajado temáticas relacionadas con la paz, reconciliación social, ética pública, entre otras.

3.1.1. Lista de funcionarios entrevistados que laboraban a 2010 con la ACR o con la CNRR

a. Funcionarios de la CNRR entrevistados

Nombre	Cargo	Ciudad /Departamento
Jorge Vásquez	Coordinador regional, Oficina Regional Valle del Cauca	Santiago de Cali (Valle del Cauca)
Sandra Milena Sánchez	Asesora de atención y reparación a víctimas, Sede Regional Llanos Orientales	Villavicencio (Meta)
Luis Gonzalo Agudelo	Coordinador regional, Oficina de Llanos Orientales	Villavicencio (Meta)
María Díaz	Coordinadora regional, Oficina Centro	Bogotá, D.C. (Cundinamarca)
Antonio Calvo	Coordinador regional, Oficina del Cesar	Valledupar (César)
Eduardo Pizarro León Gómez	Presidente de la CNRR a 2010, Oficina Nacional.	Bogotá, D.C. (Cundinamarca)

Nombre	Cargo	Ciudad /Departamento
José Hernández	Coordinador del área jurídica, Oficina Nacional	Bogotá, D.C. (Cundinamarca)
Monseñor Nel Beltrán	Obispo de la Diócesis. Comisionado de la CNRR	Sincelejo (Sucre)
Alejandro Suárez	Funcionario del Consejo de la CNRR, Sede Nacional	Bogotá, D.C. (Cundinamarca)
Lina Rondón	Funcionaria del área de reparación y atención a víctimas, Oficina Nacional	Bogotá, D.C. (Cundinamarca)
Ana Teresa Bernal	Funcionaria Comisionada de la CNRR, Oficina Central	Bogotá, D.C. (Cundinamarca)

b. Funcionarios de la ACR entrevistados

Nombre	Cargo	Ciudad /Departamento
Néstor Ruiz	Funcionario del Consejo de la ACR, Oficina Nacional	Bogotá, D.C. (Cundinamarca)
Eliana Jiménez	Enlace ACR, oficina ACR Barrancabermeja	Barrancabermeja (Santander)
José Diomer Correa	Profesional de Formación, ACR	Medellín (Antioquia).
Natalia Salazar	Asesora del Alto Consejero para la Reintegración, Oficina Central	Bogotá, D.C. (Cundinamarca)
Jorge Toloza	Asesor de la Unidad de Reintegración Económica, ACR	Santiago de Cali (Valle del Cauca)
Anónimo	Gerente de la oficina de la ACR en Santiago de Cali	Santiago de Cali (Valle del Cauca)
Rocío Gutiérrez	Enlace de la Unidad de Reintegración Social del Suroccidente	Santiago de Cali (Valle del Cauca)

Nombre	Cargo	Ciudad /Departamento
William Meneses	Área de reintegración económica – ACR	Bogotá (Cundinamarca)

3.1.2. Funcionarios de algunas entidades públicas que trabajaban en proyectos o programas relacionados con el proceso de paz desde la perspectiva de la ley 975/2005

Nombre	Cargo	Ciudad /Departamento
Clara Inés Cortés Meza	Alcaldía de Medellín para el Programa de Paz y Reconcilia- ción	Medellín (Antioquia)
Luz Dary Cáceres	Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz – Exhumaciones	Bogotá, D.C. (Cundinamarca)
Luis Isnardo Barrera	Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz. Fiscal 29 (Guerrilla. Grupo 5)	Bogotá, D.C. (Cundinamarca)

3.1.3. Integrantes de programas del proceso, como víctimas o desmovilizados, que por motivos de seguridad no aceptaron asistir a los GD o estaban privados de la libertad (en el caso de los desmovilizados) o se encontraban en situación de amenaza

Nombre	Cargo	Ciudad /Departamento
Hufley Quintero	Líder de la Organización del proceso de paz en Colombia (Colaborador de la CNRR)	Valledupar (Cesar)
José Luis Peralta Pacheco	Miembro de la asociación de víctimas “Alianza por la vida”. (Entrevistado en la oficina regional del Cesar).	Valledupar (Cesar)
Anónimo	Mujer líder de la Asociación de adultos mayores víctimas del conflicto. Por amenazas no se identificó. (Entrevistada en la Oficina Regional del Cesar).	Valledupar (Cesar)

Nombre	Cargo	Ciudad /Departamento
Postulados ante Justicia y Paz	Grupo de seis postulados que se encontraban privados de la libertad.	Cárcel de Valledupar (Cesar)
Anónimos	Cuatro víctimas que estaban en el proceso de Justicia y Paz.	Villavicencio (Meta)
Anónimo	Participante del proceso ACR. No permitió ser identificado.	Villavicencio (Meta)
Anónimo	Participante del proceso de la ACR. No permitió ser identificado.	Granada (Meta)
Anónimos	Tres víctimas que estaban en el proceso de Justicia y Paz.	Granada (Meta)
Indígena Claudio Epienayú	Ranchería Wayuu Shiruria	Manaure (Guajira)

3.1.4. Docentes e investigadores de diversas disciplinas de las ciencias sociales que de una u otra manera han trabajado temáticas relacionadas con la paz, reconciliación social, ética pública, entre otros

Nombre	Cargo	Ciudad /Departamento
Hufley Quintero	Líder de la Organización del proceso de paz en Colombia (Colaborador de la CNRR)	Valledupar (Cesar)
José Luis Peralta Pacheco	Miembro de la asociación de víctimas “Alianza por la vida”. (Entrevistado en la oficina regional del Cesar).	Valledupar (Cesar)
Anónimo	Mujer líder de la Asociación de adultos mayores víctimas del conflicto. Por amenazas no se identificó. (Entrevistada en la Oficina Regional del Cesar).	Valledupar (Cesar)
Postulados ante Justicia y Paz	Grupo de seis postulados que se encontraban privados de la libertad.	Cárcel de Valledupar (Cesar)

Nombre	Cargo	Ciudad /Departamento
Anónimos	Cuatro víctimas que estaban en el proceso de Justicia y Paz.	Villavicencio (Meta)
Victoria Camps	Docente e investigadora en temas de ética.	Barcelona (España)

3.2. Modelo de preguntas

Por las circunstancias contextuales y los diferentes medios de acceso a las personas escogidas para ser entrevistadas, las preguntas fundamentales se mantuvieron constantes en todas las entrevistas, con algunas variaciones. Sin embargo, también se fueron suscitando otro tipo de preguntas según las situaciones que se iban planteando en cada entrevista.

3.2.1 Preguntas ejes sobre las cuales se motivaron y prepararon las entrevistas

- ¿Qué percepción tiene sobre el proceso? Aciertos y desaciertos.
- ¿Qué le hace falta al proceso para ser más efectivo?
- ¿Usted cree en el proceso?
- ¿Cómo percibe la voluntad política hacia el proceso?
- ¿Cómo percibe el compromiso del sector privado en el proceso?
- ¿Qué le falta al proceso?
- ¿El proceso incentiva valores?
- ¿Hacia dónde va el proceso?
- ¿Este proceso debe constituir política pública?

3.2.2. Algunas preguntas que se suscitaron durante las entrevistas de acuerdo a las respuestas que iban ofreciendo los entrevistados

- ¿Usted cree que las víctimas perciben a la CNRR como un acompañamiento o como un apoyo fuerte en el proceso?
- Ustedes solamente asesoran a las víctimas. ¿Las víctimas saben que existen instituciones donde reivindicar sus derechos?
- ¿Usted cree que las víctimas reclaman una reparación material o psicosocial?

- d. ¿Qué relación interinstitucional hay entre la ACR y la Unidad en la que usted se desempeña frente a la atención a las víctimas?
- e. ¿Usted cree que se pueden vislumbrar cambios en los participantes en el programa de reinserción?
- f. ¿Han considerado acercamientos entre víctimas y desmovilizados en algún momento del proceso?
- g. El Alto Consejero ha hecho referencia a la ética cívica, ¿usted cómo percibe esta temática en este tipo de procesos y cómo lo asume?
- h. La cultura del “dinero fácil”, ¿cree usted que afecta la actitud de los participantes en el proceso?

4. LISTAS DE CODIFICACIÓN

4.1. Lista No. 1 de codificación. Grupos de Discusión / Víctimas Barrancabermeja (Santander) (Ver Anexos, tabla No. 1)

Instrumento	Código del Instrumento	Grupos de Discusión / víctimas	Código del Entrevistado
Grupos de Discusión	G1V	Víctima 1	VB1
	G1V	Víctima 2	VB2
	G1V	Víctima 3	VB3
	G1V	Víctima 4	VB4
	G1V	Víctima 5	VB5
	G1V	Víctima 6	VB6
	G1V	Víctima 7	VB7
	G1V	Víctima 8	VB8
	G1V	Víctima 9	VB9

4.2. Lista No. 2 de codificación Grupos de Discusión / Víctimas Montería (Córdoba) (Ver Anexos tabla No. 2)

Instrumento	Código del Instrumento	Grupos de Discusión / víctimas	Código del Entrevistado
Grupos de Discusión	G2V	Víctima 1	VM1
	G2V	Víctima 2	VM2
	G2V	Víctima 3	VM3
	G2V	Víctima 4	VM4
	G2V	Víctima 5	VM5
	G2V	Víctima 6	VM6
	G2V	Víctima 7	VM7
	G2V	Víctima 8	VM8
	G2V	Víctima 9	VM9

4.3. Lista No 3 de codificación. Grupos de Discusión / Víctimas Riohacha (Guajira)
(Ver Anexos, tabla No. 3)

Instrumento	Código del Instrumento	Grupos de Discusión / víctimas	Código del Entrevistado
Grupos de Discusión	G3V	Victimas 1	VR1
	G3V	Victimas 2	VR2
	G3V	Victimas 3	VR3
	G3V	Victimas 4	VR4
	G3V	Victimas 5	VR5
	G3V	Victimas 6	VR6
	G3V	Victimas 7	VR7
	G3V	Victimas 8	VR8
	G3V	Victimas 9	VR9
	G3V	Victimas 10	VR10
	G3V	Victimas 11	VR11

4.4. Lista No. 4 de codificación. Grupos de Discusión / Víctimas San Pablo
(Sur de Bolívar) (Ver Anexos, tabla No.4)

Instrumento	Código del Instrumento	Grupos de Discusión / víctimas	Código del Entrevistado
Grupos de Discusión	G4V	Víctima 1	VSP1
	G4V	Víctima 2	VSP2
	G4V	Víctima 3	VSP3
	G4V	Víctima 4	VSP4
	G4V	Víctima 5	VSP5
	G4V	Víctima 6	VSP6
	G4V	Víctima 7	VSP7
	G4V	Víctima 8	VSP8

4.5. Lista No. 5 de codificación Grupos de Discusión / Víctimas
Tierralta (Córdoba) (Ver Anexos, tabla No.5)

Instrumento	Código del Instrumento	Grupos de Discusión / víctimas	Código del Entrevistado
Grupos de Discusión	G5V	Víctima 1	VTC1
	G5V	Víctima 2	VTC2
	G5V	Víctima 3	VTC3
	G5V	Víctima 4	VTC4
	G5V	Víctima 5	VTC5
	G5V	Víctima 6	VTC6
	G5V	Víctima 7	VTC7
	G5V	Víctima 8	VTC8
	G5V	Víctima 9	VTC9
	G5V	Víctima 10	VTC10

4.6. Lista No. 6 de codificación Grupos de Discusión / Víctimas
Bucaramanga (Santander) (Ver Anexos, tabla No.6)

Instrumento	Código del Instrumento	Grupos de Discusión / víctimas	Código del Entrevistado
Grupos de Discusión	G6V	Víctima 1	VB1
	G6V	Víctima 2	VB2
	G6V	Víctima 3	VB3
	G6V	Víctima 4	VB4
	G6V	Víctima 5	VB5
	G6V	Víctima 6	VB6
	G6V	Víctima 7	VB7
	G8V	Víctima 8	VB8

**4.7. Lista No. 7 de codificación Grupos de Discusión Participantes Programa ACR
(Desmovilizados) - Barrancabermeja (Santander) (Ver Anexos, tabla No.7)**

Instrumento	Código del Instrumento	Grupos de Discusión / víctimas	Código del Entrevistado
Grupos de Discusión	G1R	Participantes 1	RBA1
	G1R	Participantes 2	RBA2
	G1R	Participantes 3	RBA3
	G1R	Participantes 4	RBA4
	G1R	Participantes 5	RBA5
	G1R	Participantes 6	RBA6

**4.8. Lista No. 8 de codificación Grupos de Discusión Participantes Programa ACR
(Desmovilizados) - Bogotá, D.C. (Cundinamarca) (Ver Anexos, tabla No.8)**

Instrumento	Código del Instrumento	Grupos de Discusión / víctimas	Código del Entrevistado
Grupos de Discusión	G2R	Participantes 1	RB1
	G2R	Participantes 2	RB2
	G2R	Participantes 3	RB3
	G2R	Participantes 4	RB4
	G2R	Participantes 5	RB5
	G2R	Participantes 6	RB6
	G2R	Participantes 7	RB7
	G2R	Participantes 8	RB8
	G2R	Participantes 9	RB9

4.9. Lista No. 9 de codificación Grupos de Discusión Participantes Programa ACR (Desmovilizados) - Bogotá 2 (Cundinamarca) (Ver Anexos, tabla No.9)

Instrumento	Código del Instrumento	Grupos de Discusión / víctimas	Código del Entrevistado
Grupos de Discusión	G3R	Participantes 1	R2B1
	G3R	Participantes 2	R2B2
	G3R	Participantes 3	R2B3
	G3R	Participantes 4	R2B4
	G3R	Participantes 5	R2B5
	G3R	Participantes 6	R2B6
	G3R	Participantes 7	R2B7
	G3R	Participantes 8	R2B8
	G3R	Participantes 9	R2B9

4.10. Lista No. 10 de codificación Grupos de Discusión Participantes Programa ACR (Desmovilizados) - Santiago de Cali (Valle del Cauca) (Ver Anexos, tabla No.10)

Instrumento	Código del Instrumento	Grupos de Discusión / víctimas	Código del Entrevistado
Grupos de Discusión	G4R	Participantes 1	RC1
	G4R	Participantes 2	RC2
	G4R	Participantes 3	RC3
	G4R	Participantes 4	RC4
	G4R	Participantes 5	RC5
	G4R	Participantes 6	RC6
	G4R	Participantes 7	RC7
	G4R	Participantes 8	RC8
	G4R	Participantes 9	RC9

4.11. Lista No. 11 de codificación. Grupos de Discusión Participantes Programa ACR (Desmovilizados) - Montería (Córdoba) (Ver Anexos, tabla No.11)

Instrumento	Código del Instrumento	Grupos de Discusión / víctimas	Código del Entrevistado
Grupos de Discusión	G5R	Participantes 1	RM1
	G5R	Participantes 2	RM2
	G5R	Participantes 3	RM3
	G5R	Participantes 4	RM4
	G5R	Participantes 5	RM5
	G5R	Participantes 6	RM6
	G5R	Participantes 7	RM7
	G5R	Participantes 8	RM8
	G5R	Participantes 9	RM9
	G5R	Participantes 10	RM10

4.12. Lista No. 12 de codificación Grupos de Discusión Participantes Programa ACR (Desmovilizados) - San Pablo (Bolívar) (Ver Anexos, tabla No.12)

Instrumento	Código del Instrumento	Grupos de Discusión / víctimas	Código del Entrevistado
Grupos de Discusión	G6R	Participantes 1	SP1
	G6R	Participantes 2	SP2
	G6R	Participantes 3	SP3
	G6R	Participantes 4	SP4
	G6R	Participantes 5	SP5
	G6R	Participantes 6	SP6
	G6R	Participantes 7	SP7
	G6R	Participantes 8	SP8
	G6R	Participantes 9	SP9
	G6R	Participantes 10	SP10

4.13. Lista No. 13 de codificación. Grupos de Discusión Participantes Programa ACR (Desmovilizados) - Valencia (Córdoba) (Ver Anexos, tabla No.13)

Instrumento	Código del Instrumento	Grupos de Discusión / víctimas	Código del Entrevistado
Grupos de Discusión	G7R	Participantes 1	SP1
	G7R	Participantes 2	SP2
	G7R	Participantes 3	SP3
	G7R	Participantes 4	SP4
	G7R	Participantes 5	SP5
	G7R	Participantes 6	SP6

4.14. Lista No. 14 de codificación grupos de discusión / Participantes programa ACR (Desmovilizados) – Medellín (Antioquia) (Ver Anexos, tabla No.14)

Instrumento	Código del Instrumento	Grupos de Discusión / víctimas	Código del Entrevistado
Grupos de discusión	G8R	Participante	M1

4.15. Lista No. 15 de codificación, Integrantes de programas del proceso, como víctimas o desmovilizados, que por motivos de seguridad no aceptaron asistir a los GD o estaban privados de la libertad (en el caso de los desmovilizados) o se encontraban en situación de amenaza. (Ver Anexos, tablas No. 15-20)

Instrumento	Código del Instrumento	Entrevistados	Código del Entrevistado
Entrevistas	E1CNRR	Hufley Quintero. Líder de la Organización del proceso de paz en Colombia – CNRR. Entrevistado en la oficina regional del Cesar.	HQ
	E1CNRR	José Luis Peralta Pacheco. Miembro de la asociación de víctimas “Alianza por la vida”. Entrevistado en la oficina regional del Cesar.	JP
	E1CNRR	Mujer Líder de Asociación de Adultos Mayores Víctimas del Conflicto CNRR.	ML
	E1CNRR	Grupo de 6 postulados que se encontraban privados de la libertad. Postulados ante Justicia y Paz. Cárcel de Valledupar (Cesar)	6P
	E1CNRR	4 Víctimas que estaban en el proceso de Justicia y Paz. Villavicencio (Meta)	4V
	E1CNRR	Participante proceso de la ACR. No permitió ser identificado. Villavicencio (Meta)	1PVACR
	E1CNRR	Participante del proceso de la ACR. No permitió ser identificado. Granada (Meta)	1PGACR
	E1CNRR	3 Víctimas que estaban en el proceso de Justicia y Paz. Granada (Meta)	3VACR
	E1CNRR	Claudio Epienayú	CE

4.16. Lista No. 16 de codificación entrevistas / CNRR**Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Ver Anexos, tablas No.21-31)**

Instrumento	Código del Instrumento	Entrevistados	Código del Entrevistado
Entrevista	E2CNRR	Jorge Vásquez	JV
	E2CNRR	Sandra Milena Sánchez	SMS
	E2CNRR	Luis Gonzalo Agudelo	LGA
	E2CNRR	María Díaz	MD
	E2CNRR	Antonio Calvo	AC
	E2CNRR	Eduardo Pizarro León Gómez	EP
	E2CNRR	José Hernández	JH
	E2CNRR	Monseñor Nel Beltrán	MNB
	E2CNRR	Alejandro Suárez	AS
	E2CNRR	Lina Rondón	LR
	E2CNRR	Ana Teresa Bernal	ATB

4.17. Lista No. 17 de codificación entrevistas / Funcionarios de la ACR**(Agencia Colombiana para la Reintegración) (Ver Anexos, tablas No.32-39)**

Instrumento	Código del Instrumento	Entrevistados	Código del Entrevistado
Entrevista	E3ACR	Néstor Ruiz	NR
	E3ACR	Eliana Jiménez	EJ
	E3ACR	José Diomer Correa	JDC
	E3ACR	Natalia Salazar	NS
	E3ACR	Jorge Toloza	JT
	E3ACR	Gerente ACR	GACR
	E3ACR	William Meneses	WM
	E3ACR	Rocío Gutiérrez	RG

4.18. Lista No. 18 de codificación funcionarios de algunas entidades públicas que trabajaban en proyectos o programas relacionados con el proceso de paz desde la perspectiva de la ley 975/2005. (Ver Anexos, tablas No.40-42)

Instrumento	Código del Instrumento	Entrevistados	Código del Entrevistado
Entrevista	E4AM	Clara Inés Cortez Mesa, Funcionaria de la Alcaldía de Medellín para el Progra- ma de Paz y Reconciliación.	CCM
	E4FGN	Luz Dary Cáceres. Fiscalía General de la Nación. Unidad de Justicia y Paz – Exhumaciones.	LC
	E4FGN	Luis Isnardo Barrera. Fis- calía General de la Nación. Unidad de Justicia y Paz. Fiscal 29 (Guerrilla. Grupo 5)	LB

4.19. Lista No. 19 de codificación Docentes e investigadores de diversas disciplinas de las ciencias sociales que de una u otra manera han trabajado temáticas relacionadas con la paz, reconciliación social, ética pública, entre otros.
(Ver Anexos, tablas No.44-49)

Instrumento	Código del Instrumento	Entrevistados	Código del Entrevistado
Entrevista	E5AC	Juan Carlos Siurana, Profesor de la Universidad de Valencia (España).	JCS
	E5AC	Francisco Galán. Excombatiente del ELN. Líder de la Fundación “Casa para la Paz”. Promotor de escenarios de paz en Colombia. Entrevistado en Medellín (Colombia).	FG
	E5AC	Dos Agentes de pastoral de la Diócesis de Granada (Meta). Por seguridad no permitieron ser identificados.	APD
	E5AC	Xavier Echeverría, Universidad Deusto (España).	XE
	E5AC	Padre Javier Giraldo, S.J. Investigador y líder de programas y proyectos conducentes a la paz. Investigador del CINEP. Entrevistado en Bogotá, D.C.	JGSJ
	E5AC	Victoria Camps. Barcelona.	VC

